Biblioteca Recorridos 1

Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973)

Francisco Javier Morales Aguilera







Francisco Javier Morales Aguilera es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la violencia política en Chile y el Cono Sur, además de las relaciones entre la península ibérica y este espacio durante la segunda mitad del siglo xx. Sobre dichos temas ha publicado diversos artículos en Chile, España y Argentina. Asimismo, ha presentado los resultados de sus trabajos en numerosos congresos y encuentros académicos de la especialidad. Al momento de publicado este libro ejerce labores como investigador por esta misma institución bajo la modalidad Margarita Salas, donde desarrolla su estancia en el grupo HistAmérica de la Universidad de Santiago de Compostela.


Ministerio de
las Culturas,
las Artes y el
Patrimonio
Gobierno de Chile


BIBLIOTECA
NACIONAL
DE CHILE

Biblioteca Recorridos

Primera edición, FCE Chile, 2023

Morales Aguilera, Francisco Javier
Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973) Vol. 1 / Francisco Javier Morales Aguilera; pról. de Fernando Camacho Padilla. – Santiago de Chile : FCE, Instituto de Historia. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Universidad Católica, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2023
494 p. ; 23 × 17 cm –
ISBN 978-956-289-325-1

1, Chile – Política y gobierno – 1970-1973 2. Violencia política – Chile – 1970-1973 3. Movimientos de protesta – Chile – Historia – Siglo xx I. Camacho Padilla, Fernando, pról.. II. Ser. III. t.

LC F3100 C35 Vol. 1 Dewey 983.064 6 M449h

Av. Paseo Bulnes 152, Santiago, Chile
www.fondodeculturaeconomica.cl

Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
www.fondodeculturaeconomica.com

Edición y diseño: Arturo Molina Burgos
Imagen de cubierta: Brigadistas paramilitares en el centro de Santiago, 1972. Fotografía de Armindo Cardoso. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

Editado en Centro de Investigaciones Diego Barros Arana
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 651
Teléfono: +56229979768
www.centrobarrosarana.cl
Santiago de Chile

ISBN 978-956-289-325-1

Impreso en Chile • *Printed in Chile*

VOLUMEN 1

Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973)

Francisco Javier Morales Aguilera







Este libro se enmarca dentro de la ejecución del proyecto CA4/RSUE/2022-00156 financiado por el Ministerio de Universidades de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Universidad Autónoma de Madrid.

Indice

Siglas y abreviaturas 11
Prólogo 15

Introducción 19
El problema de la violencia política en Chile 24
La violencia en la sociedad civil chilena 31
Fuentes documentales y bibliográficas 39

Contexto y actores en los años sesenta 45

La violencia política en los años de la Unidad Popular 63

Primera etapa: desde la llegada de la Unidad Popular al gobierno a la marcha de las cacerolas vacías, noviembre de 1970 a diciembre de 1971 73
Los inicios del Gobierno de la Unidad Popular, noviembre a diciembre de 1970 77
Balances del triunfo popular, posicionamientos y conflictos, enero a julio de 1971 95
En tránsito hacia un nuevo cuadro social y político, agosto a diciembre de 1971 132

Segunda etapa: desde las elecciones complementarias de O'Higgins y Linares a la revelación del Plan Septiembre, enero a septiembre de 1972 161

Balance de un año y perspectivas de mediano plazo, enero a abril de 1972 164
Dinámicas y conflictos, mayo a julio de 1972 184
Discusiones internas en transición a un conflicto mayor, agosto a septiembre de 1972 202

Tercera etapa: desde el paro de octubre a la antesala del golpe de Estado, octubre de 1972 a septiembre de 1973 243
El paro de octubre y sus consecuencias, octubre a diciembre de 1972 249
La batalla electoral, enero a febrero de 1973 287
Resolución del conflicto en punto muerto y surgimiento de nuevos problemas, marzo a mayo de 1973 308
De una sublevación a otra: tanquetazo y golpe, junio a septiembre de 1973 354
El tanquetazo y sus consecuencias 371
Líneas de tensión y conflicto en el mes de julio 396
En tránsito hacia agosto. El proyecto socialista está derrotado 416
Fiesta y drama en septiembre 456

Conclusiones 471
Referencias bibliográficas 481

Siglas y abreviaturas

AGA	Archivo General de la Administración
API	Acción Popular Independiente
APS	Área de Propiedad Social
ARNAD	Archivo Nacional de la Administración
BRP	Brigada Ramona Parra
CIA	Central de Inteligencia Americana
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CODE	Confederación Democrática
Codelco	Corporación del Cobre
comps.	compiladores o compiladoras
CORA	Corporación de Reforma Agraria
CORFO	Corporación de Fomento
CORMU	Corporación de Mejoramiento Urbano
CUT	Central Única de Trabajadores
DINA	Dirección de Inteligencia Nacional
DINAC	Distribuidora Nacional de Comercio
dir. gral.	dirección, director o directora general
dirs.	directores
DIRINCO	Dirección Nacional de Industria y Comercio
ed.	editor o editora
eds.	editores o editoras
ENAP	Empresa Nacional del Petróleo
et al.	*et alii*, *et aliae* o *et alia* (y otros, y otras)
FACh	Fuerza Aérea de Chile
FF.AA.	Fuerzas Armadas
FESES	Federación de Estudiantes Secundarios
FER	Frente de Estudiantes Revolucionarios
FNPL	Frente Nacionalista Patria y Libertad

FRENDUC	Frente Nacional de Dueñas de Casa
FTR	Frente de Trabajadores Revolucionarios
FUEP	Federación Única de Estudiantes Particulares
ibid.	*ibidem* (allí mismo, en el mismo lugar)
IC	Izquierda Cristiana
ICA	Ingenieros Consultores Asociados
ICIRA	Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
JAP	Juntas de Abastecimiento y Precios
JDC	Juventud Demócrata Cristiana
JN	Juventud Nacional
JS	Juventud Socialista
MAPU	Movimiento de Acción Popular Unitaria
MCR	Movimiento Campesino Revolucionario
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MOPARE	Movimiento Patriótico de Regeneración Gremial
MPR	Movimiento de Pobladores Revolucionarios
op. cit.	*opus citatum*, *opere citato* (la obra citada, en la obra citada)
PADENA	Partido Democrático Nacional
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PC	Partido Comunista
PIR	Partido de Izquierda Radical
PN	Partido Nacional
PR	Partido Radical
PROTECO	Protección Comunal
PS	Partido Socialista
PSP	Partido Socialista Popular
s. e.	sin editorial
s. n.	sin número
ss.	subsiguientes
SML	Servicio Médico Legal (Chile)
SOL	Soberanía, Orden, Libertad
SOFOFA	Sociedad de Fomento Fabril
trads.	traductores o traductoras
UC	Universidad Católica

UCV...................... Universidad Católica de Valparaíso
UNCTAD............. United Nations Conference on Trade and Development
UP......................... Unidad Popular
USOPO................ Unión Socialista Popular
VOP..................... Vanguardia Organizada del Pueblo

Prólogo

Con cada aniversario del golpe de Estado surge una nueva oportunidad de profundizar en las razones que llevaron al acontecimiento más traumático de la historia reciente de Chile. Sin embargo, y transcurriendo ya 50 años de ese momento, aún quedan numerosas interrogantes por responder. El (mal) uso político de este pasado ha sido el principal desafío a la hora de entender verdaderamente lo que llevó a Chile a sumergirse en el infierno. No solo se ha producido un combate ideológico para imponer un relato oficial de los hechos, sino que para lograrlo se han negado no pocos episodios históricos, e incluso destruido —o al menos escondido—, una gran cantidad de documentación, especialmente todo lo que tiene relación con violencia y represión. En este sentido, la presente obra de Francisco Javier Morales Aguilera, titulada *Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973)*, supone una importante contribución a la comprensión de la agitación y el enfrentamiento social que desembocó en los trágicos eventos del 11 de septiembre de 1973. Este trabajo es el resultado de una larga y detallada investigación realizada durante varios años tanto en Chile como en España, que forma parte de su tesis doctoral la cual tuve el honor de dirigir entre los años 2017 y 2022 desde el departamento de historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Durante esa etapa, Francisco Javier se integró de pleno en las distintas actividades académicas que se fueron realizando con relación a la historia reciente de América Latina y coordinó, además, los seminarios de investigación del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina (GEISAL). Asimismo, fue parte de varios proyectos de investigación e innovación docente, de los cuales se realizaron diversas jornadas y salieron numerosas publicaciones académicas. Su colaboración fue esencial para el buen desarrollo de

los distintos eventos que fuimos celebrando en esos años. Como no podía ser de otra forma, su tesis doctoral fue puntuada con la máxima calificación que existe en España, CUM LAUDE, por la unanimidad de todos los miembros del tribunal.

Dentro del marco de los debates y actos conmemorativos por los cincuenta años de la llegada de la Unidad Popular al gobierno, este libro constituye un significativo aporte por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que explora y analiza algunas problemáticas que, dada su complejidad, no habían sido abordadas con suficiente dedicación y seriedad por otras investigaciones. Aunque el tema de la violencia política durante este periodo había estado presente en algunos trabajos, por lo general su tratamiento se hacía bajo un criterio extremadamente utilitarista. Así, una de las miradas que predominó dentro de ciertos círculos intelectuales y que en buena medida alimentó parte del relato oficial sobre esos años apuntaba directamente a las responsabilidades de la izquierda chilena por los hechos de violencia y conflictividad vividos en la época de la Unidad Popular, tal como quedó constatado en el discurso que se intentó imponer durante la dictadura militar (1973-1990) e incluso en los primeros años de la democracia a partir del contexto histórico que se incluyó en el *Informe Rettig*. La investigación desarrollada por este libro nos muestra, al contrario del relato anterior, que la violencia constituyó un fenómeno en donde intervinieron diversos factores, por lo que la responsabilidad respecto a su origen y materialización no puede atribuirse a un único actor. De hecho, el autor realiza un interesante esfuerzo de interpretación al proponer la noción de violencia política civil como una clave para leer el conflicto político del periodo. Es decir, lejos de asumir algunas de las premisas habituales con que se indaga en la violencia de aquellos años, se propone un punto de vista que aporta consistentemente al conocimiento de esa etapa. Desde luego, su objeto de estudio no son solo los cuadros militantes, sino un grupo bastante más heterogéneo de actores y, por supuesto, de discursos que recorrieron el espacio público de entonces.

Visto desde un ángulo disciplinar, este libro dialoga muy bien con aquellos textos que han aparecido en los últimos años y que plantean enfoques más sugerentes sobre la experiencia socialista en Chile. Y lo hace sobre todo con aquellos investigadores que, como Danny Monsálvez, Felipe Guerra o José Díaz Nieva, comparten un

renovado interés por indagar en etapas que aún son complejas para la memoria colectiva e individual de este país.

Hay una segunda razón que explica también el aporte y relevancia de este libro que se refiere al esfuerzo por explorar y analizar un número amplio de temas, y no quedarse situado únicamente como un estudio de caso. Aunque la mirada está puesta en el ámbito de la violencia, la investigación reconstruye los lineamientos generales del periodo, sus hitos más relevantes, las discusiones sobre algunas materias y el posicionamiento de diversos actores. En este sentido, el libro se sitúa como una propuesta para entender el tema de la violencia y al mismo tiempo como una historia más general de esos años. Este tipo de enfoques, por cierto, no es algo nuevo dentro del campo historiográfico. El historiador norteamericano Peter Winn, con su historia de los trabajadores textiles de Yarur durante la Unidad Popular, es un claro ejemplo de lo anterior al entrelazar un objeto particular de estudio con un contexto y una historia más amplia. En sus páginas se podía constatar que las vicisitudes de los trabajadores textiles constituían en el fondo la historia de una experiencia social y política de mayor envergadura. Algo similar se puede advertir en el presente trabajo. Aquí encontramos una descripción de casos y situaciones particulares que se conectan a un conflicto de fondo y a unas discusiones que permiten entender un cuadro histórico más general.

La organización cronológica del libro por etapas permite conocer en profundidad y con gran detalle las características de la violencia política desatada en Chile entre los años 1970 y 1973. El contexto político y social que se incluye al inicio del trabajo, fundamentalmente centrado en la agitación social que se produjo por toda América Latina durante la década de los años sesenta —en buena medida por el impacto de la revolución cubana y de otras experiencias que se estaban dando en el planeta en esos años—, es, sin duda, un aporte necesario para comprender el triunfo de la Unidad Popular y las consecuencias que tuvo en el plano social. La extensa bibliografía y fuentes consultadas en distintos archivos respaldan la rigurosidad con la que ha trabajado el autor, demostrando conocer con detalle los fondos en los que se guarda toda la información relacionada con la temática de este estudio. La correcta metodología aplicada en el uso de esta documentación ha permitido a Francisco Javier analizar,

reflexionar y concluir de manera acertada el contexto de la violencia política que tuvo lugar durante la presidencia de Salvador Allende.

En síntesis, este libro es una aportación valiosa para entender el fenómeno de la violencia política en Chile ya que aborda, primero, una etapa que no había sido trabajada consistentemente respecto a este fenómeno y, segundo, porque va uniendo el relato pormenorizado de los hechos a un contexto que envuelve a todos los protagonistas de esta historia. En definitiva, sus páginas permiten, libre de un peso ideológico, comprender las características y consecuencias de esos acontecimientos con sus coordenadas de época más relevantes. Francisco Javier demuestra así que no tiene otro objetivo que contribuir a la comprensión por parte de la sociedad chilena de una etapa traumática de la historia reciente del país.

Mis más sinceras felicitaciones a Francisco Javier por la calidad del trabajo realizado y su aporte a la historiografía chilena, además de colocar a disposición de un público más extenso mediante este libro los frutos de su investigación, que son indispensables para un mejor entendimiento de la convulsión social vivida en Chile durante los años de la Unidad Popular, y de la cual aún hoy se siguen produciendo fuertes discusiones por las divisiones prevalecientes.

FERNANDO CAMACHO PADILLA
Profesor de Historia Contemporánea,
Universidad Autónoma de Madrid.
Lisboa, marzo de 2023.

Introducción

Al finalizar la segunda década del siglo XXI, la memoria histórica de diversos países fue testigo de masivas conmemoraciones que recordaron la irrupción, hace cuarenta o más años, de importantes acontecimientos sociales y políticos. La revolución cubana, por ejemplo, celebró en 2019 su sexagésimo aniversario, reafirmando los principios del socialismo como doctrina que guiaba a la sociedad en su búsqueda de justicia e igualdad. Con menor intensidad y misticismo, y en medio de una profunda fractura social, Nicaragua conmemoraba, también en 2019, los cuarenta años del triunfo de la revolución sandinista de 1979.

Mayor relevancia tuvieron las conmemoraciones de Mayo del 68. El evento, que había marcado a toda una generación por su explosividad y cuestionamiento de las estructuras normativas, concitó la atención de numerosos investigadores e intelectuales que volvieron a revisar la revuelta parisina. Como pocas veces en las últimas décadas, los sesenta y setenta parecían adquirir una notable vigencia en el quehacer académico y noticioso, incentivando la organización de encuentros y conferencias de distinto tipo, además de la edición de numerosos reportajes y dosieres especiales en la prensa escrita. Aunque los hechos que se conmemoraban se habían registrado en espacios nacionales, su impacto a nivel mundial les otorgó indudablemente un carácter global que los conectó con coordenadas y actores transnacionales.

En 2020, Chile conmemoraría su propio «evento global» al cumplirse los cincuenta años de la llegada de la Unidad Popular (UP) al Gobierno en 1970. El contexto era sin duda relevante para que emergiera una memoria colectiva e individual sobre los años de la vía chilena al socialismo. Tras el estallido social de octubre de 2019, Chile parecía reencontrarse con algunas líneas perdidas de su pasado social y político más característico, situación que, de una u otra forma, remitía a ese periodo donde la participación de la ciuda-

danía en un proyecto de transformación estructural fue significativa. Distintas iniciativas dieron forma entonces a numerosos proyectos editoriales y académicos que trajeron al presente los años de la UP, sobre todo en lo que se refería al carácter festivo y emancipador de esa experiencia. De esta manera, lo que se ponía en circulación sobre la esfera pública era un ejercicio de exploración respecto a la vigencia del proyecto popular conducido por Salvador Allende. Es decir, en medio de un contexto donde se abría la posibilidad de hacer modificaciones sustantivas al modelo impuesto en dictadura, los años de la UP asomaban como una experiencia rica en términos de participación para el cambio social.

Como era de esperar, un escenario de estas características no era el espacio más indicado para explorar aquellas zonas grises o complejas del periodo 1970-1973. El tema de la violencia política, por ejemplo, fue dejado de lado por numerosos textos que aparecieron en ese periodo[1], y también por la mayor parte de los encuentros académicos que se organizaron al respecto[2]. El énfasis estuvo puesto, como

[1] El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) publicó dos tomos para conmemorar los 50 años de la UP. El primero de ellos estuvo dedicado a rescatar un conjunto de historias sobre la experiencia socialista chilena tocando temas como el feminismo, la lucha popular, los partidos, la reforma agraria, el movimiento indígena o la actuación de Estados Unidos como potencia que jugó un rol clave en la desestabilización del Gobierno. El conflicto social y político estaba anclado, bajo esta perspectiva, en torno a aquellos actores que confrontaron factual e ideológicamente a la UP y no necesariamente por una dinámica más compleja y transversal de enfrentamiento. Véase Robert A. Henry, Joana S. Vasconselos y Viviana C. Ramírez (comps.), *La vía chilena al socialismo 50 años después*, tomo I: Historia. En el tomo II de este trabajo se enfatizan aspectos relativos a la memoria, haciendo circular un conjunto amplio de testimonios —nacionales y extranjeros— que ensamblan relatos de la vida personal con aspectos más estructurales del proceso político vivido en esos años. Véase Robert A. Henry, Joana S. Vasconselos y Viviana C. Ramírez (comps.), *La vía chilena al socialismo 50 años después*, tomo II: Memoria. Por su parte, la revista *Anales*, editada por la Universidad de Chile, publicó también un dosier especial sobre los cincuenta años de la UP. Su estilo y contenido es muy similar a los textos anteriores, incluyendo tanto la transcripción de algunas mesas redondas donde se debatió el significado y proyección de la experiencia socialista como algunas fuentes documentales y fotográficas del periodo. Véase "A cincuenta años del triunfo de Allende y la Unidad Popular", en revista *Anales*.

[2] El ámbito universitario chileno fue uno de los espacios que congregó mayor cantidad de encuentros de este tipo. El día 3 de septiembre de 2020, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano organizó el encuentro "Unidad Popular: 1970-2020. La vigencia de un proyecto", donde congregaron a diversas figuras vinculadas al Gobierno

se indicó, en el carácter conmemorativo de la fecha y en aquellos elementos y dinámicas que podían servir de insumos —culturales, políticos o sociales— para el nuevo Chile que, en apariencia, se comenzaba a dibujar. Podría decirse que, para un número no menor de actores, tanto protagonistas de esa historia en particular como investigadores de distintos ámbitos, la UP constituía una experiencia que, independiente de sus errores y limitaciones, estuvo a merced de oscuras maquinaciones e intentos de desestabilización[3].

Aunque ello en alguna medida fue cierto, la importancia que se ha asignado a este tipo de interpretaciones y puntos de vista ha generado que otros elementos o dinámicas del conflicto político vivido en esos años no hayan sido atendidos, o bien, no lo hicieran con la rigurosidad que ameritaban. Esto ha sido visible, como se ha indicado, respecto al tema de la violencia política durante este periodo[4].

de Allende como Jacques Chonchol o Miguel Lawner. Véase https://www.academia.cl/comunicaciones/agenda-eventos/unidad-popular-1970-2020-la-vigencia-de-un-proyecto [fecha de consulta: 27 de julio de 2021]. La Universidad Alberto Hurtado, por su parte, organizó, entre septiembre y octubre de 2020, el ciclo "Los 50 años de la Unidad Popular y el escenario político de esos tiempos". Allí se enfatizó mayoritariamente en los alcances y dinámicas de la experiencia socialista desde una perspectiva transnacional. Véase https://www.uahurtado.cl/ciclo-los-50-anos-de-la-unidad-popular-y-el-escenario-politico-de-esos-tiempos/ [fecha de consulta: 27 de julio de 2021]. La Universidad de Chile, en tanto, organizó en los primeros días de noviembre de 2020 el simposio titulado "50 años: Unidad Popular, un pasado lleno de futuro" cuyas temáticas principales referirían a cuestiones como la cultura, realizaciones y proyección del Gobierno de la UP. Véase https://www.uchile.cl/agenda/170173/simposio-50-anos-unidad-popular-un-pasado-lleno-de-futuro [fecha de consulta: 27 de julio de 2021]. También en el mes de noviembre, la Fundación Salvador Allende organizó una serie de encuentros titulados "Conversaciones de primavera. A 50 años de la Unidad Popular. Cuando hicimos historia" donde diversos académicos e investigadores abordaron esta etapa desde distintos ángulos. Su primera sesión estuvo dedicada a las transformaciones sociopolíticas del periodo, mientras que la segunda abordó las diversas expresiones de la revolución y contrarrevolución escenificadas en ese periodo. La tercera sesión expuso una mirada global de la experiencia socialista. Finalmente, el último encuentro abordó aspectos de la cultura, el consumo y la vida cotidiana en esos años. El detalle completo de los expositores se encuentra en: https://www.fundacionsalvadorallende.cl/salvador-allende-cuando-hicimos-historia/ [fecha de consulta: 14 de abril de 2023].

[3] Este razonamiento se puede reconocer en la obra de Mario Garcés, *La Unidad Popular y la Revolución en Chile*. Una reconstrucción de los planes de la oposición civil para derrocar al gobierno de Salvador Allende está en Mario Amorós, *Entre la araña y la flecha. La trama civil contra la Unidad Popular*.

[4] Para seguir la discusión sobre este punto véase, Igor Goicovic, "Temas y debates en la historia de la violencia política en Chile"; Danny Monsálvez, "El debate

Desde las líneas interpretativas que conmemoraron de forma positiva esta fecha, se ha tendido a comprender el tema de la violencia como el resultado de las estrategias de confrontación de la derecha y de los sectores opositores a la UP en general. Estos grupos habrían materializado sin la menor vacilación numerosas acciones de violencia para atacar a los militantes de izquierda y, desde una perspectiva más amplia, crear las condiciones de anormalidad y caos que fueran funcionales a una intervención militar. Es decir, la violencia tendría, desde este punto de vista, una función utilitaria orientada a polarizar el cuadro institucional y político desestabilizando así al Gobierno de Salvador Allende[5]. Desde un ángulo opuesto, ciertos sectores intelectuales y funcionarios en retiro o en servicio activo de las Fuerzas Armadas, han recalcado que la violencia política de estos años fue desarrollada exclusivamente por la izquierda chilena al abrazar el camino de la revolución armada. Bajo esta óptica, dicho fenómeno quedaba reducido a la actuación febril de un sector de la sociedad chilena que se enceguecíó con el discurso transformador del socialismo y se dispuso a instaurar una dictadura totalitaria[6]. Se trata, pues, de visiones pendulares, que en algunos casos no se condicen con la realidad o con los hechos sucedidos en ese periodo.

---

historiográfico y político sobre los orígenes de la violencia política en la historia reciente de Chile (1960-1990)" y Francisco Javier Morales Aguilera, "Orígenes de la tesis sobre violencia política en el Chile de los sesenta y setenta. Un análisis de sus documentos fundantes".

[5] Dicho acento puede observarse, por ejemplo, en el texto de Manuel Antonio Garretón, "Memorias en disputa: consenso fáctico y lucha de contenidos", pp. 153-160.

[6] Esta perspectiva se puede encontrar, entre otros, en los textos de Patricia Arancibia, *Los orígenes de la violencia política en Chile. 1960-1973*; Patricia Arancibia, María de los Ángeles Aylwin, Soledad Reyes, *Los hechos de violencia en Chile: del discurso a la acción*; Manuel Contreras, *La verdad histórica. El Ejército Guerrillero* y además en el libro de los oficiales en servicio activo Carlos Molina y Francisco Balart, *La violencia política en Chile*, y el del exsuboficial del Ejército Alberto León, *Tiempo Rojo y el alzamiento del blindado.* Existe material audiovisual que también responde a esta perspectiva de análisis y que se puede encontrar en diversos sitios web. Uno de ellos corresponde al canal de YouTube Cirujano Pedro Videla, que se define como un medio de «Memoria Histórica y recuperación de información de Historia de Chile desde 1950 a la fecha». En su contenido destacan numerosos videos del periodo de la UP, sobre todo aquellos en donde se muestran hechos de violencia perpetrados por la izquierda. Por los énfasis explicitados, así como por la calidad de la imagen y el sonido, el material parece ser extraído desde un programa o documental realizado poco después del 11 de septiembre de 1973. Véase Cirujano Pedro Videla https://www.youtube.com/@cirujanovidela/videos [fecha de consulta: 10 de febrero de 2023].

Este libro aborda el problema de la violencia política durante los años de la UP apartándose de los vacíos y omisiones que sobre este fenómeno existen hasta el día de hoy. En este sentido, el trabajo transita por un camino distinto a los ya referidos. Desde luego, no se sitúa como una investigación que busque endosar responsabilidades particulares sobre un tema en esencia complejo, así como tampoco intenta desconocer su existencia o sugerir, en último caso, que se trató de situaciones más bien marginales y desconectadas de un escenario nacional, e inclusive global, más amplio.

Esta publicación aspira a desarrollar una reflexión más pausada, que analice el fenómeno de la violencia política de ese periodo a partir de una revisión rigurosa y sistemática de diversas fuentes documentales. En concreto, este libro analiza y reconstruye decenas de situaciones de violencia política que hasta el día hoy habían sido escasamente exploradas. Poco se sabía, por ejemplo, de las circunstancias que rodearon la muerte del estudiante del MIR Eladio Caamaño en Concepción en 1972 y la aguda polémica que este hecho desató en el seno de la izquierda chilena. Tampoco existían mayores antecedentes sobre el caso de un obrero que fue muerto a golpes en la ciudad de Traiguén en febrero de 1973, o de los hechos que acabaron con el crimen de un cadete de la Escuela Militar apenas diez días antes del golpe militar. Además de los hechos coyunturales que se indagan, este libro reconstruye buena parte de los discursos públicos que orbitaron en torno al tema de la violencia, ejercicio que permite sugerir que dicha problemática estuvo más presente de lo que se piensa dentro del debate social en esos años. Para ordenar la exposición de los contenidos y coyunturas que se investigan, se proponen tres etapas de análisis. La primera de ellas se extiende entre noviembre de 1970 y diciembre de 1971. La segunda etapa abarca los meses de enero a septiembre de 1972. Finalmente, la tercera etapa se extiende entre octubre de 1972 y la antesala del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Cabe precisar, que un enfoque de estas características no significa desconocer los alcances transformadores del proyecto de la UP, ni tampoco su impacto en la memoria colectiva e individual en las últimas décadas. Más bien se busca poner el acento en una dinámica particular del conflicto social y político que también estuvo presente en esos años, pero que ha sido trabajada de modo insuficiente.

Desde un ángulo general se puede señalar, en efecto, que además de los procesos de cambio y transformación que la UP contribuyó a generar, en aquellos años se escenificaron numerosas situaciones de violencia política que fueron transversales a actores tanto individuales como colectivos. Son estos eventos, discursos y memorias —que acompañaron los casi tres años de socialismo en Chile— los que este texto busca rescatar y analizar, con el propósito de aportar rigor histórico al debate sobre las causas de la crisis de la democracia chilena.

El problema de la violencia política en Chile

Dentro del marco antes descrito, cabría responder por qué detenerse en estudiar el problema de la violencia política durante la UP. En buena medida, una parte de la respuesta a esta pregunta se encuentra en los silencios y vacíos existentes al respecto. Es decir, sobre un periodo que ha sido abordado desde un conjunto amplio de perspectivas y enfoques, todavía el tema de la violencia política se sitúa, dentro de los estudios históricos, en una posición más bien marginal. Y cuando ha sido abordado con meridiana atención, emergen en la mayoría de los casos un conjunto visible de carencias, sesgos y limitaciones.

Pero también se puede señalar una razón que está ligada a la configuración y trayectoria histórica de Chile como nación y que conectan ese recorrido estructural con la experiencia particular de la UP y, obviamente, con lo vivido a partir del 11 de septiembre de 1973. En este sentido, se puede advertir que la violencia había sido un factor determinante en la composición y desarrollo de numerosos procesos sociales y políticos del país, los cuales no remitían solo a su etapa republicana, sino que podían rastrearse incluso desde más atrás, hasta la fase de configuración del espacio colonial[7]. Lo que esta temprana realidad mostraba, y que visto desde un ángulo regional

[7] En la introducción al tomo III de la *Historia de la vida privada en Chile*, los codirectores de la obra se refieren al papel de la violencia en la existencia cotidiana y relaciones familiares y sociales en Chile, proyectándola hacia el ámbito público a propósito del golpe militar de 1973.

no se distinguía de lo ocurrido en otras zonas del continente, era la existencia de procesos de exclusión y marginación social, cuando no de sometimiento a un nuevo orden, llevados a cabo por las elites y grupos dirigentes.

Los cambios introducidos en la primera mitad del siglo XIX, a raíz del proceso independentista, no significaron un cambio radical ni un término anticipado de las dinámicas de conflictividad entre el Estado y los grupos subalternos. Estos fueron evolucionando hacia realidades que integraban a nuevos actores, lo que suponía la emergencia de otro tipo de problemáticas, aunque sin apartarse de ese conflictivo anclaje histórico que significaba la relación Estado-sociedad civil. De hecho, la conformación de un importante contingente obrero en distintas zonas del país puso sobre la mesa en pocos años el problema de la explotación laboral y las malas condiciones de vida de la población, situación que al canalizarse a través de la huelga y la protesta social generaría la respuesta represiva del Estado chileno y las elites dirigentes en diversos momentos[8]. Los inicios del siglo XX fueron testigos, en este sentido, de algunos de los repertorios de violencia estatal más característicos del periodo, donde las manifestaciones de protesta acababan, por lo general, con la matanza de decenas de trabajadores a efecto de reimplantar el orden y la «paz social»[9].

Con la crisis del modelo oligárquico en uno de sus puntos más altos a fines de la década de los años veinte, se comenzaron a elabo-

[8] Las principales zonas de conformación de una clase obrera moderna en Chile fueron los centros mineros e industriales establecidos en espacios del norte y centro sur del territorio. Particular importancia tuvieron los yacimientos carboníferos de la zona de Arauco en la octava región y los yacimientos de plata, salitre y cobre en Tarapacá y Antofagasta en el extremo norte. Cabe precisar que en torno al tema del origen, composición y trayectoria del proletariado en Chile se ha suscitado un largo debate historiográfico. Dos obras que permiten seguir esa discusión son las de Gabriel Salazar, *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX* y Sergio Grez, *De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*.

[9] Matanzas como la de la Escuela Santa María de Iquique en diciembre de 1907 o la ocurrida en la oficina salitrera de La Coruña en diciembre de 1925 fueron hitos representativos de las prácticas represivas estatales de esos años. Dentro de una bibliografía en general amplia sobre este tema véase Mario Garcés, *Crisis social y motines populares en el 1900*; Eduardo Devés, *Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela Santa María de Iquique, 1907*; Floreal Recabarren, *La matanza de San Gregorio 1921: Crisis y tragedia*.

rar nuevas bases económicas, sociales y políticas que transformarían algunos aspectos sustanciales del país en las décadas siguientes. De forma paralela, nuevos grupos sociales como la clase media comenzaban a tener mayor protagonismo dentro del ámbito político disputando una parte del poder a los sectores que históricamente lo habían detentado. En el transcurso de los años treinta ya podían observarse algunos cambios relevantes: se estaba transitando hacia un nuevo proyecto modernizador y el espacio social y político, antes hegemonizado por la elite, se convertía ahora en un campo de disputa para distintos actores. Sin embargo, ello no significó una modificación completa de las políticas represivas del Estado chileno, sino más bien su acomodación a un nuevo contexto. En la práctica, la violencia estatal seguiría ocupando un lugar importante en la resolución de los conflictos y en la mantención de la institucionalidad, incorporando, además, una amplia arquitectura legal a efecto de sancionar, perseguir y castigar a quienes buscaran alterar dicho orden[10].

Aunque las expresiones de movilización social se habían adecuado a un nuevo contexto, y muchas de ellas, además, se encontraban condicionadas y mediadas por la actuación de los partidos políticos, diversos conflictos explotaron con distinta intensidad provocando, de nuevo, la respuesta represiva del Estado[11]. Aún en las décadas de los cincuenta y sesenta, este tipo de situaciones seguía observándose a través de numerosos hechos que generaron fuertes discusiones y polémicas en torno a los límites de la violencia estatal[12].

[10] Brian Loveman y Elizabeth Lira, "La violencia política en Chile: contextos y prácticas desde 1810".

[11] Para una visión de conjunto de este periodo véase Verónica Valdivia, *Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo xx (1918-1938)* e Igor Goicovic, "Inestabilidad, conflictividad y violencia política en Chile, 1925-1941".

[12] Desde la perspectiva que le es tan característica, Salazar ha reconstruido algunos importantes pasajes del conflicto social a través de su estudio sobre la violencia popular en las calles de Santiago. Véase Gabriel Salazar *La violencia política popular en las "Grandes Alamedas". La violencia en Chile, 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular)*. En este texto, el historiador entiende la violencia política popular del periodo dentro de un contexto institucional que define como de continuación «lógico-factual» del modelo portaliano. Esto significaría, entre otras cosas, que el sistema político instaurado en 1925 ejercería dos tipos de violencia política: contra sí mismo, a efecto de reformar o alterar el propio marco constitucional, y en contra del «reivindicacionismo ciudadano y laboral», pp. 75 y ss. En alguna medida, la obra colectiva de Sofía Correa, *et al.*, sobre el siglo xx chileno podría ser un contrapunto interesante a la propuesta

Estos elementos no sugieren, por cierto, la existencia de un esquema represivo o de prácticas de violencia político-institucional rígidas e inalterables. Es indudable que el Estado nacional chileno a mediados del siglo XX y en tránsito hacia los largos años sesenta no era el mismo que aquél que estuvo dirigido por la oligarquía. Por eso se apunta más arriba que los repertorios de violencia estatal se fueron adecuando a nuevos contextos e incorporando elementos legales o administrativos para su ejecución. Quizás exista un punto de inflexión en este periodo respecto al quehacer estatal en virtud de las nuevas prácticas de movilización, los cambios operados dentro de la propia institucionalidad y la emergencia de un contexto nacional y mundial que anunciaba la llegada de transformaciones globales bajo distintas matrices ideológicas.

Desde el campo de la movilización social proletaria se observaron procesos de redefinición identitaria y adecuación de las luchas sindicales a nuevos contextos. Este tipo de dinámicas fue visible de modo muy característico en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuando transitó hacia la década del sesenta, sobre todo en relación a los niveles de autonomía o politización con que comenzó a entender su accionar. Para algunos autores, este tipo de categorías constituyen referencias fundamentales de la cultura política sindical ya que, entre otras cosas, permitieron dotar de un sentido a las relaciones entre los partidos y la organización obrera[13]. A partir de estas coordenadas se desprende una cuestión relevante respecto al accionar y trayectoria del mundo laboral chileno en su evolución hacia los años sesenta. Esta guarda relación con su protagonismo o participación en situaciones de conflicto y enfrentamiento con la

---

de Salazar. Aunque su objetivo es ser una historia general, la importancia en torno al orden —primero como paréntesis y luego reestablecido— sugiere pensar el rol del Estado desde una matriz distinta a aquella planteada por Salazar. Véase, Sofía Correa, *et al.*, *Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal.*

[13] José Ignacio Ponce, "Autonomía versus politización. Tensiones en la cultura política sindical entre la 'vieja democracia' y el inicio de la postdictadura chilena". Este énfasis en torno a las categorías de autonomía y politización también es abordado por otros investigadores, aunque destacando el discurso unitario de los dirigentes del periodo en la conformación de una nueva cultura sindical basada en la soberanía y el ejercicio del poder en tanto elementos característicos de inicios del siglo XX. Véase Gilda Orellana Valenzuela, "Clotario Blest en la CUT: Por una nueva cultura sindical y política (1953-1961)".

autoridad política en un periodo que antecedió a los años de la UP. Es decir, si dentro del mundo sindical operaron procesos de redefinición identitaria y estratégica es posible suponer que su accionar no fuese entendido como meramente pasivo en aquellas coyunturas críticas ni menos supeditado a los principales partidos del periodo. El historiador Luis Thielemann ha identificado, de hecho, un proceso de radicalización del movimiento obrero dentro de los largos años sesenta, lo que antecedería con creces al periodo de la UP que era considerado por muchos como la etapa fundante de dicha radicalización[14]. Dentro de este marco, entonces, podrían inscribirse algunos hechos como los ocurridos en el campamento minero de El Salvador, que culminó con la muerte de varios trabajadores en 1966, o los sucesos más conocidos de Pampa Irigoin en 1969.

De los elementos descritos arriba se puede concluir que tanto las prácticas represivas del Estado chileno como los alcances y carácter de la movilización social de ciertos actores no constituyeron un todo homogéneo. Es decir, los dispositivos institucionales y las dinámicas de interacción social sufrirían importantes variaciones, cambios y readecuaciones a nuevos contextos. De forma implícita, este tipo de transformaciones pone un punto de interrogación respecto al conflicto social y político vivido en tiempos de la Unidad Popular, ya que, por ejemplo, advierte que los niveles de radicalización política del segmento trabajador existían con anterioridad a la llegada de la izquierda al poder. En este sentido, cabría preguntarse cuál sería la particularidad de los enfrentamientos y violencia que se desarrollaron a partir de 1970 en el país si algunos de sus lineamientos ya estaban, al parecer, perfilados antes de esa fecha.

La pregunta anterior está conectada a otra interrogante clave. Esta se refiere a si la violencia seguiría desplegándose en la esfera pública con la llegada de la izquierda al gobierno, o bien, se produciría

[14] Luis Thielemann, "La rudeza pagana: sobre la radicalización del movimiento obrero en los largos sesenta. Chile, 1957-1970". Según Thielemann, la perspectiva de un movimiento obrero radicalizado en estos años ha sido a veces puesto en duda, o bien, desechado en favor de otros actores que habrían demostrado mayores niveles de radicalización, como serían los sectores populares marginales. Este punto de vista es compartido por Gabriel Salazar para quien el proletariado industrial, al regirse por el Código del Trabajo de 1931, habría terminado por constituir un movimiento «orgánicamente articulado y funcional» al proyecto nacional desarrollista y a la clase política civil. Salazar, G., *La violencia...*, *op. cit.*, p. 197.

un punto de inflexión que marcaría una nueva etapa respecto a este fenómeno. O, dicho de otro modo, cuáles serían las particularidades intrínsecas que tendría el modelo de transición al socialismo que harían que la violencia que históricamente había emergido en Chile detuviera su marcha y no impregnara esta nueva experiencia. La mayor parte de los actores y protagonistas de la vía chilena al socialismo sabían que esto no sería así y que de una u otra forma, la violencia terminaría por aparecer en medio de este proceso. Consciente de esta situación, la dirigencia de la UP hizo un esfuerzo por aminorar su impacto, sobre todo con aquella que en términos prácticos se podía de algún modo manejar y controlar. Este punto se refería a la violencia emanada desde los dispositivos represivos del Estado como eran las policías y los cuerpos militares. A través del programa de Gobierno se dejó establecido, por ejemplo, que al asumir el poder, Salvador Allende disolvería el Grupo Móvil de Carabineros —que era la unidad encargada de la represión— reorientando su labor hacia una práctica más centrada en la disuasión y la contención de la protesta social[15]. Esta medida al ser puesta en práctica constriñó las acciones de violencia policial durante buena parte del periodo, emergiendo solo en determinadas coyunturas y en el marco de un clima de mayor polarización que aquel vivido en los primeros meses de administración de la UP.

Sin embargo, la implementación de una medida de este tipo restringía la preocupación sobre el tema de la violencia hacia solo uno de sus campos de expresión; aquella de carácter estatal. Quedaba, por tanto, un espacio amplio y heterogéneo donde podían expresarse otro tipo de violencias y situaciones de conflictividad que no respondían a los códigos de ejecución de aquella de naturaleza institucional. De hecho, algunos partidos y movimientos habían teorizado y conceptualizado con cierta profusión respecto a la denominada violencia revolucionaria, que se entendía como una respuesta de las clases subalternas a la histórica violencia emanada desde los grupos dominantes. Aunque aquella no se materializaría de forma contundente, por ejemplo, a través de cuadros guerrilleros que controlaran extensas zonas del territorio nacional o por medio

15 "Las primeras cuarenta medidas del Gobierno Popular", *Programa de la Unidad Popular*, p. 53.

de una dinámica de secuestros y asaltos masivos como sí ocurría en otros lugares de la región, el acento en torno a su posible ejecución había quedado instalada. Además, los objetivos de transformación global propuestos por la izquierda demandaban la colaboración de la sociedad civil para su apoyo y ejecución, situación que podía prestarse para que, en determinadas condiciones, y ante la oposición cerrada de ciertos actores, emergieran diversos enfrentamientos y hechos de violencia.

Cabe precisar, por cierto, que las posibilidades de que el proceso inaugurado por la UP contribuyera a crear situaciones de violencia política no se debían exclusivamente a las referencias discursivas y propuestas elaboradas por este sector. Como se sabe, grupos opositores a la izquierda —como el Frente Nacionalista Patria y Libertad— se organizaron para hacer frente a un gobierno que consideraron como una amenaza para la libertad y la democracia. En poco tiempo, diversas acciones de violencia y un lenguaje que justificaba su materialización a objeto de hacer frente al «marxismo» fueron incorporados de lleno en las estrategias de estas organizaciones. Incluso antes de que el proyecto de la UP asumiera el poder, una sórdida conspiración entretejida por miembros del Ejército y civiles vinculados a la derecha, con apoyo de Estados Unidos, llevaron a cabo el intento de secuestro y posterior homicidio del comandante el jefe de esa institución, René Schneider[16]. Luego, en pleno Gobierno de la UP se materializaron otros hechos de violencia donde el homicidio de características políticas, como los ocurridos en contra de Edmundo Pérez Zujovic, Arturo Araya Peeters y tantos otros, impactarían de forma decisiva en la escena pública. En paralelo, los enfrentamientos callejeros, los ataques entre grupos o individuos rivales y los atentados explosivos en medio de un clima de alta polarización ponían el tema de la violencia política en un lugar preponderante del debate nacional. Lo que asomaba con meridiana claridad al cabo

[16] Una de las principales fuentes para conocer de cerca el rol de los Estados Unidos en la coyuntura electoral chilena de 1970 es el Informe Church elaborado por una comisión del Senado norteamericano en 1975. Una buena síntesis del contenido de este informe y de otros documentos provenientes desde algunas instituciones estadounidenses se encuentra en, Luis Corvalán Marquéz, "Las acciones encubiertas norteamericanas entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1970, según el Informe Church y otros documentos desclasificados por los EE.UU.".

de unos meses de Gobierno de la UP era que se estaba concretando con dramática periodicidad una dinámica ascendente de violencia y conflictividad política entre diversos actores.

La violencia en la sociedad civil chilena

La violencia política que se despliega en tiempos de la Unidad Popular guardaría, pues, diferencias importantes con aquella que se había materializado en Chile y que tenía al Estado como uno de sus principales brazos ejecutores. A decir verdad, durante la UP cobrarían protagonismo distintos actores de la sociedad civil: trabajadores, estudiantes, pobladores y mujeres, entre otros, ya fuese por su vinculación directa a algunos de los partidos o movimientos que pugnaban dentro de la arena política, como por el impulso movilizador que generó esta experiencia en su conjunto. Y serían este tipo de actores quienes protagonizarían los principales hechos de violencia política del periodo. Así, la naturaleza y carácter de la violencia en Chile durante los años 1970-1973 cambió de protagonistas, marcando un punto de inflexión respecto al recorrido histórico que esta dinámica había tenido en el país. Lo anterior no significa ignorar los antecedentes que sobre movilización social o participación en dinámicas de violencia existieron antes de 1970, protagonizados también por distintos segmentos de la sociedad civil. Lo que se busca enfatizar es que, en buena medida, durante la Unidad Popular gran parte de las movilizaciones y conflictos alcanzaron mayores cuotas de expresividad y materialización por parte de esa misma sociedad civil. Cabe agregar, además, que este proceso se dio en el marco de la implementación de un programa de transformaciones estructurales que no tenía parangón en la historia del país, y que además se conectaba a un contexto regional y mundial rico en expresiones socializantes y contraculturales. Visto en su conjunto, la UP contribuyó a conformar un escenario nuevo que juntaba en una misma dimensión espacial y temporal un proyecto modernizador de carácter socialista con una amplia participación social y política.

Ahora bien, qué significa exactamente el énfasis que este libro hace respecto al término «civil». Como se podrá advertir, dicho concepto remite a un marco de análisis más general que está vinculado

a lo que se denomina como sociedad civil. El politólogo Norberto Bobbio señala que este término ha tenido diversos significados a lo largo de los últimos siglos. En sus orígenes, el Estado o sociedad civil había nacido por oposición a un estado primitivo de la humanidad donde solo existían las leyes de la naturaleza. En épocas posteriores, sin embargo, el término sociedad civil adquirió una impronta que remitía a un carácter de sociedad «civilizada». En la óptica marxista, por ejemplo, se la entendería bajo un carácter preestatal —de desarrollo de relaciones económicas intersubjetivas que pertenecen a la estructura—. Con Gramsci, continúa Bobbio, la sociedad civil pasa a entenderse como un momento de la superestructura —el de la hegemonía— que se diferencia del dominio puro, es decir, donde confluyen relaciones de tipo ideológico-culturales. En la actualidad, la sociedad civil es entendida como la esfera de las relaciones entre individuos, grupos y clases sociales que se desarrollan por fuera de las relaciones de poder que caracterizan al Estado. A partir de esta mirada, concluye Bobbio, la sociedad civil es entendida como el espacio en cuyo seno afloran un conjunto de conflictos respecto de los cuales el Estado tiene la tarea de resolverlos o suprimirlos, aunque también podría entenderse como un campo de movilizaciones de distintas fuerzas sociales encaminadas a conquistar el poder[17].

Esta diferenciación respecto a las estructuras estatales es también compartida por Mario Bunge para quien la sociedad civil es la «colección» de organizaciones formales e informales que están fuera del Estado —familias, empresas, ONG, entre otras—. Al mismo tiempo, el filósofo argentino indica que bajo la vigencia de un régimen democrático la existencia de la sociedad civil se da por sentada, por lo que su importancia solo es reconocida de forma cabal cuando aquella es amenazada por las dictaduras o cuando intenta ser reducida[18]. Con todo, el rol de la sociedad civil dentro de los regímenes dictatoriales también puede ser visto como un factor decisivo —y no solo pasivo— para introducir algunos cambios de importancia. Este es el enfoque de Pamela Radcliff respecto al papel jugado por la sociedad civil

[17] Norberto Bobbio, Nicola Mateucci y Gianfranco Pasquino, *Diccionario de política*, pp. 1519-1524.

[18] Mario Bunge, *Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral*, pp. 98-102.

española durante el franquismo, y que desde un punto de vista más amplio la autora define como un terreno controvertido entre el Estado y la esfera privada donde los individuos lucharán de manera colectiva por los asuntos públicos. Es decir, la sociedad civil sería un espacio de transgresión de los límites políticos que impone el Estado, estableciendo un marco de relaciones propicias para el cambio político[19].

Considerando los elementos antes descritos, resalta la idea de que la sociedad civil constituye una esfera o campo que posee características particulares con respecto al Estado. En este sentido, aquella estaría conformada por una red densa de organizaciones e individuos que poseen intereses, a veces comunes o diferenciados, y que se mueven en un espacio distinto al estatal. ¿Cómo se podría caracterizar entonces a la sociedad civil chilena de comienzos de los años setenta que será testigo y protagonista de los cambios, conflictos y vicisitudes que abrirá la vía chilena al socialismo? Un sobrevuelo demográfico y económico muestra que Chile alcanzaba entonces una población total de casi nueve millones de habitantes, con un predominio del segmento joven y adulto, de 15 a 59 años, que correspondía a más del 53 % de la población total. Considerando un segmento etario más amplio, de 5 a 50 años y más, sobre cuatro millones de chilenos habían recibido algún tipo de educación primaria, mientras que más de un millón tenía estudios secundarios. Cerca de 205 mil personas, en tanto, habían cursado estudios universitarios. Por otra parte, la población económicamente activa, considerada dentro del rango 12 años y más, alcanzaba a dos millones setecientas mil personas. Por rama de actividad económica las cifras más destacadas correspondían a los sectores agrícola, con 570 mil trabajadores; minero, 81 mil; industria, 446 mil; construcción, 175 mil; comercio, 302 mil y transportes, 165 mil[20]. Es interesante apuntar que la mayor parte estos sectores se movilizará de forma activa en los años siguientes en virtud de los cambios y transformaciones que impulsará la UP. El mundo agrícola, por ejemplo, será remecido por la intensificación de la reforma agraria, mientras la industria, minería, comercio y transportes también serán impactados por alguna de las medidas

[19] Pamela Radcliff, *La construcción de la ciudadanía democrática en España. La sociedad civil y los orígenes populares de la Transición, 1960-1978*, pp. 21-22.

[20] Instituto Nacional de Estadísticas, *XIV censo de población y III de vivienda*, *passim*.

que se intentarán poner en marcha. Como es de suponer, los procesos de movilización social que activa la vía chilena al socialismo no correspondieron únicamente al de aquellos segmentos que lo hicieron para brindar un respaldo al proyecto popular, sino también respecto a los sectores que se opusieron y manifestaron su rechazo al mismo[21].

A la luz de las cifras indicadas arriba se pueden hacer ahora algunas observaciones más específicas sobre comportamientos, estructuras y dinámicas políticas. Para la elección presidencial de 1970, se hallaban inscritos más de 3 500 000 electores, observándose una participación de más del 80 % de estos inscritos. La Central Única de Trabajadores contaba con una afiliación cercana a los 700 000 miembros distribuida entre casi 4 600 sindicatos[22]. Si bien no se dispone de cifras oficiales y confiables respecto al número de militantes de los partidos del periodo es posible suponer que, en la izquierda, sumando a socialistas y comunistas además de otros grupos, se llegara a una cifra quizás cercana a la de los afiliados a la CUT. Entre los partidos de izquierda, el comunista poseía una mayor estructura y peso orgánico que se distribuía en distintas plataformas y agrupaciones. Una de estas estructuras era el aparato militar, el cual, según Javier Rebolledo, estuvo compuesto por la autodefensa —integrada por militantes encubiertos encargados de custodiar marchas, dirigentes y locales—, el aparato de inteligencia o informaciones y los grupos chicos —con militantes que poseían mayor formación en áreas como inteligencia y seguridad y que, además, portaban armamento—. Siguiendo los testimonios de algunos militantes y los datos que pudo reunir a lo largo de su investigación, Rebolledo indica que todo el aparato militar comunista llegó a tener, durante el gobierno de la Unidad Popular, cerca de 5 mil integrantes[23].

El Partido Socialista, por su parte, se articulaba en torno a distintas estructuras, las cuales, como indica Cristián Pérez, tenían

[21] Sobre la participación activa de las clases medias contra el gobierno de Allende, véase Marcelo Casals, *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar*, pp. 49-99.

[22] Franck Gaudichaud, “La Central Única de Trabajadores, las luchas obreras y los cordones industriales en el periodo de la Unidad Popular en Chile (1970-1973). Análisis histórico crítico y perspectiva”, p. 5.

[23] Javier Rebolledo, *Los hijos del frío*, pp. 87 y 209.

una forma piramidal de seis niveles. En la base, y con un número variable de integrantes, se encontraban los núcleos, seguidos de las seccionales, los comités regionales y ya en la parte más alta, el Comité Central, la Comisión Política y el secretariado general[24]. En abril de 1971, señala Pérez, el PS reforzaría su estructura política creando un Frente Interno encargado de la organización del partido y del cual dependería una Comisión de Defensa. Esta última estaba conformada, a su vez, por tres dispositivos: El Grupo de Amigos Personales (GAP), encargado de la seguridad del presidente Allende; el Aparato Militar, que incluía a militantes con experiencia en el manejo de armas y cuya principal tarea era garantizar una defensa mínima al partido y al Gobierno, y el Aparato de Informaciones que constituía un equipo de inteligencia y contrainteligencia del partido[25].

En la oposición, el Partido Demócrata Cristiano (PDC o DC[26]) poseía mayor peso militante que otras colectividades. Con todo, no está claro que la juventud de este partido, la JDC, u otra estructura desconocida, se haya involucrado en hechos de violencia en tanto grupo de choque. Quizás algo de ello hubo en el marco de la marcha de las cacerolas vacías en diciembre de 1971 cuando dicha agrupación custodió, junto a otros movimientos, el desfile femenino, involucrándose horas más tardes en diversos incidentes. Cabe precisar, además, que algunos dirigentes democratacristianos se destacaron con relativo éxito a la hora de movilizar a ciertos actores en contra de la UP, como fue el caso de los estudiantes secundarios o trabajadores de algunas áreas. El Partido Nacional (PN[27]), en tanto, sí creo una estructura de choque, el Comando Rolando Matus, a objeto de confrontar a los grupos de izquierda ya fuese en espacios urbanos o rurales, predominando su participación en estos últimos lugares.

[24] Cristián Pérez, *La vida con otro nombre, El Partido Socialista en la clandestinidad (1973-1979)*, p. 22.

[25] Pérez, C., *La vida...*, *op. cit.*, p. 20.

[26] El Partido Demócrata Cristiano fue fundado en 1957 por un grupo de dirigentes que pertenecían a la denominada Falange Nacional. Este grupo, a su vez, provenía de la juventud del Partido Conservador.

[27] El Partido Nacional fue fundado en 1966. En su seno agrupó a distintas corrientes de la derecha chilena tras la crisis de representatividad sufrida en las elecciones parlamentarias de 1965 que había dejado al conjunto de este sector —liberales y conservadores— con no más del 12 % de la votación a nivel nacional.

Por fuera de los partidos tradicionales, se puede intuir que algunos movimientos como el MIR[28] contaban con cerca de 10 mil integrantes sumando todos sus frentes —campesino, obrero, estudiantil y poblacional—. En el caso de Patria y Libertad[29], Manuel Fuentes Wendling comenta que su máximo jefe, Pablo Rodríguez Grez, se encontraba eufórico porque a su juicio el movimiento nacionalista estaba constituido por más de diez mil personas en todo el país. Sin embargo, el propio Fuentes realizó un registro detallado de los inscritos y llegó a la conclusión de que no eran más de mil los militantes en todo Chile. «El Frente de Hombres y el de Mujeres —sentenciaba Fuentes Wendling— no sumaban más de 250 personas»[30]. Una visión distinta aporta el secretario general de la organización, Roberto Thieme, quien destaca los esfuerzos de la organización por desplegarse orgánicamente en las principales ciudades del país. Los militantes de Patria y Libertad, según el dirigente, llegaron a ser para mediados de 1971 más de tres mil, organizados en distintos frentes —inteligencia, apoyo, de choque, entre otros—. Buena parte de estos integrantes comenzaron a ser adiestrados en manejo de armas, explosivos, sistemas de enlace y conocimientos necesarios para el «trabajo clandestino de subversión». Solo en la capital, indica Thieme, operaban 20 grupos de choque compuestos por 25 militantes cada uno, lo que hace un total de 500 miembros operativos en esta zona[31].

[28] El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue fundado en 1965 por dirigentes sociales y políticos que provenían desde distintas colectividades de izquierda. Hacia fines de los sesenta, la conducción de este grupo la tomaría Miguel Enríquez quien le imprimiría un sello de particular identidad a la estrategia mirista. En ella confluyeron desde perspectivas locales hasta la dimensión castro-guevarista que estaba muy en boga por entonces.

[29] Patria y Libertad surgió en el marco de la campaña electoral de 1970 como un movimiento de carácter cívico, enfocado en alertar sobre los peligros de un eventual gobierno de izquierda. Con la llegada de la UP al gobierno este grupo se autodisolvería, reapareciendo en abril de 1971 bajo la denominación de Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL).

[30] Manuel Fuentes Wendling, *Memorias secretas de Patria y Libertad y algunas confesiones sobre la Guerra Fría en Chile*, pp. 233-234.

[31] Roberto Thieme, *Memorias de un rebelde*, p. 76. Algunos estudios incluyen a PROTECO (Protección Comunal), SOL (Soberanía, Orden, Libertad) y Guardia Blanca como grupos de autodefensa de la oposición, los cuales, producto de la contingencia que se vivía en los espacios urbanos y rurales, actuaban de forma armada. Véase, Alejandro San Francisco (dir. gral.), *Historia de Chile, 1960-2010. Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973)*, tomo 6, p. 613. La existencia de un grupo denominado Guardia Blanca, y que habría actuado fundamentalmente en los

Cabe señalar que estas cifras no dan cuenta, por cierto, del conjunto de dinámicas políticas existentes en ese periodo en Chile y de las que abriría la experiencia de la UP. Desde luego, la militancia formal en un partido o movimiento constituía por aquel entonces una de las tantas formas de participar dentro del proceso social y político que estaba en curso. Existían, en este sentido, numerosas organizaciones de bases articuladas en torno a segmentos populares o estudiantiles que desplegaban sus repertorios de acción dentro de un abanico bastante amplio de iniciativas y propuestas. Por tal razón, la militancia política es uno entre tantos factores a la hora de analizar la participación de la sociedad civil en estos años.

Una conclusión general que sí se puede extraer es que se trata de una sociedad que muestra, a través de distintas vías, un interés manifiesto por participar en los procesos de cambio y transformación que se están abriendo en Chile con la llegada de la UP al poder. Por supuesto que este enfoque también sería limitado si no se considera que dentro de esta población existió un número importante de personas que se ubicaron en posiciones refractarias a la vía chilena al socialismo. Este grupo canalizaría su descontento a través de la participación en partidos y movimientos políticos de la oposición, o bien, en instancias algo más informales como marchas y manifestaciones callejeras. En este sentido, la sociedad civil que se movilizaría en tiempos de la UP lo hace a través de diferentes vías y mecanismos, ya sea por medio de canales formales como pueden ser los partidos políticos o movimientos, o través de dinámicas más espontáneas que no siguen los ritmos de una estructura partidista.

Se debe señalar, por último, que el término «civil» circuló con cierta profusión dentro del lenguaje político del periodo, situación

---

espacios rurales, no ha podido ser rastreada en esta investigación. La referencia sobre este grupo, citada en la obra de San Francisco, fue tomada del texto de Robert Moss *El experimento marxista chileno*. Aunque no es posible descartar la existencia de este grupo en particular, el rol del Comando Rolando Matus, surgido como producto de los hechos de violencia que se vivían en las zonas agrícolas, fue mucho más relevante y visible dentro de la opinión pública. Se puede especular que Moss atribuyó un rasgo de singularidad e identidad a una forma de autodefensa armada que tenía una larga historia en Chile, pero que no constituía un grupo concreto y único. Las guardias blancas constituían, en efecto, una práctica antigua dentro de los grupos dominantes, cuyo propósito era resguardar sus intereses ante la amenaza de los sectores subalternos e inclusive, en determinadas coyunturas, contrarrestar la influencia de los militares.

que significaba remarcar la importancia de este segmento dentro de las dinámicas de interacción social. En la oposición, el PN levantó, en el transcurso de 1972, la tesis de la «resistencia civil» a la UP como una forma de confrontar a la izquierda desde una estrategia basada en la firmeza y entereza de ciertos sectores. Esto suponía, entre otras cosas, que una parte de la sociedad civil debía resistir los intentos de control estatal en el comercio, transportes y otras áreas del quehacer productivo. Una perspectiva todavía más dura evidenció Patria y Libertad cuando explicitó su tesis de la «ofensiva civil» en enero de 1973. Tal prioridad se distanciaba de la propuesta del PN en el sentido de que propugnaba un camino más activo en la confrontación al Gobierno, donde distintos actores del panorama social y político debían vincularse a una misma estrategia para derrocar a la UP. Bajo este ángulo, pues, los partidos y movimientos en general entendían la importancia que tenía la sociedad civil dentro de los procesos de movilización y confrontación existentes. Ello se explicaba, por cierto, a partir de una constatación básica: que la lucha política mantenida únicamente dentro de la institucionalidad, y que involucrara solo a los actores formales del sistema, no sería suficiente para provocar los cambios trascendentales que anhelaban ciertos sectores. De allí que resultaba vital que la sociedad civil se involucrara de lleno dentro del proceso de confrontación social y política que se había generado.

Este libro explora, entonces, tres elementos o expresiones de la violencia política del periodo, donde importantes segmentos de la sociedad civil tuvieron un protagonismo fundamental. Estos son los homicidios de connotación política, los enfrentamientos callejeros y los discursos que orbitaron sobre estos sucesos[32]. Tales elementos constituyeron los eventos más representativos de las dinámicas de violencia ocurridas durante la UP. Cabe recordar, en efecto, que muchos de estos acontecimientos impactaron de forma profunda en la escena nacional generando cambios en la configuración del marco político y en algunas directrices y estrategias de los principales

[32] Dentro de los enfrentamientos callejeros y otras manifestaciones de violencia pública, esta investigación también indaga en los atentados que se materializaron entonces, sobre todo en aquellos casos en que su ejecución afectó directamente a individuos o grupos de personas. Como es de suponer, este tipo de hechos también serían referidos dentro de los principales discursos de esos años en tanto eventos que contribuían a extremar el cuadro de polarización y violencia existente en el país.

partidos y movimientos del periodo. Es decir, no se trató de hechos que permanecieron en los márgenes de la lucha social y política de esos años, sino que, por el contrario, estaban insertos en medio de la pugna que dividía a los principales actores de esta experiencia. En otras palabras, se conectaron a dinámicas y discusiones más generales dentro de la vía chilena al socialismo. Asimismo, estos eventos impulsaron la circulación de numerosos discursos que en distintas direcciones abordaron el origen, naturaleza y consecuencias de la violencia dentro de la escena pública. En última instancia, este conjunto de hechos revela también su importancia al permanecer dentro de la memoria individual de numerosos actores del periodo y que a través de diversos escritos y registros han vuelto a emerger a lo largo de los años.

Fuentes documentales y bibliográficas

Para reconstruir los principales hechos de violencia política que aborda este libro se trabajó con un abanico amplio de fuentes documentales. En primer término, se realizó una recopilación sistemática de prensa nacional. Dentro de los periódicos contrarios al gobierno de la UP se incluyeron medios como *El Mercurio*, *La Segunda*, *La Tercera de la Hora*, *La Prensa* y *Tribuna*. Estos dos últimos periódicos pertenecían, respectivamente, a las dos colectividades más importantes de la oposición: La DC y el PN. También se incluyeron algunas revistas quincenales o mensuales adscritas a esta misma vertiente opositora como fue *Qué Pasa* o *Portada*. La revista *Patria y Libertad* pertenecía al frente nacionalista de análogo nombre siendo una publicación clave para reconstruir determinadas coyunturas, sobre todo en lo que respecta a la circulación del discurso nacionalista de extrema derecha en esos años. En una posición intermedia, de oposición crítica, pero dialogante, se ubicaban revistas como *Ercilla*. Para aquellos casos de violencia ocurridos en lugares alejados de los grandes centros urbanos, o que fueron característicos de ciertas capitales provinciales, se utilizó sobre todo prensa regional.

Dentro de la prensa oficialista, o perteneciente a una vertiente de izquierda, se revisaron periódicos como *La Nación*, *Las Noticias de Última Hora*, *Clarín* y *El Siglo*. También se utilizaron algunas publi-

caciones vinculadas al mundo de los trabajadores como fueron los casos de *Aurora de Chile* y *Tarea Urgente*. En cuanto a las revistas, se consultaron publicaciones como *Chile Hoy*, donde escribieron reconocidos intelectuales de izquierda; *Principios*, publicación teórica de los militantes comunistas y *Punto Final*, expresión muy cercana al MIR. Esta última publicación se encuentra, además, digitalizada y con acceso abierto a través de Internet[33]. Ciertos documentos, periódicos y escritos vinculados al PS y a sectores obreros de este partido están también digitalizados en la Biblioteca Clodomiro Almeyda[34].

A pesar de las directrices ideológicas con que operó la prensa escrita del periodo, y que para algunos autores contribuyó de modo irresponsable en la polarización y la crisis terminal del sistema[35], su utilización resultaba fundamental para esta investigación. Como se señaló más arriba, los medios escritos fueron claves para reconstruir numerosas coyunturas del conflicto político que se vivía, lo cual no impidió aquilatar visiones contrapuestas o mirar con escepticismo y ojo crítico algunas de sus informaciones.

Un importante acervo documental respecto a la izquierda chilena del periodo lo constituye la obra editada por el profesor Víctor Farías el año 2000[36]. A lo largo de seis volúmenes, Farías recopila cientos de documentos correspondientes a los principales partidos, movimientos y figuras de este sector político dentro de un periodo que abarca desde 1967 a 1973. En la introducción de cada volumen se puede apreciar que el propósito de Farías es dar cuenta de las contradicciones internas que aquejaban a la izquierda en ese entonces, cuestión que en buena medida sería clave para explicar la derrota de este proyecto. A pesar del enfoque explicitado por el autor, la obra es una consistente recopilación que permite trazar y seguir la estrategia

[33] Archivo Histórico *Punto Final* (1965-1973). https://punto-final.org/pages/Portada_Ingresa_Agnos.htm [fecha de consulta: 28 de junio 2023]

[34] Portal del Socialismo chileno. Biblioteca Clodomiro Almeyda. http://www.socialismo-chileno.org/ [fecha de consulta: 28 de junio 2023]

[35] Patricio Bernedo y William Porath, "A tres décadas del golpe: Cómo contribuyó la prensa al quiebre de la democracia chilena", p. 115. Una visión igualmente analítica de la prensa escrita del periodo, que utiliza entre otros los conceptos de «prensa de combate» y «prensa seria», se encuentra en Patricio Dooner, *Periodismo y política. La prensa de derecha e izquierda 1970-1973*.

[36] Víctor Farías, *La izquierda chilena. Documentos para el estudio de su línea estratégica, 1969-1973*.

política de la mayor parte de las colectividades que integraron la UP, o bien de aquellas que como el MIR se situaban en la extrema izquierda sin ser parte formal de dicha coalición.

Dentro del ámbito más institucional del campo político, también se consultaron los Diarios de Sesiones del Congreso Nacional de Chile, Senado y Cámara de Diputados, del periodo 1970-1973. Esta documentación permitió reconstruir e indagar en los debates parlamentarios que abordaron el tema de la violencia y el conflicto político en general. Aunque estas cámaras legislativas tenían funciones legales disímiles y una composición numérica distinta, en ambos casos se pudo observar una preocupación manifiesta y recurrente por los acontecimientos y disputas más apremiantes ocurridas durante la UP. Especialmente interesantes a este respecto fueron aquellas sesiones del Senado celebradas en momentos clave de la vía chilena al socialismo, como fue en la coyuntura del paro patronal de octubre de 1972 o en el marco del denominado tanquetazo del 29 de junio de 1973. La colección completa de los *Diarios de Sesiones* está disponible en formato digital desde la página web de la biblioteca de dicha corporación[37].

Otro grupo de fuentes primarias utilizadas para el caso específico de la UP se refiere a documentación emanada desde reparticiones públicas, como son los certificados de defunción de algunas víctimas e informes de lesiones y autopsias que remiten a algunos importantes hechos de violencia política del periodo. Los certificados de defunción, por ejemplo, permiten conocer los datos personales de las víctimas y la causa concreta de su muerte, además de la fecha, hora y lugar en que esta se produjo, siendo en la práctica, un documento resumido de los informes de autopsia. El acceso a los certificados de defunción se puede realizar a través de cualquier oficina del Registro Civil e Identificación. Los informes de lesiones y autopsias también constituyen un cuerpo documental de gran importancia para esta investigación. Ambos registros se encuentran depositados en el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD) y su acceso es abierto. Sin embargo, existe una limitación significativa respecto

[37] "Diario de sesiones del Congreso Nacional de Chile, 1925-1973", *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*, https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/periodos_legislativos?periodo=1925-1973 [fecha de consulta: 28 de junio 2023]

a las fechas de acceso del material a consultar, pues solo están disponibles los tomos que llegan hasta diciembre de 1972. Según se indicó desde esta institución, tanto los informes de autopsia como de lesiones correspondientes a 1973 —incluidos aquellos del primer semestre que corresponden todavía al periodo de la UP— están en poder de los Tribunales de Justicia.

Otra fuente consultada fue la *Colección histórica de homicidios* que editó la Policía de Investigaciones de Chile a fines de la década del 2000. Se trata de un extenso número de volúmenes que indagó en los 100 crímenes que más impactaron a Chile entre 1947 y 2008 y en los cuales se incorpora gran parte de la documentación generada por la policía civil en la fase de investigación de cada caso. Además, algunos volúmenes incorporan documentación legal como extractos o capítulos completos de los expedientes judiciales. Del periodo 1970-1973, esta colección indagó en los homicidios del excomandante en jefe del Ejército, René Schneider, el del exministro del Interior del gobierno democratacristiano, Edmundo Pérez Zujovic y el del obrero pintor Tomás Henríquez. Aunque se trata de casos muy específicos, la información contenida en cada volumen aporta datos y características particulares que permiten reconstruir de modo consistente cada hecho de violencia. Así, por ejemplo, se puede acceder a las declaraciones de testigos, partes policiales y material gráfico como croquis y fotografías realizadas por los peritos criminalísticos de la policía civil. El conjunto de estos volúmenes, además de revistas institucionales y materiales de similar orientación, se encuentran albergados en la Biblioteca Central de la Escuela de Investigaciones Policiales ubicada en Santiago de Chile.

Para este libro también se utilizaron memorias, incluyendo aquellos textos de diversos protagonistas de ese periodo y cuyas historias de vida los ubicaron en distintos niveles de la lucha social y política[38]. Este tipo de fuentes constituyen, en efecto, un material de indudable importancia, pues aportan un testimonio de primera mano respecto a un número amplísimo de sucesos y coyunturas, ayudando la mayoría

[38] Para los temas de memoria y violencia en la región latinoamericana puede ser útil el texto de Eugenia Allier Montaño, "Memoria, política, violencia y presente en América Latina". Una referencia clásica sobre la memoria e historia y el abordaje de los cientistas sociales es el de Josefina Cuesta Bustillo, "Memoria e historia. Un estado de la cuestión".

de las veces a conformar una imagen más completa de lo relatado. Por cierto, la mirada del historiador debe ser atenta y rigurosa ante algunos de los contenidos y episodios que se relatan en este tipo de fuentes, sobre todo a efecto de confrontar datos, desechar ciertos juicios o cuestionar la veracidad de algunas informaciones. Esto último ha sido visible en el caso de algunas memorias militares como por ejemplo las del almirante José Toribio Merino, cabeza visible de los sectores navales más reacios al proyecto de la UP y uno de los cerebros del golpe de Estado.

Para cerrar el ámbito de los recursos y materiales utilizados para indagar en el periodo de la UP, cabe señalar la importancia de ciertas fuentes audiovisuales, como documentales y reportajes periodísticos. La importancia de estos materiales radica en que son fuentes de época, lo que permite conocer un trozo original y vivo del pasado, obteniendo un acercamiento a un conjunto de hechos, símbolos, lenguajes y matices propios de ese periodo. Aunque la postura ideológica del director o reportero incidiría en el enfoque y orientación del material, la principal virtud de estos registros radica en su contingencia, es decir en su capacidad por mostrar retazos originales de una época. Dentro de este marco se ubican trabajos audiovisuales como la trilogía documental de Patricio Guzmán *La Batalla de Chile*[39].

Este libro, como se indicó con anterioridad, se estructura en torno a tres grandes etapas de estudio. La primera de ellas abarca desde la llegada de la UP al gobierno hasta diciembre de 1971. En este periodo, se observa una dinámica social y política que transita desde una fase favorable para el proyecto de la UP hacia un periodo de confrontación social incentivado por la oposición, el cual alcanzará importantes dimensiones hacia fines de ese año. La segunda etapa abarca gran parte de 1972, iniciándose en el marco de las elecciones complementarias de O'Higgins y Linares y finalizando en el mes de septiembre. En este periodo se podrá advertir la conformación de un escenario bipolar en donde el énfasis discursivo que comienza a ganar terreno está articulado en torno a la viabilidad o cancelación del proyecto socialista. La tercera etapa, en tanto, que se inicia en el paro de octubre de 1972 y finaliza con el golpe de Estado del 11 de

[39] Patricio Guzmán, *La batalla de Chile*, I, II y III.

septiembre, muestra como perfil fundamental una dura pugna en torno a la sobrevivencia o derrota de la Unidad Popular. En dirección hacia esa problemática, la mayor parte de los actores sociales y políticos dirigirá sus estrategias discursivas y factuales a fin de lograr su materialización. El conjunto de estas etapas es antecedido por un capítulo de contexto donde se describen algunos lineamientos fundamentales de los años sesenta en Chile.

Contexto y actores en los años sesenta

El contexto social y político que se configura en Chile al transitar hacia los años sesenta invita, entre otras cosas, a fijar la mirada en el ámbito internacional. Ello no significa, desde luego, que esa visión se haga sobre la base de una lectura que entienda los procesos sociales y políticos del periodo como meros apéndices de una lucha global entre dos superpotencias. Como señala Tanya Harmer, existió una serie de procesos locales y regionales en distintas partes del mundo que adscribieron a lógicas y trayectorias que diferían del marco bipolar en que se encontraban Estados Unidos y la Unión Soviética[40]. En efecto, Harmer prefiere hablar de Guerra Fría Interamericana para referir las relaciones y conflictos existentes en esta parte del mundo, enfatizando en los roles que tuvieron Cuba y Estados Unidos con el resto del continente[41]. Como se sabe, la revolución cubana de 1959 tuvo un impacto decisivo en gran parte de América Latina al mostrar como un camino viable y modélico la lucha armada para hacer la revolución socialista, cuestión que impregnó a partir de entonces las luchas de numerosos actores de la región. Pero dicho impacto no debe entenderse de modo esquemático ni unidireccional. Si bien dicho acontecimiento contribuyó a la creación de numerosos grupos guerrilleros que actuarían siguiendo las pautas del modelo cubano, no es menos cierto que en otros casos lo sucedido en la isla permitió incorporar nuevas variables y elementos de reflexión a discusiones que se venían suscitando desde tiempo atrás respecto a la forma en cómo avanzar al socialismo. Cuba mostraría, en este sentido, una vía más dentro de un abanico amplio de estrategias desplegadas por diversos movimientos y actores que tenían por objetivo hacer la revolución o, al menos, perfilar una parte de sus contornos.

[40] Tanya Harmer, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana*, p. 18.
[41] *Op. cit.*, p. 23.

Según Eugenia Palieraki, la influencia cubana debe entenderse a partir de la estructuración de una dinámica castrista, es decir, respecto a un proceso político que impactaría en un conjunto amplio de actores y no solo a la izquierda latinoamericana. Esta autora indica también que los efectos de dicha revolución no fueron «ni simultáneos ni idénticos» en todo el continente[42]. Con todo, la recepción que se hizo de los sucesos ocurridos en esa isla del Caribe no dejaría a ningún actor indiferente. Ciertamente que el caso de Estados Unidos fue uno de los más importantes, pues de inmediato activaría sus dispositivos y recursos tanto para erosionar el camino de la propia revolución cubana como también para impedir su impacto dentro de su zona de hegemonía. Así, las operaciones directas en contra de la isla, planificadas siempre en el corazón de Washington, corrieron en paralelo a las estrategias de contención del avance del proyecto revolucionario comunista. En este último plano se ubicaría la Alianza para el Progreso que constituyó una política de carácter hemisférica tendiente a otorgar créditos y cooperación técnica a diversos países de la región con el propósito de que estos implementaran reformas de corte estructural. Esta estrategia ponía el acento en aquellos segmentos que de no ver mejorada su situación constituirían, según esta lógica, un público cada vez más receptivo a los postulados de la lucha armada y del socialismo que se pregonaban a nivel mundial. De no ponerle freno a esta influencia se podría desencadenar, bajo la óptica norteamericana, un proceso de revolución continental muy peligrosa y a la larga inmanejable para los Estados Unidos. De este modo se apoyó a gobiernos de signo progresista que, como el del democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), asentaban su programa político sobre el eje del reformismo democrático.

Dicha estrategia incluyó no solo el apoyo abierto hacia determinadas administraciones, sino que también el financiamiento de campañas comunicacionales críticas del comunismo y de la izquierda en general, como ocurrió de forma paradigmática en la campaña presidencial chilena de 1964. El historiador Marcelo Casals indagó, de hecho, en las operaciones que se llevaron a cabo para desprestigiar la candidatura de Salvador Allende en dichos comicios. Estas acciones

[42] Eugenia Palieraki, "¿Bajo el signo de Fidel? La revolución cubana y la nueva izquierda revolucionaria chilena en los años 1960", p. 158.

incluyeron desde propaganda gráfica en los diarios hasta mensajes radiofónicos en donde se escuchaba la voz de una hermana de Fidel Castro quien advertía de los peligros que encerraba el comunismo para la libertad y la democracia[43]. De este modo, la revolución cubana decantó el accionar de un conjunto cada vez más amplio de actores, ya fuese de quienes se situaban en una óptica cercana al ideario socialista, como también de quienes se encontraban en posiciones reactivas hacia ese proyecto y optaron por materializar diversas acciones para confrontarlo[44].

Cabe indicar, por cierto, que el contexto de movilización social y política que explota en los sesenta se explica también por una masificación importante de lo que se puede denominar como *ethos* revolucionario, el cual no transitaba únicamente desde de la formalidad de los partidos u organizaciones, sino que también a través de otras esferas y mecanismos. La circulación de la literatura política más destacada de aquel entonces constituiría un buen ejemplo de lo anterior. Los principales textos de algunos teóricos y figuras más prominentes del marxismo tanto a nivel mundial como latinoamericano comenzaron a ser impresos y distribuidos en segmentos cada vez más amplios de la población, sobre todo dentro del público estudiantil. A través de ediciones de bajo costo, los lectores accedían a un abanico amplio de autores y temas; desde las enseñanzas del *Libro rojo* de Mao Tse-Tung hasta los diarios del Che Guevara en el Congo y en Bolivia. Y no solo se trataba de debates teóricos, pues las problemáticas más apremiantes del continente, y del denominado Tercer Mundo en general, como el analfabetismo, la desnutrición o las guerras de liberación nacional ocuparon también un lugar importante dentro de la literatura contestataria. Libros como *Pedagogía del oprimido* de Paulo Freire, *Los condenados de la tierra* de Franz Fanon o

[43] Marcelo Casals, *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la «campaña del terror» de 1964*.

[44] Un actor político del periodo señalaría que luego del triunfo parcial de Allende en 1970 su memoria comenzó a recordar numerosas situaciones que se habían producido en Cuba tras el triunfo de la revolución en 1959: «...los fusilamientos urbanos en el paredón... los juicios populares, sin defensa. El saqueo y los linchamientos callejeros». En ese contexto, y tras recibir la visita del abogado Ricardo Claro Valdés, este testigo advirtió que ambos consideraban «imposible dejar florecer en el país un sistema socialista». Federico Willoughby, *La guerra: páginas íntimas del poder, 1957-2014*, pp. 90-92.

el pragmático *Mini manual del guerrillero urbano* de Carlos Marighela circulaban con cierta profusión entre las huestes de izquierda.

En sintonía con lo anterior, la publicación de revistas y periódicos también podría situarse dentro de este esquema de consumos culturales o político-ideológicos. Aunque la prensa proletaria y crítica del capitalismo no era un asunto nuevo en América Latina, en el tránsito hacia los sesenta se pudo observar un nuevo tipo de publicación vinculada sobre todo a los grupos guerrilleros, y a la Nueva Izquierda en general, que abrazaban el camino revolucionario para alcanzar el socialismo. Revistas como *Punto Final* en el caso del MIR chileno o *El Combatiente* del Partido Revolucionario de los Trabajadores argentino son algunos ejemplos de este tipo de productos, sin olvidar, por supuesto, las ya consolidadas ediciones de *Granma* y *Juventud Rebelde* en Cuba tras el triunfo de la revolución. También desde esta nación emergería, en 1966, la conocida revista *Tricontinental* como órgano de difusión de la conferencia efectuada en La Habana y que buscaba dar a conocer a través de una única publicación las distintas iniciativas revolucionarias de los pueblos del Asia, África y América Latina.

La música y el cine, por su parte, traslucían un marcado acento político, muy en sintonía con una sociedad cada vez más movilizada y consciente de su papel dentro de los cambios que se demandaban. La denominada Nueva Canción Chilena agrupó, por ejemplo, a un conjunto heterogéneo de voces que supo transversalizar un mensaje social muy potente bajo la óptica de la reivindicación y las luchas del pueblo. Intérpretes como el grupo Quilapayún —con su *Cantata Santa María de Iquique* que recordaba la matanza de obreros ocurrida en el norte del país en 1907— o Víctor Jara representaron notablemente este realce. Violeta Parra, fallecida en 1967, también representó el alma de un Chile cotidiano en donde se superponían con igual intensidad la tradición y una aparente modernidad. El cine, en tanto, mostraba productos de indudable valor. La mirada se había centrado de preferencia en aquellos aspectos que todavía daban cuenta de una sociedad desigual y en general empobrecida. *El Chacal de Nahueltoro*, una de las películas más icónicas de fines los sesenta, retrataba la cruda realidad de un campesino quien, embriagado por el alcohol, había dado muerte a toda una familia y que, luego del largo proceso judicial —periodo en que el victimario

comenzó a reformarse y reencauzar su vida—, fue condenado a muerte por parte de la justicia[45]. Ya sea de modo explícito, como en el caso de la música, o desde una perspectiva más sutil como la del cine, estas disciplinas artísticas daban cuenta de los conflictos y tensiones estructurales de la sociedad chilena y cómo se habían relacionado a lo largo del tiempo la sociedad civil y el Estado.

El conjunto de estos productos culturales debe enmarcarse, en fin, dentro de un contexto regional y mundial más amplio que apuntaba hacia un diagnóstico similar. Dicho análisis denunciaba la existencia de numerosas desigualdades sociales, políticas y económicas cuyas causas se explicaban, según denunciaba la izquierda, por la vigencia de estructuras capitalistas e imperialistas que los países más ricos contribuían a sostener en buena parte del mundo. A grandes rasgos, este era el diagnóstico más o menos compartido por la mayoría de los movimientos sociales de protesta de la década del sesenta, independiente de si sus demandas apuntaban a cuestiones más sectoriales como la paz mundial o los derechos civiles de poblaciones excluidas. En la práctica, tal diagnóstico daría paso a un apoyo importante, cuando no masivo, hacia aquellas estrategias políticas que supusieran romper con las estructuras antes descritas. El socialismo y la idea de revolución que le era consustancial fue, en este marco, uno de los caminos que más apoyo concitó dentro de la sociedad, sobre todo en aquellos países del mencionado Tercer Mundo. Dentro de esta ideología había de forma implícita una cuestión ligada a la idea de liberación, la cual, al desplegarse en un contexto crítico con los sistemas y estructuras formales, le otorgaba una poderosísima capacidad de convocatoria y persuasión dentro de la sociedad.

Al calor de estas dinámicas, hubo sin duda una mayor teorización y análisis sobre el tema de la violencia. Desde la vertiente crítica del capitalismo, y en un marco donde los análisis estructurales de la sociedad todavía tenían un peso importante, se denunciaba la violencia institucional como un recurso histórico de las clases dominantes que a través del brazo ejecutor del Estado contribuía en mantener un orden social y económico desigual. En este sentido, la utilización de

[45] La película se encuentra disponible de forma gratuita en el sitio web del Centro Cultural La Moneda: https://www.cclm.cl/cineteca-online/el-chacal-de-nahueltoro/ [fecha de consulta: 28 de junio 2023]

la violencia como respuesta de las clases subalternas en contra del Estado encontraba un marco de legitimidad al ser percibida como un recurso que permitía luchar en contra de las injusticias y en favor del cambio social. El concepto de violencia revolucionaria se reactualizaba entonces en un contexto global más amplio, siendo asimilado y adaptado a la realidad de numerosos países. En la mayor parte de los casos, dicho concepto se entendería como parte de una estrategia de mediano y largo plazo cuyo punto culminante sería el socialismo.

Representativo de lo anterior fue la forma en cómo una parte de la izquierda chilena asumió este tema. Ya desde la primera mitad de los cincuenta el Partido Socialista Popular (PSP) —una de las dos vertientes en que se había divido el socialismo chileno en 1948— venía perfilando un conjunto de ideas más o menos cohesionadas en torno a la importancia de una estrategia que sobrepasara los cauces institucionales y apostara por formas más audaces y frontales para llegar al socialismo. Buena parte de esto se reflejaría en la estrategia del Frente de Trabajadores enunciada hacia 1955 que, junto con reafirmar el carácter antiimperialista y clasista del partido, sostuvo el agotamiento definitivo de cualquier política de alianzas con actores ajenos al proletariado. La constitución del FRAP en 1956, que unió al PSP junto a los comunistas, y el XVII Congreso General Ordinario de 1957 donde se selló la unión de todo el socialismo chileno fueron, a juicio de este actor, expresiones concretas del Frente de Trabajadores[46].

Con todo, la derrota del FRAP en las elecciones presidenciales de 1958 y 1964, así como el triunfo de la revolución cubana que mostraba en la vía armada un camino estratégico más atractivo y exitoso para llegar al socialismo, intensificó las críticas de este partido hacia los mecanismos y formas institucionales. En su congreso nacional de 1965, el PS planteó que la derrota del año anterior se debió a que la lucha social no fue conducida hacia un escenario de enfrentamiento de clases. Dos años más tarde, en el congreso celebrado en Chillán, esta colectividad no dejó dudas respecto al carácter que debía asumir la lucha política, asumiéndose como un partido marxista leninista y a

[46] Una buena compilación sobre los Congresos Generales del Partido Socialista desde 1933 hasta 1971, que incluye extractos de documentos oficiales y numerosas referencias al contexto social y político, se encuentra en Julio César Jobet, *El Partido Socialista de Chile*, dos tomos.

favor de la lucha armada. De hecho, uno de los puntos más notables del voto político aprobado por esta colectividad —y ampliamente citado *a posteriori*— decía que la violencia revolucionaria era inevitable y legítima como resultado del carácter represivo y armado del Estado chileno. Al mismo tiempo sostenía que dicha violencia constituía la única vía para alcanzar el poder político[47].

Sin embargo, este posicionamiento del PS reflejó una dicotomía entre discurso y acción, pues, en la práctica, dicho actor no materializó la violencia revolucionaria que había enunciado, al menos no de forma sistemática y masiva como se habría pensado. De todas formas, su sola formulación tensionó tanto la escena nacional como las relaciones de este actor con el PC, pues esta colectividad había adoptado un programa bastante gradualista y pragmático respecto a la vía para alcanzar el gobierno. En efecto, los comunistas apuntaban a la creación de una gran coalición que agrupara a todos los sectores antiimperialistas, lo que incluiría a segmentos del centro político, como falangistas y radicales. Resultaba claro que, para este actor, la única vía para llegar el poder era a través de las urnas.

Visto desde un ángulo más amplio, las tensiones escenificadas en la izquierda tradicional chilena formaban parte de lo que Alfredo Riquelme ha identificado como un proceso de coexistencia conflictiva entre imaginarios y prácticas políticas. Es decir, que junto a la presencia de un discurso revolucionario que menospreciaba el reformismo se podía advertir que esa misma izquierda participaba de una amplia política de reformas a través de la cual, pensaban, se alcanzarían algunas de sus metas estratégicas. Paradojalmente, continúa Riquelme, el contraste entre estos dos elementos —revolución y reforma— se agudizaría bajo un contexto donde se estaban materializando algunos de los cambios más relevantes que la institucionalidad logró estructurar en Chile, como fueron las modificaciones al sistema electoral o la reforma agraria al mediar los años sesenta[48].

¿Cómo explicar esta situación? Podría indicarse, como punto de partida, que esos cambios no fueron considerados del todo revolucionarios por parte de la izquierda, sino más bien se les entendió

[47] Jobet, *op. cit.*, tomo 2, p. 130.

[48] Alfredo Riquelme, "Política de reformas e imaginación revolucionaria en el Chile constitucional (1933-1973)", atención especial a pp. 154 y 160.

como reformas parciales dentro del sistema. Es decir, no alterarían la orientación capitalista ni liberal del Estado en un sentido socialista, razón por la cual se las consideró como reformas limitadas en cuanto a su capacidad de transformación estructural. Resultaba indudable, en este contexto, que la circulación de discursos que bebían del ideal revolucionario, con vistas a la construcción del socialismo, tuvieron un rol importante en la formulación de este tipo de críticas. Y ello aconteció, entre otras razones, porque la idea de revolución no quedó situada solo en un plano teórico, sino que podía mostrar, a lo largo de los años sesenta, ejemplos concretos de una práctica que abrazaba con éxito el camino revolucionario de las armas, como fue el caso de Cuba. Gracias a este tipo de acontecimientos la vía armada constituiría una experiencia histórica real, con una fisonomía propia y un conjunto de elementos discursivos y simbólicos que resultaban atractivos para un numeroso público. Así, en el horizonte revolucionario de muchos actores comenzó a tener cada vez más importancia y trascendencia este camino estratégico, lo cual significaba desechar las vías institucionales o reformistas para construir la nueva sociedad. Como era de esperar, este *ethos* revolucionario no estuvo en ningún caso asentado solo en la izquierda tradicional, o en una parte de ella, pues fue asimilado por otro tipo de movimientos que lo incorporaron a su cultura y quehacer políticos.

La aparición del MIR en 1965 fue un ejemplo relevante de lo anterior. Se trataba, en efecto, de una colectividad que al cabo de unos años enarboló las banderas de la lucha armada y que, a diferencia del PS, se constituyó como un aparato político militar que hacia fines de los sesenta materializaría diversas acciones al estilo de la guerrilla urbana. Para Igor Goicovic, este movimiento se visualizaba como una vanguardia marxista leninista de la clase obrera que tenía por objetivo el derrocamiento del sistema capitalista en la perspectiva de construir el socialismo. A partir de 1967, indica este autor, y bajo el entendido de que el contexto que se vivía era uno en donde el capitalismo agonizaba, el MIR desarrollará un particular modelo organizacional basado tanto en los grupos político militares como en una serie de frentes intermedios —de trabajadores, estudiantes, entre otros colectivos— que conducirán las demandas populares[49].

[49] Igor Goicovic, "Teoría de la violencia y estrategia de poder en el Movimiento

A partir de estos elementos, Goicovic visualiza al MIR como un movimiento en donde confluyen una serie de paradigmas y modelos revolucionarios —entre ellos el castroguevarismo derivado de la revolución cubana— que servirán de soporte para la creación de diversas estructuras internas orientadas hacia la lucha política.

Esta configuración, en un contexto proclive a las trasformaciones estructurales y a los discursos que giraban en torno a la idea de revolución, generaría una indudable atracción en sectores intelectuales, estudiantiles y populares del país, y aún dentro de las filas del propio PS. Como es de suponer, la aparición del MIR fue criticada con dureza por el PC, toda vez que ella significaba erosionar la estrategia de vía electoral y unidad social propugnada por este actor, al tiempo que ponía en cuestión los intentos de este partido por conducir al conjunto de la izquierda chilena dentro de las pautas que se habían formulado.

Cabría señalar, además, que los discursos estratégicos permeados por el *ethos* revolucionario terminaban por lo general conectando la realidad de cada país a una lucha de alcance continental y mundial en favor del socialismo. Es decir, aun cuando los diagnósticos reflejaran una serie de conflictos y problemáticas propias de cada nación, la lucha llevada adelante encerraba un inevitable carácter de globalidad y esfuerzo mancomunado por parte de distintos pueblos. Ello, en definitiva, significaba pertenecer a una cultura política más o menos común en donde se compartían códigos, consignas y recursos de alto contenido simbólico. La Conferencia Tricontinental realizada en La Habana en 1966 fue quizás uno de los eventos más representativos, aunque no el único, de este carácter de solidaridad transcontinental en torno a las luchas de los pueblos del Tercer Mundo[50].

---

de Izquierda Revolucionaria, 1967-1986". Una perspectiva que subraya en los antecedentes históricos de largo plazo de esta organización —que se extenderían hasta la década de 1920— y en la importancia de la trayectoria social y política de algunos de sus primeros dirigentes se encuentra en Eugenia Palieraki, *¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta.*

50 El historiador uruguayo Aldo Marchesi rescata las conexiones entre la izquierda radical latinoamericana del Cono Sur durante la década del sesenta y ochenta bajo una mirada que enfatiza precisamente en los intercambios materiales y culturales, la circulación de ideas, las redes de solidaridad y las iniciativas orientadas a crear estructuras trasnacionales como fue el caso de la Junta de Coordinación Revolucionaria. Véase, Aldo Marchesi, *Guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a la caída del Muro.*

Desde sus lineamientos generales, la década del sesenta representó un giro epocal a lo largo de todo el continente, alterando de modo significativo las relaciones sociales, políticas y culturales en casi todos sus rincones. El protagonismo de nuevos actores, la intensificación de los repertorios de acción social —ya fuesen en clave de reforma o revolución— y una circulación cada vez más rápida, y a través de distintas vías, de las ideas y conceptos que le daban soporte ideológico a ese quehacer, emergerían como algunos de los rasgos más característicos de este periodo.

Algunos autores sostienen que los años sesenta en Chile fueron representativos de un marco general de conflictos que estaba asociado a la lucha entre diversos proyectos de cambio estructural o de planificaciones globales como las definió Mario Góngora[51]. Dichos proyectos hacían referencia a modelos de cambio estructural de la sociedad, alimentados por las ideologías predominantes del momento y que, además, encerraban un carácter excluyente entre sí.

Para el historiador Luis Corvalán Marquéz fue desde mediados de los cincuenta cuando se comenzó a librar una lucha entre tres proyectos distintos, representados cada uno por la izquierda, el centro y la derecha[52]. El esquema de la izquierda, sostiene este autor, apuntaba a concretar transformaciones estructurales como la nacionalización de las riquezas minerales, la intensificación de la reforma agraria y un conjunto amplio de cambios sociales que llevarían finalmente a transitar hacia un modelo de revolución socialista. El proyecto del centro democratacristiano, ejecutado durante la segunda mitad de los sesenta, apuntaba hacia cambios de similar tenor, siendo la reforma agraria uno de sus aspectos más destacados. El sello distintivo de este proyecto, respecto a los planes de la izquierda, radicaba en que las transformaciones se harían en democracia y libertad, desechando cualquier reivindicación que se ubicara dentro de la órbita del marxismo. El proyecto de la derecha y el gran empresariado, en tanto, desembocaría tras el golpe militar hacia uno de signo neoliberal, que aunque no estaba del todo presente dentro del debate público de entonces, ni tampoco había sido asimilado por el conjunto de la derecha política, sí contaba con cierta presencia dentro de círculos

[51] Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile*.
[52] Corvalán Marquéz, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile.*, pp. 13 y ss.

académicos y empresariales[53]. La resolución de la lucha entre estos tres proyectos, indica Corvalán Marquéz, se daría tras el golpe militar de 1973 con la derrota del modelo de socialismo impulsado por la UP y la puesta en marcha pocos años después del esquema neoliberal.

Los sesenta fueron testigos, entonces, de un contexto cambiante, de mayor politización y polarización, donde la mayoría de los conflictos sociales se vincularán a debates más amplios articulados en torno a los proyectos de sociedad que estaban en juego. Desde este ángulo, los hechos de violencia fueron advertidos como eventos que dejaron traslucir un conflicto político de fondo, cuestión que además permitirá indagar en el verdadero carácter e intencionalidad de sus ejecutores. Si para la izquierda los hechos de violencia protagonizados por el Estado serían el reflejo del carácter represivo de las instituciones, para la derecha la violencia enunciada por la izquierda constituía un antecedente irrefutable de su propósito por instaurar una dictadura comunista.

Si bien, la mayor parte de los estudios sobre esta década se han centrado hacia aquellos movimientos partidarios del cambio y la revolución, no deja de ser significativo el posicionamiento que asumieron aquellos actores que defendían una perspectiva refractaria hacia ese impulso transformador. En el caso de Chile, conviene señalar algunas ideas generales sobre este fenómeno, en especial respecto a quienes se abanderizaron por este tipo de estrategias. En tal sentido, cabe apuntar la existencia de un grupo bastante heterogéneo de corrientes, asociaciones y grupos de interés que veían con resquemor los vientos del cambio que se anunciaban desde diversos rincones. Dicho grupo incluía a la elite más tradicional, vinculada a la propiedad de la tierra, y a aquellos sectores más dinámicos del empresariado nacional. Hasta mediados de los años sesenta, los canales de expresión política más importantes de estos segmentos fueron el Partido Conservador y el Partido Liberal, además de otros grupos menores como el Agrario-Laborismo[54]. Asimismo, una corriente nacionalista, de antigua data en Chile y heterogénea en cuanto a su composición, también

[53] Corvalán Marquéz, *Del anticapitalismo...*, *op. cit.*, p. 18.

[54] El Partido Agrario Laborista fue fundado en 1945 agrupando a un conjunto heterogéneo de corrientes políticas —nacionalistas, socialistas, corporativistas—. Participó en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), para finalmente dividirse a fines de los cincuenta en distintas colectividades.

orbitaba dentro de una posición reactiva a los cambios estructurales que anunciaban los sesenta. Podríamos sumar dentro de este abanico a los gremios y grupos empresariales más connotados de entonces, como la Sociedad de Fomento Fabril o el grupo Edwards propietario, entre otras empresas, del periódico *El Mercurio*.

A mediados de los años sesenta, conservadores y liberales sufrirían una profunda crisis de representatividad que los dejaría reducidos, en términos electorales, a un magro 12 % de la votación —sumando a ambas colectividades—. Dicha crisis fue el impulso necesario para una refundación de la derecha chilena, pero ahora desde una óptica nacionalista y crítica al cambio epocal que se venía anunciando en el país y en el mundo. Así surgió en 1966 el Partido Nacional que rápidamente desplegó un cuestionamiento tanto hacia el gobierno democratacristiano como hacia la izquierda chilena y su proyecto de transición al socialismo. Para la historiadora Sofía Correa, la década del sesenta incentivó un comportamiento más defensivo y confrontacional en la derecha como una forma de recuperar el poder e influencia que había perdido. De hecho, hasta entonces este bloque se había caracterizado por su capacidad de alcanzar acuerdos, e incluso transar, si ello significaba mantener sus intereses. Pero como en esta etapa emergieron un conjunto de factores que precipitaron una pérdida efectiva de poder en este actor, sus posturas se centraron, señala Correa, en una retórica de fuerte contenido anticomunista dejando de lado, por momentos, su apoyo a un proyecto de modernización capitalista[55]. En el mediano plazo, esta reconfiguración terminó por posicionar, de nuevo, a la derecha como un actor relevante dentro del espacio público, alcanzando una votación cercana al 20 % en las elecciones parlamentarias de 1969.

Otras expresiones que circularon por esta vertiente crítica y reacia al cambio estructural tuvieron espacios de acción más acotados pero que en los años siguientes, sobre todo durante la UP, lograron desplegar con éxito sus estrategias. Este fue el caso del gremialismo, una corriente surgida al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y que proponía un orden social y político de corte conservador basado en la preponderancia de los grupos intermedios. En la práctica, esto suponía redefinir el rol de los partidos políticos

[55] Sofía Correa, *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX*.

en la escena nacional. Su líder natural, Jaime Guzmán Errázuriz —venerado como una figura de tintes casi místicos por sus seguidores— ocuparía un lugar destacado dentro de la oposición más dura a la UP, siendo tras el golpe de Estado de 1973 uno de los principales ideólogos de la dictadura militar. La historiadora Verónica Valdivia ha analizado el surgimiento del PN y el gremialismo, así como también de otras corrientes y movimientos de este sector, dentro de lo que denominó como el «parto» de la nueva derecha chilena. La autora destaca, en este sentido, que la reconfiguración de este bloque dejó en un lugar marginal sus estrategias de negociación a efecto de recuperar, desde una postura más confrontacional, el poder que había perdido. En esta línea, la mirada de Valdivia rompe con aquellas visiones que veían a esta derecha como un actor refractario y carente de un proyecto propio, pues su impulso estratégico, aunque basado en nociones conservadoras, buscaba mantener su hegemonía social[56].

En el marco antes descrito cabría preguntarse hasta qué punto el discurso reactivo y contrarrevolucionario de estos actores interpeló a un sector de la sociedad y quiénes, en último caso, se dejaron seducir por aquél. Habría que reconocer, desde luego, que las estrategias discursivas de estos movimientos lograron activar, en su denuncia de lo que denominaron como el avance del comunismo y la revolución, algunas fibras que resultaban particularmente sensibles. Los eventuales peligros que acarrearía un proyecto socialista en Chile, según esta óptica, instaurando un modelo de Estado totalitario que restringiría las libertades individuales, fue una idea que logró penetrar en ciertos segmentos de la población. Tales sectores fueron inducidos a pensar que la inestabilidad y la zozobra propias del comunismo, según se explicitara, alcanzarían en el corto plazo sus espacios vitales más próximos.

En esa perspectiva, los apoyos sociales y electorales hacia la derecha nacionalista —ahora principal portaestandarte de los postulados antes descritos— no se remitirían solo a aquellos grupos que de forma tradicional habían votado por este bloque, sino que se ampliarían hacia núcleos de clases medias urbanas y rurales e inclusive a ciertas zonas populares de las grandes ciudades. Cabe puntualizar, al mirar

[56] Verónica Valdivia, *Nacionales y gremialistas. El "parto" de la nueva derecha política chilena. 1964-1973*.

este proceso desde una dimensión más general, que los grandes cambios encierran en sí mismo un conjunto de temores e incertidumbres que terminan por ser asumidos, a veces, por amplios sectores de la población. Dicho proceso puede mantenerse bajo un estado de latencia, o bien, expresarse a través de acciones políticas concretas —tanto individuales como colectivas— dentro del espacio público. Uno de los puntos capitales en este sentido radicaría en la capacidad de aquellos partidos o movimientos por interpelar discursiva y políticamente a ciertos núcleos de la población a efecto de situarlos dentro de un campo opositor. La derecha chilena y buena parte de los grupos opositores al gobierno de Allende materializaron, en efecto, con bastante éxito su estrategia de movilización de estos segmentos al integrarlos dentro de un camino de confrontación política y social con la izquierda.

Cabría indicar entonces que, en la década del sesenta, y en tránsito hacia los años siguientes, se observarían actores que abrazaron tanto el *ethos* revolucionario como su vertiente opuesta, es decir el de aquellas posiciones reactivas al cambio y al espíritu social predominante. La caracterización de estas dinámicas de movilización y politización constituye un fenómeno relevante pues permite entender con mayor precisión los debates, discursos y acciones que se fueron configurando entre los actores.

Al referir algunos hechos de violencia ocurridos bajo el gobierno democratacristiano se pueden advertir parte de los elementos indicados, sobre todo aquellos que dan cuenta del particular contexto sociopolítico que se vivía. Como se sabe, los planes de reforma social y económica de este gobierno debieron lidiar con un complejo cuadro de movilización social, además de verse ensombrecidos por algunas prácticas represivas perpetradas por fuerzas policiales. De hecho, en marzo de 1966 se puso fin a una huelga general de mineros del campamento El Salvador, ubicado en el norte del país, que terminó con ocho personas muertas y más de treinta heridos. Dicho conflicto se insertaba dentro de un marco más amplio de movilizaciones que incluyó a otros campamentos y enclaves mineros del país y que se venían desarrollando desde comienzos de año. En la primera quincena de marzo, los trabajadores de El Salvador continuaban con una huelga que, además de ser considerada ilegal por el Gobierno de Frei Montalva, había detenido casi en su totalidad las faenas extractivas. El día 11 de ese mes, fuerzas policiales de Carabineros e Investigaciones además de miembros del Ejército recibieron la

orden de despejar el citado campamento y desalojar a los trabajadores que mantenían ocupada la sede del sindicato. La acción de las fuerzas del orden se materializó pasado el mediodía, caracterizándose, como apunta el historiador René Cerda, por el uso desproporcionado de la fuerza. Según su investigación, no hubo ningún aviso previo por parte de las autoridades uniformadas respecto al desalojo que llevarían a cabo, utilizando de forma masiva gases lacrimógenos[57]. Esto provocó una caótica evacuación de los huelguistas en distintas direcciones, momento en que se efectuaron los disparos por parte de la policía y el Ejército dejando el saldo de víctimas fatales ya indicado. De parte de los uniformados, Cerda consigna que solo hubo un herido, el capitán de Ejército Alejandro Alvarado Gamboa a causa de una herida a bala en su pierna, hecho que se habría producido porque la propia arma del oficial se disparó cuando este cayó en una zona irregular del campamento[58].

Las reacciones del mundo de la izquierda y del movimiento obrero apuntaron de inmediato en contra del Gobierno democratacristiano. Al día siguiente de la matanza se hicieron presentes los parlamentarios Salvador Allende, Tomás Chadwick, Hugo Miranda y María Maluenda además de la dirigente de la CUT, Mireya Baltra, quienes junto con acompañar a los familiares en los funerales de los trabajadores muertos denunciaron la acción represiva del gobierno y las fuerzas policiales. La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) emitió una declaración en contra del Ejecutivo, al que calificaría de testarudo, vanidoso y provocador, además de responsabilizar al presidente Frei por los hechos ocurridos. Diagnósticos similares se observaron en las declaraciones del FRAP y del PR[59].

Los espacios rurales, en tanto, también fueron un campo fecundo para la materialización de algunos conflictos, situación derivada fundamentalmente por la aplicación de la reforma agraria. En abril de 1968, por ejemplo, se produjeron incidentes en el fundo Santa Marta de Longotoma, en la provincia de Aconcagua, producto del rechazo de un grupo de campesinos a la toma de posesión que haría del terreno la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Ya en los primeros días de

[57] René Cerda, "La masacre de El Salvador: La Revolución en Libertad se mancha con sangre obrera".

[58] Cerda, R., *ibid.*

[59] *Ibid.*

marzo, los campesinos habían manifestado su descontento colgando un muñeco que representaba al encargado del organismo agrícola en la zona[60]. Los hechos más violentos se registraron a inicios del mes de abril cuando se produjo un choque armado entre carabineros y campesinos. El incidente, según comenta la prensa, se originó a primera hora de la mañana en momentos en que la policía uniformada procedía a desalojar uno de los potreros ubicados al interior del fundo. En esos momentos, cerca de cincuenta campesinos premunidos con armas de fuego, dinamita y objetos contundentes atacaron a los carabineros, operación a la cual se sumarían también individuos que se trasladaban en una camioneta particular. El saldo del ataque fue de cuatro uniformados heridos y cerca de veintiséis campesinos detenidos[61].

Al año siguiente, el accionar de la fuerza policial volvería a poner en cuestión no solo el rol de los aparatos encargados de la mantención del orden público, sino que también el carácter popular y democrático del Gobierno de Frei. Los hechos se produjeron en el sur del país, en un sector conocido como Pampa Irigoin ubicado en la ciudad de Puerto Montt. El trasfondo del conflicto remitía a un tema de vieja data dentro del mundo social chileno vinculado a las demandas de los segmentos obreros y populares por alcanzar una solución habitacional. A comienzos de marzo de 1969, un grupo de casi noventa familias puertomontinas se tomaron los terrenos de la familia Irigoin para exigir que el Estado atendiera sus necesidades. En un comienzo, las autoridades negociaron una solución al conflicto, pero al amanecer del día 9 de marzo un nutrido grupo de Carabineros comenzó el desalojo de los terrenos. Se produjo, en este contexto, un cruento enfrentamiento entre pobladores y la policía, la cual utilizó sus armas de fuego con el objetivo replegar a los manifestantes y cumplir con las órdenes emanadas desde la Intendencia regional y del Ministerio del Interior. Según el investigador Wladimir Soto Cárcamo, la pelea cuerpo a cuerpo que se originó producto de la acción de la fuerza pública derivó en un tiroteo que se extendió por casi un cuarto de hora y que dejó un saldo de once pobladores muertos y diversos heridos de consideración[62].

[60] *La Segunda*, Santiago, 1 de marzo de 1968, p. 2.
[61] *La Segunda*, Santiago, 11 de abril de 1968, p. 3.
[62] Wladimir Soto, *Pampa Irigoin: Historia de una matanza en Puerto Montt*, Puerto Montt, pp. 39-46.

Las consecuencias de este hecho fueron bastante significativas. Al igual que en el caso de los sucesos del campamento minero de El Salvador, las críticas más duras provinieron desde el conjunto de la izquierda y del mundo obrero, quienes acusaron a las autoridades por su responsabilidad en la muerte de los pobladores. Lejos de quedar olvidados, los hechos de Pampa Irigoin continuaron teniendo cierta resonancia en la esfera pública. Ese mismo año 1969, el compositor Víctor Jara publicó la canción *Preguntas por Puerto Montt* en donde interpelaba al ministro del Interior del gobierno, Edmundo Pérez Zujovic, por los luctuosos acontecimientos. Dos años después, cuando ya gobernaba la UP, Pérez Zujovic sería asesinado por un comando de la VOP. Aunque ha existido toda clase de especulaciones respecto al crimen del exministro, este grupo justificaría la acción atendiendo a los hechos ocurridos en Puerto Montt, en virtud de la responsabilidad política y administrativa de Pérez Zujovic como cabeza de la secretaria de Estado encargada de velar por la seguridad interior del país.

Al mirar este periodo y sus lineamientos más relevantes se puede sostener que ellos constituyeron una buena síntesis de numerosos procesos sociales y políticos que acabarán por expresarse en toda su intensidad bajo el gobierno de la UP. Desde luego, los años sesenta mostrarían la materialización de un ciclo ascendente de politización en Chile cuyos canales de expresión más significativos no fueron solo las organizaciones obreras, sino un grupo cada vez más amplio de partidos y movimientos de distinta orientación y estructura. Desde un punto de vista social, cabría señalar la existencia de diversos factores que desde la primera mitad del siglo xx habían significado un incremento sostenido de la población chilena en el marco de una constante migración del campo a la ciudad y una extensión de las áreas urbanas en las principales ciudades del país. Será en estos espacios donde convergirá una multiplicidad cada vez mayor de actores y demandas de distinto tenor, alcance y profundidad.

Conviene precisar, en todo caso, que el espacio rural no dejará de tener cierto protagonismo en cuanto a las dinámicas que allí se desarrollen. Fue precisamente en los sesenta cuando el mundo campesino se vio conmovido a raíz de la implementación de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno democratacristiano. Dicha medida alteraría un conjunto amplio de relaciones sociales, económicas e

inclusive culturales que descansaban sobre principios conservadores y de fuerte arraigo en la mentalidad agrario-campesina. Las disposiciones legales que permitieron intervenir y trastocar la propiedad de la tierra constituyeron un cambio de magnitudes insospechadas para buena parte de los protagonistas, cuyas consecuencias se dejaron sentir por varios años más, además de constituir una política de Estado que se intensificaría bajo el gobierno de la UP.

En síntesis, se estaba en presencia de una serie de cambios en las dinámicas de participación y protagonismo político-social que incluían a nuevos y cada vez más actores. Si en los sesenta tales elementos se habían expresado con inusitada fuerza, en los primeros años de los setenta dichas dinámicas alcanzarían un punto culminante de despliegue y copamiento del espacio público en el marco del proyecto de transformación estructural que buscaba alcanzar el socialismo.

La violencia política en los años de la Unidad Popular

El proyecto de la vía chilena al socialismo proponía una serie de transformaciones que alterarían las estructuras económicas y políticas del país introduciendo un cambio fundamental en un conjunto amplio de relaciones sociales, económicas y políticas. Entre las modificaciones más sustantivas se encontraban la nacionalización de las riquezas minerales básicas, la creación de tres áreas de la economía —estatal, mixta y privada— y la intensificación de la reforma agraria. Pero quizás el punto más característico de este ambicioso programa radicaba en la forma en cómo se ejecutaría, a saber: por medio de las pautas y mecanismos del sistema democrático existente. En otras palabras, se trataba de un proyecto que buscaría cambiar las relaciones de producción y transitar al socialismo dentro de los marcos jurídicos y legales propios de una democracia liberal. No se trataría entonces, de un modelo de socialismo ortodoxo, a imitación de aquel existente en Europa oriental o en Cuba, sino de un proyecto bastante *sui generis*, que recogía una parte significativa de la historia y la cultura política de la izquierda chilena, proyectando su acción gubernamental dentro de una senda institucional. Para el historiador Eric Hobsbawm, según comentaba en un artículo publicado por *New York Review of Books* en 1971, la experiencia de la UP carecía en lo fundamental de antecedentes históricos, situación que le otorgaba un perfil altamente interesante. En este sentido, lejos de situarse como un caso de «exotismo político» Hobsbawm consideraba que el caso chileno —donde la política pluralista y la legalidad continuarían— podía representar un modelo estratégico para Europa occidental[63].

La dimensión institucional que confluía en la experiencia de la UP tenía, en efecto, una trayectoria e importancia significativa en Chile. El propio Salvador Allende alabaría las fortalezas de la demo-

[63] Eric Hobsbawm, "Chile: año uno", pp. 405-407.

cracia chilena en su discurso ante la ONU en 1972 y, como elemento adicional, cabría recordar que los principales dirigentes oficialistas poseían una larga trayectoria política al interior de las principales instituciones del Estado. Visto desde este ángulo, la izquierda tradicional, a pesar de sus críticas al sistema o sus roces internos por las vías para hacer la revolución, tenía un camino recorrido en los entresijos de la institucionalidad política. De este modo, la vía chilena al socialismo, partiendo desde sus formulaciones conceptuales más acabadas hasta sus medidas más concretas y su propia trayectoria posterior, no podría deshacerse sin más del aparato institucional. Este constituiría, pues, el marco general sobre el cual se desplegarían el conjunto de reformas que proponía su programa de gobierno.

Lo anterior no significa, por cierto, desligar a la UP de su base de apoyo social y las dinámicas que en dicho espacio se reprodujeron a lo largo del periodo 1970-1973. Es más, la vía chilena al socialismo estaba lejos de ser un programa de gobierno abstracto que se aplicaría solo en los pasillos y oficinas —siempre grises— de las reparticiones estatales. Por el contrario, existió una dimensión festiva, como lo recordara Tomás Moulián[64], y de máxima expresividad social que acompañó cada reforma y cada movimiento que ejecutaría el gobierno allendista. Tal dinámica, como es de suponer, no estaría ajena al conflicto y a las contradicciones propias de un proceso que proponía una transformación estructural del país donde intervenían actores de distinta orientación y naturaleza. Así, esta compleja relación entre el camino institucional y la intensificación de la participación social y política en apoyo al gobierno de la izquierda plantearía problemáticas y dilemas de honda repercusión. Peter Winn, en su texto sobre los trabajadores textiles de Yarur —una empresa estatizada en tiempos de la UP—, logró sintetizar y analizar uno de dichos dilemas. A su juicio el periodo histórico que se abriría con la implementación del proyecto socialista en Chile implicó abrir una profunda discusión en torno a si este proceso sería una revolución *de* y *por* los trabajadores o *para* los trabajadores, es decir, si el proletariado sería el protagonista y principal actor de la vía chilena, y por ende su ejecutor, o si, por el contrario, este sería un proceso articulado en las altas esferas del poder y desde allí desplegado de forma vertical hacia la sociedad

[64] Tomás Moulián, *La forja de ilusiones: El sistema de partidos, 1932-1973*, pp. 270-271.

civil[65]. Ello ponía en tensión, como es de suponer, una dicotomía que fue constante durante del gobierno de Allende —revolución desde arriba versus revolución desde abajo— y sobre la cual se suscitaron intensas discusiones.

Además, y como ya se indicó, durante los años de la vía chilena al socialismo una parte significativa de las estructuras del Estado comenzaron a reconfigurarse para transitar hacia un nuevo esquema de desarrollo. Diversas instituciones cambiaron sus enfoques, perspectivas y modos de acción dentro de una sociedad que avanzaba hacia el socialismo. En virtud de ello, los organismos estatales encargados de administrar lo que Weber denominó como monopolio legítimo de la violencia sufrirán ciertas modificaciones de acuerdo a este nuevo contexto. Así, por ejemplo, la función de control y mantención del orden público —a cuya cabeza se encontraba Carabineros de Chile— fue atendida desde otra dimensión por las nuevas autoridades, insistiendo en una política más persuasiva, de parte de este cuerpo, y procurando que su intervención se produjera solo en contextos de cierta complejidad. De hecho, a las pocas semanas de asumido el gobierno se tomaría la decisión de disolver el denominado Grupo Móvil de Carabineros que era la unidad encargada de reprimir las manifestaciones sociales y velar por la mantención del orden público.

Estos elementos estaban de algún modo conectados a una cuestión más transversal y que había sido explicitada en más de una ocasión por los dirigentes de la UP, y en particular por el propio presidente Allende. Dicho elemento se refería al rol que cumplirían las FF. AA. y de Orden dentro del nuevo escenario político-social que se había abierto con la llegada de la izquierda al poder. En el programa de gobierno se había explicitado, en efecto, la intención de integrar al conjunto de los cuerpos militares a las tareas de planificación y ejecución de los cambios que proponía el proyecto socialista. De tal forma, las Fuerzas Armadas no serían un actor pasivo dentro del proceso de transformaciones, sino por el contrario, un integrante más que aportaría en la construcción de un nuevo Chile. Asimismo, dicho documento hacía una referencia explícita al tema de la violencia al señalar que ella, en sus formas más concretas, era inseparable de otras

[65] Peter Winn, *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo.*

formas de brutalidad que también afectaban al pueblo chileno como eran la pobreza y la marginalidad[66]. Tal perspectiva significaba que no solo se debía desligar a los cuerpos uniformados de las funciones represivas que habían materializado a lo largo del tiempo, sino también luchar por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que atacara dichos problemas en su raíz. Esta forma de entender el proceso sociopolítico y sus conflictos resultaba interesante porque hacía un diagnóstico que, si bien no era del todo novedoso, se daba en una coyuntura en donde un proyecto de izquierda alcanzaba el poder institucional lo que significaba un punto de inflexión mayor dentro de la historia republicana del país.

Se debe recordar que durante gran parte del siglo xx y hasta 1970 el Estado chileno no enfrentó un proyecto de modificación estructural tan significativo como el representado por la UP. A pesar de que se sucedieron administraciones de distintos signo y orientación política, ninguna de ellas desatendió, por ejemplo, la labor represiva y de control del orden público que resultaba casi inherente a su condición de autoridad. En efecto, no hubo modificaciones sustanciales en la forma en cómo se entendía la aplicación de la denominada «violencia legítima» en las administraciones que antecedieron al gobierno de Allende. Quizás hubo cambios en relación a la intensidad, dispositivos y recursos materiales empleados, pero no respecto a la labor intrínseca que tenía el Estado en materia de seguridad y orden público. Como se señaló en la introducción, desde los años treinta en adelante el Estado fue dotándose de una arquitectura legal y represiva que le permitiría a la autoridad civil hacer frente a cualquier manifestación de alteración del orden institucional. El conjunto de este cuerpo normativo que proveía los resguardos necesarios a la autoridad política fue entonces administrado, y en ocasiones ampliado, por la mayoría de los gobiernos del periodo. En esta línea se pueden citar los casos de la Ley de Seguridad Interior del Estado de 1937 —y ampliada en 1958—, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia que ilegalizó al PC en 1948 y los diversos decretos leyes con que operó, después de 1973, la dictadura de Pinochet[67].

[66] *Programa básico de Gobierno de la Unidad Popular. Candidatura presidencial de Salvador Allende.*

[67] Loveman y Lira, *op. cit.*, p. 361 y ss.

En el ciclo 1970-1973, aun cuando algunas de estas disposiciones sí fueron utilizadas —sobre todo en contra de los grupos de choque de la oposición— se observaría un uso más gradual y contenido de aquellas normas. En la práctica, lo que estaba cambiando sería la forma de entender, desde el Estado, la utilización, intensidad y despliegue de los aparatos represivos en tanto parte consustancial de la propia labor del Estado. Por tal razón, hechos como la muerte de un poblador en 1972 en la población Lo Hermida, a manos de Carabineros, generaría un áspero debate en el seno de la izquierda chilena respecto al rol y carácter del Estado en este tipo de operaciones. Tal fue la magnitud y consecuencias de este hecho, que el propio presidente Allende acudió a dicha población al día siguiente de ocurrido el operativo en un acto que representaba, implícitamente, una disculpa pública por parte de la principal autoridad del Estado hacia los pobladores. En las décadas anteriores no hubo un acto de similar connotación por parte del Ejecutivo, el cual terminaba por brindar su apoyo y justificación a las labores represivas de los cuerpos uniformados.

A la luz de estas directrices, se puede advertir que hasta 1970, la violencia política materializada por los grupos subalternos de la sociedad se desplegó y cohabitó de forma paralela con una violencia estatal muy marcada dentro del espacio público. De este modo, una de las particularidades del periodo 1970-1973 radicaría en que las dinámicas de conflicto y enfrentamiento fueron en esencia distintas a las que se habían desarrollado en el pasado, sobre todo desde un punto de vista cuantitativo. De hecho, la mayor parte de las expresiones de violencia ocurridas durante la UP fueron materializadas por actores civiles, ya sea en forma organizada o al calor de enfrentamientos y desórdenes espontáneos. Los hechos en que se advirtió un despliegue de violencia estatal con resultados significativos, por ejemplo, con la existencia de víctimas fatales, fueron bajos, no logrando homologarse a las dinámicas de violencia civil. Lo anterior se puede corroborar a través de algunos datos referenciales.

Algunas investigaciones han podido constatar, por ejemplo, más de quince militantes de partidos y agrupaciones políticas muertos durante el periodo de la UP[68]. De esa cifra, un porcentaje bajísimo

[68] Francisco Javier Morales Aguilera, "¿Una mancha de sangre en la vía chilena al socialismo? Muerte de militantes de partidos y agrupaciones políticas en tiempos de la Unidad Popular".

murió por la acción represiva de las fuerzas policiales, como fue el caso del militante del MIR Eladio Caamaño ocurrido en la ciudad de Concepción en 1972. En el resto de los casos, los militantes fallecieron en contextos de enfrentamiento con individuos o grupos políticos rivales. Hubo, también, un número elevado de víctimas civiles que, aunque no pertenecían a partidos u organizaciones políticas específicas, fallecieron en los mismos contextos de agitación y enfrentamiento existente. En términos generales, el número de muertos bordearía las cien personas a lo largo de los tres años de gobierno de la UP, a lo cual habría que agregar un número todavía más elevado de heridos de diversa consideración.

La participación de militares o fuerzas policiales en este tipo de hechos fue menor y en general acotada a ciertas coyunturas. Por ejemplo, en el marco del cumplimiento de la Ley de Control de Armas aprobada en octubre de 1972, o bajo la vigencia de los estados de excepción, los militares estuvieron involucrados en poco más de cuatro o cinco casos donde su intervención se saldó con el fallecimiento de alguna persona. Un hecho coyuntural como la sublevación de una unidad blindada del Ejército en contra del gobierno el día 29 de junio de 1973 dejó un saldo, según algunas fuentes, de 22 víctimas fatales, de las cuales seis fueron civiles. El camarógrafo sueco argentino Leonardo Henrichsen fue, en este contexto, una de las pocas víctimas respecto de las cuales se puede corroborar que su muerte se debió a la acción de los amotinados[69].

Respecto a la muerte de militares o uniformados en situaciones de enfrentamiento o polarización política, la cifra también es, en general, menor. Al asesinato del excomandante en jefe del Ejército, René Schneider —cuyo homicidio en estricto rigor no sucedió durante el gobierno de la UP— se agregan algunos casos como el del edecán Naval del presidente Allende, Arturo Araya Peeters, asesinado el 27 de julio de 1973 o el del subteniente de la Escuela Militar, Héctor Lacrampette Calderón, quien fue atacado a balazos el 29 de agosto de ese mismo año[70].

[69] Este caso es llamativo, pues, cuando Henrichsen filmaba los pormenores de la sublevación militar el día 29 de junio un suboficial le disparó de frente a una distancia de casi 20 metros. El camarógrafo grabó toda la secuencia de su propia muerte.

[70] Respecto a la muerte del Edecán Naval, Arturo Araya Peeters, véase *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 26 de julio de 1973, p. 1. Sobre la muerte del Subteniente Héctor Lacrampette Calderón, véase *El Mercurio*, Santiago, 30 de agosto de 1973, p. 1.

En base a estas primeras referencias, se puede advertir un claro predominio de la violencia civil dentro de las dinámicas de enfrentamiento y conflictividad verificadas en estos años. Inclusive en los casos de militares muertos revisados más arriba, los victimarios resultaron ser en su mayoría civiles, lo que descartaría de momento la idea de un ajuste de cuentas o rencillas internas entre miembros de alguna rama uniformada.

Conviene precisar que algunos actores políticos del periodo tienen una visión un tanto distinta respecto al número de víctimas y características de los hechos de violencia ocurridos en estos años. El senador y secretario general del PC durante esta etapa, Luis Corvalán Lépez, sostiene que entre la llegada al Gobierno de la UP y la antesala del golpe de Estado fallecieron 18 personas[71]. A algunos de ellos, Corvalán los identifica con nombre y apellido, mientras que al resto los describe de forma genérica señalando que sus nombres no estaban en las fuentes que consultó. Estas corresponden a una cronología realizada por la FLACSO y una recopilación de prensa efectuada por el Centro de Estudios Públicos. Aunque son dos materiales de indudable valor, no se trata de obras dedicadas en específico al tema de la violencia política. Con todo, el dirigente comunista reconoce que muchas de las víctimas acaecidas en estos años, considerando incluso aquellas que señala el Libro Blanco, deben enmarcarse dentro de un proceso revolucionario de aguda lucha de clases, pero en ningún caso como consecuencia de una violación de derechos humanos por parte del Estado[72].

Independiente de los enfoques que asoman en algunos autores, cabría preguntarse por los factores que explicarían la materialización de los hechos y dinámicas de violencia política durante los años de la UP. Como ya se esbozó en la introducción de este libro, se puede advertir que en el periodo 1970-1973 confluyeron conflictos de indudable complejidad, los cuales al situarse en un marco donde las relaciones sociales y políticas estarían tensionadas, terminaron por configurarse como problemáticas polarizadas de muy difícil solución. Desde el ámbito del Estado y sus relaciones con la sociedad civil, por ejemplo, asomaban varios elementos de fricción. Uno de ellos

[71] Luis Corvalán Lépez, *El Gobierno de Salvador Allende*, p. 200.
[72] *Ibid.*

tenía que ver con las demandas de la población en materia de bienestar social —vivienda, acceso a servicios, entre otros—, las cuales a lo largo de los años se revelaron como un problema que desbordó continuamente la capacidad de respuesta del Estado. No pocos conflictos se escenificaron durante la UP a propósito del accionar autónomo de diversos grupos que intentaron resolver sus problemas al margen de la acción estatal, situación que en muchos casos ya se arrastraba desde décadas anteriores. En este sentido, los años de la vía chilena al socialismo abrieron la puerta a una intensa dinámica de participación social y política, la cual, aunque estuviera mediada por los partidos o movimientos —o incluso incentivada por ellos—, conservaría cierta independencia en numerosas coyunturas.

La esfera económica, por su parte, aportaba también varios factores de tensión dentro de las relaciones sociales y políticas. Los problemas de salarios y costo de la vida en general, que mirados desde un ángulo más amplio ponían el tema de la pobreza en un lugar central dentro del debate público, entroncaron hacia los sesenta con la puesta en marcha de grandes proyectos de transformación estructural que prometían solucionar estas dificultades. Sin embargo, ello no ocurriría como estaba presupuestado, ya fuese por las limitaciones propias de los programas de gobierno como por la oposición y rechazo que algunas medidas causaron entre ciertos actores. Así, por ejemplo, la política de distribución de alimentos llevada a cabo por la UP para hacer frente a la escasez y mercado negro generaría una aguda polémica en el país, situándose además como un factor que estaría detrás de numerosas acciones de fuerza en contra del Gobierno y entre las bases militantes de cada bloque. Desde otro ángulo, la reforma agraria que ya arrastraba una larga discusión y puesta en práctica en el país, fue también una medida que bajo este periodo alcanzó sus cuotas más altas de confrontación social, además de una ejecución rápida y extensiva a objeto de transformar el agro chileno.

Visto en su conjunto, existían diversos conflictos que ya antes de la llegada de la UP al gobierno estaban medianamente perfilados en la escena pública, los cuales no habían sido solucionados por las autoridades u otros actores. Al despuntar los setenta, dichos conflictos se enmarcaron dentro de un contexto que ofrecía una serie de transformaciones estructurales bajo la perspectiva de construir un Estado socialista. Tal horizonte, unido a los recursos discursivos

que incentivaban el protagonismo de las masas, y un marco global que marchaba en una dirección similar, mostraron la posibilidad cierta de materializar esos cambios, pero desatando al mismo tiempo el temor y la oposición de numerosos segmentos sociales. Estos últimos, incentivados u organizados por los partidos y movimientos que rechazaban la vía chilena al socialismo no dudaron en acometer todo tipo de acciones para frenar el proyecto revolucionario de la UP. Lo que en pocos meses terminó por cimentarse fue un escenario con distintos niveles de tensión y conflictos, los cuales, al no poder ser canalizados de forma adecuada derivaron en enfrentamientos de distinta naturaleza. Se había estructurado, pues, un escenario de lucha abierta entre perspectivas y estrategias que, con el paso de los meses, se mostrarían totalmente excluyentes y proclives a materializar acciones que desbordaran la institucionalidad. Así, el punto de mayor intensidad de estos conflictos se observará a través del uso de la violencia como método de acción política.

Bajo esta perspectiva, los recursos discursivos se caracterizaron por su radicalidad e intransigencia a la hora de entender y posteriormente verbalizar las dinámicas de enfrentamiento. Si desde la izquierda emanaban retóricas a favor de la lucha de clases o de fortalecer el poder popular, desde la derecha y sectores del nacionalismo se explicitaban fórmulas para derrocar al gobierno. El conjunto de estos discursos contribuiría a dibujar un particular escenario en el espacio público, caracterizado por la disputa entre bandos irreconciliables y donde se reactualizaron con inusitada fuerza una serie de recursos y prácticas de violencia. Todo lo anterior, por cierto, tendría como telón de fondo un proyecto de transformación estructural de muy compleja aplicación y transición.

Primera etapa: desde la llegada de la Unidad Popular al gobierno a la marcha de las cacerolas vacías, noviembre de 1970 a diciembre de 1971

A pesar de estar situado al sur del hemisferio occidental, alejado de los grandes centros financieros y de casi cualquier dinámica cosmopolita, Chile concitó hacia mediados de 1970 la atención de buena parte del planeta. En pleno escenario de confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, además de las propias dinámicas interamericanas de la Guerra Fría, este país protagonizaba un ejercicio político audaz: una coalición de izquierda, donde predominaban dos partidos marxistas, estaba *ad portas* de alcanzar el poder a través de unas elecciones limpias y democráticas.

El proceso electoral que se había vivido en el último año dejaba tras de sí una huella larga y compleja para diversos actores Desde fines de 1969, el país fue testigo de la periodicidad de diversos enfrentamientos, atentados y choques callejeros entre distintos grupos políticos. En los meses de junio y julio de 1970, por ejemplo, murieron al menos cuatro personas vinculadas a brigadas y grupos políticos que trabajaban en alguna de las tres candidaturas presidenciales. A ellos habría que agregar algunas situaciones de violencia en que se vieron involucrados funcionarios del gobierno democratacristiano en el marco de la aplicación de determinadas medidas. Este fue el caso del funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) Hernán Mery quien a fines de abril de 1970 fue atacado con armas de fuego mientras se disponía a concretar, junto con personal de Carabineros, la expropiación del fundo La Piedad ubicado en la zona de Linares[73]. El ataque tuvo como consecuencia la muerte del funcionario público y una seguidilla de protestas en diversos puntos del país. Hubo, de hecho, un apedreo al edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura, entidad que agrupa a los grandes propietarios agrícolas, y enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso Nacional. El ministro del

[73] *La Nación*, Santiago, 1 de mayo de 1970, p. 1.

Interior del gobierno democratacristiano, Patricio Rojas Saavedra, recuerda que tras la muerte de Mery el panorama de agitación en el agro se mantendría a lo largo de toda la campaña electoral, produciéndose diversos incidentes entre los actores involucrados producto de la reforma que estaba en plena marcha[74].

La atmósfera social y política del país acusaba así indicios sostenidos de polarización. A una sociedad movilizada, que manifestaba sus deseos e ilusiones de transformación, se sumaba una contienda electoral que parecía ser el evento que procesaría y materializaría dichos anhelos. De tal forma que el despliegue de la propaganda electoral, los actos masivos y los desfiles y marchas propias de este tipo de eventos fueron entendidos como parte de una batalla simbólica entre grupos e individuos que pugnaban por alcanzar un objetivo. En este caso, dicho objetivo era el triunfo de un candidato en particular y la puesta en marcha de un programa que tendría amplia repercusión social y política.

Los resultados electorales del 4 de septiembre dieron un triunfo preliminar al candidato de la izquierda quien aventajó a Jorge Alessandri por algo más de 30 mil votos. Correspondería entonces al congreso pleno elegir de entre las dos primeras mayorías al nuevo presidente. A partir de entonces y hasta que Allende tomara posesión del mando, en caso de que el Congreso lo escogiera, se abrió un complejo periodo de conversaciones de casi sesenta días. Las negociaciones se encaminaron, por parte de la UP, a buscar el apoyo clave de los democratacristianos —terceros con Tomic en los recientes comicios— en la votación del Congreso pleno. Este partido puso como condición la firma de un estatuto de garantías constitucionales por parte de la izquierda, cuestión que tras largas reuniones terminó por finiquitarse. Tal acuerdo no fue, en todo caso, un proceso fácil de digerir en el seno de la UP, ya que socialistas y comunistas aquilataron desde posiciones opuestas las condiciones levantadas por la DC.

Cuando todo parecía encaminado a una transición normal hacia el gobierno de Salvador Allende un hecho de sangre conmocionó a la opinión pública. Un grupo de jóvenes ligados a la extrema derecha, actuando bajo los hilos de militares en servicio activo y con

[74] Patricio Rojas Saavedra, *Tiempos difíciles. Mi testimonio*, p. 81.

anuencia del gobierno norteamericano[75], asesinó al comandante en jefe del Ejército René Schneider Cherau. Según trascendió poco después, el objetivo original del grupo era secuestrarle para obligar de este modo a que las Fuerzas Armadas intervinieran en el proceso electoral todavía en curso y alejaran cualquier posibilidad de que la izquierda alcanzase el poder. En el intento de captura, los perpetradores no calcularon, al parecer, la rápida respuesta del militar quien trató de defenderse usando su arma de servicio. Esto habría generado el nerviosísimo de uno de ellos quien disparó a quemarropa al comandante en jefe. El hijo del alto oficial, Víctor Schneider, comentaría que su padre había recibido constantes presiones para que el Ejército se movilizara y evitara la llegada de Allende al poder, situación que se agudizaría tras los comicios del 4 de septiembre. Según este testimonio, las presiones provenían desde distintos sectores políticos, abarcando al PN e inclusive a autoridades del gobierno de la DC[76]. Finalmente, el hecho tuvo el efecto contrario al deseado por los autores del secuestro: el congreso pleno votó en su mayoría por Allende y buena parte de los sectores conservadores y de extrema derecha quedaron replegados dentro del espacio público.

En este panorama, el gobierno de la UP asumió el poder bajo un ambiente preexistente de violencia política que tuvo diversas

[75] Ciertamente, la injerencia de Estados Unidos en la política chilena no se remite en exclusiva a esta coyuntura. Más bien, ella se insertaba dentro de una estrategia más amplia que tenía como objetivo impedir el acceso de Salvador Allende a la primera magistratura. A este objetivo, compuesto en su inmensa mayoría por acciones clandestinas de agitación y propaganda, se le denominó Track I y en ella también se insertaba la maniobra conocida como «gambito Frei» que consistía en que el Congreso elegiría presidente a Alessandri, quien renunciaría para dar paso a nuevas elecciones en las cuales se presentaría el exmandatario. Cuando este propósito no se logró, el gobierno norteamericano estimuló a los militares chilenos para que se movilizaran en contra de Allende e impidieran al fin su acceso a la presidencia. Esta estrategia fue conocida como Track II. Véase, Corvalán Marquéz, "Las acciones...", *op. cit.*, pp. 120-122. Patricio Rojas Saavedra, entonces ministro del Interior de Frei Montalva, si bien reconoce los cuantiosos fondos con que la CIA intentó comprar a los parlamentarios democratacristianos para que votaran por Alessandri, descarta la participación del primer mandatario en esta operación: «*nunca* el presidente Frei me sugirió siquiera una actuación que habría enturbiado para siempre, no solo su nombre y el mío, sino el de la Democracia Cristiana». Rojas Saavedra, *op. cit.*, p. 94 (negrita en el original, cursiva aquí). Una versión que discute buena parte de esta tesis se encuentra en Sebastián Hurtado, "El golpe que no fue. Eduardo Frei, la Democracia Cristiana y la elección presidencial de 1970".

[76] Víctor Schneider, *General Schneider. Un hombre de honor, un crimen impune*, pp. 95-109.

manifestaciones, tanto a nivel de confrontación entre grupos subalternos como respecto a estrategias que buscaban torcer el destino institucional que las urnas habían delineado. Se puede decir que esta es una característica preliminar de la primera etapa de estudio. Una segunda característica se vincula con mayor propiedad a las dinámicas sociales y políticas que abrió la vía chilena al socialismo, siendo el posicionamiento de los actores dentro del espacio público una de las más relevantes. Este ejercicio supuso, en la práctica, desplegar un conjunto de acciones para visibilizar a cada actor, ya sea participando en diversas coyunturas electorales o manifestándose en la calle para demostrar capacidad de organización y convocatoria. Para buena parte de las organizaciones de izquierda esto se tradujo en apoyar las medidas gubernamentales en marcha, respaldar las candidaturas oficialistas y mantener una posición activa dentro del espacio público. Para la derecha, y en menor medida para la DC, este periodo significó, sobre todo a partir de marzo de 1971, reposicionar sus estrategias tras un periodo de repliegue observado luego de la ascensión de Allende al poder. Para fines de 1971, se observará que la oposición había logrado situarse de nuevo como un actor relevante dentro del concierto político, demostrando una capacidad no menor para llevar a cabo acciones de masas que sorprenderán al gobierno y a la izquierda en general.

Una tercera característica general de esta etapa —y que se repetirá a futuro— es que los hechos de violencia política ocurridos entonces se vincularon casi de inmediato a cuestiones más generales respecto al proceso político en curso. Esto significaba que dichos eventos no fueron entendidos como situaciones circunstanciales o desvinculadas de tópicos y contextos más generales, sino que, por el contrario, ellos sintetizaban en buena medida algunas de las problemáticas más complejas que se vivían en el país. Como es de suponer, cuando este tipo de situaciones afectó a partidos o movimientos políticos, por ejemplo, con la muerte violenta de algún militante, los elementos relativos a dicho caso pasaron a nutrir gran parte de la estrategia discursiva de corto y mediano plazo de estas mismas colectividades. Así, un hecho de violencia con resultado trágico para alguna organización servía para remarcar ciertos argumentos, acusar a otros actores o incentivar el surgimiento de algún grupo o brigada que recordara a la víctima. Esto último, por ejemplo, ocurrió tras la muerte del

joven agricultor Rolando Matus Castillo, militante del PN, muerto en un enfrentamiento con desconocidos en una zona rural de la IX región. Tras el hecho, la colectividad a la que pertenecía la víctima decidió fundar el Comando Rolando Matus, un grupo de choque que alcanzará protagonismo en la lucha callejera y rural que se intensificará a futuro en el país.

Los inicios del Gobierno de la Unidad Popular, noviembre a diciembre de 1970

Los anhelos de transformación estructural de quienes apoyaron la candidatura de Salvador Allende cristalizaron en la jornada del día 3 de noviembre cuando el hasta entonces senador por Aysén y Magallanes juró como primer mandatario. En las primeras semanas de la nueva administración se pudo observar un impulso decisivo en orden a plasmar un conjunto amplio de medidas que formaban parte integral del programa político de la coalición oficialista. Tales medidas, sin duda, imprimirían un sello distintivo a un gobierno que buscaba constituirse, desde el socialismo, en un punto de inflexión dentro de la trayectoria histórica del país.

En el área económica se fueron materializando decisiones respecto a la redistribución de la riqueza, el reajuste de salarios y la discusión de aquellas medidas de mayor impacto económico como la requisición de algunas empresas, la nacionalización de la gran minería y la estatización de la banca. Tal fue el énfasis, en efecto, de los anuncios realizados por el ministro de Hacienda del nuevo gobierno, Américo Zorrilla, en la exposición que hiciese ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso el día 27 de noviembre[77].

En los sectores rurales, en tanto, se vivía una acelerada dinámica de agitación y transformaciones. A través de las disposiciones estipuladas en la Ley de Reforma Agraria aprobada en el gobierno anterior, los fundos de más de más de 80 hectáreas de riego básico serían expropiados por parte del Estado. Tal proceso, que sería acompañado de una amplia movilización de los sectores campesinos y segmentos

[77] Estos anuncios fueron desarrollados luego por Zorrilla en una conferencia de prensa el día 9 de diciembre. Véase *El Siglo*, Santiago, 10 de diciembre de 1970, p. 5.

obreros ligados a las tareas agrícolas, se caracterizaría por su sello dinamizador y rupturista dentro de un espacio tradicionalmente conservador. De hecho, desde la puesta en marcha de la ley de reforma agraria, en la segunda mitad de los años sesenta, se habían observado numerosos incidentes entre los funcionarios públicos encargados de materializar las expropiaciones, los sectores campesinos que les apoyaban, y los propietarios que se oponían tenazmente a ello.

Desde un punto de vista global, la UP materializó su acercamiento hacia el campo socialista a través de la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba, en el mes de noviembre, y con la República Democrática Alemana al iniciarse 1971. Esto era indicativo de que la vía chilena propuesta por la izquierda, a pesar de sus particularidades inherentes, compartía un conjunto de criterios y propósitos que le situaban dentro de unas coordenadas específicas. Elementos como el antiimperialismo, un programa de transformación de las estructuras capitalistas y un apoyo decidido a la lucha de los pueblos del Tercer Mundo graficaban, pues, una adhesión explícita hacia aquella cultura política que veía en el socialismo el único horizonte de cambio posible en el mediano y largo plazo.

Estas dinámicas que se abrieron con la llegada del proyecto popular al gobierno fueron aquilatadas desde diversos ángulos, y bajo objetivos específicos, por parte de los distintos partidos y agrupaciones, sobre todo dentro de la izquierda. Para el PC, por ejemplo, el acceso de Allende y su coalición a la primera magistratura, aun cuando reflejaba un triunfo indesmentible de la clase obrera, no era indicativo todavía de un control total del poder. Éste último debía conseguirse a través de una transformación institucional del Estado y una amplia alianza política que, al devenir en mayoría nacional, terminaría por aislar a los enemigos de los cambios y las transformaciones en curso. Para el PS, en tanto, el triunfo de la UP fue saludado también como una conquista de la clase obrera, aunque casi de inmediato se puso en discusión que uno de los tópicos a dirimir en el seno del oficialismo era la cuestión del poder. Ello significaba separar aguas entre las masas trabajadoras y el conjunto de la burguesía, de modo que la posibilidad de establecer alianzas con sectores ajenos al proletariado quedaba de plano descartada. En última instancia, el PS insertó el contexto nacional dentro de una etapa de lucha revolucionaria tanto en América Latina como en el mundo entero. El MIR, sin ser parte

oficial de la alianza gubernamental, prestó en las primeras semanas un apoyo táctico a la implementación del programa de la UP porque ello significaría, en el mediano plazo, orientar la situación hacia un escenario que sería más favorable a su estrategia de confrontación con la burguesía[78].

Estos aspectos permiten corroborar que existían diagnósticos y perspectivas de acción esencialmente divergentes, cuando no dicotómicas, en el seno de la izquierda chilena. Si bien, los principales partidos de esta corriente compartían la idea en torno a que a llegada de la UP al gobierno no significaba la conquista del poder total, existían matices importantes en torno a cómo resolver este y otros problemas. La política de alianzas y de mayoría nacional propiciada por el PC, que apuntaba a abrirse a entendimientos con el centro político, entraba en colisión con las perspectivas socialistas que identificaban bandos irreconciliables y que anunciaban una lucha inevitable entre revolución y contrarrevolución. Del mismo modo, la gradualidad de los cambios que la UP debía llevar a cabo se instaló, también desde temprano, como otro punto de discusión. Como se sabe, la estrategia del PC, que visualizaba una transformación por etapas a través de una consolidación de los cambios, chocaba con la perspectiva de socialistas y miristas que eran partidarios de una aceleración de los mismos.

A todo lo anterior se sumaría una agria e insalvable disputa entre el PC y el MIR. Para el primero, la política ultraizquierdista del movimiento liderado por Miguel Enríquez solo contribuiría de forma negativa a los planes del gobierno toda vez que su accionar por fuera de la legalidad y del control del Estado pondría en cuestión la política de alianzas que se había concebido y, más aún, alteraría el verdadero carácter de la revolución chilena. Desde el MIR se acusó a los comunistas de sectarismo y de promover una lucha contra las posiciones de extrema izquierda.

Resultaba evidente que había diferencias sustantivas en el seno de la izquierda respecto al carácter, orientación y estrategia a seguir por parte del gobierno de la UP. Si bien en los primeros meses el impulso reivindicativo y transformador que logró imprimir la vía

[78] Luis Corvalán Marquéz, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, pp. 52-58.

chilena al socialismo atemperó tales diferencias, en el mediano y largo plazo se observará que ellas eran en realidad cuestiones de la mayor trascendencia para cada uno de estos actores. Más aún, estos verdaderos nudos de conflicto estaban anclados a las estrategias basales de cada colectividad por lo que resultaba muy difícil deshacerse de ellas o modificar sus características más sustanciales. Por otra parte, el cuadro social y político conforme fuera incrementado sus niveles de polarización y conflictividad actuará como un aliciente para persistir en una defensa intransigente de determinados puntos de vista.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales elementos contextuales en los cuales se desarrollan los primeros hechos de violencia política producidos en estos meses? Cabe recordar que la UP asumiría el gobierno dentro de un cuadro de violencia política preexistente, cuyo origen y características obedecía a diversos factores. Desde un ángulo de larga duración, el gobierno de la DC formaba parte todavía de un ciclo donde el despliegue de la violencia estatal, aún con sus reconfiguraciones internas, había sido uno de los sellos distintivos en la resolución de los conflictos entre el Estado y la sociedad civil. Como se señaló en su momento, las matanzas del campamento minero de El Salvador en 1966 y de Pampa Irigoin en 1969 a manos de la fuerza policial tiñeron con un manto de sombra el carácter popular y reivindicativo que reclamaba para sí el proyecto democratacristiano. Y todavía en 1970 hubo incidentes y enfrentamientos en donde el actuar policial fue denunciado por su carácter represivo y violento.

Con la llegada de Salvador Allende a la presidencia se comenzaría a transitar hacia un nuevo contexto social y político que abriría un lugar cada vez más amplio para el protagonismo de la sociedad civil en diversos ámbitos de acción. Por la propia dinámica que fue asumiendo este periodo, el espacio de los conflictos y enfrentamientos acabaría siendo uno de los más relevantes, sobre todo en lo que respecta al papel de los grupos civiles. En dicho proceso contribuiría, sin duda, alguno de los cambios que en materia institucional comenzaba a implementar el gobierno de la UP, como sería el repliegue de las tareas y funciones represivas de las fuerzas policiales y militares. Este hecho, sin duda, marcaría un punto de inflexión dentro de la historia del siglo xx chileno, pues situaba al gobierno de Allende como una especie de paréntesis dentro de un ciclo más

amplio y de larga duración de violencia estatal. En los extremos de este paréntesis están tanto la violencia desplegada por el Estado en periodos de normalidad y excepción democrática anteriores a 1970 como aquella ejercida de forma extrema por las Fuerzas Armadas a partir del golpe de Estado de 1973. Todo lo anterior, por cierto, no significa en modo alguno que durante la UP no existieran situaciones de violencia estatal, únicamente se desea recalcar que esta no fue una práctica sistemática ni permanente a lo largo de los mil días del proyecto socialista, sino más bien una dinámica que emergería en determinados contextos y bajo circunstancias particulares que no son posibles de homologar a otros periodos históricos.

Dentro de este proceso de redefiniciones impulsadas por la UP cabe anotar un hecho sintomático ocurrido en los primeros días de gobierno y que se vinculó a lo señalado más arriba en orden a la modificación sustancial de los aparatos represivos. Tal acontecimiento fue la disolución del denominado Grupo Móvil de Carabineros que era la unidad encargada de reprimir las manifestaciones y enfrentamientos en la vía pública[79]. Al anunciar dicha medida, el ministro del Interior José Tohá señaló:

> Estamos seguros de que la política del Gobierno popular hará innecesaria la existencia de grupos policiales que tengan que enfrentar a la población [...] el Gobierno cree que todo problema que se suscite en el campo gremial, estudiantil, social es de responsabilidad de la autoridad, del Gobierno mismo, de sus ministros, subsecretarios, intendentes, jefes de servicio; y seremos nosotros los que enfrentaremos esta responsabilidad[80].

Bajo un registro que sintonizaba plenamente con lo anunciado por el ministro, el general director de la institución, José Sepúlveda

[79] Según el historiador Joaquín Fermandois, dicho grupo cambió su denominación pasando a llamarse Unidad de Servicios Especiales, la cual no tuvo mucho trabajo durante el primer año de gobierno de la UP. Sin embargo, indica el autor, cuando comenzaron los enfrentamientos y movilizaciones violentas el Ejecutivo lanzó con toda su fuerza a esta unidad para frenar a los grupos de oposición y muy excepcionalmente, en cambio, en contra de las huestes de izquierda. Véase, Joaquín Fermandois, *La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*, p. 359.

[80] *El Mercurio*, Santiago, 11 de noviembre de 1970, p. 19.

Galindo, insistió en la forma en cómo la ciudadanía debía entender, ahora, la labor policial: «Deseamos que la gente comprenda que el carabinero no es un elemento represivo y que se pierda esa imagen de terror que inspira el policía en algunos sectores de la población». Más adelante, Sepúlveda revelaría los nuevos espacios de actuación de la fuerza policial: «El carabinero volverá a aparecer en las plazas, paseos, cines, poblaciones, en una real labor de cooperación social y de protección de los ciudadanos»[81].

Tales declaraciones, en efecto, revelaban un giro estratégico no menor por parte de las autoridades civiles y policiales en orden a dotar de una nueva estructura e imagen a una institución que estaba asociada a las tareas represivas más ingratas, ofreciendo un perfil abusivo y en extremo violento. De este modo, con los cambios que operaron respecto al Grupo Móvil se buscaba rescatar, como lo señalaba el periódico *El Siglo*, la imagen más «esencial» de Carabineros de Chile vinculada al servicio que prestaba a toda la comunidad[82]. Con todo, también emergieron voces críticas respecto a esta medida, pues en ella se veía la posibilidad de que el Gobierno desatendiera su rol respecto a garantizar la seguridad[83]. El semanario de actualidad *PEC* explicitó este punto al sostener que existía cierto desconcierto en la ciudadanía, y un claro malestar entre los miembros del cuerpo de Carabineros, respecto al alcance de esta iniciativa. Según esta publicación, diversos observadores apuntaban que tras esta medida se ocultaba la «manifiesta intención» por destruir la capacidad de acción policial, socavar la disciplina de los funcionarios y erosionar su papel de «guardián» de la seguridad y «defensor de la institucionalidad y el orden interno». A modo de síntesis, *PEC* señalaba que junto a la infiltración oficial del MIR en la Moneda —y su robustecimiento como organización— había comenzado, en virtud de los cambios que operaban en Carabineros, la «sistemática destrucción» de las defensas de la estructura institucional[84].

[81] *El Mercurio*, Santiago, 12 de noviembre de 1970, p. 19.

[82] *El Siglo*, Santiago, 13 de noviembre de 1970, p. 4.

[83] Este énfasis se constituyó, al cabo de unos meses, en una crítica transversal de la oposición al gobierno al cual acusarían de amparar a los grupos violentistas, mostrar cierta tolerancia con las ocupaciones ilegales y las tomas y, en definitiva, no cumplir con su rol de garante del orden público.

[84] *PEC*, n.º 378, Santiago, 4 de diciembre de 1970, pp. 4 y 5.

Pero más allá de las críticas que emergieron en torno a esta medida, aquella cabría insertarla dentro de una política más amplia desarrollada por el Gobierno dirigida hacia el conjunto de las fuerzas militares y policiales del país. Esta tenía relación con el propósito de integrar a estas instituciones dentro del proyecto de transformación estructural que llevaba adelante el gobierno. Con ello, se alejaría la imagen distante y negativa que existía sobre el mundo uniformado en general y que se vinculaba, sino a tareas represivas, al menos a situaciones de intervencionismo y alteración del marco institucional. Para modificar esta imagen, los militares serían ahora parte de una política de Estado destinada a realizar modificaciones sustanciales que propendieran hacia el desarrollo nacional. Así, se aprovecharían todos los recursos técnicos y humanos con que contaban dichas instituciones a modo de contribuir en la materialización de estos propósitos, lo cual, de paso, estrecharía su relación con el mundo político y la sociedad civil en general.

Dentro de estos lineamientos, es posible identificar en las primeras semanas de gobierno de la UP un contexto social y político dinámico y novedoso. Las principales medidas estaban apuntando a reestructurar las bases de la economía nacional, fortaleciendo el papel del Estado y mejorando la redistribución de la riqueza y los ingresos de las clases trabajadoras. La movilización social, por su parte, mantenía su dinámica ascendente en un marco caracterizado por cambios sustanciales en las relaciones con el aparato institucional gracias a un gobierno que visualizaba desde otro ángulo la participación política de los grupos subalternos. Se habían creado, siguiendo un concepto muy propio de la sociología, un conjunto de oportunidades políticas para intensificar la acción social dentro de un escenario menos represivo y más abierto a la integración y discusión de las demandas de la sociedad civil. Inclusive, el presidente Allende tomó la decisión, en la segunda mitad de diciembre, de indultar a diversos militantes de izquierda que se encontraban detenidos por efectuar acciones armadas en el último tiempo. Los beneficiados fueron miembros del MIR y de la VOP quienes, lejos de los deseos de las autoridades en orden a que prosiguieran actividades únicamente políticas, se reintegraron a las estructuras de sus respectivas organizaciones, retomando el tipo de acciones que los habían llevado ante la justicia.

A todas luces, se trataba de un contexto pocas veces visto en Chile, el cual acrecentaba la sensación de cambio epocal a partir de modificaciones trascendentes de la realidad social y política. Sin embargo, un panorama tan auspicioso como el descrito también incubaba elementos para la creación de un marco de conflictos que estaría detrás de numerosos hechos de violencia política en los cuales tendrá un protagonismo clave la sociedad civil.

En los meses de noviembre y diciembre de 1970 se detectaron tres eventos de estas características, vinculados a enfrentamientos que terminaron, en algunos casos, con la muerte de personas. El primero de estos casos se produjo en el sector de Lo Prado al poniente de la capital, una zona que para ese año presentaba un carácter más rural y más agrícola que urbano. De hecho, el conflicto se desató por la ocupación de un predio, el día 26 de noviembre, por parte de algunos campesinos que acusaban una mala explotación del terreno. En pocas horas, la situación generó un enfrentamiento entre los ocupantes y personal de Carabineros que se saldó con un obrero herido a bala identificado como Juan Félix Leiva Riquelme. El periódico *Las Noticias de Última Hora* recalcó que los incidentes se habían producido debido a la prepotencia patronal que intentó evitar la ocupación de lugar. Al mismo tiempo, este medio citaba las declaraciones emanadas desde el Ministerio de Agricultura que respaldaban la intervención de esta propiedad a través del artículo 171 de la ley de Reforma Agraria, pues, según esta secretaría de Estado, de las 900 hectáreas con que contaba el fundo, menos del 10 % estaba cultivado antes del 4 de septiembre de 1970[85]. Desde las páginas de *El Mercurio*, en tanto, se enfatizó en la dinámica de conflicto que el hecho tenía al destacar que el obrero herido habría amenazado tanto al dueño del fundo como a personal de Carabineros. Asimismo, este medio indicaba que se desconocían los motivos que habían generado la toma de los terrenos, perspectiva que pasaba por alto lo afirmado en esos momentos por el Ministerio de Agricultura en relación a este predio[86].

Además de su problemática particular, existía otro punto de tensión en este hecho que tenía que ver con el accionar de la fuerza policial frente a este tipo de incidentes. El disparo a un obrero

[85] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 27 de noviembre de 1970, p. 17.
[86] *El Mercurio*, Santiago, 27 de noviembre de 1970, p. 23.

efectuado por personal de la policía uniformada venía, en efecto, a poner en entredicho la nueva orientación que el gobierno buscaba imprimir a las fuerzas de orden. Consciente de esta situación, el Ejecutivo intervino declarando, a través del ministro del Interior José Tohá, que se mantendría de forma inflexible su criterio respecto a la forma de abordar los conflictos sociales, procurando consolidar una convivencia «nacional, patriótica y solidaria», evitando así cualquier acción represiva. Al mismo tiempo, Tohá indicó que se había abierto un sumario para esclarecer lo sucedido en el baleo al obrero Leiva Riquelme[87].

El segundo caso, que también remitía a una dinámica de conflicto en torno al tema agrícola, se produjo en la zona de Panguipulli el día 29 de noviembre. En dicha ocasión, un grupo de casi treinta personas, entre campesinos y otros civiles, se tomaron el fundo La Tregua de propiedad de Antonieta Maaches Vanayes quien, ante dicha ocupación, se suicidó[88]. Según la versión de *El Diario Austral*, los individuos que acometieron la toma exigían una rápida parcelación del fundo, el cual ya se encontraba en proceso de expropiación. La nota agregaba un dato interesante respecto a los propietarios al señalar que el marido de Maaches Vanayes, Eneas Recalcatti, se había suicidado el año anterior al advertir como inevitable el triunfo de la izquierda en el país. De ser cierta esta versión, el hecho daba cuenta de cómo fue percibida por determinados actores la lucha política que se producía en el país entre finales de los sesenta y comienzos de los setenta, y que tenía en el eventual peligro que significaría un gobierno de izquierda uno de sus tópicos más reconocibles. De hecho, el periódico austral señalaba que ambos suicidios eran los primeros que ocurrían en Chile por causa del «temor» al comunismo[89].

Desde las páginas del vespertino *La Segunda* se enfatizó, en tanto, en las características materiales de la ocupación del fundo. Según este medio, las casi treinta personas que se tomaron el terreno, entre campesinos y trabajadores de predios aledaños, se encontraban armados al momento de la acción. Asimismo se indicó que la casa

[87] *El Mercurio*, Santiago, 28 de noviembre de 1970, p. 27.

[88] Los apellidos de esta persona fueron transcritos de diversas formas por la prensa de la época (Maachel, Machell, Maachell Avanávez, Maachel Vanayes, entre otros).

[89] *El Diario Austral*, Temuco, 1 de diciembre de 1970, p. 8.

patronal había sido saqueada y que incluso se tomó como rehén a Carlos Gil, identificado como pareja de Maaches Vanayes[90]. En una edición posterior, este mismo periódico consignó las declaraciones del hijo de la propietaria quien acusaba a elementos del MIR ser los perpetradores de la toma del fundo, al tiempo que calificaba el hecho como un «acto cobarde y sin nombre»[91]. Por su parte, *El Siglo* no refirió de modo explícito el caso de Antonieta Maaches, pero sí consignó en el marco de esta coyuntura una declaración conjunta de los ministros del Interior y Agricultura, José Tohá y Jacques Chonchol respectivamente, sobre las tomas de fundos y predios que se venían realizando en el país. El documento hacía un llamado a solucionar los conflictos mediante los mecanismos de la institucionalidad, advirtiendo de forma paralela que aquellas acciones que no estuvieran respaldadas por la normativa vigente serían puestas en conocimiento de la justicia ordinaria a efecto de que ella resolviera según las normas establecidas[92].

Los hechos arriba descritos estaban conectados, sin duda, a un proceso de mayor envergadura como fue la reforma agraria. La literatura especializada sobre este tema tiende a coincidir en el impacto que significó para las estructuras sociales, económicas e inclusive culturales un cambio de esta magnitud. Para el historiador José Bengoa la reforma agraria destruyó las instituciones de dominación que, como la hacienda, el latifundio o el sistema de inquilinaje habían contribuido a dar forma al Estado chileno, a la sociedad y a la cultura tradicional. En este sentido, Bengoa entiende este proceso de transformación bajo los conceptos de ruptura y derrotero, es decir como un factor pulverizante de estructuras profundas de la sociedad chilena y al mismo tiempo como un camino de consecuencias insospechadas dadas sus contradicciones internas[93].

[90] *La Segunda*, Santiago, 30 de noviembre de 1970, p. 20. La revista *Portada* sostiene que Carlos Gil era el administrador del fundo y que luego de la ocupación fue enviado como emisario al retén de Carabineros más cercano para entregar un mensaje perentorio: los ocupantes exigían la parcelación del predio, cuestión que de no ser atendida los mantendría al interior de la propiedad conservando a la señora Maachel como rehén. Véase, *Portada*, n.º 17, Santiago, 25 de diciembre de 1970, p. 1.

[91] *La Segunda*, Santiago, 1 de diciembre de 1970, p. 20.

[92] *El Siglo*, Santiago, 1 de diciembre de 1970, p. 1.

[93] José Bengoa, "Reforma agraria en Chile: A treinta años del setentaitrés y a cuarenta de su comienzo. Proposiciones, rupturas y derroteros".

La historiadora Heidi Tinsman, en tanto, destaca el proceso movilizador de la reforma agraria que en poco menos de diez años (1964-1973) logró reclutar a casi doscientas mil personas dentro del movimiento de trabajadores rurales. Se trató sin duda de una experiencia revolucionaria con objetivos radicales que fueron compartidos tanto por la administración democratacristiana como por el Gobierno de la UP. Con todo, Tinsman apunta a describir y analizar un elemento específico de este proceso que tuvo relación con el género y la sexualidad en tanto elementos centrales de la vida diaria en el campo. En este marco, la autora destaca que, además de los cambios en materia social que la reforma agraria produjo en el agro chileno, este fue un proceso en esencia desigual. Ello en virtud de que en términos estrictos dicha reforma empoderó más a los hombres que a las mujeres, otorgando, en la práctica, una dosis de mayor protagonismo político al segmento masculino[94]. Se podría agregar, complementando el análisis de Tinsman, que el protagonismo de los hombres no solo estuvo articulado en torno a su importancia simbólica como actores del proceso de reforma, sino que también dentro de las dinámicas de conflicto y violencia que se escenificaron en distintos espacios rurales a lo largo de estos años. De hecho, la mayor parte de las muertes registradas en estas zonas, y que derivaban de algún tipo de conflicto por la posesión de la tierra, correspondieron en su mayoría a hombres.

A partir de estos elementos se puede sostener que la reforma agraria puso en marcha un proceso de implicancias económico productivas que contribuyó decisivamente a generar puntos de tensión y conflicto en el campo chileno. Bengoa sostiene, en este sentido, que muchos campesinos se sumaron a la reforma al observar que el Estado los defendía con lo cual se debilitaba la dominación patronal. Así, surgirían nuevos códigos de conducta y un conjunto de discursos antipatronales «cargados de rencor por los ultrajes pasados». Al mismo tiempo, cobraría relevancia el rol de estudiantes y militantes de diversas organizaciones de izquierda, pero sobre todo del MIR a través del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), que se desplegaron en el campo realizando una activa labor de concientiza-

[94] Heidi Tinsman, *Partners in Conflict. The Politics of Gender, Sexuality and Labor in the Chilean Agrarian Reform, 1950-1973*, pp. 1-3.

ción política[95]. Sin embargo, este no fue el único factor que explicaría la violencia en los espacios rurales chilenos.

El exhaustivo estudio de Martín Correa, Raúl Molina y Nancy Yáñez indica que el proceso de toma de predios llevados a cabo por las comunidades mapuche en el sur del país fue confrontado, sobre todo a partir de 1972, por la violencia de la derecha política y las organizaciones de agricultores que querían poner fin a este tipo de situaciones. Así surgieron los denominados Comité de Retoma que, en la práctica, constituyeron una respuesta inmediata al accionar de los indígenas adelantándose, además, a las medidas que podía adoptar el propio gobierno[96]. Estos comités, y en general los sectores patronales que se armaron, estuvieron detrás de numerosos hechos de violencia que acabaron en ciertos casos con algunos muertos y decenas de heridos. Cabe precisar que, en este tipo de organizaciones, emanadas desde la propia sociedad civil, confluyeron no solo sectores patronales sino también militantes del PN y de algunos grupos de extrema derecha como Patria y Libertad.

Los problemas observados en el campo chileno remitían, entonces, a un marco de fondo vinculado a la implementación de una reforma que trastocaría las relaciones económicas y sociales de diversos actores. Tal dinámica, situada en un contexto de amplia movilización que invitaba a desarrollar iniciativas individuales o grupales protagónicas, no podría quedar ajena a algún tipo de conflicto. Esto, como es de suponer, operaría en un doble sentido, es decir, respecto a quienes apoyaban el proceso transformador que la reforma agraria generó como también en relación a aquellos actores que se situaron en una trinchera reactiva y opuesta al proyecto.

A pesar de las discusiones que generaron los incidentes rurales antes señalados, el caso de violencia política más significativo de este periodo fue la muerte del militante del MIR Arnoldo Ríos Maldonado a comienzos de diciembre de 1970 en la ciudad de Concepción. Las características del hecho y las consecuencias derivadas del mismo produjeron, como se sabe, una incómoda discusión en el seno de la izquierda chilena.

[95] Bengoa, *op. cit.*, p. 330.

[96] Martín Correa, Raúl Molina y Nancy Yáñez, *La Reforma Agraria y las tierras mapuches. Chile 1962-1975*, pp. 171 y ss.

Para esa fecha, Concepción constituía una de las zonas álgidas en lo que a movilización social y política se refiere. Se trataba de una región que contaba con un importante contingente de proletariado industrial y minero gracias a los emplazamientos siderúrgicos, petroquímicos y carboníferos, además de una activa masa estudiantil nucleada en torno a los liceos secundarios y a la Universidad de Concepción. La izquierda —y particularmente el MIR— tenían una presencia significativa en esta zona, desplegándose tanto en espacios urbanos como rurales. Hacia noviembre de 1970, el punto de tensión más importante de la capital regional estaba concentrado en las elecciones de la federación de estudiantes del mencionado plantel universitario, donde la izquierda llevaría dos listas separadas: una representando a la coalición oficialista y otra al MIR. Ya el 26 de noviembre se pudo avizorar la complejidad del ambiente político al producirse, de madrugada, un enfrentamiento armado entre grupos rivales al interior de la Universidad de Concepción[97].

Al comenzar diciembre, el foco noticioso se concentró en la visita del presidente Allende a esta región, ocasión que sería aprovechada para firmar uno de los primeros decretos de expropiación de su gobierno. La fábrica de Paños Bellavista Tomé pasaría, a contar del 1 de diciembre de 1970, a formar parte del Área de Propiedad Social. Sin embargo, los alcances de esta significativa medida, que mostraban a un gobierno enérgico y comprometido en la consecución del programa de gobierno, se vieron ensombrecidos en menos de 24 horas con los incidentes ocurridos, al día siguiente, en la Universidad de Concepción.

Cerca del mediodía se produciría un grave enfrentamiento entre miembros del MIR e integrantes de la Brigada Ramona Parra (BRP), perteneciente al PC. Como ya se adelantó, el hecho se saldaría con la muerte del estudiante mirista Arnoldo Ríos Maldonado. La versión del periódico *El Sur* apunta a que se trató de un enfrentamiento político armado en el marco de la campaña electoral que se vivía en el plantel universitario. Según los testimonios recogidos por el rotativo, los incidentes se desarrollaron en los patios que circundan las escuelas de Ingeniería y el Instituto de Química y en ellos habrían

[97] José Díaz Nieva y Mario Valdés Urrutia, "Confrontación y violencia política en Concepción en los días del presidente Allende (1970-1973)", p. 112.

participado elementos ligados al MIR —como Ríos Maldonado y Óscar Lynch, que resultó herido a bala— y a la BRP. Otro testimonio, también publicado en este periódico, agrega un detalle inquietante: la víctima habría sido tiroteada en el suelo cuando yacía herida después de recibir un primer disparo[98]. El certificado de defunción de Ríos al cual se pudo acceder aporta la causa precisa de muerte. Dicho documento anota que fue una herida a bala en el cráneo la causa del fallecimiento, el cual se produjo, además, a las 19:20 horas en la ciudad de Santiago, lugar hasta donde había sido trasladado, inconsciente, el militante del MIR[99].

La versión del periódico *El Siglo* apuntó a enmarcar el hecho dentro de una campaña destinada a dañar a la UP. En su edición del 3 de diciembre el rotativo, si bien reconocía que se trataba de un «serio incidente», recogería los testimonios que apuntaban en la dirección indicada arriba, es decir, explicitando el contexto de fondo que había contribuido a crear un «clima tenso» que propiciaba este tipo de enfrentamientos. La nota se cerró con las declaraciones que el propio presidente Allende hiciese con relación a estos hechos, en los que llamaba a «restablecer el clima de democrática convivencia»[100].

La muerte de Ríos generaba de este modo un escenario de conflicto no menor en los sectores de izquierda al poner en entredicho la validez que tanto comunistas como miristas le otorgaban a la unidad al interior de esta corriente. Al mismo tiempo, se ponía un temprano signo de interrogación sobre los métodos de acción política de la izquierda y en especial respecto al uso de armamento para resolver algunas disputas. Este punto alcanzaba mayor notoriedad y trascendencia toda vez que en la muerte del estudiante mirista, según las versiones recogidas, no intervinieron ni grupos de oposición ni fuerzas policiales.

El polémico conflicto alcanzaba así, cuando se cumplía casi un mes de gobierno, una resonancia innegable dentro del espacio pú-

[98] *El Sur*, Concepción, 3 de diciembre de 1970, p. 1. Un diario vespertino de la capital indicaría luego que el universitario Danilo Bahamondes fue identificado como el autor de los disparos que acabaron con la vida del estudiante del MIR. Véase, *La Segunda*, Santiago, 5 de diciembre de 1970, p. 20.

[99] "Certificado de defunción de Arnoldo Ríos Maldonado", Santiago, 2 de diciembre de 1970, n.º de inscripción 2261, registro E1, folio 44260028, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de enero de 2018].

[100] *El Siglo*, Santiago, 3 de diciembre de 1970, p. 1.

blico. Según Luis Corvalán Marquéz, el incidente había llegado a tal punto que se hizo necesaria la intervención del propio presidente Allende a objeto de lograr una salida pactada a la crisis[101]. En lo inmediato, el crimen de Ríos Maldonado tuvo como consecuencia práctica que la UP retirase su candidatura a la federación de estudiantes plegándose a la lista encabezada por el militante del MIR Nelson Gutiérrez. Igual de significativo fue el hecho de que comunistas y miristas acordaron no proseguir ninguna investigación que ayudara a develar lo sucedido en el campus universitario.

En las declaraciones que emitieron las colectividades involucradas en estos hechos se recalcarían los llamados a superar el incidente y a canalizar las diferencias a través de la discusión ideológica. Las Juventudes Comunistas, por ejemplo, enfatizaron en la necesidad de unir fuerzas y evitar las «luchas fratricidas» en el campo estudiantil, al tiempo que indicaban que la muerte de Ríos debía ser tomada como una lección «dirigida a solventar las diferencias solo en el terreno ideológico, con respeto mutuo»[102]. Desde el MIR se sostuvo que,

> Para nosotros, en ningún caso el enemigo fundamental es el Partido Comunista ni la Brigada Ramona Parra, si bien entendemos que la política errada y sectaria de esos compañeros ha llevado a este desgraciado y lamentable suceso[103].

Por su parte, la Revista *Punto Final* señaló en su editorial principal que los autores de este crimen habían dañado los esfuerzos a favor de la unidad revolucionaria. De igual modo, la publicación reconocía que este hecho reflejaba que el proceso socialista chileno se iniciaba con una «relativa debilidad» la cual debía ser superada mediante la unidad[104].

Además de este cruce de declaraciones, existió otra consecuencia derivada de la muerte del joven militante del MIR. Esta haría referencia a los reconocimientos *post mortem* que hicieron ciertas colectividades en orden a homenajear la memoria del fallecido a través

[101] Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, p. 59.
[102] *El Siglo*, Santiago, 4 de diciembre de 1970, p. 1
[103] *El Sur*, Concepción, 5 de diciembre de 1970, p. 8
[104] *Punto Final*, n.º 119, Santiago, 8 de diciembre de 1970, p. 1

de la creación de algún grupo, destacamento o espacio que llevaría el nombre de la víctima. En este caso, el nombre de Arnoldo Ríos Maldonado fue rescatado por dos agrupaciones; el MIR y la VOP. En el primer caso, dicho movimiento fundó, a través del MCR, el asentamiento Arnoldo Ríos en el pueblo de Moncul ubicado en la costa de la región de la Araucanía. Como se recordará, la puesta en marcha de la reforma agraria había acelerado las ocupaciones de terrenos rurales y expropiaciones por parte de diversos grupos y organizaciones que actuaban en esta zona, muchas veces adelantándose a los planes del gobierno. Generalmente, este proceso contaba con la actuación de un colectivo numeroso de campesinos y militantes que se apropiaban de algunas hectáreas de terreno privado pertenecientes a particulares. Una vez consumada la acción se procedía a levantar diversas viviendas que daban forma al asentamiento y que, aunque resultaban precarias en su composición material, servían para marcar presencia y «territorializar» un espacio que ahora se entendía como propio. Esta dinámica de «tomas» y expropiaciones a la fuerza llevadas a cabo por diversos grupos generaría, como se verá más adelante, enfrentamientos que derivaron en cruentos hechos de violencia a lo largo de los meses.

También la VOP homenajeó al militante mirista muerto a comienzos de diciembre. Esta agrupación, como se dijo, había surgido en 1969 y tendría su periodo más destacado de actuación entre esta fecha y mediados de 1971. Bajo una particular óptica ideológica —que visualizaba en el proletariado urbano y en el mundo popular a los verdaderos sujetos revolucionarios— este grupo llevó a cabo diversas acciones armadas como asaltos a bancos y locales comerciales y asesinatos de connotación política. Al comenzar 1971, el grupo fundaría el Comando Arnoldo Ríos Maldonado como un destacamento compacto y de número más bien reducido para concretar algunas de las operaciones antes señaladas. Una de estas acciones, en efecto, se llevó a cabo en marzo de 1971 cuando miembros de este comando asaltaron un local comercial en pleno centro de la capital del cual se llevaron casi un millón de escudos entre efectivo y documentos bancarios. Cabe agregar, que además del Comando Arnoldo Ríos Maldonado, la VOP había fundado meses antes otro destacamento que también recibió el nombre de un militante de izquierda fallecido. En este caso se trataba de su dirigente Ismael Villegas Pacheco quien

había muerto a comienzos de 1970 en un enfrentamiento con Carabineros[105]. Se volverá sobre esta colectividad más adelante al revisar diversos hechos registrados en los meses de mayo y junio de 1971.

Desde un ángulo estructural, la muerte de Ríos Maldonado revelaría un conjunto de tópicos que estaban en el centro de las discusiones de la izquierda chilena, algunas de las cuales se arrastraban desde hacía varios años atrás. Una de ellas tenía que ver con el diagnóstico general que se hacía respecto a la coyuntura política. Todas las agrupaciones de izquierda reconocían que la UP había abierto, en efecto, un nuevo ciclo histórico donde las fuerzas sociales y políticas se habían realineado. Esto significaría, entre otras cosas, la materialización de un nuevo campo de disputa que tendría en las colectividades opositoras a uno de sus principales protagonistas. A ellas —identificadas como el enemigo fundamental por casi toda la izquierda— se debía confrontar con unidad y perseverancia a efecto de lograr su repliegue y derrota definitiva. Esto suponía actuaciones de consuno en diverso orden de materias, como elecciones estudiantiles, colaboración en la implementación del programa de gobierno, entre otros aspectos. Sin embargo, con la muerte del militante del MIR se ponía en entredicho ese carácter unitario de la izquierda y, más aún, aquél revelaba una suerte de conflicto intestino que podría, a futuro, fracturar al oficialismo. Si para miristas y comunistas lo que debía primar era el sentido de unidad de la izquierda, los hechos ocurridos en la Universidad de Concepción habían terminado por mostrar la imagen contraria.

En segundo término, la muerte de Ríos reactualizó una vieja discusión entre los partidos involucrados. Para el PC, el MIR representaba un caso de ultraizquierdismo que en nada contribuía al éxito de la izquierda, sino más bien perjudicaría sus reales opciones de conducir exitosamente un proyecto de transición al socialismo. Lo que para el PC representaba el ultraizquierdismo no era otra cosa que aquellas prácticas que se distanciaban, en lo fundamental, de su propia concepción de la política. Es decir, se trataba de movimientos que actuaban por fuera de la legalidad, con discursos maximalistas

[105] Marcelo Bonnassiolle, "Violencia política y conflictividad social durante el Gobierno de la Unidad Popular. El caso de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), 1970-1971".

que solo nublaban el horizonte y, sobre todo, que gracias a sus actuaciones proveían de argumentos a la oposición para desacreditar y criticar a la izquierda[106].

Para el MIR, en tanto, la actuación del PC era caracterizada como sectaria, pues no concebía la existencia —o al menos no a gran escala— de agrupaciones que, buscando también alcanzar el socialismo, actuaran con una dosis de autonomía y determinación para disputar la conducción del movimiento obrero y popular. Implícitamente, la crítica del MIR al PC era también una crítica a la cultura política de este partido identificado como una colectividad jerárquica, disciplinada y con ausencia de fracciones y corrientes internas. Asimismo, la estrategia del PC, desarrollada al interior del sistema institucional, era vista por el MIR como el reflejo de un partido burocrático que operaba dentro del marco de la democracia burguesa. Todo lo anterior, en definitiva, chocaba de frente con el espíritu revolucionario y disruptivo —coincidente con la efervescencia social y política del periodo— que representaba el MIR. En última instancia, este tipo de confrontaciones era el reflejo de una discusión mayor entre la «nueva» y «vieja» izquierda que por aquel entonces estaba todavía en pleno desarrollo.

En síntesis, la muerte de Arnoldo Ríos Maldonado significaba algo más que un enfrentamiento entre brigadistas en el marco de una campaña electoral universitaria. Ella reflejaba una confrontación quizás más estructural entre concepciones estratégicas distintas que buscaban predominar en el espacio público y hegemonizar el proyecto de transición al socialismo. Aunque las primeras semanas de gobierno de la UP habían sido bastante exitosas, a fines de diciembre de 1970 el panorama dio un brusco giro. Un primer síntoma de agrietamiento en el seno de la izquierda, materializado por un hecho de sangre, puso tempranamente sobre la mesa algunos signos de interrogación.

[106] Con el paso de los años, esta imagen dentro de las filas comunistas se mantendría prácticamente incólume. El histórico dirigente comunista Orlando Millas recuerda en sus memorias los sinsabores de la actuación del MIR durante la UP, acusando a dicha agrupación de levantar un programa de «exacerbación de los conflictos» que no ayudó en nada al movimiento popular. Por el contrario, recuerda el dirigente, el MIR creó una «confusión desfavorable para la izquierda», perturbando el programa de la UP, lo que fue aprovechado por la derecha. Orlando Millas, *Memorias 1957-1991. Una digresión*, p. 223.

Balances del triunfo popular, posicionamientos y conflictos, enero a julio de 1971

Hacia el primer semestre de 1971 se conservaron, en términos generales, algunos rasgos esenciales de los meses previos, sobre todo respecto al impulso reformador del gobierno en distintas áreas del quehacer nacional. También se observaría un realineamiento más preciso de los distintos actores dentro del panorama político. El punto neurálgico que determinó este posicionamiento estaría vinculado a la forma en cómo los actores entenderán el proceso social y político que había instaurado la vía chilena al socialismo, lo que los llevará a adoptar distintos cursos de acción.

En el oficialismo, los diagnósticos habían coincidido en la importancia histórica del arribo de la UP al gobierno en tanto punto de inflexión dentro del desarrollo social y político del país. No obstante, los criterios y estrategias más específicas sobre cómo conducir el proceso de cambios diferían, a veces, en cuestiones fundamentales entre las colectividades de izquierda. El PC ya había explicitado su postura a fines del mes de noviembre de 1970 a través de la reunión de su Comité Central. Desde allí habían emanado dos ideas centrales que fueron reforzadas a lo largo del primer semestre de 1971. Tales tópicos tenían que ver, primero, con la gradualidad de los cambios que se materializarían en el sentido de consolidar las transformaciones en curso y, enseguida, con la posibilidad de establecer una amplia base social y política que legitimara al gobierno. Esto último, como se sabe, suponía asumir la posibilidad de establecer diversos acuerdos con el centro político.

En el caso del PS, su visión del momento político apuntaba hacía otros tópicos y problemáticas. A fines de enero de 1971 se llevó a cabo el XXIII Congreso General Ordinario, ocasión en que triunfaría la posición del senador Carlos Altamirano, quien congregaba a los sectores duros del partido, bajo la consigna del Frente de Trabajadores. Para entonces, Altamirano ya destacaba como una de las figuras más prominentes del socialismo chileno. En 1965, tras ocupar una banca en la Cámara de Diputados, llegó al Senado representando a la provincia de Santiago. En poco tiempo se transformaría en un tribuno de temer. Con una verbosidad amplia y corrosiva podía castigar en el hemiciclo a casi cualquier rival hasta ridiculizarlo. Ideológicamente,

Altamirano compartía la línea estratégica más revolucionaria dentro del PS, lo que significaba apoyar la tesis de la inevitabilidad de la lucha armada y cuestionar con acritud la institucionalidad «burguesa», posición en la que insistiría a lo largo de toda la UP. El sociólogo Alain Touraine describe a Altamirano como un dirigente que «habla y actúa» igual que un militante de base llegando a la cúspide del aparato partidista, «sin haber cambiado de papel». En esta línea, Touraine se lo imagina como un político con capacidad persuasiva sobre todo cuando hay que oponerse a alguna medida, pero rara vez cuando se debe proponer una[107]. Con todo, estas dicotomías y contradicciones dentro de los grupos dirigentes, sobre todo en un contexto como el de fines de los sesenta e inicios de los setenta, no era en modo alguno inhabitual dentro de la política chilena.

La tesis del Frente de Trabajadores que triunfó en el congreso socialista de enero de 1971, y que ya había sido explicitada a fines de la década del cincuenta, se reactualizó ahora bajo el contexto que se abrió tras la llegada de la UP al gobierno. En lo medular, esta estrategia enfatizaba el carácter revolucionario del proyecto popular, desechando el perfil gradualista y «etapista» que le asignaban otros actores. Al mismo tiempo recalcaba la imposibilidad de establecer alianzas con la burguesía pues se entendía que aquella se situaba *per se* en el bando contrarrevolucionario. En última instancia, el cuadro de confrontación social y político que se lograba advertir para el mediano plazo debía acelerarse cuanto antes a efecto de resolver las problemáticas centrales que atravesaban al proyecto popular[108].

En la oposición, en tanto, se observaba un importante proceso de redefinición tras el ascenso de Allende a la primera magistratura. Para la Democracia Cristiana la cuestión fundamental a dirimir consistía en el tipo de estrategia que se ejercería contra el Gobierno de la UP[109]. El enfoque que predominó en estos primeros meses fue el de establecer una oposición institucional al Ejecutivo y desechar cualquier tipo de entendimiento con la derecha nacionalista. Lo anterior se tradujo en la posibilidad de cooperar con la acción del gobierno en aquellos puntos con los que existiera cierta coinci-

[107] Alain Touraine, *Vida y muerte del Chile popular*, p. 150.
[108] Corvalán Márquez, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 55 y ss.
[109] Los siguientes énfasis en Corvalán Márquez, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 66.

dencia. Tal proceder se explicaba en razón de que la directiva de este partido adscribía a una tendencia moderada y progresista que había colaborado con intensidad en la campaña presidencial de su abanderado Radomiro Tomic en 1970. Como el programa de este candidato coincidía en ciertos aspectos con aquel levantado por la UP, no resultaba del todo improcedente que existieran acuerdos en determinadas materias entre ambos bloques.

Esta colectividad también fue enfática en rechazar, en estos primeros meses de gobierno, algún tipo de entendimiento con el PN, la otra fuerza política situada en la oposición. Esto se tradujo, por ejemplo, en el nulo apoyo que prestó la DC, en enero de 1971, a la acusación constitucional que presentó la derecha en contra del ministro de Justicia, Lisandro Cruz Ponce. Con antelación, los democratacristianos habían rechazado la invitación de los nacionales en orden a constituir un Frente Cívico que los uniera contra el oficialismo. De tal manera que el rol opositor que remarcó la DC para estos primeros meses buscaba articular un perfil propio que la distinguiera del gobierno, con vistas a constituirse en una alternativa política para 1976 y así retornar al poder. De igual forma, esto significaba marcar un distanciamiento no menor respecto al PN con el cual veía cerrada cualquier posibilidad de entendimiento en el corto plazo.

El conjunto de los planteamientos estratégicos de esta colectividad no fue, por cierto, un proceso ajeno a la disputa interna que tenían sus principales corrientes. La confrontación fundamental se daba entre el sector moderado que controlaba la dirección del partido y el ala conservadora que nucleaba a los hombres más cercanos al expresidente Eduardo Frei Montalva. En medio, había una tendencia de izquierda que reunía a buena parte de la juventud del partido[110]. Si la tendencia moderada y de izquierda deseaban establecer una oposición constructiva al proceso de transformaciones inaugurado por la UP —donde no se desechaba *a priori* algún tipo de acuerdos con ella—, el sector conservador tenía una visión en extremo diferente. A su juicio, el gobierno de la UP representaba un proyecto político que conduciría a país al totalitarismo, por lo que no cabía sino estructurar un antagonismo cerrado y terminante hacia el mismo.

[110] Corvalán Márquez, *Los partidos...*, *ibid.*

En las postrimerías del gobierno democratacristiano, este sector ya había mostrado parte de su arsenal. Tras el triunfo parcial de Allende el 4 de septiembre, el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, refirió a través de una cadena de radioemisoras el oscuro panorama económico que se cerneria sobre el país en caso de que la UP llegase al gobierno. Algunas investigaciones han apuntado inclusive al papel que habría tenido el núcleo más cercano al propio presidente Frei Montalva en orden a digitar una operación que imposibilitara el acceso de Allende a la presidencia[111]. Con todo, para el primer semestre de 1971 los objetivos estratégicos del ala conservadora de la DC no encontraban correspondencia todavía con el contexto sociopolítico para un despliegue más significativo. Desde ya, el gobierno de la UP contaba con un genuino respaldo popular que legitimaba su accionar, al tiempo que su programa de transformaciones sintonizaba muy bien con el escenario dinámico y proclive al cambio social de este periodo. Inclusive, los hechos que desembocaron en la muerte del general Schneider en octubre de 1970, se entendían para diversos sectores como parte de un oscuro plan que buscó impedir el acceso de Allende a la presidencia. Por todo lo anterior, la UP no trasuntaba en ningún caso el perfil totalitario que buscaba endosarle el sector conservador de la DC. Dicha corriente debería esperar un reordenamiento del cuadro político nacional para desplegar con mayor éxito su estrategia opositora.

La otra colectividad de la oposición, el Partido Nacional, también redefiniría su curso de acción en estos primeros meses de 1971. Su repliegue dentro del espacio público lo habían situado como un actor casi marginal del sistema. Sin embargo, este partido, en virtud de sus definiciones ideológicas —que transitaban hacia una postura nacionalista— y su defensa de los intereses del empresariado y de los grandes propietarios agrícolas, no podría continuar en la inacción. El proyecto transformador de la UP representaba, a ojos de este actor, una amenaza en ciernes para dichos intereses por lo que no cabía una actitud tibia o displicente hacia aquel. Uno de los dirigentes que mejor encarnó esta orientación fue, sin duda, Sergio Onofre Jarpa. Proveniente de una familia ligada a la tierra, había desempeñado diversas actividades comerciales de forma paralela a su interés por

[111] Hurtado, *op. cit.*, pp. 105-140.

la política. La década del cincuenta lo vio deambular por numerosas colectividades de derecha, entre ellas el Partido Agrario Laborista. A mediados de los sesenta, se integraría al PN que fue el partido que agrupó a las principales corrientes de este sector y donde tendría una destacada carrera dirigencial y parlamentaria. Su voz grave y cierta corpulencia física jugaban a favor de su liderazgo, reafirmando la postura anticomunista que proyectaba.

Respecto al PN, esta colectividad comenzó a rearticular su discurso crítico del gobierno de la UP en relación a dos puntos fundamentales. En primer lugar, insistir en la ilegalidad de algunas disposiciones adoptadas por el gobierno con el objetivo de crear la sensación de que el gobierno transitaba al margen del estado de derecho. En segundo término, se buscó interpelar a amplios sectores de la sociedad civil con mensajes que advertían de los peligros en torno a las medidas que implementaba la UP y que podían tener consecuencias insospechadas —y nefastas— para el diario vivir. Con esto se buscaba crear una sensación de «anormalidad» en el país que abriera la puerta a una situación de fragilidad institucional del gobierno[112]. Se trataba, pues, de una estrategia que respondía al perfil «radical» que deseaba asumir esta colectividad dentro de la oposición y que en el mediano plazo buscaría estrechar algún tipo de acuerdo con la DC, cuestión que de momento parecía improbable.

Dentro del campo opositor de estos primeros meses de 1971, hizo también su aparición el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL)[113]. Sus orígenes se remontaban a la pasada elección presidencial cuando Pablo Rodríguez Grez lideró un comando de perfil independiente para apoyar la candidatura de Jorge Alessandri. El joven abogado destacaba entonces por su ímpetu y vitalidad, además de poseer un intelecto privilegiado en materia de derecho penal. Años atrás había militado en las filas del Grupo Universitario Radical del cual ya no formaba parte para fines de los sesenta. Tras las elecciones presidenciales de 1970, procedió a fundar, a sugerencia de algunos dirigentes del PN, el Movimiento Cívico Patria y Libertad. Este buscaría detener, desde un ángulo todavía institucional, el acceso

[112] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 64 y 65.

[113] A lo largo de este libro se referirá este grupo como FNPL o simplemente como Patria y Libertad.

de Allende a la presidencia, pero tras el fracaso de esta estrategia, el grupo se autodisolvió a fines de octubre de ese mismo año. Por ese mismo tiempo el joven dirigente asumiría la defensa del general Roberto Viaux Marambio quien había encabezado una sublevación militar en octubre de 1969. Como indica José Díaz Nieva, este hecho transformó a Rodríguez Grez en una figura conocida para el gran público, sitial que no abandonaría en los años siguientes[114].

En los primeros meses de 1971, diversos actores vinculados a grupos nacionalistas, además del propio Rodríguez Grez, retomaron la idea de crear un movimiento que confrontara de forma más decidida al gobierno de la UP. En el fondo, se buscaba reactualizar la esencia del movimiento cívico que había sido fundado al calor de los comicios de septiembre último, imprimiéndole ahora un carácter más confrontacional en lo que a su juicio era una lucha abierta en contra del marxismo. Así surgió el FNPL el 1 de abril de 1971 en un acto de masas llevado a cabo en un estadio capitalino. El orador principal del evento fue Rodríguez Grez quien, a través de un encendido discurso, perfiló buena parte de la estrategia y orientación del naciente grupo. En primer término, denunció que los eventos del 4 de septiembre habían significado que las fuerzas democráticas entregaron el poder a una alianza que, en su mayoría, no «creía en la democracia» y que, más aún, solo representaba a un tercio del país. Este énfasis era parte de un primer esbozo crítico que la mencionada agrupación desarrollaría respecto al régimen democrático institucional y que en lo fundamental apuntaba a la inoperancia de este para atajar y prevenir la instalación de un gobierno marxista en el país. Aunque se trataba de una crítica inicial, sus primeros elementos ya quedaban de algún modo instalados dentro de la discusión pública. Enseguida, Rodríguez atacó al proyecto unipopular al que caracterizó como una alianza dominada por el PC que llevaría al país a la tiranía de la dictadura del proletariado y a convertirse en una segunda Cuba. Por todo lo anterior, no cabía, a juicio del fundador de Patria y Libertad, sino «abrir camino a nuevas concepciones» que acabaran con la lucha entre connacionales y desenmascarasen al «marxismo totalitario»[115].

[114] José Díaz Nieva, "'Patria y Libertad' y el nacionalismo chileno durante la Unidad Popular, 1970-1973", p. 162.

[115] *Op. cit.*, pp. 165-166.

Desde el punto de vista de las fuerzas políticas más relevantes, los primeros meses de 1971 fueron testigos de un posicionamiento y ajuste más nítido de cada una de ellas dentro del escenario público. Si en el oficialismo las diferencias estratégicas entre sus dos fuerzas principales eran todavía menores frente al impulso reformador de las primeras medidas de gobierno, en la oposición se discutía, bajo distintas ópticas, por la intensidad que debía tener la estrategia que enfrentara al gobierno. Fuera del ámbito institucional, tanto el MIR como el FNPL visualizaban, desde un primer momento, escenarios rupturistas que supondrían un proceso de confrontación que iría creciendo en intensidad y violencia. En buena medida, este diagnóstico se derivaba de un análisis que veía en el proyecto de la UP una etapa donde se discutirían y resolverían cuestiones trascendentales, como el régimen de propiedad y la intensificación de la reforma agraria, entre otros aspectos. Indudablemente, estas transformaciones impulsarían una movilización que apoyaría dichos cambios, pero también un accionar que las rechazaría, ya fuese desde un plano individual o colectivo. En la conjunción de ambas corrientes se producirían enfrentamientos inevitables entre sus protagonistas.

Gran parte de los hechos de violencia política registrados en los primeros meses de 1971 estuvieron, pues, conectados al contexto transformador que se abrió en Chile a propósito de las medidas adoptadas por el gobierno[116]. Aunque podría pensarse que todavía eran acontecimientos más bien marginales, la verdad es que no se trataba de hechos aislados y sin repercusión mediática. Aquellos estaban vinculados a conflictos de fondo y que, más aún, comenzarían a incidir en los lineamientos más generales del cuadro político.

A inicios del mes de marzo, el militante del MIR, Jorge Fernández Moreno falleció al interior del fundo Moncul, en la provincia de

[116] Esto fue visible sobre todo en las zonas rurales, donde este tipo de conflictos se arrastraba desde mucho tiempo atrás producto, como ya se ha dicho, de la implementación de la reforma agraria y las disputas que de su aplicación se derivaron. Un ejemplo que grafica este tipo de situaciones se produjo entre el 21 y 22 de febrero de 1971 en la zona de San Carlos, provincia de Ñuble, cuando un grupo de pobladores y campesinos intentaron tomarse el fundo Los Álamos. La acción fue respondida violentamente desde el interior del terreno a través de objetos contundentes y armas de fuego. Según los reporteros de un periódico local, la situación era de tal magnitud que podría explotar en cualquier minuto dejando «desastrosas consecuencias». *La Discusión*, Chillán, 23 de febrero de 1971, p. 1.

Cautín, a causa un artefacto explosivo que, según algunas versiones, le detonó mientras lo manipulaba[117]. Siguiendo antecedentes entregados por diversas fuentes, *El Diario Austral* sostuvo que la muerte de Fernández se habría producido porque el artefacto explosivo fue puesto al interior de un tarro y sellado herméticamente, situación que habría hecho transpirar la dinamita lo que unido a un ligero golpe causó la detonación[118]. La versión de *El Mercurio* es similar a la anterior, aunque agrega que la explosión pudo producirse luego de que Fernández cayera al suelo desde el caballo en que realizaba labores de vigilancia dentro del terreno ocupado[119]. A través de una declaración pública, el MIR indicó que el hecho se trató de un accidente mientras Fernández custodiaba el terreno junto a otras personas[120].

Luego de ocurrido este episodio se registraron nuevos hechos que mostraron con mayor claridad el nivel de conflictividad existente en algunos puntos del país. El día 16 de marzo, por ejemplo, se produjo por parte de desconocidos un ataque a la sede de la DC en el sector de Hualpencillo, cercana Concepción. En esta última ciudad se registraron dos incidentes más de connotación política. El primero de ellos fue un enfrentamiento callejero entre militantes democratacristianos y del MAPU que dejó como saldo, el día 28

[117] El certificado de defunción de la víctima anota como causa de muerte un *shock* por heridas contusas múltiples debido a una explosión de alguna carga con proyectiles. "Certificado de defunción de Jorge Fernández Moreno", Puerto Saavedra, 8 de marzo de 1971, n.º de inscripción 39, folio 82794933, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 25 de febrero de 2021]. Casi dos años después, entre febrero y abril de 1973, un caso de similares características ocurrió con un individuo de nacionalidad uruguaya y militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Se trataba de Denis Alves, de 23 años de edad, quien había sido enviado a Chile para recibir adiestramiento en armas y explosivos. El incidente se produjo en la ciudad de Arica cuando Alves manipulaba una granada que le explotó repentinamente. Los testigos del hecho afirman que el caso no se hizo público y que incluso, según un testimonio, la víctima fue enterrada en el mismo lugar. Los datos sobre este incidente son revelados en el libro de Clara Aldrighi y Guillermo Waksman, *Tupamaros exiliados en el Chile de Allende 1970-1973*, pp. 59 y 60. Los testimonios orales que dan cuenta de este hecho coinciden en líneas generales en lo ocurrido con Alves, sin embrago no existe claridad respecto a la fecha exacta de su muerte, pues algunos la sitúan en febrero y otros en abril de 1973.

[118] *El Diario Austral*, Temuco, 10 de marzo de 1971, p. 1.

[119] *El Mercurio*, Santiago, 10 de marzo de 1971, p. 1.

[120] Declaraciones recogidas de *El Mercurio*, Santiago, 11 de marzo de 1971, p. 1.

de marzo, ocho personas heridas de diversa consideración. En el segundo hecho, la sede regional del PC fue afectada por un incendio causado, presuntamente, por la acción de terceros[121]. Todo parece indicar que estos últimos sucesos estaban conectados a la coyuntura política que comenzaba a confluir hacia las elecciones municipales que se realizarían a inicios de abril, lo cual explicaría la presencia masiva de militantes y brigadistas en las calles de distintas ciudades.

Cabría indicar, además, que estos hechos resultaban de mayor conocimiento público porque involucraban a actores de relevancia nacional, muchos de los cuales contaban con sus propios medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, que les permitían desplegar este tipo de informaciones. Es probable que también existieran situaciones de menor intensidad, como ataques verbales, amagos de enfrentamientos o amenazas veladas entre grupos o individuos, y que se desarrollaban dentro del espacio público sin trascender más allá de un ámbito local. De todas formas, este tipo de incidentes, en la medida en que fueran adquiriendo cierta periodicidad —y se fueran sumando a otros acontecimientos de similar tenor— contribuirían también en la creación de un cuadro de mayor polarización política.

Pero el hecho de violencia política más relevante de esos días fue el asesinato del militante de la Juventud Demócrata Cristiana, Juan Millalonco, en la ciudad de Puerto Aysén en la madrugada del día 4 de abril. Como se recordará, en esta zona, además de los comicios municipales a efectuarse ese día, se llevaría a cabo una elección complementaria para llenar el escaño senatorial que dejó vacante Salvador Allende, quien había representado hasta noviembre de 1970 a las provincias de Aysén y Magallanes. Este territorio, ubicado en la parte meridional del país, se caracterizaba por un porcentaje de población relativamente bajo, ciento cuarenta mil habitantes hacia 1970, concentrado en centros urbanos como Coyhaique o Punta Arenas[122]. Las características de su geografía y clima determinaron desde muy temprano el perfil de sus actividades económicas. Estas se orientaban hacia el desarrollo de la ganadería ovina, de la cual

[121] Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, p. 107.

[122] "Chile: Población censada y tasas de crecimiento medio anual, según ciudades 1950-2002", disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0018840.PDF [fecha de consulta: 16 de junio de 2023].

se derivaba una importante industria lanera, y a la extracción de petróleo en la zona del estrecho de Magallanes. A pesar de su baja densidad poblacional y distancia de los grandes centros económicos y políticos del país, esta región había visto crecer un movimiento obrero estable y dinámico en torno a las actividades mencionadas. En la zona de Puerto Aysén destacaba, además, una importante industria forestal y ganadera.

Con vistas a la elección complementaria referida, la coalición oficialista levantó la candidatura del exsecretario general del PS, Adonis Sepúlveda, mientras que la DC se cuadró detrás de Andrés Zaldívar, exministro de Hacienda del gobierno de Frei Montalva. El PN y la Democracia Radical, en tanto, respaldaron al abogado Jorge Ovalle. De este modo, en las provincias del extremo sur del país coincidieron de forma paralela dos procesos eleccionarios con diversos intereses en juego. Ello supuso un esfuerzo mayor por parte de los comandos y brigadas electorales en orden a multiplicar las tareas de propaganda y vigilancia. En ese marco, se produjo entonces la muerte del joven militante de la Juventud Demócrata Cristiana.

La versión del periódico *La Prensa Austral* señaló que la muerte de Juan Millalonco ocurrió en la madrugada del 4 de abril cuando la víctima transitaba frente al local del PS en Puerto Aysén. Citando un informe policial, el rotativo indicaba que los disparos provinieron desde el interior de la sede socialista y que se habrían producido sin mediar algún tipo de provocación. Asimismo, se señalaba que en el allanamiento efectuado por el juez de turno al local del PS se encontraron algunas armas de fuego, cuestión que no ocurrió al inspeccionar la sede democratacristiana[123].

Una versión distinta, y con algunos llamativos matices, entregó el senador socialista Carlos Altamirano en la tarde de ese mismo día 4 de abril. En declaraciones al periódico *Las Noticias de Última Hora*, el dirigente señaló que el crimen tuvo su origen en una provocación abierta de los militantes democratacristianos. A su juicio, resultaba inentendible que en la madrugada del día de las elecciones anduvieran grupos de democratacristianos haciendo «manifestaciones callejeras». Era indudable, sostuvo Altamirano, que los individuos habían provocado a los militantes socialistas que estaban al interior de su sede por

[123] *La Prensa Austral*, Punta Arenas, 5 de abril de 1971, p. 1.

lo que los disparos efectuados desde allí «fueron una respuesta a esa incalificable provocación». Más adelante, el senador entregó algunos detalles del incidente, señalando, por ejemplo, que la sede había sido asaltada por un número aproximado de entre cuarenta a cincuenta jóvenes y que en la fachada de la sede socialista se habían encontrado huellas de impactos de bala y pedradas provenientes desde el exterior. Por último, Altamirano reconocería que en el allanamiento efectuado a local de su partido se habían encontrado «dos revólveres»[124].

La declaración oficial del Gobierno, expresada en voz del subsecretario del Interior Daniel Vergara, coincidía en algunos puntos con lo sostenido por el dirigente socialista. En efecto, ella señalaba que simpatizantes de la candidatura de Andrés Zaldívar Larraín habían cercado el local del PS de Puerto Aysén, procediendo a «hostilizar y agredir a las personas que se encontraban en el interior». Sin hablar directamente de un enfrentamiento o ataque armado, la declaración señaló que como resultado de la «refriega» originada por la provocación de los jóvenes democratacristianos fallecería Juan Millalonco. En su parte final, Vergara indicaría, al igual que Altamirano, que en el allanamiento ordenado por el juez a la sede del PS se incautaron dos armas de fuego, deteniéndose, además, a nueve personas[125].

La visión de la DC respecto al crimen de su joven militante se vinculó casi de inmediato a cuestiones más amplias que tenían que ver con el accionar de las bases militantes de izquierda y la responsabilidad del gobierno en el hecho. Este último punto en particular fue explicitado cuando, además de condenar el crimen, esta colectividad sostuvo que el mismo había sido fruto de la violencia criminal «amparada por las autoridades de Gobierno». A continuación, se indicó que las brigadas de la campaña oficialista constituían una fachada que amparaba a «grupos marxistas» que junto con apoyar al gobierno «están sembrando el terror y el crimen a lo largo del país». Para finalizar, la declaración de este partido señalaba que si el gobierno seguía permitiendo que la «violencia armada» le sobrepasase «ningún ciudadano chileno estará seguro en su casa, en su trabajo y en la calle»[126].

[124] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 4 de abril de 1971, p. 16.
[125] Declaración publicada en *El Llanquihue*, Puerto Montt, 5 de abril de 1971, p. 5.
[126] *El Llanquihue*, *ibid*.

Esta colectividad perfilaba así, con notable claridad, una problemática que serviría para cuestionar al Gobierno y las bases militantes que le apoyaban. Dicho tópico se refería al accionar de ciertos grupos oficialistas, los cuales, a juicio de la DC, constituían una expresión genuina de la violencia armada que habían anunciado estos mismos segmentos a la hora de materializar el proyecto socialista de la UP. Quizás, lo más indicativo de los argumentos democratacristianos fue apuntar que dichos grupos eran amparados por el gobierno, sugiriendo con ello que las autoridades toleraban sin escrúpulos el desarrollo de una escalada de violencia en el país. Esto significaba, pues, explicitar un cuestionamiento mayor hacia la idea de que la UP sería, según se había declarado por buena parte del oficialismo, un proyecto de transición pacífica y ordenada hacia el socialismo. A juicio de los democratacristianos, el crimen de Juan Millalonco y otras situaciones de violencia que se estaban produciendo no hacían sino cuestionar y poner en entredicho tal premisa.

De igual modo, la declaración antes citada denunciaba otro tópico polémico referido a que la autoridad política se encontraba sobrepasada por los grupos armados y que su capacidad de contención y control de los cuadros más extremistas de la izquierda era nula. Por último, el documento esbozaba un punto de la mayor importancia al sostener que ante la incapacidad del gobierno de Allende por mantener el orden, la ciudadanía se vería amenazada en su diario vivir por la violencia armada y criminal de los grupos de extrema izquierda. Este argumento era, en efecto, bastante ilustrativo porque anunciaba lo que sería un tópico recurrente de la futura estrategia de la DC. Dicha materia refería que el proyecto socialista de la UP significaba una amenaza directa para amplios segmentos de la sociedad civil en diverso orden de cosas, sobre todo en relación a su cotidianidad más inmediata. Esto se traduciría en que algunos temas referidos al orden público, seguridad en el trabajo o libertad económica —y que eran de vital importancia para segmentos como las clases medias— se verían amenazados en su continuidad y pervivencia bajo el gobierno socialista. Al abordar dichos tópicos, esta colectividad contribuía a poner un punto de tensión entre los intereses de diversos segmentos sociales del país y los alcances materiales e ideológicos del proyecto transformador de la UP.

En buena medida, este tipo de argumentos respondía a los criterios del sector conservador de la DC, el cual hasta hace poco tiempo

atrás se encontraba en una posición de repliegue estratégico dentro del partido. Sin embargo, el crimen de Juan Millalonco y la emergencia de situaciones de similar tenor en los próximos meses comenzarían a fortalecer a dicho sector y en particular sus cuestionamientos hacia el gobierno de la UP. Tal proceder, lo haría conectarse de mejor forma con un segmento importante de la militancia de base del partido, la que para entonces ya manifestaba un descontento no menor hacia el gobierno popular. Igual de significativo que lo anterior, fue el hecho de que este tipo de argumentos que se comenzaba a desplegar le acercaban hacia la estrategia discursiva que ya había establecido el PN y que denunciaba, al menos desde enero de 1971, problemáticas de similar naturaleza. Esta tenue confluencia discursiva entre ambas colectividades no se traduciría, en todo caso, en la conformación de una alianza estratégica en el corto plazo. Sin embargo, esta posibilidad ya no era del todo descartable en el futuro en virtud del nuevo contexto que se estaba configurando.

Para cerrar el caso de Juan Millalonco habría que referir una cuestión respecto a la trascendencia política de su muerte. Al igual como ocurriera en el caso del joven mirista Arnoldo Ríos fallecido en Concepción en 1970, la DC homenajeó la memoria de su joven militante procediendo a resignificar su nombre dentro de una unidad perteneciente al partido. Así surgió, como lo recuerda el dirigente democratacristiano Ricardo Hormazábal, la Brigada Juan Millalonco que se estableció en el brazo electoral de la DC en la zona de Puerto Aysén[127]. De este modo, y al igual que en otros casos, la víctima pasaba a ser un testimonio vivo para sus correligionarios respecto a las luchas y avatares que implicaban una militancia de base dentro de un partido político.

Cabe referir algunos elementos sobre los resultados que arrojaron las elecciones municipales en el país y sus implicancias dentro del cuadro político general. A nivel de coaliciones, esto es mirando las cifras bajo el binomio de gobierno y oposición, las cifras eran muy parejas, aunque mostraban una leve ventaja para la UP. El oficialismo, en efecto, alcanzó el 50,86 % de los votos, mientras la oposición se alzó hasta el 49,14 %. Al revisar los resultados por partidos se podía

[127] Ricardo Hormazábal, *La Democracia Cristiana y el Gobierno de Allende. Un testimonio personal a 30 años del Golpe de Estado*, p. 44.

constatar que la DC era la primera fuerza electoral del país al conquistar un 26 % de la votación. En segundo lugar, se alzaba el PS con un importante 22 % constituyéndose en el principal partido de la izquierda. El tercer puesto se lo disputaron el PC (17,36 %) y el PN (18,53) que obtenía una leve ventaja sobre el primero. Más atrás quedaban el PR, que disminuyó su votación hasta llegar al 8,18 %, y otras fuerzas menores como la Democracia Radical (3,91 %) o la Unión Socialista Popular (USOPO) que apenas rozó el 1 %[128]. En lo que respecta a la elección complementaria de un senador por las provincias de Aysén y Magallanes, el triunfo fue para el candidato socialista Adonis Sepúlveda que se impuso al democratacristiano Andrés Zaldívar y al independiente Jorge Ovalle.

Como era de esperar, cada partido realizó un diagnóstico específico sobre los resultados electorales y su impacto dentro del proceso político en curso. Dentro de la izquierda se observaría, como ya venía siendo costumbre, un planteamiento en una doble dirección, representada cada una en los dos partidos eje del conglomerado. Para el PS, la victoria electoral era un signo inequívoco de que este era el momento para impulsar más y mayores transformaciones estructurales en el país por vía de un referéndum. De este modo se aprovecharía el «impulso» de los comicios municipales a efectos de traducirlo en un apoyo definitivo hacia las medidas más revolucionarias que impulsaba la UP[129]. En una óptica similar se ubicaba el diagnóstico de la revista *Punto Final*, cercana al MIR, que destacaba, en primer término, que el programa popular podía —y debía— apoyarse en la fuerza de los trabajadores para seguir avanzando en la concreción de las transformaciones propuestas. En segundo lugar, esta publicación señaló que las posiciones reformistas dentro de la UP —en clara alusión a comunistas y radicales— habían perdido peso dentro de la izquierda y que los partidos de ideología más revolucionaria habían sido fortalecidos[130]. La mirada del PC, y hasta cierto punto la del propio presidente Allende, insistió en que los resultados electorales debían consolidarse a partir de mejores políticas sociales para así crear un sólida mayoría electoral que pudiera garantizar el triunfo

[128] Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, p. 74.
[129] *Op. cit.*, pp. 75-76.
[130] *Punto Final*, n.º 128, Santiago, 13 de abril de 1971, p. 1.

en un eventual referéndum. Tal diagnóstico era bastante consciente de que la victoria en los recientes comicios era solo parcial, pues la diferencia entre ambas coaliciones resultaba mínima. Esto significaba que, en la eventualidad de convocar un plebiscito en el corto plazo, se corría el riesgo de perderlo cuestión que provocaría un impacto político y psicológico no menor dentro de la izquierda[131].

En la oposición existieron distintos diagnósticos y matices respecto a los recientes comicios municipales. En la DC había ciertas diferencias entre los planteamientos de su organización juvenil y la directiva nacional. Para el primer sector, que llevó a cabo una junta nacional el día 18 de abril, el partido constituía un actor clave del sistema político a la hora de apoyar un proceso global de transformaciones revolucionarias, por lo que se debían buscar entendimientos con la UP, minimizando las diferencias, a objeto de «desmontar la sociedad capitalista y burguesa». La directiva nacional de la DC realizó su junta a inicios del mes de mayo, ocasión en que si bien no descartó algún tipo de acuerdo con el ejecutivo se insistió en que el proyecto de la UP podía conducir a un tipo de socialismo estatista. Al mismo tiempo se remarcó la idea de que el partido debía exponer con absoluta claridad sus propuestas programáticas a efecto de que la ciudadanía percibiera mejor las diferencias entre la izquierda y los democratacristianos[132].

El PN por su parte asumió con entusiasmo los resultados electorales pues lejos de constituirse en una fuerza marginal dentro del espectro político, las cifras lo habían situado como la tercera fuerza electoral del país. Desde esta expectante posición, el PN intentaría dar forma —una vez más— a una coalición opositora que incluyera a la DC y que, por supuesto, estuviera bajo su hegemonía política. De este modo se buscaría conformar una dura oposición a la UP que significara erosionar su capacidad de despliegue y ejecución de las transformaciones que se llevaban a cabo. Pero como se vio, para el primer semestre de 1971 ello todavía no era posible debido a la reticencia de los democratacristianos en orden a moverse hacia dicha posición. Mientras esta idea aguardaba un mejor contexto para su completa materialización, el PN insistió en su campaña de

[131] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 76.
[132] *Op. cit.*, pp. 77-78.

hostigamiento hacia el gobierno. Esto se tradujo en la utilización de diversas denuncias por hechos de violencia ocurridos en el país como parte de una estratégica campaña comunicacional articulada en la idea de que Chile transitaba hacia una situación de anormalidad jurídica e institucional, donde la protección de la propiedad privada o el derecho al trabajo estarían amenazados por la acción del gobierno. De forma paralela, este partido comenzó a presentar diversas acusaciones constitucionales contra autoridades de gobierno, sobre todo del ámbito regional, por su supuesta negligencia en la prevención y tratamiento de los hechos de violencia que se denunciaban[133]. En algunos casos, estas acusaciones recibieron el apoyo de la DC, cuestión que abría una luz de esperanza para los nacionales a efecto de concretar en algún momento ese frente opositor que estaba en su imaginario político. Visto en su conjunto, la estrategia del PN apuntaba ya sin ninguna duda a crear una situación de confrontación con el gobierno de Allende a fin de que su capacidad de acción se viera cada vez más constreñida.

Cabría indicar en todo caso que las situaciones de violencia que denunciaba el PN —y también otras colectividades— eran ciertamente efectivas, siendo en la mayoría de los casos incidentes en que las víctimas resultantes pertenecían en su mayoría a sectores de la oposición. Esto último contribuía sin duda a fortalecer a aquellas estrategias que rechazaban de modo frontal al proyecto de la UP toda vez que permitía acusar a la izquierda por su responsabilidad en la concreción de este tipo de sucesos.

Los hechos denunciados por estos actores correspondieron, en gran medida, a un conjunto de acontecimientos constatados desde mediados de abril de 1971 en los espacios rurales del centro sur del país. Como se indicó en su momento, el contexto general en el cual se producían este tipo de situaciones tenía que ver con la implementación de la reforma agraria, la cual bajo el gobierno de la UP había crecido en extensión y alcance territorial. A ello se sumaba una amplia movilización de sectores campesinos y proletarios que crecía día a día y que se había transformado en un factor relevante a la hora de implementar las medidas expropiatorias de los grandes latifundios. Se trataba, también, de un contexto más complejo dado

133 Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 80-81.

que la implementación de esta política agraria estaba articulada dentro de un proyecto de transición al socialismo que en la práctica significaba redefinir y trastocar los límites de la propiedad privada en diversos ámbitos sociales y económicos. De tal manera, los hechos de violencia registrados en estos espacios no podían desvincularse de problemáticas y discusiones más generales como las que atravesaban al conjunto de la sociedad chilena de entonces.

De los hechos de violencia ocurridos en estas semanas el que tuvo mayor repercusión fue aquel que terminó con la vida del agricultor Rolando Matus Castillo el día 19 de abril. El suceso ocurrió en la novena región de la Araucanía, una zona de fuerte predominio rural y con una economía primaria desarrollada en torno a la explotación de la tierra y los recursos forestales. El componente campesino ha sido predominante en este espacio y la población de ascendencia indígena también resulta relevante. En la propiedad de la tierra destaca una alta concentración de haciendas y latifundios en manos de diversos terratenientes agrícolas. Como se sabe, la aplicación de la reforma agraria en este tipo de territorios estaba determinada por diversos factores: desde el componente social hasta la estructura histórica en que se basaba la tenencia de la tierra. De allí que los hechos que materializaron la muerte del agricultor Rolando Matus Castillo, militante del Partido Nacional, no fueran una situación excepcional dentro de un cuadro más bien activo de tomas de terrenos que se venía produciendo en la zona centro sur del país.

El incidente, según comenta *El Diario Austral*, se produjo en la madrugada del día 17 de abril cuando un grupo de individuos pertenecientes al MCR se enfrentó a tiros con el propietario y trabajadores de un fundo al interior de la zona de Curarrehue. Según señala el rotativo, el propietario del terreno, Otto Gruner, se encontraba en una fiesta familiar al interior de su fundo cuando cerca de las 5:30 de la mañana salió a despedir a algunos de sus invitados. Estos últimos se percataron de que la propiedad había sido invadida y las vallas perimetrales cortadas en diversos puntos. Al ser avisado de la situación, Gruner se presentó en el lugar produciéndose «un violento intercambio de disparos» entre el propietario y quienes habían invadido el terreno. Los incidentes, continúa el matutino, se extendieron por casi treinta minutos, cuyo saldo final fue de cinco personas heridas: Ernestina Curipe, Segundo Curipe, Herminda Catripán, Salvador

Villa y Rolando Matus Castillo, este último herido de gravedad por lo que debió ser trasladado al Hospital Regional de Temuco[134].

Dos días después de ocurrido el incidente y debido a la gravedad de las heridas producidas por los proyectiles, sobre todo en la zona intestinal, Rolando Matus fallecería en horas de la mañana. Según el mismo medio antes citado, la operación quirúrgica a la que fue sometido la víctima no fue suficiente para salvarle la vida. Adicionalmente, *El Diario Austral* entregaba algunos datos generales de Matus quien, según el matutino, era el «brazo derecho de sus ancianos padres» teniendo a cargo la producción agrícola de una hijuela ubicada en un sector cercano al lugar en que falleció[135]. El certificado de defunción de la víctima corrobora gran parte de los antecedentes entregados por el periódico citado al consignar como causa de muerte una anemia aguda por herida de bala penetrante abdominal, fijando la hora del deceso a las 10:30 de la mañana[136].

La versión del periódico *El Siglo*, aun cuando reconocía el estado de gravedad de Matus Castillo producto del enfrentamiento, apuntó a resaltar otros aspectos. De hecho, el titular de la nota recalcaba que seis latifundistas habían sido detenidos por agresión armada en contra de algunos campesinos. En su interior, la noticia enmarcaba el suceso como parte de una «escalada desatada por un grupo de latifundistas que se opone a la aplicación de la reforma agraria». Dicha maniobra, afirmaba *El Siglo*, había sido incentivada ya desde el verano por publicaciones derechistas como *SEPA* o *Portada* que comenzaron a crear una imagen de caos en la provincia de Cautín a efecto de justificar las «agresiones patronales»[137]. Como se puede ver, este matutino adscribía el enfrentamiento que acabó con la vida de Matus Castillo dentro de un contexto más amplio, el cual refería la existencia de un clima de confrontación artificial cuyo objetivo era legitimar el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los terratenientes. Así, y siguiendo la lógica de este rotativo, los responsables

[134] *El Diario Austral*, Temuco, 18 de abril de 1971, p. 8.

[135] *El Diario Austral*, Temuco, 20 de abril de 1971, p. 1.

[136] "Certificado de defunción de Rolando Matus Castillo", Temuco, 19 de abril de 1971, n.º de inscripción 212, registro E, folio 44260084, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de enero de 2018].

[137] *El Siglo*, Santiago, 19 de abril de 1971, p. 6.

de lo ocurrido serían las clases propietarias al materializar respuestas armadas frente a la movilización de campesinos y trabajadores.

Más allá del debate que se originó entre las distintas versiones periodísticas, la muerte del joven agricultor escaló rápidamente dentro de la discusión pública. El día 20 de abril el hecho fue abordado en la sesión de la Cámara de Diputados a través de la intervención de los diputados del PN Patricio Phillips y Mario Arnello Romo. El primero de ellos, junto con homenajear a la víctima y solidarizar con su familia, expresaría una condena enérgica en contra del denominado MCR al que acusó de ser un comando «extralegal que está asolando la provincia [y] que trae destrucción y muerte». Arnello, por su parte, señalaría que el gobierno de la UP y sus representantes en esa región eran los principales responsables del hecho pues habían dejado de asumir las funciones fundamentales que les imponía la ley. De este modo, recalcaba el parlamentario, los delincuentes quedaban en la más «absoluta impunidad», al tiempo que los Carabineros eran obligados a no intervenir en este tipo de conflictos[138]. De forma muy explícita los parlamentarios nacionales endosaban la responsabilidad de lo ocurrido al Ejecutivo toda vez que este se mostraba, según la óptica expresada, incapaz de poner atajo a la ola de tomas y agresiones que se estaban produciendo en el sur del país. Como se puede advertir, este tipo de énfasis obedecía a una estrategia mayor diseñada por esta colectividad tendiente a socavar la legitimidad del gobierno a partir de la supuesta incapacidad de éste por mantener el orden público.

En cuanto a sus consecuencias prácticas, la muerte del agricultor trascendería todavía más dentro del espacio público. Pocas semanas después de ocurrido el crimen, el PN decidió fundar una brigada de seguridad denominada Comando Rolando Matus. Se trataba de una medida que buscaba, al igual que en casos como los de Arnoldo Ríos en el MIR o Juan Millalonco de la DC, mantener un recuerdo vivo y testimonial de una figura que había dado la vida por sus ideales. En concreto, el Comando Rolando Matus, según el presidente del partido Sergio Onofre Jarpa, tendría como misión resguardar las sedes del partido y brindar protección a los dirigentes que se reunían

[138] Diputados, *Diario de sesiones*, 30.ª sesión extraordinaria, martes 20 de abril de 1971, pp. 2143-2144.

en dichas instalaciones[139]. A decir verdad, la imagen de este «grupo de muchachos» como los calificó Jarpa, no guardaba mucha relación con la realidad. El mencionado comando se transformó prontamente en un grupo de choque que comenzaría a enfrentarse con las agrupaciones de izquierda, ya sea disputando la calle o defendiendo algunos predios agrícolas sobre los que pesaba la amenaza de toma o expropiación.

Las acusaciones cruzadas por la responsabilidad de lo ocurrido se mantuvieron a lo largo de los días y los hechos generados por la aplicación de la reforma agraria siguieron su curso ascendente. Resultaba muy difícil a estas alturas retrotraer a fojas cero un proceso en el que no sólo participaban las autoridades de gobierno y los funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley, sino también cientos de campesinos y militantes de diversos partidos que actuaban bajo iniciativa individual o grupal.

A fines de abril, el clima de tensión producido a propósito de la muerte de Rolando Matus Castillo se reactualizó en dos incidentes que terminaron con la muerte de los agricultores Jorge Barahona y Domitila Palma, y del campesino Juan Huillipán. El primer caso ocurrió el día 29 de abril en el fundo Nilahue de propiedad de Barahona, ubicado en la zona de Colchagua distante a unos 200 kilómetros al sur de la capital. En esa fecha, funcionarios de la CORA llegaron hasta la propiedad indicada a objeto de iniciar la expropiación del terreno, situación que causó un fuerte altercado entre los intervinientes. En su punto culminante, la discusión produjo un infarto cardíaco a Jorge Barahona quien falleció de forma inmediata. Según la versión de *El Mercurio*, los funcionarios públicos discutieron cerca de dos horas con el propietario a quien le exigían el abandono del lugar, situación que acabó en los hechos ya relatados. El hecho fue utilizado por el periódico santiaguino para exponer una fuerte crítica al proceso general de reforma agraria, en el cual, según su opinión, comenzaban a primar aspectos más sociales y políticos que técnicos. Por ello, este medio no dudaba en caracterizar el proceso que se llevaba a cabo como una verdadera «revolución agraria» que buscaba hacer desaparecer a los actuales empresarios y propietarios

[139] Patricia Arancibia, Claudia Arancibia, Isabel De la Maza, *Jarpa. Confesiones políticas*, p. 171.

agrícolas[140]. Por su parte, el periódico democratacristiano *La Prensa* señaló que este hecho revelaba de modo nítido el clima general de violencia por el que atravesaba el país, por lo que el diálogo y el respeto entre todos los actores resultaba clave para superar el negativo ambiente que se vivía[141].

Las muertes de Palma y Huillipán, en tanto, se produjeron en el marco de un mismo conflicto ocurrido en el fundo Brasil Sur de la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía. Dicha propiedad fue ocupada por algunos individuos entre los días 28 y 30 de abril, situación que desencadenó diversos enfrentamientos y discusiones con los propietarios del terreno. En ese marco, falleció el día 28, producto de un problema cardíaco, Domitila Palma Ponce, una de las dueñas del fundo[142]. Cuarenta y ocho horas más tarde se produjeron nuevos incidentes al interior de la propiedad que acabaron con la muerte del joven de 17 años, Juan Huillipán, producto de un disparo. En relación al contexto en que se produjo la muerte de Palma, *El Diario Austral* consignaba las declaraciones del mayor de Carabineros de la comuna de Lautaro quien sostuvo que la toma fue realizada por elementos que habían quedado marginados en otros asentamientos. Respecto a la situación general por la que atravesaba la zona, este medio conectó el fallecimiento de la mujer al clima generalizado de violencia existente en ese lugar, donde, a su juicio, no se respetaba el «derecho de propiedad» y se producían actos ilegales[143]. Sobre la muerte de Juan Huillipán, este mismo medio indicó que el disparo provino desde un arma percutada por Javier Maldonado, quien fue identificado como administrador del fundo Brasil Sur[144].

Lo que estos incidentes contribuían a poner en discusión dentro de la opinión pública eran cuestiones que iban más allá de lo coyuntural. Como se pudo observar, los hechos ocurridos en el

[140] *El Mercurio*, Santiago, 1 de mayo de 1971, p. 23.

[141] *La Prensa*, Santiago, 29 de abril de 1971, p. 23.

[142] El certificado de defunción de la víctima confirma como causa del fallecimiento una insuficiencia cardíaca, fijando el deceso a las 15:30 horas en su domicilio particular. "Certificado de defunción de Domitila Palma Ponce", Lautaro, 28 de abril de 1971, n.º de inscripción 101, folio 83287756, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 18 de marzo de 2021].

[143] *El Diario Austral*, Temuco, 30 de abril de 1971, pp. 1-5.

[144] *El Diario Austral*, Temuco, 1 de mayo de 1971, p. 1.

fundo Brasil Sur fueron entendidos por un sector de la prensa como ejemplos fehacientes del clima de violencia que se vivía en la zona, diagnóstico que se hacía, por supuesto, en relación a la muerte de los propietarios agrícolas y las expropiaciones que se llevaban a cabo. Desde esta perspectiva, el contexto de inseguridad e ilegalidad que se denunciaba sirvió como antecedente para exponer una crítica de fondo al proceso de reforma agraria. Respecto a esta, algunos medios señalaron que los criterios técnicos y económicos con que se había elaborado la reforma habían sido sobrepasados por intereses sociales y políticos que desataron una ola de tomas y ocupaciones masivas de distintos predios. De este modo, el proceso se había desnaturalizado completamente, siendo, además, un factor determinante para originar numerosos hechos de violencia.

Hacia la segunda quincena de mayo se abrió un nuevo escenario de violencia política cuyos principales hechos se concentraron en la capital. Este contexto estuvo determinado por la actuación de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) y la respuesta de la autoridad a través de las fuerzas policiales. Dicho movimiento, se recordará, fue fundado a fines de los años sesenta por algunos militantes que habían participado en otros grupos de izquierda de la época pero que se sentían, al parecer, descontentos con las líneas estratégicas que estas colectividades habían asumido. Entre estos militantes destacaban Ismael Villegas Pacheco, Heriberto Salazar Bello y los hermanos Arturo y Ronald Rivera Calderón. A este último, Carlota Vallebona, quien fue su pareja sentimental en estos años, lo perfila como un luchador social, de carácter brioso e inquieto por los grandes temas de la política nacional y mundial[145]. Hasta el día de hoy persiste una discusión en torno a los verdaderos objetivos y soporte ideológico de esta agrupación. Las visiones van desde aquellas que acusan a la VOP de ser un grupo de delincuentes comunes —infiltrado por la CIA o por la de extrema derecha a fin de socavar la estabilidad del gobierno— hasta quienes la visualizan como una

[145] Carlota Vallebona y Felipe Guerra, *Si no aprendemos a luchar juntos, nos matarán por separado. Mi vivencia en la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP)*. Felipe Guerra, uno de los autores, señala que el texto es una novela basada en una autobiografía en la cual se pueden encontrar algunos tintes literarios que se complementan con el uso amplio de fuentes. Se trata de una historia de vida —la de Carlota Vallebona— contada desde distintos lenguajes, pero donde predominaría la pericia e influencia del historiador.

guerrilla urbana con una ideología y cultura política particular y dispuesta a luchar por el socialismo[146].

Lo que a todas luces resulta innegable es que las operaciones que ejecutaría este grupo impactarían de forma profunda en la escena política nacional, sobre todo por la magnitud y consecuencias de dichas acciones. Cabe precisar que el actuar de este grupo no se iniciaría en el mes de mayo de 1971, pues en los primeros meses del año anterior ya se tenían noticias sobre sus actividades. En todo caso, no eran noticias muy alentadoras pues entre enero y febrero de 1970 la VOP había sufrido la muerte de uno de sus líderes, Ismael Villegas Pacheco, en un enfrentamiento con la policía, y el arresto de los militantes Edmundo Magaña, Juan Gabriel Carvajal, Leonardo Farfán y Arturo Rivera Calderón. A fines de septiembre de ese mismo año, el grupo asaltó la sucursal capitalina del Banco Panamericano, acción que dejó un vopista herido a bala por la intervención de un carabinero que se encontraba cerca del lugar y que había intentado repeler el asalto. Este tipo de acciones marcaba, para fines de 1970, una diferencia sustantiva con otras colectividades de izquierda que, a pesar de contar con estructuras operativas similares, decidieron no intensificar sus acciones armadas, sobre todo asaltos a bancos, tras la llegada de la UP al gobierno.

[146] La Policía de Investigaciones se había formado un criterio bastante preciso y enfático respecto a la composición y orgánicas de la VOP. El Comisario Carlos Rodríguez Oyarzún señalaba, en efecto, que este grupo carecía de estructuras, principios y programa al tiempo que precisaba que la mayoría de los vopistas habían sido reclutados de «entre aquellos sectores de más bajo nivel social». "Homicidio de ex Ministro Pérez Zujovic", Santiago, 25 de junio de 1971, parte n.º 32, tomo 1, *Colección histórica de homicidios, 1947-2008*, Prefectura Santiago, Brigada de Homicidios, Policía de Investigaciones de Chile. El testimonio de Patricio Dagach Rabié aporta una mirada desde dentro de la organización respecto a la composición social de la VOP: «Llegué a ser muy cercano a Ronald Rivera Calderón. De hecho, hubo un tiempo en que iba a todos lados con él... Decía que yo "era un caballero y que parecía un caballero". Y él, claramente, no lo parecía... Y es que en la VOP la mayoría eran realmente proletarios. Salvo yo y Fernando Gutiérrez, que veníamos de familias de clase media, los demás eran obreros o hijos de obreros». Patricio Dagach Rabié, *Memorias de un secuestrador*, p. 54. Una visión que destaca las consecuencias políticas de los actos de la VOP, sobre todo en el marco del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, se encuentra en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 91. Una de las últimas investigaciones sobre este grupo, que enfatiza en su trayectoria estratégica a lo largo de los años, es la tesis de Felipe Guerra, *La Vanguardia Organizada del Pueblo y su escalamiento en la violencia política. Cultura política y militancia (1969-1971)*.

Para el año 1971, las actividades de la VOP se dividían entre la actividad política al interior de algunas poblaciones y campamentos, como Nueva Habana, y acciones «expropiatorias» que les permitieran recaudar fondos para la organización. El 24 de abril, por ejemplo, miembros de este grupo asaltaron la confitería Don Raúl ubicada en el barrio comercial de Estación Central intentando apoderarse de la recaudación que era custodiada en una caja fuerte. El gerente del local, Raúl Méndez Espinoza, fue herido de gravedad cuando opuso resistencia al asalto muriendo posteriormente[147]. El 24 de mayo se volvió a tener noticias de la VOP por el asalto a una camioneta de valores que retiraba dinero desde el supermercado Montemar en el sector de Gran Avenida. En la operación resultó muerto, producto del enfrentamiento armado, el carabinero Tomás Gutiérrez Urrutia a quien, además, se le arrebató su metralleta de servicio[148].

Este tipo de acciones generó un intenso despliegue policial en busca de los cabecillas del grupo. El vopista Patricio Dagach Rabié recuerda que en este contexto los hermanos Rivera Calderón comenzaron a sentir cada vez más el «acoso policial», siendo acorralados de tal forma que su percepción de las cosas «se extravió por completo». De hecho, este militante recuerda que por esas semanas Ronald Rivera y Heriberto Salazar Bello, un expolicía integrado a la organización, comenzaron a practicar un «juego macabro», consistente en matar a quemarropa al primer Carabinero que se toparan en la calle. Estas acciones, comenta el exvopista, mantuvieron cierta continuidad hasta el homicidio de Pérez Zujovic en el mes de junio[149].

A juicio de Felipe Guerra, los miembros de la VOP fueron los únicos, dentro del espectro de la izquierda armada chilena, que lle-

[147] Guerra, *op. cit.*, p. 69.

[148] La muerte del carabinero Tomás Gutiérrez fue cubierta ampliamente por la prensa nacional. Véase, *El Mercurio*, Santiago, 25 de mayo de 1971, pp. 1 y 10. Desde la prensa de izquierda los dardos apuntaron a los grupos de extrema derecha como autores del crimen: *El Siglo*, Santiago, 27 de mayo de 1971, p. 2 y *Clarín*, 26 de mayo de 1971, p. 9. El certificado de defunción del carabinero señala que la causa de su muerte fue una herida a bala torácica, fijando el deceso a la una de la tarde en el Hospital Barros Luco. "Certificado de defunción de Tomás Gutiérrez Urrutia", Santiago, 24 de mayo de 1971, n.º de inscripción 909, registro E1, folio 82731299, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 10 de junio de 2021].

[149] Dagach, *op. cit.*, p. 61.

varon la violencia a un nivel desconocido para entonces, actuando de forma «solitaria y aislada»[150]. En buena medida, sería esta forma de proceder la que incidiría en la conformación de un particular imaginario público sobre la VOP, en el cual adjetivos como «delincuencia común», «lumpen organizado» o «frialdad para asesinar» serían los más recurrentes. Ciertamente, la prensa escrita jugaría un rol clave en este proceso al publicar sendos reportajes sobre las actividades de esta organización, los cuales fueron acompañadas en su mayoría de dosieres fotográficos que mostraban distintos aspectos del grupo. De igual modo, esta visión que se creó alrededor de la VOP sería utilizada con distintos objetivos tanto por el oficialismo como por la oposición. En el primer caso, y como se verá más adelante, diversos sectores de la izquierda acusarían a este movimiento de ser un grupúsculo sin orientación clara y que solo causaba problemas al gobierno de Allende. Desde la vertiente opositora, el accionar de la VOP fue visto como una prueba inequívoca de los grupos armados que asolaban el país, así como de la incapacidad del Ejecutivo por ponerle atajo a la escalada de violencia que existía.

Tales planteamientos, que ya habían sido esbozados por la oposición a partir de diferentes hechos, alcanzarían una resonancia mayor al concretarse el asesinato del exministro democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic. Los hechos se produjeron en la mañana del día 8 de junio de 1971 en el sector oriente de la capital cuando el automóvil particular de la víctima fue interceptado de improviso por un comando vopista. Uno de los integrantes del grupo se bajó y descargó la munición de su metralleta en contra del exministro quien quedó inmóvil y desangrándose en el asiento del conductor[151]. María Angélica Pérez Yoma, hija de Pérez Zujovic y acompañante de este esa mañana, recuerda que tras ametrallar a su padre el asesino se movió con su arma buscando dispararle a ella, pero, gracias a su rápida reacción, logró refugiarse en el piso del vehículo esquivando

[150] Guerra, *op. cit.*, p. 70.

[151] El certificado de defunción de la víctima confirma la gravedad de las heridas al señalar como causa de muerte una herida de bala torácica, fijando su fallecimiento a la 11:20 de la mañana. "Certificado de defunción de Edmundo Pérez Zujovic", Santiago, 8 de junio de 1971, n.º de inscripción 1004, registro E1, folio 44260119, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de enero de 2018].

así el impacto de las balas. Tras unos segundos, la testigo cuenta que permaneció «rígida, inmóvil, sin saber si estaba viva o muerta» y escuchando al mismo tiempo el motor de un automóvil que se alejaba[152].

La conmoción por el asesinato del exministro copó rápidamente la agenda noticiosa. El periódico *La Prensa* señaló que el crimen lo cometió un «comando terrorista» que disparó «a boca de jarro» una ráfaga de metralleta[153]. Esta misma edición comentaba una información que comenzó a circular casi de inmediato después de ocurrido el crimen y que indicaba que el autor del homicidio sería Ronald Rivera Calderón perteneciente a la VOP. De hecho, se citaban declaraciones del propio director general de Investigaciones, Eduardo Paredes, quien, al anochecer del día 8 de junio, ya había individualizado a los hombres de la VOP como los autores del homicidio[154].

Como era de esperar, la reacción de la DC terminaría por atribuir gran parte de la responsabilidad del asesinato de Pérez Zujovic al propio gobierno. En la sesión especial que el Senado convocó el mismo día del homicidio, el parlamentario democratacristiano Tomás Reyes leyó la declaración oficial del partido que en su parte medular indicaba:

> Señalamos al país que este asesinato, al igual que otros innumerables actos de violencia que se repiten a diario en Chile, son el resultado, fundamentalmente, del clima de odios, de difamación y de violencia

[152] María Angélica Pérez Yoma, *La gran testigo. El asesinato de mi padre durante la Unidad Popular*, p. 145. Este texto es una fuente interesante como relato testimonial sobre la vida pública y privada de la familia Pérez Yoma, sin embargo, sugiere una línea de análisis que debe tomarse con cuidado, pues entre otras cosas responsabiliza exclusivamente al gobierno de la UP y sus bases militantes como responsables de los hechos de violencia política ocurridos en ese periodo. Al mismo tiempo conjetura en que la muerte de su padre obedeció a un oscuro plan ideado en las altas esferas del poder sin aportar datos o documentos concluyentes. Una versión similar entrega el exsenador democratacristiano José Musalem quien indica que días antes del crimen de Pérez Zujovic, este lo citó junto a otros camaradas a su domicilio particular para conversar. En dicho encuentro, el exministro les contó que tenía conocimiento de la existencia de una reunión política «de alto nivel» donde se había acordado «eliminarlo». Pérez Zujovic también señaló que le iban a pasar una grabación de dicha conversación y que se volvería a poner en contacto con ellos para compartirla. José Musalem, *Mi vida entre líneas. Memorias*, p. 155.

[153] *La Prensa*, Santiago, 9 de junio de 1971, p. 1.

[154] *Ibid.*

que órganos de televisión, de prensa y radio pertenecientes a sectores de Gobierno difunden en forma permanente con la tolerancia de las autoridades que están llamadas por la ley a sancionarlas[155].

En una línea similar, pero con un tono más duro aún, el senador Patricio Aylwin había sostenido en horas de la tarde que «el emporcamiento de cierta prensa, alguna vinculada directamente al Estado, son los causantes de este asesinato»[156]. Al día siguiente, los cuestionamientos desde este partido hacia el gobierno continuaban, esta vez en la sesión de la Cámara de Diputados. Allí el parlamentario Luis Pareto, también de la DC, inquirió al ministro del Interior, José Tohá, para que respondiera por las medidas de seguridad que se habían adoptado frente a este grupo y en particular respecto a aquellos miembros que tras haber estado en prisión habían salido en libertad. Al mismo tiempo, el parlamentario hizo hincapié en la forma por cómo se venían «exacerbando los ánimos y caldeando la opinión pública» desde algunos medios que si bien no pertenecían al Ejecutivo sí representaban «el pensamiento oficial» del Gobierno de la República[157].

El crimen del exministro había impactado fuertemente dentro del público en general. Por lo mismo, la condena del luctuoso homicidio fue casi transversal en el país. La comisión política del PC, por ejemplo, condenó «en los términos más enérgicos» el asesinato de Pérez Zujovic al tiempo que recalcaba que las diferencias ideológicas existentes entre la víctima y el partido no disminuían en modo alguno su enfática condena del mismo[158]. Años después, el secretario general de la colectividad, Luis Corvalán Lépez, recordaría que a pesar de que la UP nada tenía que ver en este suceso la oposición aprovechó el crimen para revertir y detener el entendimiento entre las fuerzas progresistas que se llevaba a cabo por aquel entonces, cavando «un abismo entre la izquierda y el centro»[159].

El Partido Radical, en tanto, también condenaría el crimen a través de una declaración publicada en *El Mercurio* el día 9 de junio.

[155] Senado, *Diario de sesiones*, 5.ª sesión, martes 8 de junio de 1971, p. 284.

[156] *La Prensa*, Santiago, 9 de junio de 1971, p. 7.

[157] Diputados, *Diario de sesiones*, 3.ª sesión extraordinaria, miércoles 9 de junio de 1971, pp. 57-58.

[158] *Principios*, n.º 139, Santiago, mayo-junio de 1971, p. 106.

[159] Luis Corvalán Lépez, *De lo vivido y lo peleado. Memorias*, p. 170.

Allí, junto con lamentar y rechazar lo sucedido, esta colectividad sostuvo que el crimen político jamás había tenido cabida en las «prácticas de la limpia democracia de nuestro país» por lo que se trataba de un hecho anormal para la trayectoria institucional de Chile[160]. Desde un ángulo distinto, aunque no menos crítico con el accionar de la VOP, el MIR entendería los recientes hechos como resultado de una reacción dictaminada por el odio de clases en contra de los «patrones y asesinos de gobiernos anteriores», en clara alusión a la anterior administración democratacristiana. Se trataba, según el MIR, de un proceder sin ningún tipo de «táctica» ni «racionalidad política» en un contexto diferente como el que se había inaugurado con la llegada de la UP al gobierno[161].

Tras la conmoción inicial y las declaraciones que desde distintos ángulos referían el homicidio de Pérez Zujovic, se puso en marcha una rápida operación para capturar a los autores del crimen. A través de diversos datos, la policía civil pudo dar, cinco días después del homicidio, con la casa de seguridad donde se encontraban los vopistas. Esta se ubicaba en calle Coronel Alvarado, un sector residencial antiguo muy próximo al Hipódromo Chile. El comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, recuerda que se trató de una «cacería implacable», y que, al momento de ser localizado el grupo, y ante la resistencia inicial que presentaron los hermanos Rivera y el resto de los integrantes, él autorizó que una unidad militarizada colaborara con la policía civil en el aislamiento del sector[162]. La tarea fue encomendada al entonces jefe de la zona de emergencia de Santiago general Augusto Pinochet. Éste recuerda, en su texto *El día decisivo*, que en horas de la madrugada del día 13 de junio efectivos de investigaciones y militares se encontraron con una inusitada resistencia de parte del grupo armado, por lo que hubo de esperar hasta el amanecer para acometer una acción de mayor envergadura. Entonces, dispuso un cerco perimetral a las casas que circundaban la vivienda y se inició el asalto, el cual duraría cerca de «dos horas»[163].

[160] *El Mercurio*, Santiago, 9 de junio de 1971, p. 22.

[161] "El MIR a los obreros, estudiantes y soldados", *Punto Final*, n.º 133, Santiago, martes 22 de junio de 1971, pp. 6 y 7.

[162] Carlos Prats, *Memorias. Testimonio de un soldado*, p. 209.

[163] Augusto Pinochet, *El día decisivo. 11 de septiembre de 1973*, p. 60.

El saldo de la operación uniformada fue de varios heridos y dos muertos. Según comenta Felipe Guerra, Ronald Rivera Calderón fue alcanzado por una bala disparada por los militares, en tanto que Arturo Rivera Calderón se suicidó al ver que su detención sería inminente[164]. Por su parte, los vopistas Carlos Rojas, Daniel Vergara Rufatt y Arnaldo Carvajal se autoinfirieron heridas a bala, mientras que horas antes se habían entregado a la policía Carlota Vallebona, Galvarino Jorquera, Carmen Silva y María Cecilia Silva[165].

A todas luces parecía ser el fin del grupo. Sin embargo, uno de los militantes que aún no había sido detenido por la policía emprendió una acción suicida a los pocos días de ocurrida la operación de calle Coronel Alvarado. Se trataba del vopista Heriberto Salazar Bello quien premunido de diversas armas de fuego y un cinturón de explosivos adosado a su cuerpo se presentó en el cuartel central de la Policía de Investigaciones exigiendo a voz en cuello hablar con su director, Eduardo «Coco» Paredes. Pronto se produjo un intercambio de disparos entre los funcionarios policiales que terminó cuando a Salazar Bello le detonó la carga explosiva que llevaba adherida dejando cuantiosos daños materiales y humanos. Además

[164] Guerra, *op. cit.*, p. 73. El certificado de defunción de Ronald Rivera Calderón señala que su muerte se produjo por una herida de bala torácica, fijando el deceso a las siete de la mañana. "Certificado de defunción de Ronald Rivera Calderón", Santiago, 13 de junio de 1971, n.º de inscripción 1132, registro E1, folio 82731355, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 23 de febrero de 2021]. En el caso de Arturo Rivera Calderón el documento indica que su muerte se produjo por una herida de bala en el cráneo, no especificando si se trató de un suicidio. Adicionalmente, fija el deceso a las 12:15 del mediodía lo que indica que logró sobrevivir por varias horas tras el impacto del proyectil en su cabeza. "Certificado de defunción de Arturo Rivera Calderón", Santiago, 13 de junio de 1971, n.º de inscripción 1131, registro E1, folio 82731318, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 23 de febrero de 2021].

[165] El subdirector de la Policía de Investigaciones y testigo directo de estos hechos, Carlos Toro, entrega una versión similar respecto al allanamiento a la casa de calle Coronel Alvarado. Sobre la muerte de Ronald Rivera asegura que tanto él como Eduardo Coco Paredes ordenaron no disparar cuando Rivera apareció en los tejados ya cerca del amanecer. Fue un soldado del Regimiento Buin, indica Toro, quien le disparó matándolo instantáneamente. En el caso de Arturo Rivera, el subdirector señala que casi al finalizar el operativo se escuchó un disparo en una vivienda. Al ingresar a ella, encontraron al hermano de Ronald con un disparo en la sien derecha efectuado con una pistola calibre 45 y un cinturón de dinamita adosado a su cuerpo. Carlos Toro, *La guardia muere, pero no se rinde… mierda. Memorias de Carlos Toro*, p. 342 y ss.

de la muerte del vopista, cuyo cuerpo quedó despezado en la entrada principal del cuartel[166], hubo tres policías muertos, Gerardo Romero Infantes, Mario Marín Silva[167], Carlos Pérez Bretti[168] y varios heridos de consideración.

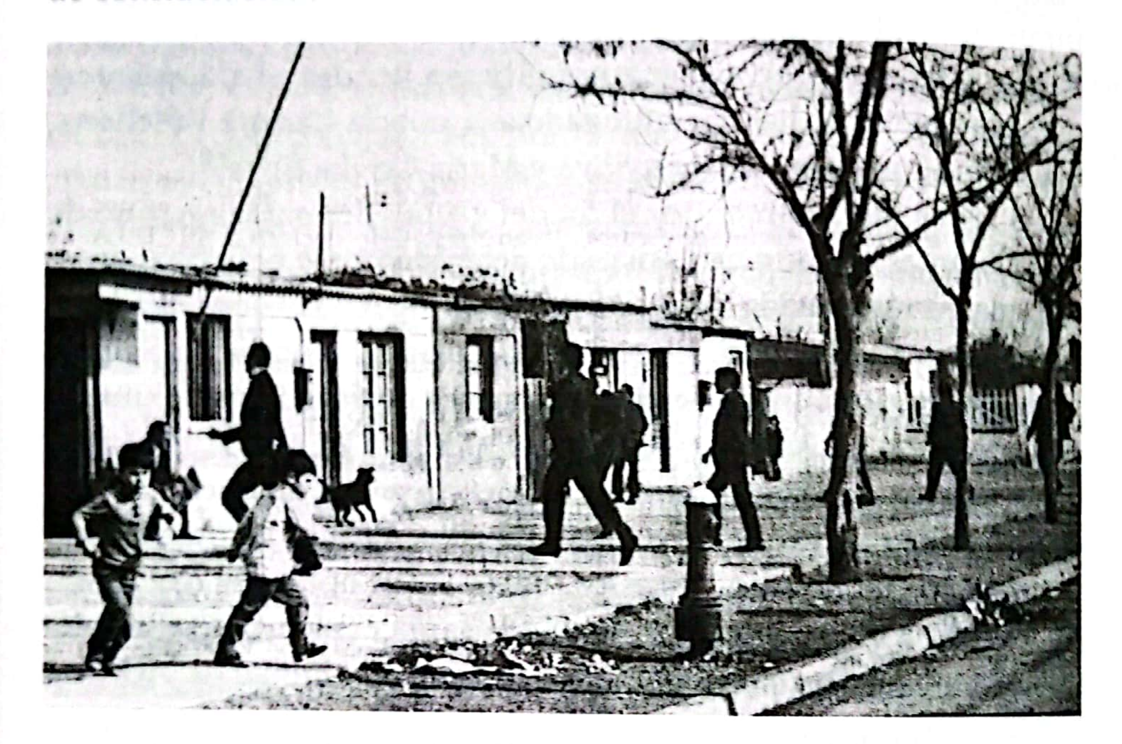


Imagen n.º 1. Redada de la policía civil en población El Pinar para capturar a los vopistas involucrados en el crimen de Edmundo Pérez Zujovic. *Ercilla*, n.º 1874, 16 al 22 de junio 1971, fotografía de Hernán Castillo. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

Con la muerte de Salazar Bello y la captura de numerosos vopistas el grupo parecía estar desarticulado. Carlota Vallebona recuerda,

[166] "Certificado de defunción de Heriberto Salazar Bello", Santiago, 16 de junio de 1971, n.º de inscripción 1189, registro E1, folio 82731442, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 23 de febrero de 2021].

[167] El certificado de defunción de este policía anota como causa de muerte una herida a bala torácica. "Certificado de defunción de Mario Marín Silva", Santiago, 16 de junio de 1971, n.º de inscripción 1070, registro E1, folio 83288077, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 18 de marzo de 2021].

[168] El certificado de defunción de este policía anota como causa de muerte múltiples heridas a bala. "Certificado de defunción de Carlos Pérez Bretti", Santiago, 16 de junio de 1971, n.º de inscripción 1069, registro E1, folio 82731419, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 23 de febrero de 2021].

no obstante, que hubo un incipiente intento de reorganización de la VOP, más bien de carácter celular, hacia el año 1972 pero que al parecer no tuvo mayores resultados[169]. Con todo, la magnitud de las acciones perpetradas por este grupo en los meses de mayo y junio de 1971 habían sido suficientes para generar un profundo impacto dentro de la escena política. Al calor del conjunto de antecedentes y hechos relacionados con este grupo se podrían plantear tres interrogantes generales respecto a sus objetivos y estructuras.

La primera de ellas tiene relación con sus tiempos de actuación y en particular con la decisión de intensificar sus acciones armadas a partir de mediados de 1971, cuando el contexto nacional se visualizaba en favor del proyecto socialista de la UP. En futuras investigaciones se podría indagar, en efecto, hasta qué punto el contexto nacional, signado por un proceso revolucionario que para abril de 1971 se veía exitoso, ejerció una influencia en sentido contrario dentro de la VOP. Es decir, en qué medida los éxitos del gobierno popular significaban, dentro del imaginario de una parte de la izquierda chilena, opacar las estrategias rupturistas de algunos movimientos como la VOP, limitando así sus posibilidades de despliegue dentro del espacio público. Quizás aquí deba insertarse también una pregunta muy puntual respecto a por qué la VOP decidió asesinar a Pérez Zujovic en junio de 1971 y no antes. Si esta colectividad estaba segura de la responsabilidad política que le cabía al exministro del Interior por los sucesos de Pampa Irigoin ocurridos en 1969 —cuestión por lo demás largamente publicitada por la izquierda— por qué no preparó antes una operación de ajusticiamiento en contra de aquél, por ejemplo, a lo largo de 1970 cuando Zujovic ya se encontraba retirado de la política activa.

Una segunda interrogante se refiere al rol de los distintos militantes que pasaron por las filas de la VOP. Felipe Guerra ha realizado un trabajo de reconstrucción de las trayectorias de varios vopistas involucrados en los acontecimientos narrados en estas páginas[170]. Sin embargo, aún quedan algunos vacíos que llenar respecto al rol de ciertos militantes extranjeros que se insertaron en la VOP, como fue el caso del japonés Shinichi Higano quien prestaría testimonio a la Policía de

[169] Vallebona y Guerra, *op. cit.*, pp. 341 y ss.
[170] Guerra, *op. cit.*, p. 44.

Investigaciones y del cual no se manejan suficientes antecedentes[171].

La tercera interrogante se refiere al lugar que debería ocupar este tipo de organizaciones dentro de los procesos de revisión historiográfica que se están desarrollando sobre la UP en particular, pero también respecto al siglo xx chileno en general. En otras palabras, la pregunta es si será posible, y hasta qué punto, apartarse de los esquemas interpretativos ya existentes sobre la lucha armada de estos grupos a efecto de visualizarlos bajo otro tipo de reflexiones.

En virtud de los antecedentes expuestos, es indudable que las acciones de la VOP incidieron en un reordenamiento más o menos importante del cuadro político. Desde ya los discursos que remarcaban la existencia de graves hechos de violencia perpetrados por grupos de izquierda adquirirían mayor legitimidad en las semanas siguientes. De hecho, el sector conservador de la DC que hizo suyo este tipo de denuncias salió más fortalecido de esta coyuntura, adquiriendo un peso decisivo dentro del partido y ganándose un apoyo clave de buena parte de la base militante. También tuvieron mayor eco aquellos emplazamientos que una y otra vez culpabilizaban al gobierno de la UP por su incapacidad para prevenir estos incidentes, o en su defecto, por no ponerles atajo cuando se observaba un incremento sostenido de los mismos.

Como se puede advertir, comenzaban a inundar el espacio público un conjunto de discursos que criticaban con dureza a la administración allendista y que en la práctica servían para erosionar, ahora con mayor insistencia, la legitimidad del proyecto socialista. Si a comienzos de abril de 1971 esta ofensiva opositora se veía aún desarticulada en su composición interna, para fines de junio el panorama había cambiado radicalmente. Ya no se trataba de cuestionamientos que provenían desde espacios marginales y que al materializarse caían en el vacío. Los hechos de violencia política comenzaban a mostrarse como una realidad inquietante que no respondía a meras suposiciones, ni tampoco a la sola actuación de los grupos de extrema derecha.

[171] Según Carlos Toro, un año después del crimen de Edmundo Pérez Zujovic se pudo determinar, aunque de forma extrajudicial, la participación de al menos tres ciudadanos panameños como instigadores del crimen del exministro. Para Toro y Paredes, no quedaban dudas de que estos hombres «trabajaban para CIA». Toro, *op. cit.*, pp. 353-355.

El crimen del exministro también generó consecuencias prácticas dentro del ámbito partidista y del sistema institucional en general. Sin ir más lejos, a mediados de junio la mesa de la Cámara de Diputados, encabezada hasta ese momento por parlamentarios oficialistas, fue censurada, estructurándose a partir de entonces un Congreso que en sus dos cámaras sería presidido por la oposición. Por otra parte, el homicidio de Pérez Zujovic fue el punto de inflexión que marcó el distanciamiento definitivo entre los democratacristianos y la UP. Esto último se explicaría por diversos motivos. Uno de ellos, como se indicó más arriba, fue el peso que había ganado el ala conservadora de la DC dentro del partido y que promovía un tipo de oposición más dura en contra del gobierno. Cabe recordar que hasta inicios de abril dicha estrategia no había adquirido todavía el suficiente espesor ni legitimidad para desplegarse dentro del partido. Sin embargo, el homicidio de un destacado militante, que había ocupado la vicepresidencia del país bajo el gobierno de Frei Montalva, reordenó los espacios de poder dentro de la colectividad. El expresidente emergería a partir de entonces como el líder natural del partido, y con ello del sector que adhería a su figura, aunque de momento sin ocupar un cargo formal.

Lo que estaba *ad portas* de producirse era una confluencia inevitable en el conjunto de la oposición gracias al nuevo escenario que se había creado. Como ha destacado Luis Corvalán Marquéz, esta sintonía entre la DC y el PN obedecía a que el discurso de ambas colectividades comenzaba a articularse en torno a dos grandes tópicos: el clima de odios «resultante de la política del gobierno» y la nula capacidad del Ejecutivo «para garantizar el orden»[172]. Lo que faltaba para solidificar un entendimiento más estrecho entre ambas colectividades era alguna coyuntura particular que permitiera mostrar, sobre todo en el caso del PN, un deseo de entendimiento y actuación conjunta dentro de un solo polo opositor[173]. El devenir

[172] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 92.

[173] Para el senador Rafael Agustín Gumucio —figura históricamente ligada a la Democracia Cristiana—, el Partido Nacional esbozó como uno de sus argumentos principales para alcanzar la unidad de la oposición la idea de que el Gobierno de la UP era minoritario ya que el 36 % alcanzado por Allende en 1970 no era la expresión de una mayoría democrática. Según el parlamentario, la DC rechazó en un primer momento tal planteamiento, para luego terminar por aceptarlo en los hechos. Rafael Agustín Gumucio Vives, *Apuntes de medio siglo*, p. 197.

social y político del país se encargaría de entregar en el corto plazo algunas de esas oportunidades.

Así, por ejemplo, el día 12 de junio se produjo un primer síntoma de acercamiento cuando ambos partidos decidieron ir juntos a la elección de rector de la Universidad de Chile. La lista de la oposición fue encabezada por el democratacristiano Edgardo Boeninger quien a la larga se impondría sobre el candidato de la UP, Eduardo Novoa M. Casi un mes después, el 18 de julio, se disputaron las elecciones complementarias por Valparaíso para llenar un escaño en la Cámara de Diputados. Nuevamente, se observó una confluencia táctica entre ambas agrupaciones, sobre todo de parte de la derecha nacionalista que se abstuvo de presentar un candidato propio prefiriendo apoyar al postulante democratacristiano, Óscar Marín. Tal situación no pasó inadvertida para el sector juvenil de este último partido, que acusó a la directiva nacional de dejarse arrastrar hacia posiciones retrógradas por parte del PN. Los resultados de la elección complementaria brindaron un triunfo a Marín por sobre el socialista Hernán del Canto. Aunque se trataba de una victoria estrecha (50,16 % versus 48,05 %) diversos sectores políticos la interpretaron como una derrota para el gobierno. El PN, por ejemplo, sostuvo que los comicios significaron un rechazo rotundo al gobierno y a la «prepotencia marxista». Desde el oficialismo, el PC reconoció que existía cierto estancamiento en la correlación de fuerzas, cuestión que en lo absoluto favorecería a largo plazo al gobierno. Para el PS, el virtual empate social existente en Valparaíso —y que de algún modo podía extrapolarse al conjunto del país— era un signo de advertencia en orden a que debía acelerarse la movilización de masas[174].

A todo lo anterior se sumó un proceso de escisión interna en la DC a fines de julio —y generado sin duda por los recientes hechos— que terminó con la salida de un sector importante de la militancia juvenil y del ala izquierdista. Estos segmentos, a los que se adheriría un conjunto importante de militantes del MAPU, pasaron a conformar la Izquierda Cristiana (IC), colectividad que en el corto plazo se integró a la UP. Según la historiadora Patricia Arancibia este hecho habría favorecido las pretensiones del PN en orden a actuar de consuno con la DC pues este actor, tras la crisis de fines de julio, se

[174] Gumucio Vives, *op. cit.*, pp. 109 y ss.

habría «depurado» de sus tendencias filoizquierdistas dejando así el campo libre al ala más conservadora del partido[175]. A pesar de que los democratacristianos insistirían en el camino propio y en declararse como una colectividad que no estaba aliada con la derecha, en la práctica se habían sucedido una serie de hechos que apuntaban en la dirección contraria.

Estos meses se cerraban, pues, con un reordenamiento general del cuadro político. En dicho proceso, los hechos de violencia política tendrían una incidencia no menor ya que en algunos casos repercutieron con fuerza al interior de ciertas colectividades hasta determinar modificaciones importantes de sus líneas estratégicas. Este fue el caso, como se ha visto, de la DC a raíz del homicidio de Pérez Zujovic en junio de 1971. En otros casos, este tipo de hechos sirvió como insumo para reforzar los emplazamientos discursivos en contra del gobierno, al que se acusaba de incentivar directa e indirectamente la violencia y, más aún, de no poder contenerla.

A la luz de algunos datos cuantitativos, cabría apuntar que la mayor parte de los sucesos de violencia registrados en estos meses y que terminaron con la vida de algunas personas tuvieron como víctimas fundamentales a miembros de la oposición. El PN había perdido a Rolando Matus en un enfrentamiento en la zona de Curarrehue al interior de la novena región, mientras que la DC debió lamentar el deceso de dos militantes: el ya mencionado Pérez Zujovic a mediados de junio y Juan Millalonco al iniciarse abril. El resto de las víctimas, sin militancia política conocida, fueron personas ligadas al mundo rural —sobre todo pequeños y medianos propietarios— de los cuales se podría deducir que quizás se oponían al proceso de reforma agraria llevado a cabo por el gobierno[176].

[175] Arancibia, P.; Arancibia, C.; De la Maza, *op. cit.*, p. 150.

[176] A fines de julio se produjo en Rancagua la muerte del joven agricultor Gilberto González Gómez en un asalto registrado en su casa por parte de un grupo de individuos que, según trascendió, estaban buscando armas. Al parecer, se habría tratado de un hecho delictual, sin embargo, la prensa local especuló con que el asalto pudo ser perpetrado por miembros de un grupo político. Véase, *El Rancagüino*, 31 de julio de 1971, p. 3. El certificado de defunción de la víctima anota como causa de muerte una anemia aguda, herida traspasante torácico-abdominal con compromiso hepático. "Certificado de defunción de Gilberto González Gómez", Rancagua, 31 de julio de 1971, n.º de inscripción 392, registro E, folio 82794969, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha

Desde un punto de vista cualitativo, las muertes producidas en este periodo se materializaron por la acción predominante de elementos civiles, ya fuese por grupos organizados, como por acciones individuales determinadas por un marco particular de conflictos. En la mayor parte de los casos, el problema de fondo era la puesta en marcha del proceso de reforma agraria que había gatillado sendos enfrentamientos en los espacios rurales a raíz de las tomas y ocupaciones de terrenos, muchas de las cuales ocurrían al margen de la ley. Los eventos producidos en espacios urbanos, en tanto, obedecieron en su mayoría a situaciones de confrontación entre grupos organizados en el marco de campañas electorales o enfrentamientos de índole callejera. En el caso del homicidio de Edmundo Pérez Zujovic cabría indicar la existencia de un plan previo que entendía el crimen político como parte de un repertorio más extenso de acciones armadas.

Igual de importante que lo anterior fue el hecho de que la casi totalidad de las situaciones de violencia política verificadas, y en particular aquellas que derivaron en la muerte de personas, fueron vinculadas por los partidos políticos a temáticas más generales. Es decir, no quedarían relegados a un segundo plano ni serían aquilatados como eventos marginales dentro del escenario político, sino que, por el contrario, eran parte esencial de la dinámica política en curso. Así, la muerte de Rolando Matus y otros hechos de similar tenor ocurridos en las zonas rurales representaban, bajo la óptica del PN, una prueba indesmentible de la ola de violencia que acechaba al sur del país y cuyos responsables principales eran grupos armados de extrema izquierda. Por una línea similar transitó la posición de la DC tras la muerte de sus dos militantes, Millalonco y Pérez Zujovic, entre abril y junio. Del mismo modo, este tipo de situaciones eran utilizadas por la oposición para acusar la falta de autoridad y capacidad de control del Ejecutivo a efecto de atajar el problema de la violencia[177].

de emisión: 25 de febrero de 2021]. El abogado y periodista Maximiano Errázuriz, quien por entonces desarrollaba su carrera profesional en la zona, afirma que la muerte de González fue producida por militantes de izquierda que habían ingresado a la propiedad en busca de armas. Uno de los acusados, según Errázuriz, era sobrino del diputado socialista por la zona Héctor Olivares. Véase, Maximiano Errázuriz, *Bitácora de un diputado*, pp. 98 y 99.

[177] Esto sucedió, inclusive, en aquellos casos en que el trasfondo político del suceso no estaba suficientemente claro. Así, por ejemplo, cuando murió el carabinero Jorge

Desde un ángulo general, este periodo tiene la particularidad de que el impulso reformador del gobierno, que hasta el mes de abril parecía consistente en diversos planos, se fue poco a poco desdibujando hasta quedar de algún modo estancado. Hubo diversas problemáticas que el Ejecutivo no pudo sortear con éxito, evidenciando su incapacidad efectiva de control y conducción de la agenda política, situación que a la larga comenzaría a desgastarle. De hecho, el tema de la violencia política era uno de los nudos más complejos de resolver para la dirigencia gubernativa. Mientras una parte del oficialismo se mostraba partidaria de conducir un proceso político dentro del marco institucional, otro sector de la UP —y algunos grupos situados en la extrema izquierda— explicitaban posturas más rupturistas que defendían la violencia como método de acción, cuestión que en ciertos casos fue efectivamente llevada a la práctica.

Esta compleja ambigüedad, que se conectaba también a procesos más intensos de movilización social y a actuaciones cada vez más autónomas por parte de diversos actores sociales, no pudo ser resuelta de forma cabal por el gobierno. En el mediano plazo, esto terminaría por jugar en contra del proyecto socialista, pues se incrementaría la sensación de división interna dentro de la alianza con un Ejecutivo sobrepasado por un conjunto amplio de problemas. Al mismo tiempo, estas dificultades proveían de argumentos cada vez más útiles a la estrategia inflexible de la oposición, sobre todo en el caso de la derecha que no estaba dispuesta a otorgar ni el más mínimo margen de maniobra al gobierno.

Cartes Díaz el 16 de junio de 1971 en Concepción producto de un disparo, se especuló con que dicho acto había correspondido a un ataque de militantes del MIR en contra del funcionario. De hecho, el senador democratacristiano Patricio Aylwin incluyó a Cartes en una lista de víctimas de la violencia que adjuntó en su intervención en la Cámara Alta realizada en septiembre de 1972. Véase, Senado, *Diario de sesiones*, 97.ª sesión, jueves 14 de septiembre de 1972, p. 4574. Cabe puntualizar que la prensa de esa ciudad indicó en su momento que la muerte del carabinero se debió a un hecho de connotaciones estrictamente policiales, donde un individuo identificado como Gastón Gonzalo Malbrán, alias el Choclo, disparó por la espalda a Cartes mientras se llevaba a cabo un registro en un local conocido como Quitapenas. Este sujeto compartía junto a otros individuos, entre los cuales estaba Roberto Zapata Zavala, sindicado como una delincuente habitual del sector. Véase, las ediciones del periódico penquista *El Sur* de los días 18 y 19 de junio de 1971.

En tránsito hacia un nuevo cuadro social y político, agosto a diciembre de 1971

Los meses de mayo y julio dejaron consecuencias importantes dentro de la escena política nacional. Como se recordará, ese periodo fue complejo sobre todo para el gobierno que debió enfrentar desde acusaciones cruzadas por su incapacidad para mantener la seguridad interior hasta una derrota electoral de su candidato en los comicios complementarios por Valparaíso.

A pesar de que el Ejecutivo había avanzado en la materialización del programa de reformas estructurales —que incluían puntos no menores como la nacionalización de la banca y la gran minería—, las dificultades y tropiezos no tardaron en aparecer al iniciarse el segundo semestre de 1971. Ello se observó, por ejemplo, a partir de los primeros pronunciamientos de la Contraloría en contra del Ejecutivo, y también por algunos conflictos que surgieron en los espacios fabriles[178]. En estos últimos, en efecto, hubo disputas y conatos de pelea entre aquellos empleados que se oponían a la intervención gubernamental y los obreros que buscaban acelerar dicho proceso. También comenzaba a aparecer, aunque de forma tímida todavía, el problema del desabastecimiento de mercaderías e insumos de primera necesidad en algunas zonas. Para buena parte del gobierno se trataba tan solo de coyunturas pasajeras que podrían ser superadas en el corto plazo.

Sin embargo, el curso de los acontecimientos mostraría que este tipo de conflictos escalaría en magnitud hacia el futuro. A lo anterior cabría sumar los cambios internos producidos en algunas colectividades y el reposicionamiento de estrategias que hasta entonces no se habían desarrollado del todo. Se recordará que la DC había sufrido una escisión interna en el mes de julio que acabó con la salida de un grupo de dirigentes y militantes adscritos al ala izquierdista del partido. Todo hacía indicar que el sector conservador de esta colectividad comenzaría a ganar mayores espacios de poder al interior de la tienda hasta transformarse, en el largo plazo, en su tendencia hegemónica. En los primeros días de septiembre, no obstante, este partido se abrió a la posibilidad de establecer ciertos acuerdos con el

[178] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 119-120.

Ejecutivo, mostrándose de este modo un tanto distante del PN. De hecho, decidiría no apoyar la acusación constitucional que presentase la derecha en contra del ministro de economía Pedro Vuskovic. En todo caso, esta especie de tregua entre el principal partido opositor y el gobierno sería momentánea, pues a fines de septiembre se observaría un nuevo distanciamiento.

Por otro lado, la derecha, que en los primeros meses del Gobierno de la UP estaba aún en una situación de repliegue, se mostraba en el segundo semestre de 1971 más activa y dispuesta a comandar la agenda estratégica de la oposición. Su retórica, que advertía sobre los riesgos de un «gobierno marxista», comenzaba poco a poco a calar dentro de ciertos segmentos de la población. En correspondencia con este discurso, el PN se involucraría cada vez más en acciones de movilización de masas. De hecho, entre los meses de octubre y noviembre de 1971, este partido apoyó las jornadas de protestas convocadas por diversos gremios profesionales en contra del gobierno. Más adelante se entregaría un apoyo de similar tenor a aquellos grupos que, como las clases medias, se mostraban ya inequívocamente en la vereda opositora al proyecto de la UP.

Los partidos del oficialismo, en tanto, comprendían que la situación había cambiado y que ya no era claro que el gobierno pudiera seguir manteniendo de modo indefinido la iniciativa política. El PC insistirá, a comienzos de septiembre, en que resultaba necesario «enderezar el timón». Esto significaba mejorar la conducción política en todos los espacios y avanzar en la consolidación de un gran frente social que legitimara el accionar del gobierno. El PS por su parte, sin desechar la importancia de los cambios institucionales y políticos, apuntó a que estos debían estar orientados a resolver aquellos nudos que estaban mermando la capacidad ejecutiva del gobierno. Dentro de este ámbito, el tema del poder resultaba clave. Por ello, un cambio de trascendencia a nivel institucional —como la instauración de una Cámara Única propiciada por este partido— era el camino más adecuado[179]. En paralelo a los diagnósticos que se hacían, comenzó a materializarse una mayor movilización de masas que buscaba retomar la presencia y protagonismo de la izquierda en el espacio público. Ejemplo de ello fue el multitudinario

[179] Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, p. 123.

evento que organizó la UP para el día 4 de noviembre con motivo de celebrar el primer año de gobierno[180].

A pesar de estas iniciativas, la segunda quincena de septiembre comenzaría a mostrar un incremento sostenido en el clima de polarización política. En buena medida, ello fue el resultado de la puesta en circulación de algunas declaraciones partidistas que explicitaron acusaciones cruzadas de distinta naturaleza. El PS abriría el debate con una quemante declaración, publicada el 17 de ese mes, a través de la cual denunciaba la existencia de un plan sedicioso que buscaba la caída del gobierno. Los cabecillas de dicho plan no eran otros que los líderes de la oposición —Frei y Jarpa— en alianza con la CIA y sectores de la burguesía, sentenciaba el documento. Como apunta Luis Corvalán Marquéz, el propósito de dicha declaración fue reprocharle al gobierno los acuerdos transitorios que había alcanzado con la DC y, de paso, desincentivar tal acercamiento para el futuro[181]. El propio Frei salió más tarde a desmentir tales acusaciones bajo un tono que ya no podía ocultar su molestia por lo que consideraba una campaña sistemática de «mentiras e infamias» en contra de su persona. La tienda democratacristiana se cuadraría con el expresidente, asumiendo *de facto* una posición distante del Ejecutivo. Se sostuvo desde esta colectividad que no se podía seguir colaborando con el Gobierno cuando existían ataques «bajos y arteros» y completamente «desleales»[182]. A todo lo anterior habría que sumar las declaraciones del PN que ya planeaban desde hacía semanas sobre el espacio público y que incidían, una y otra vez, en acusaciones explícitas en contra de la UP y sus bases militantes.

La elevación del tono confrontacional correría así en paralelo a la materialización de diversos hechos de violencia en los meses de

[180] El periódico *El Siglo* destacó, además de la multitudinaria convocatoria del acto, el hecho de que Allende rindiera cuenta pública en ese lugar sobre la marcha administrativa y política de la nación «rompiendo [así] el viejo molde de solo hacerlo en el Congreso Nacional». "Venceremos por la patria y el pueblo", 5 de noviembre de 1971, en Miguel González y Arturo Fontaine (eds.), *Los mil días de Allende. Portadas y recortes de prensa, fotografías y caricaturas*, tomo I, pp. 210-216. Tanto en este como en varios otros casos las notas de prensa de la época corresponden a reproducciones realizadas y editadas por González y Fontaine. Se dejará constancia de esto en notas subsiguientes. Cuando se haya revisado la prensa en su fuente se señalarán directamente los datos del periódico o revista.

[181] Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, p. 127.

[182] *Op. cit.*, p. 128.

octubre y noviembre. El escenario fundamental fueron los espacios rurales de la zona centro sur del territorio. El día 15 de octubre, se produjo la muerte de Domingo Soto, capataz del fundo El Cardal ubicado en la comuna de Nancagua, provincia de Colchagua. El predio, que era propiedad del exsenador liberal Armando Jaramillo Lyon, había sido expropiado por la CORA en los días previos. Según *El Mercurio*, Jaramillo procedería a interponer una denuncia ante el Ministerio del Interior debido a que el documento expropiatorio presentado por los funcionarios correspondía a otro predio y porque, además, no se le permitió hacer uso del derecho a reserva en virtud del cual un terreno quedaba exento de ser expropiado si se acreditaba su buena explotación. De forma paralela, continúa el matutino, un grupo de trabajadores se tomó por la fuerza el terreno a fin de evitar el accionar del propietario, situación que significó la suspensión de las actividades productivas y el inicio de hostilidades en contra de los habitantes del fundo[183]. En ese contexto, Domingo Soto fue amenazado en reiteradas ocasiones a objeto de que abandonara el predio, situación que en la práctica no ocurrió. En la madrugada del 15 de octubre su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del fundo con signos de haber sido atacado por terceros. A pesar de encontrarse todavía con vida, aunque inconsciente, su muerte se produjo solo horas después. Según la descripción de *Las Últimas Noticias*, las lesiones le provocaron a Soto un traumatismo encéfalo craneano que fue en definitiva la causa de su deceso[184]. Por su parte, el vespertino *La Segunda* abordó la noticia casi diez días después de ocurridos los hechos. En su versión, detalló que fue uno de los jefes de los obreros que se tomaron el fundo quien encontró a Soto inconsciente en el suelo, pero que «curiosamente» en lugar de prestarle ayuda fue hasta la comisaría de Nancagua a denunciar el hecho. *La Segunda* también informó que gracias a la exhumación del cadáver del capataz se logró establecer que la causa de muerte había sido una fractura de cráneo producto de un golpe. Finalmente, este medio descartó la versión que apuntaba a que Domingo Soto se encontraba ebrio en el momento de su fallecimiento, pues según los testimonios que el vespertino recabó, la noche anterior a su muerte

[183] *El Mercurio*, Santiago, 16 de octubre de 1971, p. 24.
[184] *Las Últimas Noticias*, Santiago, 16 de octubre de 1971, p. 15.

el capataz había cenado en la casa de Óscar Molina, lugar desde el cual se había retirado en «normal estado de temperancia»[185].

Una semana después de ocurrido este hecho, se produjo el homicidio de Moisés Huentelaf, militante del MCR. Según *Punto Final*, Huentelaf era parte de un grupo de campesinos que se habían tomado el fundo Chesque ubicado en la comuna de Loncoche, provincia de Cautín. Este terreno, que era propiedad de Martín Doyharzábal, se extendía por casi 830 hectáreas de las cuales un porcentaje muy menor se encontraban trabajadas. Ante tal situación, sostiene la revista, un grupo de casi cuarenta campesinos decidió tomarse el fundo tras diversas peticiones que se hicieran a la CORA en orden a expropiar dicho terreno, pero que en su momento no fueron atendidas. Frente a la movilización de los campesinos, Doyharzábal reunió a un grupo de latifundistas de la zona y, con apoyo de Carabineros según detalla *Punto Final*, intentó retomar su fundo el día 22 de octubre. En dicha operación, el grupo de propietarios agrícolas alcanzó a llegar a la casona principal del terreno desde donde abrieron fuego en contra de los ocupantes resultado herido en la cabeza el campesino Moisés Huentelaf, quien moriría a los pocos minutos[186].

Además de entregar los detalles de este caso, *Punto Final* insertó la muerte del campesino dentro de un marco de conflictos más amplio que tenía en la implementación de la reforma agraria su explicación fundamental. Ello debido a que el accionar del movimiento campesino revelaba la incapacidad del gobierno por acelerar dicho proceso. Tal situación era interpretada como un ejemplo inequívoco de que la UP «contemporizaba» en demasía con la clase terrateniente[187]. A todo lo anterior se sumaba, según *Punto Final*, la estrategia sediciosa de los propietarios agrícolas tendiente a disminuir de forma artificial la producción de carne y otros insumos. De tal manera, la muerte de Huentelaf era el resultado coyuntural de un conflicto situado a

[185] *La Segunda*, Santiago, 25 de octubre de 1971, p. 2.

[186] *Punto Final*, n.º 143, Santiago, martes 9 de noviembre de 1971, pp. 2 y ss. El certificado de defunción de Huentelaf confirma la versión de *Punto Final* al señalar como causa de muerte una contusión cerebral por herida de bala penetrante craneana. "Certificado de defunción de Moisés Huentelaf Añanco", Loncoche, 22 de octubre de 1971, n.º de inscripción 133, folio 83288104, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 18 de marzo de 2021].

[187] *Punto Final*, n.º 143, Santiago, martes 9 de noviembre de 1971, p. 3.

una escala mayor que tenía relación con los verdaderos límites de la propiedad agrícola y el rol de los latifundistas dentro del proceso de transformaciones en curso.

El periódico *El Mercurio* abordó la muerte de Huentelaf también desde una perspectiva más amplia haciendo referencia a los enfrentamientos registrados en esta zona. Según este medio, la violencia reinaba en los campos de «la Frontera», no pasando casi ningún día en que no se registrara un atropello a la propiedad «legítimamente constituida»[188]. Se denunciaba, en efecto, que las acciones del MIR habían desatado una escalada de toma de predios en cuya materialización el denominado Comandante Pepe cumpliría un rol fundamental. Al mismo tiempo, este matutino hacía un recuento de los hechos de violencia ocurridos en dicha zona en los últimos meses. Según sus informaciones, se habían producido siete enfrentamientos armados en la provincia de Cautín que dejaban un saldo de cuatro fallecidos y cerca de diecinueve heridos de consideración. Dos de los muertos, Juan Huillipán y Moisés Huentelaf, eran miembros del MCR, mientras que las otras dos víctimas correspondían a los agricultores Rolando Matus y Domitila Palma fallecidos en abril pasado[189].

La intención de *El Mercurio* era enmarcar estos casos dentro de un conflicto mayor gatillado a propósito de las tomas de terrenos y «corridas de cerco» que se habían tornado habituales en la zona[190]. Lo que estas situaciones ponían en jaque no era otra cosa que el derecho a la propiedad privada, situación que desde la óptica de este medio

[188] "Clima de violencia en agro de Cautín", 28 de octubre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 199.

[189] "Clima de violencia en agro de Cautín", 28 de octubre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 200.

[190] Una óptica similar se apreciaba en la nota del vespertino *La Segunda*, la cual destacaba que la muerte de Huentelaf se produjo en el marco de un enfrentamiento entre los propietarios del fundo y los «ocupantes ilegales», quienes se habían tomado por segunda vez la propiedad a eso de las 16 horas del día 22. Véase, *La Segunda*, Santiago, 23 de octubre de 1971, p. 1. Este mismo periódico informaría días más tarde la existencia de otra víctima fatal en las zonas rurales del país. El hecho habría ocurrido en la zona de Nehuentué cercana a Puerto Saavedra, donde una toma de campesinos dirigidos por elementos del MIR —según aseguraba este medio— terminó en un enfrentamiento armado que dejó herido a bala al campesino Pedro Mackay Pedreros. Según el reporte de Carabineros, Mackay habría caído en medio de una balacera, pero por la oscuridad del lugar su cuerpo no había sido encontrado todavía. Véase, *La Segunda*, Santiago, 26 de octubre de 1971, p. 20.

resultaba imperativo resguardar. En base a lo anterior, la nota referiría en detalle un conjunto más amplio de hechos que apuntaban en la misma dirección, es decir, dar cuenta de las transgresiones a que eran sometidas diversas propiedades agrícolas y fabriles en este sector. Así se refería, por ejemplo, de la toma de fundos en los sectores de Nehuentué y Pillanlelbún, la retoma de un aserradero en Villarrica por parte del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) y un proceso de desalojo del fundo San Luis que se dilataba día a día.



Imagen n.º 2. Homenaje a Moisés Huentelaf del MCR asesinado en noviembre de 1971 en la provincia de Cautín. *Movimiento de Izquierda Revolucionaria, A conquistar el poder revolucionario de obreros y campesinos*, Santiago, [s. n.], 1971. Fuente: Memoria Chilena.

En paralelo a estos conflictos y hechos de violencia, los partidos comenzaron a discutir el complejo tema de las áreas de la propiedad. Este tópico se generó a partir del proyecto de ley que sobre esta materia presentasen los senadores democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba a comienzos de octubre. En lo fundamental dicho proyecto establecía cuatro áreas de la propiedad —estatal, mixta, social y privada—, siendo la tercera de ellas un área autogestionada por los propios trabajadores. Adicionalmente, se limitaba la capacidad de acción del Ministerio de Economía al plantear la derogación de los decretos que le facultaban para intervenir empresas. Por otra parte, el traspaso de una empresa privada a las otras áreas de la economía debería realizarse mediante una ley que se discutiría para

cada caso en particular[191]. Como es de suponer, los alcances de dicho proyecto erosionaban uno de los pilares más importantes del proyecto de transformación estructural de la UP. En efecto, el proyecto Hamilton-Fuentealba limitaba la capacidad de acción del Ejecutivo al desarticular las áreas de propiedad propuestas por la UP y dejar en manos del congreso el traspaso de las empresas de un área a otra. Este último punto era bastante sensible para el oficialismo toda vez que no contaba con mayoría en ninguna de las dos cámaras lo cual auguraba un freno significativo a la política intervencionista que hasta entonces llevaba a cabo.

A las pocas semanas, el gobierno de Allende presentó su propio proyecto de ley sobre las áreas de la economía. El texto insistía en delimitar tres grandes áreas y especificar que las empresas que poseyeran un capital inferior a 14 millones de escudos quedarían al margen del proceso de nacionalización[192]. En pocos días, el Congreso tenía dos proyectos a discutir sobre la mesa, cada uno con disposiciones y enfoques distintos, aunque en el fondo de algunas cuestiones existían ciertas coincidencias. Con todo, la discusión no logró avanzar sobre la base de los acuerdos a los que eventualmente se podía llegar. Así, esta coyuntura se transformó en otro episodio más de confrontación verbal entre ambos sectores. El PS, por ejemplo, fue enfático en señalar que el proyecto Hamilton-Fuentealba solo defendería al imperialismo, los monopolios y a los grandes intereses financieros[193].

En el tránsito hacia el mes de noviembre, la violencia reaparecería en distintos puntos del país, tanto en zonas rurales como en la capital. En el primer caso, algunas informaciones de prensa dieron cuenta, a comienzos de noviembre, del homicidio del agricultor Enrique Hernández Jerez en la zona de Mallarauco al poniente de la región Metropolitana. La víctima, indica el vespertino *La Segunda*, habría sido golpeada con una pala hasta causar su fallecimiento. Según las declaraciones que hizo la Policía de Investigaciones, y que recoge este mismo medio, Hernández había sido amenazado por elementos izquierdistas de la zona[194].

[191] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 130.

[192] "Firmado proyecto de ley que delimita las áreas sociales", *La Prensa*, 20 de octubre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 197.

[193] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 132.

[194] *La Segunda*, Santiago, 2 de noviembre de 1971, p. 2.

Más adelante se produjo otro hecho de violencia en el campo, esta vez en la provincia de Cautín, la cual arrastraba un largo historial de enfrentamientos y conflictos en los últimos meses. En este caso, la prensa informaría de la muerte de los campesinos Francisco y Segundo Cheuquelén Melín ocurrida el día 22 de noviembre al interior del fundo Huilio en la comuna de Imperial. El suceso se habría producido por un ataque con armas de fuego de los propietarios del fundo en contra de un grupo de personas que intentó tomarse el terreno, acción que terminó con los hermanos Cheuquelén heridos y luego fallecidos[195]. Según informa *El Diario Austral*, el movimiento que intentó apoderarse del predio era conocido como Netuiaiñ Mapu, «recuperemos nuestra tierra», que era dirigido por una pequeña colectividad de inspiración maoísta llamada Partido Comunista Revolucionario[196]. Días más tarde, este mismo medio consignó las declaraciones de un dirigente de la CUT que asistió al funeral de los hermanos Cheuquelén y que afirmó que el hecho de sangre no quedaría «sin cobrarse» pues sería pagado por los «momios latifundistas». El Gobierno, a través del subsecretario del Interior Daniel Vergara, señaló que con la misma firmeza con que repudiaba las ocupaciones de fundos y terrenos, el Ejecutivo condenaba las actitudes criminales de algunos de los propietarios que actuaban al margen de los métodos legales[197].

En los espacios urbanos, en tanto, uno de los principales enfrentamientos se produjo en la capital, en el marco de un complejo conflicto suscitado en la Universidad de Chile a partir del mes de octubre. En dicho plantel, la oposición controlaba solo la rectoría de

[195] El certificado de defunción de Francisco Cheuquelén señala como causa de muerte una anemia aguda y rotura de hígado por bala. "Certificado de defunción de Francisco Cheuquelén Melín", Quenque, 22 de noviembre de 1971, n.º de inscripción 255, folio 83288184, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 18 de marzo de 2021]. Por su parte, el documento de Segundo Cheuquelén indica como causa de fallecimiento una contusión cerebral y un traumatismo cráneo-encefálico derivado de una riña. "Certificado de defunción de Segundo Cheuquelén Melín", Temuco, 22 de noviembre de 1971, n.º de inscripción 703, registro E, folio 83288283, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 18 de marzo de 2021].

[196] *El Diario Austral*, Temuco, 23 de noviembre de 1971, p. 1.

[197] "Un mapuche muerto y tres heridos en enfrentamiento en Cautín", *El Siglo*, 22 de noviembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 231.

dicha casa de estudios, con el democratacristiano Edgardo Boeninger, mientras que el Consejo Superior era dominado por una mayoría oficialista. Fue esta instancia la que aprobó una modificación sustancial de las estructuras de diversas facultades y departamentos lo que significó que algunas de estas unidades se fundirían entre sí. La Escuela de Derecho, por ejemplo, quedaría absorbida dentro de una Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. Como era de esperar, tales modificaciones fueron rechazadas por gran parte de la oposición que tenía cierta presencia en la Universidad, sobre todo a nivel de centros de estudiantes. De hecho, tras la aprobación de dicha normativa la Escuela de Derecho fue tomada por un grupo de alumnos, esperándose, según apuntaba *El Mercurio,* movilizaciones similares para los próximos días[198]. De allí en más, el conflicto se enquistó a lo largo de las semanas, produciéndose movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y opositores de la reforma. Sin duda, este conflicto podía leerse también en clave nacional pues revelaba una pugna mayor respecto al apoyo o rechazo al proyecto de la UP dentro del propio plantel universitario.

A mediados de noviembre, el conflicto se hallaba en punto muerto. El rector Boeninger, junto con acusar al Consejo Superior de actuar de forma ilegal al desoír los pronunciamientos de la propia Contraloría, propondría un plebiscito interno a efecto de solucionar el conflicto[199]. Al 16 de noviembre, se encontraban paralizadas las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, la de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Pecuarias y la de Odontología. A ellas se sumaban algunos departamentos como los de Extensión y Acción Social[200]. Particularmente complejas fueron las movilizaciones en los Departamentos de Química y Farmacia, donde se denunció la agresión con ácido por parte de alumnos de derecha —que se habían tomado estas dependencias— en contra estudiantes de izquierda[201]. En la Escuela de Derecho también se registraron incidentes y conatos de agresión

[198] "Ocupada Escuela de Derecho de la Universidad de Chile", 20 de octubre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 196.

[199] "Hay que llamar a plebiscito para superar crisis de la U", *La Tercera*, 13 de noviembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 222 y ss.

[200] "Paralización paulatina de la Universidad de Chile", *El Mercurio*, 16 de noviembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 226.

[201] Manuel Salazar, *Chile 1970-1973*, p. 171.

en las inmediaciones del recinto. Según *El Mercurio* se habría tratado de un cuasi enfrentamiento entre los alumnos y elementos ligados al MIR, el cual pudo ser aplacado gracias a la intervención de Carabineros[202]. Desde el periódico *Puro Chile*, en tanto, se entendían estos acontecimientos como el resultado de la acción premeditada del Frente Nacionalista Patria y Libertad, el cual estaría manejando a los estudiantes en toma incitándolos a actuar con violencia[203].

Desde la cámara alta del Congreso se tomaría nota de la compleja problemática por la que atravesaba el plantel universitario. En su sesión del día 30 de noviembre, el senador del PN Víctor García Garzena acusó a la izquierda, y al gobierno de la UP en particular, de estar detrás de los incidentes y de la ola de violencia que sacudía a la Universidad. A juicio del parlamentario, la actitud del Ejecutivo reflejaba que su objetivo central era violar la autonomía universitaria a efecto de transformar la enseñanza superior en una «herramienta al servicio de la ideología marxista». Además, el parlamentario sostuvo que el sistema universitario se encontraba, al igual que Chile, «quebrado por la violencia y el atropello», lo cual incidía en la ausencia de un destino común para el país tanto a nivel nacional como internacional[204]. A través de estos argumentos, García intentaba demostrar que los problemas acaecidos en la Universidad de Chile eran, en el fondo, tensiones a menor escala de un conflicto mayor existente en el país producto de la implementación del programa de la UP. Es decir, el conflicto en torno a la fusión de diversas facultades y otras medidas administrativas de similar envergadura trasuntaba una pugna de carácter global vinculado al proceso político en curso. De este modo, un conjunto amplio de problemas existentes en Chile —inclusive aquellos de índole más técnica— podían abordarse bajo categorías más estructurales asociadas una confrontación de carácter nacional. Tal esquema interpretativo, que visualizaba un conflicto bipolar entre dos bloques excluyentes, resultaba ventajoso para los propósitos ya explicitados del PN.

[202] "Alumnos de derecho repelieron al MIR", 24 de noviembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 231.

[203] "Bastión 'fascista' en la Escuela de Leyes", 30 de noviembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 240 y ss.

[204] Senado, *Diario de sesiones*, 34.ª sesión, martes 30 de noviembre de 1971, pp. 1531 y ss.

Sectores de la izquierda ligados al MIR, abordarían el conflicto en la Universidad de Chile centrando sus críticas en la figura del rector Boeninger. Para *Punto Final*, la autoridad universitaria había dedicado gran parte de su gestión a «entorpecer» cualquier iniciativa que proviniera desde las filas de la izquierda, sector que, como se sabe, controlaba el Consejo Superior de este plantel. A juicio de esta publicación, la labor de Boeninger estaba vinculada a un objetivo de carácter personal consistente en la búsqueda de un cargo internacional en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la revista señalaba que uno de los nudos principales del conflicto radicaba en la dicotómica relación entre las autoridades unipersonales, que como Boeninger, representaban a una minoría conservadora versus el Consejo Superior que reflejaba una mayoría de izquierda[205].

Como se puede advertir, casi ningún conflicto de los que comenzaban a surgir en el país quedaba situado solo en un plano local o doméstico. De forma recurrente dichas problemáticas comenzaron a ser leídas e interpretadas desde ángulos más amplios, cuya característica esencial era la escenificación de un cuadro bipolar entre quienes apoyaban o rechazaban al gobierno de la UP. En la conformación de este marco, jugarían un rol clave los partidos de la oposición, en especial el PN a través de su estrategia de conformación de un gran polo opositor junto a la DC. A lo largo de estos meses, se vería que dicho propósito no era aún algo factible de materializar. Sin embargo, se estaban produciendo ciertos eventos que irían llevando a ambos partidos en esa dirección. Uno de ellos había sido el apoyo del PN al proyecto Hamilton-Fuentealba sobre las áreas de la propiedad. Poco tiempo después se produciría, sino un acuerdo tácito entre ambos partidos, un pacto electoral implícito de cara a las elecciones complementarias que se celebrarían en dos circunscripciones de la zona central del país en el mes de enero de 1972. En dicha coyuntura, los nacionales solo llevarían candidato en la segunda circunscripción (Linares), absteniéndose en la provincia de O'Higgins. La DC, por su parte, llevaría candidato allí donde el PN se abstendría, renunciado a su vez a presentar un postulante en la provincia que disputaría el candidato nacional[206]. Aunque no se traba de iniciativas que revelaran

[205] *Punto Final*, n.º 144, Santiago, 23 de noviembre de 1971, pp. 6 y 7.
[206] Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, pp. 139-140.

un ánimo explícito de confluencia en torno a un gran polo opositor, al menos reflejaban un estado de ánimo proclive a establecer ciertos acuerdos. Y ello podría cimentar, a mediano plazo, un entendimiento mayor respecto a otras materias.

Desde mediados de noviembre y hasta los primeros días de diciembre, algunos de los conflictos arriba reseñados se materializaron en paralelo a la visita que hiciera Fidel Castro a Chile. Sin duda, la llegada del líder cubano fue un paréntesis que al menos en sus primeros días significó un respiro para un gobierno que mostraba signos de confusión y estancamiento. Para el periódico *Clarín*, Castro llegaba a un país en que los protagonistas eran «la clase obrera, los campesinos y las masas populares» y no los salones ni los palacios dorados de la oligarquía[207]. Particularmente importante fueron los actos que se organizaron en las principales ciudades del país en torno a la ilustre visita, sobre todo porque ellos insuflaron de nueva mística y entusiasmo a las huestes de izquierda. Además de los actos de masas, el primer ministro cubano se reuniría con importantes líderes y dirigentes de distintas áreas del quehacer nacional, como fue en su momento la comentada reunión que sostuvo con el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, el día 23 de noviembre. Al término del encuentro, Castro señalaría que no debía haber contradicción entre el concepto cristiano y comunista de libertad del hombre y que lo importante, entre ambas concepciones, eran «los puntos de coincidencia y no las diferencias»[208].

A lo largo del viaje, Fidel sería consultado en reiteradas ocasiones por el carácter de la vía chilena al socialismo y su proyección de mediano y largo plazo. De modo pertinente, Castro respondería que la UP no era todavía una revolución, sino que se estaba ante un proceso revolucionario que podía, a futuro, convertirse en una revolución. De igual forma, recalcaría que la unidad de la izquierda y la lucha de masas resultaban vitales para el éxito del proyecto socialista de la UP[209].

[207] "Saludo a Fidel Castro", 10 de noviembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 218.

[208] "'Cristianos y marxistas deben unirse para liberar a su pueblo': Fidel", *Clarín*, 24 de noviembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 236.

[209] Una buena recopilación de los discursos y actividades de Fidel Castro en Chile se encuentra en la edición especial de *Punto Final*, n.º 146, Santiago, martes 7 de diciembre de 1971.



Imagen n.º 3. Incidentes en el marco de la visita de Fidel Castro a Chile en noviembre y diciembre de 1971. *Ercilla*, n.º 1899, 8 al 14 de diciembre de 1971, fotografía de Hugo Donoso. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

Con seguridad uno de los puntos más polémicos de la visita fue su extensión. Esta abarcó desde el 10 de noviembre hasta el 4 de diciembre, generando toda suerte de comentarios y conjeturas. A juicio

de Joaquín Fermandois, si la visita hubiera durado diez días habría sido un triunfo «fulgurante» para el Gobierno y toda la izquierda, pero su extensión terminó por convertir a Castro en un actor más del panorama político chileno[210]. Alberto Aggio, en tanto, sostiene que el líder cubano actuó con el propósito de radicalizar el proceso a fin de que desapareciera cualquier voluntad negociadora entre las fuerzas en pugna. La duración de su visita, indica el historiador brasileño, estuvo entonces vinculada al punto anterior, pues Castro no abandonaría el país hasta que se convenciera de haber logrado dicho objetivo[211].

Bajo este contexto, la derecha acusó a Castro de intervencionismo en materias de orden interno al tiempo que, a través de algunos de sus medios de comunicación, se referiría con un lenguaje corrosivo respecto al líder cubano[212]. En la izquierda, la visita reafirmó las profundas cuotas de admiración que este sector, en general, sentía por Fidel y la revolución cubana. Especialmente importante a este respecto fueron las ediciones del mes de noviembre de revista *Punto Final* que registró de forma detallada la visita compilando la mayor parte de los discursos y conferencias dictadas por Castro a lo largo de su viaje[213].

Algunos años después se conocieron las impresiones que tuvo el general Augusto Pinochet Ugarte sobre dicha visita. Para noviembre de 1971, Pinochet oficiaba como jefe de guarnición de la ciudad de Santiago, cargo desde el cual conocería diversos detalles de la estadía de Fidel en Chile. Como es de suponer, su juicio crítico hacia el líder cubano se articuló sobre todo a partir de lo extenso de su visita:

[210] Fermandois, *op. cit.*, pp. 519 y ss.

[211] Alberto Aggio, "Uma insólita visita: Fidel Castro no Chile de Allende", p. 163.

[212] Portavoz de esta estrategia fue el periódico *Tribuna* perteneciente al PN. A lo largo de la visita de Fidel, decenas de titulares de este medio se burlaron tanto del dirigente cubano como de las autoridades chilenas a través de la sorna y el juego de palabras. Un ejemplo de ello fue el titular del día 21 de noviembre que señalaba: «Fidel es un hijo de Punta Arenas», aludiendo a la distinción de hijo ilustre que había recibido Castro en la ciudad del extremo sur. Una acuciosa investigación sobre el rol del periódico *Tribuna* en el contexto de la visita del líder cubano a Chile se encuentra en, Ana Henríquez Orrego, *Análisis de la visita de Fidel Castro a Chile a través del diario Tribuna*, capítulo IV.

[213] Véase las ediciones del 23 y 30 de noviembre de 1971 de esta publicación (n.os 144 y 145, respectivamente).

se paseó por el país —recuerda Pinochet— como por casa propia, criticó muchos aspectos de nuestra situación interna, dictó cátedra revolucionaria y ofreció su apoyo para ella[214].

En una ceremonia donde se pondría una ofrenda floral ante el monumento al libertador chileno Bernardo O'Higgins, las directrices protocolares indicaban que Pinochet debería rendirle honores a Castro. Incómodo con la situación —y recordando una promesa de conciencia que se había hecho en orden a «jamás rendir honores a los comunistas»— Pinochet ubicó a Fidel en el centro, «entre el ministro de defensa y yo», de modo que los honores correspondieron en realidad al secretario de Estado. Como reconoce el propio Pinochet, había faltado al reglamento, pero quedaba con su conciencia «de chileno y militar» tranquila[215].

Cuando la visita de Fidel entraba en su recta final, se produjo una manifestación que marcaría un punto de inflexión no menor en la trayectoria de la vía chilena al socialismo. Esta fue la marcha de las cacerolas vacías efectuada el día 1 de diciembre en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, en pleno centro de la capital. Días antes, diversos colectivos y agrupaciones femeninas vinculadas a la oposición comenzaron a organizar dicho evento convocando a mujeres de todas las edades y grupos sociales para que participasen en el desfile. El dirigente de Patria y Libertad, Manuel Fuentes Wendling, recordaría que en torno a su programa radial que tenía por aquel entonces se fue conformando un grupo de mujeres, en su mayoría dueñas de casa, que seguían con atención sus crónicas y comentarios de actualidad. Al intuir que se trataba de un grupo numeroso y opositor al gobierno de la UP, Fuentes le sugirió a la dirigenta social Helga García que creara una organización que agrupara a estas mujeres. Así nacería el Frente Nacional de Dueñas de Casa (FRENDUC) que ya en el mes de octubre, según relata el dirigente frentepatrista, esbozó la idea de convocar a una marcha femenina para protestar por los problemas de abastecimiento de enseres, el excesivo ideologismo que imperaba en algunas escuelas y otros temas de similar tenor[216]. Antes de que la

[214] Pinochet, *El día...*, *op. cit.*, p. 63.
[215] *Op. cit.*, p. 65.
[216] Fuentes Wendling, *op. cit.*, pp. 95-102.

iniciativa tomara cuerpo, el movimiento Soberanía, Orden, Libertad (SOL) pidió a las integrantes del FRENDUC que se acoplaran a una manifestación de mayor envergadura que se estaba pensando organizar. Esta no era otra cosa que la marcha de las cacerolas vacías proyectada para el mediodía del 1 de diciembre.

El objetivo fundamental de esta manifestación era protestar por los problemas de desabastecimiento de algunas mercaderías, cuestión que como se indicó ya era posible de advertir desde el de mes de agosto. La convocatoria invitaba a que las mujeres desfilaran por el centro de la capital portando ollas e implementos de cocina para hacerlos sonar a lo largo del recorrido, cuestión que en sí misma no representaba una alteración mayor del orden público.

Sin embargo, la marcha de las cacerolas vacías constituía un evento cargado de simbolismo, pues la protagonista fundamental de la jornada fue la mujer, situación que admitía muchas lecturas. Desde luego, no se trataba de un actor que participara con regularidad en este tipo de eventos, por lo que su presencia y despliegue en un espacio urbano de indudable importancia, y además en un número significativo, resultaba relevante[217]. Uno de los mensajes políticos que la oposición quería transmitir con esta manifestación era que la mujer chilena, cansada de tantos abusos, dejaba el espacio doméstico para mostrar su descontento contra el gobierno en la esfera pública. La olla vacía golpeada sin cesar a lo largo de un desfile multitudinario terminaba por sintetizar así el descontento femenino respecto a cuestiones que, aunque fueran de índole doméstica, tenían un trasfondo político. Inclusive la visita de Fidel Castro fue vinculada a los problemas de desabastecimiento por los cuales reclamaban las mujeres, siendo el grito «mientras bailan con Fidel no tenemos qué comer», titulado en el diario *Tribuna*, uno de los más característicos de esa jornada[218].

[217] En el caso de las mujeres de izquierda, el estudio de Javier Maravall pone en circulación un conjunto de limitaciones y vacíos con que este segmento debió lidiar a lo largo de esos años. Así, una de las problemáticas más recurrentes dentro de los testimonios que recopila este autor se refiere a la forma en cómo estas mujeres debieron desarrollar su activa militancia política en el marco de unos patrones culturales que reforzaban el liderazgo masculino y enfatizaban en que ciertas tareas, como el cuidado de los hijos, eran propias del mundo femenino. Véase, Javier Maravall, *Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la dictadura militar (1970-1990)*, en especial pp. 51-78.

[218] "'Mientras bailan con Fidel no tenemos que comer...!: impresionante coro femenino en marcha de olas vacías'" *Tribuna*, 2 de diciembre de 1971, en Henríquez Orrego, *op. cit.*, p. 75.

Para Margaret Power la marcha de las cacerolas vacías expresó el rechazo de la oposición al gobierno de Allende y a la visita de Castro a partir de una reafirmación del papel que históricamente había jugado la mujer chilena en defensa de la nación. Esto quiere decir, en primer término, que tanto la UP como el *ethos* revolucionario representado por el líder cubano eran entendidos como elementos ajenos y aún disociadores de la nacionalidad, razón por la cual no cabía sino un rechazo manifiesto hacia aquellos. En segundo lugar, el papel de la mujer chilena, ajenas en general a la política partidista, se reflejaría, según Power, en los lazos de identificación que las manifestantes establecieron con figuras del pasado histórico chileno como Inés Suárez, Javiera Carrera y Paula Jaraquemada, todas ellas de destacada participación en tiempos de la conquista española y de la independencia nacional[219].

Respecto al desarrollo mismo de la marcha cabría referir y caracterizar algunos elementos de indudable importancia. En primer término, que el desfile de mujeres fue escoltado por diversos piquetes pertenecientes a Patria y Libertad, a la Juventud de la DC y al Comando Rolando Matus, la mayor parte de los cuales se encontraban premunidos de algunos elementos contundentes como garrotes, cascos y palos. Tal situación ponía en evidencia de que se trataba de una manifestación digitada por buena parte de la oposición, la cual había movilizado recursos materiales y humanos significativos para la celebración del desfile. Y la presencia en la marcha de grupos de choque de la oposición sugería, además, la posibilidad de un casi seguro enfrentamiento con elementos de la izquierda que también estaban apostados en las calles a esa hora. Todo esto ponía en duda el carácter espontáneo que quiso atribuirse a la marcha, aunque de todos modos cabe suponer que algunas mujeres —quizás cientos— acudieron voluntariamente a manifestarse ese día. El senador y secretario general del PC, Luis Corvalán Lépez, indicaría que los «guardias blancos» que protegían a las mujeres comenzaron a realizar una serie de «atentados terroristas» y «fechorías» como ataques a sedes de partidos oficialistas, agresiones a domicilios particulares y «otras acciones vandálicas»[220].

[219] Margaret Power, *La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973*, p. 172.
[220] Corvalán Lépez, *El Gobierno...*, *op. cit.*, p. 194.

Al cabo de unas horas, el desfile había, en efecto, cambiado de tono, produciéndose las primeras agresiones a mujeres, los enfrentamientos entre grupos rivales y algunos incidentes con Carabineros. Entrada la tarde, el centro de Santiago se convertiría en un verdadero campo de batalla, con desórdenes y pugilatos cada vez más violentos. En la sesión de la Cámara de Diputados celebrada ese mismo día, la parlamentaria democratacristiana Wilna Saavedra denunció las escasas medidas de seguridad que la Policía prestó a las manifestantes, las cuales fueron atacadas «con piedras [y] con balazos» lo que no permitió un desarrollo normal del desfile[221]. De igual forma, Saavedra —quien según su testimonio había participado de la manifestación— solicitó enviar un oficio al Ministerio del Interior ya que a su juicio no se estaba garantizando el legítimo derecho a reunión en el país. Cuando la parlamentaria terminó su intervención y se cursaba la solicitud de oficio a la autoridad ministerial, el comité del PN se sumó a la iniciativa solicitando también suscribir el documento.

Margaret Power consigna diversos hechos de violencia ocurridos en el marco de la marcha femenina, siendo uno de los puntos neurálgicos de la protesta el cerro Santa Lucía pues allí se encontraban fuerzas policiales que impedirían el paso de las manifestantes hacia la casa de gobierno ubicada a pocas cuadras. Ante la insistencia de las mujeres en orden a continuar su desfile, relata la historiadora, Carabineros hizo uso de carros lanzaguas y gases lacrimógenos para dispersar la marcha. En ese momento comenzaron sendos enfrentamientos entre los grupos de choque de la oposición y militantes de izquierda que estaban apostados en las inmediaciones. Reproduciendo las cifras entregadas por el periódico *El Mercurio*, Power indica que hubo 187 detenidos de los cuales por lo menos 140 eran hombres[222].

En horas de la noche, los disturbios se trasladaron a la zona oriente de la capital donde continuaron hasta la madrugada del día 2 de diciembre. Todo parece indicar que la manifestación femenina fue aprovechada por los grupos de choque de la oposición a efecto de crear un cuadro generalizado de desorden y violencia que pusiera en jaque al gobierno y ayudara a conformar una sensación de anor-

[221] Diputados, *Diario de sesiones*, 23.ª sesión extraordinaria, miércoles 1 de diciembre de 1971, p. 1787.

[222] Power, *op. cit.*, pp. 178-179.

malidad cada vez más creciente. El vespertino *La Segunda* cifró en 99 las personas heridas, siete de las cuales se encontraban internadas de gravedad en la asistencia pública[223].

[223] *La Segunda*, Santiago, 2 de diciembre de 1971, p. 24. Se ha podido acceder a algunos documentos que son indicativos de la magnitud de los enfrentamientos y hechos de violencia ocurridos en esa jornada. La mayor parte de estos informes fueron confeccionados días después de ocurridos los hechos a petición del juez Eduardo Bravo Ubilla quien estuvo a cargo de la investigación por los desórdenes ocurridos el 1 de diciembre. Dentro de esta documentación se encuentra, por ejemplo, el informe de D. S. O., quien presentó «lesiones clínicamente de mediana gravedad, inferidas con objeto contundente» y lesiones en la zona «pre-auricular derecha» y «cicatriz de erosión en rodilla izquierda» según señala el médico legista. "Informe de lesiones de D. S. O." Santiago, 10 de enero de 1972, n.º 16156/71, Servicio Médico Legal, ARNAD, tomo 3358. También se puede referir el informe de C. H. A., quien presenta «cicatriz de herida contusa circular de 1 cm cervical derecha y cicatriz de herida contusa de 1 cm con signos de sutura, cervical izquierda» correspondientes a lesiones de «mediana gravedad, inferidas por proyectil de arma de fuego». "Informe de lesiones de C. H. A." Santiago, 10 de enero de 1972, n.º 152/72, Servicio Médico Legal, ARNAD, tomo 3444. Heridas similares presenta C. P. B., quien fue atendida en la Posta Central tras haber sido alcanzada por un proyectil de arma de fuego «en el curso de una asonada callejera el 1/xii/71». Sus lesiones, clínicamente menos graves, son explicables por un disparo hecho «desde larga distancia». "Informe de lesiones de C. P. B." Santiago, 10 de enero de 1972, n.º 29/72, Servicio Médico Legal, ARNAD, tomo 3444. Un caso más complejo fue el de E. J. L. A. de 22 años de edad, quien manifestó al médico legista haber sido herido por disparos de metralleta en la vía pública el día 2 de diciembre. El facultativo diagnosticaría «herida de bala del tercio medio del muslo derecho con salida de proyectil y lesión en la arteria femoral... fractura expuesta de la tibia derecha por bala... herida a bala en el tercio inferior de la pierna derecha... anemia aguda». Asimismo, se indica que el paciente fue operado de urgencia al tratarse de lesiones «clínicamente graves, explicables por disparos de arma de repetición (metralleta)». "Informe de lesiones de E. J. L. A." Santiago, 21 de enero de 1972, n.º 497/72, Servicio Médico Legal, ARNAD, tomo 3446. Las agresiones a Carabineros, en tanto, también formaron parte de la investigación del Juez Bravo Ubilla. En uno de los documentos a los que se pudo acceder, el magistrado solicita al Hospital de Carabineros la ficha clínica del funcionario P. E. E. P., la cual fue remitida el 31 de enero de 1972. En dicho documento, firmado por el médico Arturo Peralta Guajardo, se establece que el Carabinero estando de servicio el día 1 de diciembre de 1971 «sufre una pedrada como consecuencia de desmanes producidos en el centro de la capital». Tal agresión, generaría un «hematoma en tobillo derecho» que deberá ser tratado con una valva de yeso. "Ficha clínica de P. E. E. P." Santiago, 31 de enero de 1972, n.º 268, Hospital de Carabineros, ARNAD, tomo 3445. Además de la investigación del ministro Bravo Ubilla, hubo una causa especial llevada adelante en el 2.º Juzgado Militar de Santiago (causa rol 1913-71) por el delito de maltrato a Carabineros de servicio. En un oficio de carácter reservado, fechado el 13 de diciembre de 1971, el teniente coronel de la policía uniformada Víctor Valenzuela Orellana solicita al Instituto Médico Legal la copia de los exámenes médicos de los detenidos R. G. M. J.; R. M. J.; H. C. M. J.; E. R. P.; F. J. G. R. y C. B. M. "Oficio al Instituto Médico Legal", Santiago, 13 de diciembre de 1971, n.º 404, Prefectura Santiago Sur de Carabineros, ARNAD, tomo 3353.

El ministro del Interior, José Tohá, evacuó un informe que daba cuenta que la marcha había sido utilizada como «pretexto» para consumar diversas acciones delictuales. Entre estas se contaban apedreos a sedes de partidos políticos, agresiones a funcionarios públicos, disparos desde automóviles en marcha, obstaculización del tránsito, intento de quema del edificio de la UNCTAD —que estaba aún en construcción— e intento de atentado en contra de la residencia del presidente Salvador Allende[224]. La situación llegó a tal gravedad que el gobierno decretó el Estado de Emergencia el mismo día 2. A cargo de la jefatura de la zona de Santiago quedó el general Augusto Pinochet[225].

La marcha de las cacerolas vacías había derivado en horas de la tarde noche en enfrentamientos y disturbios que tenían otro matiz. El escenario político se veía así alterado por hechos de violencia que se desplegaban cada vez con mayor intensidad y que comenzaban a congregar a contingentes más amplios de participantes. Desde el punto de vista de las relaciones entre gobierno y oposición, esta marcha se situó como una de las primeras acciones de masas de los partidos y movimientos opositores, cuestión que hacía suponer un cambio sustantivo en la estrategia general de este sector. Es decir, la oposición, o al menos una parte de ella, comenzaría a utilizar cada vez con mayor frecuencia la calle y la movilización social para manifestar su rechazo a la vía chilena al socialismo.

El nivel de violencia observado entre el 1 y 2 de diciembre también resultaría un elemento inquietante dentro de la escena nacional. Su despliegue, al calor de una marcha en apariencia pacífica, y la puesta en circulación de discursos que condenaban oblicuamente dicha violencia volvía a aparecer con fuerza en el país. El general Carlos Prats recuerda que el día 3 de diciembre le visitó en su despacho el presidente del PN, Sergio Onofre Jarpa. El propósito del dirigente fue manifestarle a Prats su repudio por la acción de los «grupos armados de extrema izquierda» y la intervención de la Policía de Investigaciones en contra de un grupo de jóvenes que se encontraban

[224] "Ministro Tohá contó la firme", *Clarín*, 3 de diciembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 247.

[225] "Bando de la zona de emergencia", *El Siglo*, 3 de diciembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 248.

en el sector de Providencia. El general le expresaría que también resultaban reprochables las acciones de los grupos de choque de la oposición que habían hecho una verdadera «demostración de fuerza». El dirigente político, según comenta Prats, concuerda con ello

> [...] grabando una tenue sonrisa en sus rasgos pálidos» y expresando al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas debían «contribuir a evitar el enfrentamiento[226].

La marcha femenina había impactado de modo relevante en el país, generando un punto de inflexión en diverso orden de temas. La evaluación que hicieran los actores políticos daría cuenta, en efecto, de la problemática huella que quedaba alojada en el espacio público. Desde la izquierda, la manifestación opositora fue criticada con vehemencia, pues se le visualizó como una operación que buscaba la desestabilización del Gobierno y en cuya organización, además, habían participado actores nacionales y extranjeros. El secretario general del PC, Luis Corvalán Lépez, enfatizaría en estos puntos al sostener que la «operación cacerola» estuvo conectada a las declaraciones que hiciese un alto funcionario norteamericano —el mismo día 1 de diciembre— en orden a que la UP tendría los días contados. El dirigente comunista también señaló que existían similitudes entre la marcha realizada en Chile y los desfiles femeninos que la «reacción» organizó en Brasil en contra del presidente João Goulart a comienzos de los sesenta, justo cuando este llevaba a cabo un ambicioso plan de reformas estructurales. Por último, Corvalán apuntó que la clase obrera y el pueblo no permitirían la salida de «bandas fascistas a la calle»[227].

De forma implícita, las palabras del dirigente comunista evidenciaban el reconocimiento de una cierta debilidad en la movilización de masas de parte de la izquierda, sobre todo a efecto de contrarrestar las acciones que comenzaba a desplegar la oposición. Visto desde un ángulo más general, también podría decirse que lo señalado por Corvalán apuntaba a una problemática todavía más de fondo. Ella se

[226] Prats, *op. cit.*, pp. 228-229.

[227] "A la ofensiva" *El Siglo*, 5 de diciembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 255.

refería a que el gobierno habría perdido, para el segundo semestre de 1971, su capacidad de conducción de la agenda e iniciativa política, situación que lo dejaba a merced de los ataques opositores.

El PS, por su parte, sostuvo que la marcha de las cacerolas vacías era parte de una estrategia de carácter violentista que buscaba cerrar el paso a la vía chilena al socialismo. A juicio de esta tienda, la respuesta del movimiento social y popular debía materializarse en diversos frentes, impulsando la expropiación de los monopolios y la reforma agraria. Desde tales premisas, concluía el PS, la burguesía y el capital nacional y extranjero se vería debilitado y sin recursos suficientes para impulsar nuevas acciones de fuerza en contra del gobierno. El MAPU puso el acento en una cuestión que en alguna medida otros partidos habían pasado por alto. Esta se refería a que la derecha había sufrido una significativa transformación pues ya no se encontraba en posiciones de repliegue, sino que por el contrario desafiaba al gobierno mostrando una actitud «soberbia, combativa [y] frenética». Dicho perfil, sentenciaba el MAPU, terminaba por resultar atractivo para las clases sociales que se sentían «inseguras [y] miedosas» ante los avances del proyecto socialista de la UP[228].

La revista *Punto Final* recogió buena parte de los planteamientos señalados por las colectividades de izquierda. Junto con recalcar el rol que habrían tenido agencias como la CIA a la hora de planificar estrategias de desestabilización política —que en este caso fueron seguidas «punto por punto»—, este medio insistió en el carácter clasista que tuvo el desfile. Según este medio «los cerebros de la operación fascista»,

> ...utilizando teléfonos, peluquerías y supermercados como centros de comunicación conspirativa [...] han organizado a los sectores acomodados del «barrio alto» de la capital en un programa permanente de resistencia contra del gobierno. El pretexto no puede ser más pueril. Se arguye la falta de alimentos, precisamente en un sector donde la más absoluta abundancia es signo de una irritante opulencia[229].

[228] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 148.
[229] *Punto Final*, n.º 147, Santiago, martes 21 de diciembre de 1971, p. 3.

En la parte final de su análisis, la revista sostenía que cualquier medida oficialista que buscara ganar el apoyo de ciertos sectores medios no podía confundirse con la idea de alcanzar algún tipo de alianza con actores de la oposición, en particular con la DC. Solo un avance rápido sobre el enemigo, insistía *Punto Final*, haría «irreversible» el triunfo del movimiento popular[230].

En la oposición se observaron diversos matices para referir los recientes acontecimientos. Sin duda que el PN era el más eufórico con los resultados de la marcha de mujeres, a la cual prestó su más alta «adhesión [y] simpatía». Según Luis Corvalán Marquéz, este partido había detectado con notable claridad que el segmento femenino constituía un sector «de grandes posibilidades movilizadoras», sobre todo a través de una campaña que explotara aquellos elementos que le resultaban más sensibles[231]. Por otra parte, este partido resolvió apoyar cualquier tipo de movilización gremial o política que tuviera como propósito luchar por la libertad y la democracia, independientemente del sector o colectividad que la convocase. Y en una decisión todavía más audaz, el PN resolvió apoyar al candidato de la DC en la elección senatorial complementaria que se realizaría en enero de 1972 en O'Higgins, al tiempo que respaldaba la acusación constitucional en contra del ministro del Interior José Tohá por los hechos ocurridos el 1 de diciembre.

Como se puede advertir, este actor desplegaba un conjunto de estrategias que, aunque disímiles en apariencia, tenían como eje transversal al menos dos puntos esenciales. El primero de ellos consistía en mantener abierto un escenario de permanente movilización social en contra del gobierno con el objetivo de que el cuadro de polarización se incrementase en el corto y mediano plazo. Bajo un marco de este tipo, la posibilidad de introducir discursos de naturaleza extremistas y proclives a soluciones *de facto* tendrían cada vez mayor cabida y resultarían convocantes para ciertos sectores de la sociedad. El segundo punto radicaba en el intento del PN por conformar dos bloques excluyentes entre sí y, como es de suponer, lograr la hegemonía del bando opositor. Para alcanzar tales propósitos se requería del concurso democratacristiano el cual, como se ha visto,

[230] *Punto Final*, *op. cit.*, p. 5.
[231] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 149.

pendulaba entre acercamientos estratégicos y rechazos explícitos hacia los nacionales. Con todo, las últimas decisiones de la tienda derechista —apoyo al candidato democratacristiano y respaldo de la acusación constitucional— buscaban una vez más acercar posiciones con dicho partido.

La DC, por su parte, puso sobre la mesa varios cursos de acción tras la marcha de las cacerolas vacías. Consciente de que el gobierno se encontraba debilitado por la demostración de fuerza que hiciera la oposición, esta colectividad decidió presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior José Tohá. Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de continuar con la movilización social, sobre todo en relación a las bases del partido, las cuales como se recordará se habían posicionado como elementos cada vez más refractarios al gobierno de la UP. El impulso movilizador de la DC se materializó así en un acto de masas que el partido organizó en el Estadio Nacional el día 16 de diciembre[232]. El orador principal del encuentro, Renán Fuentealba, fue bastante explícito a la hora de criticar a los sectores extremistas —de derecha e izquierda— que buscaban alterar el marco institucional del país, recalcando que su lucha en contra del gobierno se llevaría cabo en el «ring democrático»[233]. Estas afirmaciones buscaban sin duda remarcar el perfil propio que esta tienda intentaba desplegar en la escena política, alejándose así de las posiciones rupturistas y hegemónicas del PN que parecían incomodarle.

Sin embargo, había decisiones estratégicas adoptadas por la DC que parecían contradecir algunos de los criterios arriba descritos. Ello fue visible, como se dijo, cuando este partido decidió no presentar candidato en las elecciones complementarias que se desarrollarían en la provincia de Linares en enero próximo. Allí, el PN había levantado la candidatura del abogado Sergio Diez, al tiempo que se abstenía en las provincias de O'Higgins y Colchagua para respaldar al democratacristiano Rafael Moreno. La actitud de

[232] El periódico democratacristiano *La Prensa* consignaría las declaraciones de diversos dirigentes del partido que destacaban, entre otros puntos, el carácter pacífico y multitudinario del evento a través del cual se manifestaba la voluntad para que el proceso de cambios y transformaciones se realizara dentro de la ley. "Impresionante respaldo popular a la democracia", 16 de diciembre de 1971, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 256 y 257.

[233] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 150 y 151.

la DC fue, pues, una «vuelta de mano» al PN por el apoyo prestado a Moreno. Si bien, aquella colectividad no había hecho público su apoyo a Diez, sí llamó a no votar por el candidato de la UP. Además de lo anterior, la acusación constitucional que la DC presentara en contra del ministro del Interior, José Tohá, por su responsabilidad en la mantención del orden público en la jornada de 1 de diciembre, sería apoyada sin condiciones por los nacionales. El sociólogo español Joan Garcés, entonces asesor del presidente Allende, sostiene en este contexto que lo más significativo del desfile femenino no fueron los incidentes sino sus consecuencias políticas. Ellas implicaron que el eje UP-DC comenzaría a ser reemplazado por el binomio DC-PN debido al peso que comenzaba a tener el sector conservador en la dirección de la tienda falangista. De este modo, apunta Garcés, la burguesía dejaba atrás su estado de aislamiento, al tiempo que la relación de las mayorías en el Congreso Nacional se modificaría de forma sustancial, abriéndose una vía de confrontación directa con el Ejecutivo[234].

Los efectos de la marcha de las cacerolas vacías se desplegaban así en distintos ámbitos. Desde luego se trató de una acción de masas que contó con una importante movilización de recursos y que derivó hacia un escenario de confrontación que, planificado o no, resultaba óptimo para la derecha. Esto último cobraba relevancia en virtud de que se disponía de un nuevo instrumento de acción política —la movilización callejera— que podía rivalizar ahora con una estrategia que había manejado mejor la izquierda. Para los actores políticos, sobre todo oficialistas, resultó complejo digerir los alcances de la manifestación femenina, cuestión que evidenciaría cierta limitación en sus análisis de coyuntura. Quizás el punto más complejo recaía en cómo confrontar a un segmento de la sociedad que disputaba la calle por cuestiones domésticas, aun cuando estas refirieran un nítido trasfondo político. En este sentido, la mayor parte de las colectividades de izquierda hizo un diagnóstico basado en categorías preexistentes al interpretar la marcha femenina como un producto de las maniobras más siniestras de la oposición y la burguesía fascista. Quizás el análisis del MAPU logró hilar más fino al vislumbrar que la marcha de las cacerolas vacías demostraba la existencia de una

[234] Joan Garcés, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, p. 165.

nueva derecha que no actuaba ya desde los márgenes del sistema, pues había logrado movilizar a segmentos claves de la sociedad en contra del gobierno.

Por todo lo anterior, cabe sostener que este evento contribuyó a modificar sustantivamente el cuadro político en curso. En su larga duración, la marcha vino a ser el punto culminante de los intentos de la oposición por desplegarse en un espacio cada vez más amplio y de alcance nacional. Además, ella abría un nuevo escenario y un nuevo ciclo político donde la iniciativa ya no estaba en su totalidad en manos del gobierno y de los partidos oficialistas. La oposición, y en particular la derecha, habían perdido el miedo a la calle y a confrontar al proyecto socialista de la UP[235]. Esto sin duda marcaba un punto de inflexión y era indicativo respecto a coyunturas y escenarios futuros que auguraban enfrentamientos todavía más polarizados y complejos. El comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, recuerda en este sentido que en la tarde del día 3 de diciembre, al reunirse con el presidente Allende, logró advertir que el olfato político del primer mandatario intuía que la marcha de las cacerolas vacías no había sido una protesta ocasional y espontánea. El presidente, confidencia Prats, «[...] advierte intenciones más trascendentes»[236].

Desde el punto de vista temporal, este evento cierra la primera etapa de violencia política durante la UP. Al hacer un balance general

[235] Dos semanas después de la marcha femenina el secretario general de Patria y Libertad, Roberto Thieme, se trasladó en su avioneta hasta Mendoza. Allí se contactó con los dueños de una conocida armería a objeto de adquirir algunos insumos. Luego de probar varias armas, Thieme y su acompañante se decidieron por treinta rifles Marcatti semiautomáticos y veinte revólveres Rubi Extra, además de cinco mil municiones, para lo cual desembolsaron mil dólares en efectivo. Al día siguiente, las armas fueron cargadas en la avioneta y trasladadas a Santiago, almacenándose en una bodega del barrio Bellavista para luego ser distribuidas entre los militantes «elegidos para emplearlas». Una acción similar se repetiría en enero de 1973. Thieme, *op. cit.*, pp. 86 y 97. Thieme comenzaría a delinear a lo largo de 1972 la idea de formar una escuela de guerrillas que le permitiera entrenar a un ejército paramilitar que combatiera frontalmente a la Unidad Popular hasta lograr su derrocamiento. El lugar escogido para emplazar este recinto fue la ciudad argentina de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Dicho plan fue bautizado por Thieme como Sierra Alfa. Aunque no se puede advertir una relación directa entre la marcha del 1 de diciembre y los planes de Thieme —elaborados posiblemente con mayor antelación—, ambos hechos revelan cómo los segmentos opositores comenzaban a entender desde ahora la lucha política para confrontar a la UP.

[236] Prats, *op. cit.*, p. 229.

se pueden constatar dos grandes líneas de análisis. La primera de ellas se refiere a las expresiones materiales de violencia política producidas en este periodo, siendo la muerte de numerosos individuos uno de sus rasgos más característicos. Esta investigación ha podido documentar la existencia de 26 víctimas fatales, cuyas muertes se produjeron en su totalidad por la acción de terceros, sobre todo civiles, a través del uso de armas de fuego. El marco de fondo sobre el cual se materializaron estos hechos correspondió a un escenario de polarización y enfrentamiento entre sectores rivales. Ello fue particularmente visible en los espacios rurales, donde la intensificación de la reforma agraria estuvo detrás de un número no menor de incidentes. De hecho, casi la mitad de las víctimas fatales correspondió a casos ocurridos en ese tipo de zonas del centro sur del país. En los espacios urbanos, en tanto, fue bastante representativa la acción de grupos organizados —como la VOP— en la materialización de hechos de violencia. A pesar del impacto que este tipo de acciones causó, la respuesta del Estado y de los aparatos represivos se concentró en acciones puntuales, no pudiendo observarse un despliegue mayor de esta violencia a lo largo de periodos extensos de tiempo.

La segunda línea de análisis se refiere a la vinculación existente entre los hechos de violencia y un conjunto de dinámicas políticas y recursos discursivos que referían a cuestiones más amplias y trascendentes. Como se apuntó en su momento, las situaciones de violencia comenzaron a ser conectadas casi de inmediato a debates generales que tenían relación con los alcances y trayectoria del propio proyecto de la UP. Desde este ángulo, las situaciones más complejas de violencia —en especial la muerte de personas— fueron entendidas por la mayoría de los actores como el resultado de dinámicas y tensiones derivadas de la implementación de un modelo de cambio estructural. El énfasis que variaba, claro está, estuvo determinado por la adscripción política de los fallecidos o de los autores del crimen. Así quedó reflejado, por ejemplo, en aquellas situaciones en que las víctimas fueron propietarios agrícolas que se resistieron a los intentos de toma o requisición de sus propiedades, cuestión que fue utilizada para criticar a la UP y su política agraria. En sentido contrario, cuando la víctima era partidaria del gobierno se acusó a la oposición y a sus grupos de choque de estar socavando la estabilidad del régimen a través de acciones de sangre. De este modo, la responsabilidad por

el origen de la violencia pendulaba entre el gobierno y sus bases militantes y los distintos partidos o movimientos atrincherados en la oposición.

Este complejo cuadro social y político, no observable en su totalidad al comenzar esta primera etapa, fue alcanzando mayor periodicidad con el transcurso de los meses. Lo que parecía inimaginable al iniciarse 1971, cuando el proyecto socialista de la UP navegaba con el viento a su favor, ya estaba del todo perfilado al finalizar ese año. En este marco, uno de los puntos más inquietantes para algunos actores radicaba en que el ambiente gris que cubría la escena política no se disiparía en el corto plazo. Más bien, se percibía que la mayor parte de los protagonistas transitaba hacia un escenario de suma polarización en el cual comenzarían a definirse cuestiones cada vez más relevantes.

Segunda etapa: desde las elecciones complementarias de O'Higgins y Linares a la revelación del Plan Septiembre, enero a septiembre de 1972

En esta segunda etapa se observa un proceso de acomodación de las estrategias políticas de los actores en torno a cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de continuidad o cancelación del proyecto de la UP. Es decir, un porcentaje mayoritario de los discursos y comportamientos orbitarán sobre el problema de la legitimidad y capacidad de ejecución del programa socialista en el mediano y largo plazo. Desde el oficialismo, se producirán algunos intentos por alcanzar una mayor coordinación en torno a la implementación de las medidas en curso. Sin embargo, tales propósitos chocarían de golpe con una división cada vez mayor en el seno mismo de la UP y con el accionar opositor que se desplegará en distintos frentes. Los dos partidos eje de la alianza, socialista y comunista, difieren en aspectos centrales respecto al camino estratégico que se debe seguir para avanzar en la construcción del socialismo. Si desde el PC se insiste en la consolidación de los cambios y en la apertura hacia una amplia mayoría nacional que legitime al gobierno, desde el PS se enfatiza en que solo la movilización de masas y la radicalización del proceso lograrán inclinar la balanza a favor de la revolución. A lo largo de esta etapa, las divisiones entre ambas vertientes quedarían graficadas en eventos de distinta naturaleza e importancia, cuestión que redundará hacia final de año en un desencuentro cada vez mayor.

Desde la oposición, las estrategias de sus dos actores más representativos —democratacristianos y nacionales— confluirán hacia una plataforma de acción común en torno a un objetivo central que es lograr la cancelación del proyecto popular de la izquierda. Indudablemente existieron matices en cada actor respecto a la forma de alcanzar dicho propósito. Para los democratacristianos, resultaba vital que su acción opositora conservara, en lo fundamental, sus rasgos de apego a la institucionalidad y al orden democrático. En este sentido, la DC buscará que el proyecto de la UP fuese derrotado en

el «ring democrático» de modo que no pudiera cuestionarse la legitimidad de su estrategia. Con todo, los sectores más conservadores de esta colectividad tendrán cada vez más peso dentro de la orgánica partidista, cuestión que les permitirá desplegar ciertos argumentos que apostaban por perfilar una oposición de naturaleza más dura e intransigente hacia el gobierno. En el caso del PN, se observará una estrategia que, a partir de numerosas acciones y enunciados, tenía como único norte abortar en el mediano plazo el proyecto de la UP. Así, el apoyo de esta colectividad a una cada vez mayor movilización de masas opositoras y su esfuerzo por instalar dentro de la opinión pública algunos tópicos como la ilegitimidad del gobierno fueron los aspectos más característicos de su estrategia.

Independiente de los matices que afloraban en uno u otro actor, la oposición terminaría por alcanzar al final un entendimiento en diverso orden de materias. De hecho, las elecciones complementarias de enero de 1972 serían un buen ejemplo de lo anterior, toda vez que los pactos por omisión que operaron entre ambos partidos permitieron alcanzar un contundente triunfo en las provincias en disputa. Pero el hecho más representativo de esta confluencia fue el nacimiento de la denominada Confederación Democrática (CODE) en julio de 1972 que agrupó a los principales partidos de la oposición. Aunque se trató, según se dijo, de una alianza con alcances solo electorales resultaba claro que su propósito trascendente era cohesionar al bando opositor y acrecentar así la polarización del sistema en torno a dos bloques excluyentes entre sí. Cabría agregar, además, que desde esta estrategia general se derivaban cuestiones más específicas y coyunturales que, como la movilización de masas o el apoyo a huelgas gremiales, estaban enfocadas dentro de la lucha contingente que se llevaba a cabo en contra de la UP.

Por fuera de las dos alianzas, las estrategias enarboladas por los principales actores —MIR y Patria y Libertad— no diferían en lo fundamental respecto a las discusiones estructurales que se habían instalado en el espacio público. Desde la izquierda, el MIR enfatizaría en que la lucha política había llegado a un punto de inflexión donde era preciso pasar por alto las formas y mecanismos institucionales. Esto significaba, entre otras cuestiones, disolver el parlamento y acrecentar las acciones que ayudaran a conformar un sólido poder popular.

Este último tópico había estado presente desde el comienzo del gobierno de la UP a través de discusiones públicas y privadas en torno al carácter que tendría el modelo de socialismo que se propugnaba. Es decir, si esta revolución —siguiendo a Peter Winn— sería desde arriba y para los trabajadores, o bien, se trataría de un proceso desde abajo y con un marcado protagonismo del elemento proletario[237]. Conforme se acrecentaran las dificultades del proyecto de la UP, y emergieran una serie de «nudos de conflicto» de muy difícil solución, ciertos actores explicitaron que la viabilidad del proceso revolucionario pasaba necesariamente por el fortalecimiento del poder popular. Tal diagnóstico significaba cuestionar un aspecto central de la política oficialista encarnada por el presidente Allende en orden a la adhesión que este había manifestado hacia los mecanismos institucionales y el marco democrático.

Para Patria y Libertad, en tanto, sus perspectivas estratégicas de mediano y largo plazo tenían que ver con la generación de un escenario que permitiera acelerar la caída final del gobierno. Esto significaba, en la práctica, desplegar acciones que tendieran hacia una lucha política cada vez más polarizada y rupturista entre sectores irreconciliables. Como es de suponer, esto produciría una sensación de desgobierno y caos donde se podría plantear sin ambages la intervención de las Fuerzas Armadas. En la materialización de tales propósitos cobrarían relevancia la intensificación de las movilizaciones callejeras, una predisposición a los enfrentamientos con los grupos de choque de la izquierda y abiertos llamados a que la oposición actuara de forma conjunta.

Los hechos de violencia política ocurridos en este marco serán indicativos, pues, del aumento de la polarización en el país y, al mismo tiempo, reflejarán cómo los principales actores los conectarán, otra vez, a discusiones y temáticas generales. Durante los meses de enero y abril de 1972, la mayor parte de los casos de violencia política estuvieron situados en los espacios rurales a propósito de los ya habituales conflictos derivados de la aplicación de la reforma agraria. También se observará una destacada presencia de la oposición en las calles, y con ello la contrarrespuesta de los sectores de izquierda, situación que se prestará para el desarrollo de innumerables enfren-

[237] Winn, *passim*.

tamientos y agresiones en distintos puntos del territorio. Los meses que transcurren entre mayo y septiembre de 1972, conservarán, como se verá, el carácter polarizador que se arrastraba desde tiempo atrás. El foco de los conflictos y hechos de violencia se centrará, a diferencia de los primeros meses, en espacios urbanos que dejarán un saldo de nueve fallecidos.

Al finalizar esta etapa se revelaría dentro de la opinión pública la existencia del denominado Plan Septiembre que refería, según se informó, a una operación ideada por los sectores opositores con el fin de desestabilizar al gobierno y abrir paso a su caída. En algunos de sus puntos, la denuncia predijo con notable precisión los hechos que ocurrirían a partir del mes de octubre cuando se desatara una intensa y muy bien coordinada paralización gremial en contra del gobierno. Tal movilización, como se verá en la tercera etapa, marcaría un nuevo punto de inflexión dentro de la experiencia socialista de la UP.

Balance de un año y perspectivas de mediano plazo, enero a abril de 1972

En los primeros días de enero de 1972, buena parte de la prensa escrita realizó balances del año que acababa de terminar. Es interesante reseñar los planteamientos que en algunos de estos medios se desarrollaron, pues en ellos se hacían diagnósticos globales de la gestión presidencial y al mismo tiempo se trazaban algunas perspectivas para el año que comenzaba. El periódico *Clarín* sostuvo que 1971 había sido un año de grandes avances, cuyos puntos más representativos fueron la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Según este medio, el punto negativo recaía en el papel jugado por la oposición la cual se encontraba embarcada, desde fines de 1971, en dar un «golpe legal» a la UP, situación que se expresaba entre otras cosas en la acusación constitucional en contra del ministro del Interior José Tohá. Con todo, sentenciaba *Clarín*, la balanza se inclinaba a favor de los cambios y transformaciones impulsadas por el gobierno popular en contraposición a los «chillidos negativos de una oposición exasperada»[238].

[238] "Comadreos y comistrajos de la política 1971-1972", 2 de enero de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 264 y ss.

El periódico *El Siglo* expresaría análogas ideas respecto al primer año de la UP. En primer término, este medio resaltaría las grandes realizaciones efectuadas por el proyecto socialista siendo la nacionalización de las riquezas básicas uno de sus puntos culminantes. Bajo la óptica de este medio, tales transformaciones habían significado un duro golpe para el imperialismo y la burguesía monopólica chilena, resaltando asimismo que cualquier obrero, empleado o profesional del país vivía mejor ahora que hace un año atrás[239]. Adicionalmente, *El Siglo* deslizaba una crítica implícita a aquellos sectores que, conscientes del relativo éxito alcanzado en 1971, buscaban cambiar el programa de gobierno modificando los objetivos primigenios contenidos en él o bien lanzando nuevas consignas. Sin duda que este planteamiento se dirigía hacia sectores del PS y del MIR que apostaban por desencadenar en el corto plazo transformaciones más profundas y radicales en el país, cuestión que se alejaba de los planteamientos estratégicos defendidos por el PC.

Una visión distinta expondría *El Mercurio* en su edición del 2 de enero de 1972. En su editorial titulado «Año tenso y dramático» destacaría que los hechos más característicos de 1971 habían sido el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, el accionar de los grupos armados y una sensación ambiente de inseguridad «a lo largo de todo el país». Solo en segundo lugar se reconocía algunas de las medidas más estructurales impulsadas por la administración de la UP como fueron la nacionalización del cobre y de la banca privada. Sin embargo, al entrar en el detalle de estas y otras medidas *El Mercurio* insistió en lo que a su juicio constituían las intenciones de fondo del oficialismo con este tipo de políticas: coartar la libertad y la independencia de diversas instituciones del país. En concordancia con el planteamiento anterior, este medio expresaría una crítica abierta hacia lo que denominó politización de la sociedad chilena, cuestión de la que serían responsables el Gobierno y los partidos que le sustentaban. Frente a esa «toxina enervante de la capacidad productiva» —como fue definido por *El Mercurio* el proceso de politización en curso— se había levantado, a su juicio, una mayoría democrática que a través de distintas vías intentaba oponerse a los designios autoritarios del gobierno[240].

[239] "Profundizar en 1972 los avances de 1971", 2 de enero de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 269 y ss.

[240] "Año tenso y dramático", 2 de enero de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 267 y ss. El almirante Ismael Huerta enfatizaría un diagnóstico similar al

Como se puede apreciar, este periódico interpretó la lucha política que se desarrollaba en Chile a partir de una disputa global entre dos sectores excluyentes entre sí. Por un lado, estaba el oficialismo que, a través de su programa de gobierno buscaba transitar hacia un modelo de socialismo que terminaría por coartar las libertades públicas e individuales; por otra parte, se encontraba un bloque social y político que había despertado y se encaminaba a resistir tales intentos. Quizás lo más notable del balance de este matutino radicaba en que, más allá de las diferencias existentes en el seno de la oposición, la actuación de consuno de esta alianza y de los segmentos sociales que adherían a él sería un factor clave para confrontar a la UP y buscar en el mediano plazo la cancelación del proyecto popular. Es decir, la lógica establecida por *El Mercurio* entendía que el desarrollo de los acontecimientos debía escenificarse en un campo bipolar, de nulo entendimiento entre las partes, y donde el protagonismo de la sociedad civil reacia al proyecto de la UP iría cobrando cada vez más relevancia. A juicio de este medio, la coyuntura política más próxima en la cual quedaría confirmado este tipo de disputas serían las elecciones complementarias a realizarse a mediados de enero en dos provincias de la zona central del país.

Dichos comicios, en efecto, suponían dirimir cuestiones importantes dentro de la escena nacional. Desde ya sería una instancia para medir el apoyo con que contaba la UP en los espacios rurales y sobre todo dentro de los sectores campesinos. Como era de esperar, el respaldo o desafección al proyecto de transición al socialismo estaba mediado en gran parte por el proceso de reforma agraria que se llevaba a cabo en dicha zona. Consciente de la importancia de este tópico, la UP había levantado la candidatura a diputado de María Eliana Mery en la provincia de Linares. Dicha postulante era militante de la Izquierda Cristiana y hermana del funcionario de la CORA Hernán Mery, quien fuera asesinado en abril de 1970 cuando tramitaba la expropiación de un fundo bajo el gobierno de Eduardo

---

referir el primer año y medio de Gobierno de la UP. Según sus memorias, las fuerzas armadas, a pesar de la solidez del principio de prescindencia existente todavía en su seno, miraban con cautela un conjunto de «síntomas intranquilizadores» que afectaban a la sociedad chilena. Entre estos destacaban la existencia de grupos paramilitares, los intentos de infiltración por parte de la extrema izquierda y la destrucción de la industria. Ismael Huerta Díaz, *Volvería a ser marino*, tomo 1, p. 439.

Frei Montalva. Con esta candidatura, el oficialismo buscaba en alguna medida concitar el apoyo de la base militante democratacristiana. En las provincias de O'Higgins y Colchagua, donde se elegía un senador, la UP levantó la postulación del dirigente sindical Héctor Olivares.

Pero estos comicios también habrían de dirimir cuestiones vinculadas a la oposición, en particular respecto a si era correcta, y exitosa, una actuación de conjunto en términos electorales. Con el pacto de omisión implícito que operó entre la DC y el PN se aseguraba que no existiera una tercera candidatura que pusiera en riesgo un virtual triunfo opositor. De esta manera, los comicios quedaban estructurados en torno a una disputa bipolar entre gobierno y oposición, situación que de modo inevitable añadía un matiz plebiscitario en torno a la gestión del gobierno y su apoyo dentro de la sociedad civil.

Por el tenor de los discursos y énfasis que comenzaban a circular, se podía advertir la existencia de un escenario propicio para la confrontación y conflictividad política en general. Ejemplo nítido de esta situación fue una serie de hechos de violencia ocurridos en las semanas previas a los comicios. El día 5 de enero, por ejemplo, el domicilio particular del vicerrector de la Universidad de Concepción Galo Gómez, de filiación socialista, fue atacado por disparos provenientes de un automóvil en marcha. Según el estudio de José Díaz Nieva y Mario Valdés Urrutia, se sospechó de la autoría del Frente Nacionalista Patria y Libertad en la materialización de este hecho[241].

En los días siguientes se sucedieron otras situaciones que también tuvieron cierta resonancia dentro del espacio público. El 7 de enero desconocidos atentaron contra el monumento al Che Guevara emplazado en la comuna de San Miguel al sur de la capital, el cual había sido inaugurado poco tiempo atrás en el marco de la visita de Fidel Castro a Chile. Luego comenzaron a ocurrir diversos incidentes con armas de fuego y situaciones de enfrentamiento en zonas rurales. El día 11 de enero un grupo de individuos atacó a tiros al intendente de la provincia de Llanquihue Alfredo Fuchslocher. Algunas de las fuentes recopiladas por Manuel Salazar, señalaron que la autoridad salió ilesa de la emboscada, pero su chofer, René Iniani, resultó herido a bala en una pierna[242]. Al día siguiente, tres militantes de

[241] Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, p. 114.
[242] Salazar, M., *Chile...*, *op. cit.*, p. 187.

la Juventud del PN fueron detenidos en la zona de Angostura, provincia de O'Higgins, por transportar armas y otros elementos para autodefensa como cascos y laques. Los aprehendidos fueron identificados como Pablo Humberto Moraga, Abel Ricardo Sepúlveda y Juan Luis Ossa. Este último denunciaría que, tras la detención, personal de la Policía de Investigaciones lo habría torturado con inusitada violencia[243]. Dicho incidente, alcanzaría cierta resonancia pues Ossa denunciaría el hecho, a través del Colegio de Abogados, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU (CIDH). En su informe anual de 1973, el citado organismo indicó que en su vigesimonoveno periodo de sesiones había considerado este caso en virtud de que el Gobierno de Chile no había dado respuesta a la solicitud de información y, además, porque el reclamante había llevado su caso a la mencionada Comisión. Solo en agosto de 1973, el Ejecutivo, a través de su delegación ante la Organización de Estados Americanos, respondería a la solicitud de información hecha por la CIDH. En dicho documento, se señalaba que después de practicarse un conjunto de diligencias e indagaciones el caso se había sobreseído «por no resultar completamente justificado la perpetración del supuesto delito denunciado»[244]. A pesar de estos resultados, el caso se había ventilado a través de la prensa opositora durante las primeras semanas de enero, situación que sirvió para reforzar las críticas hacia el gobierno y la izquierda en general.

[243] Este tipo de denuncias no eran del todo nuevas en la Unidad Popular. En septiembre del año anterior, el abogado y periodista Maximiano Errázuriz declaró que miembros de la Policía de Investigaciones lo detuvieron y torturaron en la ciudad de San Fernando acusándolo de instigar un plan golpista en contra del Gobierno. A dicha detención, que se extendió por varios días, se sumó otra en el mes de diciembre, en la cual, según su testimonio, fue linchado de forma brutal en la Cárcel de Rancagua. Véase, Errázuriz, *op. cit.*, pp. 78 y ss.

[244] "Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" [Washington, 1973], Archivo General de la Administración (AGA), España, carpeta OEA II, CIDH 1971-1974, leg. R 16863, n.º de expediente 1. El subdirector de la policía civil Carlos Toro refuta enérgicamente las acusaciones de Ossa. Según su testimonio, el dirigente de la Juventud Nacional —«y jefe de los Comandos Rolando Matus»— había sido sorprendido portando numeroso armamento en su automóvil —bolones de acero, hondas metálicas y pistolas—. Respecto a las acusaciones de tortura, Toro señala que las desacreditó personalmente en un programa de televisión de Canal 9 al que fue invitado junto a Ossa. En dicho espacio, mostró fotografías, recortes de prensa y testimonios que evidenciaban, a su juicio, que las acusaciones eran falsas, pues, por ejemplo, situaban a Ossa prestando declaraciones a la misma hora en que éste denunciaba haber sido torturado. Toro, *op. cit.*, pp. 374-375.

En medio de estos hechos, la Cámara de Diputados había aprobado, el día 6 de enero, la acusación constitucional en contra del ministro del Interior José Tohá con una mayoría de ochenta votos a favor[245]. Desde la óptica de la izquierda, se trataba de la concreción de lo que a principios de enero el periódico *Clarín* había definido como «golpe legal» de la oposición. Tal idea fue compartida por la revista *Punto Final*, aunque indicando que se trataba de la continuación del intento de golpe de octubre de 1970 que había quedado inconcluso y en cuya articulación se ubicaba el expresidente Frei Montalva[246]. A pesar de la decisión del Congreso, el presidente Allende procedió a designar a Tohá como ministro de Defensa trasladando al titular de dicha cartera, Alejandro Ríos Valdivia, a Interior. Según el primer mandatario, la oposición —usando de modo indebido un resorte constitucional— había sometido a un «juicio político» al secretario de Estado[247].

Los hechos de violencia volvieron a la palestra el día 15 de enero con un grave suceso producido en el fundo La Rinconada de Curicó. En esa jornada, y a solo 24 horas de las elecciones complementarias, un grupo de campesinos asaltaron la casa patronal del terreno indicado con la intención de expropiarlo por la fuerza. La propietaria del fundo, Eliana Quezada Moreno, y su hermano Raúl fueron golpeados con elementos contundentes causándoles severas lesiones que obligaron a la hospitalización de este último. Fue tal la gravedad de los golpes que el herido fallecería el día 19 de enero[248]. La Confederación Nacional de Empleados Agrícolas manifestó a través de un comunicado su categórica condena frente a este hecho de sangre, señalando además que la promesa de que la reforma agraria se haría sin costo social no era cierta[249]. En este marco también se produjo, en la comuna de Santa Cruz, la muerte del campesino Francisco Palominos Nalhue debido a un altercado que se originó tras conocerse los resultados las elecciones complementarias. Según informó *La Prensa*, la víctima, que celebraba junto a otras personas el triunfo de Rafael

[245] Salazar, M., *Chile...*, *op. cit.*, p. 187.

[246] *Punto Final*, n.º 149, Santiago, martes 18 de enero de 1972, p. 1.

[247] "Tohá asumió el Ministerio de Defensa", *El Mercurio*, 8 de enero de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 274.

[248] Salazar, M., *Chile... op. cit.*, p. 188.

[249] Declaración publicada en *La Prensa*, Santiago, 20 de enero de 1972, p. 8.

Moreno, fue atacado por adherentes de la candidatura del socialista Héctor Olivares. Los involucrados en el hecho, indica el periódico, se acercaron al lugar de celebración portando armas blancas con el claro propósito de provocar una discusión o riña[250].

Visto en su conjunto, estos sucesos —entremezclados algunos de ellos con la contingencia electoral de principios de año— volvían a poner sobre la mesa el conflictivo proceso de reforma agraria que se llevaba a cabo en el país. Sin duda que la alteración de los límites de la propiedad agrícola, con la consiguiente modificación de los patrones culturales y simbólicos dentro de un sector tradicional, sería un elemento detonante de muchas de las acciones de violencia ocurridas en aquellos años. Hasta inicios de 1972, las agresiones e incidentes de diversa magnitud en estos espacios se habían tornado habituales y las víctimas fatales ya ascendían a más de una docena. Conforme el clima de polarización mantenía su curso ascendente sería inevitable que la confrontación en las áreas rurales prosiguiera un camino similar.

Respecto a la contienda electoral, sus resultados arrojaron un contundente triunfo opositor en las dos zonas en disputa. En O'Higgins y Colchagua, donde se elegía un senador, el candidato de la DC, Rafael Moreno, ganó con el 52,7 % de los votos versus el 46,4 % del candidato de izquierda Héctor Olivares. En la provincia de Linares, lugar en que se disputaba un escaño para la Cámara de Diputados, el triunfo de Sergio Diez, representante del PN, fue todavía más amplio al alcanzar el 58 % versus el 40 % de la candidata de la UP María Eliana Mery. Sin duda que la estrategia del oficialismo en esta última provincia, que apuntaba a ganar el voto de la DC, fracasó estrepitosamente.

Como era de esperar, los resultados de los comicios causaron diversas repercusiones en el ámbito político. El periódico *El Mercurio*, junto con referir los principales datos estadísticos de la jornada enfatizó en dos aspectos centrales. En primer lugar, que se trataba de un triunfo categórico de los «candidatos democráticos» por sobre los representantes del oficialismo. Estos últimos, titulaba el matutino, habían recibido un repudio generalizado de parte de los sectores campesinos. En segundo lugar, este medio enfatizó que en ambos

[250] *La Prensa*, Santiago, 18 de enero de 1972, p. 5.

resultados la votación femenina había sido importante en favor de los dos candidatos de la oposición, lo que graficaba que este segmento social se situaba ya en una posición del todo adversa y reactiva a la UP[251]. Para el PN, en tanto, dichos resultados fueron el reflejo de un rechazo a los propósitos autoritarios del gobierno marxista. En la DC se interpretó dicha jornada como un llamado de atención de la ciudadanía al gobierno en orden a que este cumpliera con la promesa de edificar un socialismo democrático y pluralista[252].

Desde la izquierda emergieron distintos puntos de vista para interpretar esta dura derrota. Para el PC, los resultados evidenciaban de modo indesmentible que el gobierno ya no contaba con el mismo apoyo social y político en ciertas zonas. Asimismo, visualizó con claridad que los intentos de la oposición, y en particular de la derecha, transitaban hacia la conformación de un gran bloque opositor, cuestión que se traduciría en un obstáculo mayor para el gobierno de la UP en caso de materializarse. En el PS, junto con reconocer la existencia de algunos errores gubernamentales, se fijó el análisis en un aspecto distinto al explicitado por el PC. Este se refería a que los recientes comicios no sintetizaban la totalidad de las luchas políticas en curso, sino tan solo un aspecto muy concreto. De tal forma —insistía el PS— se debía poner más atención a la evolución del proceso revolucionario y al objetivo central que a su juicio estaba detrás de esta óptica. Dicho objetivo no era otro que incrementar la ofensiva popular sin «vacilaciones ni conciliaciones de ninguna naturaleza»[253]. La Izquierda Cristiana denunció, a través de su dirigente Juan Enrique Miquel, que los resultados electorales dejaban al descubierto una recuperación táctica y la implementación de un nuevo método de acción en la oposición. Tal proceso, según Miquel, se había consolidado a lo largo de 1971 y ahora se expresaba a través del campo electoral[254]. Una óptica similar explicitó el MAPU en el sentido de que resultaba evidente que la derecha había pasado a la ofensiva al desplegar sus acciones de desgaste y hostigamiento

[251] "Repudio campesino a la UP", 17 de enero de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 277.

[252] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 154.

[253] *Op. cit.*, pp. 155-156.

[254] "Juan Enrique Miquel (Izquierda Cristiana): La Unidad Popular debe recuperar su capacidad ofensiva", 1 de enero de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 3, p. 1865.

en contra del gobierno. Al mismo tiempo, esta colectividad puso un punto de atención respecto a la efectividad con que la derecha logró atraer a diversos segmentos de la población hacia sus posiciones defensivas[255].

En este marco y conscientes de las debilidades por las que atravesaba el oficialismo, los partidos de la UP y el propio presidente Allende decidieron desarrollar entre fines de enero y los primeros días de febrero de 1972 una serie de reuniones a fin de revertir los problemas y reimpulsar la agenda del gobierno. Tal encuentro, denominado Cónclave de El Arrayán por el lugar donde se llevó a cabo, definió un conjunto de lineamientos para el año que se iniciaba, sobre todo en materia económica y productiva. Una de las medidas más importantes adoptadas en dicho encuentro fue la decisión de no profundizar en la política redistributiva de ingresos a efecto de mantener contenida la inflación. Otras disposiciones apuntaron en la misma dirección, es decir, lograr cierta estabilidad económica para asegurar la consolidación de las transformaciones y dar continuidad al proyecto de la UP. También se acordó en que se debía propender hacia una mayor participación política de las masas, dejando de lado el sectarismo y el exceso de burocracia[256].

Al iniciarse 1972, la izquierda tenía plena consciencia que en menos de dos meses el escenario político y social había cambiado. La ofensiva opositora que había mostrado una notable capacidad de movilización de masas a fines del año anterior, alcanzaba ahora un triunfo electoral relevante en dos provincias de la zona central. En términos prácticos, la izquierda visualizaba una capacidad de acción del bloque opositor en distintos planos y a través de diferentes estrategias, siendo exitosas la mayoría de ellas. En este contexto, el espíritu que primaba dentro del oficialismo coincidía en torno a la necesidad de rectificar el rumbo. Sin embargo, había diferencias ostensibles entre los principales partidos respecto a la forma en cómo debía llevarse a cabo dicha rectificación. Consolidar para avanzar o avanzar sin frenos ni conciliaciones volvía a ser el dilema que surgía dentro de la UP. Como se podrá advertir, dicha pugna no lograría

[255] "MAPU: Las lecciones de una derrota parcial", enero de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 3, pp. 1872-1873.

[256] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 157-160.

ser resuelta ni el mediano ni en el largo plazo, haciéndose cada vez más presente en distintas coyunturas.

El problema de interpretación jurídica en torno a los vetos presidenciales, en tanto, pasó a ser otro tópico de importancia en las relaciones del gobierno con la oposición. Tal conflicto se había producido porque el 19 de febrero el congreso aprobó el proyecto de los senadores Hamilton y Fuentealba referido a las áreas de la propiedad. Si el presidente Allende promulgaba dicha ley sus consecuencias inmediatas habrían sido desestructurar uno de los pilares económicos del programa socialista de la UP. Ante dicho panorama, el primer mandatario resolvió vetar la ley. Luego, al rechazar el Congreso dicho veto se produjo el problema de interpretación, pues según este bastaba simple mayoría para aprobar el rechazo e insistir en la promulgación de la ley. Para el gobierno, en cambio, se requerían los dos tercios de los votos para dicha tramitación. Así surgía otro conflicto más entre los bloques políticos, el cual se extendería a lo largo de los próximos meses[257].

A comienzos del mes de marzo volvieron a emerger los hechos de violencia en algunas zonas del país, sobre todo dentro de los espacios rurales. Como se recordará, en la primera quincena de enero de 1972 se habían producido algunos sucesos graves de violencia que terminaron con la muerte de dos campesinos. Ahora, a inicios de marzo volvían a producirse enfrentamientos y conflictos en la zona centro-sur. El día 9, un grupo de estudiantes de la Universidad de Concepción junto con miembros del MIR y MCR ocuparon las dependencias del fundo Duao en la provincia de Licantén. Según la investigación de José Díaz y Mario Valdés, el grupo de ocupantes procedió a secuestrar al propietario del terreno, Jorge Becerra, para luego bloquear el puente Huapín y dejar de este modo aislado dicho territorio. Tal medida, según comentan los autores, se habría realizado con el objetivo de acelerar la expropiación del fundo[258].

Tensiones más complejas que el caso anterior se vivieron en algunos predios de la zona central en los cuales se registró la muerte de dos campesinos entre los primeros días de marzo y la quincena de abril. La prensa escrita resaltó con profusión tanto este tipo de

[257] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 160-161.
[258] Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, p. 126.

hechos como aquellos que formaban parte de un contexto general de agitación y enfrentamiento[259]. Asimismo se destacaría el diagnóstico de los dirigentes campesinos y gremiales ante esta situación, como fue el caso de las declaraciones de Jorge Fontaine quien sostuvo que en el campo chileno se vivía una verdadera «ley de la selva»[260]. Desde la prensa de izquierda, la interpretación apuntaba en la dirección contraria, es decir, destacando que los hechos de violencia correspondían a una reacción de los núcleos patronales en contra la reforma agraria impulsada por el Gobierno. En algunas de estas acciones, según apuntara el matutino *Clarín*, se confundían tanto miembros de la derecha como democratacristianos[261]. Inclusive en aquellos casos en que no existía claridad respecto al origen y características del hecho de violencia, este medio no dudaba en atribuir la responsabilidad de lo sucedido a las huestes de la oposición[262].

En el marco de este tipo de incidentes y acusaciones cruzadas se produjeron, pues, las muertes de los campesinos Manuel Escobar y Nibaldo Soto Alarcón entre los meses de marzo y abril[263]. En el pri-

[259] Particularmente indicativas de este énfasis fueron las ediciones de *La Segunda* de los días 8 y 9 de marzo de 1972 en que se destacaba el papel que tenía el MCR —calificado como «arma agraria del MIR»— en la ocupación y toma de diversos predios.

[260] *La Segunda*, Santiago, 14 de marzo de 1972, p. 20.

[261] A mediados de marzo, este medio señaló que grupos de «momios» y democratacristianos se habían tomado quince fundos en distintos puntos del país, al tiempo que miembros de Patria y Libertad habían baleado a carabineros y detectives en las cercanías del fundo Carrizal Oriente en la comuna de San Carlos. *Clarín*, Santiago, 14 de marzo de 1972, p. 7.

[262] En la quincena de marzo aparecieron los cadáveres de dos campesinos en las cercanías de Chillán. Aun cuando no estaba claro que el hecho pudiera tratarse de un crimen de connotaciones políticas *Clarín* tituló: "Masacrados 2 campesinos en Chillán: crimen momio". *Clarín*, Santiago, 15 de marzo de 1972, p. 7. Desde la prensa opositora también se intentó dar una connotación política al hecho advirtiendo que en la materialización del homicidio hubo «algún cerebro más intelectual que un simple peón campesino». Véase, *La Segunda*, Santiago, 15 de marzo de 1972, p. 1. A inicios de marzo, una nota del periódico democratacristiano *La Prensa* sostuvo que un destacado dirigente curicano del partido, identificado como Carlos Carvajal Osorio había sido apuñalado por Luis Poblete Fuentes, «reconocido activista del Partido Comunista», debido a rencillas que remitían a «cuestiones políticas». El periódico indicaba que a partir de estos hechos se podía concluir que cualquiera que osara disentir de ciertas ideas estaría expuesto a sufrir «fatales ataques». *La Prensa*, Santiago, 8 de marzo de 1972, p. 9.

[263] Algunos actores indicaron en su momento la existencia de otra víctima fatal en estas mismas semanas. En una intervención en la cámara alta fechada a mediados

mer caso, según se desprende de los datos aportados por *El Mercurio*, se trató de una muerte no violenta, aunque derivada del clima de enfrentamiento que se vivía en algunos predios. Según este rotativo, Manuel Escobar era propietario del fundo Santa Elena, ubicado en la zona poniente de la Región Metropolitana, el cual se encontraba tomado por un grupo de trabajadores. Cuando aquel se acercó a conversar con los ocupantes fue amenazado con la expropiación de sus tierras, situación que lo afectó profundamente. Según indica René Escobar, hijo de la víctima, su padre murió al día siguiente de dicho encuentro, dando a entender que una patología cardíaca derivada de los sucesos ocurridos aceleró su deceso. En la nota de *El Mercurio* se consignó también el parecer de los propietarios de los predios ocupados quienes indicaron que todo el movimiento huelguístico había desembocado en una ocupación ilegal por parte de miembros del MIR[264]. Este último punto encontró eco en el propio medio que había consignado dichas declaraciones, el cual manifestó, a través del editorial principal, su preocupación por la frecuencia con que ocurrían este tipo de incidentes. Se trataba de un escenario, apuntaba *El Mercurio*, que confrontaba a los propietarios agrícolas con «delincuentes afiliados a las organizaciones revolucionarias»[265].

La muerte de Nibaldo Soto Alarcón, en tanto, se produjo el día 23 de abril[266]. *Las Últimas Noticias* indica que la víctima se desempeñaba

---

de septiembre de 1972 el senador democratacristiano, Patricio Aylwin, adjuntó una larga lista de personas fallecidas y heridas en el transcurso del Gobierno de la UP. En la quincena de marzo de 1972 dicho documento consignaba la muerte del campesino Romelio Maturana en el fundo Vista Hermosa de la ciudad de Rengo. La revisión de prensa realizada por esta investigación no ha detectado datos concluyentes sobre dicho caso. Una situación similar ocurre con Blanca Vergara Villalobos, quien falleció el 4 de septiembre de 1971 en el marco de un intento de toma de su predio en el sector de Renca al poniente de la capital. Si bien el senador Aylwin incluye a Vergara Villalobos en su listado, esta investigación no ha encontrado todavía información que corrobore este suceso.

[264] *El Mercurio*, Santiago, 6 de marzo de 1972, p. 19.

[265] *El Mercurio*, *op. cit.*, p. 21.

[266] La prensa nacional, al igual como había sucedido en marzo, continuaba informando sobre la situación agraria y los hechos de violencia vinculados a estos espacios. En la misma semana en que falleció Nibaldo Soto Alarcón, algunos medios destacaron la expropiación de 244 predios agrícolas en las provincias de Curicó y Talca por parte del Consejo Superior de la Reforma Agraria de esa zona en una actividad que contó con la presencia del ministro de Agricultura Jacques Chonchol y del vicepresidente de la CORA, David Baytelman. Véase, *El Mercurio*, Santiago, 24 de abril de 1972, p.

como mayordomo del fundo La Patagua, ubicado en el departamento de Cauquenes al sur de la región de Talca. Dicho predio había sido entregado por su propietario, Enrique Urrutia Ibáñez, a una decena de trabajadores para que lo administraran de forma colectiva. Sin embargo, la CORA dictaminó la expropiación del fundo, información que causó honda preocupación en Soto Alarcón. Según el periódico capitalino, la llegada de la reforma agraria y con ello el cambio en la propiedad de las tierras provocó un cuadro de desesperación en la víctima quien decidió suicidarse envenenándose con estricnina[267]. Aunque la muerte de Soto no fue idéntica a la de Manuel Escobar, quien falleció producto de una aparente patología cardíaca, sus casos tenían un hilo común que se vinculaba a un proceso de carácter estructural como era la reforma agraria. En ambos casos, los cambios en las relaciones de propiedad producto de la expropiación afectaron a los campesinos que vieron cómo su principal actividad laboral quedaba sometida a un régimen jurídico distinto al que habían conocido.

En medio de estos acontecimientos, ocurrió un hecho de características policiales que rápidamente adoptó un matiz político, afectando a la izquierda y al Gobierno en general. En la madrugada del 31 de marzo una camioneta Chevrolet chocó con un poste del alumbrado público en un camino rural del sector de Curimón, cercano a la ciudad de San Felipe en la región de Valparaíso. Según informa *El Mercurio*, cuando la policía uniformada llegó al lugar descubrió que el vehículo transportaba armas de diversos calibres, una granada, manuales de instrucción guerrillera y planos de distintas instalaciones militares. La complejidad del asunto radicaba, según el matutino, en que la camioneta pertenecía a la Dirección de Asistencia Social de la Presidencia de la República y, además, porque sus ocupantes tenían credenciales del GAP al momento de ser arrestados[268]. El hecho resultaba llamativo y propicio para que

21. Los hechos de sangre, como se dijo, tampoco estuvieron ausentes en la prensa nacional. El 24 de abril se informaba de la muerte de una persona producto de una riña ocurrida en un asentamiento de la provincia de Llanquihue a causa de la pérdida de 30 mil escudos. Pese a que se trataba aparentemente de un hecho delictual aquel daba cuenta del clima de tensión existente en estos espacios en los que cualquier situación podía generar una reacción violenta. Véase, *La Segunda*, Santiago, 24 de abril de 1972, p. 3.

[267] *Las Últimas Noticias*, Santiago, 25 de abril de 1972, p. 28.

[268] *El Mercurio*, Santiago, 1 de abril de 1972, p. 1.

la prensa opositora acosara con particular dureza al Gobierno. De hecho, *El Mercurio* habló de «extremistas» para referirse a los ocupantes del vehículo, insistiendo en la gran cantidad de armas que éstos portaban. Además, este medio dio cuenta de las primeras medidas que comenzaron a tomar las autoridades, destacando la querella que el intendente de la provincia de Aconcagua, Nelson Ávila, presentó a nombre del Ejecutivo[269]. Desde *La Segunda* se informó que los dos detenidos —de apellidos González y Amaya Sepúlveda— se habían identificado desde un primer momento como miembros del GAP, lo que hacía que la situación se volviera bastante crítica e inoportuna para el Gobierno[270]. Para *Las Últimas Noticias*, lo más relevante del caso era la cantidad de armas encontradas, algunas de las cuales eran de propiedad del Ejército, como así también las credenciales que testimoniaban que los detenidos pertenecían al GAP. Todo lo anterior, según este medio, dejaba en evidencia la implicancia de «grupos de choque marxistas» en este tipo de sucesos[271]. Desde la prensa de izquierda, la noticia fue muy poco cubierta. En un pequeño recuadro de sus páginas interiores, el matutino *Clarín* informó que la segunda fiscalía militar comenzaría a sustanciar el proceso por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los ocupantes de la camioneta. Según este medio, los imputados, «cuya identidad no ha sido revelada», permanecían en la ciudad de San Felipe a la espera de ser trasladados a Santiago[272].

Evidentemente, los alcances de la noticia incomodaron a la izquierda, pues todo parecía indicar que las informaciones divulgadas eran verídicas, lo cual comprometía al Gobierno en su conjunto y al entorno inmediato del primer mandatario. El historiador Cristián Pérez entrega algunos elementos de contexto para entender los sucesos de Curimón y su impacto en la opinión pública en ese periodo. Según comenta en su estudio sobre el GAP, este dispositivo se encontraba dirigido, en una primera etapa, por gente del MIR, teniendo como uno de sus propósitos fortalecer la capacidad de combate del organismo. Eso significaba formar una escuela de combatientes

[269] *El Mercurio*, Santiago, 2 de abril de 1972, p. 21.
[270] *La Segunda*, Santiago, 3 de abril de 1972, p 2.
[271] *Las Últimas Noticias*, Santiago, 3 de abril de 1972, p. 4.
[272] *Clarín*, Santiago, 3 de abril de 1972, p. 7.

hasta transformarse, en el largo plazo, en el «germen de un ejército revolucionario». En este contexto, indica el autor, algunos miembros del GAP comenzaron a realizar acciones de «financiamiento privado» como asaltos a entidades bancarias. El problema radicaba en que algunos de estos elementos, una vez fuera del dispositivo de seguridad presidencial, no devolvieron las credenciales respectivas por lo que al ser detenidos aparecían vinculados al entorno del presidente. No obstante ello, Pérez sostiene que los ocupantes de la camioneta que chocó en Curimón participaban de una operación encubierta tendiente a ubicar al mayor de Ejército Arturo Marshall de quien se sospechaba que instruía a miembros de Patria y Libertad. En este sentido, se puede inferir que los detenidos pertenecían todavía al GAP. El problema radicó, según Pérez, en la irresponsabilidad con que actuaron dichos individuos, pues bebieron alcohol, estrellaron el vehículo y dejaron al descubierto la naturaleza de su plan[273].

Lo ocurrido en Curimón puso de nuevo un punto de interrogación respecto al carácter de algunos grupos de izquierda. Más aún, el hallazgo de material del Ejército, así como de planos de instalaciones militares en poder de los detenidos, sacaba a la luz no solo el tema de las armas con que contaban estos movimientos, sino también la relación o vínculos que se habían establecido con las Fuerzas Armadas. Como se verá más adelante, este último tópico sería uno de los elementos centrales del debate político conforme el cuadro de polarización aumentara y la amenaza de un enfrentamiento fratricida o de un golpe militar que resolviera las disputas en curso emergieran como alternativas posibles.

Ahora bien, gran parte de los hechos antes descritos ocurría en paralelo a los pronunciamientos de los actores respecto a cómo encarar el proceso político que se estaba desarrollando. Como ya se indicó, existían diferentes líneas estratégicas en torno a estas cuestiones. Dentro de la oposición, el PN había explicitado la idea según la cual se llegaba a un momento decisivo en el que, de no mediar una confrontación más dura respecto al gobierno, la UP terminaría por instaurar una dictadura totalitaria. La DC, por su parte, si bien insistía en la necesidad de preservar el marco institucional como el

[273] Cristián Pérez, "Salvador Allende, apuntes sobre su dispositivo de seguridad: El Grupo de Amigos Personales (GAP)", pp. 52 y ss.

espacio donde se resolverían los principales problemas, esbozó también la idea en torno a que se podría avizorar en el mediano plazo un término anticipado del gobierno[274]. Tal planteamiento, sin duda, respondía a la presión de algunas fuerzas y tendencias centrífugas sobre la directiva nacional, las cuales no solo se encontraban desplegadas dentro del escenario nacional sino también al interior de la propia colectividad. Dicha presión, estimulada en buena medida por los hechos de violencia que se iban produciendo, reclamaban un posicionamiento político más duro y firme en contra del proyecto socialista. Con todo, la directiva de este partido logró sortear por momentos dichas influencias y sentarse a conversar con el gobierno. Ello fue visible en el marco de las reuniones sostenidas en el mes de marzo entre ambos sectores, las cuales al final fracasaron a pesar de haber alcanzado cierto consenso en algunas materias[275]. Desde Patria y Libertad, en tanto, se explicitaría que los partidos de la UP no eran democráticos y que por tanto la vía institucional electoral quedaba cancelada. Bajo ese marco, Pablo Rodríguez Grez, principal líder del movimiento, sostuvo que la única salida a los problemas era un «gobierno militar nacionalista»[276].

Dentro del oficialismo primaban diversos enfoques estratégicos lo que hacía difícil detectar líneas de actuación comunes para confrontar a la oposición y viabilizar al gobierno en el largo plazo. Desde el PS se enfatizó la idea de que se debían acelerar los enfrentamientos con la burguesía y el imperialismo pues de este modo se resolvería quién se quedaría con el poder en Chile: si las masas o las fuerzas reaccionarias. En el PC, si bien se reconocía un incremento de la polarización política se estableció que no todos los actores de la oposición buscaban la caída del gobierno. Tal planteamiento

[274] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 162-163.

[275] El tema a consensuar entre la DC y el gobierno se refería a los vetos y otras materias de similar naturaleza. El oficialismo fue representado por el ministro de Justicia Manuel Sanhueza, militante del PIR y de perfil moderado. Cuando se habían logrado ciertos acuerdos, el presidente Allende incorporó al subsecretario de Justicia y al secretario general de Gobierno a las conversaciones, al tiempo que tras varias reuniones con el comité político de la UP se resolvió rechazar finalmente los acuerdos alcanzados. Esto produjo, además del distanciamiento con los democratacristianos, una crisis interna dentro del oficialismo que acabó con la renuncia de Sanhueza y el retiro del PIR del Gobierno. Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 165 y ss.

[276] *Op. cit.*, p. 173.

revelaba un diagnóstico bastante matizado, y hasta pragmático, de la realidad política, cuestión que al mismo tiempo era indicativo de las líneas matrices con que el PC entendía sus objetivos de mediano y largo plazo, esto es, consolidar las transformaciones, abrirse hacia negociaciones con el centro político y desechar soluciones extremistas. Desde el MIR, se planteó que la lucha política debía salir de los espacios institucionales y radicalizarse en torno a cuestiones como el poder popular. Tal postura, lo acercaba a los planteamientos que desde dentro de la UP explicitaba el PS[277].

Cabría indicar, además, que un actor igualmente relevante dentro del panorama social y político del país como era la Iglesia Católica dio a conocer sus impresiones respecto al proceso de cambios. En un documento fechado el 11 de abril de 1972, la Conferencia Episcopal sostuvo, entre otros aspectos, su conformidad y alegría por los pasos que se habían dado en orden a instaurar mayores niveles de justicia, desarrollo y participación. Al mismo tiempo, los obispos recordaban que el proceso de cambios, respaldado por una voluntad mayoritaria de la población, no podía hacerse sin el sacrificio de los privilegiados. El documento también enfatizó en que dichos cambios se veían perturbados «en forma creciente por la violencia», la cual era discriminatoria y suscitaba temor, inseguridad y exasperación. La declaración finalizaba con un llamado a la paz y la tolerancia entre los distintos actores políticos[278]. Conforme avanzara el cuadro de polarización descrito, la Iglesia emitiría nuevos pronunciamientos que reforzarían los puntos ya señalados. De igual forma y como se verá más adelante, en las etapas de mayor agudización de los conflictos esta institución cobraría un rol esencial a la hora de facilitar el diálogo y acercar posiciones entre los actores en pugna.

Respecto a las líneas estratégicas de los principales partidos y movimientos se podría señalar que en la oposición existía sin duda un mayor entendimiento. De hecho, la temática respecto al fin anticipado del gobierno comenzó a circular de modo transversal dentro del bloque opositor. Todo parecía indicar, en efecto, que este objetivo ya no ocupaba un lugar marginal dentro de los discursos de

[277] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 166-168.

[278] "Por un camino de esperanza y alegría", 11 de abril de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 356-357.

nacionales y democratacristianos sino, por el contrario, estaba en el primer plano de la discusión y, más aún, podía transformarse en el principal elemento articulador de sus acciones futuras.

En la izquierda el panorama era menos alentador. Los intentos de coordinación política observados en algún momento se estrellaron con una heterogeneidad cada vez mayor de planteamientos entre los partidos que conformaban el oficialismo Tal situación, lejos de representar un problema menor, significaba poner en evidencia que la UP carecía de una dirección monolítica y homogénea respecto a los temas más relevantes. Así, al problema de cómo confrontar a la oposición se sumaban múltiples desavenencias internas que terminaron por paralizar la iniciativa oficialista en diversos puntos.

Desde mediados del mes de abril, algunas de las tendencias referidas arriba se vieron reforzadas en cuanto a su capacidad de despliegue, sobre todo en el caso de la oposición. Como se indicó en su momento, este bloque había lanzado una ofensiva en distintos frentes, siendo la movilización de masas uno de los aspectos más interesantes y efectivos. Así lo habían reconocido, incluso, los principales partidos de la UP que insistían en que se trataba de un nuevo tipo de estrategia. El 12 de abril, en efecto, la DC convocó a una manifestación en el centro de la capital, bautizada como Marcha de la Democracia, a la cual se sumó el PN. Según relata el periódico *La Prensa*, la concentración llenó todo el espacio público situado entre las avenidas Macul y Portugal en la zona centro oriente de Santiago. El acto, que se extendió hasta el anochecer, fue acompañado de miles de banderas chilenas y antorchas que «iluminaron el atardecer», según describió el rotativo. Asimismo, se destacó que a lo largo de la marcha no se produjeron incidentes ni enfrentamientos con grupos políticos contrarios, predominando un carácter «carnavalesco» hasta altas horas de la noche[279].

El principal orador del encuentro fue el senador de la DC y presidente de la cámara alta Patricio Aylwin, quien, entre otras cosas, señaló:

> Nos reunimos impulsados por el deber cívico de expresar nuestra reacción ante una escalada creciente de violencia, arbitrariedades y

[279] "Gigantesca manifestación de partidos democráticos", 13 de abril de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 357-358.

atropellos a la ley que están hiriendo día a día la conciencia moral de los chilenos [...] No estamos aquí para impulsar ninguna sedición ni forma alguna de fascismo. Lo sedicioso y fascista es desconocer la voluntad mayoritaria del pueblo y pretender imponer a la fuerza un sistema de vida que la mayoría del país rechaza[280].

Lo medular del discurso de Aylwin radicaba en la idea de que el proyecto de la UP ya no contaba con el apoyo mayoritario de la población, cuestión que implícitamente significaba poner en entredicho la legitimidad del gobierno y su continuidad hasta el final del mandato legal que culminaba en 1976.

Sin duda que la marcha de la democracia fue exitosa en lo que respecta a sus objetivos estratégicos. Por una parte, su multitudinaria convocatoria confirmaba que los propósitos de este sector, en orden a movilizar a una creciente masa social contraria al proyecto de la UP, se mostraba cada día más eficiente. Por otra parte, este tipo de acciones permitía materializar la lucha política en un doble escenario: tanto en el parlamento como en la calle. Así, lo que parecía ser un activo casi exclusivo de la izquierda, la movilización de masas, se veía ahora confrontado por una capacidad similar proveniente desde los sectores mesocráticos y populares que se situaban en la oposición.

Algunas colectividades de izquierda no podrían obviar este tipo de sucesos. En un discurso pronunciado en la ciudad carbonífera de Coronel, el secretario general del MIR, Miguel Enríquez, sostuvo que la marcha de la democracia se situaba como un evento más de una seguidilla de acciones efectuadas por la oposición reaccionaria. En su visión, la marcha del día 12 era indicativa de cómo un grupo de «patrones y politicastros de cuello y corbata» habían logrado arrastrar a algunos miles de chilenos a una manifestación que sumaría voluntades en torno al «inconfesable propósito» de derrocar constitucionalmente a Allende. Pese a esta situación, Enríquez criticó con dureza al Ejecutivo porque a su juicio tanto esta marcha como otros eventos de similar naturaleza eran consecuencia de una errada política oficialista. En efecto, el líder del MIR sostuvo que el

[280] "Discurso del presidente del Senado Patricio Aylwin, en la marcha por la democracia", *Política y Espíritu*, Santiago, n.º 331, abril de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 1101-1107.

Gobierno no había perseverado lo suficiente en la movilización de masas como un modo de ganar una fuerza social que le permitieran seguir avanzando, sin obstáculos, en la materialización del programa de la UP. Las consecuencias de esta visión —sentenciaba Enríquez— habían comenzado a percibirse ya a fines de 1971[281].

Como respuesta a la movilización opositora, la UP convocaría a la denominada «marcha de la patria» que se efectuaría el 18 de abril en el mismo lugar donde se había escenificado aquella una semana atrás. Según el reporte de *El Mercurio*, se trató de una «extraordinaria demostración de masas» por parte de la UP, aunque se debía puntualizar cómo la maquinaria del Estado se movilizó —a través del empleo de buses estatales o la rebaja en la tarifa de los boletos de trenes— para que la manifestación fuese exitosa. El único orador del encuentro, comentaría el periódico, fue el presidente Allende quien explicitó, entre otras cuestiones, una defensa de las conquistas alcanzadas por los trabajadores y el respeto por la legalidad y la democracia. En la parte final de su discurso, el primer mandatario volvió a insistir en que era clave la unidad monolítica del oficialismo, «sin sectarismos», al tiempo que hacía un llamado para que se terminaran las acciones irresponsables de algunos grupos[282].

En virtud de los hitos ocurridos entre los meses de enero y abril de 1972, se pueden constatar dos características generales. En primer término, que la unidad opositora entre democratacristianos y nacionales se fue solidificando a partir de diversas coyunturas. La más representativa de estas fueron las elecciones complementarias de mediados de enero en que se plasmó un contundente triunfo de este sector sobre los candidatos oficialistas. Quizás el mayor obstáculo para alcanzar un entendimiento global dentro del bloque provenía desde la DC que se mostraba reticente, todavía, a integrar una alianza que pudiera ser hegemonizada por la derecha. Sin embargo, conforme el cuadro político fuese mostrando signos de mayor tensión y confrontación las estrategias de los actores irían tendiendo hacia una estructuración bipolar de las disputas en curso, cuestión que

[281] "Discurso del Secretario General del MIR en Coronel", 22 de abril de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 3, p. 2240.

[282] "Marcha de la UP", 23 de abril de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 366-367.

significaría situarse sí o sí en uno de los bloques. Bajo ese contexto surgió, en la oposición, la alianza electoral denominada Confederación Democrática (CODE).

La segunda característica general de estos primeros meses de 1972 tuvo que ver con los hechos de violencia que se produjeron. Estos se registraron en su mayoría en los espacios rurales donde el proceso de reforma agraria —y la contrarrespuesta de los gremios y otros actores a su implementación— incidían en los enfrentamientos que tenían lugar. De hecho, las cinco muertes registradas en esta primera mitad del año ocurrieron en su totalidad en los espacios rurales de la zona centro sur. Allí, el conflicto por la tenencia y expropiación de la tierra seguía todavía un curso ascendente, no visualizándose una disminución de los mismos para el mediano plazo.

Dinámicas y conflictos, mayo a julio de 1972

En el tránsito hacia el segundo semestre de 1972 se observará un conjunto de dinámicas de gran impacto dentro del espacio público, siendo una de ellas la alternancia de zonas en que se materializarán los hechos de violencia política. A diferencia de los meses anteriores, en que este tipo de sucesos predominaron en emplazamientos rurales, la presente etapa mostrará un despliegue de la violencia en distintas partes del territorio. Conectado con este punto, cabría señalar una participación significativa de otros actores sociales dentro del marco de conflictos que se vivía, siendo los estudiantes secundarios y ciertos gremios empresariales los casos más representativos. Desde el ángulo de los actores más formales del sistema se observarán caminos cada vez más divergentes, en el caso de la izquierda, y confluentes respecto al bloque opositor.

Y bien, ¿en qué punto quedaron las principales líneas de discusión política al terminar el mes de abril? En el oficialismo se intentó imprimir un rumbo rectificador a la acción gubernamental a partir del encuentro del Arrayán producido a comienzos de febrero. Sin embargo, seguían observándose diferencias tácticas importantes entre los partidos eje de la UP, sobre todo respecto a cómo encauzar el programa de la izquierda. Dicha discusión volvería incluso a emerger a comienzos de mayo cuando el PS emitiera una declaración en la

que exhortaba a un avance progresivo de las medidas expropiatorias que permitieran golpear a la burguesía chilena y al imperialismo norteamericano. Desde el PC se respondería que lo importante era consolidar las transformaciones para, de este modo, afianzar al Gobierno[283]. Lo que esta discusión encerraba era un dilema clave dentro del proceso político chileno, pues refería a la forma en cómo se debía aplicar y proyectar el programa revolucionario en el mediano y largo plazo. Al hacerse patente la carencia de una dirección única y homogénea en este tipo de cuestiones quedaría en evidencia que los problemas de la vía chilena al socialismo no solo se explicaban como producto de la acción refractaria de la oposición, sino también debido a las divisiones internas existentes.

Otra dinámica abierta en los últimos meses tenía que ver con la actuación de la oposición. En el plano factual, se habían observado avances importantes en materia de actuación conjunta entre la DC y el PN, aunque existiendo todavía algunas diferencias en torno a ciertos aspectos de la lucha política. En este marco, los elementos más representativos emanados desde el bloque opositor tuvieron que ver con dos aspectos. El primero de ellos se refería a la puesta en marcha de una activa estrategia de movilización social en contra del gobierno. Este curso de acción se había mostrado bastante exitoso en diciembre del año anterior con la marcha de las cacerolas vacías, de modo que la estrategia en torno a una sociedad civil movilizada en contra de la UP se mantendría, e incluso incrementaría, en los meses siguientes. El segundo aspecto tuvo que ver con la puesta en circulación de un objetivo referido a que el proyecto socialista debía ser cancelado antes de expirar su mandato en 1976. Aunque existían distintas visiones en el imaginario opositor respecto a cómo se concretaría este propósito —y que iban desde una derrota institucional proyectada para marzo de 1973 hasta una abierta intervención de las fuerzas armadas— en su raíz se anclaba la idea de poner término anticipado al gobierno de Allende.

El contexto general mostraba, entonces, un proyecto de transición al socialismo cada vez más difícil de ejecutar, con signos evidentes de sufrir fisuras internas, y una oposición encaminada a lograr su caída. Desde un plano social, diversos actores como trabajadores,

[283] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 174-175.

pobladores, campesinos, hombres y mujeres, encarnaban a través de diversas dinámicas algunas de estas tendencias y conflictos, cuando no eran ellos mismos los que marcaban los puntos de inflexión respecto al proceso político que se vivía.

Los hechos de violencia política de estos meses, además de conectarse de inmediato a discusiones y tópicos más generales, sirvieron para sostener y dar mayor densidad a algunas declaraciones que ya circulaban en el espacio público. Los meses transcurridos entre mayo y septiembre de 1972 mostraron, como se dijo, una alternancia en los espacios físicos de materialización de la violencia. Desde la quincena de mayo y hasta mediados de agosto hubo un predominio de eventos ocurridos en zonas urbanas, mientras que a finales de este último mes el foco de conflictos se trasladaría a los espacios rurales.

A comienzos de mayo de 1972, la violencia se materializó en las calles de la ciudad de Concepción, en un conflicto que dejaría un estudiante muerto y otra grieta profunda en el seno de la UP. Para el día 12 de ese mes, se había autorizado la realización de tres marchas distintas en esta ciudad: una correspondiente a la oposición, otra que convocó el PC y una solicitada por el MIR y otros sectores de la UP. En un primer momento, las autoridades creyeron que la distancia física que separaría a estas movilizaciones, al menos la de la oposición con respecto a las de la izquierda, harían posible que los tres eventos se desarrollaran simultáneamente. Sin embargo, la autoridad regional, encabezada por el intendente de filiación comunista Vladimir Chávez, intuyó que se estaba *ad portas* de un enfrentamiento de proporciones entre los manifestantes. Se solicitó entonces al MIR y al PC que suspendieran sus marchas a efecto de permitir la realización de la manifestación opositora. Tan solo este último actor acató la solicitud que las autoridades formularon ya que el MIR, el PS y el MAPU se negaron de forma rotunda a suspender su acto, haciendo además un llamado a los militantes de izquierda para que salieran a la calle a impedir la manifestación opositora.

Como se puede advertir, las decisiones de algunos actores y los discursos con que se ponían en circulación estaban contribuyendo a crear un verdadero polvorín para el día 12 de mayo. El secretario general del PC, Luis Corvalán Lépez, recuerda que lo que estaba en juego no era permitir la realización de una manifestación «de tipo fascista», sino de autorizar un acto político de un partido opositor.

Tal evento, sostenía Corvalán, debía realizarse tal como se había autorizado la marcha de la democracia el día 12 de abril pasado[284]. Por su parte, Miguel Enríquez señaló que había un acuerdo entre la UP y el MIR en orden a impedir la ocupación de las calles por parte de las «bandas fascistas del PN, la DC y Patria y Libertad». Tras algunos días, continuó Enríquez, se produjeron algunas modificaciones, pues el PC y el API se restaron del acuerdo, manteniendo, en cambio, una postura firme el propio MIR además del PS, el MAPU, la Izquierda Cristiana y el PR. Esta decisión suponía, según el dirigente mirista, mantener inalterable la movilización fijada para el día 12, pues uno de sus objetivos sería «impedir los desmanes» que acometerían los grupos de choque de la oposición[285].

Así se llegó a la tarde del viernes 12 de mayo. Como reportaría la prensa regional y nacional, buena parte de los incidentes se produjeron entre los manifestantes de izquierda y las fuerzas policiales de Carabineros apostadas en el centro de Concepción. Según detallan José Díaz y Mario Valdés, el intendente Chávez había decidido suspender a última hora la marcha de la oposición, cuando esta, en la práctica, ya se había iniciado. Las fuerzas de izquierda en tanto, según indican estos mismos autores, se habían concentrado en un primer momento en la Universidad de Concepción, en el marco de un foro —que contó con cerca de 21 oradores— que luego dio paso a una marcha por las principales calles de la ciudad penquista[286]. A partir de ese momento estallarían los enfrentamientos. En un primer momento, se pudieron observar algunos conatos de agresión entre partidarios del gobierno y la oposición, pero también, y como apuntó la prensa, graves enfrentamientos entre miembros de la izquierda y fuerzas de Carabineros. En uno de estos incidentes resultaría herido el estudiante Eladio Caamaño Sobarzo, militante del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), quien fallecería luego a causa de las lesiones.

Según consigna el periódico *El Sur*, Caamaño participó directamente en los incidentes que habían protagonizado «extremistas» en

[284] Corvalán Lépez, *De lo vivido...*, *op. cit.*, p. 138.

[285] "Miguel Enríquez (MIR): Conferencia de prensa sobre los acontecimientos de Concepción y la situación política general", 22 de mayo de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 3, p. 2373.

[286] Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, pp. 117-118.

el centro de Concepción, obligando a la intervención de Carabineros. Según el testimonio recogido por este periódico, el joven militante del FER se enfrentó en primera instancia con Carabineros en la intersección de las calles Barros y Colo Colo donde fue apresado y golpeado. Luego de huir —continúa el relato del testigo— Caamaño volvió a enfrentarse a Carabineros, esta vez en la plaza de los Tribunales de Justicia, lugar donde fue otra vez golpeado[287]. El periódico *El Siglo* atribuyó la muerte de Caamaño a la «vandálica acción de Patria y Libertad», grupo que había atacado al estudiante «con bolones de plomo» provocándole la fractura del cráneo. Asimismo, este periódico detallaba algunas de las cifras que arrojaron los incidentes registrados en la noche de ese viernes: «...46 heridos —de ellos 15 Carabineros— y 52 detenidos»[288]. Por su parte, el periódico local *Diario Color* coincidió con la versión entregada por *El Sur*, en orden a que la víctima habría fallecido producto de su enfrentamiento con Carabineros. Este medio detalló, en efecto, cómo Caamaño fue atendido en el Hospital Regional de Concepción donde lo examinaron y devolvieron a su domicilio para luego ser trasladado de nuevo a dicho recinto producto de las hemorragias internas y vómitos que presentaba. Al encontrarse en la sala de neurocirugía, indica *Diario Color*, el estudiante falleció[289].

El certificado de defunción de la víctima tiende a corroborar la versión de *El Siglo*, aunque no detalla el implemento que habría producido la herida mortal. El documento señala como causa de fallecimiento «compresión de la masa encefálica por fractura del cráneo con hemorragia meníngea extradural»[290]. Se podría deducir, en todo caso, que se trató de un implemento de tamaño considerable y que debió ser utilizado con fuerza en contra del cuerpo de la víctima a objeto de causar la fractura indicada.

En pocos días, la muerte de Eladio Caamaño generó diversas reacciones en el mundo político. En la sesión de la Cámara de Dipu-

[287] *El Sur*, Concepción, 14 de mayo de 1972, p. 11.
[288] *El Siglo*, Santiago, 14 de mayo de 1972, pp. 1 y 3.
[289] *Diario Color*, Concepción, 14 de mayo de 1972, p. 1.
[290] "Certificado de defunción de Eladio Caamaño Sobarzo", Concepción, 13 de mayo de 1972, n.º de inscripción 668, folio 44260134, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de enero de 2018].

tados celebrada el martes 16 de mayo, el parlamentario democratacristiano por la ciudad de Concepción, Mario Mosquera, criticó a los sectores de la izquierda que no dieron su brazo a torcer y continuaron adelante con la realización de su marcha. A juicio del diputado, el espectáculo ofrecido por sectores de la UP «daba pena», pues no solo habían «buscado una víctima» en la persona del joven Eladio Caamaño, sino que además intentaban endosar la responsabilidad de lo ocurrido al intendente Vladimir Chávez. Por todo ello —insistía el parlamentario— la principal responsabilidad recaía en «la montonera de pseudomovimientos que ayudan a este Gobierno y algunos partidos, entre los cuales participa el propio partido del Presidente de la República»[291]. En una línea más dura todavía, el diputado del PN, Miguel Luis Amunátegui, aprovecharía los hechos ocurridos en Concepción para pasar revista a los casi dos años de gobierno de la UP, periodo en que se había materializado, a su juicio, un cuadro generalizado de «aberraciones morales... tropelías, persecuciones, odio... resentimiento... vejámenes y atentados a los poderes públicos». Todas estas acciones, según el parlamentario, constituían características propias «[...] de la estructura mental y del fanatismo morboso del delirio crónico que inspira y orienta al marxismo leninismo»[292]. Tales afirmaciones y otras de similar tenor, elevaron la temperatura del debate, causando la reacción de los diputados oficialistas Luis Tejeda del PC y Hernán Olave del PS quienes calificaron las palabras de Amunátegui como venenosas y groseras[293].

Pero las críticas y recriminaciones también se hicieron sentir dentro de la propia izquierda. En la declaración que hiciese Miguel Enríquez el día 22 de mayo se explicitaron algunos tópicos que se arrastraban desde tiempo atrás y que bien podía entendérselos como problemas de fondo dentro de la vía chilena al socialismo. El líder del MIR acusó, en primer término, que la fuerza policial fue mandatada para reprimir en específico a la manifestación encabezada por el MIR, no procediendo de igual forma con la marcha de la oposición. Tal situación era demostrativa, según el dirigente, de

[291] Diputados, *Diario de sesiones*, 18.ª sesión extraordinaria, martes 16 de mayo de 1972, p. 1116.

[292] Diputados, *Diario de sesiones*, *op. cit.*, pp. 1117 y 1118.

[293] Diputados, *Diario de sesiones*, *op. cit.*, pp. 1119 y 1120.

cómo los estudiantes, obreros y campesinos habían sido reprimidos y golpeados «por el aparato del Estado». Tales hechos, según Enríquez, no fueron reconocidos por la autoridad regional ni tampoco por el Ministerio del Interior, haciéndose evidente que se había puesto en marcha el «aparato publicitario del gobierno». En segundo término, el dirigente planteaba que la marcha organizada por la izquierda para el día 12 en ningún caso representaba solo al MIR, sino que ella era una demostración genuina de la unidad existente entre diversas colectividades de la izquierda como el PS, el MAPU y la IC, además del propio MIR. Esta misma comunión de intereses, insistía Enríquez, podía hacerse extensiva respecto a las declaraciones que se produjeron después de ocurridos los hechos, las cuales mostraron criterios bastante comunes entre los movimientos y partidos señalados. Como contrapartida a este carácter unitario asomaba, según el dirigente, la actitud sectaria del PC que a través de sus principales dirigentes pedía una actitud firme contra la ultraizquierda a la cual había que combatir. Finalmente, Enríquez sostuvo que el gobierno se había debilitado ante la presión y chantaje de las fuerzas reaccionarias que aún existían en algunas instituciones del Estado, como el Poder Judicial y la policía uniformada que había sido entrenada por décadas para reprimir al pueblo[294].

A estas alturas resultaba evidente que los hechos ocurridos en Concepción trascendieron más allá de su resultado material del 12 de mayo. Desde el MIR se puso sobre la mesa un conjunto de temas que referían a problemáticas más profundas que atravesaban a la vía chilena al socialismo y que dieron paso, además, a una ardua polémica entre los actores involucrados. En efecto, Miguel Enríquez advertía sobre cuestiones en esencia complejos como el carácter represivo de los aparatos policiales o la presión de otros poderes del Estado sobre el gobierno de la UP. Pero quizás el punto más relevante radicaba en que ciertos planteamientos expresados por Enríquez tenían eco más allá de su propio radio de influencia. Tal situación significaba, en la práctica, que la estrategia defendida por el MIR —anclada en torno a la movilización de masas y en acelerar un proceso revolucionario

[294] "Miguel Enríquez (MIR): Conferencia de prensa sobre los acontecimientos de Concepción y la situación política general", 22 de mayo de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 3, pp. 2373 y ss.

que abriera paso a un enfrentamiento decisivo con la reacción— era compartida sin ambages desde dentro de la UP por algunos actores. Todo esto implicaba poner en entredicho la vía pacífica e institucional que defendían Allende y en especial el PC, pues el éxito del proceso revolucionario, según el MIR y quienes compartían este criterio, dependería de su capacidad por derrotar a la burguesía y el imperialismo.

La reacción del PC ante el pronunciamiento del MIR no se haría esperar. En conferencia de prensa realizada el 24 de mayo el secretario general del PC, senador Luis Corvalán, se refirió a lo sucedido en Concepción y a las consecuencias que de este hecho se derivaron. Como punto de partida, el dirigente señaló que en ningún caso se podía acusar al PC de tibieza frente al actuar de Patria y Libertad y otros grupos similares. Corvalán recordaba, en efecto, que ellos mismos se habían opuesto con firmeza a que en el mes de abril se realizara una marcha de mujeres vinculada a los trabajadores de la Papelera[295], pues advertían el carácter reaccionario de dicha manifestación. Enseguida, el dirigente sostuvo que lo sucedido en la región del Bío-Bío era indicativo de una crisis más importante emergida en el seno de la UP, pues a partir de lo sucedido el 12 de mayo habría tomado cuerpo una tendencia que sostenía el agotamiento de la vía institucional propuesta por la UP. Ante ello, el senador era enfático en señalar que no le reconocía autoridad al MIR para «dictar cátedra sobre los rumbos políticos del movimiento obrero y popular», pues, además, la política de este movimiento le hacía el «juego» al enemigo principal. De igual forma, Corvalán sostenía que la institucionalidad política, aun cuando podía entenderse como un freno, no era en la práctica un obstáculo insalvable pues la propia experiencia de la UP demostró que allí se podían hacer «grandes transformaciones revolucionarias». En virtud de esto, indicaba el senador, había que defender el programa y apegarse de modo irrestricto a su cumpli-

[295] La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartón, conocida popularmente como la Papelera, era la mayor industria del papel en Chile. Sus insumos abastecían a buena parte de los principales periódicos del país y otras empresas. La intención del gobierno de estatizar esta empresa generó, como era de esperar, un arduo conflicto pues se acusaba, desde la oposición, que el Gobierno pretendía monopolizar la industria del papel a efecto de controlar indirectamente a los medios de comunicación escrita.

miento[296]. Respecto al rol del MIR, Corvalán sostuvo que, aunque este movimiento tenía cierta importancia, no era, en la práctica, el tema más relevante del cual debía ocuparse el PC, pues había otros puntos de mayor trascendencia como la política del Gobierno y el rumbo de la propia UP. En todo caso, reconocía el secretario general, las actitudes y consecuencias derivadas de lo ocurrido en Concepción tenían sus ramificaciones en el país[297].

Visto en su conjunto, lo ocurrido el 12 de mayo era indicativo, pues, tanto de los niveles de conflictividad política que se observaban en algunos espacios como también de los problemas y diagnósticos divergentes existentes entre los partidos y movimientos al interior de la izquierda chilena. Por el tenor de estas discusiones se podía advertir cómo otra vez un hecho de violencia política ocurrido durante la UP pasaba a formar parte de debates más amplios y complejos en el seno de este bloque.

Al mismo tiempo que se desarrollaban las discusiones ya referidas, otros hechos de violencia volvieron a ocupar las portadas de los principales medios de comunicación, con enfrentamientos que dejaron un fallecido y diversos heridos en distintos puntos del país.

El día 22 de mayo, en la capital, Enrique Núñez Álvarez fue muerto en el marco de un enfrentamiento producido en el Frigorífico San Fernando ubicado en la zona poniente de Santiago. Según la versión de *El Mercurio*, Núñez era socio propietario de dicho establecimiento, el cual se encontraba tomado desde hacía unos días por «extremistas extraños». Al anochecer del 22 de mayo, continúa el periódico, Núñez se trasladó al frigorífico con el objeto de que un mecánico que lo acompañaba pudiera revisar las instalaciones y hacer una mantención de los equipos. Sin embargo, la respuesta recibida de parte de los ocupantes fue, según *El Mercurio*, «artera y cobarde», pues ante los requerimientos para ingresar al recinto, Núñez recibiría «tres balazos

[296] Estos últimos puntos se alineaban claramente con lo declarado por el propio presidente Allende, apenas tres días antes, en su discurso a la nación del 21 de mayo. Allí el primer mandatario había insistido en que la institucionalidad chilena —antes «instrumento de dominación de la clase dominante»— permitía ahora, bajo la UP, «actuar, cambiar y crear en beneficio de Chile y sus masas laborales». Véase, Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 179.

[297] "Luis Corvalán (Partido Comunista): Conferencia de prensa del 24 de mayo de 1972 sobre acontecimientos de Concepción y la situación política en general", en Farías, *op. cit.*, tomo 3, pp. 2390 y ss.

disparados a quemarropa» los que impactaron en el «hombro, tórax y espalda»[298]. La versión de *El Siglo*, en tanto, se ajustaría a los datos entregados por el subsecretario del Interior, Daniel Vergara. Según esta, otro de los propietarios del frigorífico, Salvador Deluiso, habría llegado de forma prepotente al lugar a bordo de una camioneta junto a otros individuos, quienes procedieron a derribar la reja perimetral para luego desalojar por la fuerza a los ocupantes. En esos momentos, según la versión de la autoridad, se produjo un enfrentamiento a tiros en el cual resultó herido el mayordomo del lugar Enrique Núñez, quien fallecería más tarde en el Hospital Barros Luco[299]. El periódico *La Nación* concordaría con la versión anterior sosteniendo que el enfrentamiento se produjo en el marco de un intento de retoma llevado a cabo por Núñez y otras personas[300]. El certificado de defunción de la víctima al cual esta investigación pudo acceder confirma que la causa de muerte fue una herida a bala torácica además de fijar su deceso a las diez de la noche[301].

En paralelo a estos hechos, nuevos tópicos y debates irrumpieron en la escena pública del país. Desde mediados de mayo, se hizo pública la moción de ley sobre control de armas y explosivos presentada por el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona en el periodo ordinario de sesiones del Congreso. El tema ya circulaba, en todo caso, desde el mes de abril en los pasillos del poder ejecutivo.

[298] *El Mercurio*, Santiago, 24 de mayo de 1972, p. 1.

[299] *El Siglo*, Santiago, 24 de mayo de 1972, p. 3.

[300] *La Nación*, Santiago, 24 de mayo de 1972, p. 2.

[301] "Certificado de defunción de Enrique Núñez Álvarez", Santiago, 22 de mayo de 1972, n.º de inscripción 1113, registro E1, folio 44260148, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de enero de 2018]. Dos días después de ocurrida la muerte de Enrique Núñez en Santiago, se produjo en Concepción un violento enfrentamiento entre miembros del FNPL y el PN con manifestantes de izquierda. Según la investigación de José Díaz Nieva y Mario Valdés Urrutia, el hecho habría sido iniciado por miembros del MAPU quienes atacaron a los jóvenes José Escalona, del PN, y Enrique Veloso Schlie del FNPL, quedando este último herido de gravedad a raíz de una hemorragia interna causada por el uso de un arma blanca (Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, p. 119). La policía lograría detener, como autor del crimen, a Roberto Ortega Villena, quien presuntamente se desempeñaba como funcionario de la Disquería del Cantar Popular (DICAP). *El Mercurio* entregaría una versión bastante similar al indicar que tanto Escalona como Veloso habían sido atacados «a cuchilladas» por contramanifestantes en el marco de una marcha opositora que se había realizado en la ciudad penquista en horas de la noche (*El Mercurio*, Santiago, 25 de mayo de 1972, p. 1).

El general Carlos Prats recuerda que el día 21 de ese mes tomó conocimiento de los proyectos de decretos supremos que el gobierno había elaborado a efecto de acentuar la competencia de las Fuerzas Armadas en el control de armas. El comandante en jefe del Ejército, según comenta en sus memorias, consideró insuficientes las disposiciones contenidas en ellos por lo que abogaría, en una reunión del día 3 de mayo, por una reformulación de los mismos. El presidente Allende, según Prats, concordó con esta observación solicitando la elaboración de un anteproyecto de ley. Sin embargo, como se indicó arriba, el senador Carmona presentaba en esos momentos su moción de ley, por lo que el Gobierno hizo lo propio ingresando una rápida indicación a efecto de sustituir el proyecto del parlamentario democratacristiano. Ambos proyectos, pues, se discutirán en paralelo en el Parlamento[302].

La discusión de esta materia era indicativa, como se puede advertir, de las preocupaciones expresadas desde distintos círculos políticos e institucionales sobre la existencia de grupos armados. Para la oposición, se trataba de una problemática de primer orden que no podía ser ocultada ni minimizada, toda vez que los hechos de violencia en que habían tenido participación algunos grupos armados —entre ellos la muerte del exministro Edmundo Pérez Zujovic en 1971— resultaban evidentes. El propio general Prats le expresaría a las autoridades civiles la inquietud de la institución por los indicios de «organizaciones paramilitares», pertenecientes a ambos extremos políticos, las cuales practicaban «un activo contrabando de armas»[303].

Pero también surgieron diagnósticos divergentes sobre este tópico y, en particular, sobre la propuesta del senador Carmona. Para el secretario general del PC, Luis Corvalán Lépez, el proyecto del parlamentario democratacristiano era negativo porque concentraba en manos de las fuerzas armadas tanto el control como la investigación respecto a las denuncias sobre la existencia de armas. A juicio de Corvalán, involucrar al Ejército en este tipo de tareas, sobre todo aquellas vinculadas a la investigación, supondría transformar a esta institución en un cuerpo policial. Por último, el dirigente comunista advertía un escenario que se podría producir, en los hechos,

[302] Prats, *op. cit.*, pp. 260-264.
[303] *Op. cit.*, p. 262.

al momento en que los militares allanaran un lugar en busca de armamento. Tal situación refería a la posibilidad de enfrentamientos armados entre personal militar y civiles que estuvieran en posesión de armamento[304].

El secretario general del MIR, Miguel Enríquez, fue más allá en su diagnóstico sobre este tema. Sostuvo que el proyecto de ley presentado por el senador Carmona era una nueva «ley maldita», en alusión a la legislación de 1947 que proscribió al PC y persiguió a sus dirigentes sociales y políticos por casi una década. El proyecto que estaba en discusión ahora, argumentaba Enríquez, intentaba poner en el foco el problema de los grupos armados de izquierda en circunstancias que eso no era lo importante, sino que, por el contrario, el verdadero problema era la actuación de las «bandas fascistas de la derecha». El dirigente mirista sentenció al final que, independiente del articulado que se aprobase y de las modificaciones introducidas, el pueblo marcaría y no olvidaría a aquellos que apoyasen una nueva política represiva en contra de la izquierda[305]. Al calor de estos discursos se discutiría la legislación sobre control de armas en los meses siguientes en el Congreso Nacional. Dicho proyecto, como se sabe, sería aprobado en un contexto extremadamente complejo como fue el de octubre de 1972, cuando arreciaba una fuerte paralización gremial en contra del gobierno.

En paralelo a estos temas, la izquierda oficialista desarrollaría importantes discusiones al finalizar el mes de mayo. Por iniciativa del presidente Allende, se realizó un segundo cónclave entre los partidos de la UP, esta vez organizado en el sector de Lo Curro al oriente de la capital. El propósito del primer mandatario era reafirmar su propuesta en torno a un avance gradual e institucional de la vía chilena al socialismo en desmedro, claro está, de la postura más intransigente de quienes apostaban por avanzar sin transar. El planteamiento de Allende sería secundado por el PC, el PR y el API, mientras que las tesis más rupturistas cohesionaban en buena medida

[304] "Luis Corvalán (Partido Comunista): Conferencia de prensa del 24 de mayo de 1972 sobre acontecimientos de Concepción y la situación política en general", en Farías, *op. cit.*, tomo 3, p. 2395.

[305] "Miguel Enríquez (MIR): Conferencia de prensa sobre los acontecimientos de Concepción y la situación política general", 22 de mayo de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 3, pp. 2380 y 2383.

al PS, la IC y, aún con todas las discusiones internas, a gran parte del MAPU. Como apunta el historiador Luis Corvalán Marquéz, lo que se escenificó en el cónclave de Lo Curro no fue otra cosa que una disputa de fondo dentro de la alianza oficialista entre avanzar o consolidar. Si se apostaba por el primer camino, se debían tener en cuenta todas las consecuencias que de ello se podrían derivar, mientras que la estrategia de consolidar defendida por el presidente y otros actores parecía más segura, aunque no exenta de ciertos obstáculos[306]. Tras algunos días de discusión, Allende impuso su visión gradualista e institucional dentro de la UP, cuestión que no significó, en todo caso, un término anticipado de las disputas internas que recorrían a la alianza oficialista. La óptica del primer mandatario era más bien un marco general por donde debía conducirse la política general del gobierno.

En su concreción práctica, una de las consecuencias derivadas de los acuerdos establecidos en Lo Curro fue la apertura, a mediados del mes de junio, de una serie de conversaciones entre la UP y la DC a objeto de alcanzar cierto consenso en diversas materias. Desde esta última colectividad se tuvo cuidado de no aparecer como un partido que «transaba» frente al gobierno, en clara alusión a lo que se intuía podían ser las acusaciones del PN. Más allá de este punto, el gobierno y la tienda falangista lograron establecer una serie de acuerdos vinculados a la conformación del Área de Propiedad Social. Sin embargo, subsistieron algunos puntos polémicos —como el de la intervención de la Papelera— que no pudieron ser resueltos. Esto último, unido a la presión pública de sectores de derecha y del ala conservadora de la DC hacia la directiva nacional del partido, terminó por hacer fracasar las negociaciones[307].

En pocas semanas, el cuadro político retomó su perfil bipolar tras el interregno negociador de mediados de junio. Si dichas conversaciones se hubiesen materializado en un acuerdo formal existía una alta probabilidad de que el marco general de los conflictos se hubiese modificado, descomprimiéndose así el clima de polarización existente. Sin embargo, todo parecía indicar que había fuerzas políticas, y actores en específico, determinados en que la confrontación

[306] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 180.
[307] *Op. cit.*, pp. 186-187.

mantuviera un ritmo ascendente. Tras ello, sin duda, era posible visualizar las estrategias que habían explicitado su intención de resolver los conflictos de forma tajante, ya fuese para impulsar el proyecto socialista de la UP como también para lograr su derrota anticipada.

Aunque el marco institucional se mantenía en funcionamiento —con la materialización de algunas alianzas[308], la realización de elecciones complementarias[309] y el ritmo administrativo y político diario de los distintos poderes del Estado— resultaba claro que su capacidad de contención de los conflictos no sería permanente. De hecho, se arrastraba desde tiempo atrás una ácida pugna entre el Ejecutivo y otros poderes como la Contraloría General o la Corte Suprema respecto a la legalidad de los actos del gobierno. Es decir, el escenario de confrontación política que se vivía entre los partidos y, desde un espacio subalterno, en la calle, el campo o en los grandes centros fabriles y estudiantiles se escenificaba en paralelo a las tensiones existentes dentro de los propios poderes del Estado. Tales dinámicas, pues, habían conformado un inquietante escenario de polarización que resultaba transversal a instituciones y actores a lo largo del país.

Los meses de junio y julio no serían, en este contexto, una excepción respecto a la materialización de hechos de violencia y conflictividad en general. Estos alternaron, como ya había sucedido en otros momentos, zonas rurales y urbanas en cuanto a sus espacios de concreción. En la primera quincena del mes de junio se produjo, por ejemplo, la muerte del obrero agrícola Arturo Mardones en la zona de Aysén, presumiblemente como resultado de la acción armada de los dueños del fundo Nueva Esperanza que se oponían a la expropiación

[308] A comienzos de julio, como se señaló, se había hecho efectiva la materialización de la CODE que agrupó a la mayoría de los partidos de la oposición, siendo sus colectividades eje la DC y el PN. Desde esta plataforma, los partidos señalados afrontarían los principales eventos electorales del futuro al tiempo que desplegarían de modo nítido una estrategia ostensiblemente más cohesionada para confrontar al gobierno.

[309] El 16 de julio, en efecto, se llevaron a cabo las elecciones complementarias de un diputado por la provincia de Coquimbo, al norte del país. La UP levantó la candidatura de la militante comunista Amanda Altamirano, mientras que la CODE llevó como postulante al miembro del Partido de Izquierda Radical, Orlando Poblete. El triunfo fue para el conglomerado oficialista, cuya candidata alcanzó el 53 % de los votos versus el 44 % del postulante de la oposición. Sin duda, el triunfo de Altamirano constituyó un paréntesis positivo que insufló de ánimo a la UP.

del terreno[310]. En otro contexto, la zona poniente de Santiago fue escenario a lo largo de junio y julio de 1972 de un intenso proceso de movilización de trabajadores que confluyó hacia la gestación del denominado Cordón Cerrillos-Maipú. Este tipo de organizaciones comenzaría a tener cada vez mayor preponderancia dentro de las dinámicas laborales y políticas del periodo, pues ellas implicaron incrementar los niveles de autonomía de los obreros y centros fabriles propiciando un accionar político desde y para los trabajadores. Uno de los puntos centrales que explica la movilización de estos meses radicó en la intención de los trabajadores de diversas industrias de esa zona para que sus empresas fueran pasadas al Área de Propiedad Social. Así surgieron huelgas en industrias como Perlak, conservas; Polycron, química; y El Mono, aluminios; además de otras empresas que se fueron sumando a lo largo de los días hasta dar forma, a fines de junio, al denominado Cordón Cerrillos Maipú. El día 30, en efecto, la zona fue remecida por una movilización que se desplegó a través de barricadas, corte de caminos y otras acciones similares. Aunque se trataba de una dinámica relevante, Franck Gaudichaud anota que el peso político de este cordón y su figuración nacional no calzaba con lo que era en realidad, sobre todo porque su estabilidad y poder no fueron continuos a lo largo del tiempo[311]. Habría que esperar un nuevo contexto para que este tipo de organizaciones volviera a emerger con fuerza dentro del espacio público.

De forma paralela a los conflictos laborales que se estaban produciendo, otros hechos de violencia encendieron el debate político institucional. Esto fue visible a raíz de la muerte de Juan Navarro Hurtado, en el marco de un confuso incidente producido el día 23 de julio en la capital. Según relata *El Siglo*, la víctima iba al interior de un autobús del recorrido La Dehesa-Lo Barnechea que transitaba por avenida Las Condes muy cerca del hospital de la Fuerza Aérea. En un momento de su recorrido, el autobús pasó a llevar la carrocería de un automóvil modelo Austin Mini, situación que produjo un altercado entre los ocupantes de este último vehículo y el chofer del transporte público. En cuestión de minutos, continúa *El Siglo*, se inició una gol-

[310] *El Siglo*, Santiago, 13 de junio de 1972, p. 3.

[311] Franck Gaudichaud, *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende*, p. 184.

piza en contra del conductor del autobús lo que originó la intervención de Juan Navarro Hurtado quien salió en defensa del chofer. En ese momento, uno de los agresores extrajo una pistola y disparó en contra de la víctima impactando uno de los proyectiles en su cabeza[312].

El matiz político del crimen estuvo dado porque, según la versión que entregara *El Mercurio*, los individuos que viajaban en el coche particular, además de encontrarse armados, habrían pertenecido a algún organismo de seguridad. Inclusive este medio señaló que el automóvil en el cual se trasladaba uno de los victimarios estaba provisto de un radiotransmisor. Además, *El Mercurio* destacaba que tanto la Policía uniformada como Investigaciones «...omitieron entregar los nombres de los participantes en este hecho»[313]. Así y desde la óptica de este medio de prensa, la muerte de Juan Navarro Hurtado quedaba encubierta por un manto de duda respecto a la verdadera identidad y adscripción institucional de quienes se vieron involucrados en el homicidio.

Al día siguiente, y en el marco de versiones contrapuestas que ya comenzaban a circular sobre este hecho, *El Siglo* sostuvo que los agresores no pertenecían al GAP o a algún dispositivo vinculado a la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, este medio indicaría que las autoridades policiales dejaron establecido con claridad que el autor de los disparos no había mostrado credenciales de la Presidencia «o cosa parecida» al suboficial de guardia del Hospital de la FACh[314].

En esa misma jornada el Senado se reunió para abordar diversos temas, entre ellos algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en las últimas semanas. Dicha sesión sería interesante porque a ella asistiría, en calidad de ministro del Interior subrogante, el canciller en funciones Clodomiro Almeyda. El secretario de Estado se referiría, en su intervención, al tema de los grupos «delictuales de la ultraizquierda» y la visión que tenía el Ejecutivo frente a estos. El punto de partida señalado por Almeyda fue una contextualización general del periodo, indicando que en el proceso de movilización de masas que se vivía en Chile en esos momentos, y que se arrastraba desde mucho antes, resultaba «natural» que se produjeran ciertos desbordes.

[312] *El Siglo*, Santiago, 24 de julio de 1972, p. 6.
[313] *El Mercurio*, Santiago, 24 de julio de 1972, p. 21.
[314] *El Siglo*, Santiago, 25 de julio de 1972, p. 8.

El peligro radicaba, a juicio del ministro, cuando estos desbordes se traducían en hechos político delictuales incentivados por sujetos o grupos vinculados al movimiento popular, pero que vienen desde fuera de él «muchos de los cuales tiene antecedentes penales». La forma de enfrentar a estos grupos, sentenciaba Almeyda, era a través de la persuasión y el convencimiento, y solo en última instancia, «y ante situaciones muy especiales», como algunas que habían ocurrido tiempo atrás, el Ejecutivo haría uso de la violencia legal[315].

Tras la intervención de Almeyda, diversos senadores de oposición, sobre todo aquellos de la DC, interrogaron al ministro respecto a los hechos de actualidad. Uno de estos temas fue la reciente muerte de Juan Navarro Hurtado ocurrida dos días atrás. Ante las consultas del senador Rafael Moreno respecto a este tema, Almeyda compartió los antecedentes que tenía el Gobierno y que provenían, según indicó, de los informes efectuados por Carabineros. Dichos antecedentes revelaban que efectivamente se había producido un altercado entre los ocupantes de un vehículo Austin Mini y el chofer de un taxibús en el sector de avenida Apoquindo, el cual derivó en un hecho de mayor connotación debido a que este último continuó su recorrido sin atender a los reclamos de los pasajeros del vehículo particular. Así se produjo, según el relato del secretario de Estado, un nuevo incidente en las afueras de un recinto médico en el cual intervinieron otros choferes de la misma línea colectiva que se encontraban en el sector. Ante la superioridad numérica de estos últimos, los ocupantes del Austin Mini huyeron hacia el hospital de la Fuerza Aérea siendo perseguidos por un pasajero del taxibús —Juan Navarro Hurtado— quien iba provisto de un punzón. Una de las personas que escapaba, finalizó Almeyda, al enredarse en la reja perimetral del recinto hospitalario y quedando a merced de un inminente ataque, sacó un arma de fuego y disparó en contra del perseguidor quien murió[316].

Dos días después, *El Mercurio* entregó nuevos antecedentes sobre el caso, indicando que el asesino de Juan Navarro Hurtado trabajaba en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Además, este medio consignó las denuncias realizadas por los senadores Víctor García Garzena del PN y Rafael Moreno de la DC en orden a que

[315] Senado, *Diario de sesiones,* 40.ª sesión, martes 25 de julio de 1972, pp. 2162-2164.
[316] Senado, *Diario de sesiones, op. cit.*, p. 2171.

los implicados en este caso tenían conexiones con la Policía de Investigaciones, aportando numerosos documentos que respaldaban, según *El Mercurio*, tales afirmaciones[317].

Este hecho de violencia fue insertado, así, dentro de un contexto más amplio de discusión el cual se refería al actuar de los grupos armados de izquierda. Como se pudo advertir, este ya era un tópico de conversación desde hacía meses en el país, lo que había generado que en abril de 1972 el gobierno encargase al general Carlos Prats un conjunto de decretos leyes referidos al control de armas y explosivos. Pero en esas mismas semanas, el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona había presentado su propio proyecto de ley, el cual otorgaba amplias atribuciones a las Fuerzas Amadas en materias de control e investigación penal de los casos que se denunciasen. A todas luces, se trataba de un tema relevante para una parte significativa de los actores políticos del país, sobre todo porque la coyuntura social y política más inmediata ponía sobre el tapete una y otra vez este tipo de problemáticas.

En el caso de la oposición, por ejemplo, resultaba inquietante que diversos grupos y movimientos declarasen su opción por las armas para construir el socialismo y que, más aún, llevasen a cabo distintas operaciones para concretar tales propósitos. En la memoria colectiva de algunos actores, sobre todo para los militantes de la DC, estaba muy fresco el homicidio de Edmundo Pérez Zujovic perpetrado por la VOP. De igual forma, resultaba desconcertante para estos actores que, según su parecer, el Gobierno abordara dichos tópicos con cierta displicencia y no los afrontara con mayor severidad. En el fondo, aquella contradicción buscaba poner en entredicho la formulación elaborada por la izquierda y recalcada en más de una ocasión por el propio presidente Allende en orden a que la vía chilena al socialismo sería un proceso legal, respetuoso de la Constitución y que dejaría de lado el camino de las armas.

En el oficialismo, en tanto, no se trataba de un tema sencillo de abordar, aun cuando se recalcase desde diversos sectores una condena taxativa al actuar de este tipo de grupos. De hecho, estos habían sido los énfasis del PC en diversas ocasiones. Para otros actores, la estrategia armada de algunas agrupaciones de izquierda era propia

[317] *El Mercurio*, Santiago, 27 de julio de 1972, p. 1.

del mundo delictual o perpetrada por mentes afiebradas y aventureras. En esa misma línea argumental se ubicaba la idea que veía el accionar de estos grupos como producto de la infiltración efectuada por organismos de extrema derecha o de agencias extranjeras que buscaban la desestabilización del país.

En el caso particular del crimen de Juan Navarro Hurtado, la oposición advertía la eventual participación de algún grupo armado de izquierda —o dispositivo de seguridad vinculado al Ejecutivo— en la materialización del mismo. De hacerse efectiva tal presunción, los temores de este sector respecto al actuar sin control de estos movimientos servirían para emplazar al gobierno en orden a que tomara cartas en el asunto y procediera al completo desmantelamiento de estos grupos. Como se verá más adelante, cualquier hecho de similares connotaciones al ocurrido en la capital sería utilizado por la oposición para reactualizar este tema. Ello, como era de suponer, significaría endosar una crítica directa al propio Gobierno, contribuyendo a desgastar su credibilidad dentro de la ciudadanía y, de paso, mantener abierto un debate político bajo un clima polarizado y de mutua confrontación.

Discusiones internas en transición a un conflicto mayor, agosto a septiembre de 1972

En medio del complejo marco social y político descrito, entre agosto y septiembre se concentraron numerosos hechos de violencia y situaciones de tensión en distintos puntos del país. Dos de estos eventos impactarían al interior de la izquierda chilena y generarían un áspero debate en sus filas.

El primer hecho ocurrió a fines de julio, pero sus consecuencias dentro de la izquierda se arrastrarían durante todo agosto, conectándose con otros sucesos que fueron ocurriendo. Tal evento fue la formación de la denominada Asamblea del Pueblo en la ciudad de Concepción durante los días 26 y 27 de julio, en cuya materialización concurrieron diversos partidos y movimientos de izquierda[318].

[318] Un buen estudio sobre el desarrollo y alcances de esta iniciativa se encuentran en Danny Monsálvez Araneda, "La asamblea del pueblo en Concepción. La expresión del poder popular".

Desde la UP, tomaron parte de esta instancia el PS, el MAPU, la IC y el PR, mientras que desde fuera de la alianza oficialista resaltaba, como uno de los portaestandartes de la iniciativa, el MIR. El objetivo de esta asamblea era contrarrestar la ofensiva política y social que llevaba a cabo la oposición desde hacía varios meses en contra del gobierno. A juicio de los convocantes, tanto la DC como el PN habían explicitado una estrategia de confrontación con la UP, la que se tradujo en un activo bloqueo parlamentario y una decidida apuesta por la movilización social. Hasta cierto punto, el diagnóstico de los convocantes de la Asamblea Popular de Concepción no era del todo errónea toda vez que, efectivamente, según se ha visto, la oposición llevaba a cabo al menos desde fines de 1971 una intensa ofensiva en diversos planos del quehacer nacional. Sin ir más lejos, el mismo día en que la asamblea fue convocada el Senado procedió a destituir al ministro del Interior, Hernán del Canto.

En términos prácticos, esta asamblea sería una instancia de coordinación y agrupamiento de las fuerzas populares a efecto de conducir el proceso revolucionario en curso hasta su victoria final. El secretario regional del MIR declaró a este respecto que la mencionada Asamblea impulsaría la creación de Consejos Comunales de Trabajadores, los cuales,

> [...] trabajarán incansablemente por conquistar la representación, la voluntad y el apoyo de las inmensas mayorías que constituyen los pobres del campo y la ciudad... [poniéndose] a la cabeza de las luchas de las masas contra la burocracia, el Parlamento y la justicia de los patrones. Su presencia y acción será el arma más segura para combatir tanto las desviaciones aventureristas como las de carácter reformista o derechista, principal peligro del momento[319].

En su conjunto, esta iniciativa buscaba romper los cauces institucionales por los cuales se había manejado hasta entonces el gobierno de Allende a fin de resituar el poder del proceso revolucionario en manos de las masas populares y proletarias. Tal propósito significaba un punto de inflexión mayor por dos razones. La primera,

[319] Declaración publicada en *Punto Final*, n.º 163, Santiago, martes 1 de agosto de 1972, p. 7.

porque implicaba —en caso de materializarse y alcanzar resonancia nacional— no solo cuestionar los espacios de acción política en los cuales se asentaba la oposición, sino también aquellos lugares donde ejercía su propio rol el Gobierno y los partidos oficialistas. En segundo lugar, esta iniciativa significaba excluir a aquellos sectores de la izquierda chilena que no comulgaban con tales propósitos. Sin duda que esto último estaba dirigido hacia el PC, colectividad que como es de suponer se opuso tenazmente a la realización de esta iniciativa. Con todo, su marginación no era una cuestión sencilla, pues se trataba de una de las colectividades eje de la UP, con amplia representación parlamentaria y una activa base social de militantes y simpatizantes disgregados en numerosas organizaciones sociales. Por todo lo anterior, la idea de establecer una asamblea popular que actuara al margen de la institucionalidad —y que en buena medida pasara por arriba del propio gobierno de la UP— fue un tópico que agitó otra vez las aguas oficialistas.

Una de las respuestas más duras a la iniciativa de instaurar una asamblea de este tipo provino desde el propio Salvador Allende a través de una carta dirigida a los partidos que formaron parte de ella. En dicha misiva el mandatario hizo saber, en primer término, que en menos de tres meses volvía a producirse en Concepción un fenómeno de «tendencia divisionista» que atentaba contra la homogeneidad de la UP. Tal indicación se hacía en referencia a lo ocurrido en el mes de mayo de 1972 cuando diversos partidos del oficialismo se cuadraron con el MIR en su intento de contrarrestar una marcha opositora. Enseguida, Allende criticó con dureza el carácter de la mencionada asamblea al sostener que se trataba de un «espejismo lírico» al margen de «toda realidad», pues aquella no concentraba la totalidad de la representación popular ni tampoco tenía la capacidad de gobernar. Tal indicación era un contrapunto que el primer mandatario quiso explicitar a objeto de reafirmar el carácter y orientación de su gobierno «legítimamente constituido». Allende también sostuvo que la asamblea podría tener una relevancia más bien acotada dentro del espacio público, pero en la práctica ella entrañaba «un peligroso antecedente» ya que podría convertirse en fuente de provocaciones. La carta finalizaba con la enumeración de diversas tareas y objetivos en los cuales trabajaba el Gobierno, siendo uno de los más importantes ganar las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, al tiempo que

volvía a hacer un llamado a la unidad de la izquierda y a rechazar los «ensayos divisionistas»[320]. Los argumentos señalados por Allende fueron compartidos a plenitud por el PC, sobre todo en su rechazo al divisionismo de la ultraizquierda y a entender como uno de los objetivos prioritarios el triunfo electoral en 1973. Las respuestas del PS y de la IC, en cambio, difirieron en lo fundamental respecto a lo planteado por Allende, pues volvieron a insistir en tópicos como la movilización de masas y revalorizar la capacidad de coordinación y confluencia de las fuerzas de izquierda como requisito para el triunfo de la revolución[321].

En síntesis, la Asamblea Popular de Concepción puso sobre la mesa, una vez más, un conjunto de temáticas que la izquierda chilena no había podido resolver con eficacia y prontitud —revolución desde arriba o desde abajo, carácter del proceso político, reformismo versus revolución, entre otros—. Desde un ángulo estratégico, esta situación complotaba, además, contra la capacidad de acción e iniciativa de la UP pues este tipo de discusiones generaba un desgaste interno que volvía cada vez más difícil una actuación de conjunto para confrontar, por ejemplo, a la oposición más dura.

Cuando los sinsabores de la disputa por la Asamblea Popular de Concepción estaban todavía en el aire, se produjo otro suceso que vino a remecer a la izquierda chilena. Esta vez se trató de un hecho de violencia ocurrido en la población Lo Hermida a partir de un enfrentamiento entre fuerzas policiales y habitantes del lugar, y que se saldó con un poblador muerto, varios heridos de consideración y decenas de detenidos. La situación se decantó en la madrugada del 5 de agosto en momentos en que funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones procedieron a allanar tres campamentos ubicados al interior de la población señalada. Desde fuentes policiales se explicó que dicha operación tenía como objetivo la captura de algunos delincuentes que se encontraban prófugos de la justicia[322].

320 "Salvador Allende: Carta a los dirigentes de la UP sobre la Asamblea del Pueblo en Concepción", 31 de julio de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2850 y 2855.

321 Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 207-208.

322 Esta es la versión del exsubdirector de la Policía de Investigaciones Carlos Toro. Según su testimonio, el allanamiento se llevó a cabo debido a que el día anterior una camioneta de la policía civil que intentó ingresar al lugar fue atacada por los pobladores. Junto a las principales autoridades de Gobierno se acordó entonces poner en

A las pocas horas comenzaron a aparecer versiones contrapuestas sobre los incidentes que se habían producido. Uno de los dirigentes poblacionales del sector, que respondía al nombre de «compañero Raúl», señaló al vespertino *La Segunda* que en la noche anterior varios habitantes de estos campamentos marcharon hacia el sector de Plaza Egaña bloqueando el tránsito en diversas ocasiones como una forma de protestar frente al actuar del Gobierno en diversas materias. Entrada la noche, continuó el dirigente, y cuando los pobladores dormían, ingresó la policía de forma violenta a allanar los domicilios produciéndose los hechos ya consignados. El «compañero Raúl» señalaría, por último, que el campamento fue manchado no por las balas de la reacción o de la derecha sino por las balas del Gobierno «que arremete contra el pueblo»[323].

Por su parte la versión de *El Siglo* fue enfática en señalar la responsabilidad de los dirigentes «ultraizquierdistas» en la materialización de estos hechos. Según el rotativo, los funcionarios policiales, premunidos de una orden judicial emanada desde la Corte de Apelaciones, ingresaron al lugar en busca de las especies robadas de un delito cometido pocos días atrás. Los pobladores, continuaba *El Siglo*, opusieron resistencia armada y organizada a la labor de la policía siguiendo las indicaciones que los dirigentes de los campamentos les habían entregado, buscando así entorpecer el accionar de la policía y mezclarlos en el «premeditado enfrentamiento». Aunque este medio reconocía el fallecimiento de un poblador, el hecho fue considerado en su conjunto como una operación destinada a demoler la imagen del Gobierno, pues coincidían a plenitud «las posiciones e intereses de la ultraizquierda y la derecha»[324]. Además de lo anterior, *El Siglo* consignó las declaraciones emitidas tanto por el Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, como por el Prefecto de la Policía de Investigaciones de Santiago Eliecer Constella Navarro. Ambas autoridades

---

marcha un operativo de mayor envergadura que contó con la ayuda de Carabineros, registrándose los incidentes ya relatados. Según el funcionario policial quien aparecía como dirigentes de los pobladores se hacía llamar Comandante Raúl y no era otro que Osvaldo Romo, «el guatón Romo de la DINA». Toro, *op. cit.*, pp. 408-409.

[323] "Sangriento enfrentamiento", 5 de agosto de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 422.

[324] "Provocación del MIR causó grandes incidentes", 6 de agosto de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 423-425.

coincidieron en que la acción policial se encontraba respaldada por una resolución judicial y que al momento de ingresar a la Población Lo Hermida Carabineros e Investigaciones fueron atacados por un numeroso contingente de pobladores[325]. La revista *Ercilla*, por su parte, señaló que el allanamiento se transformó en un «combate» de no menos de sesenta minutos de duración en el cual cerca de cuatrocientos pobladores «armados de palos y "tontos de goma"» se enfrentaron a doscientos policías entre detectives y carabineros. Según este medio, que recogía diversas versiones de lo sucedido, las ambulancias procedieron a retirar a heridos de «ambos bandos» productos de los golpes y esquirlas de algunos elementos como bombas molotov[326]. La mayor parte de las versiones concordaba así en que los incidentes producidos dejaron un poblador fallecido, numerosos heridos y decenas de detenidos. La víctima fatal fue identificada como René Saravia Arévalo, de 22 años de edad. El certificado de defunción confirma que su deceso se produjo por una herida a bala en el cráneo, fijando la hora de su fallecimiento a las 07:40 de la mañana del 5 de agosto[327].

Como era de esperar, los hechos ocurridos en la población Lo Hermida tuvieron una honda repercusión en la escena nacional. Desde luego, impactaron en los protagonistas de estos sucesos. Al día siguiente del allanamiento, los pobladores emitieron un comunicado oficial en que solicitaban la libertad inmediata de todos los detenidos, el esclarecimiento completo de los hechos, sanciones a los altos mandos de la policía y una serie de beneficios para los familiares de las víctimas[328]. El 7 de agosto, el Comité Nacional de la Unidad Popular señalaría su respaldo irrestricto al Gobierno y a la labor policial, condenando de paso la acción «irresponsable» de quienes incitaron a los pobladores a chocar contra los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Al mismo tiempo

[325] "Provocación del MIR causó grandes incidentes", 6 de agosto de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 426-427.

[326] *Ercilla*, n.º 1934, Santiago, 9 al 15 de agosto de 1972, p. 11.

[327] "Certificado de defunción de René Saravia Arévalo", Santiago, 5 de agosto de 1972, n.º de inscripción 1721, registro E1, folio 44260160, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de enero de 2018].

[328] "Petitorio de los Pobladores de Lo Hermida", 6 de agosto de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2967-2968.

hacía un llamado al pueblo a prevenir las acciones de la ultraizquierda, que «favorecen el juego a la derecha», mediante una férrea acción unitaria[329]. Aunque se trataba de un comunicado concordado por los principales dirigentes de la UP y que, en teoría, expresaba una voz homogénea respecto a estos hechos, pronto se advirtieron visiones divergentes en el seno de la alianza oficialista. El día 8 de agosto, por ejemplo, el PS emitiría un comunicado en el que señalaría su rechazo más categórico a la acción de la policía debido a la falta de «justificación y forma» en que esta fue ejercida y porque, además, atentó en contra de la vida de los trabajadores vejando a «centenares de familias obreras»[330].

La declaración del MIR, en tanto, sostuvo que los sucesos de Lo Hermida obedecían a un plan elaborado en las altas esferas de la Policía de Investigaciones, cuyas máximas autoridades, Eduardo Paredes y Carlos Toro, eran los responsables intelectuales. Dicho plan tenía como objetivo amedrentar e intimidar a los pobladores y a la izquierda revolucionaria, descartando de este modo que se tratase de una simple diligencia policial. Luego de ocurridos los hechos, sostuvo la agrupación, se elaboró una versión «deformada y mentirosa» de los sucesos tendiente a encubrir la responsabilidad «política, administrativa y moral» de los involucrados. En la ejecución de esta operación de encubrimiento, insistía el movimiento, tuvo un rol fundamental el PC que puso todos sus recursos materiales y humanos tras dicho objetivo. Después del análisis coyuntural de lo sucedido, la declaración del MIR dio cuenta de una reflexión más de fondo en torno a los problemas que estaban en la base de este tipo de acontecimientos y que, por supuesto, se conectaban a dilemas más estructurales referidos a la vía chilena al socialismo. Desde ya se señaló que los hechos de Lo Hermida no eran casuales ni producto del azar. Aquellos ponían en evidencia, más bien, la existencia de tendencias arraigadas en el seno de la UP, las cuales concebían la lucha de clases como una dinámica que debía dirigirse mediante decretos a través de la acción del Estado. El dilema de fondo que estaba patente en la

[329] "Comité Nacional de la Unidad Popular: Declaración sobre los sucesos de Lo Hermida del 6 de agosto de 1972", 7 de agosto de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2940-2941.

[330] "Comisión Política del Comité Central del Partido Socialista", 8 de agosto de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2953-2954.

alianza oficialista era, a juicio del MIR, la existencia de un conflicto entre las vías reformista y revolucionaria que a lo largo de los últimos meses se venía expresando en distintos escenarios. En su parte final, la declaración hacía un llamado a luchar en contra del reformismo y a cuestionar, a través de una amplia movilización de masas, a la institucionalidad burguesa en la perspectiva de consolidar la labor de los comandos comunales y del poder popular en general[331].

El PC no se quedaría atrás en esta discusión. A través de dos editoriales de su periódico *El Siglo*, publicados los días 8 y 9 de agosto, criticó duramente a la ultraizquierda —es decir, al MIR— a la que acusó, entre otras cosas, de distraer a las masas de las grandes tareas históricas y revolucionarias que planteaba la UP. Al mismo tiempo, sostuvo que lo ocurrido en Lo Hermida había obedecido a una provocación orquestada por esa misma ultraizquierda, situación que además de dejar un fallecido servía a los propósitos de la reacción y el imperialismo. Por último, la colectividad señaló que este tipo de hechos obstaculizaban, desde un ángulo criminal, la marcha del proceso revolucionario[332].

En este marco se produjo la visita del presidente Allende a la Población Lo Hermida el día 8 de agosto. Su llegada fue preparada con sumo cuidado por los equipos de la presidencia en virtud del clima de tensión que aún reinaba en el lugar. De hecho, Allende llegó acompañado de tres civiles y solo de un guardaespaldas, quien ocupó un discreto segundo plano. En ese contexto, se inició un diálogo franco y abierto con los pobladores. En sus puntos nodales, Allende sostuvo que por imperativo legal él no podía poner en libertad a cualquier persona, según le exigiesen algunos habitantes del campamento. Acto seguido, el primer mandatario se comprometió con algunas peticiones específicas que se le hicieron, tales como investigar lo sucedido e indemnizar a las familias que se habían visto afectadas por el allanamiento. El presidente también recordaría que los altos mandos de la Policía de Investigaciones, Eduardo Paredes y Carlos Toro, fueron alejados de sus cargos, situación hasta entonces

331 "MIR: El MIR a los obreros, campesinos, pobladores, estudiantes, soldados y al pueblo de Chile", 11 de agosto de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2956-2960.

332 "Provocación y diversionismo", 8 de agosto de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2963-2964 y "La delincuencia no es revolucionaria", 9 de agosto de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2965-2966.

inédita en Chile. Al finalizar, Allende señaló que como mandatario les daba su palabra de que aquellas familias que abandonaron el campamento por temor a represalias podían volver porque no les iba a pasar nada[333].

En medio de esta visita merodeaba el «compañero Raúl», destacado dirigente poblacional de Lo Hermida. Su historia, sin duda, merece algunas líneas. Como trascendió por esos días en la prensa, el «compañero Raúl» se llamaba Osvaldo Romo Mena. Desde inicios del gobierno de la UP se destacó como un activo dirigente de izquierda que militaba en la Unión Socialista Popular (USOPO), una pequeña colectividad que no formaba parte oficial de la UP. Su contextura física más bien gruesa y una mirada torva y punzante reflejaban una personalidad en apariencia hosca que tendía a generar cierta desconfianza. Sin embargo, su compromiso político era incuestionable. En las elecciones parlamentarias de 1973, por ejemplo, se presentaría como candidato a diputado por la sureña provincia de Llanquihue sin mayor éxito. El vespertino *La Segunda* reprodujo buena parte de las declaraciones que emitiese Romo a la prensa a propósito de los hechos ocurridos el 5 de agosto y que revelaron un carácter duro y decidido. Tras el golpe militar de 1973, la vida del dirigente poblacional daría un brusco giro. Diversos testimonios de detenidos políticos comenzaron a advertir la presencia y participación del «compañero Raúl» en las sesiones de tortura que llevaban a cabo los organismos represivos. Otros recordarían que en los interrogatorios dirigidos por Romo este siempre presentaba un aspecto descuidado, con la camisa abierta y su cuerpo lleno de sudor. A partir de entonces se le comenzaría a conocer como el guatón Romo, uno de los agentes más siniestros de los aparatos de seguridad de la dictadura. Hacia mediados de los setenta, Romo se establecería en Brasil, lugar en que sería localizado y extraditado a Chile, al comenzar los noventa, para responder ante la justicia por las decenas de acusaciones por violaciones a los derechos humanos que pesaban en su contra[334].

333 "Salvador Allende: Discurso en Lo Hermida", 8 de agosto de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, pp. 2942-2943.

334 Una de las mejores investigaciones que existen sobre Osvaldo Romo Mena es el libro de Nancy Guzmán, *Romo. Confesiones de un torturador*. Dicho texto se basa en una serie de entrevistas que el antiguo dirigente poblacional le concedió a Guzmán en el año 1995, cuando ya se encontraba preso en la Penitenciaria de Santiago.

Los hechos ocurridos entre fines de julio y comienzos de agosto —Asamblea Popular de Concepción y allanamiento en Lo Hermida— revelaron, pues, la existencia de profundas diferencias en el seno de la izquierda. En el primer caso, la discusión giraba en torno a cuestiones estratégicas que tenían que ver con la viabilidad de mediano y largo plazo del proyecto de la UP y la forma en cómo se confrontaría a la oposición. En ninguna de ellas existía, como se ha visto, un consenso claro en relación a su puesta en práctica. El segundo hecho volvió a instalar una discusión respecto al carácter represivo del Estado, sobre todo por los planteamientos críticos realizados por el MIR y que en algunos casos fueron secundados, a veces sin ambages, por colectividades oficialistas. Desde distintos ángulos, ambas situaciones tensionaban por enésima vez las relaciones al interior de la izquierda chilena.

Como si los sucesos ocurridos en Concepción y en la capital no fueran del todo complejos para el gobierno y sus adherentes, en el mes de agosto comenzó a observarse un reimpulso de la ofensiva opositora. Esta se materializaría en diversos ámbitos del quehacer nacional y correría en paralelo a un recrudecimiento de los hechos de violencia política en distintas zonas del país.

Cabe precisar que el impulso que dio la oposición, en esta coyuntura, a su estrategia de confrontación fue explicitado a través de una declaración pública emitida los primeros días de agosto. Dicho documento —firmado por el PN, la DC, la Izquierda Radical, la Democracia Radical y el Partido Democrático Nacional (PADENA)— enfatizó que el gobierno había sobrepasado la legalidad y la Constitución vigente, razón por la cual no existía un verdadero

---

En el libro se da cuenta de gran parte de la trayectoria vital de Romo, quedando en evidencia una personalidad megalómana, resentida y misógina. El libro se adentra también en un aspecto central de la historia de Romo referido a cómo pasó de ser un dirigente popular de izquierda a colaborar con los servicios de seguridad de la dictadura. Según Guzmán, pocos días después del golpe de Estado, cuando Romo se encontraba detenido en la Escuela Militar, fue «rescatado» por Julio Rada, funcionario de Investigaciones, y el general Ernesto Baeza, quienes le dieron la opción de salvar su vida a cambio de que trabajara para ellos. Meses después, y gracias al eficiente trabajo de delación que había realizado, el antiguo dirigente poblacional pasó a integrar la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Romo, por su parte, deja entrever que trabajaba como infiltrado desde antes del golpe militar para las Fuerzas Armadas. Véase en especial capítulos 2 y 3.

sistema democrático en el país. Desde este ángulo, el propósito del Ejecutivo, a juicio de la oposición, no era otro que instaurar una dictadura totalitaria a través de un hostigamiento permanente hacia el resto de los poderes del Estado. Enseguida, esta declaración lamentaba el hecho de que el gobierno no rectificase su línea de acción a efecto de encauzar por la vía democrática el proceso político. Por último, se hacía un llamado a luchar por las vías constitucionales para mantener la vigencia de las libertades públicas y los derechos de la ciudadanía[335]. Como ya se había observado en declaraciones de similar tenor, este documento volvía a señalar como eje central la idea de que el gobierno transitaba por el camino de la ilegalidad. Esto implicaba, en términos estratégicos, poner otra vez en el debate público la idea sobre un término anticipado del proyecto popular. Según el historiador Luis Corvalán Marquéz, la declaración de agosto de la oposición, además de mostrar un nuevo punto de confluencia dentro de este bloque, se traduciría en una serie de acciones en contra del gobierno, como llamados a huelgas y manifestaciones de la sociedad civil, siendo su punto de llegada el paro de octubre de 1972[336].

A partir de mediados de agosto, en efecto, se escenificaron diversos conflictos que tensionaron el clima político. Uno de ellos estuvo relacionado con los gremios de comerciantes y productores, quienes se movilizaron en respuesta a las medidas gubernativas que buscaban paliar los efectos del desabastecimiento en el país. En ese marco, la Dirección Nacional de Industria y Comercio (DIRINCO) y las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) redoblaron sus esfuerzos en orden a mantener abiertos los canales de comercialización y distribución de productos, situación que las confrontaría sobre todo con el pequeño y mediano comercio. A lo anterior se sumarían, en ese mismo periodo, algunas alzas de precio en diversos productos, lo que incidiría sin duda en complejizar el problema. El vespertino *La Segunda* no dudó en calificar esta situación como una «escalofriante marea de alzas», la cual evidenciaba que la política económica del régimen estaba desmantelando al país y conduciéndolo a la «ruina»[337]. En un tono más optimista, el periódico *Clarín*, si bien no desconocía

[335] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 203-204.
[336] *Op. cit.*, p. 204.
[337] "Alzas a granel", 18 de agosto de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 430.

el alza, indicaba que la política económica del gobierno implicaría subir los salarios en el mes de octubre permitiendo a los chilenos «recuperar su poder adquisitivo»[338].

A pesar de las perspectivas halagüeñas que intentaban esbozar algunos actores, en pocos días se había conformado un cuadro de creciente confrontación a partir de los problemas indicados. El día 17 de agosto estallaron serios incidentes en la ciudad de Punta Arenas entre comerciantes y funcionarios de Carabineros que inspeccionaban un negocio en busca de productos acaparados. El dueño del local, Manuel Aguilar García se opuso a la acción policial lo que le provocó, en medio de una ardua discusión y forcejéos con Carabineros, un paro cardíaco que acabó con su vida[339]. Aunque no hubo indicios de violencia desmedida por parte de la policía o de civiles, la muerte de Aguilar fue reivindicada desde el mundo gremial como la de una víctima de la política económica del gobierno de la UP.

En pocos días, el conflicto entre los gremios y el gobierno escalaría a nivel nacional, sensibilizando a un sector no menor de la sociedad civil que rechazaba las políticas de la UP. De hecho, la Confederación del Comercio Detallista, encabezada por un activísimo Rafael Cumsille, y la Cámara Central de Comercio convocaron a una paralización nacional para el día 21 de agosto, la que fue respaldada mayoritariamente por sus bases. En la conferencia de prensa ofrecida en horas de la tarde de ese mismo día, Cumsille señaló su disposición a conversar con el gobierno y buscar alguna solución a las alzas y el desabastecimiento que existían. Sin embargo, sostuvo el dirigente, dicho acuerdo no podía basarse en el «entreguismo» que exigían las autoridades. Además, Cumsille insistió en que los comerciantes necesitaban garantías de seguridad y reglas claras para continuar con su trabajo. En la parte final de la conferencia, el dirigente gremial dio cuenta de un dato interesante respecto a la movilización. Sostuvo que a lo largo la jornada recibieron llamados de numerosos

[338] "¡Ánimo, muchachos: sueldos y salarios suben en octubre!", 19 de agosto de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 432.

[339] El Certificado de defunción de la víctima confirma el fallecimiento por causa de un paro cardíaco e infarto al miocardio. "Certificado de defunción de Manuel Aguilar García", Punta Arenas, 17 de agosto de 1972, n.º de inscripción 377, folio 82732207, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 23 de febrero de 2021].

centros de madres —que agrupaban a miles de dueñas de casa— los cuales expresaron su solidaridad con la paralización gremial[340]. De ser cierta tal afirmación, ella reflejaba que las luchas políticas y gremiales en contra de la UP tenían un respaldo transversal dentro de ciertos segmentos de la sociedad civil, rebasando así un marco de adhesión que podía atribuirse solo a los militantes o miembros de una colectividad en particular.

La respuesta del gobierno ante la activa movilización gremial y los incidentes que comenzaban a rondar en torno a la misma fue decretar el Estado de Emergencia en diversas provincias. Asimismo, se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado en algunos casos puntuales, como fue el de ciertas radioemisoras que, según se dijo, habían contribuido a crear un ambiente de hostilidad y confrontación. También, y en medio de la paralización, las autoridades habían decretado la reapertura por la fuerza de diversos locales comerciales —con el consecuente enfrentamiento que de ello se derivó— al tiempo que procedía a requisar otros tantos. Como era de esperar, la decisión del gobierno agitó los ánimos y provocó sendas reacciones de parte de la oposición, la que junto con manifestar su apoyo al gremio del comercio intensificó sus llamados en orden a la movilización de masas en contra del Ejecutivo[341].

En corto tiempo, la confrontación social y política se tomaba de nuevo las calles de diversas ciudades. Aunque tras reunirse con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Allende se comprometió a devolver los locales requisados y no aplicar las multas efectuadas en la jornada de paralización[342], el clima general de tensión no disminuyó. El mismo día del paro gremial, desconocidos dispararon en contra de la vivienda particular de la ministra del Trabajo, Mireya Baltra, en un hecho que no tuvo mayores consecuencias, aunque era un reflejo del momento que se vivía. Las declaraciones y discursos públicos, por su parte, tampoco contribuían a apaciguar un conflicto que seguía escalando en intensidad. Así, por ejemplo, el intendente de Santiago, Alfredo Joignant, aseguró por esos días

[340] "General fue cierre del comercio en todo el país", *La Tercera*, 22 de agosto de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 433.

[341] Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, p. 211.

[342] "Superado problema del Gobierno y el comercio", *La Prensa*, 22 agosto de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 435.

que entre cuarenta y cincuenta mil obreros se encontraban listos para salir a la calle a «defender al gobierno»[343].

Bajo el marco descrito, se produjeron numerosos hechos de violencia que tuvieron como resultado la muerte de cinco personas en distintos puntos de la zona centro sur del país. El primero de ellos ocurrió en la ciudad de Los Ángeles el día 22 de agosto. En dicha jornada, el FNPL, a través de su dirección regional, convocó a una manifestación callejera con el objetivo de protestar por las medidas económicas que había adoptado el Gobierno. Por contrapartida, un grupo de dirigentes campesinos de la zona, partidarios de la UP, hizo un llamado público para cerrar el paso y confrontar el despliegue del movimiento nacionalista. A ese llamado concurrió el campesino Román Lara Ponce, militante del PS. Según la versión del vespertino *Las Noticias de Última Hora*, ambos grupos chocaron violentamente en las calles céntricas de Los Ángeles, produciéndose numerosos incidentes entre miembros de uno y otro bando. En una de estas peleas, según el periódico, algunos miembros de Patria y Libertad utilizaron armas de fuego con las cuales atacaron a los campesinos. Uno de los heridos de gravedad fue Lara Ponce, quien fallecería a primera hora de la mañana siguiente[344]. La colectividad en la cual militaba la víctima emitió una declaración en la que se exigía la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a los dirigentes de Patria y Liberad. Al mismo tiempo, dicho documento hacía un llamado público a su base militante para que estuviera en estado de alerta y, si la ocasión lo ameritaba, salir en defensa del Gobierno de la UP[345].

El diario regional *El Sur* enmarcó la muerte de Lara Ponce dentro de los incidentes ya señalados, aunque sostuvo que el deceso se produjo por golpes y contusiones de diversa consideración y no por el uso de armas de fuego. Del mismo modo, este rotativo dio cuenta que, dentro de los desórdenes producidos, los estudios de

[343] Salazar, M., *op. cit.*, p. 235.

[344] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 24 de agosto de 1972, p. 24. El Certificado de defunción de la víctima anota como causa de muerte un hematoma intracerebral producto de un traumatismo. "Certificado de defunción de Román Lara Ponce", Los Ángeles, 23 de agosto de 1972, n.º de inscripción 676, folio 82732225, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 23 de febrero de 2021].

[345] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 25 de agosto de 1972, p. 3.

radio Agricultura fueron dañados producto del apedreo por parte de simpatizantes del oficialismo[346]. En su edición del 25 de agosto, *El Sur* consignó las declaraciones que diversos personeros de la UP realizaron en el funeral del malogrado campesino. Uno de los aspectos más relevantes fue aquel explicitado por el ministro secretario general de Gobierno, Hernán del Canto, quien sostuvo que los miembros de Patria y Libertad personificaban la «cara del fascismo» que los militantes socialistas «no dejarían pasar»[347].

Tanto en la declaración del propio PS como en la que hiciera del Canto en el funeral de la víctima se podía advertir que para este partido existía un contexto de máxima tensión en el país. Dicho marco, en efecto, estaba determinado por los intentos de la oposición en orden a iniciar un ataque frontal en contra del gobierno, situación en la que sobresalía con voz propia el «fascismo» de Patria y Libertad. Ahora bien, lejos de hacer un llamado que contribuyera en la distensión del conflicto en curso, los objetivos socialistas apuntaban más bien a que las bases militantes de izquierda se preparasen y estuvieran prestas a operar en dicho escenario. Ello significaba mantener en alto el ritmo polarizador y los discursos maximalistas que se dejaban sentir desde hacía semanas en el espacio público.

Casi al mismo tiempo que se producía el homicidio del militante socialista en Los Ángeles, otro hecho de violencia se saldó con la muerte de personas en la zona sur del país. En esta ocasión, los sucesos remitieron a un espacio rural de la ciudad de Frutillar en la provincia de Llanquihue. Esta pequeña urbe forma parte de un territorio que a mediados del siglo XIX fue colonizado por inmigrantes alemanes atraídos por el Estado de Chile. Con el paso de los años, Frutillar y las zonas aledañas destacarían por una producción agropecuaria que tendría en la impronta alemana uno de sus sellos característicos. Así destacarían las fábricas de cecinas y de productos lácteos y agrícolas. Se trataba de una zona no tan poblada, que para 1970 rondaba en torno a los diez mil habitantes.

Los hechos se produjeron en el fundo El Mirador localizado, como se dijo, en la zona rural de Frutillar. El historiador Felipe Sánchez indica que se trata de uno de los episodios de violencia política

346 *El Sur*, Concepción, 24 de agosto de 1972, p. 1.
347 *El Sur*, Concepción, 25 de agosto de 1972, p. 24.

más dramáticos y menos conocidos de los años de la UP[348]. Quizás la distancia geográfica entre la capital y la pequeña ciudad —casi 1000 kilómetros— pudo ser un factor que incidiera en el relativo desconocimiento del hecho, incluso cuando este fue abordado por diversos medios de comunicación.

El suceso, como ya había ocurrido en otros casos, estuvo vinculado al proceso de reforma agraria. En este caso, los eventos se originaron entre propietarios y campesinos por la ocupación de un predio. Según relata *Punto Final*, el fundo El Mirador había sido expropiado el día 27 de junio a través de un mandato legal, indicándosele a su dueño, Helmuth Daetz Hoffman, que no podría retirar ningún elemento desde su interior. En paralelo, los campesinos que participaron en la expropiación levantaron dentro del terreno un asentamiento al que llamaron Diego Portales. El día 23 de agosto, según la crónica de la revista, se produjo una larga reunión entre Daetz y otros agricultores de la zona —quienes pertenecían en su mayoría al PN, Patria y Libertad y al Comando Rolando Matus—, instancia en la cual se habría acordado poner en marcha un «operativo» de retoma del predio. En horas de la noche, continúa *Punto Final,* cerca de treinta y cinco latifundistas armados irrumpieron en el fundo El Mirador con el objetivo de sacar algunos implementos para el trabajo agrícola como bombas de agua, cadenas para yugos, entre otros. En su retirada, y sin mediar provocación, recalca la revista, los propietarios agrícolas hicieron uso de sus armas de fuego disparando en contra de los campesinos. El resultado de esta acción fue la muerte de tres personas: Luis Rivas González de 16 años, Juan Rivas Rivas de 54 y Roberto Almonacid Asenjo de 56, además de cinco heridos de gravedad[349].

La versión que entrega Felipe Sánchez a través de su estudio es en general coincidente con la anterior, aunque aporta algunos detalles importantes. Según su relato, que se basa en la prensa de la época, Daetz ingresó al fundo El Mirador junto con Gastón Domínguez, Violo Catalán y Alberto Hechenleitner, este último funcionario de la Corporación de Fomento (CORFO) y con quien concretaría una ven-

[348] Felipe Sánchez, "Violencia política en la provincia de Llanquihue durante la reforma agraria de la Unidad Popular, 1970-1973".

[349] *Punto Final*, n.º 166, Santiago, martes 12 de septiembre de 1972, pp. 2 y 3.

ta de ganado. Al salir de la reunión, los campesinos del asentamiento Diego Portales solo dejaron salir a Hechenleitner acusando a Daetz de intentar llevarse maquinaria agrícola que estaba en el inventario de la expropiación. Ante ello, según el relato de Sánchez, Daetz y sus acompañantes se alojaron en otra casa del fundo hasta cerca de las cinco de la mañana del día 24 de agosto momento en que decidieron cortar las cadenas que bloqueaban el acceso y salir en sus automóviles. Cuando iniciaban la huida, detalla Sánchez, fueron atacados con palos por los campesinos que custodiaban el lugar, momento en que hizo su aparición un grupo de agricultores y militantes de Patria y Libertad quienes comenzaron a disparar. Así se habría producido el deceso de Luis y Juan Rivas y de Roberto Almonacid[350].

Uno de los puntos más complejos de dilucidar en este caso se refiere a si el uso de armas de fuego por parte de Daetz y el resto de los propietarios agrícolas fue un hecho fortuito, o bien, correspondía a una operación planificada. Según la versión de *Punto Final*, se trató de un operativo que fue diseñado tras una larga reunión en la casa de Roberto Cárcamo, ubicada al interior del predio agrícola, y en la cual se emplearon «metralletas, carabinas y revólveres» además de cascos y gorros pasamontañas[351]. La investigación de Sánchez, incorpora el testimonio de Gastón Domínguez, uno de los testigos directos de los hechos. Este señala que en esa ocasión «estábamos más o menos organizados» y que tras producirse un primer disparo el resto de la gente quedaría estupefacta, convertida en «momias». Ese fue el instante que se aprovechó, continúa Domínguez, para abrirse camino y salir del lugar, pues hizo su aparición un camión con «catorce amigos nuestros», los cuales abrieron fuego «como si hubiesen sido salvas de

[350] Sánchez, *op. cit.*, pp. 84 y 85. El certificado de defunción de Luis Rivas González señala que su fallecimiento se produjo por causa de una ruptura del pulmón derecho y el corazón por herida de bala. "Certificado de defunción de Luis Rivas González", Puerto Montt, 24 de agosto de 1972, n.º de inscripción 589, folio 82732249, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 23 de febrero de 2021]. El certificado de defunción de Roberto Almonacid, en tanto, señala como causa de muerte un *shock* por hemorragia interna producido por una herida de bala en la región torácica. "Certificado de defunción de Roberto Almonacid", Osorno, 25 de agosto de 1972, n.º de inscripción 462, folio 83288561, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 18 de marzo de 2021].

[351] *Punto Final*, n.º 166, Santiago, martes 12 de septiembre de 1972, p. 3.

dieciocho de septiembre»[352]. Como bien apunta Sánchez, el testimonio de Domínguez viene a reconocer la existencia de una preparación previa para ejecutar la salida de Daetz y sus acompañantes desde el fundo El Mirador, cuestión que en su momento se negó.

En cuanto a sus consecuencias más inmediatas, los hechos ocurridos en Frutillar generaron diversas reacciones. El Consejo Comunal Campesino de esta ciudad emitió una declaración en que se pedía que las autoridades prohibieran el uso de armas por parte de sectores derechistas, los cuales «a sangre y fuego saquean y asesinan a los campesinos indefensos». La declaración explicitaba, además, un argumento que remitía a cuestiones de índole cultural e históricas. En efecto, el documento sostuvo que a los sectores patronales no les había bastado con explotar a los campesinos de forma «inhumana» por casi cien años, sino que ahora procedían a «pisotear las leyes y los más elementales derechos humanos»[353].

Por su parte, el Comité Político de la UP emitiría una declaración el día 26 de agosto que recogía no solo los hechos ocurridos en el sur del país, sino que también entregaba una visión de conjunto respecto al ambiente político en general. En primer término, el documento sostenía que la situación era de la «mayor gravedad» producto de los intentos de la oposición por buscar un «enfrentamiento de hecho» con el gobierno. Enseguida detallaba una serie de elementos que graficaban el propósito antes descrito y entre los que se encontraban la injuria, la difamación y la «excitación a la violencia» de los grupos de derecha. Estos últimos, a juicio de la UP, se encontraban en «permanente acción en las calles y en el campo de todo el país». Tal juicio remitía con seguridad a los sucesos que se habían producido en Frutillar hacía menos de tres días atrás, aunque su conexión respecto a otros sucesos ocurridos, por ejemplo, en espacios urbanos era también bastante nítida. Finalmente, la declaración advertía que el Gobierno y las bases militantes no tolerarían más el «asesinato de compañeros trabajadores» y que repelerían los vejámenes y asaltos de que eran objeto los miembros de la izquierda[354].

[352] Sánchez, *op. cit.*, p. 86.

[353] "La burguesía en armas", *Punto Final*, n.º 166, Santiago, martes 12 de septiembre de 1972, p. 4.

[354] "Comité Político de la Unidad Popular. Declaración pública del 26 de agosto de 1972", en Farías, *op. cit.*, tomo 4, p. 2999.

Otra reacción provino desde el Congreso Nacional. En la sesión especial del Senado efectuada el día 31 de agosto se polemizó desde diversos ángulos sobre los recientes hechos de violencia. Abrió la discusión el senador de la DC Tomás Reyes Vicuña quien condenó la muerte de los campesinos como así también el reciente fallecimiento de un cabo de Carabineros en la ciudad de Concepción —hecho que se detallará más adelante—. A su juicio, el país llegaba a un punto grave de descontrol que debía llamar la atención de todas las autoridades. Del mismo modo, el parlamentario reafirmaba su apoyo al proyecto de ley que entregaría el control de armas y explosivos a las Fuerzas Armadas. Por último, Reyes solicitaba a la mesa de la corporación levantar la sesión del día en señal de duelo. La proposición fue acogida por la mayoría de los parlamentarios no sin antes producirse un intenso debate. El senador del PN, Víctor García Garzena, emplazó al Gobierno para que pusiera orden en el país y desarmara a los grupos extremistas en vez de «desarmar moralmente a la nación [...] conduciéndola por una senda de odio». Por su parte, el senador socialista Aniceto Rodríguez cargó contra la derecha a la que acusó de hipocresía por aprovechar políticamente la muerte del Carabinero en Concepción. De igual forma interpeló a la DC respecto a por qué no solicitó la suspensión de las sesiones del Senado cuando ocurrieron los sucesos de Frutillar el día 24 de agosto en que, recalcaba Rodríguez, los latifundistas «masacraron [y] asesinaron a [los] campesinos». El senador García respondió a lo expresado por el parlamentario socialista señalando que los propietarios agrícolas se encontraban como rehenes dentro de un campo y que al intentar escapar fueron agredidos por más de 80 campesinos. Se produjo entonces, según García, un acto de defensa que se transformó en una «reyerta mano a mano». Rodríguez no se quedó atrás y recalcó que los latifundistas, a quienes la derecha representaba, habían cometido un crimen «con premeditación y alevosía»[355].

La áspera sesión del Senado referida arriba abordó también la muerte de un funcionario policial ocurrida en la ciudad de Concepción. El hecho se produjo en la noche del día 30 de agosto en las inmediaciones de la sede regional del PS. El contexto de esta muerte estaba determinado por una dinámica que ya se había transformado

[355] Senado, *Diario de sesiones*, 61.ª sesión, jueves 31 de agosto de 1972, pp. 3707-3714.

en habitual en los grandes espacios urbanos, a saber: largos enfrentamientos callejeros y conatos de todo tipo entre partidarios y detractores del gobierno. El origen de los mismos tenía, para mediados de 1972, cierta particularidad en el sentido de que muchos de estos desórdenes se producían por la disposición explícita de algunos actores en orden a impedir el despliegue de sus oponentes. Como se recordará, esto se había materializado, también en Concepción, el pasado mes de mayo cuando algunos sectores del oficialismo —en alianza con el MIR— quisieron cerrar el paso a una manifestación de grupos de derecha. En esa ocasión el saldo fue de un joven mirista fallecido producto de la acción de la policía y una dolorosa grieta en el seno de la UP.

En el caso de la muerte del funcionario policial, la dinámica fue bastante similar a lo ocurrido en el mes de mayo. Según la investigación de José Díaz y Mario Valdés, el día 30 de agosto fue convocado por sectores de la oposición penquista un «caceroleo» masivo programado para las diez de la noche. Ello se acordó como una respuesta a la cancelación del permiso para marchar que habían adoptado las autoridades regionales[356]. La izquierda, por su parte, hizo un llamado, al igual que en el mes de mayo, para que sus bases militantes coparan las calles del centro y evitaran así los desmanes que cometerían los manifestantes de oposición. Como era de esperar, desde muy temprano flotaba una atmósfera tensa en el centro de Concepción. El llamado de la izquierda sin duda atizó a los grupos de choque opositores que se sintieron interpelados a salir a la calle. Así se produjeron durante todo el día enfrentamientos y escaramuzas en diversos puntos de la ciudad, los cuales, además, coincidieron con movilizaciones obreras que también se desplegaron en dicho espacio. Al llegar la noche, dos buses de Carabineros se apostaron en calle Castellón frente a las sedes del PS y de la Izquierda Radical. Díaz y Valdés sostienen que los disparos provinieron presumiblemente desde la sede socialista en contra de los vehículos policiales, lo que originó el desplazamiento de estos y, por consiguiente, que el personal que estaba en su interior se pusiera a resguardo en las aceras. En ese instante fueron alcanzados por las balas los carabineros Exequiel Aroca Cuevas y los cabos de apellido Ávila y Díaz. El proyectil re-

[356] Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, p. 120.

cibido por Aroca habría sido uno de calibre 44 perteneciente a un fusil Winchester. Aunque esta ha sido la versión más extendida de lo sucedido, José Díaz y Mario Valdés también apuntan la existencia de otras versiones que inculparían a miembros de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus como los autores del crimen[357].

En este contexto, el MIR plantearía su propia versión pues se reconocía de algún modo como testigo directo de los hechos. En un informe de su comisión política, este movimiento señaló que un grupo de miristas y socialistas participaba en un improvisado mitin en el centro de Concepción el día 30 de agosto. Al trasladarse luego a su local, los militantes del PS fueron atacados con piedras por grupos opositores, agresión que sería respondida de la misma forma. En ese momento, continúa la versión del MIR, Carabineros se hizo presente en el lugar procediendo a allanar el local del PS, «disparando al cuerpo bombas lacrimógenas», lo que provocaría un enfrentamiento y el posterior deceso del carabinero Aroca[358].

Salvo esta versión, en el ambiente público quedó instalada de forma predominante la idea de que la muerte del Carabinero fue producto de la acción de miembros del PS. En la misma sesión del Senado mencionada más arriba, una parte de la discusión giró en torno a la muerte del funcionario policial, estableciéndose acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición por la autoría del crimen. El senador socialista, Aniceto Rodríguez, comentó la declaración del subsecretario general de su partido quien sostuvo que el autor de los disparos había sido un civil que habitaba una vivienda cercana a la

[357] Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, pp. 121-122. El estudio de Danny Monsálvez aporta otros elementos importantes sobre este caso, en especial, los relatos de algunos testigos directos de los hechos. Según se indica, las sospechas respecto a los autores del crimen recayeron en Héctor Figueroa Yáñez y Marcelo Merino, este último hijo del secretario regional del PS y encargado del aparato de seguridad. En virtud de estos antecedentes, los dirigentes locales del partido acordaron, en una reunión sostenida con el intendente de la zona Vladimir Chávez, dos cuestiones importantes. La primera es que se procedería a esconder todas las armas que hubiera en la sede de la colectividad antes del allanamiento de Carabineros. La segunda medida consistió en que la autoría de lo ocurrido recaería en Figueroa y no en Merino dadas las responsabilidades políticas de este último. Véase, Danny Monsálvez, "Concepción, de la Unidad Popular al Golpe de Estado (1970-1973): el tránsito de la confrontación y el conflicto a la violencia política institucionalizada", pp. 73-76.

[358] "MIR: Informe de la Comisión Política al Comité Central Restringido del MIR sobre la 'crisis de agosto'", 8 de septiembre de 1972, en Farías, *op. cit.*, tomo 4, p. 3035.

sede regional del PS. Tal aseveración fue cuestionada por sus pares del Senado, en particular por el senador democratacristiano Tomás Pablo quien le recordó que había «seis socialistas detenidos»[359]. La muerte del carabinero se prestó así para elevar la temperatura del debate político y poner sobre la mesa, una vez más, el tema de la violencia como una problemática de primera importancia en el país.

En paralelo a los incidentes de Frutillar y Concepción, otro actor de la sociedad civil comenzaba a desplegarse con inusitada fuerza —y violencia— en las calles de las principales ciudades. Se trataba de los estudiantes secundarios, quienes, si bien participaron en diversas concentraciones a lo largo de estos años, a partir de 1972 comenzaron a tener un protagonismo particular en las calles y en sus propios centros educacionales. Jorge Rojas señala que el tema de mayor controversia para los secundarios tuvo relación con el incremento de las «tomas» en los liceos y la designación de nuevos directores por parte del Gobierno, situación esta última en que operaba un criterio más bien político. De igual forma, el tema de las sanciones disciplinarias fue teñido de una fuerte pugna ideológica producto de las acusaciones de sectarismo que se hacían en contra de algunas autoridades[360].

Para agosto de 1972, la irrupción de este segmento fue generada, además de los conflictos ya referidos, por los altos niveles de polarización que existían en el país y que alentaban un rol más decidido en la lucha política. El estudio de Rojas señala que en este mes comenzaron a confluir en las arterias capitalinas la Federación Única de Estudiantes Particulares (FUEP) y la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES) en cuyas directivas predominaban militantes de la oposición al gobierno de Allende[361]. En este marco, el testimonio de Andrés Allamand, por entonces estudiante secundario de un colegio particular, resulta revelador[362]. En su libro, *La travesía del desierto*,

[359] Senado, *Diario de sesiones*, 61.ª sesión, jueves 31 de agosto de 1972, p. 3714.

[360] Jorge Rojas Flores, "Los estudiantes secundarios durante la Unidad Popular, 1970-1973", p. 483.

[361] *Op. cit.*, p. 485.

[362] Durante los años de la UP, Allamand estudiaba en el colegio particular Saint George, desde donde se cambiaría a un liceo público a objeto, entre otras cosas, de poder participar en las elecciones de la FESES.

Allamand cuenta que al ser presentado meses antes a Sergio Onofre Jarpa, este, «con su voz lenta y arrastrada», le manifestó que había que enfrentar al gobierno en «todos los terrenos», pues no existían «zonas neutrales». Para sintetizar sus objetivos, Jarpa le señaló que resultaba ineludible abrir «otro frente de combate» en contra de la UP, propósito en que los estudiantes secundarios podían jugar un rol clave[363].

En la práctica, estos planes se concretaron en numerosas paralizaciones estudiantiles, las cuales serían acompañadas por enfrentamientos y conflictos de distinto tipo. El 28 de agosto, por ejemplo, se produjo una cruenta pelea en el Liceo n.º 8 de Hombres entre miembros de las juventudes de la DC y del PN en contra de estudiantes del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y de la UP que se habían tomado las dependencias de este establecimiento[364]. Al día siguiente, la FESES organizó una marcha hacia el centro de Santiago que acabó con un apedreo masivo al Ministerio de Educación y serios enfrentamientos con universitarios de izquierda que se habían desplegado para movilizarse, según se dijo, contra la «sedición y el fascismo»[365]. El día 30, otro enfrentamiento callejero, aunque no de carácter estudiantil, estalló en la capital. Esta vez el escenario fue el sector oriente de la capital, en las inmediaciones de la residencia particular del presidente Allende ubicada en la calle Tomás Moro. Hasta allí llegaron decenas de pobladores y militantes de izquierda con el objetivo de repeler un supuesto ataque que perpetraría la extrema derecha en contra del domicilio del primer mandatario. En el tránsito hacia dicho lugar, turbas organizadas de contramanifestantes se trenzaron a golpes con los militantes de izquierda produciéndose diversos heridos[366].

Al comenzar septiembre, las movilizaciones estudiantiles retomaron su periodicidad[367]. El día primero, la FESES convocó a una nueva

[363] Andrés Allamand, *La travesía del desierto*, p. 23.
[364] Salazar, M., *op. cit.*, p. 237.
[365] Rojas Flores, *op. cit.*, p. 486.
[366] Salazar, M., *op. cit.*, p. 237.
[367] La movilización secundaria estuvo vinculada también, en su dimensión interna, a las elecciones de la directiva de la FESES que se llevarían a cabo en el mes de noviembre y en la cual distintas listas se disputarían la conducción de este segmento estudiantil. La lista de la Democracia Cristiana era encabezada por Miguel Salazar, mientras que la de la UP llevó como candidato al socialista Camilo Escalona. Otros

marcha que coincidió con la de estudiantes industriales y técnicos que apoyaban al gobierno, siendo la primera de ellas disuelta con gases lacrimógenos por parte de Carabineros. En horas de la tarde, los incidentes cambiaron de tono pues tras el retiro de los estudiantes el centro de la capital fue copado por adultos y, según indicó el Gobierno, delincuentes comunes y «lumpen»[368]. El 6 de septiembre la tónica fue idéntica. Tras el llamado de la FUEP a marchar en apoyo a la FESES —cuestión que en la práctica se cumplió— por la tarde estallarían de nuevo los enfrentamientos con Carabineros. Según la recopilación de Manuel Salazar, los incidentes dejaron un saldo de 282 detenidos y más de 40 heridos de diversa consideración[369]. En ese marco, se produjo también la muerte de un joven de 17 años identificado como Mario Avilés Oyarce. El Comité Ejecutivo de la FESES, según indica Rojas, lamentó el fallecimiento del joven aun cuando advirtió que la víctima no estaba participando de las movilizaciones[370]. El certificado de defunción al que esta investigación pudo acceder anota como causa de muerte de Avilés un traumatismo cráneo encefálico fijando su hora de deceso a las 15:25 de la tarde[371].

Los hechos de violencia que se venían sucediendo en el país sugieren la existencia de un cuadro particularmente complejo. Las tensiones sociales y políticas parecían desbordar sin pausa la capacidad de control de las autoridades, e inclusive ir un paso más allá de las dinámicas tradicionales de participación y acción dentro

---

grupos, como el FER o la Juventud Nacional, levantaron los nombres de Luis Valenzuela y Andrés Allamand, respectivamente. Los resultados, que dieron por ganador al candidato de la DC, fueron impugnados por la izquierda suscitándose acusaciones cruzadas y, como sostiene Jorge Rojas Flores en su estudio, un enfrentamiento mucho más directo entre los grupos en pugna. El socialista Camilo Escalona recordaría décadas después que la elección de la FESES de 1972 alcanzó tal importancia que ella sobrepasó al propio movimiento estudiantil. El proceso electoral, indica el dirigente, terminó de la peor forma: «a golpes, patadas y enfrentamientos... era una elección en que, por la polarización existente, nadie iba a considerarse perdedor». Véase, Álvaro Peralta y Enzo Pistacchio, *Duro de matar. Diálogo con Camilo Escalona*, p. 43.

368 Rojas Flores, *op. cit.*, p. 487.

369 Salazar, M., *op. cit.*, p. 239.

370 Rojas Flores, *op. cit.*, p. 487.

371 "Certificado de defunción de Mario Avilés Oyarce", Santiago, 6 de septiembre de 1972, n.º de inscripción 1971, registro E1, folio 15720910, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 26 de mayo de 2016].

de un sistema institucionalizado como el chileno. La revista *Ercilla* apuntaba a través de su columnista Luis Hernández Parker que, si antes la política chilena se practicaba en el cuadrilátero del Congreso Nacional, hoy «el fuego abrasa todo el territorio nacional». Bajo el ángulo de este observador, la bala estaba «reemplazando al verbo», situación que comenzaba a configurar un Chile «denso y tenebroso» que no permitiría la existencia de posiciones neutrales. En otras palabras, Hernández Parker ponía un punto de atención respecto a que las posiciones extremas de algunos actores contribuían a dejar en un lugar muy marginal a aquellas posturas proclives al consenso y los acuerdos[372].

Al trazar los lineamientos generales del conflicto social y político de estos meses se pueden reconocer los siguientes elementos. En primer término, la oposición está encaminada a confrontar de forma más dura a la UP hasta alcanzar un punto de inflexión que abra la posibilidad de cancelar el proyecto socialista. Al hablar de oposición en este periodo, se está refiriendo un concepto que engloba con total nitidez a un conjunto amplio de actores políticos y sociales que manifiestan su rechazo más rotundo al Gobierno. En efecto, las acciones de la DC y el PN, que por momentos parecen cercar al Ejecutivo en el plano institucional, corrían en paralelo a la acción decidida de los gremios y sectores del estudiantado secundario y universitario que se movilizaba en las calles. A ellos habría que sumar el rechazo de sectores medios, e inclusive algunos núcleos populares, que padecían los problemas cotidianos derivados de las medidas gubernamentales —a veces sobredimensionados, pero explotados con habilidad por un sector de la prensa—[373].

Esta presencia relevante de la oposición fue advertida con cierta preocupación desde las esferas del oficialismo, lo que reimpulsó en buena medida la movilización callejera de este bloque. La visión más radicalizada de esta estrategia, que consistía en impedir el despliegue de la oposición en las calles, se observó en los núcleos duros de la UP, y sobre todo en el MIR que alentaba en el último tiempo operaciones de este tipo. Con todo, la existencia de dos fuerzas políticas que contaban con sólidos apoyos sociales hacía inviable un

[372] *Ercilla*, n.º 1938, Santiago, 6 al 12 de septiembre de 1972, p. 7.
[373] Casals, *Contrarrevolución…*, *op. cit.*, pp. 51-66.

copamiento masivo de las calles por una sola de estas tendencias. Los hechos mostrarían, más bien, un despliegue masivo de actores sociales de distinto signo político predispuestos a confrontar a sus rivales. En este contexto, las calles habían comenzado a cobijar desde hacía meses flujos y reflujos de manifestantes en transiciones muy cortas de tiempo, lo que hizo prácticamente imposible evitar los enfrentamientos. En la primera semana de septiembre las marchas secundarias de la oposición chocaron con sus símiles de izquierda y también con estudiantes universitarios en pleno centro de la capital. Al mismo tiempo, estas manifestaciones dieron pie para que en horas de la tarde se produjeran sendos enfrentamientos entre militantes adultos de uno y otro sector, además de la participación del lumpen que suele merodear las calles en estas situaciones.

Un segundo elemento de este periodo se refiere a la intensidad del lenguaje político. Cabe recordar a este respecto que los discursos estratégicos de los principales actores estaban articulados para mediados de 1972 en torno a nociones de lo que se puede denominar como una lucha de carácter global. Esto significa que en los objetivos de mediano y largo plazo predominaba una idea que ponía la continuidad o cancelación del proyecto socialista de la UP en el centro del debate político. Ya no se trataría, en efecto, de dilucidar cuestiones solo coyunturales sino, por el contrario, resolver un tema de fondo. Incluso las problemáticas más específicas tendían a estar conectadas a esas discusiones de carácter estructural.

El conjunto de estas dinámicas se materializó en diversos elementos discursivos. Desde el bloque opositor, por ejemplo, se explicitaba la idea sobre la ilegalidad del gobierno, además de señalar un propósito manifiesto en orden a propinarle una contundente derrota. La DC aclararía, en todo caso, que ello debía concretarse en el «ring democrático». Visto en su conjunto, la oposición había contribuido a instalar un escenario abierto de confrontación, el cual debería arrojar un resultado definitivo en el mediano plazo.

Dentro de estos discursos generales orbitaron también algunas ideas más específicas que contribuyeron a incrementar la tensión política. Una de estas, proveniente sobre todo desde la derecha, consistió en acusar al gobierno y a las bases militantes de izquierda de propender hacia la construcción de un Estado totalitario en Chile. La existencia de diversos grupos armados que actuaban en el territorio

sería, según se dijo, una de las expresiones concretas del propósito anterior. Como es de suponer, lo que se buscaba con este tipo de declaraciones era introducir altas dosis de temor en la sociedad civil a efecto de que esta rechazara el proyecto de la UP y terminara por sumarse a una lucha más decidida en su contra. En esa perspectiva, el PN explicitaría, dentro de la primera semana de septiembre, su consigna de «resistencia civil»[374]. Esta buscaba que diversos sectores de la población —capas medias, sectores técnicos y profesionales e incluso núcleos populares— se mostraran reticentes a las políticas que intentaba aplicar la UP, rechazándolas de modo intransigente. En alguna medida, esta idea de resistencia civil implicaba también que estos mismos segmentos participaran en las acciones ofensivas que ya estaban en marcha. Así, para la derecha resultaba imperativo que la sociedad civil se manifestara en contra del proyecto socialista de la UP. Por último, este acento significaba que el elemento civil era visto como un factor legitimante de las estrategias y discursos con que se buscaba confrontar a la izquierda, sobre todo si se lograba conformar una mayoría sólida y de alcance nacional.

En el oficialismo, en tanto, cohabitaban distintos énfasis discursivos. Su ala más dura, que compartía un lenguaje casi común con el MIR, también advertiría la existencia de un cuadro inminente de confrontación social y política. Para este sector, la forma de abordar el complejo escenario que se estaba viviendo pasaba por redoblar la movilización de masas, reforzar el poder popular y abandonar la estrategia conciliadora y reformista que todavía se manifestaba dentro de la UP. Por su parte, el sector más moderado del oficialismo no desconocía, por cierto, la existencia de una amenaza en ciernes para las posibilidades de sobrevivencia del gobierno de Allende. Sin embargo, su plan operativo era que, lejos de todo maximalismo izquierdista, la alianza unipopular debía propender hacia una salida consensuada de la crisis, cuestión que pasaba, entre otras cosas, por conquistar una mayoría nacional sólida y consolidar las transformaciones realizadas. Desde esta posición se atacará a la ultraizquierda a la que se acusó de ser funcional a los intereses de la oposición, distrayendo a las masas populares y obreras de las grandes tareas históricas que había fijado la UP.

[374] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 217.

Por estos caminos transitaban los principales recursos discursivos de los actores en este periodo. Aunque se pueden advertir particularidades inherentes a la ideología y cultura política de cada partido o movimiento, es posible constatar que la mayor parte de estos discursos concordaban en un diagnóstico común. Este análisis refería la existencia de un escenario complejo donde los actores se encaminaban, consciente e inconscientemente, hacia un enfrentamiento que definiría el futuro del proyecto socialista en Chile.

Un tercer elemento descriptor de estos meses se refiere a los hechos de violencia política producidos en el país. En los meses iniciales de 1972 los principales sucesos de este tipo se concentraron en los espacios rurales a propósito de la compleja implementación de la reforma agraria. Ahora, en la etapa comprendida entre mayo y septiembre, los hechos de violencia se desplegaron de forma más heterogénea a lo largo y ancho del territorio, abarcando tanto espacios rurales como urbanos. Y al igual como había acontecido en los meses previos, en todos estos sucesos siguió predominando la participación del elemento civil en la materialización de los mismos.

Al realizar un balance sintético y general de las dos primeras etapas habría que destacar que desde noviembre de 1970 hasta el mes de septiembre de 1972 se registraron poco menos de cuarenta fallecidos en contextos de violencia política, siendo la mayor parte de ellos civiles, 31 casos, mientras que un número menor, solo 5 casos, correspondieron a uniformados. Dentro de estas coordenadas predominaba, como se dijo, la actuación de civiles en la materialización de estas muertes, ya fuese de modo espontáneo, o bien, bajo la existencia de un plan diseñado para tales efectos.

Cabe preguntarse, en este contexto, qué importancia tenían estos hechos de violencia para la propia sociedad civil que era protagonista y al mismo tiempo testigo directo de aquellos sucesos. En una encuesta realizada en Santiago por la revista *Ercilla* en septiembre de 1972 un promedio de 83% de los encuestados, pertenecientes a grupos socioeconómicos altos, medios y bajos, consideró que el país vivía un «clima de violencia». Respecto a su origen, los grupos altos y medios consideraron que dicho clima era responsabilidad, en su mayoría, de la oposición y del gobierno, mientras que los sectores de ingresos bajos estimaron que la principal responsabilidad recaía en la oposición. Este último segmento consideró también, en un porcentaje nada des-

preciable (25 %), que en realidad no se vivía un clima de violencia[375]. Steve Stern señala que otra encuesta realizada también en Santiago, entre diciembre de 1972 y enero de 1973, arrojaría cifras distintas al estudio anterior. En la que refiere el investigador norteamericano, más del 80 % de los entrevistados señaló que el principal problema que afrontaba el país era de índole económica —escasez, inflación, mercado negro— y tan solo el 13 % consideraba inquietante la inestabilidad y violencia cotidiana que se vivía en las calles[376]. Stern señala que esta encuesta era metodológicamente más rigurosa que la primera, aunque no explica en qué aspectos concretos se reflejaba dicha rigurosidad.

Sin desatender los aciertos o márgenes de error de cada uno de los estudios de opinión citados ellos deben situarse en un contexto específico. Para septiembre de 1972 el marco social y político daba cuenta de profundas tensiones y un clima de indudable polarización. En la primera semana de dicho mes se registraron numerosas marchas estudiantiles que terminaron en cruentos enfrentamientos entre grupos políticos rivales, uno de los cuales se saldó con la muerte de un joven de 17 años de edad el día 6 de septiembre. Bajo ese marco, el tema de la violencia política asomaría como uno de los tópicos de mayor preocupación para la población capitalina que era testigo de una confrontación casi periódica en las principales arterias de la ciudad. En diciembre de 1972, en tanto, el país se recuperaba luego de la larga paralización de los camioneros. En ese contexto, el acceso a insumos de primera necesidad y la circulación de mercaderías, que ya arrastraban dificultades importantes desde hacía por lo menos un año atrás, se vieron sin duda afectados. Por ello, no resultaba extraño que el tema económico, según indicaba la encuesta citada por Stern, ocupara un lugar preponderante para la población capitalina a menos de un mes y medio del término del paro patronal.

Con todo, para diversos segmentos sociales del Gran Santiago el problema de la violencia política no era en modo alguno marginal.

375 *Ercilla*, n.º 1939, Santiago, 13 al 19 de septiembre de 1972, pp. 10 y 11. La encuesta fue realizada por la firma Ingenieros Consultores Asociados (ICA) entre los días 2 y 4 de septiembre de 1972. Incluyó un universo de 300 personas que fueron divididas en tres segmentos de ingresos socioeconómicos —alto, medio y bajo— cada uno compuesto por 100 individuos.

376 Steve Stern, *Luchando por mentes y corazones. Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet*, p. 53.

Sin duda, el contexto determinaba la variación de los temas que preocupaban con mayor o menor interés a la población. De este modo, cuando el marco de los conflictos incrementara su curso polarizador, cuestión que a partir de 1973 sería casi permanente, el tema de la violencia política volvería a ocupar un lugar destacado en la agenda de los principales temas de interés. En esta misma línea, y aun cuando las encuestas referidas estaban restringidas a un espacio territorial en particular, la transversalidad del fenómeno de la violencia política bien podía situarse como un problema de alcance nacional. Se podría plantear como una hipótesis tentativa a este respecto que los porcentajes que otorgaban una relevancia al tema de la violencia en la capital tenderían a reproducirse en una escala similar en otros centros urbanos como, por ejemplo, la ciudad de Concepción.

En el Senado también se discutiría el candente tema de la violencia y su impacto dentro del espacio púbico por aquellos días. En la sesión del 6 de septiembre, diversos parlamentarios dieron a conocer sus puntos de vista sobre esta materia[377]. La discusión la abrió el ministro de Justicia, Jorge Tapia, quien fue convocado por esta cámara legislativa a efecto de que entregara la visión del Gobierno. El secretario de Estado señaló en primer término que el Ejecutivo hacía un esfuerzo «extraordinario y constante» para evitar cualquier tipo de enfrentamiento en el país, al tiempo que condenaba, siguiendo los lineamientos expresados por el propio Allende, a los sectores extremistas que buscaban generar una «guerra civil» en Chile. Al finalizar su intervención, Tapia recalcó que los últimos hechos de violencia registrados rompían el sentido de convivencia que existía en la nación.

Las palabras del ministro fueron contestadas por el senador del PN Francisco Bulnes Sanfuentes. En su intervención, el parlamentario sostuvo que era efectivo que el primer mandatario había hecho llamados en orden a no utilizar la violencia como método de acción política. Sin embargo, indicó Bulnes, su estilo «tan agresivo [y] tan belicoso» terminaba por azuzar los odios en diversos sectores políticos, incluyendo por supuesto sus propias bases militantes. Tras una

[377] Todas las intervenciones que se reproducen a continuación fueron obtenidas desde Senado, *Diario de sesiones,* 70.ª sesión, miércoles 6 de septiembre de 1972, pp. 3933-3950.

breve discusión por el orden de las intervenciones, habló el senador democratacristiano Patricio Aylwin. En su discurso, sostuvo que las palabras del ministro Tapia no se condecían con la realidad, pues en las últimas declaraciones del presidente de la república se había podido constatar un tono «verdaderamente sorprendente de amenaza» contra algunos sectores de la oposición. Frente a los calificativos de fascistas con que se acusaba a los partidos contrarios a la UP, Aylwin señaló que los verdaderos fascistas eran aquellos que introducían «el odio y la violencia en la vida nacional» y quienes actuaban con sectarismo y «espíritu totalitario». Al finalizar su intervención, el parlamentario dijo tener la convicción que el primer mandatario era el principal responsable por el clima de odios que vivía el país, al tiempo que el PS era el que «llevaba el pandero» en la práctica de sembrar la violencia en Chile.

El oficialismo no se quedaría atrás en sus respuestas. El senador del PC Jorge Montes advirtió que los temas de alto nivel que se discutían en esta cámara eran llevados «lamentablemente» al terreno de la contingencia política en el cual los parlamentarios de oposición sembraban la «cizaña» del «odio». El senador radical Alberto Baltra enfatizó, en tanto, en los factores que habían generado la violencia en el país en el último tiempo, siendo la infamia, la calumnia y el rechazo a un debate sereno y razonado algunas de sus principales causas. El senador de la Izquierda Cristiana, Rafael Agustín Gumucio, hizo un llamado a unirse para combatir a los grupos minoritarios de fanáticos que se creían dueños «de la vida y muerte de los habitantes del país». Tales grupos, según el parlamentario, estaban conectados a minorías de poder económico que, afectadas por las medidas que implementaba la UP, financiaban e impulsaban «acciones de carácter sedicioso y violento». Su intervención también describía una problemática que sobrevolaba desde hacía tiempo en la esfera pública referida al propósito manifiesto de algunos sectores en orden a provocar la caída del gobierno de la UP. Tal propósito, era algo que «se siente y se palpa» sentenciaba Gumucio.

En medio de la acalorada discusión, el senador nacional Víctor García Garzena informó sobre los incidentes que se estaban produciendo en el centro de la capital y que ya dejaban, a esa hora de la tarde, una víctima fatal, Mario Avilés Oyarce. Lejos de disminuir la intensidad de las intervenciones, estas mantuvieron el tono con-

frontacional. Se produjo así un áspero diálogo entre los senadores Aylwin y Chadwick —este último militante socialista— respecto a la responsabilidad que le cabía al primer mandatario en el origen de este tipo de sucesos. Para Aylwin, un presidente tenía la obligación de usar todos los medios a su alcance para apagar el fuego, sin embargo, Allende soplaba el fuelle para «avivar el fuego en la hoguera». Chadwick respondió que el presidente había asumido la responsabilidad de conducir el proceso político por la vía «constitucional y legal». Más adelante, otra discusión enfrascó de nuevo a Chadwick con el senador de la DC Narciso Irureta respecto a unos hechos producidos en la Asistencia Pública en que se acusaba a militantes socialistas de haber asaltado el recinto.

Una nota de cierta cordura la puso, al final debate, el senador democratacristiano Benjamín Prado, quien planteó una reflexión en términos más generales sobre la marcha del país. El parlamentario sostuvo, en efecto, que existía un contexto generalizado de confrontación que se unía a las altas expectativas de un sector de la población por los cambios en curso. Todo esto provocaba, por momentos, que el proceso estuviera fuera de control. A lo anterior se sumaba, según Prado, una dirección poco clara de parte del Gobierno de la UP respecto a las transformaciones que se llevaban a cabo.

Visto en su conjunto, la línea argumental expresada por la mayor parte de los senadores que intervinieron en el debate reseñado no pudo separarse de la coyuntura más inmediata que se vivía en el país. De este modo, la atmósfera que predominaría en dicha sesión se caracterizó por el despliegue de acusaciones cruzadas y desmentidos de distinta naturaleza respecto al origen de la violencia. Para la oposición existía claridad respecto a la responsabilidad del gobierno, y sobre todo del presidente Allende, en este tipo de hechos, acusando al primer mandatario de ser uno de los principales instigadores en la concreción de los mismos. En el oficialismo, en cambio, se rechazaría de plano tal aseveración imputando a ciertos sectores del empresariado y grupos de choque de la oposición la principal responsabilidad.

Bajo el contexto y debates referidos, la UP denunciaría ante la opinión pública la existencia del denominado Plan Septiembre. Ya a fines de agosto el PC había entregado los primeros antecedentes de esta operación cuyo objetivo central, según se dijo, no era otro que el derrocamiento del gobierno popular. En la materialización

del mismo, advertía esta colectividad, se había detectado la mano de la CIA en connivencia con diversos sectores de la oposición política y gremial del país[378]. El general Carlos Prats recuerda en sus memorias que por esos días circulaban fuertes rumores en las esferas del oficialismo respecto a que la extrema derecha estaba preparando una «asonada» en contra del gobierno. Según el alto oficial, en dicha maniobra participarían diversos jefes militares en alianza con el general Roberto Viaux quien entonces se encontraba detenido en la Penitenciaría por su implicancia en el crimen del general Schneider. Los hechos de mayor gravedad, apuntaba Prats, estarían determinados por una sucesión de «actos anónimos de violencia» que ejecutaría el FNPL y que justificarían una reacción militar golpista. A pesar de estos antecedentes, el general reconocía que ni los servicios de inteligencia ni la propia Policía de Investigaciones lograron encontrar una «pista concreta»[379].

La fuerza con que se divulgó la existencia del supuesto plan no eran en todo caso algo nuevo dentro de la trayectoria de la vía chilena al socialismo. En el mes de marzo de 1972, el oficialismo denunció la realización de una reunión de alto nivel entre los principales miembros de la oposición cuyo propósito fundamental habría sido, según se dijo, coordinar un plan operativo para poner fin a la UP. El convocante de dicha reunión fue el abogado Alejandro Silva Bascuñán quien invitó a diversas personalidades para conversar sobre la coyuntura política y social del país. Al encuentro asistieron el senador democratacristiano Patricio Aylwin, el presidente de la Corte Suprema, diversos dirigentes empresariales y figuras reconocidas de la derecha política como Jaime Guzmán Errázuriz. La prensa de izquierda, que bautizó el encuentro como el «complot del pastel de choclo» en referencia al plato principal con que fueron agasajados los invitados, no dudó en advertir los propósitos golpistas de dicho encuentro. Sin embargo, los concurrentes señalaron que su objetivo fue discutir diversos temas de interés nacional y en ningún caso planificar acciones de desestabilización. Con todo, una reunión de este tipo se prestaba para todo tipo de interpretaciones, haciendo emerger la sombra de un plan sedicioso que buscaba acabar con el proyecto de la UP.

378 Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, p. 212.
379 Prats, *op. cit.*, p. 288.

Desde ese ángulo se entendió la revelación del Plan Septiembre, es decir, como una maniobra digitada con el objetivo de derrocar al Gobierno de Allende. Por de pronto, la creciente confrontación política a propósito de las protestas de algunos gremios y sectores del estudiantado secundario daban cuenta de un clima de alta tensión social. A ello se sumaba la presión que desde el Parlamento ejercían democratacristianos y nacionales en contra de la mayor parte de la estructura gubernativa del Ejecutivo. En este contexto, si la oposición no había acordado tácitamente materializar un plan para desestabilizar a la UP, buena parte de sus acciones mostraban la existencia un propósito implícito que apuntaba en esa dirección. El dirigente del FNPL, Manuel Fuentes Wendling, reconoce en sus memorias que en los análisis estratégicos que el grupo hizo a mediados de 1972, la Comisión Política barajó la posibilidad de que surgiera un paro gremial contra el gobierno. «Teníamos información de que se gestaba un paro», apunta Fuentes, «...pero no sabíamos con certeza —o no se nos había informado— cuándo se iniciaría ni cómo se desencadenaría»[380].

A lo largo de septiembre, nuevos hechos de violencia y una seguidilla de acusaciones cruzadas entre la oposición y el gobierno provocaron que el tema sobre un plan de desestabilización se mantuviera vigente. El día 9, la CUT emitió una declaración en la que advertía que «un gran peligro» se cernía sobre el país. Para esta entidad, se trataba del «rostro tenebroso del fascismo» que buscaba crear las condiciones propicias para un golpe de Estado y el desencadenamiento de una guerra civil. Al mismo tiempo, el documento expresaba un enérgico rechazo al empleo de la violencia como método de acción política, condenando así cualquier salida «extralegal y golpista que se quier[a] dar a la situación del país»[381].

Salvador Allende fue más explícito todavía a la hora de denunciar el Plan Septiembre. En una declaración fechada a mediados de ese mes y distribuida entre diversos medios de comunicación, el primer mandatario sostuvo que uno de los motivos para suspender algunas marchas opositoras era la detección del mencionado plan. Este, que

[380] Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 151.

[381] "La CUT llama a parar la sedición fascista", *Puro Chile*, 9 de septiembre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 454 y 455.

comenzó con la movilización de los secundarios en el mes de agosto, tenía entre sus objetivos «paralizar al país promoviendo un conflicto en el gremio del rodado [camioneros]» alterando así la distribución de alimentos. Además de ello, los «grupos fascistas», según Allende, tenían pensado ejecutar diversas asonadas callejeras que se nutrirían del cuadro de polarización ya existente. Por último, el presidente recordó una serie de hechos de violencia ocurridos tiempo atrás, entre los cuales mencionó las muertes de los campesinos de Frutillar, a efecto de recalcar que su Gobierno estaba determinado a impedir que aquellos sucesos se repitieran[382].

En esos mismos días, la revista *Punto Final* sostuvo que las asonadas callejeras que se venían observando en las calles de la capital constituían la «culminación lógica» de un plan de mayor envergadura que no terminaba aún de cumplirse a cabalidad. En ese contexto; esta publicación insertó el tema de un pequeño grupo denominado PROTECO (Protección Comunal) que comenzaba a hacer noticia a raíz de sus acciones de violencia en los sectores acomodados de la capital. Se trataba de pequeñas unidades formadas al alero de las juntas de vecinos de ese sector, e integradas por civiles, cuyo propósito era brindar seguridad a los barrios. *Punto Final* comentaba que dicho grupo ya había realizado algunas acciones de fuerza en el sector, por ejemplo, en contra del funcionario de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) Helmut Stuven. Asimismo, se informaba que PROTECO utilizaba vehículos particulares, armas de fuego y sistemas de comunicación inalámbricas para coordinar sus acciones[383]. Ante este panorama, la revista dejaba entrever cierta pasividad en las autoridades del Ejecutivo, y de la UP en general, para con este tipo de agrupaciones.

Considerando el conjunto de referencias sobre el Plan Septiembre destacaban por su claridad y precisión las formulaciones realizadas

[382] "Tengo el deber de evitar desórdenes y provocaciones", *La Nación*, 15 de septiembre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 456 y 457.

[383] *Punto Final*, n.º 166, Santiago, martes 12 de septiembre de 1972, pp. 6-8. Un documento perteneciente a PROTECO, que fue reproducido por la revista *Time* en 1972, recomendaba a sus integrantes no derrochar ni ahorrar «indebidamente» las municiones concentrando los disparos en quienes dirigían a los grupos rivales o tenían las armas de mayor calibre. Como corolario de estas indicaciones, el documento llamaba a rodear a los enemigos «disparando sin piedad», en San Francisco, *op. cit.*, p. 613.

por el presidente Allende. Aun cuando no se conocieron documentos que probaran la existencia de dicho plan, las previsiones hechas por el primer mandatario fueron bastante exactas al predecir el complejo escenario que se abriría en octubre con la paralización de los camioneros. La óptica de *Punto Final*, en tanto, también podía atribuirse a una lectura correcta de la coyuntura política cuando señalaba, en su edición del 12 de septiembre, que el plan sedicioso orquestado por la oposición aún no se cumplía a cabalidad. Así, entre los meses de agosto y septiembre se respiraba una tensa atmósfera que parecía advertir la materialización de eventos trascendentales para el país. La lectura que se hizo desde la izquierda fue en general acertada, pues intuía, a veces con bastante precisión, que los hilos de la oposición más dura a la UP tejían un escenario de abierta confrontación social y política.

En este marco, las dinámicas que se comenzaron a estructurar marcarían un punto de inflexión —y de no retorno— dentro de la lucha política. Esto significaría, por ejemplo, que la oposición se nucleó cada vez más en torno a la idea de un término anticipado, y en el corto plazo, del gobierno de la UP. En sintonía con este tipo de propósitos, el periódico *El Mercurio* abordó, el 24 de septiembre, el tema de las Fuerzas Armadas, explicitando el papel que a estas les cabía en la actual coyuntura. En la sección La Semana Política, este medio planteó que no existían dudas de que los partidos marxistas pretendían cambiar a las Fuerzas Armadas por instituciones que estuvieran en consonancia con la ideología del régimen. Respecto a la tesis central que se deseaba exponer, el periódico sostuvo que mientras un gobierno no recibiera reproches de inconstitucionalidad de parte de otros poderes del Estado, la obediencia y prescindencia política de las Fuerzas Armadas no estaría en discusión. El problema surgiría, recalcaba *El Mercurio*, cuando la Constitución era sobrepasada tanto por acciones individuales como por la «virulencia de un proceso revolucionario» que tendía a destruir el orden vigente. Frente a ello el espíritu de lealtad a la Constitución que explicitaran las Fuerzas Armadas no podía ser utilizado para que estas se mantuvieran «inertes» mientras se violaban diversos principios de la Carta Fundamental. En su parte final, este medio sostenía que se podría llegar en el corto plazo a que las Fuerzas Armadas se constituyeran en el único ejemplo de «intachable constitucionalidad» frente

al «fermento corrosivo» que debilitaba las bases de la chilenidad[384].

Lo que de modo implícito estaba señalando *El Mercurio* no era otra cosa que el hecho de que los militares debían constituirse en un actor clave de la coyuntura política en virtud del complejo escenario que se vivía. Bajo este contexto, que avanzaría hacia una crisis generalizada según las previsiones del periódico, cobrarían relevancia aquellas instituciones que, como las Fuerzas Armadas, tenían la misión salvaguardar la Constitución y las leyes. Como se sabe, dicho razonamiento, que ya había sido esbozado por otros actores a inicios de 1972, comenzaría a cobrar mayor importancia conforme se fuera agudizando el conflicto social y político en Chile.

En los últimos días de septiembre se registraron nuevos hechos de violencia que por su naturaleza se conectaban a conflictos originados el mes anterior, aunque también hubo otros que presagiarían problemáticas futuras. El día 23, los estudiantes secundarios volvieron a ser protagonistas a raíz de la retoma en el Liceo n.º 12 de Niñas. En la madrugada de esa jornada un grupo de casi trescientos jóvenes, en su mayoría pertenecientes a las Juventudes Comunistas, se había trenzado en una dura pelea con los ocupantes del establecimiento, situación que dejó varios heridos y acusaciones cruzadas entre uno y otro sector[385]. La revista *Ercilla* informó que la acción de los brigadistas dejó como saldo una quincena de heridos y destrozos en el mobiliario y laboratorios del establecimiento[386]. Finalmente el local fue desalojado a fines de septiembre gracias a la intervención de Carabineros. Sin embargo, lejos de atenuar, el conflicto estudiantil mantendría su alto nivel de tensión ramificándose, inclusive, hasta las primeras semanas de octubre. Por cierto, que este tipo de sucesos tendía a mimetizarse dentro de la espesa niebla de la confrontación general que existía por aquel entonces.

El 26 de septiembre, en tanto, ocurrió un hecho que permite adelantar una reflexión sobre el nivel de confrontación que se comenzarían a vivir en el país en las siguientes semanas. En la ciudad de San Javier, ubicada a 300 km al sur de la capital, la CUT había

[384] "La doctrina del Ejército", 24 de septiembre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 461-464.

[385] Rojas Flores, *op. cit.*, p. 488.

[386] *Ercilla*, n.º 1941, Santiago, 27 de septiembre al 3 de octubre, p. 16.

convocado una importante concentración de respaldo al Gobierno. Desde ciudades y pueblos vecinos, en los que predominaban actividades agrícolas y ganaderas, cientos de manifestantes concurrieron al encuentro, el cual terminó sin incidentes. Uno de los participantes del acto era el obrero Pedro Toledo Tolosa de 22 años de edad, quien laboraba en la Arrocera Linares ubicada en ese mismo sector. En horas de la noche, el trabajador volvía a casa junto a otros acompañantes por una de las calles de la comuna de San Javier. De improviso, un camión que transitaba por el lugar arremetió en contra de los trabajadores atropellándolos sin mediar ninguna provocación[387]. Quien resultó más afectado fue Pedro Toledo al recibir de lleno el impacto del vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga[388]. La gravedad de las lesiones provocaría en pocos minutos la muerte del trabajador. Su certificado de defunción señala como causa del fallecimiento una hemorragia cerebral y fractura del cráneo fijando el deceso a las 21:45 horas[389].

Aunque pudo tratarse de un accidente de tránsito corriente, el atropello de Toledo y sus acompañantes encierra algunos elementos que le otorgan cierta complejidad. Desde luego, no fue tan solo una persona la que transitaba por la calle aquella noche sino un grupo más numerosos de trabajadores, cuestión que pondría en entredicho el argumento de que el chofer del camión no visualizó a la víctima. La prensa señaló, además, que el trabajador muerto portaba un vistoso lienzo de su lugar de trabajo con el cual había acudido a la concentración de la CUT. Esto hace suponer, con mayor razón, que el grupo en el que se encontraba la víctima era visible a simple vista. En última instancia, cabe precisar que el contexto en el cual se produjo la muerte de Toledo no era uno de quietud y tranquilidad política. Los conatos de agresión y enfrentamientos callejeros se habían vuelto semanales evidenciando una predisposición anímica, de

387 *La Nación*, Santiago, 28 de septiembre de 1972, p. 2.

388 En algunos medios de prensa escrita el conductor del camión fue identificado como Oscar Marcial Osses Valenzuela. Véase, *Las Últimas Noticias*, Santiago, 13 de octubre de 1972, p. 23.

389 "Certificado de defunción de Pedro Toledo Tolosa", San Javier, 26 de septiembre de 1972, n.º de inscripción 257, folio 15720944, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 26 de mayo de 2016].

parte de muchos militantes o simples civiles, en orden a involucrarse en este tipo de acciones. No se puede descartar, entonces, que en la muerte ocurrida en la comuna de San Javier intervinieran algunos de estos factores.

Adicionalmente, este suceso revierte otro significado. Desde un ángulo interpretativo, el atropello de este trabajador a manos de un transportista podría visualizarse como un dramático antecedente de lo que se observaría en el país a contar de mediados del mes de octubre. A partir de entonces, el gremio de los camioneros daría inicio a una larga huelga que casi paralizaría el país. Resultaba del todo evidente que esta movilización tenía un claro trasfondo político destinado a desestabilizar al gobierno erosionando así su legitimidad y capacidad operativa. Pero también este *lock out* revelaría la prepotencia e impulsividad de un gremio que sacaba sus camiones a la calle y ponía en jaque a todo un territorio. Bajo esta perspectiva, si el atropello del obrero en San Javier evidenciaba esa predisposición anímica para arremeter contra particulares, la paralización de octubre graficaría esa misma intencionalidad, pero ahora desde un ángulo más amplio y en pugna directa con el Estado y el Gobierno. En ambos casos, se trataba de vehículos de gran tamaño que situados en medio del conflicto político que se vivía podían, de un momento a otro, arrancar una vida o paralizar casi en su totalidad a un territorio. Se estaba *ad portas* de transitar hacia el periodo más denso y complejo de la vía chilena al socialismo.



Imagen n.º 4. Brigadistas paramilitares frente a La Moneda el 1 de mayo de 1973, fotografía de Armindo Cardoso. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

Tercera etapa: desde el paro de octubre a la antesala del golpe de Estado, octubre de 1972 a septiembre de 1973

Este periodo corresponde a los últimos once meses de existencia del proyecto de la UP, en el cual se desarrollarán un conjunto amplio, y complejo, de eventos sociales y políticos. La tendencia general observada es la de un cuadro abierto y permanente de confrontación articulado tanto en posiciones que buscan derrocar a Allende como con aquellas que impulsan su defensa. Dentro de este esquema, las diversas coyunturas que fluyen dentro del espacio público forman parte de un espectro denso de asedios y disputas que deberá enfrentar la vía chilena al socialismo. Los principales asedios que sufrirá el proyecto de izquierda tuvieron que ver con las acciones de fuerza que organizó la oposición y que buscaban desestabilizar al Ejecutivo hasta lograr su caída. Los principales eventos que responden a estos propósitos fueron las paralizaciones gremiales de octubre de 1972 y agosto de 1973. La primera de ellas, significó un impacto de consideración en la línea de flotación de la UP, situación que por poco no acabó en un naufragio total del Gobierno. La paralización de agosto de 1973, en tanto, fue una nueva versión de la huelga de octubre, aunque esta vez conectada a una multiplicidad más amplia de conflictos y en la que, además, diversos actores habían redefinido su parecer y lealtad al marco institucional. Dentro del campo de los asedios sufridos por la UP también se ubicaría la irrupción de los militares a través de dos sublevaciones, una de las cuales fracasará, el tanquetazo del 29 de junio, mientras que la otra, el golpe del 11 de septiembre, acabaría triunfando.

Por su parte, la principal disputa que debe enfrentar la UP en esta etapa —bajo un esquema de equilibrio de fuerzas políticas y sociales— fue la elección parlamentaria de marzo de 1973. Aunque esta no haya sido la única disputa electoral de los años de la vía chilena al socialismo, su significado e importancia histórica hacían de ella un evento trascendental. Para la oposición, que se encontraba

articulada desde julio de 1972 en la CODE, estos comicios representarían la instancia fundamental para derrotar a la UP. Tal objetivo, en todo caso, había sido explicitado más por la DC que por sus socios del PN. Dentro del oficialismo, las dos vertientes existentes coincidirían en que las elecciones parlamentarias serían decisivas para reforzar al Gobierno y quizás avizorar un desenlace de la lucha política en curso. Incluso desde colectividades como el MIR, que no participarían del proceso electoral, se tomó nota de la importancia de esta coyuntura y se procedió a apoyar a los candidatos del PS. Con todo, los resultados que arrojaron dichos comicios dejarían la confrontación político institucional en un punto muerto pues ninguno de los bloques en pugna pudo, a través del sistema, imponerse con claridad y hegemonizar el conjunto de las dinámicas en desarrollo.

Desde un ángulo amplio, los asedios afrontados por el Gobierno —y la izquierda en general— unidos a la respuesta que surgió desde este sector contribuyeron a configurar un escenario de altísima polarización y conflictividad social. Aun cuando la UP lograría en cierto modo sortear algunos de estos cercos —y revelarse en marzo de 1973 como una fuerza todavía poderosa— el desgaste sufrido y la incapacidad para controlar la totalidad del cuadro político se haría cada vez más evidente. Extrapolando la frase con que Raymond Cartier explicaba la sensación ambiente que reinaba en Alemania durante 1943, podría decirse que, a lo largo de esta tercera etapa, y sobre todo desde 1973, la UP ya no luchaba para vencer, sino que lo hacía para no ser vencida[390].

En este contexto, los hechos de violencia política tendrían de nuevo una importancia de primer orden. Al igual que en las etapas anteriores, estos eventos se conectarían rápidamente a los contextos y discusiones generales que discurrían dentro del espacio público. Y como ya había ocurrido con anterioridad, la materialización de esos hechos fue atendida e interpretada de acuerdo a las visiones estratégicas que predominaban dentro de cada actor político. De esta manera, si alguna víctima fatal pertenecía a la izquierda, las acusaciones se dirigirían en contra de la «oposición reaccionaria» que buscaba sembrar el caos y el desgobierno a través de la violencia. En sentido contrario, las acusaciones vertidas por la oposición en contra

[390] Raymond Cartier, *La Segunda Guerra Mundial*, tomo II.

de la izquierda enfatizaron la existencia de un proceso encaminado hacia el totalitarismo y en el cual actuaban diversos grupos y milicias armadas. Como es de suponer, los enfrentamientos callejeros, desórdenes y otros hechos de violencia política de estos meses fueron procesados bajo estos mismos repertorios discursivos.

Con seguridad una de las características más destacadas del fenómeno de la violencia política en esta etapa fue su marcada periodicidad. Así, por ejemplo, las muertes ocurridas bajo este contexto se extendieron a lo largo de los meses con una regularidad de aproximadamente quince días. Además, en la mayor parte de los casos las muertes fueron precedidas o estuvieron vinculadas a escenarios de enfrentamiento —callejero y rural— entre grupos o individuos rivales. Bajo este marco, las armas de fuego volvieron a ocupar un lugar preponderante en la materialización de estos hechos, no siendo atribuible su uso a un movimiento o agrupación política en particular. En algunos enfrentamientos callejeros también fue común el uso de cadenas, palos, garrotes de gran tamaño, linchacos —manejados sobre todo por militantes del FNPL— y piedras de distintos tamaños.

Cabe mencionar otro elemento característico de esta etapa en relación a los hechos de violencia. A diferencia de los años anteriores, el factor militar irrumpirá como un actor protagónico en la materialización de algunos de estos eventos. Dicha participación será posible de advertir a través de tres vías. La primera de ellas sería en el marco del cumplimiento de medidas legales que implicaron poner en manos de los cuerpos uniformados el control del orden público. Tal situación, significó que los militares debieron controlar la circulación de personas, el cumplimiento de los «toque de queda» y en general que existiera normalidad en los territorios bajo su jurisdicción. Pero como los estados de emergencia no siempre fueron respetados, menos aún en el contexto de polarización existente, algunas patrullas militares se vieron enfrascadas en diversos incidentes con civiles, siendo la utilización de armamento por parte de los primeros uno de sus rasgos distintivos. Ello generó la muerte de diversas personas que, según las informaciones que emergieron entonces, hicieron caso omiso a las órdenes de los militares respecto a cuestiones puntuales —detener el vehículo o mostrar identificación, por ejemplo—. En un marco de competencias similar al anterior se ubicaría la participación de los militares en algunos allanamientos a centros fabriles en virtud

de la aplicación de la Ley de Control de Armas aprobada en octubre de 1972. Dicha legislación, otorgaba a las Fuerzas Armadas amplias atribuciones para su ejecución, cuestión que no pasaría inadvertida para los actores del periodo. De hecho, uno de sus resultados más polémicos fue la materialización de diversos incidentes en que el actuar de los militares se saldó con la muerte de algún trabajador.

Una segunda vía de participación del elemento militar en hechos de violencia política estuvo determinada por los intentos de sublevación que se llevaron a cabo. En este caso en particular, el hecho paradigmático fue la asonada del Regimiento de Blindados n.º 2 el día 29 de junio. Tal maniobra, que fracasó a las pocas horas de iniciada, dejó en su asedio al Palacio de La Moneda un saldo de varios civiles y uniformados muertos. La tercera forma en que los militares se involucraron en eventos de violencia fue a partir de su colaboración logística en acciones de terrorismo. El objetivo era contribuir a la creación de condiciones de caos y desgobierno para de ese modo abrir paso a un golpe de Estado. Tal participación ha sido confirmada, entre otros, por el entonces dirigente de Patria y Libertad Roberto Thieme. Este reconoció hace ya varios años que la Armada de Chile le entregó al grupo nacionalista información precisa sobre la ubicación de oleoductos y líneas férreas que se debían destruir mediante la acción de explosivos[391]. Este punto sería confirmado por el también dirigente frentepatrista, Manuel Fuentes Wendling, a fines de los años noventa[392].

Como se puede ver, la participación del elemento militar dentro de la coyuntura sociopolítica y en algunos hechos de violencia trasuntaría una indiscutida relevancia. En ese marco, la imparcialidad y prescindencia política de las Fuerzas Armadas se haría cada vez más borrosa dada su presencia contingente en gran parte de los debates y discusiones que tenían lugar. Dentro de este escenario se observará también la muerte de algunos uniformados. El caso de mayor

[391] Declaraciones publicadas por revista *Ercilla* el año 2000, en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 394.

[392] En sus memorias, el dirigente recuerda: «Los representantes navales [...] plantearon el tema de fondo: pidieron que Patria y Libertad, en la medida que le fuese posible a su gente, contribuyera a mantener cortadas las vías ferroviarias, carreteras y oleoductos en los puntos que la Armada indicaría oportunamente». Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 297.

resonancia fue el del edecán naval del presidente Allende, capitán Arturo Araya, asesinado en la madrugada del día 27 de julio por un comando de extrema derecha. Aunque de menor graduación jerárquica y proveniente de otra rama de las Fuerzas Armadas, el homicidio del subteniente de la Escuela Militar Héctor Lacrampette también resonaría de forma importante en la opinión pública a fines de agosto.

La actuación de las Fuerzas Armadas en los hechos de violencia política durante esta tercera etapa no sería, en todo caso, comparable al protagonismo que siguió teniendo el elemento civil. Esto último se manifestará desde diversos ángulos y bajo dinámicas tanto espontáneas como planificadas. A lo largo de estos meses, se podrá advertir que el número de civiles involucrados en acciones de violencia política es superior al de los militares.

Ahora bien, lo que se indicó arriba, en orden a que el elemento militar irrumpía con mayor importancia en algunos eventos, adquiere materialidad en ciertas fases como, por ejemplo, aquella que va de octubre a diciembre de 1972. De las seis muertes registradas en estos meses, la mitad se explicarían por la acción de patrullas militares que se encontraban resguardando el orden público en distintos puntos del país. Dichos incidentes contribuirían a ensombrecer un poco más el ya complejo cuadro de tensión que se había estructurado a propósito de la paralización gremial. En este período también ocurrió la muerte del primer militante de Patria y Libertad a fines de diciembre, situación que impactaría fuertemente en el grupo nacionalista.

En los meses de enero y febrero de 1973 el ambiente que predomina y hegemoniza gran parte de los discursos públicos se refiere a los comicios parlamentarios de inicios de marzo. Se trató de un periodo preelectoral que hizo fluir hacia la calle a diversos grupos de brigadistas que buscaron asentar la presencia de sus respectivos candidatos. En ese marco, los hechos de violencia política no tardarían en aparecer. Aunque se trataba de una etapa signada por una confrontación institucional, el clima de polarización no bajó en intensidad y los discursos estratégicos de los principales actores mantuvieron importantes cuotas de rupturismo e intransigencia. De los diversos hechos de violencia que ocurrieron a lo largo de estos dos meses de campaña, resaltaría el caso de un joven obrero que fue muerto a golpes en el sur del país mientras entonaba una canción a favor de la UP.

Tras el término de la campaña preelectoral se advino un periodo de conflictividad que se extendería entre marzo y mayo de 1973. En este, el predominio de los hechos de violencia siguió estando en los espacios urbanos, lugar donde se produciría la muerte de siete civiles, uno de los cuales fallecería en un confuso incidente con Carabineros. En este periodo se observa también una dinámica que se asentaría de forma casi definitiva y periódica en las grandes ciudades, esto es, desórdenes y enfrentamientos callejeros entre distintos grupos rivales. En esta misma línea se aprecia un incremento más sostenido de las ocupaciones al interior de fábricas y complejos industriales en general. Dicho proceso se materializó, según los énfasis de los sectores obreros que las llevaron a cabo, como una forma de apoyar al gobierno de la UP.

Desde el mes de junio y hasta la antesala del golpe de Estado se conformó un complejo periodo de confrontación y violencia política en el país. Con seguridad se trataría de la fase más densa y difícil de toda la UP pues ella concentra hechos de fuerte impacto social y político, además de reunir el mayor número de víctimas mortales. En efecto, fueron casi veinticinco los civiles que fallecieron en distintas circunstancias durante estos meses, cifra a la cual habría que agregar, para completar el cuadro estadístico, los seis soldados que murieron en la sublevación del Regimiento Blindado n.º 2.

En las primeras semanas de esta fase, los principales hechos de violencia remitieron a espacios urbanos, situación que tendería a modificarse, aunque de modo leve, en los meses de julio y agosto que registrarán algunos eventos ocurridos en zonas rurales. Todos estos eventos, sin duda, correspondían a solo una de las tantas expresiones de conflictividad política y social que se desarrollaban en esos meses. Hacia agosto, la totalidad de la oposición a la UP lanzaría una ofensiva en contra del Gobierno buscando, ya sin ambages, su caída final. El telón de fondo es un conflicto de dimensiones estructurales que resulta muy difícil de conducir y manejar para un único actor. No obstante la magnitud de estas fuerzas subterráneas, la oposición muestra mayor coordinación al tejer los hilos de la trama que sentenciará el final de la UP. La izquierda, por su parte, naufragaba en un mar de recriminaciones mutuas y acciones que no le permitían cohesionar una dirección única entre el movimiento social y los grupos dirigentes. El 11 de septiembre sentenciaría una

cuestión que era del todo evidente ya antes de esa fecha: la izquierda y el proyecto histórico de la Unidad Popular estaban agónicos.

El paro de octubre y sus consecuencias, octubre a diciembre de 1972

Los discursos y situaciones que asomaron en los primeros días de octubre dejaban entrever el advenimiento de una etapa densa de confrontación social y política en el país. Gran parte de estos incidentes, cuando no la totalidad de los mismos, estaban vinculados a una cadena de hechos que se arrastraba desde hacía semanas y que desde el oficialismo se habían denunciado como parte de un plan sedicioso que buscaba acabar con el Gobierno. La capital fue testigo los días 2 y 3 de octubre de sendos incidentes que reflejaban buena parte de ese clima de tensión.

Los hechos del día 2 se produjeron en calle Teatinos en el marco de una manifestación de apoyo a Radio Agricultura, evento que terminó con un ataque a la sede del PC ubicada en ese mismo lugar[393]. Al día siguiente fue el turno de los estudiantes secundarios. Como se recordará, este tipo de incidentes se venía registrando desde el mes de agosto, siendo una de sus causas, según comentó la dirigencia de la FESES, el rechazo a la designación de las autoridades en algunos liceos. Tras varias semanas de tiras y aflojas, y mediados por un conflicto interno entre partidarios y opositores al gobierno, la directiva de la FESES convocó a un paro para el día 3 de octubre. Según Jorge Rojas, esta movilización fue más violenta que las anteriores, dado que abundaron las barricadas y enfrentamientos con piedras entre distintos grupos[394]. La recopilación de prensa de Manuel Salazar apunta a que en horas de la noche los incidentes se concentraron en el sector de Providencia, lugar en que los manifestantes levantaron barricadas e incendiaron un local de la cadena de confiterías Coppelia[395]. Una vocal de la FESES, y militante del PC, no tardó en advertir lo que a su juicio eran las sintomáticas conexiones entre

393 Salazar, M., *op. cit.*, p. 247.
394 Rojas Flores, *op. cit.*, p. 488.
395 Salazar, M., *op. cit.*, p. 247.

las marchas secundarias a que convocaba la directiva nacional y las movilizaciones gremiales y partidistas realizadas por la oposición. Así había sucedido, según este testimonio, en 1971 en el marco de la marcha de las cacerolas vacías, y en abril y agosto de 1972 cuando se convocara a la marcha de la democracia y al paro de los comerciantes respectivamente. El paro del día 3 de octubre coincidió, sentenció la dirigente, con el ataque a la sede del PC ocurrido hacía menos de 24 horas[396].

La movilización de trabajadores también repercutiría en la creación de un ambiente de mayor crispación. En octubre de 1972 se apreciaba la existencia de una tensión no menor entre sectores del proletariado y los grupos dirigentes de la izquierda chilena. Dicho conflicto estaba determinado porque los propósitos de algunos trabajadores en orden a incrementar las ocupaciones de fábricas para pasarlas así al Área de Propiedad Social chocaban con los objetivos del propio Gobierno. Para este último, el proceso de requisiciones debía ajustarse a un protocolo específico, además de ser coordinando por los organismos estipulados para tales fines. Sin embargo, la dinámica de los acontecimientos desbordaría la capacidad de coordinación del Ejecutivo. Lo que estos hechos reflejaban, en el fondo, era la existencia de un dilema clave en el seno del proceso político. Tal disyuntiva radicaba en saber, como indica Peter Winn, si la vía chilena al socialismo iba a ser una revolución materializada por los trabajadores, o bien, lo sería para los trabajadores, lo cual significaba una relación de subordinación ante la dirigencia y el aparato estatal.

En este marco de tensiones no resueltas surgieron innumerables conflictos al interior de diversas empresas e industrias. Para caracterizar algunos de ellos dentro de este espacio temporal, se puede señalar, por ejemplo, el incidente producido en la Fábrica Carrascal el día 7 de octubre. Esta unidad, que pertenecía al grupo industrial Hoescht dedicado al ámbito químico, había sido ocupada por sus trabajadores con el objetivo de que pasara al área social de la economía. Sin embargo, sus propietarios recurrieron a la Justicia, la que ordenó que esta fuese devuelta. Ello se materializó, según Franck Gaudichaud, a través de la intervención de Carabineros que desalojó

[396] Testimonio en Rojas Flores, *op. cit.*, p. 489.

el recinto en la fecha indicada arriba[397]. Dentro de este contexto se puede situar también la breve toma de las oficinas del Ministerio del Trabajo por parte de obreros de la construcción, hecho ocurrido el día 10 de octubre. Los ocupantes, que pertenecían en su mayoría al Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) fueron desalojados a las pocas horas por Carabineros, produciéndose violentos incidentes en el lugar[398].

En medio de estos hechos, comenzaron a asomar las primeras señales concretas del paro de los transportistas. Como se recordará, a lo largo del mes de septiembre la izquierda denunció la existencia de un plan secreto —bajo la forma de una paralización de alcance nacional— que tendría como propósito desestabilizar al gobierno hasta lograr su caída. El propio presidente Allende había advertido, con bastante exactitud, que dicha maniobra intentaría desencadenar un conflicto entre el Estado y el gremio de los camioneros. Sin embargo, hasta mediados de septiembre no se había observado una movilización que hiciera pensar que el tan temido plan se estaba concretando. Ni siquiera el violento paro secundario del 3 de octubre podía considerarse como una amenaza de magnitud para la UP. Con todo, seguía sobrevolando en el ambiente la sensación de que se estaba *ad portas* de un conflicto mayúsculo.

Dos documentos que enlazaron los meses señalados arriba fueron indicativos de este clima. El día 29 de septiembre, los más importantes gremios empresariales del país dirigieron una carta al presidente Allende a objeto de manifestar su inquietud por las decisiones que se estaban tomando respecto a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Según la misiva, los bajos reajustes dictaminados por el gobierno hacia esta empresa contrastaban con el incremento del valor de sus insumos que bordeaban el 100 %. Esto provocaría una asfixia económica para la compañía que auguraba, según se dijo, su inviabilidad en el corto plazo. La preocupación de los gremios firmantes, entre los que se contaban los transportistas, medianos y grandes empresarios y el comercio detallista entre otros, radicaba en que sus fuentes de trabajo se verían amenazadas si la Papelera no podía seguir abasteciéndolos. Ante esta «dramática situación», los

397 Gaudichaud, *Chile...*, *op. cit.*, p. 186.
398 Salazar, M., *op. cit.*, p. 249.

gremios fijaban un plazo límite para que el gobierno resolviera el conflicto. De no alcanzarse dicha solución, manifestaba la misiva, los dirigentes gremiales veían muy difícil poder evitar que las bases a las cuales representaban mantuvieran su tranquilidad actual[399]. A todas luces, la carta era un instrumento de presión dirigido a la autoridad para que esta rectificara las medidas económicas que había tomado con respecto a la compañía de papeles. Si ello no se materializaba de forma rápida, argüían los dirigentes, se produciría un movimiento de alcance nacional imposible de controlar. Lo que dicha misiva dibujaba con notable claridad era la comunión de intereses que se había estructurado entre los gremios empresariales del país a efecto de confrontar a la vía chilena al socialismo.

El segundo documento fue todavía más lejos que el anterior en sus propósitos y objetivos estratégicos. Se trató de un llamado realizado, el 8 de octubre, por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Jorge Fontaine, a los «hombres libres» del país. En la declaración, reproducida *in extenso* por *El Mercurio*, el dirigente gremial expresó:

> Para la aplastante mayoría de la nación no existe duda alguna que nos encontramos frente a una ofensiva destinada a reemplazar el sistema democrático por una dictadura [...] Esta ofensiva a las libertades públicas es conocida de todos y cada día se aprecia cómo se va estrechando el círculo. Frente a este cuadro tan claro, ¿qué hacemos los hombres amantes de la libertad en nuestro país? [...] Hoy día la desacertada política que se lleva a cabo no sólo está estrangulando la comunidad nacional, sino que nos conduce a un peligroso nivel de dependencia extranjera, con grave riesgo de la soberanía. Es por ello que planteo la urgente necesidad de: Unir todas las organizaciones chilenas capaces de enfrentar la marea totalitaria, dejar de lado el egoísmo, el individualismo, las actitudes cómodas y salir virilmente en la defensa de la libertad y la ley en cada oportunidad y en cada lugar en que ellas sean amagadas[400].

399 "Excelentísimo señor Presidente", *Tribuna*, 2 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 465-466.

400 "Llamado a los hombres libres", *El Mercurio*, 9 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 471-473.

El llamado de Fontaine resultaba notable porque exponía dos puntos de la mayor trascendencia. El primero de ellos venía a resaltar el valor de la unidad como requisito fundamental para confrontar con éxito a la UP. Ello pasaba por deponer las diferencias existentes entre los actores de la oposición y transitar hacia lo que denominó como el Gran Comando de la Libertad. El segundo elemento importante radicaba en que el llamado se dirigía específicamente hacia el segmento masculino del país, recordándole a este que no podía seguir escondiéndose «tras el coraje de las mujeres y el luminoso idealismo de los jóvenes». En el marco de los patrones culturales dominantes por aquel entonces, el llamado de Fontaine venía a reforzar un estereotipo según el cual resultaba mal visto que los hombres se refugiaran detrás de una mujer y, en este caso en particular, no asumieran un papel más protagónico en la lucha en contra de la UP. De hecho, en uno de los párrafos de la declaración, el dirigente preguntaba a los hombres si creían que cumplían con su verdadero deber al dejar que solo las mujeres y los jóvenes protestaran con mayor decisión.

Aunque las declaraciones citadas dejaban entrever que los dirigentes gremiales no controlaban la totalidad de sus bases, y que más aún hacían llamados a ciertos segmentos de la población para que se sumaran de forma espontánea a la lucha, lo cierto es que su rol fue clave en la materialización de esta coyuntura. El entonces presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Orlando Sáenz, recuerda que ante la situación política que vivía el país en el segundo semestre de 1972 a los gremios no les quedó otra salida que la «movilización social». Tal diagnóstico avanzaría hacia medidas más concretas, gestándose así «la idea del gran paro de octubre». El dirigente reconoce, en este sentido, que la puesta en marcha de una paralización de esta magnitud implicaba una preparación logística y humana de considerable tamaño: «vías de escondite, transporte... campaña de lanzamiento, soporte publicitario y sistema de transmisión de instrucciones»[401].

Así y bajo el impulso decidido de los dirigentes gremiales se inició, el día 9 de octubre, la paralización de los camioneros. El antecedente que gatilló el conflicto fue, según se dijo, la decisión del Ejecutivo en orden a establecer una compañía estatal de transportes en la provincia

[401] Orlando Sáenz, *Testigo privilegiado*, pp. 94-96.

de Aysén, ubicada en el extremo sur del país. Tal situación desencadenó la protesta de los camioneros de la zona que paralizaron sus actividades. En señal de solidaridad con aquellos, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que agrupaba a más de doce mil transportistas en la zona centro sur del país, declararía un paro indefinido. El máximo dirigente de esta organización, León Vilarín Marín, sostuvo que la paralización emergía tras no haber logrado una solución justa de parte de las autoridades respecto al problema suscitado en Aysén. Al mismo tiempo, el dirigente gremial recalcó que la movilización tendría un carácter pacífico, por lo que hacía un llamado a los camioneros en huelga a no obstruir los caminos y evitar problemas con la autoridad. La declaración finalizaba señalando que los dirigentes no perdían la esperanza de que el Gobierno solucionara los problemas que aquejaban al gremio del transporte[402].

Aunque se trataba de una declaración que explicitaba buenas intenciones, en la práctica el gremio transportista asumió una postura intransigente y cerrada, contribuyendo a polarizar el ambiente político en el país. Como era de suponer, esta paralización permitió, además, cohesionar a toda la oposición detrás de una postura de rechazo enérgico al gobierno de la UP. Tal perspectiva significaba participar de una opción que tenía como horizonte estratégico la cancelación anticipada del proyecto socialista, o al menos, un significativo cambio de rumbo que implicara desechar las líneas matrices del mismo. A pesar de que podían existir criterios o diferencias tácticas en la concreción de tales propósitos, los actores que asumieron este planteamiento compartían su formulación esencial.

Al día siguiente del inicio de la paralización se produjo una sintomática manifestación pública que reunió en el centro de la capital a diversas personalidades de la oposición. El acto, que congregó a decenas de miles de personas, tuvo como objetivo protestar por la «incapacidad, sectarismo y prepotencia del Gobierno» al que acusaron de ser responsable del «caos» y la «violencia» que amenazaba la libertad de expresión. Los principales oradores del encuentro sintetizaron notablemente el momento de comunión por el que atravesaba la oposición. Desfilaron por el escenario principal per-

[402] "Doce mil dueños de camiones inician un paro indefinido", *La Prensa*, 10 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 474-475.

sonalidades como la periodista Patricia Guzmán, el dirigente de la papelera, José Castillo, el abogado de la Democracia Radical, Jorge Ovalle, el dirigente democratacristiano de la CUT, Ernesto Vogel, el senador de la Izquierda Radical, Alberto Baltra y el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Eduardo Cerda[403]. Respecto a este llamativo clima de cohesión opositora, el general Carlos Prats recuerda en sus memorias un hecho destacado. Según su relato, el día 12 de octubre se desató en Santiago una «sincronizada» campaña comunicacional a través de las principales radios opositoras. A través de ella, indica el alto oficial, se apoyaba la paralización gremial de los camioneros, al tiempo que se incitaba a la ciudadanía para que prestase su solidaridad y adhiriera a la huelga[404].

A los pocos días, el paro de los camioneros alcanzaba dimensiones preocupantes. Las principales carreteras del país fueron copadas por miles de vehículos que ya no prestaban sus servicios habituales, impactando con ello en la distribución y circulación de mercaderías. A lo anterior se sumaría el cierre del comercio en algunas de las principales ciudades del país[405]. También emergería el apoyo de distintos gremios y colegios profesionales a la huelga, imprimiéndole a la paralización un carácter de alcance nacional[406]. La magnitud de estos hechos llevó al gobierno a decretar, el 12 de octubre, el estado de emergencia para doce provincias de la zona centro sur del país, las cuales quedaron encabezadas por una autoridad militar designada para estos fines. Asimismo, se señaló que el abastecimiento de combustible se había logrado restablecer con cierta normalidad, aunque

[403] "Masiva protesta de la oposición", *La Tercera*, 11 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 475-476.

[404] Prats, *op. cit.*, p. 299.

[405] Al día 12 de octubre el cierre del comercio detallista en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar —distantes a unos 120 kilómetros de Santiago— alcanzaba cerca del 85 %. En Concepción, en tanto, la cifra era casi exacta para este mismo tipo de comercio, mientras que respecto a la locomoción colectiva el porcentaje de paralización llegaba al 50 %. "Valparaíso: 80 % Viña del Mar: 90 %", *La Estrella*, 13 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 481-482.

[406] El 16 de octubre, por ejemplo, el Colegio de Abogados hizo pública una declaración en la cual, además de respaldar las reivindicaciones del gremio transportista, acusaba al gobierno de cometer «innumerables violaciones constitucionales y legales» minando «las bases esenciales de nuestro sistema de derecho». "Declaración del Consejo General del Colegio de Abogados", *El Mercurio*, 17 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 489-490.

tendrían preferencia para repostar aquellos vehículos de emergencia y de servicios vitales[407].

De forma coincidente a la declaración del estado de emergencia, el presidente Allende se dirigió al país por cadena nacional de radio y televisión. Este inició sus palabras manifestando su «amargura» e «inquietud» por la situación social y política que se vivía, pues a su juicio ciertos sectores del país estaban encaminados a crear dificultades que podrían llevar al país a un «enfrentamiento». Enseguida, el mandatario denunciaría el carácter político e ilegal del paro de los transportistas, gremio con el cual, según enfatizó, se había alcanzado un acuerdo hacía poco más de veinte días. La difícil situación por la que atravesaba el país debió ser reconocida por el primer mandatario, quien señaló algunas de las «dificultades increíbles» que existían para el abastecimiento de alimentos, gas licuado o bencina. Por otra parte, destacó que los propósitos de desestabilización y paralización general del país no se alcanzarían debido a la actitud de los trabajadores y empleados públicos que eran conscientes del momento crítico que se vivía. Al finalizar, el presidente enfatizó en que su gobierno dispondría de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para sortear el conflicto, haciendo especial hincapié en el rol que tendrían las Fuerzas Armadas[408].

A la noche siguiente, Allende volvería a dirigirse al país a través de una nueva cadena de radio y televisión. El propósito fundamental fue corroborar algunas ideas señaladas el día anterior. En primer término, destacó que los cabecillas del paro de camioneros se encontraban detenidos por orden judicial, lo cual confirmaba que la huelga tenía una intencionalidad política. De igual forma, el primer mandatario aportó algunas cifras de la paralización enfatizando que, por ejemplo, la locomoción colectiva y la producción de bencina funcionaban con cierta normalidad. El comercio detallista, en tanto, había funcionado en torno a un 35 %, cifra que pudo haber sido más alta de no mediar algunas amenazas que se hicieron en ciertos barrios de la capital. Al cierre de su alocución, el presidente sostuvo

[407] "Jefes de FF.AA. asumieron control de doce provincias", *La Tercera*, 13 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 477-478.

[408] "Llamó a la cordura y a la reflexión", *Las Noticias de Última Hora*, 13 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 479-480.

que el Gobierno aceptaría como último recurso la mediación de los dirigentes de los buses y taxibuses, la que de no prosperar en las próximas 24 horas implicaría la adopción de otro tipo de medidas; «camión que sea requisado desde mañana, no será devuelto a su propietario», sentenció[409].

De las palabras del primer mandatario se deducía que el clima político había alcanzado en pocos días altas cuotas de polarización. La huelga gremial se encontraba en una fase ascendente y con visos de legitimidad para un porcentaje importante de la población. A menos de 72 horas de iniciado el *lock out* surgirían problemas más graves de desabastecimiento y circulación de mercaderías, todo lo cual se vería recrudecido por la adhesión de otros sectores gremiales como el del comercio detallista. De este modo, el problema no era tan solo sortear los obstáculos de una paralización que frenaba la circulación de mercaderías, sino además hacerlas llegar hasta el consumidor a través de unos canales de distribución que también se levantaban en contra del gobierno. El cuadro de polarización descrito se completaba —y ensanchaba— con una serie de incidentes que se fueron produciendo día a día mientras duró la huelga. Así, por ejemplo, el 15 de octubre fue clausurada Radio Nuevo Mundo por violar las disposiciones contenidas en la declaración de estado de emergencia, según la cual no se podían difundir noticias de carácter político respecto a la paralización gremial[410]. Aunque se trataba de una disposición ajustada a la legislación vigente, su materialización contribuía a acrecentar la sensación de confrontación entre los actores. Como es de suponer, una decisión de este tipo se leía, desde la vereda opositora, como un ejemplo más de los objetivos «totalitarios» del régimen socialista que buscaba cercenar la libertad. En tránsito hacia su segunda semana de duración, el clima de confrontación abierto por la huelga de los camioneros era altamente polarizado.

Desde la izquierda se hicieron distintos diagnósticos y lecturas sobre el difícil momento que se vivía, aunque en primer término se explicitaron algunos puntos a nivel de coalición. El día 13 de octu-

[409] "Allende: 'Mediación es el último paso'", *El Mercurio*, 14 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 484-485.

[410] "Clausurada Radio Nuevo Mundo", *La Tercera*, 16 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 488-489.

bre se dio a conocer una declaración conjunta de la UP en la cual se concordaba con los lineamientos sugeridos por el presidente Allende en sus recientes alocuciones. Esto significaba recalcar aquella idea según la cual el paro de los camioneros no era un movimiento gremial, sino que escondía un claro propósito político. En esa línea, las responsabilidades por la materialización del paro se dirigían hacia los sectores reaccionarios que habían explicitado su estrategia de resistencia civil al Gobierno. Además, el documento señalaba que esta huelga resultaba coincidente con las agresiones externas que sufría el país a manos de las corporaciones trasnacionales que se vieron afectadas tras la nacionalización del cobre en 1971[411].

Con el correr de los días, los partidos de la UP darían a conocer sus impresiones particulares sobre la difícil coyuntura que afrontaban. El 17 de octubre lo hizo el PC a través de una declaración de su Comisión Política. En ella, se recalcó que el paro constituía una movilización de carácter sedicioso, la cual buscaba crear las condiciones necesarias para que se produjera un golpe de Estado. El llamado fundamental que hacía este partido era a evitar el enfrentamiento y la guerra civil, realidad que parecía no tan lejana en atención al tenor que iba asumiendo el conflicto. Estas posturas, además de alinearse con el diagnóstico que expusiera el propio Allende, suponían que la solución al conflicto pasaba por una salida de corte institucional. Ello significaba que se emplearían todos los recursos legales y administrativos que estuvieran a disposición del Ejecutivo. Igualmente se hacía un llamado a la clase trabajadora y profesional para que continuaran en sus puestos de trabajo a fin de mantener en funcionamiento al país[412].

Este último llamado alcanzaría una resonancia importante en diversos segmentos de la clase obrera y popular del país, además de sectores universitarios y juventud en general que adherían sin reservas a la UP. Esto permitió, en la práctica, mantener funcionando la estructura productiva del país y los canales de distribución, toda vez que dichos grupos tomaron en sus manos la ejecución de este

[411] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 238. Un énfasis similar se encuentra en el editorial del diario *Las Noticias de Última Hora:* "Ante el desafío del fascismo" *Las Noticias de Última Hora*, 13 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 476-477.

[412] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 238-239.

tipo de tareas. Un ejemplo de lo anterior fue el rol que asumieron los trabajadores de tres empresas claves del Estado —Comercio Agrícola, Distribuidora Nacional y Ferrocarriles— que manifestaron, el 17 de octubre, sus propósitos de redoblar su trabajo en virtud de la situación por la que atravesaba el país[413].

Desde el PS, en tanto, se compartía ciertos matices de la declaración comunista, sobre todo en lo referente al carácter sedicioso y reaccionario del paro. Sin embargo, las vías de solución propuestas por el PS diferían en lo fundamental de las declaradas por su socio de coalición. En un documento publicado el día 20 de octubre, esta colectividad caracterizó el momento político, y el de mediano plazo, como una etapa de duros enfrentamientos donde no cabría otra estrategia más que resolver el tema del poder. Esto significaba, en la práctica, fortalecer las organizaciones populares y de trabajadores a efecto de que estas concentraran en sus propias manos el poder necesario para contrarrestar las acciones de la reacción y la burguesía chilena. Bajo la óptica del PS, la salida institucional que se pregonaba por parte de otros actores no resolvería ninguna de las problemáticas más acuciantes, sino más bien las dejaría en un punto muerto[414].

Para el MAPU, la paralización de octubre dejaba en evidencia las conexiones entre el imperialismo norteamericano y los sectores de la reacción chilena que se habían alzado en contra del Gobierno. Al igual que el PS, aunque de modo más vago según Luis Corvalán Marquéz, este movimiento recalcó que la solución a la crisis pasaba por fortalecer y desarrollar el poder del pueblo en tanto instancia extraestatal. El PR, más afín a las concepciones estratégicas de Allende, apoyaría una solución institucional a la crisis[415].

Desde fuera de la UP, el MIR emitiría una declaración que tocaba puntos sensibles para el conjunto de la izquierda chilena. El documento, dado a conocer el 19 de octubre, partía señalando que la extensión de la huelga patronal se debía a las debilidades y vacilaciones de ciertos sectores del gobierno, situación que debía modificarse de forma urgente. Enseguida, este movimiento criticó con dureza el

[413] "Trabajadores de DINAC, ECA y FF.CC. aseguran entrega de alimentos", *El Siglo*, 17 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 490-491.

[414] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 239.

[415] *Op. cit.*, pp. 240-241.

llamado que se había hecho, desde esos mismos sectores, en orden a que el pueblo y la clase obrera fuesen ubicados como una «fuerza secundaria y auxiliar» para la solución del problema. Al tratarse de un conflicto entre los grandes capitalistas y el pueblo, sentenciaba el MIR, correspondía que fueran los propios trabajadores quienes debían buscar la solución. La consecuencia lógica de esta propuesta era la materialización de un poder popular, «alternativo al poder patronal y burgués», que emergiera desde abajo y se unificara a través de los consejos comunales de trabajadores. Respecto al rol que comenzaban a asumir las Fuerzas Armadas, este movimiento señaló que el pueblo y los revolucionarios no se oponían a la acción uniformada, pues se entendía que la lucha en contra del fascismo debía ser en conjunto[416]. Como se puede ver, la paralización de los camioneros contribuyó a poner en evidencia, una vez más, las diferencias tácticas que existían en el seno de la alianza oficialista. Aunque existía un diagnóstico en general común sobre el carácter sedicioso de la huelga, y sus vinculaciones con el imperialismo extranjero, las vías de solución del conflicto diferían según el criterio de cada colectividad. La propuesta de avanzar sin transar y fortalecer el poder popular con vistas a una resolución inminente de los problemas en curso chocaba con la estrategia gradual e institucionalista de quienes defendían un accionar por dentro del sistema. A decir verdad, tales divergencias no eran en ningún caso una cuestión que surgiera a raíz del paro de los camioneros. Ellas reflejaban una ya larga discusión que se venía dando en el seno de la izquierda, cuya intensidad, lejos de menguar, se intensificaría en los meses venideros.

Desde la vertiente opositora también se observaron matices en sus declaraciones, aunque se manifestó, como elemento común, un apoyo decidido a la huelga de los camioneros. A lo largo de diversas declaraciones, iniciadas el día 14 de octubre, el PN indicaría que el movimiento gremial estaba dirigido a defender la libertad, evitando así que la democracia cayera en manos de una minoría totalitaria. También se enfatizó en que la actual coyuntura demandaba una importante dosis de unidad y cohesión de la sociedad civil, pues se intuía que la lucha en contra de la UP se extendería más allá del paro

[416] "El MIR frente a la situación política", en *Punto Final*, n.º 169, Santiago, martes 24 de octubre de 1972, p. 29.

gremial. Por último, el PN recalcaría una idea matriz que ya se venía esgrimiendo con antelación según la cual el Gobierno no era legítimo, razón por la cual debía ponerse en entredicho su continuidad hasta 1976. Dentro de este argumento, el rol de las FF. AA. asomaba como de vital importancia pues, según declaró esta colectividad, resultaba cuestionable que el Ejecutivo se escudara en el prestigio de las instituciones armadas[417].

En la DC se observaron matices en su interior. Para un sector importante del partido la coyuntura de octubre serviría para desgastar al gobierno a fin de derrotarlo en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Esto significaba que, tras dichos comicios y ante la situación de debilidad en que quedaría sumido el Ejecutivo, el proyecto socialista de la UP debería sencillamente cambiar de orientación, cuando no, sufrir un repliegue importante. Para Eduardo Frei Montalva, figura que articulaba al sector conservador del partido, los comicios tendrían un carácter plebiscitario respecto al gobierno, razón por la cual se debía asegurar su transparencia. Desde un ángulo distinto, Radomiro Tomic señaló que los comicios de marzo reflejarían un pronunciamiento del pueblo respecto a la gestión del gobierno, pero en ningún caso podrían determinar su legitimidad[418]. Quizás el principal dilema de los democratacristianos radicaba en cómo enfocar su adhesión a la paralización gremial sin aparecer como un actor situado en posiciones rupturistas que, como las del PN, significaban apoyar la caída del gobierno. Aunque esta contradicción se encontraba implícita en la mayor parte de las declaraciones que hicieron los democratacristianos, su práctica factual revelaba por momentos la adopción de una estrategia que parecía dirigirse en otra dirección.

En este marco, y mediados por la altísima polarización que se había alcanzado a pocos días de iniciada la huelga, los hechos de violencia política no tardarían en aparecer. Los principales sucesos a este respecto fueron la muerte de cinco personas y un nutrido grupo de incidentes callejeros en los que se vieron involucrados distintos actores. En relación a las víctimas fatales cabría puntualizar que sus fallecimientos se produjeron tanto por la acción de otros civiles como por la intervención de fuerzas militares encargadas del orden público.

[417] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 230-231.
[418] *Op. cit.*, pp. 234-237.

La primera muerte durante este periodo fue la del camionero Orlando Silva Saavedra en la madrugada del día 11 de octubre, es decir, a dos días de iniciada la paralización gremial. El incidente, ocurrido en el kilómetro 82 de la carretera Panamericana Sur, se habría iniciado por una fuerte discusión entre dos camioneros que participaban de la huelga: Luis Acevedo Acevedo de 34 años y Galvarino Navarrete Sáez de 28. En medio del intercambio de palabras, Navarrete sacó de improviso un revólver procediendo a hacer dos disparos en contra de Acevedo sin mayor éxito[419]. Éste último logró escabullirse hasta su camión desde donde extrajo una carabina calibre 44 con la cual disparó en contra de Galvarino Navarrete. Sin embargo, los proyectiles impactaron en contra de Orlando Silva Saavedra quien se cruzó en medio del tiroteo y de la discusión que sostenían los dos transportistas.

Aunque no se han encontrado antecedentes respecto al origen de la refriega, esta se produjo en el marco de una huelga gremial que desde muy temprano había incrementado los niveles de tensión en el país. Ciertos medios de comunicación apuntaron en un primer momento a que el hecho había significado la muerte de un obrero a manos de los transportistas en huelga[420]. Sin embargo, todo parece indicar que la discusión involucró solo a los camioneros que se encontraban participando de la huelga gremial en la Carretera Panamericana Sur. Este fue, de hecho, el tono que transmitió el Intendente de la provincia de O'Higgins, Luis Baeza, al señalar que el incidente había ocurrido durante el bloqueo de caminos que llevaban a cabo tanto los propietarios como los conductores de las máquinas[421]. El certificado de defunción de la víctima, en tanto, corrobora su fallecimiento en horas de la madrugada (05:55) y señala como causa de la muerte el estallido de corazón e hígado producto de un homicidio[422].

En pocos días, y debido a las dimensiones que alcanzaba el conflicto, los incidentes violentos comenzaron a ir más allá de la

[419] *El Mercurio*, Valparaíso, 12 de octubre de 1972, p. 12.

[420] Este fue el énfasis de *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 12 de octubre de 1972, p. 24.

[421] *El Mercurio*, Valparaíso, 12 de octubre de 1972, p. 12.

[422] "Certificado de defunción de Orlando Silva Saavedra", Rancagua, 11 de octubre de 1972, n.º de inscripción 803, folio 15433590, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 20 de mayo de 2016].

huelga de camioneros[423]. Así se produjeron algunas ocupaciones de fábricas como fue el caso de Elecmetal el día 14. Con todo, uno de los hechos más conflictivos se produjo a propósito del cierre del comercio, situación que imposibilitaba el acceso a los productos de primera necesidad. En ese marco, la Dirección de Industrias y Comercio (DIRINCO) comenzaría —a contar del día 16— a abrir por la fuerza los establecimientos que seguían cerrados. Así se procedió a descerrajar las cortinas de algunos locales con la consecuente protesta de los propietarios y el inicio de diversos incidentes en distintos puntos del país[424]. En la práctica, la reapertura forzada de las tiendas tenía un efecto parcial, pues al suscitarse los desórdenes e intervenir la policía, las posibilidades de adquirir productos se veía limitada. También pudieron observarse agresiones entre civiles derivadas, con seguridad, del conflicto gremial que se vivía. Este fue el caso del presidente de la Confederación de Colegios Profesionales de Chile, Miguel Jacob Helo, quien fue agredido con una piedra de gran tamaño mientras conducía su automóvil en la intersección de las calles Vicuña Mackenna y Santa Victoria. El impacto de la piedra le produjo un traumatismo encéfalo craneano que derivó en su hospitalización[425]. Según indicó el periódico *Clarín*, la agresión se habría producido como consecuencia de las conversaciones que Jacob Helo había mantenido con el presidente Allende tendiente a buscar una solución al paro de los colegios profesionales[426].

En la segunda semana de paralización se produjo otra víctima fatal. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del día 18 de octubre en una carretera interior de la región de Valparaíso, cercana a la ciudad de Quillota. La víctima fue identificada como Sergio Olivares Salas, de 23 años, quien fue alcanzado por una bala disparada por el cabo de la Armada Manuel Aros[427]. Según la versión del intendente de la

[423] Un balance realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones señala que entre el 9 y el 19 de octubre se produjeron cerca de 21 atentados de distinta naturaleza a lo largo del país. Información y datos más amplios en *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 25 de octubre de 1972, p. 2.

[424] Salazar, M., *op. cit.*, p. 252.

[425] *Las Últimas Noticias*, Santiago, 18 de octubre de 1972, p. 8.

[426] *Clarín*, Santiago, 24 de octubre de 1972, p. 9.

[427] El certificado de defunción de la víctima confirma que la muerte de Olivares Salas se produjo por el impacto de un proyectil balístico que le produjo una herida en la zona aórtica y cardíaca causándole un deceso instantáneo. "Certificado de de-

zona, Carlos González, un camión que transportaba combustible, y en el cual viajaba como guardia el cabo Aros, fue adelantado por un vehículo Fiat 125 desde el cual comenzaron a arrojar hacia la pista trozos de madera con clavos produciéndose una avería en los neumáticos del camión. Casi de inmediato, continuó la autoridad, hicieron su aparición dos vehículos más, uno de los cuales aceleró su marcha con el objetivo, aparente, de estrellarse contra el camión. En ese momento, el militar advirtió a viva voz para que el vehículo detuviera su marcha, situación que no ocurrió. Frente a ello, el cabo de la Armada hizo uso de su arma de servicio disparando hacia el interior del automóvil, proyectil que impactó certeramente en Sergio Olivares Salas[428].

Los acompañantes de la víctima sostuvieron, en tanto, una versión distinta. Gabriel Cruz Vargas indicó que el militar los habría confundido con saboteadores que buscaban atentar en contra del camión que transportaba combustible. Según su relato, en medio del incidente los ocupantes del vehículo menor no escucharon ninguna orden proveniente desde el militar, sino que solo sintieron el disparo y vieron caer a su compañero herido[429]. Por su parte, la versión del periódico *Las Noticias de Última Hora* concordaría con la versión oficial al identificar a Olivares Salas como un provocador que intentó atacar, junto a otros individuos, un camión que transportaba combustible[430]. Aunque no existe total claridad de lo ocurrido debido a la disparidad de versiones, el contexto del momento puede arrojar alguna luz para trazar ciertos indicios. En algunas carreteras del país, los incidentes se habían vuelto periódicos en los días de paralización gremial, lo que unido a una sensación ambiente de tensión podían gatillar cualquier tipo de altercado. En este caso, pudieron existir quizás maniobras de adelantamiento y algún tipo de grito o gestos que hicieran pensar en un posible atentado. Así podría explicarse la reacción del militar al utilizar su arma de servicio en contra de los ocupantes del vehículo menor.

---

función de Sergio Olivares Salas", Quillota, 17 de octubre de 1972, n.º de inscripción 567, folio 15433684, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 20 de mayo de 2016].

[428] *El Mercurio*, Valparaíso, 19 de octubre de 1972, p. 3.

[429] *Ibid.*

[430] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 19 de octubre de 1972, p. 24.

Tres días después de ocurrido el incidente en la región de Valparaíso, un suceso de características similares —con participación directa de uniformados— se produjo en la capital. Esta vez la víctima fue Fernando Carrera Villavicencio, oficial en retiro del Ejército, quien en la madrugada del 21 de octubre guiaba con su automóvil una columna de vehículos que transitaban por una ruta en común. Todos los ocupantes habían participado de una velada nocturna en un local del sector oriente de Santiago y en el momento en que ocurrió el hecho se dirigían a sus respectivos hogares. Cuando se acercaron a la intersección de las avenidas Tobalaba y Larraín, una patrulla militar apostada en el lugar dio la orden de detenerse a la columna de vehículos, indicación que no fue obedecida. Los uniformados hicieron entonces un primer disparo en contra del automóvil de Carrera Villavicencio el cual giró de modo imprevisto por lo que procedieron a realizar dos disparos más al suponer que el vehículo intentaba darse a la fuga[431]. Cuando finalmente se detuvo, indicó *La Segunda*, los militares comprobaron que en su interior yacía el cuerpo sin vida del exoficial con un proyectil alojado en su cabeza. El certificado de defunción de la víctima corrobora esta versión al indicar como causa de muerte una atrición cráneo encefálica, fijando su hora de deceso a las 02:30 de la madrugada[432]. Al día siguiente de ocurrido el incidente el Ejército, a través de una declaración oficial, concordó con la versión entregada por el vespertino señalando que el vehículo no obedeció la orden de detención por lo que se debió «hacer fuego» en contra del vehículo impactando a su conductor[433].

Se terminaba la segunda semana de paralización de los camioneros con un saldo poco alentador. Los hechos de violencia se habían multiplicado en pocas horas y las víctimas fatales atribuibles al marco de polarización sumaban ya tres personas, además de un centenar de heridos y detenidos por diversas infracciones[434]. Se trataba, sin duda,

[431] *La Segunda*, Santiago, 21 de octubre de 1972, p. 24.

[432] "Certificado de defunción de Fernando Carrera Villavicencio", Santiago, 21 de octubre de 1972, n.º de inscripción 1088, folio 15845696, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de mayo de 2016].

[433] Comunicado del Ejército publicado en *El Siglo*, Santiago, 22 de octubre de 1972, p. 8.

[434] Se han detectado algunas informaciones que indican la existencia de una cuarta víctima fatal en este periodo. Se trataría del obrero José Urra quien, al no obedecer

del periodo más álgido y complejo de la huelga gremial, en el que las posiciones de uno y otro sector se encontraban cerradas, sin posibilidades de alcanzar un acuerdo que destrabara el conflicto. El general Carlos Prats recuerda que en esos días le señaló con total franqueza al presidente Allende que el país ya estaba dividido en dos sectores «irreconciliables» que se enfrentaban con «absoluta intransigencia»[435]. De este tenso clima tomaría nota también el episcopado chileno. A través de una declaración pública expresaría su preocupación por la «confrontación sorda» que existía en el país, la cual podría desembocar en una lucha de «imprevisibles consecuencias». Asimismo, los obispos recalcaban su convencimiento de que la mayoría de los ciudadanos deseaban la continuación del régimen constitucional, el respeto a la autoridad, la mantención de los cambios en beneficios de los más pobres y la solución de los conflictos. Al finalizar, y utilizando una sintomática metáfora respecto al clima político que se vivía, el episcopado pedía a Dios que dejara caer «como un rocío» la serenidad y la paz «en nuestra Patria inquieta»[436].

Fue en este contexto donde surgió de parte diversos gremios —encabezados por supuesto por el de los transportistas— un documento de amplia circulación pública denominado "Pliego de Chile". En él, los dirigentes emplazaban al Gobierno a cumplir con una serie de medidas, siendo una de ellas la exigencia de que de los gremios y colegios profesionales participaran en la elaboración de la política económica. También pedían el desistimiento de cualquier tipo de querella interpuesta por el Ejecutivo en contra de algunos dirigentes, como así también someter el proceso de cambios a la Ley

---

las indicaciones de una patrulla militar en pleno centro de la capital, habría sido herido mortalmente por un disparo. Esta investigación no ha podido encontrar todavía referencias explícitas y amplias que corroboren tal hecho, como tampoco ha sido posible obtener un certificado de defunción de la víctima. Sí existe mayor claridad, y referencias periodísticas, sobre otro hecho que involucró a militares y civiles. El día 29 de octubre, un individuo identificado como Luis Garrido Farías, de 18 años de edad, intentó arrebatarle su fusil de servicio a un miliar que custodiaba una calle de la comuna de San Miguel, al sur de Santiago. En el forcejeo, el uniformado le propinó una puñalada a Garrido con la bayoneta que portaba en su arma logrando así evitar el robo. El herido sería trasladado de urgencia a un hospital donde se recuperaría en los días siguientes. Datos y referencias en *El Mercurio*, Santiago, 30 de octubre de 1972, p. 22.

[435] Prats, *op. cit.*, p. 304.

[436] "Pedimos un espíritu constructivo y fraternal. Exhortación de los Obispos de Chile", 20 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 498.

y la Constitución[437]. Esto último significaba que sería el Congreso Nacional el encargado de aprobar o rechazar cualquier modificación estructural que se intentase llevar a cabo. El historiador Luis Corvalán Marquéz señala que tales demandas se revelarían como «claramente políticas», lo que provocó, entre otras cosas, el rechazo de Allende a considerar su discusión[438].

Se imponía así una situación de máxima intransigencia que no dejaría indiferente a ningún actor o institución del país. En el Parlamento, por ejemplo, se desarrollaron intensos debates en el transcurso de esos días. La sesión del 17 de octubre de la Cámara de Diputados fue bastante indicativa de lo anterior, pues allí se discutieron desde acusaciones constitucionales en contra de algunas autoridades hasta denuncias por diversos hechos de violencia ocurridos en el país. En el primer caso, un grupo de diputados del PN y de la DC presentaron un libelo en contra del intendente de Santiago, Alfredo Joignant Muñoz. La acusación se basaba en el reciente proceder de la autoridad regional que, a juicio de los parlamentarios, había actuado con permisividad en un ataque que sufrieron estudiantes de la FESES. Se sumaba a lo anterior, la orden dictada a Carabineros para que reprimiera una manifestación en los patios del Congreso Nacional, violando así, según se dijo, la autonomía de un poder del Estado. Más adelante, el diputado democratacristiano Guido Castilla enumeró una serie de incidentes violentos ocurridos en la provincia de Linares. Según las informaciones aportadas, algunas autoridades de la zona ordenaron a los obreros de vialidad y de la industria azucarera IANSA que despejaran la carretera Panamericana ocupada por camiones que adherían al paro gremial. Dicha tarea se habría realizado, indicó Castilla, con maquinaria pesada provocando un sinnúmero de incidentes que terminaron con tres camiones incendiados, otros cuarenta con daños de consideración y numerosas personas heridas[439].

A fines de octubre, en otra sesión de esta cámara legislativa, volvieron a resonar los ecos de un ambiente polarizado. En la cita co-

[437] "Para que Chile reanude su marcha" *El Mercurio*, 22 de octubre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 503-505.

[438] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, *op. cit.*, p. 228.

[439] Diputados, *Diario de sesiones*, 8.ª sesión, martes 17 de octubre de 1972, pp. 372-395.

rrespondiente al día 25 de ese mes, los diputados nacionales Gustavo Monckeberg y Miguel Luis Amunátegui expresaron, desde distintos enfoques, fuertes críticas en contra de la UP. El primero de ellos, aprovechó el homenaje que se hacía al levantamiento húngaro de 1956 para sostener que quienes creían en Dios y en la dignidad humana tenían la responsabilidad de rechazar el «comunismo despiadado» que pretendía invadir el «alma» de Chile. El diputado Amunátegui, en tanto, sostuvo que las actuales circunstancias por las que atravesaba el país se debían a la acción «atrabiliaria, prepotente, despótica y destructora» del actual Gobierno. La huelga general que afectaba a Chile fue definida por el parlamentario como un «espontáneo movimiento de protesta» que expresaba una paciencia ya colmada de la sociedad. Asimismo, sostuvo que las informaciones de la prensa de izquierda en orden a identificar a un grupo de «conspiradores» como cabecillas de la huelga correspondían a una campaña que buscaba preparar un clima propicio para el «atentado y el asesinato». Ello ya había sucedido, sentenció el diputado, cuando ocurrió el crimen del exministro Edmundo Pérez Zujovic en 1971[440].

En el Senado, la intensidad de los debates no sería distinta. El 13 de octubre se realizaron diversas sesiones para abordar la situación social y política del país. En momentos en que el senador del PN, Víctor García Garzena, caracterizaba el movimiento huelguístico de los camioneros fue interrumpido por la senadora comunista Julieta Campusano quien acusó que los transportistas eran dirigidos por la oposición. Esto alteró de sobremanera al parlamentario nacional quien gritó a viva voz que no estaba dispuesto a ser acallado y que moriría gritando por «la libertad y la democracia». Enseguida se produjo otro intercambio más entre estos parlamentarios a propósito de la caracterización que García realizaba sobre los dueños de camiones de la provincia de Aysén. Según Campusano, ninguna de las personas a las que se refería el parlamentario nacional manejaba sus camiones, pues «explotaban» a otros choferes. García enfatizó que cuando se rompía la legalidad y el Gobierno ya no tenía autoridad moral, a la ciudadanía no le quedaba más recurso que adherir a las huelgas. Entonces intervino nuevamente la senadora Campusano

[440] Diputados, *Diario de sesiones*, 12.ª sesión, miércoles 25 de octubre de 1972, pp. 692-695.

para insistir en que la derecha había preparado la huelga al tiempo que el también senador comunista Volodia Teitelboim acusaba a García de «sedicioso». Este último respondería con vehemencia que sería un «timbre de gloria» ser sedicioso contra el gobierno de la UP[441].

En la siguiente sesión, realizada el mismo día 13 de octubre, el senador del Partido Social Demócrata, Luis Fernando Luengo, hizo un llamado a las huestes de la oposición para que mantuvieran la cordura y la tranquilidad. Al mismo tiempo, Luengo reconoció que el Gobierno no deseaba la guerra civil y que todas aquellas posiciones extremas, sobre todo las de la derecha nacionalista, debían detenerse antes de caer «al abismo». La senadora socialista María Elena Carrera puntualizó, luego, que el escenario nacional resultaba en extremo complejo, pues mientras el país era atacado «desde el extranjero» —en alusión a la empresa Kennecott y al gobierno norteamericano— las fuerzas reaccionarias «trataban de destruir la economía por dentro»[442]. La idea expresada por la senadora Carrera —de un país asediado por las fuerzas del imperialismo mundial— se conectaba a la coyuntura presente a través del rol que jugaban las fuerzas opositoras a la UP. Es decir, tanto las acciones de desestabilización llevadas a cabo por el gobierno estadounidense como el accionar del PN y de la DC orbitaban en torno al mismo propósito estratégico consistente en la cancelación del proyecto socialista. También se podía percibir un intento de parte de Carrera por homologar la actitud de la oposición a una conducta antipatriótica toda vez que ella se encontraba alineada tras los objetivos de una potencia extranjera que atacaba sin piedad a Chile.

En la parte final del debate, correspondiente a una nueva sesión, los intercambios mantuvieron el mismo nivel de intensidad, esta vez en torno al tema de la violencia. A juicio del senador democratacristiano Patricio Aylwin, el clima de odios, violencia e inseguridad que imperaba en el país no lo había sembrado la oposición, sino la UP y en especial el PS. Además, el parlamentario expresó que independiente de que su colectividad rechazara cualquier tipo de

[441] Senado, *Diario de sesiones,* 12.ª sesión extraordinaria, viernes 13 de octubre de 1972, pp. 520-522.

[442] Senado, *Diario de sesiones,* 14.ª sesión extraordinaria, viernes 13 de octubre de 1972, pp. 540-541.

enfrentamiento o violencia, ello no podía traducirse en una actitud de cobardía ni tampoco en aceptar que se «arrasara» con las «libertades y los derechos democráticos». La respuesta provino por parte de la senadora socialista María Elena Carrera quien destacó que la siembra de odios venía desde mucho antes en el país. Respecto a los hechos de violencia del último tiempo, la parlamentaria señaló que en su gestación tenían directa responsabilidad grupos como Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus. A juicio de Carrera, era en los desfiles de estos grupos —cuyos militantes recorrían las calles premunidos «de cadenas, de fierros, de estoques, de estiletes y de hondas con municiones de acero»— donde se veía más de cerca la violencia[443].

Sin duda, los debates parlamentarios se habían alineado en su mayoría dentro de una perspectiva bipolar. Esto significaba la existencia de un conjunto basal de criterios desde donde se construían gran parte de los argumentos que se utilizaban en las cámaras legislativas. Así, pues, en la oposición los razonamientos estaban anclados en torno a la idea de que el Gobierno coartaba las libertades públicas y derechos fundamentales de la ciudadanía, encaminándose a instaurar un estado totalitario. Desde este mismo ángulo, la violencia era entendida como responsabilidad exclusiva de los grupos armados de izquierda que campeaban sin control por el país. Por todo lo anterior, la coyuntura del momento signada por la huelga gremial reflejaba un movimiento de «espontánea» protesta social contra las arbitrariedades y objetivos totalitarios del Ejecutivo. La perspectiva oficialista, y de la izquierda en general, apuntaba, en cambio, a destacar el carácter sedicioso no solo de los camioneros y asociaciones que se habían sumado a la paralización, sino también de la oposición en su conjunto. En ese marco, el paro se revelaba como una estrategia de desestabilización que en ningún caso era nueva, pues desde que asumiera Allende, e incluso desde antes, se habían podido observar propósitos de similar envergadura. Tales objetivos, según enfatizara la izquierda, no eran una elaboración exclusivamente local pues el imperialismo norteamericano se encontraba detrás de muchas de estas iniciativas.

[443] Senado, *Diario de sesiones*, 15.ª sesión extraordinaria, viernes 13 de octubre de 1972, pp. 548-550.

En paralelo a estas discusiones, el Congreso Nacional procedió a sancionar la Ley n.º 17798 de Control de Armas y Explosivos. Como se recordará, este tema había comenzado su discusión en abril de 1972 a propósito de los proyectos presentados tanto por el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona como por el Gobierno. Estas iniciativas le otorgaban a las Fuerzas Armadas importantes atribuciones en materia de fiscalización, sobre todo en lo que respecta a la incautación y requisición de armamento.

La ley aprobada condensó al final tanto el proyecto presentado por el Ministerio de Defensa Nacional como algunas de las indicaciones realizadas por el senador Carmona. El cuerpo central de la nueva legislación, promulgada el 20 de octubre, establecía los tipos de armas que serían controladas[444], la penalidad por el funcionamiento de milicias armadas y por el porte de armas prohibidas y la jurisdicción de los Tribunales Militares. Así, por ejemplo, el artículo 19.º establecía el procedimiento específico para el allanamiento e incautación de las armas si se producía alguna denuncia al respecto. Se estipulaba, en concreto, que en «casos graves y urgentes» los tribunales podrían ordenar la práctica de dichas operaciones con respecto a los lugares habitados o no en los que se presuma la «existencia clandestina» de algunas de las armas indicadas en el artículo 2.º. Además, se establecía que tales diligencias serían cumplidas por Carabineros, por las Fuerzas Armadas, «o por ambos a la vez», si las circunstancias así lo aconsejaran[445]. Según Verónica Valdivia, este tipo de legislación hizo que un conjunto de conceptos militares ingresase al mundo civil debido, sobre todo, a la presión ejercida por los partidos de oposición. El objetivo implícito era, pues, incorporar leyes de excepción que frenaran las reformas en curso. De este modo, señala la autora, la Ley de Control de Armas vino a militarizar el conflicto político y a otorgar importantes cuotas de autonomía a los uniformados[446].

[444] El artículo 2.º del título II de la ley establecía que quedarían sometidas a este control «las armas de fuego, sea cual fuese su calibre, las municiones, los explosivos [...] las sustancias químicas inflamables o asfixiantes y las instalaciones destinadas a la fabricación, almacenamiento o depósito de estos elementos». *Ley n.º 17798*, disponible en: www.leychile.cl/N?i=29291&f=1972-10-21&p=., p. 207 [fecha de consulta: 20 de junio de 2023].

[445] *Op. cit.*, p. 213.

[446] Verónica Valdivia, "Chile ¿país de excepción? Ley de Control de Armas y la maquina represiva puesta en marcha", p. 210.

Este último punto resultaría relevante ya que las Fuerzas Armadas comenzarían a recibir decenas de denuncias en orden a la existencia de arsenales en distintos lugares del país. A raíz de ello, unidades militares allanaron diversas propiedades, siendo los centros fabriles uno de los lugares más recurrentes. El problema se suscitaría porque algunas de estas operaciones, sobre todo aquellas que se materializaron en 1973, generaron sendos enfrentamientos y altercados con los trabajadores, produciéndose la muerte de algunos de estos últimos a manos de la fuerza militar. Como es de suponer, este tipo de hechos contribuiría a agudizar todavía más el escenario de polarización que se vivía, dando pie a acusaciones cruzadas entre distintos actores por lo que se consideraba un proceder arbitrario y abusivo de parte de las Fuerzas Armadas.

En la tercera semana de octubre, las dinámicas de conflicto suscitadas a propósito de la huelga de los camioneros escapaban a cuestiones solo sectoriales. Como se vio en su momento, buena parte de las exigencias gremiales y profesionales trasuntaban un nítido matiz político cuyo objetivo transversal era confrontar a la UP hasta lograr su abdicación. Indudablemente, el nivel de tensión y rupturismo que dichos propósitos evidenciaban, como así también algunas consignas emanadas desde la izquierda, contribuyeron a incrementar la polarización existente en Chile. Como ya se había observado en los días previos, el comercio detallista fue de nuevo el escenario donde se registraron algunos hechos de violencia. Incluso ello sucedería en espacios alejados de las grandes urbes. Así ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Molina el día 24 de octubre cuando se produjeron graves incidentes a raíz de la acción de funcionarios de DIRINCO que intentaban requisar los locales comerciales que se habían negado a abrir. En cuestión de minutos emergieron los enfrentamientos a golpes entre los propietarios de los almacenes y los funcionarios públicos, sumándose a la trifulca algunos transeúntes que pasaban por el lugar. Según informó *El Mercurio*, la policía uniformada se vio sobrepasada por momentos, dado el alto número de personas involucradas en la pelea. El saldo final de la refriega, indica este periódico, fue de dieciséis personas detenidas y un número indeterminado de heridos[447].

[447] *El Mercurio*, Santiago, 25 de octubre de 1972, p. 1.

En la capital, en tanto, los conflictos también seguían un curso ascendente. El 26 de octubre se produjo un violento enfrentamiento entre grupos rivales a las puertas del edificio de la Empresa Distribuidora Nacional (DINAC), ubicado en calle Compañía. Según la información aportada por *El Mercurio*, simpatizantes de la UP chocaron con elementos de la oposición produciéndose una cruenta batalla en que se utilizaron palos, piedras y otros elementos contundentes. El enfrentamiento se habría producido porque los simpatizantes de la UP quisieron defender el edificio de la DINAC ante un supuesto apedreo que cometerían grupos opositores que rondaban el sector[448].

Transitando hacia la primera semana de noviembre comenzó a vislumbrarse, a pesar del cúmulo de incidentes que se producían día a día, algunos visos de solución. Pese a la contundencia del paro, el gobierno había logrado mantener el funcionamiento del país gracias a la base social que aún le apoyaba y que se cuadró tras las tareas de transporte y distribución de mercaderías. De igual forma, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros mantuvieron su lealtad al gobierno, velando por la seguridad y el orden público. Tampoco se puede olvidar que era la alianza de izquierda la que se encontraba a cargo del Estado, por lo que un número importante de decisiones administrativas, muchas de las cuales definirían el término del paro, estaban en sus manos. Bajo ese contexto, la oposición gremial y política comprendió que no era tan sencillo confrontar a un bloque que todavía manejaba algunos mecanismos del poder institucional y que, más aún, seguía contando con un sólido apoyo social.

A pesar de que la balanza comenzaba a inclinarse a favor del Gobierno, el clima de polarización no desaparecería de un momento a otro. De hecho, en las horas en que se vislumbraba el término oficial del paro se produjo el fallecimiento de dos civiles, mientras que otros incidentes de similar gravedad se desarrollaron en las semanas siguientes[449]. Los dos civiles fallecidos fueron identificados

[448] *El Mercurio*, Santiago, 27 de octubre de 1972, p. 1.

[449] El día 8 de noviembre, por ejemplo, se produjo un violento enfrentamiento entre brigadistas de la UP y miembros de la Juventud Nacional (JN) en la Universidad Técnica del Estado. El hecho fue generado por la presencia en dicho recinto del presidente del PN, Sergio Onofre Jarpa, y el coronel en retiro del Ejército, Alberto Labbé, quienes finalmente fueron expulsados del lugar. El enfrentamiento dejó un saldo de 20 heridos pertenecientes a la JN. Cinco días más tarde, dos jóvenes serían

como Cristián Jara Contreras, de 22 años de edad, y Johny Faúndez González, de 9. En el primer caso, se trató de un hecho similar a los ocurridos con Sergio Olivares y Fernando Carrera en el pasado mes de octubre, en que la intervención de una patrulla militar acabó con la vida de estas personas. Según los medios de prensa, Cristián Jara Contreras se dirigía la madrugada del 3 de noviembre en su vehículo particular por la Avenida Vicuña Mackenna, al oriente de la capital. Al llegar a la intersección de esta arteria con la calle Acevedo Hernández, una patrulla de uniformados le ordenó que detuviera su automóvil, orden que no fue cumplida por el conductor. Esto provocó que uno de los militares hiciera uso de su fusil disparando en contra del vehículo[450]. El certificado de defunción de la víctima anota como causa de su muerte un estallido cráneo encefálico, fijando la hora de su muerte a la una de la madrugada[451].

La muerte del menor Johny Faúndez también se produjo el día 3 de noviembre, no obstante, los hechos que suscitaron este incidente se produjeron un día antes en la ciudad de Curicó. En la medianoche del día 2, una patrulla militar que custodiaba las calles de la población Soler se dispuso a controlar a un número indeterminado de individuos que permanecían en la vía pública. La negativa que manifestaron estas personas a ser controladas por la autoridad uniformada derivó en un enfrentamiento armado entre ambos grupos. Uno de los disparos que se efectuó alcanzó a Johny Faúndez quien se encontraba junto a otro menor en las inmediaciones del lugar[452]. Las autoridades militares responsabilizarían del hecho a los civiles que se negaron al control de la patrulla militar y que además abrie-

---

baleados en la ciudad de Lota al término de una concentración estudiantil enmarcada en los próximos comicios que se realizarían en la Universidad de Concepción a objeto de elegir los cargos de rector y vicerrector de dicho plantel. Datos en Salazar, M., *op. cit.*, pp. 261-262.

[450] Esta es la versión que entregan *La Tercera*, Santiago, 4 de noviembre de 1972, p. 11; *El Mercurio*, Santiago, 4 de noviembre de 1972, p. 10 y *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 4 de noviembre de 1972, p. 32.

[451] "Certificado de defunción de Cristián Jara Contreras", Santiago, 3 de noviembre de 1972, n.° de inscripción 1171, folio 15844733, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 30 de mayo de 2016].

[452] *El Mercurio*, Santiago, 5 de noviembre de 1972, p. 22; *La Tercera*, Santiago, 5 de noviembre de 1972, p. 11.

ron fuego en contra de esta. El teniente coronel a cargo de la zona de emergencia en dicha provincia, Rafael Ortiz Navarro, señaló que Faúndez había sido herido por proyectiles de «pequeño calibre», probablemente del número 22, los cuales no correspondían a las armas que usaba el Ejército en estas diligencias[453]. El menor herido, en tanto, logró ser trasladado hasta el Hospital de Curicó, lugar donde fallecería producto de un *shock* séptico a las seis de la tarde del día 3 de noviembre[454].

Las muertes de Cristián Jara Contreras y el menor Johny Faúndez pusieron de relieve, sobre todo en el primer caso, el protagonismo de los militares en este tipo de incidentes. Sin embargo, dicha actuación no sería cuestionada en lo esencial por la opinión pública o, al menos, no de manera sustantiva en estos meses. Parecía existir cierto consenso en que la actuación de los militares, bajo estados de excepción constitucional, podía concluir con la muerte de alguna persona. Sin ir más lejos, el general Augusto Pinochet hizo una declaración a este respecto, a fines del año anterior, la cual parecía cobrar cierta vigencia en el contexto del paro de octubre. En aquel momento, el alto oficial pidió a la ciudadanía que «...cuando el personal militar dé la voz "alto" obedezcan de inmediato, pues de lo contrario se les disparará». Al explicar sus palabras, Pinochet sostuvo que no se podía olvidar que el soldado estaba «entrenado» para actuar de ese modo[455]. La prensa, por su parte, observó de forma casi transversal que las víctimas civiles a manos de patrullas militares habían hecho caso omiso a las advertencias y ordenes de los uniformados, por lo que la decisión de disparar se encontraba de algún modo justificada.

Con el paso de los meses dicha percepción sufrirá modificaciones importantes, sobre todo cuando los militares protagonizaran nuevos hechos de violencia en el marco de la aplicación de la Ley de Control de Armas. Ello se materializaría sobre todo a contar de mayo de 1973 cuando se produjeron numerosos allanamientos a fábricas e industrias, las cuales, en ciertos casos, terminaron con la muerte de

[453] *El Mercurio*, Valparaíso, 5 de noviembre de 1972, p. 16.

[454] "Certificado de defunción de Johny Faúndez", Curicó, 3 de noviembre de 1972, n.º de inscripción 764, folio 15721124, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 26 de mayo de 2016].

[455] Augusto Pinochet, *Camino recorrido. Memorias de un soldado*, tomo I, p. 235.

algún trabajador. El foco, entonces, cambiaría pues desde sectores de izquierda se acusó que los militares actuaban con violencia en contra de los obreros. Como se puede advertir, para ese momento los hilos de la polarización política habían tejido un nuevo contexto en el cual las Fuerzas Armadas, según diagnosticara un segmento de la izquierda, ya no asomaban como la fuerza disciplinada de antaño, sino que más bien parecían estar sirviendo a los intereses de la oposición a la UP.

Pero en octubre y noviembre de 1972 pervivía aún la imagen de profesionalidad y lealtad de los militares hacia el gobierno. De hecho, estos fueron un factor clave para garantizar una salida institucional a la crisis de octubre, alejando de momento la amenaza de quiebre del proyecto socialista. En concreto, el día 2 de noviembre el presidente Allende procedió a nombrar un nuevo gabinete que incluía al comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, en la cartera de Interior y al almirante Ismael Huerta y al brigadier general de la FACh Claudio Sepúlveda en las secretarías de Obras Públicas y Minería, respectivamente. Con estas designaciones, el primer mandatario buscaba dar salida a la crisis y normalizar cuanto antes la situación social y política. En menos de 72 horas, tales objetivos se habían alcanzado casi en su totalidad, pues la propuesta elaborada por el nuevo gabinete fue aprobada por los gremios en huelga poniéndose fin a la larga paralización[456].

Estos últimos, en realidad, no tuvieron más opciones que bajar la movilización dado que sus propósitos de desestabilización y caos que terminarían por quebrar a la UP no se habían conseguido. Además, la autoridad civil se encontraba ahora reforzada por el alto mando de las Fuerzas Armadas, lo que suponía la llegada de un interlocutor distinto al cual no se podía interpelar en los mismos términos que se había hecho con el anterior gabinete. Como señalaría el entonces asesor presidencial, Joan Garcés, la UP estaba identificada en esta

[456] El documento fue redactado por los ministros de Interior, Carlos Prats; Hacienda, Orlando Millas; Economía, Fernando Flores y Trabajo, Luis Figueroa. En sus puntos nodales, la propuesta fijaba el fin de la paralización, la desestimación de sanciones, querellas y multas entabladas hacia el gremio de los transportistas y la resolución de los problemas a través de la justicia, entre otros aspectos. "Posición del Gobierno definió general Prats", *El Mercurio*, 6 de noviembre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 524-528.

coyuntura con las instituciones democráticas y legales del Estado, lo que incluía por cierto a las Fuerzas Armadas. En dicho contexto, indica el sociólogo español, a las fuerzas opositoras no les quedaba otro camino que destruir la totalidad del sistema político chileno para acabar con el gobierno, situación para la que no contaban, de momento, con la fuerza suficiente ni con el apoyo de los institutos militares[457]. No obstante este análisis, el general Prats advertía un punto inquietante que había dejado el conflicto y que tenía que ver con que la oposición había tomado conciencia de que su alianza con los gremios le habilitaba para darle «jaque mate» al gobierno en un futuro no tan lejano[458].

El término del conflicto gremial y la llegada de los militares al gobierno fue, a partir de los días siguientes, objeto del pronunciamiento de diversas colectividades. Desde el PS se apuntó la necesidad de extender el Área de Propiedad Social y fortalecer el poder popular bajo el supuesto de que este constituía «el mejor soporte del proceso revolucionario». No se desechaba *a priori* la participación de los militares, pues lo importante era el «cumplimiento del programa de la Unidad Popular»[459]. Pese a este argumento, el secretario general de dicha colectividad, Carlos Altamirano, señaló el día 7 de noviembre, a través de una cadena radial de emisoras, que el paro de los transportistas no podía quedar impune, reconociendo además que los daños propinados al país eran inmensos. No actuar con mano dura contra los cabecillas de la «rebelión empresarial», sentenció el dirigente, significaría permitir que de nuevo rebrotara la conjura[460].

El PC, por su parte, destacó de forma positiva la incorporación de los militares al Gobierno, pues ello sería una garantía de la defensa del estado de derecho y del desarrollo normal de la vida institucional.

[457] Garcés, J., *op. cit.*, p. 287.

[458] Prats, *op. cit.*, p. 311. El dirigente de la SOFOFA, Orlando Sáenz, es enfático a la hora de evaluar las consecuencias del paro de octubre. A su juicio, dicha movilización «acabó con el proyecto político de la Unidad Popular», pues, aunque el Gobierno logró sortear dicha crisis, la llegada de las Fuerzas Armadas como actor deliberante indicaba que las horas del régimen estaban contadas. Los diez meses restantes, sentencia Sáenz, no fueron sino la *«crónica de una muerte anunciada»*, Sáenz, *op. cit.*, p. 96 (cursivas del autor).

[459] Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, pp. 244-245.

[460] "Sanción ejemplar a promotores del paro", *Las Noticias de Última Hora*, 8 de noviembre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 530-531.

En esta misma línea se pronunció el MAPU, aunque destacando también que con los militares se había podido derrotar la conspiración golpista. La IC enfatizaría, en tanto, que las transformaciones debían continuar su curso ascendente y que los desafíos y objetivos que ello significaba serían exigidos a cualquier tipo de gabinete. El MIR fue la colectividad que rechazó con mayor claridad la incorporación de los militares al gobierno. A juicio de este movimiento, la llegada de las FF.AA. al gabinete generó un importante cambio en el carácter del gobierno, siendo el desplazamiento del eje político desde los partidos hacia los militares la modificación más relevante[461]. El MIR visualizaba, en efecto, que bajo estas nuevas coordenadas resultaría imperativo insistir en la idea de reforzar el poder popular con el objetivo de resolver las disputas que se estaban desarrollando.

Desde la oposición, el PN enfatizó que, si las FF.AA. ingresaron al gabinete para respaldar y servir al programa de la UP, estarían faltando a su misión. Por el contrario, si lo hacían para restablecer la paz, devolver a la legalidad al gobierno y asegurar la transparencia de los próximos comicios parlamentarios, su papel estaría justificado. Luis Corvalán Marquéz señala que, a través de estas declaraciones, el PN instalaba en el espacio público el problema sobre el rol que adoptarían las FF.AA. dentro del conflicto político. Tal cuestión significaba poner un punto de presión extra sobre sus hombros ya que de modo implícito las llamaba a no abanderizarse ni apoyar a la UP[462]. La DC, en tanto, recibió con beneplácito la llegada de los militares al Gobierno, sobre todo bajo la idea de que ella serviría para concretar una profunda rectificación a la acción del oficialismo[463].

Comenzaba a quedar atrás una de las crisis más importantes por las que debió atravesar la UP. Por momentos, esta pareció poner en jaque su capacidad de contención y despliegue. Sin embargo, la movilización de la base militante de izquierda, alimentadas de una mística que todavía era importante en 1972, contribuyó a aplacar, en parte, los efectos negativos del paro. Visto en su conjunto, y considerando las reflexiones de algunos autores, se trató de una movilización que puso sobre la mesa distintos tipos de procesos.

461 Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 246.
462 *Op. cit.*, p. 247.
463 *Op. cit.*, p. 248.

Para Augusto Varas, por ejemplo, el paro de octubre reveló que los principales gremios del país habían desarrollado un discurso que convergía de forma clara hacia un modelo de carácter autoritario. Dicho modelo, proveía, según el autor, un proyecto de más amplia duración que la lucha coyuntural, enfatizando en aspectos como un Estado fuerte y una empresa integrada. Estos elementos, en virtud de su propia naturaleza, se oponían al modelo de la UP y al que había existido en los últimos 35 años en el país. Es en torno a este modelo, según Varas, que el gran capital articulará su recuperación y podrá movilizar a sus bases sociales de apoyo[464]. La línea de análisis que sugiere este autor apunta a resaltar que la oposición gremial jugaba las cartas de la desestabilización tanto para enfrentar la coyuntura social y política como para marcar un punto de inflexión histórico más amplio. Es decir, la lucha llevada a cabo durante la UP trasuntaría propósitos de más largo alcance tendientes a redefinir las relaciones laborales y productivas bajo el paraguas de un Estado autoritario.

La perspectiva de Luis Corvalán Marquéz está centrada en los actores más formales del sistema institucional. En este sentido, el autor recalca que, en la coyuntura de octubre de 1972, el Gobierno de la UP fue «cercado» por un movimiento gremial apoyado estratégicamente por los partidos opositores. En la práctica, el paro reflejaría, según Corvalán, la conformación de una verdadera resistencia civil a la UP, cuestión que estaba en sintonía con algunos de los objetivos que habían explicitado ciertos actores[465]. Desde este ángulo, la huelga de los transportistas fue vista, ante todo, como la comunión de intereses entre gremios y partidos políticos que materializaron una situación de tensión dentro del marco democrático. Tal perspectiva sería, pues, el reflejo de problemas institucionales que, sin embargo, tenían una conexión directa con la sociedad civil.

Por su parte, Franck Gaudichaud enlaza las temáticas institucionales y sociales dentro de un marco de tensión común. El autor apunta a la existencia de un complejo cuadro previo a la huelga donde no todo parecía estar tan claro ni alineado según las percepciones polí-

[464] Augusto Varas, *La dinámica política de la oposición durante el Gobierno de la Unidad Popular*, pp. 82-90.

[465] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 217.

ticas de ciertos actores. Por de pronto existía un cuadro económico que apremiaba con particular rigor a las capas medias, las cuales no contaban con los niveles de coordinación de los sectores populares. Además, según Gaudichaud, la UP carecía de un discurso estratégico que fuera convocante para esos sectores medios, con lo cual se acrecentaría la desafección de este segmento hacia la izquierda. Y desde el mundo obrero, también existían tensiones y problemas no resueltos con respecto a la orientación que adoptaba el proceso político chileno. En la coyuntura de octubre, las dinámicas antes descritas correrían en paralelo a los problemas que instaló la huelga patronal. Según el autor, la respuesta de Allende, en orden a mantenerse dentro de los márgenes institucionales y confiar en las FF.AA., era un llamado implícito a evitar la organización popular. Pero en pocas semanas, apunta Gaudichaud, quedaría en evidencia que el aparato estatal se estaba desarticulando y, en buena medida, subordinándose a lo social, que muestra mayor capacidad de despliegue y contención. A decir del autor, este sería un fenómeno estructural que afectó tanto al Estado como a los partidos políticos que fueron desbordados por la sociedad civil. Desde esta perspectiva, el paro de octubre puso en evidencia las debilidades intrínsecas del proyecto de transición de la UP, sobre todo en lo que respecta a su apuesta por las FF.AA.[466]. Así, pues, este análisis sugeriría que la UP fue «golpeada» no solo por la oposición gremial sino también por su propia base social de apoyo, la cual desnudó los verdaderos límites de la acción estatal.

Para Joaquín Fermandois, la crisis de octubre fue representativa de un clima de alta tensión en que dos bandos se preparaban para una confrontación de alto impacto. Haciendo una analogía con los meses previos a la Primera Guerra Mundial, este autor señala que para octubre de 1972 los frentes estaban «armados y animados tal cual en julio de 1914» indicando con ello una predisposición anímica muy clara para entrar a batallar. Por cierto, no se trató de una cuestión atingente solo a los gremios y los partidos, sino que, según Fermandois, el clima de alteración era transversal a la sociedad chilena en su conjunto. De hecho, el autor señala que los sectores de la población que fueron activados por la oposición a propósito del paro demostrarían importantes niveles de ira y «no poco odio»

[466] Gaudichaud, *Chile...*, *op. cit.*, pp. 185-192.

para enfrentar a la UP[467]. La perspectiva de Fermandois asume, pues, la existencia de un cuadro previo de confrontación bipolar entre sectores excluyentes de la sociedad, el cual se vería incrementado a raíz del paro de octubre. Dicho razonamiento se enmarca, además, dentro de lo que este autor denomina como guerra civil política y que no es otra cosa que una predisposición anímica de los actores para la confrontación y la lucha entre sí[468].

Del conjunto de perspectivas desarrolladas por los autores se puede inferir que el paro de octubre se materializó como un conflicto global que tensionó y aceleró la discusión en tres áreas fundamentales: en lo institucional, en lo político estratégico y en lo social. Por separado, cada una de estas dimensiones poseía un campo de expresión propio. Lo institucional, por ejemplo, se tensionaba en virtud del intento por alterar el curso democrático del país a partir de una operación generalizada de desestabilización. Siguiendo el análisis de Augusto Varas, tal propósito no pareció dirigirse solo en contra de la UP, sino que en realidad buscaría desencadenar una crisis integral del régimen institucional nacido con la Constitución de 1925. Con todo, es indudable que estas áreas, en el marco del «octubre rojo» que se vivía en el país, fluyen y se sobreponen unas a otras. Lo social —y más específicamente el mundo proletario— según el enfoque descrito por Gaudichaud, actuó con ciertas dosis de autonomía hasta terminar por desbordar el marco institucional. En pleno desarrollo del conflicto, el discurso orientado a reforzar el poder popular pareció adquirir cierto peso y mayores cuotas de pertinencia. Sin embargo, el término del conflicto hizo triunfar los discursos estratégicos centrados en la resolución institucional. Así, el paro de octubre y su desenlace final no significaría el término de estas tensiones, cuyo perfil fundamental se discutía, de hecho, desde antes de la huelga. En el futuro, y de acuerdo a las nuevas coyunturas que la realidad iría imponiendo a la vía chilena al socialismo, aquellas volverán a emerger.

[467] Fermandois, *op. cit.*, p. 565-570.

[468] El término «guerra civil política» lo entiende por oposición a la propuesta interpretativa de Adolfo Ibáñez, quien ve en estos años, e incluso desde antes de 1970, el germen de una guerra civil en Chile. Como se puede advertir, Fermandois insiste en un componente más político que estrictamente armado para referir el trasfondo del conflicto durante la UP. Véase, Adolfo Ibáñez, *Abrazado por la revolución: ideología y totalitarismo en Chile, 1960-1973* y Fermandois, *op. cit.*, p. 584.

A partir de los elementos descritos cabe preguntarse si el término del paro gremial supuso, en la práctica, un descenso o declive significativo de los hechos de violencia en el país. Sin duda hubo una disminución de las tensiones y los conflictos que habían alcanzado mayor expresión con el paro. Quedaron en el aire, no obstante, algunos temas que suscitaron cierta polémica sobre todo a través de la prensa, como fue el caso de las empresas requisadas o el rol de las JAP para hacer frente al mercado negro[469]. La tendencia general, entonces, apuntaría la existencia de un ambiente de cierta normalidad y recomposición institucional en el país. Tal fue el estado que el propio presidente Allende intentó transmitir a través de su conocido mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde recalcó el carácter democrático y pluralista del proceso político que se desarrollaba en Chile.

Sin embargo, la mencionada normalización fue advertida muy pronto como un paréntesis momentáneo. Algunas brasas que todavía humeaban producto de la paralización de octubre, podían reavivarse si el ambiente de tensión y enfrentamiento volvía a soplar. Asimismo, en el horizonte asomaban las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, lo que auguraba cierta confrontación en virtud de los mítines que se desarrollarían, la salida masiva de personas a la calle y el accionar de las brigadas electorales de cada partido político. La revista *Ercilla* logró captar esta sensación ambiente que quedó después de la paralización de octubre al incluir diversas notas y columnas de opinión dedicadas al tema de la violencia. En una de ellas, correspondiente a la primera semana de diciembre, reprodujo una entrevista que el semanario francés *L'Express* realizó a Friederich Hacker, renombrado psiquiatra austriaco, especialista en temas de violencia

[469] Respecto al tema de las empresas paralizadas, un periódico capitalino informaba, el 9 día de noviembre, que aquellas que tuvieran un carácter monopólico y que hubieran sido requisadas en el marco del paro de octubre no serían devueltas a sus propietarios. "Las empresas monopólicas que paralizaron no serán devueltas", *Las Noticias de Última Hora*, 9 de noviembre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 531. Otro periódico informaba, a comienzos de diciembre, de las importantes resoluciones que había adoptado la Asamblea Provincial de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) en orden a integrar a nuevos actores sociales y planificar de mejor forma las tareas de distribución dentro de las poblaciones. "JAP: Trabajo planificado con las masas para derrotar el mercado negro", *El Siglo,* 5 de diciembre de 1972, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 550.

y agresividad. A lo largo de sus respuestas, Hacker enfatizaría que la violencia se había transformado en una solución «sencilla» de los conflictos que aquejaban al hombre, situación que explicaba su enorme «popularidad» y despliegue a lo largo y ancho del mundo[470]. Lo que *Ercilla* ponía de relieve con la reproducción de esta entrevista, además de su preocupación natural por el cuadro de polarización que se vivía, era que la violencia se había asumido en Chile como un recurso válido y de fácil acceso para numerosos actores que deseaban resolver sus disputas. Es decir, las observaciones de Hacker, con excepción de su carácter global y teórico, constituían una buena descripción de los conflictos que se desarrollaban a escala local y que auguraban, para el corto plazo, un escenario todavía más complejo.

Al finalizar 1972, los temores de quienes advertían que la violencia podía volver a estallar de un momento a otro se vieron confirmados con un nuevo homicidio de connotación política. El día 20 de diciembre se llevaron a cabo, en la ciudad de Chillán, las elecciones de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile. Al anochecer, los primeros recuentos comenzaban a dar una leve ventaja a los candidatos de la oposición lo que encendió las discusiones y pugilatos entre diversas personas. En pocas horas, los incidentes crecieron en intensidad y se trasladaron hasta las principales calles de la ciudad. Fue en este contexto donde cayó herido mortalmente Héctor Castillo Fuentealba, de 34 años de edad y militante del Frente Nacionalista Patria y Libertad, quedando además otras dos personas heridas: Jorge Guíñez Silva y Mauricio Pinar Sepúlveda, ambos militantes del PN. El periódico regional *El Sur* sostuvo que los dirigentes de la CODE habían ordenado a sus bases retirarse del recinto universitario a fin de evitar los choques con los grupos de izquierda. Según este medio, un grupo de adherentes de la UP comenzó a perseguir a los militantes de oposición hasta el centro de Chillán, lugar donde se produjeron los mayores enfrentamientos[471]. Por su parte, el periódico chillanejo *La Discusión* entregó diversos detalles de lo ocurrido. En sus primeros párrafos, por ejemplo, destacó las consecuencias materiales de los enfrentamientos, apuntando a la destrucción de vitrinas comerciales y cabinas telefónicas, además de reseñar que cerca de treinta domi-

[470] *Ercilla*, n.º 1951, Santiago, 6 al 12 de diciembre de 1972, pp. 34-38.
[471] *El Sur*, Concepción, 22 de diciembre de 1972, p. 1.

cilios particulares quedaron con daños de diversa consideración[472].

Respecto al crimen, las versiones fueron distintas según la orientación política del medio. Para *El Mercurio*, no cabía duda de que los autores del homicidio habían sido elementos ligados a la UP[473]. El semanario *Qué Pasa* fue más específico al respecto al señalar que los autores del crimen eran militantes regionales del PS[474]. La revista *Ercilla*, por su parte, apuntó a que las calles de Chillán se habían transformado en un verdadero «campo de batalla» donde el enfrentamiento principal había sido provocado por elementos de la Brigada Ramona Parra perteneciente al PC[475]. El periódico *La Discusión* sostuvo que los autores materiales del crimen fueron individuos no identificados que atacaron a Castillo Fuentealba a menos de 200 metros del recinto universitario[476]. Manuel Fuentes Wendling recuerda en sus memorias que en la sede local de Patria y Libertad se disponía a hablar Pablo Rodríguez Grez cuando comenzaron a impactar en las ventanas las piedras lanzadas desde el exterior. Ante la conmoción inicial, sostiene Fuentes, el líder del movimiento nacionalista ordenó evacuar el lugar y que los militantes se retiraran a sus casas. Cumpliendo dicha orden, Castillo Fuentealba se dirigía a su hogar cuando fue alcanzado por un disparo realizado, según diversos testimonios, por Oscar Carpenter. Este individuo, según lo relatado por Fuentes, era un activista del PS que había pertenecido a la escolta personal de Allende y que luego tendría una rocambolesca travesía que lo llevó, con pasaporte falso, a Argentina, España y finalmente a Cuba[477].

El periódico *El Siglo*, sabiendo de la presencia de Rodríguez Grez en Chillán, apuntó a este como el autor de «la violencia criminal» desatada en esa ciudad. Tal afirmación era concordante con lo expresado por el Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, quien también había señalado como responsables del crimen al propio movimiento nacionalista y a su «cabecilla» Pablo Rodríguez[478].

[472] *La Discusión*, Chillán, 21 de diciembre de 1972, p. 1.
[473] *El Mercurio*, Santiago, 22 de diciembre de 1972, p. 1.
[474] *Qué Pasa*, n.º 89, Santiago, 28 de diciembre de 1972, p. 7.
[475] *Ercilla*, n.º 1954, Santiago, 27 de diciembre de 1972 al 3 de enero de 1973, p. 12.
[476] *La Discusión*, Chillán, 22 de diciembre de 1972, p. 2.
[477] Fuentes Wendling, *op. cit.*, pp. 171-172.
[478] *El Siglo*, Santiago, 22 de diciembre de 1972, p. 3.

Resultaba llamativo que este periódico, e inclusive la propia autoridad política, responsabilizaran al movimiento nacionalista de la muerte de su militante. Ello se explicaba, en parte, porque en un primer momento existió cierta confusión respecto a la verdadera afiliación de Castillo Fuentealba. Algunos medios habían especulado que militaba en las filas del PN o de la Democracia Radical, pero ninguna de estas colectividades emitía una declaración sobre el punto. La versión más certera la entregó el periódico regional *El Sur*, en su edición del 22 de diciembre, cuando corroboró que la víctima formaba parte de Patria y Libertad, incorporando, además, la declaración que hiciese la directiva regional de dicho movimiento. En el documento, los dirigentes señalaban que la noche del crimen, la sede local había sido atacada por miembros de la Brigada Ramona Parra del PC[479].

El 27 de diciembre se celebró una reunión especial del Senado que se ocupó de los recientes hechos de violencia y en particular de lo ocurrido en Chillán. El punto neurálgico del discurso opositor fue recalcar que la violencia constituía una práctica habitual en la línea programática de la UP. Asimismo, se acusó que Carabineros habría recibido la orden de no actuar con suficiente antelación en Chillán a efecto de evitar los incidentes. El ministro del Interior, Carlos Prats, respondió que el día 20 de diciembre coincidieron diversos hechos de carácter político en dicha ciudad, siendo las elecciones universitarias y una reunión del movimiento Patria y Libertad los eventos más destacados. Cerca de las diez de la noche, detalla el secretario de Estado, los estudiantes de la Unidad Popular realizaron un desfile en torno a la plaza de armas de la ciudad, el cual fue interceptado por elementos de Patria y Libertad produciéndose numerosos enfrentamientos. Fue en ese contexto, según Prats, cuando se produjo un choque armado en la intersección de las calles Arauco y Roble, escenario donde se llegaron a percutir cerca de quince tiros que dejaron tres personas heridas, uno de los cuales, Héctor Castillo Fuentealba, fallecería luego en el Hospital[480].

[479] *El Sur*, Concepción, 22 de diciembre de 1972, p. 14.

[480] Senado, *Diario de sesiones*, 55.ª sesión extraordinaria, miércoles 27 de diciembre de 1972, pp. 2231-2238. El certificado de defunción de la víctima corrobora que su muerte se produjo en el Hospital de Chillán por una herida a bala en el hemitorax derecho que le causó un *shock* de anemia aguda. Adicionalmente, el documento fija la hora de muerte

Finalmente, se conocería la versión del FNPL a través de su revista oficial que salió a circulación el 28 de diciembre de 1972. Dicha edición rindió un sentido homenaje a su primera víctima fatal, sosteniendo, además, y sin ninguna duda, que los autores del crimen fueron miembros de la UP. Según el editorial, los victimarios habían actuado, en atención a los desórdenes que se habían producido en Chillán, en el contexto de una «agitada noche de disturbios y borrachera violentista». A la hora de englobar el significado del homicidio de Castillo Fuentealba bajo categorías más amplias la publicación sostuvo que aquel era el «primer mártir nacionalista asesinado por un marxista»[481].

Bajo este ángulo interpretativo, las características personales de la víctima —y también las del victimario— quedaban de algún modo supeditadas a nociones ideológicas más trascendentes. Es decir, Castillo Fuentealba era ante todo un «mártir nacionalista» que había caído bajo las balas percutadas por un marxista. De este modo, el FNPL intentaba proyectar el crimen hacia una perspectiva de análisis más global, que sobrepasara su particularidad hasta instalarse como una lucha política e ideológica entre el nacionalismo y el marxismo. Tal ejercicio se explicaba en virtud del contexto nacional que se vivía, donde la noción de confrontación global era sin duda relevante. Con todo, la conexión de lo particular a dinámicas más estructurales no era, en estricto rigor, una cuestión endosable solo al movimiento nacionalista chileno, pues ello constituía una práctica recurrente y transversal a casi todos los actores del periodo.

La investigación de José Díaz Nieva sobre Patria y Libertad señala, en tanto, una consecuencia adicional derivada de la muerte de Castillo Fuentealba. Esta consistió en que a partir del crimen los entrenamientos en artes marciales e instrucción paramilitar se intensificarían al interior del movimiento. Tal decisión significaba que Patria y Libertad aceptaba de forma explícita el uso de la violencia como método de acción política, por lo que las órdenes de rehuir la confrontación con los grupos de choque de la izquierda quedarían, de facto, derogadas[482].

---

de Castillo Fuentealba a las 00:30 del día 21 de diciembre. "Certificado de defunción de Héctor Castillo Fuentealba", Chillán, 21 de diciembre de 1972, n.º de inscripción 1001, folio 15721006, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 26 de mayo de 2016].

[481] *Patria y Libertad*, n.º 26, Santiago, 28 de diciembre de 1972, pp. 1 y 2.

[482] José Díaz Nieva, *Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular*, p. 184.

Visto en su conjunto, la muerte del militante frentepatrista «pendulaba» entre el clima de polarización vivido con el paro de octubre y los enfrentamientos políticos que se manifestarán más adelante en virtud de la campaña electoral parlamentaria. Situado entre ambos puntos, la muerte de Castillo Fuentealba era una bisagra temporal que articuló no solo el cierre de un año y la apertura de otro distinto, sino también algunas de las dinámicas más representativas del conflicto que se estaba desarrollando en Chile.

La batalla electoral, enero a febrero de 1973

Los meses de enero y febrero estuvieron en gran parte determinados por la coyuntura electoral de los comicios del 4 de marzo. En el ambiente todavía se dejaba sentir el trasfondo político y social derivado del paro de octubre del año anterior, el cual dejó algunas interrogantes y dilemas que no se resolvieron en su totalidad. Desde luego estaba el problema de las empresas tomadas por los trabajadores para que pasaran al Área de Propiedad Social. En paralelo, surgió el tema de la distribución de alimentos, situación que se había tornado particularmente compleja en el marco de la huelga patronal. Para afrontar ambas problemáticas, el gobierno de la UP impulsó la elaboración de dos proyectos estratégicos con miras a normalizar la situación[483]. Esta iniciativa buscaba sentar las bases de una mejor coordinación en el oficialismo y al mismo tiempo abrir la posibilidad de un entendimiento con la DC. En términos generales, los planes de normalización buscaban contribuir a la creación de un clima de estabilidad institucional de cara a la celebración de los comicios parlamentarios. Sin embargo, pronto se observó que los objetivos del Gobierno deberían afrontar no solo las críticas de la oposición, sino también los cuestionamientos provenientes desde la propia izquierda.

[483] Respecto al tema de las industrias y empresas requisadas, los ministros Prats y Millas elaboraron una propuesta que en sus puntos nodales planteaba la devolución de algunas de estas unidades, la regularización de las que pasarían al APS y la fijación de los montos de indemnización. Para afrontar el problema de desabastecimiento, el ministro de Economía, Fernando Flores, intentó paliar sus efectos a través de organizaciones populares, como las JAP, las cuales se encargarían directamente de la distribución de alimentos en los barrios. Para más referencias, véase, Corvalán Marquéz, *Los partidos…*, *op. cit.*, pp. 250-251.

De hecho, la pugna entre los dos partidos eje de la UP, en torno al tema de las vías de conducción y construcción del socialismo, se incrementaba día a día. Esto significaba la existencia de un debate complejo para la viabilidad del proyecto popular, ya que a partir de diagnósticos y propuestas por lo general excluyentes resultaba muy difícil coordinar una estrategia de acción común. El agrietamiento fue todavía más visible, como señala Luis Corvalán Marquéz, cuando el MAPU y la IC sufrieran procesos de mayor radicalización a partir de la paralización de octubre[484].

Como si las rupturas y disensos que se observaban en la izquierda no fueran suficientes para incrementar la tensión dentro del sistema político, el Frente Nacionalista Patria y Libertad expuso, a mediados de enero, su tesis sobre la «ofensiva civil». Tal pronunciamiento, enunciado por su líder Pablo Rodríguez Grez, venía a confrontar la propuesta del PN que tiempo atrás había levantado la idea de la «resistencia civil» a la UP. Para Rodríguez, el propósito de la resistencia solo envolvía un carácter pasivo en la lucha que se libraba contra el Gobierno, por lo que resultaba imperativo reforzar una idea en torno a un posicionamiento más decidido y frontal. Según Manuel Fuentes Wendling, la idea de la ofensiva civil se explicaba en función de tres elementos. Primero, que la eventual derrota electoral de la UP en marzo no significaría que ella dejara de forma automática el poder, ni menos que desecharía la idea de seguir construyendo el socialismo en Chile. En segundo lugar, Fuentes señalaba la existencia de un quiebre evidente al interior de las FF.AA., lo que suponía una

[484] Las diferencias entre el PS y el PC quedaron plenamente expuestas a través de la correspondencia que intercambiaron los secretarios generales de ambas colectividades en la primera quincena de febrero de 1973. Uno de los puntos centrales que se abordó allí tuvo que ver con el tema del poder popular. Mientras Luis Corvalán, planteaba su rechazo a un poder popular independiente y situado como germen de un nuevo estado socialista, Carlos Altamirano sostuvo que aquel debía contribuir en la derrota de los obstáculos que planteaba la legalidad burguesa a la UP. La situación del MAPU y la Izquierda Cristiana también orbitaba en torno a estos tópicos. Para el secretario general mapucista, Óscar Guillermo Garretón, el proceso revolucionario chileno debía concentrarse en la formación de un vasto poder popular que permitiera destruir el Estado burgués e instaurar la dictadura del proletariado. La IC, en tanto, reafirmó la idea según la cual la etapa de los resquicios legales ya se había agotado por lo que el protagonismo debía jugarlo ahora el poder popular a través de los comandos comunales de trabajadores. El detalle de estos pronunciamientos en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 252-266.

situación riesgosa que se debía abordar. El tercer elemento radicaba en que existía el peligro cierto de que se produjera una guerra civil[485]. Frente a todo ello, sentenciaba el dirigente frentepatrista, resultaba imperativo que el movimiento nacionalista propusiera una vía para confrontar al Ejecutivo y, además, lograra cierta rearticulación de las piezas del tablero político, sobre todo en relación a las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, en su discurso Rodríguez mencionó un aspecto práctico de la denominada «ofensiva civil» que se llevaría a cabo, el cual tenía relación con el surgimiento de ciertas estructuras internas dentro del frente. El líder del movimiento nacionalista sostuvo, en efecto, que se crearía la Escuadra Héctor Castillo Fuentealba, unidad que reuniría en su interior a los mejores militantes de la causa nacionalista[486]. Tal propuesta resultaba interesante porque, en primer lugar, vino a corroborar la disposición anímica y estratégica de este grupo por llevar a cabo acciones que involucraran el uso de la violencia. Dicha práctica no era en todo caso una cuestión nueva, pues la participación de militantes frentepatristas en enfrentamientos y peleas callejeras se venía observando desde hacía meses en el país. Ahora, simplemente se explicitaba que dichos propósitos se articulaban en torno a una estructura orgánica que sería conocida para la opinión pública. En segundo lugar, el nombre de la escuadra recordaba a la primera víctima de esta organización, que había sido asesinada en diciembre del año anterior en la ciudad de Chillán. Con ello se ponía de manifiesto —como ya había sucedido con otros partidos y movimientos— que el martirio de los militantes era parte constitutiva de la memoria política de estas colectividades.

Considerando estas coordenadas, las posibilidades de aislar los próximos comicios parlamentarios de un contexto que todavía continuaba con niveles altos de tensión serían mínimas. Desde ya, la idea de una lucha global —y bipolar— que tenía en la continuidad del proyecto de la UP el principal objeto de discusión se mantendría sobrevolando en el espacio público. En ese marco, la sociedad civil tendría otra vez un rol destacado en la materialización de distintos conflictos durante estos meses. Así, los problemas institucionales

[485] Fuentes Wendling, *op. cit.*, pp. 175-176.
[486] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 279.

y las tensiones derivadas de la discusión política entre los partidos confluirían con las propias expectativas y cursos de acción de la sociedad civil.

En ese marco, la violencia política no tardaría en aparecer en torno a la campaña parlamentaria. Para Joaquín Fermandois, las muertes de civiles acontecidas en el periodo electoral, unido a los desórdenes y enfrentamientos callejeros entre distintos grupos, resultaba algo insólito en el país, al menos desde fines de la década del treinta[487]. En efecto, desde el mes de enero a febrero hubo cuatro víctimas fatales[488] y los incidentes que terminaron con personas heridas por impacto de balas, objetos contundentes o por golpes de distinta naturaleza, fueron numerosos[489]. A ello habría que agregar los ataques a sedes políticas en diversos puntos del país[490].

[487] Fermandois, *op. cit.*, p. 605.

[488] Las cuatro muertes que esta investigación ha constatado están relacionadas a conflictos de naturaleza política. Existen, sin embargo, algunos casos de fallecidos en estos meses en que el carácter político del incidente no ha podido ser corroborado con precisión. En esta línea figura la muerte de Carlos Subercaseaux Lyon ocurrida en la madrugada del 1 de enero en el Restaurant Charles del sector oriente de la capital. La víctima habría tenido una discusión de connotaciones políticas con dos sujetos centroamericanos, uno de los cuales disparó, según la versión periodística, cinco proyectiles con un arma de calibre 9 mm. Sin embargo, el medio que recoge esta noticia aporta las declaraciones del subsecretario de relaciones exteriores, Luis Orlandini, quien calificó el hecho de sangre como policial, «vulgar y corriente». Véase, *La Segunda*, Santiago, 2 de enero de 1973, p. 20. Otro incidente confuso se produjo el 2 de febrero. Según un periódico capitalino, un individuo identificado como Ramón Gárate fue asesinado por miembros de la BRP del Partido Comunista. Véase, *Tribuna*, Santiago, 21 de febrero de 1973, p. 12. La versión de otro medio es distinta, pues califica el hecho como meramente delictual. Véase, *La Tercera*, Santiago, 2 de febrero de 1973, p. 39.

[489] Algunos de estos hechos no tuvieron que ver, en estricto rigor, con la campaña electoral. Tal fue el caso de los incidentes ocurridos el 6 de enero en algunos terminales de buses y ferrocarriles de la capital debido al paro iniciado por los trabajadores de varias líneas de buses interprovinciales que protestaban por el despido de sus colegas de la empresa Vía Sur. Los manifestantes exigían, además, la salida del interventor nombrado por el Gobierno en esa empresa. Véase, Salazar, M., *op. cit.*, p. 277.

[490] El senador democratacristiano José Musalem —que postulaba a la reelección de su cargo por la Provincia de Santiago— recuerda que en este periodo fue objeto de numerosos ataques y atentados. En uno de ellos, un automóvil sin patente interceptó la caravana de vehículos que lo transportaba procediendo a disparar cuatro proyectiles en contra de su comitiva. En otro incidente similar, piedras y balines de acero lanzadas con hondas pulverizaron el parabrisas del automóvil que llevaba al parlamentario de visita a San Antonio. Frente a estos hechos, reconoce Musalem, no tuvo otra alternativa que «contratar a un ex oficial de Ejército en retiro para que resguardara mi seguridad». Musalem, *op. cit.*, pp. 178-181.

El primer incidente que culminó con la muerte de una persona en este periodo se produjo el domingo 7 de enero en el sector poniente de la capital. Ese día, se llevó a cabo en la Población Las Casas de la comuna de Barrancas un acto de proclamación de la candidatura senatorial de Volodia Teitelboim. El mitin se había concentrado afuera de una vivienda particular ubicada en la calle Salvador Gutiérrez, lugar hasta donde concurrieron decenas de personas incluyendo al propio Teitelboim. Al término del encuentro, se produjo una pelea entre partidarios de la UP y miembros de la oposición que acabó con la muerte del militante comunista, José Tomás Pino Navia, producto de un disparo[491].

La prensa oficialista endosó la autoría del crimen a sectores de derecha. En su edición del 8 de enero, el periódico *El Siglo* informó que el autor material del crimen era Humberto Hernández, alias el Beto, quien se desempeñaba, junto a su padre, en tareas de propaganda y agitación para el Partido Nacional. Según detalla este medio, Hernández junto a otras personas atacaron al presidente de la JAP del sector, Agustín Lagos, situación que fue advertida por Pino Navia quien concurrió junto a otros compañeros a defender a Lagos. En ese instante, el Beto hizo uso de una pistola calibre 38 con la cual atacó al militante comunista matándolo instantáneamente[492]. En su edición del 9 de enero, este mismo periódico aportaría el testimonio de Agustín Lagos, quien sostuvo que Pino Navia fue asesinado por «fascistas» pertenecientes al Comando Roland Matus y a Patria y Libertad. En base a este testimonio, *El Siglo* titularía la noticia haciendo hincapié en la relación entre los victimarios y la derecha: «Fascistas de Jarpa asesinaron a obrero del PC» indicaba el rotativo[493].

A partir de esta denuncia y como ya había ocurrido en otros casos, el crimen se situaba bajo categorías globales que permitían darle un sentido más amplio a la lucha política en curso. En este caso, los atacantes de Pino Navia y el candidato a senador del PN,

[491] El certificado de defunción de la víctima corrobora que la muerte de Pino Navia se produjo por una herida a bala. "Certificado de defunción de José Pino Navia", Santiago, 7 de enero de 1973, n.º de inscripción 95, registro E1, folio 17126543, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 28 de junio de 2016].

[492] *El Siglo*, Santiago, 8 de enero de 1973, p. 1.

[493] *El Siglo*, Santiago, 9 de enero de 1973, p. 3.

Sergio Onofre Jarpa, fueron comprendidos, desde la óptica comunista, como representantes genuinos de la ideología fascista. En una óptica similar se situaron las palabras de Teitelboim quien condenó el crimen, solicitando poner una «camisa de fuerza» a los asesinos de la derecha. Además, el dirigente sostuvo que el pueblo defendería «por todos los medios» el derecho a desarrollar un proceso de cambios por un camino que no sería bañado por la sangre de la ciudadanía[494].

Otros medios de prensa entregaron versiones diferentes sobre lo ocurrido en la comuna de Barrancas. El vespertino *La Segunda* indicó, en su edición del 8 de enero, que Pino Navia junto a otros adherentes de la UP se habían enfrascado en una riña con militantes de la DC frente al número 6113 de la calle Salvador Gutiérrez. Habría sido una persona no identificada, según este medio, la que hizo un disparo con un revólver calibre 22 en contra del militante comunista[495]. El 10 de enero, este mismo periódico entregó nuevos antecedentes sobre lo sucedido. En dicha edición, publicó el testimonio de la pobladora Olga Vera, una reconocida militante democratacristiana del sector y testigo presencial, según *La Segunda*, del hecho de sangre ocurrido. De acuerdo a su testimonio, Pino Navia era un matón y delincuente del sector que servía como guardaespaldas de Agustín Lagos. En la noche del 7 de enero, indicaba la pobladora, ambos sujetos la habrían insultado y agredido en las afueras de su domicilio. Cuando logró zafarse del ataque buscó refugio en la casa de la familia Hernández, quienes la escondieron en una habitación. Casi de inmediato llegaron a ese lugar Pino Navia y Lagos quienes, continúa Vera, irrumpieron con violencia en el domicilio. Ante ello, uno de los hijos del matrimonio Hernández sacó un arma y disparó en contra del militante comunista[496].

Otra versión, en tanto, indica que Pino Navia junto a otros acompañantes se habría enfrascado en un enfrentamiento callejero con un grupo de militantes de la DC, uno de los cuales, le disparó a quemarropa[497]. El periódico democratacristiano, *La Prensa*, destacaría

[494] *El Siglo*, Santiago, 9 de enero de 1973, p. 5.
[495] *La Segunda*, Santiago, 8 de enero de 1973, p. 3.
[496] *La Segunda*, Santiago, 10 de enero de 1973, p. 2.
[497] *La Tercera*, Santiago, 9 de enero de 1973, p. 6

a través de diversos testimonios el perfil aparentemente delictivo de la víctima, la cual, además, se habría encontrado armada el día en que ocurrieron los hechos[498].

La mayor parte de las versiones descritas coinciden en resaltar el carácter político del crimen, no obstante las diferencias con que este fue presentado. Si para la prensa de izquierda la muerte de Pino Navia se conectaba a propósitos más generales por parte de la derecha —tendientes a obstaculizar la marcha del país hacia el socialismo—, para otros medios fue relevante resaltar lo confuso del homicidio, e inclusive el perfil en apariencia delictual de la víctima. Con todo, el crimen ocurrido en Barrancas reflejaba una situación que para entonces se tornó habitual en el país. Esta se refería a los numerosos enfrentamientos y disputas callejeras entre grupos rivales e incluso entre individuos que derivaban en ataques armados o peleas cuerpo a cuerpo. Existe, en este sentido, una alta probabilidad de que la muerte del militante comunista fuese precedida de algún tipo de conato o discusión entre miembros de distintos partidos políticos. Si bien no existe claridad sobre quién o quiénes iniciaron las agresiones, en el contexto que se vivía entonces ello no resultaba del todo relevante. A veces bastaban pequeñas razones e inclusive cuestiones de poca trascendencia para activar un conflicto que podía escalar en intensidad en pocos minutos.

Conforme avanzaban los días, los hechos de violencia política comenzaron a repetirse en distintos puntos del país. La mayor parte de los incidentes tenían una estrecha relación con la campaña electoral en marcha, de modo que los ataques entre brigadistas, e inclusive agresiones a los propios candidatos, comenzaron a ser periódicos. El día 16 de enero, por ejemplo, el candidato a diputado de la DC por Concepción, Arturo Frei Bolívar, fue atacado a balazos y piedras mientras participaba de un mitin en la Población Ferroviaria de dicha ciudad. El dirigente, que logró escapar ileso del ataque, declararía al periódico *El Sur* haber sentido toda la «violencia y el odio marxista» en contra de su persona[499]. Dentro de esa misma semana, el periódico

[498] *La Prensa*, Santiago, 9 de enero de 1973, p. 8.

[499] *El Sur*, Concepción, 17 de enero de 1973, p. 1. La investigación de José Díaz Nieva y Mario Valdés Urrutia sobre la violencia política en Concepción refiere que Frei Bolívar habría sufrido dicho ataque a mediados de febrero, aun cuando la referencia periodística que citan está fechada a mediados de enero. Se trata posiblemente de

Tribuna denunciaría de forma habitual un cúmulo de agresiones sufridas por brigadistas de los candidatos de la oposición, sobre todo de aquellos que pertenecían a la Juventud del PN[500].

En este contexto, respecto al clima de violencia existente, dos altos dirigentes del PN se pronunciarían. El 19 de enero, el presidente de la Juventud Nacional, Juan Luis Ossa, anunció que respondería sin titubear, e inclusive con armas de fuego, a las provocaciones y asaltos «marxistas» a militantes de su movimiento[501]. Al día siguiente, Sergio Onofre Jarpa, presidente de la colectividad y candidato a senador por Santiago, sería igual de explícito que su joven correligionario. En una declaración publicada por *La Segunda*, el dirigente nacional sostuvo que si no existían garantías para vivir y trabajar con seguridad se podría llegar a un punto en que los chilenos tendrían que hacer justicia por su propia mano y «devolver bala por bala»[502].

Como era de esperar, la prensa de izquierda destacó aquellas informaciones en que los incidentes y agresiones eran producidos por los grupos de derecha en contra de los militantes y organizaciones afines a la UP. Bajo esta orientación, el tema de las armas de fuego —que ya venía discutiéndose desde hacía tiempo en el país— copó un espacio significativo en algunos periódicos oficialistas. En su edición del 26 de enero, *Clarín* publicó una inserción del PS que mostraba la imagen de una mano empuñando un revólver en dirección al lector. En la parte inferior del dibujo se agregaba un mensaje que con grandes caracteres decía: «¡Cuidado Chileno! Estos es lo que los momios piensan de la democracia... Porque para ellos la democracia es algo que solo sirve para proteger sus mezquinos intereses y privilegios

---

una errata o una confusión, pues como se verá más adelante, Frei Bolívar volvería a ser agredido a mediados de febrero en la zona de Chiguayante ubicada también en Concepción. Véase, Díaz Nieva y Valdés Urrutia, *op. cit.*, p. 109.

500 Así habría sucedido, según este medio, con Mauricio Vásquez y Sergio Cisternas, quienes fueron baleados en el abdomen y en el rostro por miembros de la brigada socialista Elmo Catalán (*Tribuna*, Santiago, 20 de enero de 1973, p. 11). Otro hecho de similares características se produjo, según *Tribuna*, a fines de enero cuando ocho jóvenes, también del PN, fueron atacados a balazos en el sector de la Avenida Santa Rosa, al sur de la capital (*Tribuna*, Santiago, 25 de enero de 1973, p. 10). El vespertino *La Segunda*, en tanto, informaría del baleo a otro joven de esta colectividad mientras pintaba propaganda a favor del candidato Mario Arnello Romo, en el centro de Santiago (*La Segunda*, Santiago, 26 de enero de 1973, p.2).

501 *La Segunda*, Santiago, 19 de enero de 1973, p. 24.

502 *La Segunda*, Santiago, 20 de enero de 1973, p. 2.

de siempre»[503]. El mensaje refería, según la óptica socialista, a que los grupos dominantes estaban dispuestos a usar la violencia sin ningún pudor a efecto de defender sus intereses de clases. Por tal motivo, la democracia era una cuestión irrelevante para aquellos, es decir, carente de un significado moral en que se pusieran en práctica valores como la tolerancia o el respeto. En esta misma línea se insertó otra propaganda del PS publicada al día siguiente, también en el periódico *Clarín*. En ella se observaría el dibujo de una persona que va cayendo al suelo tras ser alcanzada por las balas de un arma de fuego que le impactan en la parte superior de su cuerpo. La imagen fue acompañada de un texto donde se hacía un recuento de todas las personas muertas bajo el gobierno de la DC, las que, según el inserto, llegaban a un total de 37[504]. Dicho mensaje, tenía como propósito fundamental poner otro punto de tensión en la campaña electoral que se llevaba a cabo en el país. Esta vez, el objetivo apuntaba a desprestigiar a la anterior administración y en particular al líder indiscutido de este partido, el expresidente Eduardo Frei Montalva, quien competía entonces por un asiento senatorial en la capital.

El clima de campaña, al finalizar enero, era sin duda tenso y polarizado. El ministro del Interior, general Carlos Prats, recuerda en sus memorias que el calor de la contienda se acentuaba «día a día» y que, pese a la labor de las fuerzas policiales por garantizar el orden público, los incidentes se repetían con «gravedad»[505]. El día 2 de febrero, Prats evacuó un informe preparado por su secretaría de Estado a través del cual se daba cuenta de todos los incidentes relacionados con la campaña electoral registrados entre el 6 y el 31 de enero de 1973. En su introducción, el documento señaló que la materialización de los hechos de violencia no era una cuestión que atingiera solo a la autoridad civil y uniformada, sino que resultaba imperativa una participación responsable de los dirigentes políticos. Estos, según el documento, tenían el deber de requerir a sus bases militantes para que no provocaran enfrentamientos, en los cuales —se insistía— era común que se utilizaran armas de toda especie[506].

[503] *Clarín*, Santiago, 26 de enero de 1973, p. 23.
[504] *Clarín*, Santiago, 27 de enero de 1973, p. 23.
[505] Prats, *op. cit.*, p. 356.
[506] "Informe del Ministerio del Interior sobre incidentes con motivo de la próxima elección parlamentaria", Santiago, 2 de febrero de 1973, en Prats, *op. cit.*, pp. 357-360.

Los datos estadísticos del informe, clasificados de acuerdo a diversas categorías, arrojaban cifras relevantes. Los detenidos por hacer propaganda mural sin permiso se elevaban a 449 personas, 241 pertenecientes a la UP y 208 a la oposición. Por portar armas de fuego se había detenido a 15 personas, 6 de gobierno y 9 de oposición. Los atentados a sedes y personas se elevaban a 30, siendo 12 de ellos en contra del oficialismo y 18 en contra de los partidos y miembros de la oposición. El documento también incluyó una lista de muertos y lesionados. En relación a los fallecidos, el documento indicó que eran tres personas, correspondientes a militantes del PN, del PC y de Patria y Libertad. En este punto en particular, solo se ha podido confirmar la muerte del militante comunista José Pino Navia, ocurrida a principios de enero[507]. Respecto a los lesionados se establecen tres categorías: graves, que suman cinco; menos graves, que suman cuatro y leves, cuyo número total es de 41 personas. Los números son parejos en cuanto a la pertenencia política de los lesionados, sobre todo en el caso de los graves y menos graves. Solamente en el caso de los lesionados leves se observa que la mayor parte de ellos corresponden a miembros de la oposición[508].

El conjunto de datos entregados por el Ministerio del Interior evidenciaba una situación que desde luego preocupaba a las autoridades. La campaña electoral había gatillado, en efecto, la materialización de numerosos hechos de violencia entre grupos y brigadas rivales bajo la perspectiva de controlar ciertos espacios, anulando de este modo a sus oponentes. En su dimensión más cruenta, los incidentes se tradujeron en ataques físicos, algunos fallecidos, y un número importante de lesionados de diversa consideración. Los treinta atentados en contra de sedes y personeros de distintos par-

[507] No se han encontrados antecedentes de que en el transcurso del mes de enero hayan muerto militantes del Partido Nacional o de Patria y Libertad. Es posible suponer que, dentro de los hechos de sangre ocurridos en este periodo, haya trascendido que alguna de las víctimas fatales perteneciera a estas agrupaciones, cuestión que luego sería corregida. De hecho, Patria y Libertad reconocería como su primer mártir a Héctor Castillo Fuentealba quien fue asesinado en diciembre del año anterior. Así pues, y de lo que se desprende de la prensa y algunas memorias de los dirigentes de este movimiento, no hay constancia de la muerte de un militante de sus filas en este periodo.

[508] "Informe del Ministerio del Interior sobre incidentes con motivo de la próxima elección parlamentaria", Santiago, 2 de febrero de 1973, en Prats, *op. cit.*, p. 360.

tidos durante el mes de enero arrojaban una cifra proporcional de casi un incidente cada 24 horas. Bajo este contexto, las autoridades estaban preocupadas por el cariz que iba adoptando la campaña electoral, cuyas consignas y declaraciones contribuían muy poco en descomprimir el ambiente.

Tres días después de dado a conocer el informe del Ministerio del Interior, un inquietante hecho de violencia se produjo en el sur del país. Según las primeras informaciones que comenzaron a llegar a la capital, un obrero de 26 años, identificado como Héctor Caamaño Montanares había sido asesinado a golpes en la ciudad de Traiguén[509]. Según la versión de *El Siglo*, Caamaño fue interceptado en la vía pública a la medianoche del 4 de febrero por Arturo Lohaus Dinamarca, presidente de la JN y miembro asimismo de Patria y Libertad. Este individuo, junto a otras cuatro personas según el matutino, se abalanzó sobre la víctima golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Fueron habitantes del sector quienes lograron trasladar a Caamaño hasta el hospital mientras los atacantes escapaban del lugar, finalizaba *El Siglo*[510]. La versión de *Las Noticias de Última Hora* concuerda con lo anterior, aunque entrega algunos detalles más puntuales del hecho. Según este medio, Lohaus y su grupo recorrían las calles de Traiguén y al encontrarse con Caamaño le preguntaron si era de izquierda. Ante la respuesta afirmativa del obrero, los atacantes comenzaron a golpearlo con violencia hasta abandonarle en plena calle. Este medio también afirmó que testigos habrían escuchado decir a Lohaus que la golpiza a Caamaño significaba «un voto menos» para la UP[511]. *El Diario Austral* coincidiría con la mayor parte de las versiones entregadas por los medios antes citados, agregando que tras ser atendido en el hospital de la ciudad Caamaño fue derivado a su hogar, lugar donde fallecería cuando era atendido por su esposa[512]. Finalmente,

[509] La prensa local de la ciudad de Traiguén, en especial, el periódico *El Colono de Traiguén*, tenía una circulación bastante restringida para ese entonces —lunes y jueves—, de modo que no fue posible encontrar noticias sobre este caso. Únicamente hubo una referencia el día 13 de febrero en la cual la esposa de Caamaño, María Quijada, publicó un pequeño aviso agradeciendo a las personas que la habían acompañado en el funeral de su marido. Véase, *El Colono de Traiguén*, Traiguén, 13 de febrero de 1973, p. 3.

[510] *El Siglo*, Santiago, 9 de febrero de 1973, p. 1.

[511] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 8 de febrero de 1973, p. 24.

[512] *El Diario Austral*, Temuco, 10 de febrero de 1973, p. 12. El certificado de defunción de la víctima no indica que esta haya muerto en el hospital de la ciudad por lo que

la versión del periódico *La Nación* fue similar a las anteriores, indicando además que los autores de la golpiza habrían sido dejados en libertad tras ser detenidos[513].

Las versiones de prensa consignadas permiten inferir cierta premeditación en la muerte del obrero Caamaño, sobre todo por el rol que habría jugado Lohaus al mando de un muy probable grupo de choque predispuesto a la lucha callejera. En este caso en particular, no se trató de una confrontación en igualdad de condiciones, pues como se vio, los testimonios apuntan a que Caamaño fue golpeado por un grupo de al menos cuatro personas. Esto ponía en evidencia no solo la asimetría del ataque sino también cierta dosis de alevosía para perpetrar una golpiza de esta naturaleza. El ambiente político se teñía así de un tono que opacaba los llamados de la autoridad a la tranquilidad y contención.

Tres días después de la muerte del obrero en la ciudad de Traiguén, otro hecho de violencia acabó con la vida de una persona. Se trató de Oscar Pineda Calisto, de 14 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza en el marco de unos incidentes callejeros que se produjeron en la ciudad de Valdivia el día 7 de febrero[514]. El parte de Carabineros sostuvo que en horas de la tarde un grupo de personas que se dirigía a una concentración oficialista procedió a apedrear la sede del PN ubicada en la intersección de las calles Chacabuco y Caupolicán. Los incidentes, continuaba el documento, dejarían daños de consideración en dicha sede además de una persona herida de gravedad producto de un disparo[515]. Esta información, que no responsabilizaba a un grupo

es presumible que ello se produjera, como indicaron los medios, en su hogar. La causa de muerte señalada en el documento anota una conmoción cerebral y hemorragia suprarrenal, fijando su hora de deceso a las ocho de la mañana. "Certificado de defunción de Héctor Caamaño Montanares", Traiguén, 5 de febrero de 1973, n.º de inscripción 21, folio 13381068, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 7 de abril de 2016].

513 *La Nación*, Santiago 9 de febrero de 1973, p. 1.

514 El certificado de defunción de la víctima corrobora que su causa de muerte fue una herida a bala cráneo encefálica y que su deceso se produjo en el Hospital de Valdivia el día 8 de febrero a las 23:30 horas. "Certificado de defunción de Oscar Pineda Calisto", Valdivia, 8 de febrero de 1973, n.º de inscripción 38, registro E, folio 16805197, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 20 de junio de 2016].

515 Parte policial de Carabineros de Chile, publicado en *El Correo de Valdivia*, Valdivia, 10 de febrero de 1973, p. 6.

o individuo en particular por la utilización del arma de fuego, contradecía la versión del diario local *El Correo de Valdivia* que acusó a turbas extremistas y elementos de la UP como los autores del baleo[516]. Por su parte, *El Mercurio* responsabilizó a una «horda marxista» de asaltar la sede del PN y percutar la bala que mató a Pineda Calisto[517]. En esa misma línea circulaba la versión del vespertino *La Segunda* que tituló el hecho como «Nuevo crimen del marxismo»[518]. Y el diario *Tribuna* no se quedaría atrás a la hora de responsabilizar a la izquierda por lo sucedido en Valdivia, declarando que fue un grupo de socialistas los culpables de la muerte de Pineda Calisto. El menor se transformaba así, según *Tribuna*, en «otra víctima del terrorismo rojo»[519].

En cuanto a la prensa oficialista, esta cubrió de forma parcial la muerte de Pineda Calisto. *El Siglo*, por ejemplo, advirtió luego de tres días de ocurrido el fallecimiento que el caso había tenido un vuelco. Según este periódico, los informes policiales y de autopsia del menor, indicaban que la bala que lo hirió mortalmente provino desde la propia sede del PN[520]. El PS, en tanto, emitiría una declaración pública sosteniendo que las provocaciones y disparos producidos en la tarde del día 7 de febrero provinieron desde un balcón de la sede del partido opositor[521].

La militancia de la víctima, en tanto, también fue objeto de polémica. Algunos medios señalaron que el fallecido militaba en el PN, afirmación que se apoyaba en una inserción que la directiva regional de esta colectividad publicó en la prensa local de Valdivia[522]. Sin embargo, la familia de Pineda Calisto rechazaría de plano el vínculo con la colectividad opositora haciendo un llamado a desmentir que el menor tuviera militancia política[523].

Aunque los antecedentes entregados por la prensa no permiten dilucidar con total claridad la responsabilidad del crimen, se pueden

[516] *El Correo de Valdivia*, Valdivia, 9 de febrero de 1973, p. 1.

[517] *El Mercurio*, Santiago, 9 de febrero de 1973, p. 21.

[518] *La Segunda*, Santiago, 9 de febrero de 1973, p. 1.

[519] *Tribuna*, Santiago, 10 de febrero de 1973, p. 12.

[520] *El Siglo*, Santiago, 11 de febrero de 1973, p. 3.

[521] Declaración pública de la Comisión Política del Partido Socialista, publicada en *El Correo de Valdivia*, Valdivia, 10 de febrero de 1973, p. 6.

[522] *El Correo de Valdivia*, *ibid*. La inserción del PN era firmada por el presidente provincial de dicha colectividad Eduardo Hunter Abarzúa.

[523] *El Correo de Valdivia*, *ibid*.

establecer algunas líneas de contexto que permitan comprender mejor este hecho. Una de ellas radica en que la muerte de Pineda Calisto estuvo precedida de un incidente entre grupos que se enfrentaban en el espacio público. El marco de fondo de este tipo de hechos era un cuadro amplio de polarización política que estaba conectado a las elecciones parlamentarias que se realizarían a inicios de marzo, las cuales fueron entendidas como una batalla abierta y frontal entre diversos movimientos. Es decir, esta coyuntura brindaba la oportunidad para salir a «disputar la calle» y los espacios públicos a los grupos contrarios, situación en que no era descartable el uso de la violencia. En otras palabras, la contingencia política, y con ella sus dinámicas de confrontación y radicalidad, estaban volcadas de preferencia hacia esos espacios, cuestión que en todo caso ya venía observándose desde hacía tiempo atrás en el país.

Desde mediados de febrero, los incidentes de violencia política fueron prácticamente diarios o con intervalos de tiempo muy cortos entre la ocurrencia de uno y otro. El día 12, por ejemplo, dos personas fueron heridas a bala en la ciudad de Osorno, en el marco de un enfrentamiento callejero entre militantes de la DC y el PS[524]. El 16 de febrero, según consigna el diario penquista *El Sur,* Arturo Frei Bolívar fue de nuevo atacado en un acto de campaña. Esta vez, el hecho se produjo en el sector de Chiguayante, donde el candidato habría sido herido con un elemento de gran tamaño pues, según la versión del periódico, el golpe le fracturó el cráneo[525]. Al calor de todos estos sucesos, el Ministerio del Interior debió evacuar un segundo informe sobre los hechos de violencia política que se produjeron en el país, esta vez extendiendo su rango temporal desde el 6 de enero hasta el 18 de febrero. En dicho documento se constataba un total de 853 propagandistas detenidos por no portar el permiso respectivo, mientras que otros 35 lo habían sido por portar armas de fuego. Esto quiere decir que desde el 1 de febrero la cifra de detenidos por esta última incidencia se había doblado en poco menos de 15 días. La misma situación ocurría con los atentados. Hasta fines de enero se registraron casi 30 incidentes de este tipo, mientras que desde esa fecha y hasta el 18 de febrero la cifra fue de 37 casos. Los lesionados

[524] *La Tercera*, Santiago, 12 de febrero de 1973, p. 17.
[525] *El Sur*, Concepción, 16 de febrero de 1973, p. 1.

graves, en tanto, sumaban 18, 13 de los cuales se produjeron en febrero, mientras que los menos graves eran 24, 21 de ellos también en febrero y los leves 77, con una dinámica estadística similar a los casos anteriores[526].



Imagen n.º 5. Arturo Frei Bolívar internado en un centro asistencial tras ser atacado con un objeto contundente en la cabeza en un acto de campaña en Chiguayante. *Ercilla*, n.º 1962, 21 al 27 de febrero de 1973. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

En estas circunstancias, los llamados por parte de la autoridad a reforzar el clima de entendimiento que permitiera bajar el nivel de conflictividad fueron continuos. El propio general Prats se reuniría el 26 de febrero con la mayor parte de los dirigentes políticos a efecto de que estos cancelaran cualquier tipo de concentración pública en torno al día de los comicios del 4 de marzo. Con ello, se buscaba evitar alguna incidencia o alteración grave del orden público. Según

[526] Salazar, M., *op. cit.*, p. 288.

Prats, la UP no logró aunar un criterio común al respecto, por lo que los partidos quedaron en libertad de acción para programar sus respectivas actividades[527].

El presidente Allende también realizó llamados a terminar con la violencia, aunque algunos de sus conceptos dejarían traslucir cierta ambigüedad. En un acto de masas celebrado el día 10 de febrero en el Estadio Nacional, Allende pronunció un encendido discurso donde refirió diversos temas del acontecer nacional. El punto nodal de su intervención era poner en evidencia las oscuras maquinaciones de ciertos sectores de la oposición que, en alianza con el imperialismo, buscaban derrocar el proyecto popular a través de la desestabilización y el caos. El primer mandatario fue muy enérgico para remarcar que el pueblo no quería ni necesitaba «la violencia» y que más aún, aquel había colaborado con el Gobierno y las Fuerzas Armadas para hacer respetar la ley. Sin embargo, este criterio —que remarcaba la importancia del marco institucional para conducir el proceso— se vería de algún modo ensombrecido cuando Allende reconociera que la actitud del pueblo frente a la sedición no podría ser pasiva. El primer mandatario advertiría, en efecto, que cuando la contrarrevolución se saliera de los «moldes legales» no sería posible evitar que el pueblo respondiera con la «violencia revolucionaria»[528].

Aunque esta fue una idea que Allende señaló en diversas ocasiones, aquella no fue en estricto rigor conceptualizada según los lineamientos que el propio mandatario sugería. Con ello, se dejaba el tema de la violencia revolucionaria en una frontera un tanto ininteligible para la mayor parte de la población, pudiendo interpretarse desde distintos ángulos. Quizás, de modo implícito, se entendía que ella correspondía a situaciones excepcionales en que una vez agotados los mecanismos de resolución legal se abría el campo para demostraciones de fuerza y coacción en contra de ciertos grupos de la oposición. El problema de este tipo de declaraciones radicaba en que, a pesar de su importancia en la transición institucional del proceso de reformas, dejaba sobre la mesa algunas ideas o conceptos que podían activar ciertos estados de ánimo proclives al enfrentamiento.

[527] Prats, *op. cit.*, p. 364.

[528] "Salvador Allende: Discurso en el acto de masas en el Estadio Nacional", 10 de febrero de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, p. 4190.

Adicionalmente, las declaraciones que abogaban por la defensa de una vía gradual e institucional para conducir el proceso chocaban también con las aspiraciones más radicales de otros actores de la izquierda. Ejemplo de esto último, fue el discurso del secretario general del PS, Carlos Altamirano, al inaugurar su campaña senatorial por Santiago en febrero de 1973. En una larga intervención, el dirigente socialista redundó en algunas cuestiones que ya formaban parte de su habitual repertorio discursivo. Así, por ejemplo, sostuvo que los cruciales momentos por lo que atravesaba el proyecto de la UP requerían radicalizar las medidas que se tomaban en contra de la burguesía, sin olvidar que lo que se vivía era un proceso revolucionario y no una revolución en sí misma. En este sentido, lo que se debía consolidar como requisito previo era la transformación de la conciencia de clase en «conciencia revolucionaria». Respecto a las próximas elecciones, el dirigente sostuvo que estas no constituían en ningún caso una instancia plebiscitaria, pues la revolución no se lograba mediante la suma de votos «disímiles», sino mediante la lucha consciente y organizada de las masas. Bajo esta perspectiva, los comicios eran, según Altamirano, una mera «coyuntura táctica», siendo lo relevante el salto adelante «...en el camino hacia la conquista del poder para los trabajadores»[529].

Como se puede advertir, en el espacio público de mediados de febrero circulaban un conjunto de discursos cuyos propósitos iban en distintas direcciones. Si los llamados de las autoridades solicitaban respetar el orden público evitando los enfrentamientos y los hechos de violencia en general, otros actores optaban por insistir en aquellos puntos que definirían la viabilidad del proyecto popular en el corto plazo. Esto último suponía explicitar un abanico amplio de consignas que referían a conflictos y batallas ineludibles para el proceso socialista y en los cuales la confrontación no estaría en ningún caso ausente.

A pesar de la insistencia de las autoridades por mantener dentro de la ley la campaña electoral, los hechos de violencia no dejaron de disminuir. En la madrugada del 19 de febrero, un militante democratacristiano identificado como Jaime Iglesias Contreras murió en

[529] "Carlos Altamirano: Discurso inaugurando su campaña senatorial", febrero de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4231-4233.

un confuso incidente con brigadistas del PC en la zona norte de la capital. Como ya era habitual en este tipo de incidentes, las versiones de prensa sobre este hecho difirieron en distintos aspectos. Según *El Siglo*, un grupo indeterminado de brigadistas pertenecientes a la DC y al Comando Rolando Matus intentaron asaltar la sede comunista ubicada en el sector de Quilicura. En el enfrentamiento, continúa el periódico, resultó herido de gravedad Jaime Contreras Iglesias, quien se movilizaba en uno de los camiones que participó en la refriega[530]. El matutino *La Nación*, además de coincidir con la versión anterior, criticó a la prensa opositora por intentar atribuir este crimen a miembros de la izquierda, pues con ello se buscaba, según este medio, desprestigiar el próximo evento electoral[531]. *Las Noticias de Última Hora,* por su parte, entregó la misma versión que los medios anteriores pero enfatizando en el perfil supuestamente delictivo de la víctima quien tenía, según este diario, varias órdenes de detención pendientes. De hecho, se le sindicó como guardaespaldas en la candidatura de Jorge Alessandri el año 1970, integrándose luego a los grupos de choque de la DC[532]. No obstante este tipo de antecedentes, en la prensa oficialista no se negaría la existencia de un enfrentamiento armado entre los grupos involucrados.

Los diarios de oposición, en tanto, fueron tajantes a la hora de atribuir el crimen a miembros de la izquierda. Según *El Mercurio*, Contreras Iglesias fue atacado a balazos junto a otras personas desde el interior de una propiedad por «elementos marxistas». Este medio informaba también que la causa de muerte de la víctima fue una herida a bala en el corazón[533]. El periódico *Tribuna* divulgó la versión del chofer que conducía uno de los vehículos que fueron alcanzados por las balas. Según este testimonio, cuando los dos camiones y un autobús pasaban frente a un campamento ocupado por elementos del PC, estos comenzaron a hacer «tiro al blanco» en contra de los vehículos hiriendo así al brigadista de la DC[534]. El periódico *La Prensa* sostuvo que Contreras Iglesias fue baleado y «rematado» con alevosía

[530] *El Siglo*, Santiago, 20 de febrero de 1973, p. 3. La mayor parte de la prensa cambió el orden de los apellidos de la víctima de Iglesias Contreras a Contreras Iglesias.
[531] *La Nación*, Santiago, 22 de febrero de 1973, p. 5.
[532] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 21 de febrero de 1973, p. 24
[533] *El Mercurio*, Santiago, 20 de febrero de 1973, p. 1.
[534] *Tribuna*, Santiago, 20 de febrero de 1973, p. 13.

por militantes comunistas. Junto con ello, este rotativo indicó que la caravana de automóviles que pasaba frente al campamento fue impactada por más de 250 proyectiles. También se indicaría que los brigadistas democratacristianos no tuvieron ninguna posibilidad de repeler el ataque, pues no portaban armas de ningún tipo[535].

El certificado de defunción de la víctima ayuda a clarificar algunos elementos del caso. En primer término, fija su fallecimiento a las 03:45 horas en el hospital José Joaquín Aguirre, lo que indica que la víctima alcanzó a recibir algún tipo de asistencia médica[536]. En segundo término, la causa de muerte indicada en el documento señala una herida a bala por perdigones, lo cual implicaría la afectación en diversas zonas del cuerpo dado el volumen y amplitud de impacto de este tipo de proyectiles. De este modo, la tesis del periódico *La Prensa* en orden a que la caravana de vehículos fue atacada por un alto número de proyectiles pareciera verse respaldada.

El incidente que acabó con la muerte del joven militante de la DC respondía a una dinámica que ya se había transformado en habitual en estos meses. Aunque no se saben detalles precisos sobre el origen de este suceso, resulta muy probable que el ataque armado fuese precedido de algún tipo de enfrentamiento verbal o escaramuzas entre los grupos involucrados. Con todo, no es posible descartar *a priori* un ataque unidireccional de los brigadistas del PC hacia la columna de vehículos de la DC, aunque ello resultaría más difícil por las condiciones del lugar: una zona para entonces semirural y con poca iluminación lo que dificultaría el campo visual de quienes estaban armados.

Cuando comenzaba a llegar a su fin la campaña electoral se produjo un hecho que causaría hondo impacto en las filas del nacionalismo chileno. El día 23 de febrero, algunos medios de prensa informaron que el avión que pilotaba Roberto Thieme, secretario general del FNPL, cayó al mar en las costas de la octava región del país[537]. Se especuló entonces que podría tratarse de un atentado ya

[535] *La Prensa*, Santiago, 20 de febrero de 1973, p. 9.

[536] "Certificado de defunción de Jaime Iglesias Contreras", Santiago, 19 de febrero de 1973, n.º de inscripción 381, registro E1, folio 16805761, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 20 de junio de 2016].

[537] Salazar, M., *op. cit.*, p. 289.

que la nave se habría incendiado antes de caer. Por las circunstancias y contexto en que se había producido, la desaparición de Thieme podía vincularse sin duda al clima de violencia y beligerancia que se vivía en esos momentos. Tras algunos días de infructuosa búsqueda, Patria y Libertad parecía convencido de que su secretario general había fallecido. En virtud de ello, apunta José Díaz Nieva, comenzaron a realizarse numerosos actos en su memoria, destacando un funeral en la capilla del hospital San Borja y un acto de masas en el Teatro Normandie el domingo 11 de marzo. En este último encuentro, Pablo Rodríguez señaló que había llegado el momento de que el nacionalismo fuese la alternativa al «totalitarismo marxista»[538]. Días más tarde, otro acto del movimiento nacionalista, esta vez realizado en las calles del centro de la capital, volvería a homenajear a quien comenzaba a transformarse en el segundo mártir de Patria y Libertad. Sin embargo, esta historia no terminaría aquí. Meses más tarde se tendrían sorprendentes noticias sobre Thieme[539].

Lo que sí llegaba a su fin era el periodo preelectoral de campaña. Aunque este tema compartió escenario con otros eventos y problemáticas, por ejemplo, con el rol de las JAP, su densidad y permanencia a lo largo del tiempo fueron predominantes. Y si bien en el pasado se produjeron hechos de violencia vinculados a campañas electorales, estos no alcanzaron la intensidad de lo observado entre enero y febrero de 1973. Los informes de las autoridades civiles, basados en su gran mayoría en investigaciones policiales, daban cuenta de cientos de detenidos e incidentes de diversa naturaleza. No lejos de estas cifras se ubicaban las personas lesionadas bajo distintos niveles de gravedad. Aunque los fallecidos no representaron una estadística tan alta, las características que rodearon la muerte de cada una de estas personas evidenciaban signos inquietantes de polarización en la sociedad. Por cierto, este clima no surgió espontáneamente, pues él se derivaba de conflictos preexistentes y dinámicas de confrontación que mostraban un recorrido ya largo en el país.

Asimismo, cabría puntualizar que el elemento civil en la materialización de los hechos de violencia política sería otra vez consistente y

538 José Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, p. 195.

539 Para el relato en primera persona de estos hechos véase Thieme, *op. cit.*, pp. 97-103.

mayoritario. No hay indicios en estos meses de acciones de violencia de alto impacto perpetrados por los cuerpos militares o policiales Los espacios públicos fueron, en este sentido, un campo abierto para el protagonismo de la violencia política civil a través de distintas dinámicas de interacción donde el uso de armas de fuego fue periódico. El testimonio de un brigadista, recogido a finales de marzo de 1973, puede ser representativo de esta situación. Se trata de Iván Escobar Sepúlveda quien ante la Policía de Investigaciones afirmó:

> Desde el año 1969 soy militante de la DC. Integro el comando de Arturo Frei Bolívar desde el 2 de febrero pasado. En el comando he conocido a Fernando Coopman, a Roberto Vásquez, a Guillermo García, a Erwin Aguilera, a Alejandro Hidalgo... Hace dos meses a la fecha Erwin me ofreció en venta un revolver chico de color blanco en la suma de 1500 E.°. Tengo conocimiento que [Erwin] tenía varios revólveres porque los andaba trayendo en un maletín negro. Me contó en aquella ocasión que estas armas eran de su padre quien se las pasaba para venderlas[540].

Por el tenor de estas declaraciones, y los hechos de violencia que se produjeron, no cabe duda que la campaña parlamentaria fue concebida en gran medida como una confrontación abierta entre grupos políticos rivales. Bajo este esquema, los militantes y brigadistas hicieron una lectura tan radical y polarizada como la que hacían algunos dirigentes políticos. Se sobreentendió, pues, que la lucha por el control de los espacios y los ataques entre grupos rivales era parte sustancial de la propia campaña. Aunque desde el gobierno se enfatizó en reiteradas ocasiones en la importancia de que predominara un clima de orden y tolerancia, el día a día mostraba una disposición anímica que iba en sentido contrario.

En la noche del 27 de febrero, a menos de cinco días de los comicios parlamentarios, el ministro del Interior debió reunirse con todo el gabinete para abordar una larga lista de problemas que aún sacudían al país. A los conflictos económicos y sectoriales se agregaba

[540] "Declaración de Iván Escobar Sepúlveda", Concepción, 28 de marzo de 1973, *Colección histórica de homicidios, 1947-2008*, Jefatura Nacional de Homicidios, Policía de Investigaciones de Chile.

el de la «violencia del proceso preelectoral», que a esa altura estaba ya internalizado como un problema casi insoluble en los análisis de la mayoría de los dirigentes y ministros[541].

Resolución del conflicto en punto muerto y surgimiento de nuevos problemas, marzo a mayo de 1973

En tránsito hacia marzo, la mayor parte de los eventos estuvieron vinculados, por supuesto, a la contienda electoral del día 4. Diversos pronunciamientos se orientaron con mayor o menor intensidad hacia esa importante coyuntura. Al cerrar su campaña senatorial por Santiago, el expresidente Eduardo Frei Montalva pronunció un discurso en que tocó varios puntos. De entrada, señaló la existencia de un proceso de «destrucción sistemática» en el país como nunca antes se había visto en la historia. En efecto, según Frei, Chile estaba detenido y estancado producto de una política «sin destino» y amenazado, además, «por el odio, la violencia y por la mentira organizada». Para revertir tal situación, el expresidente pedía un apoyo masivo a su candidatura para la elección del día domingo, coyuntura que fue definida por éste como un verdadero plebiscito. Al finalizar su discurso, Frei sostuvo —cual premonición— que el país vivía y vivirá «horas muy difíciles»[542].

Por su parte, el secretario general del PC, senador Luis Corvalán Lépez, refirió en un mensaje televisado del día 3 de marzo dos puntos esenciales sobre los próximos comicios. En primer lugar, y en clara alusión a lo que había sostenido Frei Montalva, el dirigente comunista sostuvo que en ningún caso estas elecciones constituían un plebiscito, pues de lo contrario se trataría de una teoría «sediciosa e inconstitucional». Por lo demás, apuntó Corvalán, esta tesis no guardaba ninguna relación con la historia institucional de Chile, en que muchos presidentes no fueron apartados de sus cargos por el hecho de que los partidos que le apoyaban no ganaran una elección parlamentaria. En segundo término, el secretario general sostuvo

[541] Prats, *op. cit.*, p. 365.

[542] "Frei: Elección es plebiscito", *Las Últimas Noticias*, 1 de marzo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 595-598.

que independiente de los resultados que arrojaran las urnas, existían sectores de la oposición que estaban encaminados en logar la «caída de gobierno», abriendo así la puerta a una guerra civil. Tal posibilidad fue rechazada ciertamente por Corvalán, quien señaló que resultaba imperativo ponerles «una camisa de fuerza» a quienes buscaban desencadenar un «baño de sangre»[543].

No cabía duda de que los comicios parlamentarios representaban una coyuntura de vital importancia para las fuerzas políticas del país. Se trataba de un desafío no menor para un gobierno que ya enfrentaba su tercer año de administración bajo un escenario adverso, con una crisis económica desatada y el fuego cruzado que surgía desde diversos sectores. Para la oposición, la coyuntura electoral era entendida como un importante punto de inflexión a efecto de poner término anticipado al proyecto transformador de la izquierda. Ello, en todo caso, se daría bajo el supuesto de que se lograran obtener los dos tercios en el Senado para así inhabilitar constitucionalmente a Salvador Allende. Sin embargo, tal objetivo resultaba muy difícil de alcanzar, sobre todo porque la cámara alta renovaba solo un tercio de sus asientos, lo que significaba que la oposición tendría que ganar todos los cupos en disputa y dejar a la izquierda sin ningún senador electo. En la práctica, esto resultaba inviable pues la UP seguía siendo una fuerza social de considerable tamaño y fuerte presencia en los espacios urbanos y rurales del país. Con todo, algunos sectores de la oposición esperaban que al menos la votación del oficialismo fuese baja como para limitar todavía más su capacidad de gestión.

Bajo estas coordenadas se llegó al domingo 4 de marzo de 1973. El ministro del Interior, general Carlos Prats, lo recuerda como «un día tranquilo», en que todo se desarrollaba «en perfecto orden»[544]. Por la noche hubo cierto atraso en la entrega de cómputos, lo que inquietó a la oposición. Sin embargo, desde diversos medios de comunicación comenzaron a trascender los resultados que serían ratificados de forma oficial el lunes 5 a las 21 horas.

Las cifras, como se sabe, arrojaron una sorprendente votación para la UP. A pesar de no alcanzar la mayoría porcentual, la izquier-

[543] "Luis Corvalán: El primer deber patriótico de hoy", 3 de marzo de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4316-4317.

[544] Prats, *op. cit.*, p. 366.

da se alzaba con un muy sólido 43,39 % de los votos. La CODE alcanzaba, en tanto, el 54,70 %, porcentaje que no fue suficiente para alcanzar los dos tercios del Senado. La Unión Socialista Popular, que iba por fuera de las dos alianzas, recibió una votación marginal: 0,28 %. A nivel de colectividades, las cifras fueron las siguientes: En la UP, el partido más votado fue el Socialista que alcanzó un 18, 66 %, seguido no muy lejos por el PC que se alzó con el 16,22 %. Más atrás quedaban el PR con el 3,72 %, el MAPU que obtuvo el 2,53 % y la IC con el 1,18 %. La API que también formaba parte de la UP obtuvo el 0,79 %. En la oposición, la DC se alzó con el 29,12 % y el PN con el 21,31 %. Más atrás se ubicaban la Democracia Radical con el 2,29 % y el Partido de Izquierda Radical con el 1,81 %[545].

La lectura de estas cifras permitía extraer algunas conclusiones interesantes respecto a los conflictos en curso y al futuro posicionamiento de los partidos. En primer término, cabe señalar que tanto en el oficialismo como en la oposición no quedó resuelto el problema de la hegemonía, es decir, cuál tendencia o colectividad dirigiría el conjunto de las estrategias en cada bloque. Es cierto que en la CODE la DC se alzaba con casi un tercio de los votos, sin embargo, el porcentaje alcanzado por el PN no fue en ningún caso marginal. De hecho, esta colectividad se transformó en el segundo partido más votado del espectro político, superando incluso a socialistas y comunistas. Y en cuatro de las cinco circunscripciones senatoriales en disputa, los nacionales lograron elegir al menos un representante. En la práctica, esto permitiría que el PN no subordinara su estrategia de mediano y largo plazo a aquella levantada por la DC, reforzando así el perfil autónomo que le había caracterizado hasta entonces. En la izquierda tampoco se observó el predominio de un partido sobre otro. Tanto el PC como el PS obtuvieron votaciones similares, llegando a tener casi el mismo número de diputados y senadores en el Congreso Nacional. El porcentaje de ventaja que los socialistas le sacaban al PC era compensado, según Luis Corvalán Marquéz, por el mayor peso orgánico que tenía este último actor[546].

A nivel senatorial la disputa más relevante, dadas sus proyecciones, fue la ocurrida en la capital. Allí se escogían cinco cupos

[545] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 280.
[546] *Op. cit.*, p. 281.

senatoriales que fueron repartidos de la siguiente forma: el expresidente Eduardo Frei Montalva se alzó con la primera mayoría en esta circunscripción —y a nivel nacional— alcanzando los 390 mil votos. Esto permitió, dado el sistema proporcional existente, que uno de sus compañeros de lista, José Musalem, fuese electo. También alcanzó un cupo senatorial el líder del PN, Sergio Onofre Jarpa, que obtuvo 191 mil votos. En el oficialismo, dos dirigentes de peso recibieron una sólida votación: Volodia Teitelboim del PC alcanzó los 238 mil votos, mientras que el secretario general del PS, Carlos Altamirano, se alzó con 230 mil. Vistos en perspectiva, los resultados indicaban que Frei Montalva se posicionaba como una de las principales figuras de la oposición, con capacidad suficiente para proyectar un liderazgo de carácter nacional con vistas a los comicios presidenciales de 1976. En la izquierda, como se apuntó más arriba, quedaba claro que ninguna de sus dos tendencias había triunfado sobre la otra. Las cifras, en efecto, podían analizarse tanto en un sentido como en otro, es decir: como la consolidación de la estrategia gradualista representada por Teitelboim o bien como la irrupción clara y decisiva de la estrategia del avanzar sin transar que personificaba Altamirano.

Haciendo una lectura más estructural de los comicios cabría señalar como punto esencial que estos no permitieron dirimir en lo fundamental el conflicto político. Ni la oposición alcanzaba los dos tercios en el Senado para destituir a Allende, ni la izquierda se alzaba con una mayoría sólida que le permitiera continuar la aplicación irrestricta de su programa de transformaciones. Sin embargo, parecía dibujarse cierto halo de triunfo para la UP, toda vez que la tan temida arremetida institucional que había anunciado la oposición quedaba de momento desactivada. De igual forma resultaba evidente que la izquierda creció en su votación respecto a las elecciones parlamentarias de 1969 y aún en relación con la elección presidencial de 1970[547]. En la práctica, los comicios de 1973 significaron más diputados y senadores para la izquierda, mientras que la oposición, y sobre todo la DC,

[547] En la elección parlamentaria de 1969, el PC había obtenido un 15 % de la votación, mientras que en 1973 ese porcentaje subió al 16,2 %. El PS, en tanto, incrementó de forma más clara su votación, pasando del 12,2 % en 1969, al 18,6 % en 1973. En la elección presidencial de 1970 el candidato de la UP Salvador Allende había obtenido un 36 % de los votos.

descendía en algunos de estos índices[548]. En atención a estas cifras, los partidos procedieron a hacer sus evaluaciones de los comicios.

La misma noche del 4 de marzo, la UP emitió una declaración conjunta en que saludaba con satisfacción los porcentajes que comenzaron a trascender y que le otorgaban un inesperado 44 % de la votación. Según el documento, dicha cifra permitía cerrarle el paso a los planes de la oposición que buscaban derribar «arbitrariamente» al presidente de la república. Al mismo tiempo, la UP homologó el fracaso de dicha estrategia a lo sucedido en el mes de octubre de 1972, cuando el paro de los transportistas no logró derrocar al gobierno. A juicio del oficialismo, la reacción se estrelló, tanto en octubre como ahora en marzo, con la conciencia y voluntad de los trabajadores que no les permitieron materializar sus objetivos. En su parte final la declaración sostenía que el pueblo juzgó que los errores y deficiencias cometidos eran «transitorios y superables»[549]. De este modo, la vía chilena al socialismo quedaba enmarcada dentro de un contexto expectante y proclive a seguir consolidando sus transformaciones.

Dos días después, el PS emitiría una declaración que se iniciaba con una sugerente idea según la cual el pueblo chileno había ganado una batalla, «pero no la guerra». Tal coyuntura suponía entender los recientes comicios electorales como parte de un conflicto de larga duración que aún no estaba resuelto. Enseguida, este actor sostuvo que la votación obtenida por el partido significaba una demostración de confianza y respaldo a la línea revolucionaria y consecuente que se estaba impulsando. Esta idea resultaba significativa, pues el PS consideraba de algún modo que su noción de socialismo, situada en un escenario abierto de confrontación con las fuerzas de la oposición, era la más correcta y genuina dentro del proyecto de la UP. En esta línea se explicitó otro objetivo según el cual resultaba necesario «consolidar y ensanchar» el poder generado por los trabajadores en

[548] El Partido Comunista pasó de los 22 diputados obtenidos en 1969 a 25 tras los comicios de 1973, y en cuanto a senadores su número se incrementó de 6 a 9. Por su parte, el Partido Socialista subió de los 15 diputados de 1969 a 28 en 1973, y en cuanto a senadores su número se incrementó de 5 a 7. La DC, en tanto, descendió de los 55 a 50 diputados y de 22 a 19 senadores tras los comicios de 1973.

[549] "Unidad Popular: Declaración pública sobre los resultados de la elección", 4 de marzo de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4325-4326.

sus propias organizaciones de base[550]. Como es de suponer lo que estaba detrás de esta idea era el emplazamiento público que este partido realizaba respecto a fortalecer el poder popular como la única vía para legitimar y avanzar en la construcción del socialismo.

El PC, en tanto, señaló en una declaración publicada el 6 de marzo en *El Siglo* sus primeras impresiones sobre los comicios. En ella recalcó la importancia de la votación obtenida por el conjunto de la UP como un elemento clave para consolidar al proyecto popular. De hecho, a juicio del PC, la alianza oficialista salía más «grande y poderosa» que cuando Allende asumiera la presidencia en 1970. La contraparte del éxito de la izquierda, según el PC, era la oposición que salía de esta coyuntura con una evidente «debilidad táctica y estratégica». Con todo, esta colectividad distinguía entre dos tipos de oposición: una de mentalidad «fascista» que abrazaría el camino del golpismo y otra que no había perdido «ni la serenidad ni la cordura» y que no estaría dispuesta a cargar con el peso de haber iniciado una guerra civil[551]. Indudablemente, el diagnóstico del PC a este respecto estaba dirigido hacia la DC, a la cual no visualizaba en sí como un partido de orientación golpista ni reaccionaria. Ello suponía abrir la puerta —otra vez— a la posibilidad de establecer algún tipo de alianza o entendimiento con este actor, aislando de este modo a la derecha.

Al día siguiente de publicada esta declaración, el secretario general del PC, Luis Corvalán Lépez, volvió a reafirmar algunos de estos puntos en un acto de masas organizado por las Juventudes Comunistas. En el encuentro, además de hacer un detallado análisis de los porcentajes obtenidos por la izquierda, y por el PC en particular, el dirigente sostuvo que la tarea política más importante era cerrar filas en torno al gobierno. Enseguida Corvalán señaló que la experiencia histórica demostraba que en «determinados países» y bajo ciertas condiciones era posible que la revolución social se alcanzara sin llegar al enfrentamiento. Por ello, sentenciaba el secretario general, era indispensable seguir fortaleciendo esta vía participando en la administración del

[550] "Partido Socialista: Declaración pública sobre los resultados de la elección", 6 de marzo de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4327-4328.

[551] "Partido Comunista: Fortaleza del pueblo y su Gobierno", 6 de marzo de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4327-4328.

Estado y respaldando la gestión del presidente Allende[552]. Desde esta perspectiva, los propósitos del PC apuntaban a reforzar el proyecto institucional de la UP, lo que significaba consolidar las transformaciones realizadas cuadrándose detrás del primer mandatario.

El MAPU también analizó los resultados electorales desde una particular posición, pues tras los comicios se aceleró una crisis interna que se venía incubando desde tiempo atrás y que acabó en la división factual de esta colectividad[553]. La facción gradualista del partido, organizó un acto en el Estadio Chile el día 15 de marzo, donde el líder de esta tendencia, Jaime Gazmuri, refirió las primeras impresiones sobre los resultados electorales. Sus palabras no pudieron obviar el marco de crisis por el que atravesaba el MAPU, señalando a este respecto que se decidió expulsar a una «fracción ultraizquierdista» que buscaba la división interna y la confrontación con el Gobierno de la UP. Respecto a los resultados, Gazmuri señaló que estos reflejaban una «victoria magnífica» que se producía en momentos difíciles dada la arremetida de la reacción y el imperialismo y las debilidades del propio Ejecutivo. En virtud de ello, el dirigente mapucista sostuvo que este triunfo era una lección de la clase obrera para los «mentecatos ultraizquierdistas» pues se había reafirmado, en virtud de las cifras y la capacidad de movilización de la izquierda, que este era un Gobierno revolucionario. [554]

Desde fuera de la UP, el MIR diagnosticó el resultado electoral como la consolidación del reformismo dentro del gobierno. Tal planteamiento se hacía sobre la base de que los sectores revolucionarios de la UP —y a los cuales el MIR había dado un apoyo táctico en los recientes comicios— no habían logrado triunfar de forma aplastante

[552] "Luis Corvalán: Discurso en el Teatro Caupolicán", 7 de marzo de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4331-4340.

[553] Esta división era el reflejo a microescala de aquella que recorría de forma transversal a la UP. Es decir, se trataba de una pugna abierta entre el sector rupturista —nucleado en torno al PS, el MIR y la IC— y el sector gradualista articulado por el PC, el PR y el propio presidente Allende. En el caso del MAPU, las dos vertientes existentes seguían esta misma orientación ideológica. Fue el grupo de tendencia más gradualista, articulado en torno a la figura de Jaime Gazmuri, el que procedió a expulsar a la facción de Óscar Guillermo Garretón, por entonces secretario general del partido.

[554] "Jaime Gazmuri: La expulsión, un deber proletario", 15 de marzo de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4383-4393.

sobre el ala gradualista. De este modo, las tendencias generales perfiladas por este último sector se verían reforzadas y con la capacidad suficiente para continuar desplegándose dentro la izquierda[555]. El panorama a mediano y largo plazo, a ojos del MIR, no era pues esperanzador dado que los objetivos que esta agrupación se había trazado —resolver el tema del poder o buscar un desenlace definitivo de la lucha en curso— no lograrían hegemonizar al conjunto de la izquierda.

En la oposición, en tanto, primaron distintas evaluaciones sobre esta coyuntura. La DC interpretó los resultados como un llamado de atención al gobierno a efecto de que este rectificara su línea de acción. El dilema principal del conflicto político, según esta colectividad, radicaría en torno al mantenimiento o modificación de la gestión administrativa de la UP. En esa línea, los resultados parlamentarios arrojaron un primer indicio en orden a que dicha gestión debía sufrir profundos cambios. El PN, por su parte, reafirmó su planteamiento en torno a la existencia de un conflicto de alcance estructural. Aunque en sus primeras reacciones este actor trató de poner un manto de sombra respecto a la veracidad de las cifras, al cabo de unos días reorientó su discurso hacia las líneas matrices que habían definido su conducta. De este modo, el PN enfatizó en que la lucha global existente en el país requería de un posicionamiento frontal de la oposición a efecto de continuar con la movilización de masas en contra de la UP[556].

Por el tenor de sus juicios, las reacciones partidistas frente a la coyuntura electoral de marzo auguraban un panorama de creciente confrontación. Ello se explicaría sobre todo porque las tendencias gradualistas de algunos actores no habían logrado imponerse con claridad al resto de tendencias existentes. De este modo, los énfasis en torno al tránsito institucional al socialismo, si bien eran importantes y representativas dentro de la izquierda, no habían logrado hegemonizar a toda la alianza. Por su parte, las estrategias rupturistas y radicalizadas de algunos actores, a pesar de no haber obtenido un triunfo capital en los comicios, tratarían de mantener su vigencia

[555] La posición del MIR luego de los resultados electorales en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 295.

[556] Reacciones de la oposición tras los comicios en Corvalán Marquéz, *ibid.*

dentro del espacio público. De hecho, estas tendencias observaron que los comicios parlamentarios no dirimieron el nudo principal del conflicto en Chile, por lo que el marco social y político quedaba de nuevo abierto para el despliegue de sus propuestas. Como señala Arturo Valenzuela, los comicios de marzo otorgaron un «impulso renovado» a las fuerzas oficialistas que buscaban acelerar el proceso de confrontación bajo el sentido de avanzar en la revolución socialista. Por cierto, ello era extensible también, aunque desde otro ángulo, a los sectores de oposición que vieron en dicho resultado, según comenta el mismo autor, una señal de que las reglas del juego ya no servían a sus intereses[557]. Así, los discursos que enfatizaban en la idea de un enfrentamiento o desenlace definitivo en el país siguieron perviviendo sin mayores limitaciones.

Joaquín Fermandois coincide, por su parte, en que las elecciones de marzo abrieron una etapa de indefinición, pero que al mismo tiempo —y quizás como una consecuencia de este mismo contexto— los partidos de la UP se prepararon para una batalla. Aunque esta sería dimensionada por algunos como una lucha eminentemente política, otros la pensaron y diseñaron en términos militares. Adicionalmente, este autor plantea la existencia de una compleja situación para un sector de la UP luego de las elecciones. A su juicio, el sector gradualista de la izquierda, que durante décadas abogó por una vía institucional y que hizo su aprendizaje político dentro de este esquema, se encontró de pronto con que las condiciones de esa estabilidad habían desparecido[558]. En efecto, el estado de ánimo de la sociedad chilena estaba orientado en realidad en otra dirección, por lo que el desafío para el polo gradualista, y en particular para el PC, no era solo tratar de hegemonizar su idea de revolución dentro de la UP, sino también adaptarse a un medio social y político que había cambiado de modo significativo.

El consenso más extendido entre los especialistas respecto a los comicios parlamentarios de marzo radica, pues, en su carácter poco definitorio de la pugna política. Aunque los porcentajes por bloques mostraban una diferencia importante, la lectura sociológica, e inclusive anímica de esos días, explicitaban más bien la existencia

[557] Arturo Valenzuela, *El quiebre de la democracia en Chile*, pp. 150-152.
[558] Fermandois, *op. cit.*, pp. 619-625.

de un punto muerto que parecía alejar el camino institucional como espacio resolutivo de los conflictos. Tal situación habría terminado por fortalecer a aquellas posiciones más radicalizadas que, al constatar las limitaciones del marco legal, continuaron desplegando sus estrategias maximalistas orientadas a resolver la continuidad o cancelación del proyecto de la UP. Pero, además, como recuerda Fermandois, la «indefinición» postelectoral de marzo fue también compleja para aquellos partidos que veían cómo se erosionaba gran parte del marco legal y cultural en el cual habían crecido. Así, lo que parecía salir fortalecido de los comicios de marzo era un conjunto de retóricas y estrategias más proclives al desenlace factual y extra-institucional de los conflictos.

Cuando el paréntesis electoral del 4 de marzo comenzaba a quedar atrás, los enfrentamientos y hechos de violencia volvieron a ocupar un lugar preponderante en la agenda pública. Apenas 48 horas después de realizados los comicios, se registraron serios incidentes en el sector oriente de la capital cuando un grupo de adherentes y brigadistas del derrotado candidato a senador del PN, Alberto Labbé —militar en retiro del Ejército—, se enfrentaron con Carabineros. El saldo de los desórdenes fue un automóvil incendiado, decenas de destrozos en el sector de Providencia y más de 30 detenidos[559]. Más tarde, en torno a la quincena de marzo, se registraron dos hechos de violencia en distintos puntos del país que dejaron un saldo de tres fallecidos.

El primer hecho que registró víctimas fatales ocurrió en la comuna de La Reina en la madrugada del 16 de marzo. En un sector semiurbano ubicado en la avenida Echeñique, dos jóvenes menores de edad, uno de los cuales pertenecía a la JDC, fueron asesinados con armas de fuego mientras custodiaban una parcela. Las víctimas fueron identificadas como Germán González Menares y Sergio Vergara Contreras. El periódico *El Siglo* sostuvo que los fallecidos, junto a miembros de PROTECO y del Comando Rolando Matus, atacaron a balazos a un grupo de pobladores que levantaba una mediagua en un terreno adyacente. Según este periódico, en medio del ataque, los menores de edad se cruzaron en la línea de fuego

[559] Salazar, M., *op. cit.*, p. 289.

siendo alcanzados por los disparos de sus propios compañeros[560]. El matutino *La Nación*, en tanto, refirió la misma versión, al señalar que tanto González como Vergara habían sido heridos mortalmente por sus correligionarios luego de que estos atacaran a los pobladores de un predio vecino. Bajo la óptica de este matutino, los «fascistas» habían muerto «en su propia ley»[561].

En la prensa de oposición se entregó una versión distinta del incidente. El periódico *La Tercera* indicó que tanto González como Vergara dormían al interior de una carpa ubicada en el predio que se encontraban vigilando. En horas de la madrugada, continúa este medio, una voz alertó a los jóvenes de que algunos individuos habían cortado el cerco e intentaban ingresar a la parcela. Así se produjo un enfrentamiento a piedras que pronto derivó en un ataque armado en contra de los dos menores de edad. Este rotativo también señaló que tras la llegada de la policía, tres sujetos fueron detenidos, los cuales resultaron ser funcionarios de la CORMU[562]. *El Mercurio*, por su parte, sostuvo que los dos cuidadores fueron acribillados por elementos extremistas que pernoctaban tanto en la parcela contigua a la que cuidaban González y Vergara como también en el campamento Carlos Cortés cercano al lugar[563]. El periódico *La Prensa*, coincidiendo con la versión de *La Tercera*, sostuvo que fueron funcionarios de la CORMU quienes dispararon a los cuidadores en momentos en que habían asaltado el predio. De igual forma, este diario indicó que los disparos se hicieron sin mediar ninguna provocación ni amenaza, al tiempo que refería que una de las víctimas —Sergio Vergara— había recibido un disparo en el corazón mientras dormía[564]. Este dato que aporta *La Prensa* es, sin embargo, erróneo pues el certificado de defunción de Vergara indica como su causa de muerte una herida a bala abdominal complicada y anemia aguda consecutiva[565]. En el

[560] *El Siglo*, Santiago, 17 de marzo de 1973, p. 3.

[561] *La Nación*, Santiago, 17 de marzo de 1973, p. 1

[562] *La Tercera*, Santiago, 17 de marzo de 1973, p. 26. Este medio informó que los detenidos fueron identificados como Gino Hosstapp Peterson, Sergio Páez Ballesteros y Patricio Medina Fernández.

[563] *El Mercurio*, Santiago, 17 de marzo de 1973, p. 1.

[564] *La Prensa*, Santiago, 17 de marzo de 1973, p. 8.

[565] "Certificado de defunción de Sergio Vergara Contreras", Santiago, 16 de marzo de 1973, n.º de inscripción 332, folio 14726332, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 5 de mayo de 2016].

caso de Germán González, su certificado de defunción anota como causa de muerte una herida de bala facio craneoencefálico y torácico complicada[566].

El general Carlos Prats, que por entonces todavía desempeñaba la cartera de Interior, recuerda que el enfrentamiento se produjo entre militantes de la DC y de la UP. La magnitud del suceso, indica el secretario de Estado, le llevó a ordenar al director de Investigaciones, Alfredo Joignant, «una indagación a fondo» sobre lo ocurrido. Cinco días después, este funcionario, según señala el general, le informó que había logrado reunir la evidencia suficiente como para corroborar que en la muerte de los dos jóvenes tuvieron participación directa algunos funcionarios del Ministerio de la Vivienda. A los pocos minutos, continúa Prats, el ministro de dicha cartera, Luis Matte, llegaba «muy afectado» hasta su oficina, indicándole que los funcionarios serían eliminados de inmediato del Ministerio a efecto de que fueran puestos a disposición de la justicia[567].

La versión del general Prats coincidía, pues, con las informaciones que entregó parte de la prensa respecto a que detrás de la muerte de los jóvenes se encontraba personal de una repartición pública. El incidente escaló muy pronto en intensidad y se conectó, de modo inevitable, a dinámicas de discusión más generales. El senador de la DC, José Musalem, sostuvo a este respecto que el principal instigador de lo sucedido en La Reina era el subsecretario del Interior, Daniel Vergara: «es el autor moral —señaló el parlamentario— de todos los hechos que están ocurriendo hoy en día»[568]. Tal interpretación significaba endosar la responsabilidad de lo sucedido al poder Ejecutivo, y más aún indicar que la Subsecretaría del Interior era la responsable no solo de este crimen sino además de todos los hechos de violencia que ocurrían por entonces. Desde ese ángulo, se esbozaba la idea de que era el propio Gobierno de la UP el que atizaba el fuego de la radicalización y el extremismo, eximiendo de culpas a otros actores. Indudablemente este planteamiento tenía raíces todavía más profundas,

[566] "Certificado de defunción de Germán González Menares", Santiago, 16 de marzo de 1973, n.º de inscripción 331, folio 17836098, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 13 de julio de 2016].

[567] Prats, *op. cit.*, pp. 370-371.

[568] *La Tercera*, Santiago, 17 de marzo de 1973, p. 2.

pues buscaba reafirmar, a partir de los hechos de violencia que ocurrían, la tesis de la ilegitimidad del proyecto transformador de la UP.

Cuando se produjo el funeral de una de las víctimas, a quien se identificó como militante de la JDC, sus compañeros de partido le rindieron un sentido homenaje. A lo largo del cortejo fúnebre decenas de militantes entonaron con fuerza un grito que enmarcaba lo sucedido dentro del esquema de confrontación bipolar existente en el país. Tal consigna decía: «Camarada Enrique González... ¡presente! ¿Quién lo mató? ¡Los marxistas prepotentes![569]». El joven militante se sumaba así a la lista de mártires del partido que fueron asesinados durante la UP.

El segundo hecho de violencia que se saldó con un fallecido ocurrió en la ciudad de Concepción el día 20 de marzo. Al inicio, el suceso trasuntaba un carácter delictual, sin embargo, los antecedentes que comenzaron a emerger terminaron por conectar el crimen a una compleja trama que involucró a militantes de Patria y Libertad y funcionarios del Canal 13 de Televisión, perteneciente a la Universidad Católica. El origen del hecho se vinculaba, en efecto, al plan de la estación televisiva para extender su señal de transmisión hasta la octava región. Legalmente ello requería de un sinnúmero de permisos y autorizaciones que alargarían su puesta al aire. Ante ello, Canal 13 resolvió actuar de forma unilateral comenzando a transmitir para la octava región a inicios de febrero de 1973 a través de la frecuencia número 5. Los equipos de transmisión de dicho canal fueron ubicados en un edificio perteneciente a la propia Universidad, de modo que si se los requisaba el plantel superior podía acusar al Ejecutivo de estar violando la autonomía universitaria. El general Carlos Prats recuerda que al estar consciente de esta situación prefirió no apoyar la requisición de equipos y limitarse a efectuar la denuncia correspondiente al Tribunal[570]. Pero a pocos días de iniciadas las transmisiones, la señal regional de Canal 13 se tornaría difusa y casi imperceptible. El Gobierno —no se sabe si con la anuencia de Prats— había instalado un equipo de oscilación de ondas en el techo de la Dirección General de Servicios Eléctricos de Concepción con el cual se provocaba la interferencia.

[569] *La Tercera*, Santiago, 18 de marzo de 1973, p. 2.
[570] Prats, *op. cit.*, p. 362.

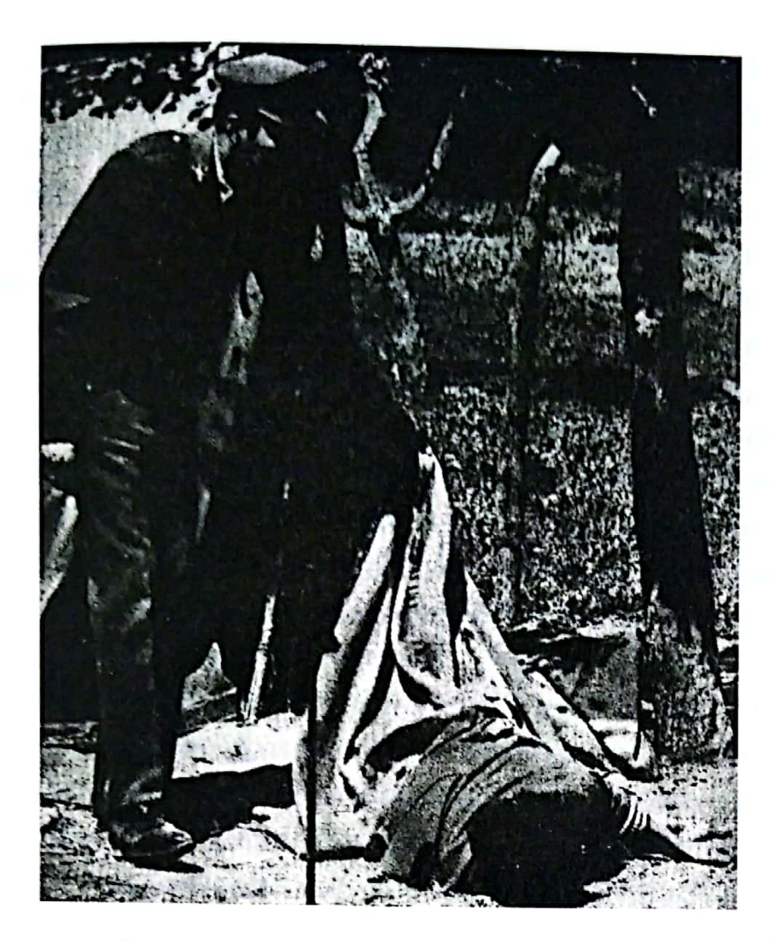


Imagen n.º 6. Carabinero inspecciona el cuerpo sin vida de Germán González Menares fallecido en un incidente a mediados de marzo de 1973. *Ercilla*, n.º 1967, 28 marzo al 3 de abril de 1973. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

La noticia de estos hechos comenzó muy pronto a hacerse pública, causando sorpresa e inquietud en diversos actores, aunque también surgieron las ideas más increíbles para ayudar al Canal 13 a salir de este problema. En Patria y Libertad, por ejemplo, el norteamericano Michael Townley —por entonces colaborador *freelance* del grupo junto a su mujer Mariana Callejas— le indicó al dirigente Manuel Fuentes Wendling que él podía detectar el lugar desde donde provenía la interferencia[571]. De este modo, argumentó Townley, se podía

[571] Townley y Callejas protagonizaron desde entonces un conjunto de historias cinematográficas. A los sucesos ocurridos en Concepción se sumaría, luego del golpe militar, su colaboración en la DINA en distintas operaciones. Uno de los hechos más relevantes a este respecto fue la participación de la pareja en el homicidio del general Carlos Prats en Buenos Aires en 1974. Dos años después, Townley actuaría junto a un grupo de cubanos anticastristas en el homicidio del excanciller del gobierno de la UP, Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en Washington. Entre uno y otro crimen, ocurrieron cientos de historias, viajes y dinámicas de la vida cotidiana que resultaban llamativas

sustraer el oscilador y dejar el camino despejado a la señal del canal católico. Tras diversas reuniones al interior del grupo, además de otra con el propio director ejecutivo de Canal 13, sacerdote Raúl Hasbún, el movimiento nacionalista decidió que se formarían dos unidades para llevar adelante un plan de acción. Fuentes Wendling señala a este respecto que fue Miguel Sessa Brignardelo, también dirigente de Patria y Libertad, quien le propuso la creación de un comando —al alero del Frente de Operaciones— para que sustrajera el aparato que provocaba las interferencias. Esto, como es de suponer, pasaba por conocer la ubicación exacta del lugar. En este marco, el rol de Townley sería detectar el sitio desde donde provenía la interferencia y comunicárselo a Fuentes Wendling para que este, a su vez, se lo dijera a Sessa Brignardelo. Como ambos grupos actuarían por separado, ninguno debía conocer la existencia ni el rol de su contraparte. A juicio de Fuentes Wendling se trataría de una «misión limpia»[572].

Sin embargo, la primera parte del plan, llevado a cabo por Townley, no estuvo exento de problemas y situaciones tragicómicas, como las mediciones radioeléctricas que hicieron a plena luz del día, y ante la vista de un curioso público, en la Plaza de Armas de Concepción. Con todo, su grupo logró detectar la ubicación exacta del oscilador que interfería la señal de Canal 13, alojado, como se dijo, en el techo de la Dirección General de Servicios Eléctricos[573]. Tras la obtención de ese dato clave, el norteamericano regresó a Santiago para informar a Fuentes Wendling, quien puso en marcha al comando de Miguel

---

e inquietantes. Así, por ejemplo, en los años duros de la represión en Chile, Callejas organizaba tertulias literarias en el salón de su casa, mientras que en los subterráneos de la propiedad Townley experimentaba con dispositivos químicos o eléctricos para aplicar en las sesiones de tortura que practicaba la DINA. Tras el asesinato de Letelier, la pareja se separaría. Townley sería extraditado a Estados Unidos donde luego de cumplir algunos años de cárcel se acogería al programa de protección de testigos cambiando de identidad. Callejas, por su parte, murió el año 2016 en Santiago.

[572] Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 193.

[573] Aunque Fuentes Wendling señala que el equipo operativo liderado por Townley incluyó a Mariana Callejas, esta entrega una versión distinta indicando que fueron tres técnicos electrónicos —uno de los cuales era Townley— quienes viajaron a Concepción. Tras detectar la ubicación del oscilador en el edificio señalado regresaron rápidamente a Santiago. Una vez en la capital, el norteamericano le entregó las indicaciones al grupo operativo de Patria y Libertad que desmontaría al día siguiente el aparato. «Todo parecía perfecto», concluía la mujer de Townley. Véase, Mariana Callejas, *Siembra vientos. Memorias*, pp. 47-48.

Sessa Brignardelo. En la madrugada del 18 de marzo, dicho grupo logró ingresar al edificio de la Dirección General a través de una casa contigua. Sin embargo, cuando se encontraban en su interior los miembros del comando se percataron de que un hombre dormía en una sala. Se trataba del obrero pintor Jorge Tomás Henríquez González, de 33 años de edad. Para evitar cualquier interferencia en la operación, Sessa y sus acompañantes procedieron a maniatar a Henríquez inyectándole, además, una dosis de pentotal para dejarlo adormecido. Posteriormente lograron extraer el oscilador de interferencia y se retiraron del lugar. Según el relato de Fuentes Wendling, al malogrado obrero se le inyectó una dosis mínima del producto para luego ser amarrado de manos y pies. En ningún caso, sostiene el dirigente en base a lo que le contó Brignardelo, fue necesario maltratar al pintor pues este dormía[574].

La noticia sobre la muerte de Henríquez González se divulgó recién el 20 de marzo cuando su cadáver fue encontrado por un familiar que lo había ido a visitar. Según el matutino *La Tercera*, el obrero habría fallecido por asfixia debido a las amarras que cubrieron su rostro[575]. El periódico *El Sur* fue el medio que entregó más detalles de lo sucedido, estableciendo desde un principio la conexión que parecía existir entre el crimen del obrero y el robo del oscilador desde el techo de la Dirección General de Servicios Eléctricos[576]. En su edición del 23 de marzo, este periódico llegó a incluir una fotografía del cadáver maniatado de Henríquez, al tiempo que seguía insistiendo en la vinculación del crimen con el robo de los equipos[577]. Por su parte, la revista *Punto Final* sostuvo que el homicidio de Henríquez encerraba una problemática más de fondo. Esta tenía que ver con la debilidad de la autoridad pública respecto a la aplicación de la ley en contra de Canal 13 por la extensión *de facto* de su señal hasta la ciudad de Concepción. Según la versión de esta revista, fue el propio director ejecutivo de Canal 13, «acicateado por los precedentes de debilidad oficial», quien montó la operación del robo de los equipos que terminó con la muerte de un trabajador[578].

[574] Fuentes Wendling, *op. cit.*, pp. 204-205.
[575] *La Tercera*, Santiago, 21 de marzo de 1971, p. 13.
[576] *El Sur*, Concepción, 21 de marzo de 1973, p. 1.
[577] *El Sur*, Concepción, 23 de marzo de 1973, p. 1.
[578] *Punto Final*, n.º 181, Santiago, martes 10 de abril de 1973, p. 27.

El hecho comenzaba a tener resonancia nacional, pues todo parecía indicar la existencia de ramificaciones más profundas en la materialización de este crimen. El día 21 de marzo, el senador democratacristiano Tomas Pablo planteó, sin embargo, la posibilidad de que ambos hechos no tuvieran ninguna relación. Más aún, este parlamentario sostuvo que cabía la posibilidad de que los autores del crimen hayan sido los propios funcionarios de la Dirección de Servicios Eléctricos quienes intentaron luego responsabilizar del hecho a personal de Canal 13[579]. Con todo, los antecedentes que comenzaban a aparecer unidos a la investigación de la Justicia —que llegó a detener al director regional de Canal 13 Carlos de la Sotta— comprobaban la relación directa entre el robo de los equipos por parte de un comando del FNPL y la muerte de Henríquez.

De hecho, la Policía de Investigaciones concluyó en poco tiempo la relación existente entre estos actores. Así quedaría refrendado en un parte firmado por los detectives Mayo Baltra Horta y Enrique Robles Villalobos, que fue enviado al ministro del primer juzgado del crimen de Concepción. En dicho documento se señalaba que el robo de los equipos electrónicos fue parte de una operación ideada por Patria y Libertad en la cual tuvieron «sobresaliente participación» Manuel Fuentes Wendling, Michael Townley y el director ejecutivo de Canal 13, Raúl Hasbún. Este último, según indica el documento, dio el «visto bueno» para la ejecución del plan, instruyendo al director regional de Canal 5, Carlos de la Sotta, para que facilitara la puesta en marcha de la operación[580].

Pero más allá de estas informaciones quedaba, todavía, un punto sin aclararse. Este se refiere a si quienes maniataron al obrero lo hicieron con la única intención de inmovilizarlo, o bien, existía un propósito manifiesto de acabar con su vida. Según el relato de Manuel Fuentes Wendling los miembros del comando que actuó en Concepción solo buscaron inmovilizar a la víctima. Para ello habrían amarrado sus manos y pies además de vendar sus ojos[581].

[579] Senado, *Diario de sesiones*, 81.ª sesión extraordinaria, miércoles 21 de marzo de 1973, p. 3169.

[580] "Homicidio de Tomás Henríquez González", Concepción, 15 de abril de 1973, parte n.º 45, *Colección histórica de homicidios, 1947-2008*, Jefatura Nacional de Homicidios, Policía de Investigaciones de Chile.

[581] Fuentes Wendling, *op. cit.*, pp. 204-205.

Mariana Callejas, por su parte, entrega la misma versión, señalando que cuando el comandó ingresó al edificio encontraron a un sujeto «bastante ebrio» al cual ataron y amordazaron con tela adhesiva[582]. No obstante, llama la atención que el comando le haya inyectado una dosis de pentotal al obrero, en circunstancias de que ya estaba maniatado en sus extremidades y no representaba un peligro para los ejecutores del plan. Las interrogantes respecto a este crimen quedan todavía más abiertas al leer el certificado de defunción de la víctima. Dicho documento señala como causa de muerte el estrangulamiento, lo que hace suponer que el cuello de Henríquez fue amarrado con la suficiente fuerza como para cortar sus vías respiratorias[583].

Meses más tarde, el periódico *El Siglo* entregaría nuevos antecedentes sobre el hecho. Según este medio, un informe de la Dirección General de Investigaciones que fue enviado al ministro en visita del caso, Eliodoro Ortiz, sostenía que los autores materiales del crimen de Henríquez fueron Carlos Vial Izquierdo y Miguel Sessa Brignardelo, quienes actuaron bajo las órdenes de Roberto Thieme[584]. Dicha información concuerda en alguna medida con lo que Fuentes Wendling ha sostenido en sus memorias, sin embargo, la participación de Thieme en el hecho resulta más difícil de explicar. Como se recordará, hacia fines de febrero de 1973 se informó que la avioneta que piloteaba el dirigente de Patria y Libertad desapareció cerca de la costa de la región del Bío-Bío, presumiéndose que aquél había fallecido. En virtud de ello, resultaba arriesgado que Thieme, en caso de estar vivo y en condición de clandestinidad, se sumara a la operación del robo de los equipos en Concepción. Se trataba de una acción que además de los riesgos implícitos que ella comportaba, podría dejar al descubierto al propio Thieme si era detenido, con lo cual sus planes secretos quedarían truncados.

En paralelo a los hechos descritos, comenzaron a emerger otros conflictos en el país. Uno de los más relevantes que surgió en esas semanas, y que se proyectó a lo largo de todo el mes de abril, tuvo

[582] Callejas, *op. cit.*, p. 49.

[583] "Certificado de defunción de Tomás Henríquez González", Concepción, 20 de marzo de 1973, n.º de inscripción 392, folio 17836150, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 13 de julio de 2016].

[584] *El Siglo*, Santiago, 27 de julio de 1973, p. 16.

relación con el proyecto educacional del Gobierno conocido como Escuela Nacional Unificada (ENU). Dicho plan tenía como objetivo propender a una transformación estructural del sistema educativo chileno, democratizando su acceso, mejorando la calidad de la educación primaria e integrando el ámbito politécnico hacia distintas áreas del desarrollo nacional. Tales objetivos se venían discutiendo desde 1971, observándose, de hecho, una amplia participación de la ciudadanía y de diferentes actores políticos. Inclusive, a fines de 1971 se desarrolló un Congreso Nacional de Educación en el que se delinearon las propuestas que serían parte integral del mismo.

Los problemas comenzaron cuando a mediados de marzo trascendieron, a través de algunos folletos y documentos emanados desde el Ministerio de Educación, las orientaciones generales del plan. En ellas se dejaba entrever una intención en apariencia «ideologizada» del proyecto, pues se enfatizaba en conceptos e ideas que tenían como norte contribuir en la construcción del socialismo en Chile[585]. En pocos días se sucedieron las declaraciones de rechazo al proyecto de la ENU, creando un ambiente de tensión entre los actores involucrados. Ya el 15 de marzo la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) emitió un comunicado en que se rechazaba la aplicación del plan. A juicio de esta agrupación, dicho proyecto representaba un intento tácito por convertir el sistema educacional en un instrumento de concientización política al «servicio del marxismo»[586].

En las semanas siguientes se multiplicaron las declaraciones de distintas instituciones y organismos que iban en la misma dirección, es decir, de rechazo al proyecto de la ENU debido a que trasuntaba, según se esgrimía, un propósito «ideológico». El cardenal arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez manifestó, por ejemplo, que, si bien compartía la idea en torno a reformar el sistema educacional, existían algunos puntos con los cuales «no concordaba plenamente». A juicio de Henríquez, la idea según la cual el país aceptaba un proyecto socialista, humanista y pluralista contrastaba con la visión de una parte importante del país que no concordaba con dichos ob-

[585] Este énfasis ha sido descrito por Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 304.

[586] "'FEUC llama a defender la libertad educacional'", *La Prensa*, 16 de marzo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 601.

jetivos. Además, el cardenal veía con preocupación los intentos por aplicar de manera inmediata dicha reforma, razón por la cual pedía la postergación de este plan a efecto de que fuese consensuado en el marco de una discusión más amplia[587]. Por su parte, el senador democratacristiano Patricio Aylwin se refirió al proyecto, también de forma crítica, a través de una cadena parcial de radio y televisión. En sus puntos fundamentales, el parlamentario expresó que la DC no estaba dispuesta a apoyar un modelo «precipitado» e «incompleto», cuyo objetivo era concientizar a niños y jóvenes dentro del «ideario marxista-leninista»[588].

El cuadro se tornó aún más complejo cuando desde las Fuerzas Armadas comenzaron a emerger voces críticas con el proyecto educacional. El general Carlos Prats recuerda que el tema fue bastante embarazoso cuando el ministro de Educación, Jorge Tapia, dictó una conferencia a un grupo de sesenta oficiales —medios y superiores— de las tres ramas de los institutos militares. El objetivo de la reunión, organizada por el ministro de Defensa José Tohá para el día 11 de abril, era clarificar algunos puntos del polémico plan. La intervención del secretario de Estado fue, según Prats, «clara, concreta y precisa», indicando que se ampliaría el debate en torno a la aplicación de la reforma. Enseguida, recuerda Prats, tomó la palabra el almirante Ismael Huerta quien criticaría con acritud el proyecto, ganándose con ello una avalancha de aplausos que inundaron la sala. El entusiasmo para saludar dicha intervención contrastaría con el silencio sepulcral con que fueron recibidas las intervenciones posteriores, entre ellas una réplica del ministro Tapia y otra del propio Prats. Como si la situación no fuera del todo incómoda, un capitán de navío tomó por última vez la palabra volviendo a criticar al Gobierno. A juicio del comandante en jefe, tales hechos eran indicativos de que había sonado la «campanada de la deliberación» en el seno de las Fuerzas Armadas[589].

La intensidad del debate en torno al polémico proyecto abrió la puerta a la movilización de diversos sectores, teniendo especial protagonismo los estudiantes secundarios. En cuestión de días, sendas

[587] "Iglesia Católica pide que se postergue la aplicación de la ENU", *La Tercera*, 29 de marzo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 613-614.

[588] "PDC rechaza la Escuela Nacional Unificada", *El Mercurio*, 6 de abril de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 615-617.

[589] Prats, *op. cit.*, pp. 377-379.

marchas organizadas por un sector de la FESES —aquel controlado por la DC— se fueron desplegando en las principales ciudades del país, extendiéndose a lo largo de casi todo abril. El día 11 de ese mes, comenzaron a producirse los primeros desórdenes en ciudades como Santiago y Valparaíso, los cuales fueron acompañados con la toma de diversos establecimientos secundarios[590]. Hacia el 17 de abril se produjo una masiva movilización de estudiantes de colegios particulares quienes convocaron a un paro nacional, el que afectó, según algunas fuentes, a casi doscientos mil secundarios[591].

Estas manifestaciones serían apoyadas sin duda por la oposición y otros sectores del país, lo cual contribuyó a conformar un cuadro bastante complejo para el Gobierno. Ya no se trataba solo de una oposición partidista que lanzaba sus dardos en contra de la UP desde el ámbito institucional, sino que aquella reflejaba una participación más transversal proveniente desde distintos sectores[592]. De producirse una confrontación mayor en torno a la ENU, la alineación de fuerzas de la oposición resultaba a todas luces más cohesionada y numerosa que la que podía mostrar el oficialismo. En atención a ello, el Ejecutivo decidió, el 12 de abril, posponer la aplicación del proyecto y ampliar el periodo de discusión del mismo[593].

590 Salazar, M., *Chile... op. cit.*, p. 302.

591 Rojas Flores, *op. cit.*, p. 497. Este estudio señala que en la movilización de los secundarios comenzó a observarse también la participación de estudiantes de enseñanza básica, particularmente de alumnos de séptimo y octavo básico.

592 Sumado a ello, habría que señalar que también, desde comienzos de abril empezó a discutirse el tema del Área de Propiedad Social, con el consiguiente desgaste que un tópico de este tipo significaba. El plan del Gobierno era mantener el control de cuarenta y cinco empresas requisadas, mientras que la oposición, en especial la DC, quería zanjar de una vez el problema. Esto último significó que el Congreso se pronunciaría sobre los vetos del Ejecutivo al proyecto Hamilton-Fuentealba, los que fueron rechazados por mayoría simple. Bajo la óptica del gobierno, dicho rechazo debía producirse por dos tercios de los parlamentarios. Se iniciaba así, nuevamente, una larga discusión en materia de interpretación jurídica que no destrabaría el conflicto en el corto plazo. Aquí surgieron entonces dos opciones, ancladas a las perspectivas estratégicas de cada bloque en disputa: por una parte, la oposición planteó que el gobierno debía promulgar el proyecto Hamilton Fuentealba, o bien, convocar a un plebiscito. Consciente de que esta última opción implicaba la posibilidad de sufrir una dura derrota, el Gobierno sostuvo que llevaría la discusión al Tribunal Constitucional. La resolución del conflicto quedaría entonces aplazada hasta que existiera un pronunciamiento al respecto. Véase, Corvalán Marquéz, *Los partidos..., op. cit.*, pp. 306-307.

593 "Gobierno posterga aplicación de la Escuela Nacional Unificada", *Las Últimas Noticias*, 13 de abril de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 620-621.



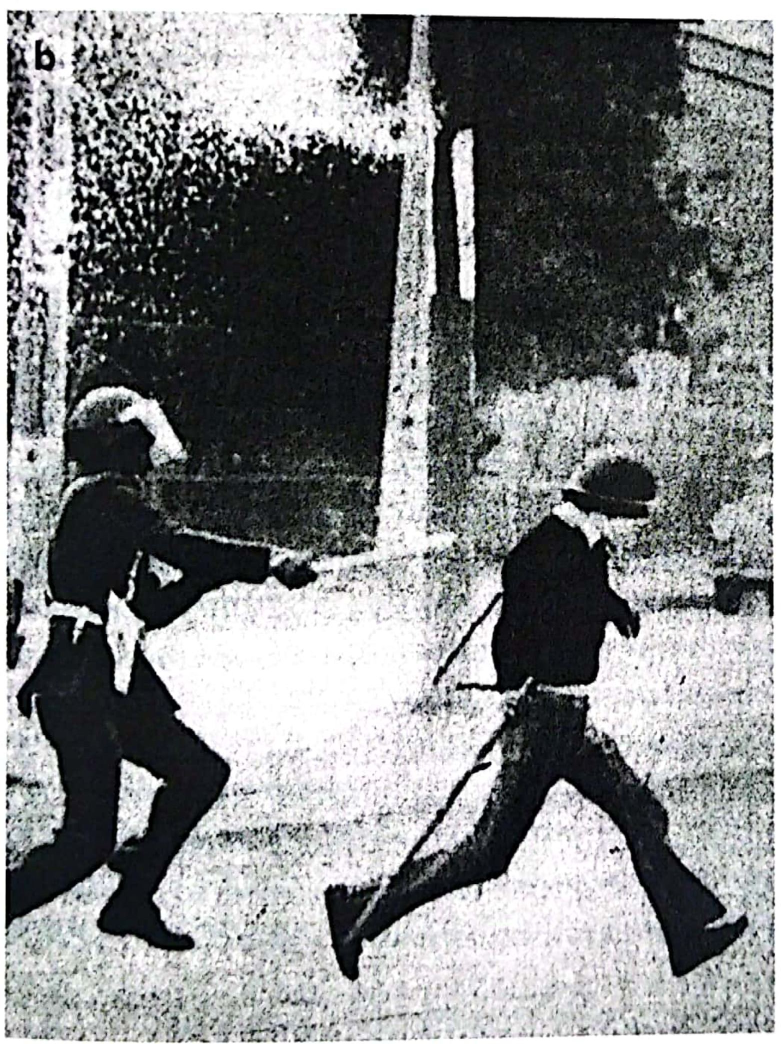


Imagen n.º 7. a y b. Enfrentamientos entre obreros y carabineros en el Cordón Vicuña Mackenna. *Ercilla*, n.º 1970, 18 al 24 de abril de 1973. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

Sin embargo, ello no significó el término de las movilizaciones ni de los enfrentamientos callejeros. Más bien estos crecieron en intensidad confluyendo, hacia fines de abril, con un conjunto más amplio de actores que también se levantaron para protestar en contra del gobierno. De hecho, el día 19 de ese mes se inició la huelga de mineros de El Teniente para exigir mejoras salariales, conflicto que escalaría en intensidad en pocas semanas y que se extendería por casi dos meses. Por contraparte, la izquierda respondió con una movilización de masas en distintos puntos del país, aunque concentrándose de preferencia en la capital. En los días finales de este mes, la ciudad de Santiago mostraba un escenario de máxima tensión y conflictividad, donde marchaban grupos heterogéneos de manifestantes: desde estudiantes secundarios y trabajadores hasta los grupos de choque de diversas colectividades.

El clima político, sin duda, estaba encendido a propósito del tema de la ENU y las declaraciones que iban en una y otra dirección. En este sentido, cualquier planteamiento que fuera sacado de contexto o tergiversado contribuía, independiente de su veracidad, a polarizar aún más el ambiente. Así por ejemplo, el día 23 de abril se dieron a conocer unas supuestas declaraciones del presidente Allende quien instigaba a un grupo de trabajadores para que emplearan sus «energías y fuerzas revolucionarias» en la destrucción del diario *El Mercurio* y del Parlamento[594]. A pesar de que el primer mandatario negaría la información y la calificaría como una noticia infame y «canallesca»[595], el hecho hacía que el primer mandatario se inmiscuyera en una polémica sorda y de bajo nivel que en realidad solo desgastaba su propia figura.

Como era de esperar, las declaraciones de algunos partidos también tensionaban el ambiente político. A través de una declaración pública, El PS denunció que el día 24 de abril el diario *Las Noticias de Última Hora* fue asaltado por diversos individuos. Según el documento, en el hecho tuvieron participación elementos de la DC y «jóvenes fanatizados» que actuaban «como dóciles instrumentos de

[594] "Amenazante declaración del Presidente Allende", *El Mercurio*, 25 de abril de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 626-627.

[595] "'Además de infame la información es canallesca'", *El Siglo*, 25 de abril de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 627-629.

politiqueros cobardes». Al mismo tiempo, esta declaración conectaba lo ocurrido en el periódico con los diversos hechos de violencia que se venían registrando en el país en los últimos días y de los cuales eran responsables, según el PS, los señores «Frei, Jarpa y Fuentealba». A pesar de esta situación, la declaración señalaba que los planes de destrucción y derrocamiento de la oposición en contra del gobierno se estrellarían «con el poderoso puño del pueblo»[596]. Ese mismo día, en tanto, se produjo una tensa sesión en la Cámara de Diputados, que derivó en insultos y conatos de pelea entre el parlamentario democratacristiano Arturo Frei Bolívar y el socialista Mario Palestro. La conducta de Frei Bolívar, quien al parecer habría golpeado con mayor dureza a su colega, fue alabada en esa misma sesión por el diputado del PN Hardy Momberg quien la calificó como «viril», además de señalar que era la «única» actitud que cabía en esos momentos[597]. El ambiente de confrontación emergía así en casi todos los rincones del quehacer político y social del país, no distinguiendo entre debates de mayor o menor trascendencia.

Así se llegó a los días 26 y 27 de abril en que se produjeron los hechos de mayor violencia de todo el mes. En la jornada del 26 se llevó a cabo una gran concentración organizada por la FESES para rechazar el proyecto de la ENU, la cual ya había sido aplazada por la autoridad. La marcha se inició en las afueras de la Biblioteca Nacional y se dirigió, por espacio de casi diez cuadras, hasta el frontis del Ministerio de Educación. Allí, luego de que el presidente de la FESES, Miguel Salazar, pronunciara un encendido discurso —en el cual acusó al ministro Tapia de temerle a los estudiantes— comenzaron los incidentes. Según el vespertino *La Segunda*, desde una camioneta que portaba altoparlantes se conminó a los secundarios para que se disolvieran, llamado que fue respondido con una lluvia de piedras. En cuestión de minutos, los piedrazos se extendieron hasta las dependencias del propio ministerio y otros edificios cercanos, generándose una batalla de proporciones a lo largo de casi seis cuadras. En ese contexto, continúa este medio, intervino la policía

[596] "Partido Socialista: Denuncia por el asalto del diario *Última Hora*", 25 de abril de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4528-4529.

[597] Diputados, *Diario de sesiones*, 42.ª sesión extraordinaria, martes 24 de abril de 1973, p. 2557.

con gases lacrimógenos y carros lanzaguas logrando normalizar la situación cerca de las 13:30 horas. El balance no habría dejado detenidos, pero sí diversos heridos de consideración[598].

En paralelo a estos incidentes, se producía un acto de masas en el Teatro Caupolicán, el cual reunió a los estudiantes secundarios de izquierda. El principal orador del encuentro fue el también dirigente de la FESES, Camilo Escalona, quien acusó a la DC y al PN de rechazar el proyecto de la ENU con el único propósito de entorpecer el año escolar y desacreditar al ministro Tapia. Además, el líder estudiantil sostuvo que la oposición buscaba crear un ambiente de violencia que abriera la puerta a otra paralización nacional para que de este modo se produjera un golpe de Estado[599]. Las palabras de Escalona, lejos de atender a cuestiones solo coyunturales, se encontraban conectadas a debates y problemáticas más amplias. En este caso, el rechazo de democratacristianos y nacionales a la ENU, escondía, según el dirigente juvenil, propósitos más aviesos que se vinculaban a un objetivo manifiesto por derrocar al Gobierno de la UP. Cuando el mitin concluyó, los estudiantes se dirigieron en una marcha improvisada hasta el frontis del Palacio de La Moneda donde el presidente Allende les dirigió algunas palabras. Según Jorge Rojas, en horas de la tarde los desórdenes volvieron a aparecer en el centro de la capital, aunque en estos ya no predominaban los secundarios[600].

Al día siguiente, 27 de abril, los enfrentamientos se repitieron, esta vez con mayor violencia e incluyeron a un contingente más amplio de actores. A las diez de la mañana, la subsecretaría del frente interno del PS había emitido un instructivo para sus militantes que daba cuenta de la sensación ambiente que reinaba en esos momentos. El documento señalaba la existencia de una escalada conspirativa que buscaba instaurar el terror a través de una «dictadura fascista» y en cuya organización se ubicaban sectores empresariales, gremiales y, por supuesto, miembros de la oposición democratacristiana y

598 "Grandioso mitin contra la ENU", *La Segunda*, 26 de abril de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 630-632.

599 "'La oposición quiere utilizar a los estudiantes como carne de cañón'", *Las Noticias de Última Hora*, 26 de abril de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 629-630.

600 Rojas Flores, *op. cit.*, p. 497.

nacional. Con el objetivo de materializar dicha escalada, insistía el documento, se había desatado una ofensiva «ideológica y publicitaria» a través de la «agitación de masas» y un conjunto de acciones insurreccionales. Para frenar estos intentos, el PS llamaba a desarrollar una «defensa irrestricta» del Gobierno impidiendo que se produjera cualquier tipo de movilización similar al paro de octubre del año anterior. En esa línea, el documento señalaba como una de las medidas más importantes el lograr una amplia movilización social el día 1 de mayo bajo la idea de «defensa del Gobierno» y del proceso de cambios. También se instruía en ocupar la calle a efecto de aplastar, con firmeza, la «agitación callejera del fascismo»[601].

A mediodía la tensión se respiraba en diversos puntos del centro de la capital. En un espacio de seis cuadras, muy cercanas al Palacio de La Moneda, se juntaron cientos de trabajadores y estudiantes, en su mayoría partidarios del gobierno. Predominaba, en todo caso, un contingente más bien adulto de clara composición proletaria, pues el presidente de la FESES, Miguel Salazar, había hecho un llamado para que el día 27 los estudiantes volvieran a clases[602]. Pasadas las tres de la tarde, se formó una marcha por el bandejón central de la Alameda. Al pasar frente a la sede de la DC, ubicada en la misma avenida, comenzaron a producirse los conatos de peleas, gritos y, posteriormente, enfrentamientos de mayor envergadura. Fue en ese marco cuando se escucharon algunos disparos, uno de los cuales impactó en el cuerpo del obrero José Ricardo Ahumada Vásquez, de 22 años de edad y militante del PC.

Las denuncias de la prensa oficialista apuntaron a la sede de la DC como el lugar desde provinieron los disparos. El 28 de abril, el periódico *El Siglo* sostuvo que los autores materiales del crimen se habían apostado en el cuarto piso del edificio, desde donde utilizaron una metralleta y revólveres para atacar a los obreros[603]. *La Nación* entregó la misma versión, indicando además que Radio Balmaceda tuvo un rol esencial a la hora de crear un clima propicio para el enfrentamiento. Según este periódico, la radioemisora comenzó a

[601] "Partido Socialista: Instructiva nacional", 27 de abril de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4522-4524.
[602] Rojas Flores, *op. cit.*, p. 498.
[603] *El Siglo*, Santiago, 28 de abril de 1973, p. 9.

emitir mensajes a partir de las 15 horas a través de los cuales se decía que la sede del partido estaba siendo asaltada, por lo que se pedía a la militancia que acudiera cuanto antes a defenderla[604].

La prensa opositora, en tanto, revisó con distintos matices la noticia. En *El Mercurio* se cubrió ampliamente lo sucedido, consignando tanto la muerte del obrero comunista como las distintas versiones que explicaban estos hechos[605]. El periódico de la DC, *La Prensa*, abordó de forma bastante particular lo sucedido. En su portada del día 28 de abril, el titular principal refería que la sede del partido fue «asaltada y baleada». Tales afirmaciones se repitieron, en esa misma plana, para describir lo sucedido en las oficinas de su periódico. En la parte superior de la portada se ponía el acento en la crítica situación por la que atravesaban las Fuerzas Armadas y Carabineros, pues según este medio el país se encontraba «entregado a las hordas rojas». En medio del complejo panorama que describían los titulares de *La Prensa* se reservó un espacio para otra noticia que, sin duda, podía resultar inquietante. Se señalaba que en la ciudad de Quillota habían matado «a cadenazos» a una joven militante de la DC[606]. El objetivo de este medio, al divulgar noticias de esta naturaleza, era desviar la atención respecto a lo sucedido con el obrero comunista que falleció frente a la sede del partido. De hecho, este último incidente se consignó en las páginas interiores de esa misma edición, aunque de modo muy breve y señalando solo que un muerto había «caído» frente al edificio del partido[607].

El certificado de defunción del obrero comunista corrobora que el deceso se produjo en horas de la tarde (17:15) y que la causa del fallecimiento fue una herida a bala torácica[608]. El documento, además, no indica que la víctima haya recibido algún tipo de asistencia

[604] *La Nación*, Santiago, 28 de abril de 1973, p. 1.

[605] *El Mercurio*, Santiago, 28 de abril de 1973, p. 1.

[606] *La Prensa*, Santiago, 28 de abril de 1973, p. 1. Tal noticia se revelaría dos días después como falsa, siendo el propio periódico el que reconocería que la supuesta agresión no había pasado de ser un incidente menor en que no se produjeron víctimas fatales. Véase, *La Prensa*, Santiago, 30 de abril de 1973, p. 5.

[607] *La Prensa*, Santiago, 28 de abril de 1973, p. 5.

[608] "Certificado de defunción de José Ahumada Vásquez", Santiago, 27 de abril de 1973, n.º de inscripción 904, registro E1, folio 14726227, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 5 de mayo de 2016].

médica oportuna o que fuese trasladado a un centro hospitalario. Al considerar estos elementos, resulta poco probable que el obrero José Ahumada haya sido asesinado por sus propios compañeros, como lo insinuó en algún momento cierto sector de la prensa. De hecho, se hacía difícil que el victimario, disparando a corta o media distancia, no hubiese sido identificado y detenido rápidamente. También resulta complejo de corroborar, aunque no podría descartarse del todo, que la bala haya provenido desde algún uniformado que se encontraba apostado en el lugar. Sin embargo, la versión que predominó en distintos medios, y que incluso *El Mercurio* consignó, refiere que los disparos provinieron desde el interior de la sede de la DC.

Como era de suponer, la muerte del obrero generó una amplia gama de reacciones, las cuales, además, se vincularon a temas globales. El 28 de abril, el secretario general del PS, Carlos Altamirano, emitió una declaración en que expresaba sus condolencias al PC por la muerte de su militante, refiriendo además otros tópicos que se vinculaban a este suceso. Según el senador socialista, este hecho de sangre se conectaba a una larga lista de crímenes ocurridos en el pasado reciente, y cuya responsabilidad fundamental recaía en la DC y sus dirigentes. En este marco se insertaban, según Altamirano, la masacre de mineros en el campamento El Salvador en 1967 y la muerte de pobladores en Pampa Irigoin en 1969. Lo que estos eventos demostraban, a ojos del dirigente socialista, era que, ante el dilema de tomar partido por los trabajadores o los capitalistas nacionales y extranjeros, la DC había abrazado siempre esta última opción. Desde este ángulo, la muerte del militante comunista tenía un significado global que se conectaba a procesos históricos que trascendían a la propia UP, inscribiéndose en las páginas más tristes de la lucha de clases en Chile. Por último, Altamirano advirtió que los sectores más reaccionarios de la oposición tomaron conciencia que tras el 4 de marzo solo les quedaba el camino de la «fuerza y sedición»[609].

El senador comunista Volodia Teitelboim sostuvo, en tanto, que la muerte de Ahumada constituía un crimen político que

[609] "Carlos Altamirano: Nuestras condolencias a la familia, a la clase obrera y al Partido Comunista por el asesinato de José Ricardo Ahumada, cometido por la Democracia Cristiana", 28 de abril de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4525-4527.

> [...] debería abrir dentro de la Democracia Cristiana un proceso autocrítico donde muchos militantes tienen forzosamente que peguntarse: ¿hacia dónde vamos por ese camino de muerte y sangre? ¿Hacia dónde nos llevan los que proclaman la necesidad de la «guerra sin cuartel»? Porque conocimos las declaraciones agresivas, las incitaciones a la violencia de ciertos personeros de ese partido que en nada se diferencian de las declaraciones de los portavoces del Partido Nacional y de Patria y Libertad [...] Pero acabamos de leer también una entrevista humana y cívicamente responsable del rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, cuyo espíritu, cuya forma y cuyo fondo nada tienen que ver con el asesinato como arma política[610].

A diferencia del análisis maximalista de Altamirano que responsabilizaba a toda la DC como autora del crimen, Teitelboim indicaba a través de esta reflexión la existencia de matices dentro de la plana dirigente de este partido, al tiempo que hacía un llamado a la reflexión sobre los límites de la violencia.

En el acto del 1 de mayo también se hicieron referencias al reciente crimen. El presidente de la CUT, Jorge Godoy, sostuvo que en la persona de José Ahumada Vásquez quedaban representados todos los trabajadores que habían caído en las luchas del pasado. En ese sentido, el obrero fallecido constituía, según el dirigente sindical, un «mártir» de la clase proletaria, por lo que no cabía sino rendir un sentido homenaje en su memoria[611].

Pero el impacto por la muerte del militante comunista no quedaría situado solo en el ámbito político partidista. Desde el mundo de la cultura, se hicieron sentidos homenajes a la figura del obrero fallecido. El pintor español José Balmes realizaría poco tiempo después de ocurrido el crimen una serie de pinturas que llevaban por título «José Ahumada Vásquez». En una de ellas se divisa un cuerpo tendido en el suelo, vestido completamente de negro, y desde cuya parte superior emana una gran cantidad de sangre hasta formar un

[610] "'La Democracia Cristiana debe hacerse un examen de conciencia'", *El Siglo*, 30 de abril de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 632-633.

[611] "'El pueblo debe triunfar en esta revolución'", *Puro Chile*, 27 de mayo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 633.

charco que lo rodea hasta la cintura[612]. Por su parte, el cantautor Víctor Jara, figura relevante del movimiento cultural y musical de esos años, escribiría la letra de la canción *Cuando voy al trabajo* como una metáfora de lo que, a su juicio, podría haber cantado el obrero a su esposa e hija, esta última de apenas seis meses[613].

Al calor de estos homenajes, era evidente que la muerte de José Ahumada Vásquez impactó de modo profundo en la escena nacional. Sin embargo, los llamados que se realizaron a partir de este hecho, a objeto de que el clima de violencia y enfrentamientos que se vivía retrocediera o menguara, no tuvieron mayor eco. Se encontraba arraigada de forma muy fuerte una sensación de que el país era un campo de batalla abierto en el cual se resolverían, sobre todo a través de la fuerza, distintas cuestiones, desde las más trascendentes y estructurales hasta aquellas más inmediatas y coyunturales. Hacia fines de abril, todo parecía envuelto en una atmósfera de desconfianza y pesimismo que auguraba perspectivas poco alentadoras[614].

A pesar de que los primeros días de mayo denotaron cierta tranquilidad, sobre todo en el acto que conmemoraba el día del trabajador, en menos de tres días los incidentes no tardaron en reaparecer en el centro de Santiago. Esto significó que volvían a posicionarse

[612] La obra se puede ver en el texto de María Nieves Alonso, "José Balmes: Como un río que desborda sus orillas", p. 143. En este mismo artículo se encuentran otras creaciones de Balmes que reflejan su preocupación por el tema de la violencia y la muerte. Se pueden visualizar, en efecto, algunas obras referidas al crimen del general René Schneider ocurrido en 1970 y también respecto a la dura represión acontecida bajo la dictadura militar.

[613] El vídeo con la interpretación en vivo de esta pieza y las palabras iniciales con que Víctor Jara explica la historia de su creación se encuentra en "Víctor Jara, Cuando voy al trabajo", disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9rJhnDNeZQM.

[614] Ni el propio Allende, a pesar de sus constantes llamados a la calma y el entendimiento, quedó al margen de este clima. Cuando se conoció por esos días que el primer mandatario había sido distinguido con el Premio Lenin de la Paz, los parlamentarios de oposición no se abstuvieron de criticar el reconocimiento. El senador del PN Víctor García Garzena sostuvo, por ejemplo, que los rusos «solo otorgan premios de guerra». Por su parte Rafael Moreno, senador de la DC, sentenciaba con ironía: «¿De qué paz me hablan?». Más enfático y mordaz fue el diputado de esta misma tienda, Jorge Lavandero, quien sostuvo que el premio a Allende era como darle el premio mundial de la democracia «a Stroessner». Finalmente, Juan Hamilton, también de la DC, indicó que el premio no resolvía ningún problema actual de Chile, sino que solo halagaba «la vanidad presidencial», "Polémica parlamentaria por premio Lenin de la Paz a S.E.", *La Tercera*, 3 de mayo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 634.

en un lugar central las dinámicas de confrontación observadas desde hacía tiempo en las calles. Este fue el contexto en que se produjo un violento enfrentamiento en la tarde del 4 de mayo en pleno centro de la capital y que dejó como saldo un militante de Patria y Libertad fallecido y otro gravemente herido. Para esa jornada, el grupo nacionalista había organizado un desfile por calle Bandera, lugar donde se reunió un nutrido grupo de militantes frentepatristas. Cuando la marcha alcanzó la intersección de las calles Huérfanos con Ahumada, los concurrentes se toparon con miembros del MIR que se encontraban en el sector. Los conatos de enfrentamientos y agresiones verbales en una y otra dirección no tardaron en aparecer. Según consigna *El Mercurio*, en medio de la refriega irrumpió un automóvil desde el cual se bajaron algunos individuos que comenzaron a disparar en contra de los militantes nacionalistas[615]. En este contexto, indica el periódico de Patria y Libertad, el dirigente Mario Aguilar al ver como baleaban a su correligionario, Ernesto Miller, salió en persecución de uno de los atacantes, quien logró esconderse en un edificio cercano. En dependencias de ese lugar se produjo el baleo a Aguilar, quien quedó tendido e inconsciente en el suelo[616]. La crónica del periódico *La Prensa*, coincide con esta misma versión, agregando que el victimario, sin mediar forcejeo alguno, disparó de forma sorpresiva en contra del militante nacionalista[617]. El incidente dejó, en definitiva, un muerto, un herido de consideración con siete balazos en el cuerpo y diversos daños a la propiedad pública y privada. El certificado de defunción de la víctima corrobora la magnitud de la lesión producida por los disparos al anotar como causa de muerte una herida a bala abdomino pelviana complicada y una anemia aguda[618].

Aunque los indicios de lo sucedido hacían sospechar una eventual participación de militantes de izquierda en este enfrentamiento, periódicos como *El Siglo* fueron reacios a reconocer tal situación. Este matutino sostuvo, de hecho, que habían sido los militantes de Patria

[615] *El Mercurio*, Santiago, 5 de mayo de 1973, p. 1.

[616] *Patria y Libertad*, n.º 47, Santiago, 11 de mayo de 1973, p. 3.

[617] *La Prensa*, Santiago, 5 de mayo de 1973, p. 1.

[618] "Certificado de defunción de Mario Aguilar Rogel", Santiago, 4 de mayo de 1973, n.º de inscripción 459, folio 19272313, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 11 de agosto de 2016].

y Libertad quienes iniciaron los enfrentamientos. Respecto al ingreso del automóvil y la balacera que se produjo después, este medio indicaría que dichos antecedentes demostraban que se trataba de una acción «previamente concertada». Bajo este ángulo, *El Siglo* trataba de señalar que la muerte de Mario Aguilar podría corresponder a una acción materializada por las propias huestes de Patria y Libertad con el objetivo de responsabilizar a la izquierda como autora del crimen[619]. En los días siguientes este medio insistiría en que el enfrentamiento se produjo entre miembros del grupo nacionalista y «desconocidos»[620].

Para Patria y Libertad, el crimen de su joven militante fue un duro golpe. El dirigente de este grupo Manuel Fuentes Wendling recuerda que los funerales del segundo mártir del movimiento fueron «impresionantes». El cortejo fúnebre que se dirigió al Cementerio General de Santiago se extendía, según Fuentes, por casi diez cuadras y en él se encontraban personas de distintos puntos de la capital y de «diversos niveles sociales»[621]. José Díaz Nieva, por su parte, indica que el funeral de Aguilar se convirtió en un «acto de repulsa» al Gobierno en el cual se observaron, además, representantes de diversas colectividades políticas[622]. El número 47 de la revista de Patria y Libertad, que salió a circulación el 11 de mayo, tituló en su portada un mensaje que no dejaba dudas respecto a los autores del crimen, así como tampoco respecto a su proyección política. El texto, inscrito sobre la imagen de una bandera chilena con la estrella blanca ensangrentada, decía: «¡Asesinos! La sangre del nacionalismo liberará a Chile»[623]. Para este movimiento, la muerte de su militante no significaba tan solo una pérdida para sus filas, sino que además ella se situaba como un elemento simbólico que daría fuerza a quienes luchaban en contra del marxismo. Más aún, por el tenor del mensaje esta agrupación demostró un alto nivel de convencimiento en orden a que sería el nacionalismo chileno, del cual ellos se sentían los principales representantes, la corriente que derrotaría al socialismo. De este modo, otra vez un hecho de violencia política era proyectado y entendido bajo nociones de lucha global dentro de un escenario de abierta confrontación.

[619] *El Siglo*, Santiago, 5 de mayo de 1973, p. 9.
[620] *El Siglo*, Santiago, 6 de mayo de 1973, p. 2.
[621] Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 214.
[622] Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, p. 244.
[623] *Patria y Libertad*, n.º 47, Santiago, 11 de mayo de 1973, p. 1.

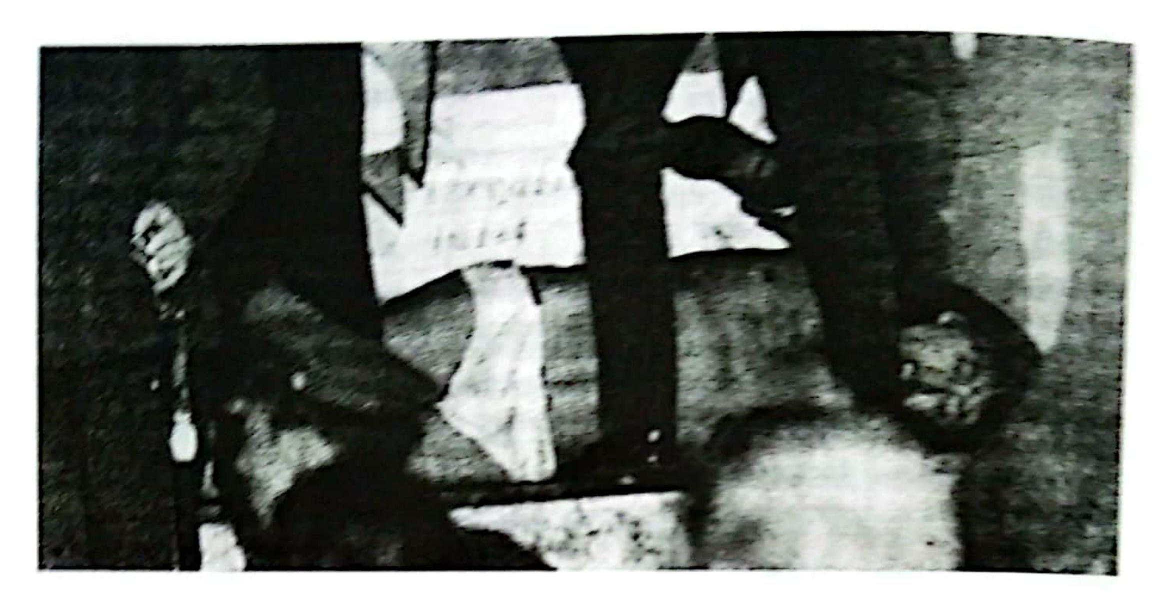


Imagen n.º 8. Carabineros rodean el cuerpo sin vida del militante de Patria y Libertad, Mario Aguilar Rogel, asesinado en el centro de Santiago a principios de mayo de 1973. *Ercilla*, n.º 1973, 9 al 15 de mayo de 1973, fotografía de Hernán Castillo. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

Cuando el impacto por la muerte de Aguilar todavía golpeaba a Patria y Libertad, reapareció en escena Roberto Thieme. Su rastro se había perdido a mediados de febrero en la costa de la octava región, lugar en que presumiblemente había caído la avioneta que piloteaba. El 5 de mayo, Thieme junto con Miguel Sessa Brignardelo fueron detenidos en la ciudad argentina de Mendoza luego de aterrizar en una hacienda agrícola de esa ciudad. Como lo han indicado Laura Rodríguez y Alejandro Paredes, la aparición del secretario general de Patria y Libertad fue observada desde distintos ángulos por la prensa de ambos lados de la cordillera. Mientras que los diarios *Mendoza*, *El Mercurio*, *La Tercera* y *La Prensa* le bajaron el perfil a lo sucedido, aduciendo que incluso podría tratarse de una maniobra de la propia UP para tapar los problemas existentes, los periódicos de izquierda fueron críticos con el hecho[624]. En estos últimos se explicitó de forma transversal la idea de que con la detención de Thieme quedaba al descubierto un vasto plan conspirativo en contra de Allende. El periódico *Puro Chile*, por ejemplo, reveló que en la avioneta que piloteaba el dirigente nacionalista fueron halladas armas, algunos planos de instalaciones militares e industriales chilenas y documentación

[624] Laura Rodríguez y Alejandro Paredes, "Organizaciones de derecha y conspiración antiallendista en Mendoza, Argentina (1970-1976)", p. 78.

subversiva de distinto tipo[625]. A decir verdad, tal hallazgo parecía guardar relación con las palabras que el propio Thieme pronunciara a los medios de comunicación tras ser detenido. Según la información recogida por Manuel Salazar, el dirigente sostuvo que el precio de la liberación de Chile de la dictadura comunista sería la «guerra civil», por lo que no cabía sino empuñar el fusil para «defender la patria»[626].

En medio de este cúmulo de noticias, y en atención al complejo escenario social y político que se vivía en la capital, el Gobierno decretó el estado de emergencia para Santiago y provincias adyacentes, designando como jefe de zona al general Mario Sepúlveda Squella. El documento estableció el cese de las manifestaciones públicas y un riguroso control de la prensa, prohibiéndose la difusión de noticias alarmistas o tendenciosas. De igual forma se prohibía el porte de armas blancas o de fuego para la población civil y se dejaba en manos de Carabineros e Investigaciones el control del tránsito de personas y vehículos. En su parte final, el decreto establecía que algunos oficiales del Ejército y la Fuerza Área quedarían a cargo de las zonas jurisdiccionales cercanas a la capital[627]. El objetivo de las autoridades era normalizar cuanto antes el escenario nacional a efecto de abrir el camino hacia el entendimiento y el fin de la violencia.

En atención a la cercanía temporal que medió entre la muerte de José Ahumada y Mario Aguilar, cabría preguntarse si ambos crímenes

[625] "En Argentina resucitó 'fascista' Roberto Thieme", 6 de mayo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 635.

[626] Salazar, M., *op. cit.*, p. 312. Tras varias indagaciones y trámites, las autoridades argentinas otorgarían finalmente asilo político a los militantes nacionalistas. En sus memorias, Thieme cuenta que al principio fueron tratados con dureza por la policía trasandina pues pensaban que se trataba de extremistas de izquierda. Al cabo de unas horas, y gracias a la intervención de altos oficiales del Ejército argentino, el trató cambió. Estos mismos oficiales les indicaron que seguirían contando con su apoyo secreto para llevar adelante el proyecto Sierra Alfa, consistente en la formación de cuadros paramilitares chilenos en la zona de Malargüe, al sur de Mendoza. Thieme, *op. cit.*, pp. 107-112.

[627] "Gobierno decretó zona de emergencia para Santiago", *El Siglo*, 6 de mayo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 636-637. De entre todos los uniformados designados por la autoridad, destacaba un teniente coronel a cargo de las provincias de San Antonio y Melipilla quien alcanzaría renombre tras el golpe militar del 11 de septiembre. Se trataba de Manuel Contreras Sepúlveda, futuro director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura que jugaría un papel clave en la represión de los opositores políticos.

respondieron a una microcoyuntura particular escenificada en el centro de Santiago en esos días o bien formaron parte de dinámicas más amplias. Para el historiador Gabriel Salazar, este tipo de coyunturas estaban determinadas por la proliferación de hechos de violencia que lograban movilizar rápidamente a contingentes que en periodos de normalidad tendían a permanecer inmóviles. Desde su óptica, esta situación habría desembocado en un engrosamiento de los afluentes de personas que bajaban a «disputar las calles» del centro de Santiago a las «masas populares de izquierda». Así, en el último año de la UP, indica Salazar, se observaron los enfrentamientos masivos que fueron denominados, desde distintos ángulos, como «las batallas de Santiago». En ese marco, se habrían registrado siete batallas por el control de las calles de la capital, siendo una de ellas —la tercera— la del día 26 de abril. Los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo, en tanto, son entendidos por Salazar como parte de una cuarta batalla por Santiago, no obstante que él la designa como «segunda batalla» y ubica, además, la muerte del militante comunista José Ahumada en este periodo[628].

Aunque la perspectiva de Salazar resulta siempre sugerente, su interpretación en clave histórico popular deja algunas interrogantes. Es cierto que existían antecedentes previos a los sucesos ocurridos a fines de abril, pero ellos no se explican exclusivamente por la proliferación de «conos» de violencia política popular. Esto haría suponer la existencia de formas particulares de este tipo de violencia que no serían, en modo alguno, compartidas por sujetos pertenecientes a otras clases sociales. La propuesta interpretativa de este autor plantea así un límite conceptual y metodológico de singular relevancia en que la pregunta en torno a qué es lo popular emerge como una de las más importantes. Al mismo tiempo, surge una segunda interrogante respecto a cómo considerar a aquellos segmentos, entendidos como parte del mundo popular, que manifestaron su oposición a la UP e inclusive se movilizaron en contra del Gobierno. Por último, la idea expresada sobre la activación de masas que «bajaban» al centro de Santiago a disputar la calle a los grupos populares de izquierda delimita la complejidad de la violencia dentro de un esquema muy rígido y unilateral.

628 Salazar, G., *La violencia...*, *op. cit.*, pp. 273-275.

Desde la perspectiva de este libro, las dinámicas de violencia ocurridas entonces no son posibles de adscribir a esquemas tan estructurados, que delimitan la participación y acción política de los sujetos bajo el concepto de clase social. La propuesta desarrollada aquí, y que entiende la violencia política de estos años como una de carácter civil, constituye un punto de partida más flexible para describir esta problemática. En esta línea, el acento está puesto en un protagonista más diverso, sin establecer cortes ni delimitaciones de clase. Asimismo, se comparte la perspectiva de Eugenia Palieraki quien sostiene que la lucha callejera vivida durante la UP se constituyó en un fenómeno recurrente de la vida política, adquiriendo cierta cotidianidad para un sector social cada vez más amplio[629].

En este marco de discusión, los hechos ocurridos entre fines de abril y los primeros días de mayo estaban conectados a dinámicas de conflicto preexistentes. No podrían entenderse, entonces, solo como «batallas» en que ciertos sectores se vieron incitados, como dice Salazar, a disputarle la calle a los grupos de izquierda. Se recodará, en efecto, que tanto la derecha como la izquierda ya marcaban una presencia significativa en los espacios urbanos y rurales desde hacía tiempo atrás. Basta señalar que, en el caso de la derecha, su ciclo movilizador se había intensificado desde finales de 1971 a propósito de la marcha de las cacerolas vacías, hecho que evidenció la apuesta de este sector por conformar un frente social de oposición dura a la UP. En el espacio temporal comprendido entre abril y mayo de 1973, los hechos que se materializaron en la muerte de José Ahumada y Mario Aguilar, y los enfrentamientos y desórdenes que los acompañaron, estaban conectados a un periodo que se inició tras los resultados electorales del 4 de marzo y los intentos por aplicar la reforma de la ENU. Esto gatilló, como se recordará, rápidas movilizaciones de distintos sectores sociales a efecto de apoyar o rechazar el plan educacional del Gobierno. Al mismo tiempo emergerían otros hechos que, aunque no estaban conectados al tema educacional, de igual modo significaron la activación de conflictos sociales en diversos puntos del país. Visto desde una perspectiva amplia, estos eventos se conectaban a directrices mayores que tenían como telón de fondo la pugna por

[629] Eugenia Palieraki, "Las manifestaciones callejeras y la experiencia de la Unidad Popular (1970-1973)", pp. 4 y 27.

dirimir la continuidad o cancelación del proyecto socialista de la UP.

Al mediar el mes de mayo, las problemáticas sociales y políticas no bajaban su intensidad. Por el contrario, aquellas se incrementaban y comenzaban a acumularse periódica y conflictivamente para el Ejecutivo. Con seguridad, la característica principal de este escenario radicaba en la intransigencia y maximalismo de los discursos que recorrían el espacio público y que explicitaban escenarios definitorios para el corto plazo. Dicha característica fue transversal respecto a tres líneas de tensión que emergieron en este mes. La primera de ellas tuvo relación con el recambio que operó en la directiva nacional de la DC, en que el sector conservador se hizo con la presidencia en la Junta Nacional celebrada el 13 de mayo. No deja de ser indicativo de esta situación el hecho de que el sector progresista que hasta ese entonces comandaba al partido decidió no repostular para un segundo periodo, dejando el camino libre para que el senador Patricio Aylwin triunfara cómodamente. Los énfasis discursivos de esta nueva directiva se articularon en torno a la idea de «no dejar pasar una al Gobierno», propósito que se entendía como la instauración de una oposición más dura e intransigente. Es decir, lejos de solicitar rectificaciones o cambios de rumbo, como lo había hecho la anterior directiva, el grupo encabezado por Aylwin planteaba un posicionamiento más enérgico en contra de la UP, fiscalizando en detalle cada una de las medidas y cambios que el oficialismo deseara impulsar.

El voto político que se aprobó en esta Junta iba, en efecto, en la dirección que el sector conservador deseaba imprimirle al partido. Así, por ejemplo, se manifestó un profundo rechazo a la burocracia estatal, al tiempo que se señalaba una clara intención de combatirla. En esa misma línea, se plantearon críticas severas a la instauración de haciendas estatales, además de recalcar la idea sobre la «inexpropiabilidad» de los pequeños propietarios. También se fustigó el rol de las JAP, señalando que debían ser las juntas de vecinos los organismos encargados de dirigir la distribución de alimentos y mercaderías[630]. Como se puede ver, la crítica de fondo de esta colectividad se dirigía al corazón de las reformas estructurales que planteaba la UP y que tenían en el control y dirección estatal de los procesos económicos

[630] Énfasis de la nueva directiva de la DC en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 313-315.

y productivos uno de sus elementos más característicos. Se podía advertir, pues, que el nuevo posicionamiento estratégico de la DC auguraba un conjunto de conflictos en diversas materias.

La segunda línea de tensión que se abrió en el mes de mayo estuvo determinada por los llamados que emanaron desde el PN, y sobre todo desde su sector juvenil. A través de una declaración publicada el día 12 de este mes, la JN reafirmó la tesis de la resistencia civil que el partido levantó meses atrás, aunque ahora agregaría dos elementos que la complementarían. El primero de ellos advertía la llegada de una etapa de definición que dirimiría la totalidad del conflicto político y social que se estaba desarrollando. En ese contexto, la unidad opositora resultaba vital a efecto de triunfar sobre el proyecto socialista de la UP. Desde esta premisa, en efecto, se desprendía el segundo elemento el cual apuntaba a la necesidad de coordinar, a través de un Comité Único Democrático, el conjunto de acciones que la oposición —política, gremial y social— llevaría adelante[631]. De este modo, la derecha visualizaba un inminente escenario de enfrentamiento entre los bloques en pugna que marcaría un importante punto de inflexión. Dentro de esta óptica, como era de esperar, estaban ausentes los objetivos que dieran valor a una salida institucional o consensuada del conflicto. Resultaba evidente que la derecha apostaba, ya sin ambages, por aquellas formulaciones que se dirigieran hacia una resolución *de facto* de los problemas.

La tercera línea de tensión que se desarrolló en este mes provino desde la extrema derecha, a través del congreso general que celebró el Frente Nacionalista Patria y Libertad en la ciudad de Temuco. En dicho encuentro se planteó, al igual que como lo hicieran la mayoría de los actores, que se estaba *ad portas* de un desenlace definitivo del conflicto. Sin embargo, el rasgo distintivo de lo planteado por el grupo nacionalista radicaba en que a su juicio los militares jugarían un rol esencial en dicho escenario. Esta última idea se expresaba en virtud de que para este movimiento los institutos militares constituían el «único dique de contención» del marxismo[632]. Existía, de

[631] Declaración de la Juventud Nacional en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 316-317.

[632] Declaración de Temuco del Frente Nacionalista Patria y Libertad en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 318-319.

hecho, tanta confianza en la potencialidad de las FF. AA. que Manuel Fuentes Wendling, dirigente nacional de Patria y Libertad, sostuvo que si éstas actuaban para resguardar la integridad de la nación no habría poder paramilitar «capaz de enfrentárseles»[633]. Visto desde este ángulo, el conflicto social y político para el grupo nacionalista no podía ser canalizado a través del marco institucional, pues ello significaría alargar la permanencia de la UP en el poder.

Lo que estas líneas de tensión reflejaban era un proceso de sostenida erosión del sistema político, cuestión que contribuía a la persistencia de un ambiente de polarización y enfrentamiento. Ello adquiría estas dimensiones debido a que lo que estaba en el centro de la discusión política era, como ya se ha señalado, una definición en el corto plazo respecto a la continuación o cancelación del proyecto de la UP. Tal escenario, lejos de canalizarse a través del sistema institucional, implicaría altas dosis de confrontación en virtud de que sus premisas eran portadoras de elementos que al materializarse develarían el uso de la fuerza y la violencia. Por cierto, dichas formulaciones no fueron expresiones intempestivas de parte de los actores que las enunciaron, pues ellas recogieron un bagaje discursivo y estratégico que se venía desarrollando con antelación. En efecto, podría decirse que estos planteamientos fueron puntos de llegada de elaboraciones que se trabajaron desde meses, e incluso años atrás, al interior de estas colectividades. El sector conservador de la DC, por ejemplo, demostraría una particular animadversión en contra de la UP prácticamente desde el momento mismo en que esta asumiera el gobierno en 1970, planteando a partir de entonces severas críticas al proyecto socialista. En el caso de los actores anclados en la derecha, era claro que al menos desde 1972 ya se planteaban argumentos en torno a poner término anticipado al gobierno de Allende. Con el correr de los meses y ya insertos en el complejo año 1973, gran parte de estas formulaciones se desplegarían a plenitud dentro del espacio público.

Desde el oficialismo, aun cuando se planteaba una crítica rotunda a lo que se visualizaba como la posibilidad inminente de una guerra civil, algunas formulaciones no adscribían a la lógica implícita que esta idea conllevaba. Es decir, el rechazo a un enfrentamiento fratricida en el país suponía, como lo entendía Salvador Allende y

[633] Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 231.

otros actores, fortalecer los marcos institucionales dejando de lado cualquier postura radicalizada y extrema[634]. Sin embargo, era bastante nítido cómo desde sectores de la propia alianza popular se planteaban escenarios de abierta confrontación en la perspectiva, por ejemplo, de resolver el tema del poder. El gobierno se veía enfrentado así tanto a la tensión que emanaba desde los sectores opositores —embarcados en poner término al proyecto de la UP— como a los problemas derivados de las discusiones internas entre los partidos oficialistas. En este marco, las elaboraciones que advertían una alta dosis de rupturismo no provenían, como se puede advertir, solo de la derecha o de la oposición en general. Ellas resultaban transversales a distintos grupos y colectividades. De hecho, la idea en torno a un escenario inminente de resolución de la pugna política y social también había sido explicitada desde actores como el PS y el MIR. Lo que a todas luces parecía inundar buena parte del escenario público de estas semanas era que se avanzaba hacia un escenario que marcaría un punto de inflexión en la continuidad o cancelación del proyecto socialista.

En medio de estas líneas de tensión, asomaban una serie de conflictos particulares que alimentaban todavía más el cuadro de polarización descrito. Desde mediados de abril, por ejemplo, se venía desarrollando la conflictiva huelga de los mineros del yacimiento El Teniente, ubicado al interior de la sexta región. El origen de la movilización radicaba en una particular interpretación de la ley de reajustes de salarios que había promulgado el Gobierno. A juicio de los dirigentes mineros, a ellos les correspondía un «doble reajuste», es decir, el que se había dictaminado para todos los salarios y aquel del 41 % correspondiente exclusivamente a esta empresa. Se trataba de una interpretación oblicua de la ley, pero que al situarse en el contexto de tensión que se vivía entonces, y al rechazo del Ejecutivo a conceder dicho reajuste, generó una polémica que escalaría en intensidad. En pocos días sectores de la oposición otorgaron su apoyo a los mineros, transformando el conflicto en un mecanismo más de agitación y desestabilización en contra de la UP[635]. De este

[634] Este fue, en efecto, uno de los principales énfasis que recorrieron el discurso de Allende en su cuenta anual. Véase, "Salvador Allende: Tercer Mensaje ante el Congreso", 21 de mayo de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4535-4671.

[635] El exsenador de la Izquierda Cristiana, Rafael Agustín Gumucio, recordaba que en esas semanas leyó en la prensa una declaración de Eduardo Frei Montalva

modo, se buscaba ramificar el conflicto social y político hacia sectores que antes habían apoyado a la izquierda, pero que ahora su ubicaban en posiciones refractarias a ella. Como indican Sergio Bitar y Crisóstomo Pizarro, la huelga de El Teniente vino a simbolizar una fase superior de la pugna social existente en el país que aproximó el conjunto del sistema político en Chile a una situación crítica. Es decir, se trató de una problemática que evolucionó desde un espacio menor y segmentado hacia un conflicto global[636].

El entonces directivo de Codelco Jorge Arrate comenta en sus memorias un sinnúmero de incidentes de violencia producidos en el marco de esta movilización, siendo en diversas ocasiones testigo directo de algunos de ellos. Estos incidentes iban desde amenazas de golpes en las asambleas —utilizando elementos cortopunzantes y puñetazos—, hasta el bloqueo de caminos, atentados explosivos y el empleo de bolas de acero como proyectiles durante las manifestaciones[637]. Dichos sucesos se transformaron con el paso de los días en dinámicas habituales tanto en las inmediaciones del yacimiento El Teniente como en las ciudades cercanas. En poco tiempo, la huelga de los mineros parecía fuera de control. A pesar de que el Gobierno lograba llegar a acuerdos con algunos sindicatos, su vuelta a las faenas resultaba inviable. Los mineros que seguían adelante con la movilización mostraron, en efecto, una notable capacidad de coordinación para boicotear el regreso al trabajo y mantener en alto la moral de los huelguistas.

A estas alturas resultaba evidente que se trataba de un conflicto que articulaba, como sostiene Luis Corvalán Marquéz, la lucha política del momento[638]. Esto implicó que otros actores sociales también se hicieran partícipes de la pugna. A partir del día 23 de mayo, por ejemplo, se movilizaron veintiún centros de estudiantes de la Universidad de Chile para respaldar a los mineros y, a contar

---

en favor de los mineros de El Teniente. Casi de inmediato, el exparlamentario logró reunir a algunos senadores democratacristianos para mostrarles el original de una carta que Frei Montalva le había escrito en 1969 en la cual le hacía presente que él, aun siendo parlamentario de oposición, jamás «había aceptado los paros generales». Gumucio Vives, *op. cit.*, p. 201.

636 Sergio Bitar y Crisóstomo Pizarro, *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de la historia*, pp. 14-15.

637 Jorge Arrate, *Con viento a favor. Del Frente Popular a la Unidad Popular (Memorias)*, pp. 385-391.

638 Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 321.

del día siguiente y por espacio de 24 horas, se acoplarían los estudiantes secundarios dirigidos por Miguel Salazar[639]. En ambos casos se coordinaron marchas y manifestaciones públicas en el centro de la capital, con lo cual el conflicto ya no estaba circunscrito solo a la sexta región. A fines de mayo, los dirigentes estudiantiles de la Universidad Católica de Valparaíso emitieron una declaración en que llamaban a no continuar con el diálogo, pues la solución de los problemas no estaba en las vías «democráticas o políticas». La solución, según planteaba el documento, pasaba porque el Gobierno cambiara su forma de conducir el proceso, o de lo contrario todo el país paralizaría sus actividades fabriles, manuales o intelectuales como una forma de «expresión libertaria»[640].

En la ciudad de Rancagua, que se había transformado en el epicentro de los enfrentamientos callejeros y las disputas, la violencia comenzó a recrudecer en los últimos días de mayo. El viernes 25 se produjeron serios incidentes tras una marcha de apoyo a los mineros en huelga, dejando numerosos heridos y detenidos[641]. Pero uno de los hechos más graves se produjo el día 30 cuando falleció un trabajador de El Teniente identificado como Luis Bravo Morales. La versión de *El Siglo* sostuvo que la víctima viajaba al interior de un vehículo que habría sido interceptado por una patrulla militar que custodiaba el sector. Según este medio, ante la orden de detención que emanó desde los uniformados, el automóvil particular se habría dado a la fuga situación que obligó a los militares a hacer uso de sus armas de fuego en contra de aquel vehículo[642]. *El Mercurio* coincidiría en la misma versión, agregando solo algunos detalles. Uno de ellos era que la camioneta que manejaba Bravo Morales estuvo realizando maniobras de hostigamiento hacia un bus que transportaba trabajadores a El Teniente. Frente a ello, continúa este medio, los militares ordenaron al vehículo detener su marcha cuestión que no fue obedecida por lo que estos realizaron diversos disparos[643]. Desde la revista *Ercilla* se

[639] "Huelga de los estudiantes secundarios y de la Universidad de Chile", *El Mercurio*, 24 de mayo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 647-648.

[640] "UCV llama a una cruzada nacional de liberación nacional", *El Mercurio*, 31 de mayo de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 654-655.

[641] Salazar, M., *op. cit.*, p. 318.

[642] *El Siglo*, Santiago, 31 de mayo de 1973, p. 1.

[643] *El Mercurio*, Santiago, 31 de mayo de 1973, p. 1.

hizo hincapié en que la muerte del trabajador coincidió, con «brutal ironía», con una declaración que el PC había emitido y en la cual acusaba a la oposición de ser enemigos «mortales» de los trabajadores y estar detrás de «cuanta masacre ha habido en Chile»[644].

La autoridad militar a cargo de la zona, coronel Orlando Ibáñez Álvarez, sostuvo que la camioneta manejada por la víctima realizó varias maniobras «descontroladas», por lo que los uniformados procedieron a controlar a sus ocupantes cuando aquella se detuvo en un semáforo. Los ocupantes del vehículo comenzaron entonces a insultar a uno de los uniformados al tiempo que se dieron a la fuga cuando el semáforo pasó a la luz verde. Frente a ello, continúa el oficial, los militares hicieron disparos al aire y a las ruedas del automóvil hiriendo al conductor quien al perder el control del vehículo se estrellaría contra un árbol[645].

Por su parte, el ejecutivo de Codelco Jorge Arrate refiere que la muerte de Bravo Morales se produjo por la acción de una patrulla militar en circunstancias no aclaradas, lo que parecía, a su juicio, una provocación[646]. La opinión de este personero se fundaba sobre la base de las tensas reuniones que sostenidas con las autoridades militares de la zona en los días previos. En una de ellas, verificada en la oficina del coronel Cristián Ackernecht, y «presidida» por un retrato del mariscal alemán Erwin Rommel, Arrate sostuvo una agria discusión con otro oficial, quien valiéndose de un ejemplar del Código del Trabajo argumentaba que la huelga era legal. La preocupación del ejecutivo de Codelco, así como también de otros miembros del directorio, era que los militares se encontraban de algún modo abanderizados a favor de los mineros en huelga, al tiempo que no dominaban las materias jurídicas más específicas en torno a este tema.

Aunque el conflicto ya llevaba más de un mes de duración, su desenlace estaba lejos de producirse. Los huelguistas seguían in-

[644] *Ercilla*, n.º 1977, Santiago, 6 al 12 de junio de 1973, p. 7.

[645] Declaración del jefe de la zona de emergencia de la Provincia de O'Higgins, publicada en *El Mercurio*, Santiago, 31 de mayo de 1973, p. 8. El certificado de defunción de la víctima señala que su causa de muerte fue por una anemia aguda por herida a bala traspasante del hemitórax izquierdo, fijando su deceso a las 16:50 hrs. "Certificado de defunción de Luis Bravo Morales", Rancagua, 30 de mayo de 1973, n.º de inscripción 387, folio 85003440, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[646] Arrate, *op. cit.*, p. 390.

tensificando sus acciones de amedrentamiento en la zona, lo que unido al apoyo que prestaban los partidos de oposición —con el propósito manifiesto, según Bitar y Pizarro, de desestabilizar al Gobierno— auguraba todavía unas semanas más de confrontación[647]. Resultaba evidente que a esas alturas el conflicto había traspasado el marco regional de sus primeras semanas, sumando nuevos actores y objetivos a la lucha. Además, la huelga logró internarse hasta bien entrado el mes de junio, extendiéndose hacia las regiones cercanas. En este contexto, el conflicto confluiría, como se verá más adelante, con otras dinámicas y situaciones que mantenían en alto los niveles de polarización social y política en el país.

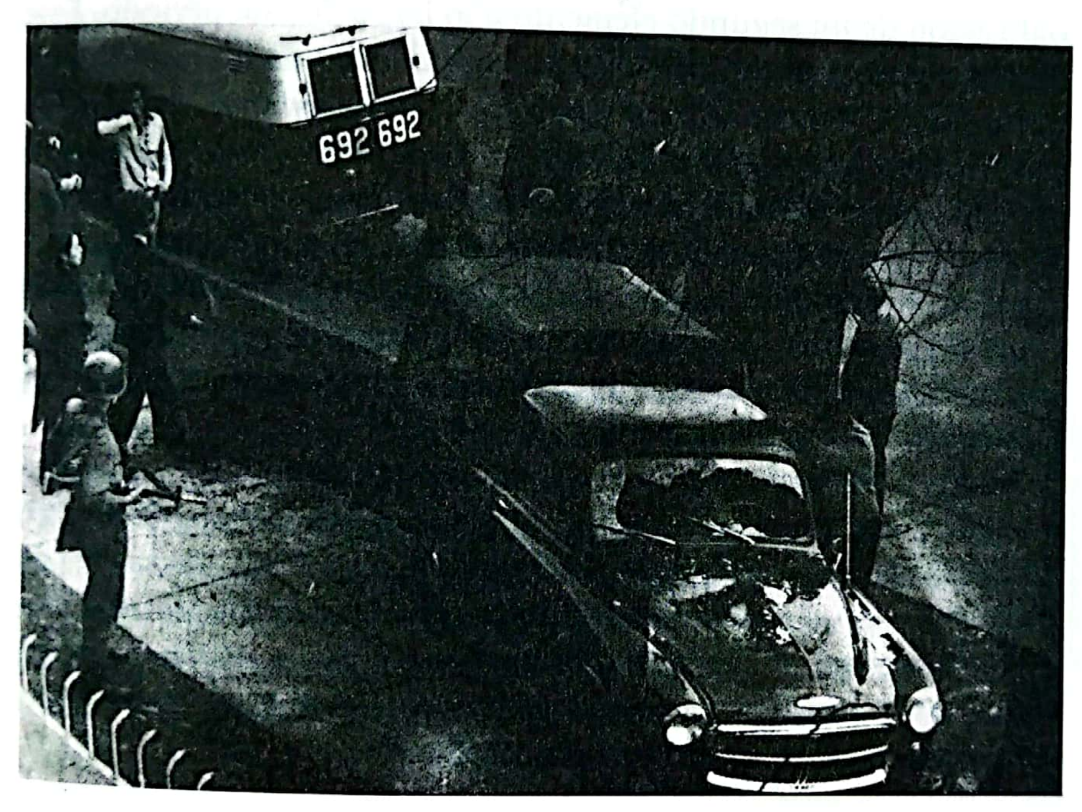


Imagen n.º 9. Camioneta que manejaba Luis Bravo Morales en la cual perdió la vida tras un incidente con una patrulla militar en Rancagua a finales de mayo de 1973. *Ercilla*, n.º 1977, 6 al 12 de junio de 1973. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

A la hora de hacer un balance de los meses transcurridos entre marzo y mayo de 1973 es posible constatar varios elementos. En primer término, cabría recordar que las elecciones parlamentarias de

[647] Bitar y Pizarro, *op. cit.*, p. 27.

marzo, visualizadas por algunos actores como el punto de inflexión del proceso político, no permitieron dirimir ninguno de los aspectos más problemáticos que se discutían. Ni la oposición logró alcanzar la representación suficiente como para iniciar un proceso de destitución del presidente, ni en el oficialismo se impuso con claridad alguna de las dos tendencias en pugna. Esta situación dejó buena parte del conflicto político, tanto en la confrontación entre oposición y gobierno como en la lucha al interior de los bloques, en un punto muerto. El camino institucional para salir de la crisis quedaba, en este contexto, severamente erosionado[648].

La dinámica anterior sería un factor determinante en la materialización de un segundo elemento a lo largo de este periodo. Este se refiere a la consolidación de aquellas posturas más intransigentes y rupturistas dentro del arco político. Aunque dicho proceso fue posible de advertir sobre todo en la oposición —tanto en sus formulaciones en torno a la resistencia civil como a ampliar la base de protesta social en contra del Gobierno— no es menos cierto que algunos planteamientos provenientes desde la izquierda trasuntaban el mismo carácter. Dicho de otro modo, las posturas intransigentes que cerraban cualquier camino al diálogo y el entendimiento fueron más transversales que particulares.

Tales planteamientos, por cierto, no eran solo discusiones abstractas carentes de una correspondencia a nivel fáctico. De hecho, los conflictos en torno a la implementación de la ENU o la huelga de El Teniente no quedaban restringidos únicamente a las discusiones estructurales que generaban. Más bien, este tipo de movilizaciones se vinculaba de forma estrecha con problemáticas, discursos y reclamos más concretos dentro de la escena pública.

[648] Una situación que vino reforzar todavía más el cuestionamiento sobre el marco institucional estuvo relacionada al rol del Tribunal Constitucional. Con el objetivo de resolver la polémica en torno a la interpretación jurídica de los vetos que el Ejecutivo interpuso al proyecto Hamilton-Fuentealba, el gobierno recurrió a dicho tribunal para que dirimiera el conflicto. A lo largo del mes de mayo la oposición emitió sendos comunicados, y aún un acuerdo en ambas cámaras legislativas, respecto a que cualquier pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el tema de los vetos sería nulo. En este contexto, dicho organismo, presionado por diversos sectores políticos, se declaró incompetente para arbitrar en la pugna que sostenían el Ejecutivo y el Congreso. Tal decisión dejaba al Gobierno de manos atadas y forzado a promulgar el proyecto presentado por los senadores de la DC, lo cual, en caso de acontecer, significaría limitar las transformaciones económicas en el área de propiedad social.

En este contexto, los hechos de violencia política del periodo darían cuenta de nuevo del fuerte protagonismo de la sociedad civil en su materialización. Ello respondía sin duda a procesos de larga duración que venían desarrollándose en el país, en que la actuación de diversos sectores sociales en la primera línea de la política contingente cobraba día a día más relevancia. La mayor parte de los hechos de violencia registrados, tanto en lo que respecta a enfrentamientos como muertes de algunos individuos, tuvieron este sello característico, es decir, un protagonismo de elementos civiles en su ejecución. Esto fue representativo incluso en aquellos hechos de violencia en los cuales no siempre se fija la atención, como fueron los atentados explosivos[649].

A diferencia de otros meses, en el periodo que va desde marzo a mayo predominaron los eventos violentos en espacios urbanos, al tiempo que las muertes que se registraron también se materializaron en este tipo de escenarios. Esto no significa una ausencia total de situaciones de violencia en zonas rurales, sino un predominio mayor de un emplazamiento sobre el otro. Ello se explica, en buena medida, porque los principales conflictos del periodo están asentados o circunscritos a escenarios urbanos, sobre todo en el caso de los movimientos de protesta. Ahora bien, la participación de uniformados en eventos de violencia, a diferencia de lo ocurrido en el contexto del paro de octubre, fue bastante restringida. En solo una de las muertes ocurridas en este periodo sus autores materiales fueron miembros de las Fuerzas Armadas. Tal situación tenderá a modificarse en los meses siguientes, en donde se observará el protagonismo de actores uniformados en diversos hechos de violencia, los cuales, por

[649] Un caso que revestiría ciertos visos de tragedia ocurrió el día 28 de mayo, cuando Alberto Loayza Macedo, un joven de 19 años de edad, se disponía a instalar un artefacto explosivo en una antena de transmisión del Canal 7 ubicado en el Cajón del Maipo. Según *El Siglo*, Loayza en compañía de Eduardo Silva Díaz llegaron hasta dichas instalaciones a lomo de mula y mientras procedían a ubicar los cartuchos de dinamita al interior de una caseta, la carga explotó repentinamente. Véase, *El Siglo*, Santiago, 30 de mayo de 1973, p. 9. El certificado de defunción de la víctima anota como causa de muerte un traumatismo facio craneal, lo que hace presumir que el artefacto le destrozó gran parte de su rostro y cabeza. "Certificado de defunción de Alberto Loayza Macedo", Santiago, 28 de mayo de 1973, n.º de inscripción 1175, registro E1, folio 14726168, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 5 de mayo de 2016].

cierto, serían censurados por parte de la izquierda. Por el tenor de los discursos que recorrían el espacio público, todo parece indicar que se estaba muy cerca de ese escenario de confrontación final que diversos actores avizoraron con inquietud —y no menos afán— en el último tiempo.

De una sublevación a otra: tanquetazo y golpe, junio a septiembre de 1973

El periodo que se abre entre junio y septiembre de 1973 encierra algunas de las dinámicas y coyunturas más complejas de la experiencia socialista chilena. Para empezar, los discursos que pugnaban por salidas extrainstitucionales, además de calar profundamente en el espacio público, parecían dibujar con cierta exactitud los contornos de la escena política y social que se había asentado. Vista en su larga duración, esta etapa tiene en sus extremos dos sublevaciones militares: una que la abre y otra que la cierra. La primera, ocurrida el 29 de junio, fracasaría al no contar con la adhesión de otras unidades y ramas de las Fuerzas Armadas y, además, debido al papel protagónico jugado por el general Carlos Prats para lograr su desarticulación. La segunda sublevación, materializada el 11 de septiembre, además de emerger como una operación exitosa, significó el cierre de una fase y de un conjunto de tensiones entre los actores sociales y políticos. Pero también el golpe de Estado que ejecutaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas implicó el cierre de un ciclo histórico, marcando un punto de inflexión en la trayectoria institucional, política y económica del país[650]. Dentro de esta línea de análisis se ubica aquella interpretación que ve en el golpe militar la muerte del Chile republicano y aún aquella más radical que visualiza en este hecho

[650] Para algunos autores, el 11 de septiembre de 1973 significó el término de la «era de las revoluciones en Chile», un periodo que encontraba sus raíces a fines de los años cincuenta y que tuvo en las administraciones de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende sus expresiones más características. Esta mirada apunta también a las consecuencias institucionales y estatales de este cierre de ciclo vinculadas al término del esquema político de tres tercios —que ya se venía anunciando desde antes del golpe— y fin al «Estado omnipresente» en materia económico-social. Véase, San Francisco, *op. cit.*, pp. 758 y ss.

una operación destinada a acabar con el Estado chileno[651]. Se puede sugerir, a favor de ambas lecturas, que la imagen de la bandera chilena atada al mástil del Palacio de La Moneda, y que era devorada por las llamas al mediodía del 11 de septiembre de 1973, constituye una significativa metáfora de ese cierre de ciclo y de la muerte de los símbolos del poder estatal chileno.

Tal imagen, por cierto, fue el punto de llegada de diversas coyunturas y dinámicas que a lo largo de estos meses se fueron sobreponiendo una encima de la otra hasta cimentar el camino al quiebre democrático. Como se puede advertir, en un número importante de estas coyunturas los hechos de violencia política tendrían un lugar destacado. En el transcurso de estos casi cuatro meses, se observará, como característica específica de este fenómeno, un predominio de la violencia política en zonas urbanas. Y al igual como ocurrió en otros periodos, la lectura que se hizo sobre estos hechos estuvo conectada a discursos y lineamientos más estructurales.

Los principales enfrentamientos y hechos de violencia registrados en la primera mitad de junio estuvieron articulados en torno al conflicto de los mineros de El Teniente, una huelga que ya se extendía desde mediados de abril y que solo acabaría días después del 29 de junio. Lo particular de esta coyuntura, en relación a la paralización, radicaría en que dicho conflicto amplió su desborde desde un espacio local —la sexta región— hacia uno de mayor significación como era la capital. En este lugar, los mineros recibirán el apoyo de la oposición, de los estudiantes secundarios y de algunas organizaciones universitarias, situación que sería confrontada por una activa movilización de masas de parte de la izquierda. Bajo ese marco, los enfrentamientos no tardarían en aparecer en las calles de Santiago entre uno y otro sector. En los días finales de junio, en tanto, el foco de los conflictos se concentró en torno al tanquetazo, que dejó un saldo de varios civiles y militares muertos, además de las presumibles consecuencias dentro del espacio político. En julio volverán a asomar las tensiones y hechos de violencia vinculados a los espacios laborales, ya sea por la masividad que alcanzaron algunas ocupaciones de fábricas tras la sublevación militar como por la materialización de conflictos de

[651] Armando Uribe y Cristián Opaso, *Intervención norteamericana en Chile [Dos textos claves]*.

distinta naturaleza. El mes de julio se cerrará con un hecho de alto impacto: el homicidio del edecán naval del presidente Allende, capitán Arturo Araya Peeters.

En agosto se observaría un cuadro similar al mes anterior: multiplicación de hechos de violencia en distintos puntos del país, con un saldo de casi diez muertos y decenas de heridos en enfrentamientos de distinto tipo. El trasfondo de este complejo escenario era uno de máxima tensión, con buena parte de los sectores opositores, tanto políticos como gremiales, enfocados en lograr la caída final del gobierno. Una muestra representativa de lo anterior fue la nueva paralización de los camioneros, la cual, a pesar de argüir razones sectoriales, tenía entre sus objetivos reales contribuir en la desestabilización del Gobierno. En el oficialismo, buena parte de sus discursos estratégicos seguían chocando entre sí, mostrándose con serias limitaciones para confrontar un escenario que le era totalmente adverso. En la antesala del golpe militar, los hechos de violencia, y en particular los atentados se sucedieron con vertiginosa rapidez y periodicidad, creando una atmósfera teñida por la bruma de la polarización que ya no podía ser disipada.

Al igual que en los meses precedentes, el componente civil en la materialización de estos hechos de violencia sería relevante. Aun cuando se observó un despliegue de fuerzas militares y policiales por las calles a efecto de controlar el orden público, y más aún en acciones de allanamiento en ciertos centros fabriles, los protagonistas fundamentales de la violencia siguieron siendo miembros de la sociedad civil. Se podría decir que esta situación se expresaba así porque los lineamientos generales de la política chilena que se perfilaron desde los sesenta le habían otorgado al elemento civil un rol cada vez más protagónico en los procesos de transformación social. Se trataba de sujetos históricos conscientes de sus potencialidades en tanto agentes del cambio, lo que incentivaba su participación directa en distintas coyunturas. Lo que fue cambiando, sin duda, fueron los ritmos de la política y el propio desarrollo de la vía chilena al socialismo, que para estos meses intentaba sobrevivir dentro de un contexto cada vez más hostil. La participación de los individuos estaría enmarcada así en torno al conflicto estructural que buscaba dirimir la continuidad o cancelación del proyecto de la UP, problemática que se arrastraba desde varios meses atrás. Con seguridad el punto más característico

de este proceso fue la creciente convicción de que se estaba cerca de un desenlace definitivo de la crisis. Y esto cobrará cada día más relevancia y materialidad en la medida en que los cambios y rupturas dentro del proceso sociopolítico confluyan hacia esa resolución final.

¿En qué punto habían quedado las principales líneas de la pugna social y política al terminar el mes de mayo? Como se recordará, la imagen de cierto triunfalismo que imperaba en la izquierda producto del resultado electoral de marzo pronto se diluyó debido a que explotaron sendos conflictos, primero, con los estudiantes secundarios a propósito del proyecto de la ENU, y luego, con los mineros de El Teniente. En pocas semanas, la oposición estaba de nuevo en las calles, llevando la disputa hacia el escenario que parecía otorgarle sus mejores réditos, pues al identificar a un enemigo común —en este caso el gobierno socialista— las diferencias existentes dentro del bloque quedaban en un segundo plano. También dentro del ámbito opositor cabe recordar la llegada del sector conservador a la dirección nacional de la DC, situación que supondrá un mayor endurecimiento en la línea de este partido respecto al Gobierno.

Otra línea de tensión se había desarrollado a propósito del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que se declaró incompetente para resolver la pugna jurídica en torno a los vetos presidenciales sobre el proyecto Hamilton-Fuentealba. Lo particular del caso radicó en que otra vez un mecanismo institucional no permitía dirimir un problema de indudable importancia, contribuyendo así en su prolongación a lo largo del tiempo. A decir verdad, casi todas las puertas institucionales parecían cerradas para la UP, al tiempo que recrudecía la contraofensiva civil y gremial. Se trataba, sin duda, de un Gobierno acosado en distintos frentes, pero que aún conservaba una importante capacidad movilizadora y cierta iniciativa política o, al menos, la intención de conducir la agenda nacional en algunos puntos.

Este último aspecto quedó de algún modo reflejado en el planteamiento que hizo Allende a su coalición, al iniciarse junio, en orden a convocar un plebiscito. Bajo la óptica del primer mandatario, la consulta debía remitirse solo al problema de los vetos a fin de atajar el conflicto y evitar así su prolongación. Sin embargo, los partidos de la alianza se mostraron escépticos con la propuesta presidencial y procedieron a rechazarla de plano. Ello llevó al presidente a desistir

en su intento por convocar al plebiscito aduciendo, en todo caso, razones jurídicas para explicar dicha decisión[652].

En paralelo a estas tensiones, se abriría otro conflicto para la UP dentro del ámbito institucional. El día 4 de junio, la Corte Suprema emitió una resolución donde señalaba que la medida adoptada por el ministro secretario general de gobierno, Aníbal Palma, tendiente a clausurar los estudios de Radio Agricultura, era ilegal. En virtud de ello, se ordenaba el cese de dicha suspensión y la reanudación de sus transmisiones. La decisión de la Corte abría el camino para que el ministro sumariante —como en la práctica ocurrió— pudiera declarar reo al secretario de Estado[653]. Ante este hecho, el oficialismo reaccionó en duros términos en contra del máximo tribunal. En una declaración emitida a la medianoche del 5 de junio, el comité político de la UP calificó la decisión de la Corte Suprema como una medida «seudo legal» que contravenía la normativa en que se amparó la clausura de Radio Agricultura. Al mismo tiempo se sostuvo que dicho tribunal, al transformarse en una «trinchera más de la derecha» había perdido toda legitimidad y autoridad moral, por lo que se procedería a iniciar una acusación constitucional en contra de la Corte Suprema. En su parte final, el comunicado hizo un llamado a «resistir la arbitrariedad judicial», pues ella evidenciaba la participación explícita de los tribunales en la ofensiva derechista que se había desatado en contra del gobierno[654].

La polémica jurídico legal lejos de acabarse continuaría en los días siguientes siendo, además, entremezclada con problemáticas de distinto tenor. Por de pronto, el consejo normativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitiría en esos días una

[652] Estas discusiones se encuentran descritas por Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 326-327. El primer mandatario adujo como una de las principales razones para no convocar la consulta el hecho de que el Congreso no había votado los vetos que el Ejecutivo había planteado al proyecto de Ley. En virtud de ello, resultaba inconstitucional convocar a un plebiscito si antes no se había resuelto el problema de interpretación jurídica. Además, el ejecutivo sostuvo que si se llamaba a consulta se estaría aceptando imponer la interpretación jurídica del Congreso Nacional a la interpretación del jefe de Estado. "Gobierno explicó porque no llamó a plebiscito", *El Mercurio*, 8 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo 1, p. 668.

[653] "Detención de Aníbal Palma", *Tribuna*, 5 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo 1, pp. 661-663.

[654] "UP anuncia acusación", *El Mercurio*, 6 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo 1, p. 663.

declaración en la que advertía al presidente de la República por los reiterados atentados en contra de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Tales actos iban, según el comunicado, desde amenazas a la independencia del poder judicial hasta la privación de sus facultades a determinados tribunales. Todo lo anterior, sentenciaba el documento, había provocado en el país una «crisis de la juridicidad» de «incalculables consecuencias»[655]. Por su parte, los ministros de la Corte Suprema solicitaron la realización de un pleno a efecto de analizar la acusación constitucional que, según se indicó más arriba, presentarían los parlamentarios de la UP en contra del máximo tribunal. En la tarde del 6 de junio, un grupo de profesores, estudiantes y funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se congregaron frente a las dependencias de la Corte Suprema con el objetivo de manifestar su apoyo a este poder del Estado. En el acto, el decano de dicha facultad, Máximo Pacheco, indicó que se buscaría realizar acciones de conjunto con otras escuelas de derecho a efecto de oponerse al «avance del totalitarismo»[656].

Desde la izquierda se publicaron diversas declaraciones para referir algunos de estos temas. El día 7 de junio, el senador Carlos Altamirano emitió una declaración en la cual hizo una fuerte crítica de las fuerzas opositoras, a las que acusó de promover un golpe de Estado para derrocar al Gobierno. Respecto a la derecha en particular, el dirigente sostuvo que dentro de sus estrategias más inmediatas estaba el desarrollo de «guerras locales en Rancagua», en clara alusión a la huelga que sostenían los mineros de El Teniente por aquellos días. Sobre el Poder Judicial, Altamirano indicó que este se había finalmente «desenmascarado» al no sancionar ni perseguir ningún acto delictivo de la oposición, sino por el contrario acoger «presuroso» cualquier acción sediciosa de la oligarquía. Bajo esta misma óptica quedaba situado el parlamento, que era caracterizado como una institución «obsoleta y caduca»[657]. Como se puede ver,

[655] "Crisis de la juridicidad en Chile señala Facultad de Derecho de 'U'", *La Prensa*, 6 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 665-666.

[656] "Ministros exigen pleno de la Corte Suprema de justicia", *Las Últimas Noticias*, 7 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 666-667.

[657] "Carlos Altamirano: 'Frei, Presidente del Senado, en actitud cínica niega lo que hizo como Primer Mandatario'", 7 de junio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4691-4692.

la discusión institucional que se abrió los primeros días de junio no fue obviada por aquellos actores críticos de la institucionalidad chilena que, como Altamirano, la consideraban un obstáculo para la consolidación del proceso revolucionario chileno.

En un ángulo similar se situó la declaración del MIR publicada el día 10 de junio. En ella, este movimiento sostuvo que la agudización de los enfrentamientos políticos y sociales quiso ser «cristalizada» en un conflicto institucional cuyo único objetivo era desalojar al Gobierno y reprimir a los trabajadores. Bajo esta perspectiva, el MIR acusaba a los sectores reformistas del gobierno por permitir que la mayoría de los conflictos fuesen canalizados a través de una vía legalista y constitucional, sobre todo a través del Congreso donde la oposición era mayoría. Dicha estrategia, a ojos de este movimiento, significaba en la práctica subordinar el papel de la clase obrera y del pueblo al dejarlos como meros «espectadores» del conflicto político. La propuesta del MIR ante este escenario, como se puede intuir por lo ya expuesto, era el fortalecimiento del poder popular en la perspectiva de redefinir las relaciones de la izquierda con el pueblo para de este modo materializar un verdadero «Gobierno de Trabajadores». Dentro de esta óptica se ubicaban una serie de medidas que a juicio del MIR debían cumplirse de forma inmediata. Estas iban desde el fortalecimiento de los comandos comunales hasta la expropiación de diversas instituciones y empresas, entre otras iniciativas[658].

Las Juventudes Comunista y Socialista, en tanto, emitieron una declaración conjunta en la que abordaron diversos temas, enfatizando, claro está, en lo que desde su perspectiva era la materialización de una ofensiva contrarrevolucionaria por parte de la oposición. Según estas organizaciones, los intentos por destituir al presidente Allende y por promulgar una reforma constitucional desconociendo el requisito de los dos tercios daba cuenta de una estrategia seudolegal por parte de la sedición. Por ello, ambas juventudes no tardaron en calificar al Parlamento, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema como «trincheras derechistas». El propósito de estas, según se explicitó, era convencer al país de que el Gobierno estaba fuera de la Constitución y que por lo tanto ya no era legítimo. Por

[658] "MIR: Manifiesto Público", 10 de junio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4696-4699.

último, la declaración hacía un llamado a «cruzarse» en el camino de quienes pretendían «desangrar al país», convocando para estos efectos a una amplia movilización social en defensa del gobierno[659].

El conjunto de estas tensiones alcanzaría materialidad aproximándose la quincena de junio, en el marco de las marchas y manifestaciones que comenzaron a producirse en distintos puntos del territorio, peró con particular recurrencia en la capital. La pugna central que comenzaba a articular las demandas y movilizaciones de la oposición ya no era el tema de la ENU, sino la huelga de mineros de El Teniente. Este conflicto, se recordará, estalló a mediados de abril a raíz de la exigencia de los trabajadores en orden a recibir un doble reajuste. A juicio del Ejecutivo, dicha exigencia revelaba una interpretación oblicua de la ley por lo que se negó a conceder el reajuste, a pesar de las distintas propuestas que planteó a los trabajadores a lo largo del conflicto. Para estos últimos, según Bitar y Pizarro, la estrategia consistía en alargar al conflicto cuanto más se pudiera en virtud de que ello abriría paso a una nueva crisis económica debilitando así al Gobierno[660].

Tras casi dos meses de huelga el movimiento demostraba, en efecto, una significativa capacidad de supervivencia. Sin duda se trataba de una huelga con ramificaciones políticas. De hecho, ella logró cohesionar al conjunto de la oposición tras un conflicto común que servía para desestabilizar, ahora desde otro ángulo, al Ejecutivo. Vinculado a lo anterior se situaba, por ejemplo, el rol de algunos dirigentes sindicales que estaban tras la huelga y cuyas acciones levantaban serias sospechas dentro del oficialismo. Las ya citadas memorias de Jorge Arrate refieren a este respecto un episodio revelador. De entre los dirigentes opositores que lideraban la movilización destacaba uno que más tarde sería identificado como un trabajador a contrata cuya única labor en el yacimiento era la agitación en contra del Gobierno[661].

En este mismo periodo, el conflicto se extendería hacia la capital debido a que los mineros manifestaron su intención de marchar sobre

659 "¡A defender el Gobierno! ¡El pueblo a la ofensiva para aplastar la contrarrevolución!", *La Tercera*, 11 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 673-675.

660 Bitar y Pizarro, *op. cit.*, p. 30.

661 Arrate, *op. cit.*, p. 385.

Santiago. El objetivo era presionar a las autoridades gubernamentales para lograr así un acuerdo. Estas últimas consideraron que se trataba de una maniobra de insospechadas consecuencias por lo que advirtieron que no dejarían pasar a los mineros que intentaran arribar a la capital. Tal pronunciamiento despertó una ola de protestas en la oposición y agrupaciones estudiantiles que eran controladas por ella, iniciándose así numerosas manifestaciones callejeras para solidarizar con los trabajadores. En pocos días, el centro de Santiago volvía ser el escenario de choques entre distintos actores. En uno de estos incidentes, según comenta Jorge Rojas, la policía detuvo a la directiva completa de la FESES a raíz de los enfrentamientos que se habían producido entre las fuerzas de seguridad y los estudiantes secundarios[662]. La recopilación de prensa de Manuel Salazar indica que fueron más de cien los detenidos en estos incidentes[663].

Cuando los mineros lograron arribar a Santiago el 14 de junio — tras la odisea que significó sortear los controles policiales apostados en la carretera que conectaba Rancagua con la capital— la situación mostraba signos intermitentes de tensión. El periódico *La Prensa* destacó el perfil pacífico del arribo de los mineros, quienes, según este medio, fueron recibidos como héroes por parte de numerosos ciudadanos, apostándose luego en las intersecciones de las avenidas República y Alameda. Desde allí avanzarían, continuaba el matutino, hasta la sede de la DC, al tiempo que algunos de sus dirigentes eran recibidos por el propio presidente Allende[664].

Sin embargo, la llegada de los mineros no generó un cuadro de completa tranquilidad como relataba el periódico democratacristiano. El vespertino *Las Noticias de Última Hora* informaba que, al día siguiente, 15 de junio, amplios sectores del pueblo chileno ya se encontraban en la calle dispuestos a rechazar la «violencia derechista». La nota destacaba que tanto trabajadores como estudiantes pertenecientes a distintas organizaciones comenzaban a ubicarse en las inmediaciones del Palacio de La Moneda a efecto de defender al Gobierno y «aplastar» cualquier intento de desencadenar una «aso-

[662] Rojas Flores, *op. cit.*, p. 498.

[663] Salazar, M., *op. cit.*, p. 323.

[664] "... Y los mineros lograron llegar", 16 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 684-685.

nada fascista»[665]. Desde muy temprano se podía prever la tensión que circulaba por las calles de Santiago. En horas de la tarde, estallarían violentos incidentes entre los grupos de choque de izquierda y derecha, además de estudiantes y trabajadores que también intervinieron en la refriega y que dejaron un saldo importante de al menos 76 heridos y diversos detenidos[666].



Imagen n.º 10. Barricadas e incidentes en el marco del intento de los mineros de El Teniente por arribar a Santiago a mediados de junio de 1973. *Ercilla*, n.º 1979, 20 al 26 de junio de 1973, fotografía de Hugo Donoso. Colección: Biblioteca Nacional de Chile.

En este contexto fue asesinado el estudiante universitario y militante del MIR, Nilton Da Silva, de nacionalidad brasileña. Según la versión de *El Siglo*, la responsabilidad del crimen recaía en un grupo

[665] "El Pueblo ya está en las calles rechazando la violencia derechista", 15 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 683-684.

[666] Salazar, M., *op. cit.*, p. 324.

de extrema derecha que baleó desde un automóvil en marcha al joven estudiante en la intersección de las calles San Martín y Moneda. Pocos minutos después, continúa este medio, la víctima fue trasladada al hospital El Salvador donde ingresó con una herida a bala en la cabeza, falleciendo poco después[667]. Por su parte *El Mercurio* no consignó, en su edición del 16 de junio, la muerte del militante del MIR, enfatizando, en cambio, cómo las «brigadas marxistas» habían agredido a los mineros en huelga dejando numerosos lesionados y detenidos[668]. Sería en su edición del 18 de junio cuando este medio corroboraría la identidad de la víctima, además de informar respecto a algunas alternativas de su funeral[669].

La revista *Punto Final*, en tanto, refirió diversos aspectos del caso. Desde ya, en su edición del día 3 de julio, dedicó dos páginas de su sección *internacionalismo revolucionario* a la muerte de Da Silva. Según este medio, el día 15 de junio, el joven estudiante acudió al llamado que las fuerzas de izquierda hicieron a objeto de «parar» la ofensiva reaccionaria. Al llegar al centro de la capital, continúa *Punto Final*, Da Silva fue atacado en el marco de una «emboscada artera y criminal», cuyas balas ya habían matado hace unos meses atrás al militante comunista José Ahumada Vásquez[670]. Al explicitar tal idea, este medio establecía un punto de conexión entre las muertes de Ahumada y Da Silva que le llevaba a inferir que los autores de dichos homicidios respondían a los mismos propósitos y orientaciones ideológicas. Si bien no se acusaba a una persona en particular, quedaba claro que los dardos de esta publicación apuntaban hacia la DC y, bajo un ángulo más general, a la oposición en su conjunto.

Al igual que en otros casos, la muerte de este militante fue leída desde un ángulo estructural, es decir, bajo nociones de un conflicto global entre los actores que estaban en disputa. Esto quedaría reflejado de modo notable en el discurso que pronunciara el secretario

[667] *El Siglo*, Santiago, 16 de junio de 1973, p. 9. El certificado de defunción de la víctima confirma que su causa de muerte fue por una herida a bala craneoencefálica, fijando su deceso a las 17:45 hrs. "Certificado de defunción de Nilton Da Silva", Santiago, 15 de junio de 1973, n.º de inscripción 685, folio 85004226, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[668] *El Mercurio*, Santiago, 16 de junio de 1973, p. 1.

[669] *El Mercurio*, Santiago, 18 de junio de 1973, p. 25.

[670] *Punto Final*, n.º 187, Santiago, martes 3 de julio de 1973, pp. 8 y 9.

general del MIR, Miguel Enríquez, en el funeral de Nilton Da Silva efectuado el 17 de junio. En dicha ocasión el dirigente sostuvo, entre otros puntos, que

> [...] Nilton Da Silva ofrendó su vida en un momento de viraje de la lucha de clases en Chile. Fue asesinado cuando la crisis prolongada del sistema de dominación capitalista en Chile se agudiza y dos bloques sociales chocan [...] cuando recomenzó la reanimación y reactivación de los trabajadores; cuando los trabajadores, cansados ya de los intentos de conciliación y apaciguamiento de la lucha de clases, tomaron conciencia de la agresión patronal en desarrollo y se decidieron ellos mismos a enfrentar la ofensiva reaccionaria impune [...] Desarrollemos la contraofensiva revolucionaria y popular, abierta por Nilton da Silva y los trabajadores de Santiago [...] Entreguémosle contenido de clase al conflicto institucional, incorporemos a los trabajadores a los conflictos entre los poderes del Estado, plebiscitando si es necesario los que a la clase obrera y al pueblo les interesan [...] Que la sangre derramada por nuestro compañero Nilton Da Silva sea el punto de partida de la contraofensiva revolucionaria popular y un dique de contención a la conciliación con sus asesinos. El nombre de Nilton Da Silva se suma[rá] al de los mártires de Santa María, La Coruña, San Gregorio, Ránquil, Dos de Abril, Pampa Irigoyen y tantos otros[671].

Se puede advertir, de la lectura del texto, que la muerte del estudiante del MIR fue entendida por la dirigencia del movimiento en torno a tres elementos centrales. El primero era que su crimen se insertaba dentro de un contexto de extrema complejidad en el país, en que se hacían evidentes las limitaciones y contradicciones del capitalismo. Esto significaba que se había terminado por reforzar una lucha excluyente entre dos bloques en pugna que debería resolverse en el corto plazo. El segundo elemento radicaba en que el caso de Da Silva marcaba un punto de inflexión dentro del proceso revolucionario, pues abría el camino para la consolidación de la contraofensiva popular que se debería llevar a cabo a efecto de derrotar a la bur-

[671] "Miguel Enríquez: Discurso en el funeral de Nilton Da Silva", 17 de junio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4712-4715.

guesía y el imperialismo. Por último, la dirigencia mirista insertaba esta muerte dentro de una línea histórica más amplia que permitía conectar su particularidad a otros eventos del pasado, reflejando con ello la continuidad de las estrategias violentistas empleadas por la oligarquía y la reacción.

Pero la muerte de Da Silva también sería referida desde otros ángulos del quehacer nacional. Así, por ejemplo, se destacó el entusiasmo de la víctima por la poesía, interés que lo llevó a publicar en 1972 un pequeño libro titulado *Hombre América* el cual reunía diversos escritos de su autoría[672]. Desde un ángulo más visual, la norteamericana Amy Conger publicaría un libro de fotografías que reunió un conjunto diverso de imágenes tomadas por ella misma el día del funeral de Nilton Da Silva. En el texto, según indica la autora, se incluyó un pequeño poema escrito por la víctima[673].

Tras la muerte del militante del MIR, el flujo de movilización social en torno a los espacios urbanos y los hechos de violencia que a partir de allí se generaban seguiría en aumento. Aunque Miguel Enríquez sostuvo que el crimen de Da Silva permitiría materializar

[672] Mauricio Brum, "'Hoy soy pueblo': a poesía militante de Nilton Rosa da Silva, um brasileiro exilado no Chile de Salvador Allende".

[673] Amy Conger, *Nilton Da Silva Rosa, June 17, 1973, Santiago. "We don't forget the color of blood"*. El texto parece corresponder a una autoedición confeccionada por la propia autora. La principal referencia del texto aparece en la página web https://www.blurb.es/b/1635211-nilton-da-silva-1973-santiago-chile. Un punto adicional respecto al impacto y significado de este caso lo agrega el investigador Mauricio Brum, para quien la muerte del estudiante reveló la forma en cómo el MIR se apropió de su figura a efecto de posicionarlo como un mártir de la izquierda revolucionaria. El objetivo de esta «re-significación» que hizo el MIR habría consistido, según el autor, en incidir en la radicalización de otras facciones de izquierda a objeto de que se sumaran a la vía rupturista y al camino de las armas para así confrontar a los grupos de derecha (Mauricio Brum, "'Extender e impulsar las ideas por las que ofrendó su vida': a construção de Nilton Rosa Da Silva como um mártir da esquerda revolucionária chilena"). Sin duda, lo señalado por Brum fue parte sustancial de la estrategia de este movimiento respecto a sus relaciones con el conjunto de las agrupaciones de izquierda en estos meses. No obstante, cabría precisar que dichos objetivos no emergieron exclusivamente con la muerte de Da Silva, pues ya se habían observado énfasis similares en otros episodios de violencia. Sin ir más lejos, en el primer semestre de 1972, cuando falleciera el estudiante del FER, Eladio Caamaño Sobarzo, a manos de Carabineros, el MIR pondría sobre la mesa una discusión en torno a los alcances de la violencia estatal y el verdadero carácter del proceso chileno. En ese momento, como se recordará, se hicieron bastante explícitos los llamados de este movimiento para definir materias esenciales de la trayectoria, composición y caminos a seguir por parte de la UP.

una contraofensiva popular que frenaría a la oposición, pronto quedó claro que ningún actor podría imponerse al otro hasta lograr un repliegue de sus estrategias de agitación y confrontación. Ya el 16 de junio, el PN emitía una virulenta declaración en que reafirmó sus juicios respecto a la verdadera legitimidad del Ejecutivo. Luego de caracterizar un conjunto de situaciones que graficaban, a juicio de este actor, la quiebra del estado de derecho y el atropello a las libertades públicas se sostenía que «el señor Allende» había violado sistemática y deliberadamente la Constitución y las leyes. En virtud de ello, sentenciaba la declaración, y a la luz del «derecho y la moral», nadie estaba obligado a «respetar ni obedecer» a un Gobierno que había dejado de ser «legítimo»[674]. Pocos días después, estallaron sendas movilizaciones de la oposición en el centro de la capital, las cuales tuvieron sus puntos culminantes en masivos actos organizados el 19 y 21 de junio. Todo lo anterior demostraba, pues, que la contraofensiva popular y revolucionaria anunciada por el MIR en contra de la oposición no lograba alcanzar sus propósitos.

Incluso más, en este periodo ya asomaba con claridad que buena parte del bloque opositor estaba encaminado a derribar a la UP. Dicha estrategia, como se recordará, se articulaba en torno a dos ejes. El primero de ellos consistía en mantener una presencia significativa en las calles de modo de demostrar que la oposición no era solo institucional o partidista, sino que aglutinaba a amplios segmentos de la sociedad civil. En este sentido, la huelga de los mineros de El Teniente entregó una oportunidad clave para mantener la presencia física en los espacios urbanos, sobre todo luego de que el conflicto en torno a la ENU —que en su momento logró movilizar a miles de personas— ya había declinado dentro del espacio público. De esta manera, fue en torno a la movilización de los mineros del cobre donde se observó una reaparición de los sectores opositores en las calles, constatándose, además, llamativas redes de apoyo y solidaridad desde los partidos y agrupaciones estudiantiles hacia los trabajadores en huelga. El segundo eje dentro de la estrategia opositora se articuló sobre la base de un diagnóstico que destacaba la quiebra del estado de derecho y la pérdida de legitimidad del Gobierno como sus puntos más relevantes.

674 "'El señor Allende ha dejado de ser Presidente constitucional de Chile'", *El Mercurio*, 17 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 689-691.

Desde la izquierda se hizo lo posible por contrarrestar la ofensiva opositora a través de distintas vías. En el ámbito discursivo, como se indicó más arriba, se enfatizó la idea de «cerrar» el paso a la estrategia «sediciosa» de la oposición y también, desde una perspectiva más amplia, rechazar de plano la posibilidad de que se produjera una guerra civil. Cabe precisar, con todo, que estas elaboraciones estaban mediadas por las tensiones internas que recorrían a la alianza oficialista, por lo que no resultaba sencillo concordar declaraciones más o menos unívocas dentro de este sector. Quizás el diagnóstico general de la situación era compartido por gran parte de la izquierda, sin embargo, a la hora de proponer los caminos o vías para responder de forma conjunta emergían diferencias y divisiones. Si para un sector se debía insistir en la política de acuerdos y consolidación de lo obrado hasta entonces, otro núcleo del oficialismo enfatizaba en la necesidad de abrir el camino a una confrontación decisiva con el enemigo radicalizando el proceso revolucionario. En el plano que, en apariencia, sí existía mayor conexión fue en el de la movilización social. Así, frente a los actos de masas que escenificó la oposición, la izquierda respondería con desfiles igual de masivos que demostraban que esta alianza todavía lograba convocar a sectores amplios de la población. Un ejemplo de ello fue el acto organizado el 17 de junio en el Parque O'Higgins por el Movimiento Patriótico Regenerador de Camioneros (MOPARE) y al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Humberto Martones, y la diputada comunista Mireya Baltra[675].

Ahora bien, como ya sucedió en otros momentos, resultaría inevitable que en algún punto del espacio público las estrategias de movilización de los dos bloques en pugna se juntasen. Y sería en este tipo de contextos cuando emergerían algunos de los hechos de violencia más característicos de estas semanas. En efecto, desde la quincena de junio los medios de comunicación dieron cuenta de numerosos enfrentamientos entre militantes políticos, los cuales en su mayoría terminaron con heridos a bala de diversa consideración. Entre los días 15 y 16 de junio, por ejemplo, se produjeron enfrentamientos en la ciudad de Antofagasta que dejaron varios heridos,

[675] "Transportistas del MOPARE: Estamos alertas para defender nuestro gobierno", *La Nación*, 18 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 693-694.

entre ellos dos personas que fueron impactadas por proyectiles de armas de fuego. Los jóvenes fueron identificados como Rogelio Valdés González y Dragomir Moretic Vidal, este último militante de las Juventudes Comunistas[676].

En la comuna capitalina de Barrancas, en tanto, Juan Ferrada Lagos también sería alcanzado por las balas en el marco de los incidentes producidos el día 17 entre miembros de la Juventud Democratacristiana y militantes socialistas[677]. Por su parte, Juan Domingo Pavez y Marcel Cerda Zapata quedarían con heridas a bala en el antebrazo, columna y región pulmonar tras los enfrentamientos producidos entre distintos grupos en la ciudad de Concepción el día 20 de junio[678]. A día siguiente, los diarios de oposición denunciarían que una marcha organizada por la izquierda en el centro de Santiago derivó en un violento ataque a la sede central de la Universidad Católica, lugar que en esos momentos acogía al grueso de los mineros de El Teniente que habían llegado a Santiago. Según uno de estos medios, las columnas de los partidos y movimientos de izquierda atacaron con diversos proyectiles las instalaciones del recinto universitario, siendo profuso el empleo de armas de fuego por parte de individuos apostados en las calles aledañas a la universidad[679].

En la ciudad de Osorno, en tanto, se produjeron en esos mismos días violentos incidentes que dejaron como saldo una persona fallecida. Los hechos remiten a la tarde del 18 de junio cuando elementos de la Brigadas Ramona Parra y Elmo Catalán chocaron en las calles céntricas con grupos de oposición —como la Federación de Estudiantes de Osorno (FESO)— que marchaban en apoyo a los mineros de El Teniente. Según el diario local *La Prensa*, los incidentes se iniciaron cuando elementos izquierdistas interrumpieron la marcha produciéndose «batallas campales» con enfrentamientos armados que hirieron a cerca de siete personas. Además, este medio indicó que fueron atacadas «con grandes piedras y balines de acero» las sedes

676 El caso de Valdés fue recogido por *El Mercurio*, Santiago, 16 de junio de 1973, p. 32. Por su parte, la agresión al militante de las JJ.CC. fue publicada en *El Siglo*, Santiago, 21 de junio de 1973, p. 4.

677 *El Mercurio*, Santiago, 18 de junio de 1973, p. 19.

678 *El Siglo*, Santiago, 21 de junio de 1973, p. 9.

679 "Extremistas asaltaron casa central de la UC", *Las Últimas Noticias*, 22 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 695-697.

del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana. Respecto a los heridos, *La Prensa* destacó que su número alcanzaba las 22 personas siendo los casos más graves los de Erwin Báez Ricouz, con impacto balístico en ambas piernas; José Hunechuán Pinol, con fractura y herida a bala en el tobillo; Pedro Ivulic Lorca, con traumatismo encéfalo craneano y herida en el cuero cabelludo; María Isabel Moena Cartez, quien presentaba una herida a bala calibre 22 en el muslo derecho y Jorge Mena Durán, agricultor de 44 años, con traumatismo encéfalo craneano y herida contusa en el cuero cabelludo de carácter grave[680].

Este último individuo se transformaría en la víctima fatal de los incidentes dado que su condición de salud se agravó con el paso de las horas. Como informó en su momento *La Prensa*, Mena Durán falleció en la madrugada del día 22 como consecuencia de la «brutal agresión» propinada por «elementos extremistas» en los incidentes del lunes 18[681]. Un detalle pormenorizado de los hechos que terminaron con la vida del agricultor lo proporcionaría una hermana de la víctima, Mónica Mena Durán, quien fue testigo directo de la agresión. Según su relato, ella junto a tres hermanos más se trasladaba a bordo de una camioneta por las calles de la ciudad en dirección a sus respectivos trabajos. Al llegar a la intersección de Bulnes con Ramírez, una «turba» les cerró el paso obligándolos a detener el vehículo, acción que solo fue momentánea pues su hermano Jorge, que conducía el automóvil, decidió acelerar y pasar por encima de las barricadas. A partir de ese momento, continúa Mónica, comenzaron a ser agredidos con piedras, lanzas y proyectiles arrojados con hondas, siendo ella misma agredida en sus piernas y otras partes del cuerpo. En medio de este incidente, Jorge Mena trató de quitarle una lanza a una persona que estaba agrediéndolo, momento en el cual fue golpeado en su cabeza con una piedra que empuñaba otro atacante. En cuestión de segundos, indica la testigo, otras personas se sumaron a la golpiza agrediéndolo con un casco y otros elementos contundentes. Producto de esta agresión, la víctima quedo inconsciente, siendo trasladado por sus propios hermanos hasta el hospital San José. Mónica Mena indicó luego que se trató de un «acto de cobardía», pues su hermano no tenía ningún mecanismo de defensa —«ni siquiera usaba arma»—,

[680] *La Prensa*, Osorno, 19 de junio de 1973, pp. 4 y 6.
[681] *La Prensa*, Osorno, 22 de junio de 1973, p. 1.

señalando al mismo tiempo que la principal responsabilidad de lo sucedido recaía en el «desorden» que se vivía en el país[682].

La muerte del agricultor impactó fuertemente a la comunidad osornina, pues todo parece indicar que se trató de una agresión grupal a una persona que se encontraba desarmada y sobre la cual se emplearon elementos contundentes para golpearlo con inusitada violencia[683]. De hecho, el personal médico de la ciudad de Osorno llevó a cabo un paro de 48 horas para protestar por la muerte de Mena Durán, el cual se efectuó entre los días viernes y sábado. Algunas organizaciones gremiales, en tanto, emitieron declaraciones públicas condenando el homicidio, al tiempo que confirmaban su participación en los funerales de la víctima[684]. La voz de la máxima autoridad religiosa de la zona, el obispo Francisco Valdés Subercaseaux, también se escuchó por esos días a raíz de una carta que enviara al intendente de la región. En la misiva, este manifestaba su extrañeza ante la decisión de la autoridad civil en orden a anunciar una «misa por la paz», en circunstancias de que la justicia era violada con impunidad en las calles de Osorno. Valdés Subercaseaux ponía como ejemplo la muerte de Jorge Mena Durán, pues en este caso se había «ultimado impunemente» a un ciudadano inocente sin que la autoridad interviniese al respecto. Tampoco lo había hecho, recalcaba la carta, cuando se había «damnificado violentamente» la propiedad privada. La actuación del intendente se contradecía así con un supuesto básico que el obispo explicitó al final de su carta y que refería que la autoridad fue «constituida por Dios» para resguardar el orden[685].

El tanquetazo y sus consecuencias

En el tránsito hacia la cuarta semana de junio, bajo un conflicto social y político en plena ebullición, comenzaron a emerger los primeros

[682] *La Prensa*, Osorno, 23 de junio de 1973, pp. 1 y 5

[683] El certificado de defunción de la víctima anota como causa de muerte destrucción de la masa encefálica extensa del hemisferio cerebral derecho. "Certificado de defunción de Jorge Mena Durán", Osorno, 22 de junio de 1973, n.º de inscripción 318, folio 83288956, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 18 de marzo de 2021].

[684] *La Prensa*, Osorno, 23 de junio de 1973, p. 7.

[685] *La Prensa*, Osorno, 24 de junio de 1973, p. 7.

indicios de lo que sucedería a fines de este mes cuando se produjera una sublevación militar en contra del Gobierno. Cabe recordar, en todo caso, que el rol de las Fuerzas Armadas dentro de la coyuntura política era un tema que sobrevolaba desde hacía bastante tiempo en el espacio público. Visto desde una larga duración, el tema de los militares en tanto actores dentro del panorama político siempre estuvo presente en la historia republicana. Su protagonismo en las décadas veinte y treinta dio paso, en los años siguientes, a una etapa de reflujo en su participación pública. Hacia finales de los sesenta, el tema militar volvió a cobrar protagonismo en virtud de sus problemáticas internas y la forma en cómo era recepcionado este tópico por las autoridades civiles. A este respecto, Verónica Valdivia señala que dicho periodo significó un cambio importante dentro de la oficialidad militar, pues a partir de entonces hizo su entrada la primera generación de uniformados instruidos bajo la impronta del conflicto entre este y oeste[686].

La sublevación del Regimiento Tacna en octubre de 1969, volvió a poner sobre la mesa el problema de las Fuerzas Armadas dentro del proceso social y político que vivía el país. Claro está que ahora este tipo de movimientos y conspiraciones estaban alimentadas en buena medida por los conflictos ideológicos derivados de la Guerra Fría. Dicha situación, como es de suponer, no hizo más que agudizarse tras la llegada de la UP al poder, pues ponía en un mismo escenario elementos tan complejos —y antagónicos— como el proceso de transformaciones, el socialismo o la tradición anticomunista que existía en los institutos armados.

Aunque estos elementos lograban compartir un espacio común —sin transformarse todavía en factores precipitantes de una salida *de facto*— resultaba evidente que una agudización de las crisis social y política volvería a poner el tema de una intervención militar en primera fila. Se ha visto, de hecho, cómo a partir de 1972 el tema comenzó a concitar cada vez más importancia dentro de ciertos sectores políticos, sobre todo en los núcleos nacionalistas de la derecha y en actores menos formales, pero igual de relevantes como el periódico *El Mercurio*. El punto central de los planteamientos surgidos desde

[686] Verónica Valdivia, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980*, p. 24.

estas vertientes apuntaba a que ante el recrudecimiento de la crisis en el país y el desbordamiento de la legalidad por parte del Gobierno las fuerzas armadas no podrían permanecer impasibles y ajenas al conflicto que se había desatado. En buena medida, se estaba invitando a los militares para que asumieran un rol protagónico y rectificador de la situación existente. Dicho planteamiento, en todo caso, era pronunciado con distintos niveles de intensidad, los cuales iban desde los llamados abiertos de Patria y Libertad para que las fuerzas armadas intervinieran hasta las sugerencias más sutiles y siempre tácitas de *El Mercurio*. El tema también era discutido en televisión. En el programa de debate político de Canal 13 *A esta hora se improvisa* el profesor de derecho constitucional y fundador del gremialismo, Jaime Guzmán Errázuriz, se refirió a estos puntos. En una de estas emisiones, ocurrida en enero de 1973, Guzmán sostuvo que ante la lucha fratricida e incapacidad para gobernar que demostraban los dos principales grupos políticos —oposición y oficialismo— las Fuerzas Armadas emergían como un tercer sector organizado y con plena capacidad para conducir al país[687].

Sin duda, estos énfasis y tensiones que nutrían el lenguaje político de esos meses llegarían hasta el interior de los institutos militares. En la mayor parte de la oficialidad existía, como se dijo, una mentalidad de fuerte impronta anticomunista, la cual, sin embargo, aún no se expresaba de forma abierta en contra del Gobierno. Los sectores civiles que apostaban por materializar una intervención de las fuerzas armadas estaban conscientes de esta situación, por lo que su estrategia debía enfocarse en la perspectiva de reactivar ciertos tópicos que resultaban relevantes para la mentalidad militar. De este modo se podrían encauzar las preocupaciones, miedos e inquietudes castrenses hacia acciones concretas que permitieran poner freno al proyecto socialista.

Dentro de los tópicos más representativos que fueron explicitados resaltaron fundamentalmente dos. El primero de ellos señalaba que la UP era la expresión inequívoca de un proyecto político y social encaminado a construir un Estado totalitario bajo el manto ideoló-

[687] El registro audiovisual con estas declaraciones se puede ver en "Jaime Guzmán en programa 'A esta hora se improvisa'", disponible en https://www.youtube.com/watch?v=P-5gjGN-Sgw.

gico del marxismo. Ello suponía, según se argumentó, destruir las libertades individuales, subyugar las instituciones existentes a las órdenes de un partido único y alinear al país dentro de la órbita de países socialistas dependientes de Moscú. De materializarse estos objetivos se trastocarían, pues, algunas de las ideas vertebrales más importantes de la cosmovisión militar como eran los conceptos de soberanía y defensa de la patria. En este contexto, los hechos de violencia política jugaban también un rol fundamental toda vez que permitían mostrar a los uniformados ejemplos concretos de cómo las huestes de izquierda buscaban alcanzar el poder para instaurar una tiranía comunista. El 12 de junio el almirante Ismael Huerta anotaba un pensamiento esclarecedor a este respecto en su diario personal. Según el alto oficial, el clima de «violencia, desorden, desconcierto y caos» se aceleraba en el país, enseñoreándose incluso con aquellas mentes «normalmente serenas». Bajo estas circunstancias, concluía Huerta, las instituciones que regían la vida democrática aun cuando conservaban una «fachada de espíritu republicano», internamente anhelaban una «solución militar»[688].

El segundo tópico que se explicitó en dirección a las Fuerzas Armadas consistió en remarcar el carácter ilegítimo del Gobierno de la UP. Si bien se reconocía por parte de la oposición que en sus inicios Allende alcanzó el poder de manera legal y democrática, muy pronto se recalcó que la senda institucional había sido abandonada por el primer mandatario y que la izquierda en su conjunto transitaba al margen de la ley. Todo lo anterior, como es de suponer, chocaba con los imaginarios de la mentalidad militar, por lo que no sería extraño que este tipo de discursos comenzaran a ser recepcionados de forma cada vez más intensa al interior de los cuarteles.

Por lo demás, el contexto social y político de mediados de año se prestaba para que esa recepción fuese cada vez más fluida. Los hechos de violencia política, por ejemplo, emergían periódicamente en distintos puntos del país, activados en muchos casos a partir de las grandes movilizaciones de masas que los partidos organizaban. Este panorama de permanente agitación no se avenía, pues, con la mentalidad de los militares que siempre valoraron el orden y la disciplina como conceptos eje de su profesión. Y los discursos es-

[688] Huerta Díaz, *op. cit.*, tomo 2, p. 31.

tratégicos de la mayoría de los actores que anunciaban con mayor o menor intensidad un escenario de abierta confrontación, también eran vistos con escepticismo y desconfianza desde el mundo castrense. En algunas unidades del Ejército comenzó entonces a explorarse la posibilidad de realizar una acción de fuerza que permitiera poner freno a lo que consideraban una situación caótica. Tal movilización, en todo caso, requería del concurso de otras unidades y ramas de las Fuerzas Armadas a fin de coordinar una acción conjunta en contra de la UP. La apuesta de quienes proyectaban este tipo de acciones era que la sublevación de alguna unidad gatillara una reacción en cadena del resto de los regimientos y unidades militares, conformando así un movimiento unificado y transversal que depusiera al Gobierno.

En este punto, los relatos de diversos actores comienzan a confluir hacia la coyuntura del 29 de junio. El dirigente de Patria y Libertad, Manuel Fuentes Wendling comenta que semanas antes de la sublevación, la plana mayor del movimiento nacionalista fue contactada por los oficiales Sergio Rocha y José Gasset que pertenecían al Regimiento Blindado n.º 2 de Santiago. Estos uniformados les hicieron saber, a través de diversas reuniones, que dentro de la unidad se preparaba una sublevación en contra del Gobierno para las próximas semanas, por lo que recurrían a ellos para contar con respaldo logístico y político. Sin comprometerse de modo explícito en la acción, los dirigentes de Patria y Libertad les hicieron saber, en una de las reuniones, que harían todo lo que estuviese a su alcance para apoyarlos. Con todo, Fuentes indica que los dirigentes nacionalistas estaban más bien «incrédulos [y] desconfiados»[689].

Casi de forma paralela, los movimientos al interior del Regimiento Blindado n.º 2 ya habían sido detectados por la inteligencia militar del Ejército. El general Carlos Prats indica que en la mañana del 27 de junio el general Mario Sepúlveda Squella le informó que habían sido descubiertas «actividades sospechosas» dentro del regimiento, por lo que ordenó la incomunicación de un capitán y algunos suboficiales[690]. Tales hechos habrían sido el envío de camiones a algunas poblaciones militares para recoger a suboficiales y mecánicos de tanques. Estas actividades, al no estar dentro de la programación estipulada para

[689] Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 274.
[690] Prats, *op. cit.*, p. 414.

esa unidad, levantaron la inquietud de los mandos superiores por lo que comenzaron a ser rápidamente indagadas. La noticia comenzaría poco a poco a trascender en los medios de comunicación. La prensa escrita ligada al oficialismo, tomando como referencias las primeras informaciones proporcionadas por el general Sepúlveda, hablaría de la detección de un intento de alzamiento de unidad militar —un «cuartelazo»— que había sido «abortado»[691].

El mismo día en que Prats fue informado de lo sucedido en la unidad de blindados —27 de junio por la mañana— el Consejo de Generales trataba también otras materias ligadas a la institución. A pesar de la importancia de los temas, Prats recuerda que se sentía amenazado por un presentimiento oscuro que le «mortifica», y que le hacía advertir la proximidad de un hecho que se desarrollará «precipitadamente»[692]. En horas de la tarde, luego de salir de su residencia, el general se vería involucrado en un confuso incidente. Cuando se dirigía en su automóvil rumbo al Ministerio de Defensa, un grupo de vehículos comenzó a hacer maniobras de amedrentamiento en contra del coche del militar, gritando al mismo tiempo toda clase de groserías e insultos. Desde uno de los vehículos, una persona le sacó la lengua al general, mientras que su acompañante continuaba gritando diversos improperios. Claramente molesto, Prats sacó su arma de servicio y conminó a las personas a detenerse para que le dieran una explicación, cuestión que no sucedió por lo que el general disparó hacia los neumáticos del vehículo. En ese momento, cuando los coches se detuvieron, el alto oficial se percató de que la persona que le hacía los gestos era una mujer, identificada luego como Alejandrina Cox Palma. Avergonzado por la situación, Prats le expresaría sus disculpas.

El incidente podría haberse resuelto allí mismo, sin embargo, en pocos minutos aparecieron periodistas y fotógrafos, además de otros conductores, quienes rodearon a Prats y en tono amenazante lo acusaron de querer matar a una mujer. Casi al mismo tiempo procedieron a manchar la carrocería de su automóvil y a desinflar los neumáticos. La versión de *El Mercurio*, recogiendo el testimonio

[691] "Desesperada maniobra de la burguesía", *Las Noticias de Última Hora*, 29 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 713.
[692] Prats, *op. cit.*, p. 414.

de Cox, da a entender que Prats actuó fuera de control y que tras disparar varios balazos apuntó a la mujer en su cabeza exigiendo que se disculpara[693]. Todo parece indicar que se trató de una operación montada para vejar al general y erosionar así su prestigio. El oficial sostiene, por su parte, que la «inquietud sorda» que se vivía en la institución, a propósito de los hechos investigados en el Regimiento Blindado, le hicieron creer que lo acontecido podía tratarse de una encerrona que pusiera en riesgo su vida[694]. Tras lograr salir del lugar a bordo de un taxi, el general se dirigió primero a una comisaría donde estampó la denuncia respectiva para luego, en La Moneda, presentar su renuncia a Salvador Allende.

A pesar de que el incidente pudo quedar relegado a un segundo plano, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia desde distintos ángulos. En la prensa oficialista se deslizó la idea de que lo ocurrido con Prats pudo tratarse de un atentado que hacía recordar lo acontecido con el general Schneider en 1970. Desde la oposición, en cambio, se insistió en la sobrerreacción de Prats, acusándolo de haber intentado matar a una mujer. El tema, sin duda, escaló en la esfera pública causando bastante conmoción. En lo inmediato, el gobierno decretó el Estado de Emergencia para la provincia de Santiago, al tiempo que el presidente Allende rechazaba la renuncia de Prats al carecer de justificación. En los días siguientes, se conocería el intercambio epistolar entre Prats y Cox a través del cual ambos se pedirían disculpas[695].

[693] "General Prats mezclado en un grave incidente", 28 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 702-703. La imagen de Prats como una persona agobiada por el acontecer político y que actuaba fuera de control fue señalada también por Augusto Pinochet Ugarte, segunda antigüedad del Ejército y estrecho colaborador del comandante en jefe. Según su testimonio durante la segunda quincena de junio se pudo advertir cómo aumentaba de forma notoria la tensión de Prats, mostrándose «nervioso», fumando compulsivamente y actuando de manera violenta con los subalternos. A juicio de Pinochet, fue su estado nervioso el que le jugó una «mala pasada» en el incidente del día 27 de junio. Véase, Pinochet, *Camino...*, *op. cit.*, tomo I, p. 261.

[694] Prats, *op. cit.*, p. 416.

[695] Además de la misiva particular que envió, el general Prats dio a conocer una declaración pública en que daba su versión de los hechos, precisando varios detalles que habían sido omitidos o distorsionados por algunos medios. "Declaración del general Carlos Prats González", *El Mercurio*, 29 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 710-711. Alejandrina Cox, en tanto, reconocía su exabrupto y ofrecía disculpas al alto oficial, pero recalcando que no justificaba su actuar. "Alejandrina

En cuestión de horas, el cuadro político había dado un giro en 180 grados. Las investigaciones que se llevaban a cabo respecto al Regimiento Blindado se entremezclaron con un confuso incidente de tintes políticos que afectaba a la máxima autoridad militar, al tiempo que el Gobierno tomaba los resguardos de rigor para evitar que cualquier situación se saliese de control. En ese marco, resultaba bastante probable que las medidas adoptadas por las autoridades civiles y militares aceleraran los planes de los sublevados, quienes en menos de 48 horas debieron poner en marcha su insurrección.

En la noche del 28 de junio, los oficiales Rocha y Gasset informaron a la plana mayor de Patria y Libertad que la sublevación tendría lugar a primera hora de la mañana siguiente, lo que significaba adelantar en varios días la operación. Al interior del grupo nacionalista surgió la discusión en torno a si plegarse o no a la maniobra. Según Fuentes Wendling, Pablo Rodríguez Grez hizo un largo análisis de la situación insistiendo en que a pesar de que la sublevación constituía un «grave error» al carecer de sentido, Patria y Libertad debía sumarse. A juicio del abogado, el movimiento ya estaba comprometido con la operación en virtud de las conversaciones que se habían mantenido con los oficiales del Regimiento n.º 2. En ese marco, continúa Fuentes, John Schaeffer, encargado de los cuadros operativos del grupo nacionalista, puso en alerta a los «veintitantos universitarios» que componían el Frente de Operaciones, reuniéndose en dos casas diferentes hasta esperar «la hora D»[696]. La plana mayor de Patria y Libertad también aguardaría el desarrollo de los acontecimientos en una casa de seguridad.

A primera hora del 29 de junio, el comandante del Regimiento de Blindados, Roberto Souper Onfray, comandó la columna de tanques que se dirigió al centro de la capital con el propósito de derrocar al

---

Cox también pidió disculpas a Prats", *La Prensa*, 29 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 710-712. En una entrevista concedida décadas después a la historiadora Margaret Power, Cox reafirmaría el grueso de su versión reconociendo que sus actos fueron «estúpidos». Además, insistiría en que ella no formaba parte de ningún grupo operativo de derecha y que su actitud tampoco tuvo vinculación alguna con el tanquetazo del 29 de junio. Más aún, según su declaración, lamentaría la muerte del general y su esposa a manos de la DINA en 1974. La autora de la entrevista cree que Alejandrina Cox Palma decía la verdad y que se encontraba arrepentida de su actitud y consecuencias. Véase, Power, *op. cit.*, pp. 246-249.

[696] Fuentes Wendling, *op. cit.*, pp. 274-279.

Gobierno. En pocos minutos, los blindados tomaron ubicación en las inmediaciones de La Moneda, originándose los primeros disparos entre los sublevados y la guardia de palacio, interviniendo, además, numerosos francotiradores que estaban apostados en los edificios aledaños. A las nueve de la mañana, el general Prats ya había sido informado de la situación por lo que ordenó la coordinación de las fuerzas militares que debían defender al Gobierno constitucional. En poco menos de dos horas, el comandante en jefe había logrado, no sin problemas, movilizar a una parte sustantiva de las unidades que debían atajar a los sublevados. Cerca de las 10:30 de la mañana, la escuela de suboficiales se sumaba a la columna del Regimiento Tacna en su marcha hacia el centro de la capital. Ambos grupos eran guiados personalmente por Prats quien viajaba en su automóvil por calle Dieciocho en dirección a la Alameda. La principal preocupación del comandante en jefe consistía en que si la sublevación no era sofocada con prontitud otras unidades del Ejército podrían plegarse a ella. El alto oficial también temía que se pudiera generar una situación de caos que activara una reacción en cadena de los grupos de choque de izquierda y derecha y una movilización incontrolable de los sectores populares. «Me propongo usar de todos los recursos para sofocar el motín antes del mediodía», recuerda Prats[697].

El intercambio de disparos en torno al Palacio de La Moneda comenzaría entonces a incrementarse con rapidez. Según los informes oficiales, más de quinientos proyectiles impactaron la fachada y dependencias del palacio presidencial, dejando con severos daños algunas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores que funcionaba en su interior. Los disparos también alcanzarían al Ministerio de Defensa, ubicado en las inmediaciones[698]. Al tratarse de un día laboral, un gran número de personas comenzaría a agolparse en las inmediaciones de La Moneda a efecto de seguir el desarrollado de los acontecimientos. En esos momentos, el general Prats ordenaba, metralleta en mano, desplegar a las tropas a lo largo de la Alameda, al tiempo que se encaminaba junto a otros oficiales hacia donde se emplazaban los sublevados. Se trataba de una acción

[697] Prats, *op. cit.*, p. 419.

[698] "Sublevación de unidad blindada dominó el gobierno", *El Mercurio*, 30 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 714.

temeraria pues los disparos arreciaban desde distintas direcciones. Sin embargo, Prats logró someter y desarmar a la mayor parte de los insubordinados. Los que no aceptaron rendirse comenzaron a huir a toda velocidad hacia el sur de la capital. El oficial a cargo de los amotinados, Roberto Souper, deambulaba todavía arriba de su tanque constatando, con frustración, que su intentona golpista estaba en vías de fracasar. El general Prats lo vio pasar muy cerca y lo insta a rendirse, sin embargo, Souper pasa por alto las órdenes del comandante en jefe y continúa su escapada mostrando un rostro «desencajado»[699].

Era cerca del mediodía y la insurrección había sido derrotada. Las fuerzas leales al Gobierno comenzaban a controlar la situación desplegándose a lo largo del centro de Santiago. A lo lejos se escuchaban todavía algunos disparos que no representaban, en la práctica, mayor amenaza. Las autoridades civiles y militares iniciaron entonces un recorrido por distintos edificios públicos a fin de evaluar los daños. De forma paralela, en la Alameda se había formado una marcha espontánea en favor del Gobierno que se dirigía hacia el palacio presidencial. Algunos de sus integrantes, premunidos de palos y otros implementos, gritaban con ímpetu «...mano dura, mano dura»[700].

La noticia del fracaso de la sublevación llegaría muy pronto a oídos de la plana mayor de Patria y Libertad que continuaba refugiada en una casa de seguridad. En cuestión de minutos, los dirigentes nacionalistas debieron elaborar un plan para afrontar la derrota y

[699] Prats, *op. cit.*, p. 421. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Augusto Pinochet, señalaría que luego de enterarse de la sublevación se dirigió al Regimiento Buin donde procedería a tomar el mando de la unidad para así avanzar sobre el centro de Santiago. En el camino le indicaría al segundo comandante de la unidad, coronel Felipe Geiger, que la acción del Regimiento n.º 2 no contaba con el apoyo de otras unidades, lo cual entrañaba un peligro enorme en caso de que tuvieran que disparar en contra de los militares alzados. Por ello, asegura Pinochet, se debía disuadir a sus camaradas y emplearse solo en contra de las organizaciones paramilitares o «pobladas» que pudieran atacar «a nuestros compañeros de armas». «Reaccionaremos violentamente contra esa gente», sentenciaría Pinochet a bordo de su vehículo. Cuando se encontraban en las inmediaciones del centro de Santiago, Pinochet y sus soldados fueron informados de que el comandante del Regimiento n.º 2 había señalado que ante la falta de cooperación de otros regimientos la unidad de blindados regresaba a su cuartel, Pinochet, *Camino...*, *op. cit.*, tomo I, pp. 262-263.

[700] Patricio Guzmán, *La batalla de Chile*, I, II y III, "Segunda parte. El golpe de Estado", 1979.

resguardar su integridad. Las alternativas comenzaron a discutirse con nerviosismo entre los miembros del movimiento, barajando distintas opciones. En medio de la áspera conversación, la dueña de casa les serviría un bufete frío: «Carne mechada, papas con mayonesa, jamón crudo, dos tipos de quesos, café y agua mineral». Solo Fuentes Wendling se sentó a comer, argumentando que en virtud de lo que había pasado no sabía cuándo volvería a ingerir alimentos, explicación que generó nuevos roces entre los dirigentes[701]. A esas alturas el desconcierto era total al interior de la casa de seguridad. Finalmente, el grupo decidió solicitar asilo en la Embajada de Ecuador, lugar desde donde emitirán una declaración en que reconocían su participación en el motín, reclamando al mismo tiempo haber sido traicionados.

En horas de la tarde comenzaron a hacerse los primeros balances y reacciones respecto a la fracasada sublevación. Por de pronto, el Gobierno decretaría el Estado de Emergencia para la provincia de Santiago, poniendo a cargo de la situación al general Mario Sepúlveda Squella. Más adelante, Allende solicitaría al Congreso la declaración del estado de sitio, lo que suponía entregar numerosas atribuciones al Ejecutivo para afrontar la delicada situación. Como se verá más adelante, dicha medida no prosperaría, pues los parlamentarios de oposición se negaron a apoyarla[702].

En cuanto a sus consecuencias humanas más inmediatas, el tanquetazo dejó varios civiles y uniformados muertos. Algunas fuentes hablan de al menos veintidós muertos, la mayor parte de los cuales serían militares[703]. En el caso de los civiles, los medios de prensa tienden a coincidir en que fueron seis las personas fallecidas además de numerosos heridos de consideración[704]. El semanario *Ercilla* indi-

701 Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 283.

702 El dirigente comunista Orlando Millas recuerda en sus memorias que pocas horas después de ocurrida la sublevación, el subsecretario general del PC, Víctor Díaz, le encargó la misión de proponer al presidente Allende y al general Carlos Prats la depuración inmediata de los mandos militares involucrados en la asonada y de aquellos que hubiesen actuado sin la suficiente firmeza en contra de los amotinados. Según Millas, el primer mandatario desestimó dicha sugerencia en virtud de que su propósito era lograr un acuerdo político —sobre todo con la Democracia Cristiana— a través de la promulgación del Estado de Sitio. Millas, O., *op. cit.*, p. 357.

703 *Las Últimas Noticias*, Santiago, 2 de julio de 1973, p. 7.

704 "Sublevación de unidad blindada dominó el gobierno", *El Mercurio*, 30 junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 715.

ca, a este respecto, que los heridos a bala se aproximaron al medio centenar de casos[705]. Las víctimas fatales, en tanto, fueron identificadas como Victoria Sánchez Carrasco, Leontina Reyes Velásquez, Luciano Caro, Carlos Fuentes, Jorge Fierro Inostroza y Leonardo Henrichsen, quienes fallecieron por el impacto de balas en distintas zonas del cuerpo[706].

El caso de Leonardo Henrichsen merece un comentario especial. Como se sabe, la víctima era un camarógrafo argentino de ascendencia sueca que llevaba varios meses en Chile cubriendo distintas alternativas de la experiencia de la UP. En la mañana del 29 de junio, Henrichsen junto a su asistente de cámara se encontraban en el centro de la capital cuando comenzó la sublevación del Regimiento Blindado n.º 2. En la intersección de las calles Agustinas con Morandé, Henrichsen se parapetó con su cámara y comenzó a grabar los enfrentamientos entre los amotinados y las fuerzas leales al Gobierno. En un momento, el camarógrafo se detuvo en una patrulla militar

[705] *Ercilla*, n.º 1981, Santiago, 4 al 10 de julio de 1973, p. 17.

[706] La información proporcionada por los certificados de defunción de los fallecidos entrega algunos datos importantes a este respecto. El primer civil en fallecer fue Jorge Fierro Inostroza, empleado del Banco del Estado de Chile, quien fue alcanzado en su oficina por el impacto de un arma de fuego a las 09:15 de la mañana, "Certificado de defunción de Jorge Fierro Inostroza", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 638, folio 17955786, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016]. La muerte de Victoria Sánchez Carrasco, en tanto, fue fijada a las 09:30 debido a una herida a bala cráneo encefálico, "Certificado de defunción de Victoria Sánchez Carrasco", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 825, folio 17955583, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016]. El documento de Leontina Reyes Velásquez fija su muerte a las 09:45 a causa de una herida a bala cérvico facial, "Certificado de defunción de Leontina Reyes Velásquez", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 622, folio 19278973, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 11 de agosto de 2016]. Un cuarto de hora después, fallecía Luciano Caro Díaz debido a una atrición cráneo encefálico, "Certificado de defunción de Luciano Caro Díaz", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 1401, registro E1, folio 19279048, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 11 de agosto de 2016]. Finalmente, en horas de la tarde se produciría el deceso de Carlos Fuentes Riquelme producto de una herida a bala cráneo encefálico, "Certificado de defunción de Carlos Fuentes Riquelme", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 980, folio 19279200, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 11 de agosto de 2016].

que merodeaba las calles del sector. De improviso, el vehículo se detuvo y desde él descendieron algunos uniformados que comenzaron a disparar en distintas direcciones. El último registro que alcanzó a grabar Henrichsen fue precisamente el de los soldados apuntando en su dirección y abriendo fuego con sus armas. Se trataba de una escena impactante, pues además de mostrar la sensación ambiente de esos minutos lograba registrar con bastante detalle cómo había sido asesinado el propio camarógrafo[707]. El certificado de defunción de Henrichsen fija su muerte a las 09:25 de la mañana y anota como causa una herida a bala toracopulmonar[708]. Cabe precisar, por último, la forma en cómo fue rescatada la cámara de la víctima que contenía el importante registro. El ejecutivo de Codelco Jorge Arrate, cuyas oficinas estaban en las inmediaciones del lugar, cuenta que tras el baleo a Henrichsen los guardias del edificio ocultaron la cámara bajo una tapa del alcantarillado. Horas más tarde la lograron recuperar y tras tenerla en su poder por unos días se la entregó a Augusto Olivares, director de Televisión Nacional de Chile[709]. Algunas semanas después, el registro fue dado a conocer a través de la televisión causando un gran impacto nacional e internacional.

Además de las víctimas civiles, la sublevación del Regimiento n.º 2 también dejó algunos militares fallecidos. En una declaración pública fechada el 30 de junio, el Ejército confirmó la muerte del sargento 1.º Rafael Villena Cabello[710], del cabo 1.º José Jorquera Jorquera[711], del cabo 2.º Luis Torres y de los soldados conscriptos

[707] El registro audiovisual circula profusamente en internet. Para una descripción más contextualizada del suceso véase el documental de Andrés Habegger, *Imagen final*, realizado en 2008, donde se aborda la muerte de Leonardo Henrichsen y la batalla emprendida por su familia en busca de justicia.

[708] "Certificado de defunción de Leonardo Henrichsen", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 827, folio 17959080, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].

[709] Arrate, *op. cit.*, p. 407.

[710] Su certificado de defunción anota como causa de muerte traumatismo craneoencefálico. "Certificado de defunción de Rafael Villena Cabello", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 624, folio 85003469, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[711] Su certificado de defunción indica como causa de muerte herida a bala torácica. "Certificado de defunción de José Jorquera Jorquera", Santiago, 29 de junio de

José Conejeros Huenchenin, Sergio Figueroa Véliz[712], Samuel Tapia Llanca[713] y Federico Ugarte[714]. El comunicado oficial del Gobierno, que fue leído por el jefe del Estado de Emergencia, general Mario Sepúlveda Squella, indicó también la existencia de al menos dieciséis heridos, cuatro de los cuales se encontraban en estado grave, mientras que el resto había sido derivado a sus hogares[715].

A pesar de que la sublevación fue contenida en pocas horas, la intensidad de los combates y el fuego cruzado proveniente de distintas direcciones dejó, como se apuntó arriba, casi una docena de muertos entre civiles y uniformados. Cuando se tuvo certeza de que el motín había sido aplastado se sucedieron las reacciones respecto a estos hechos. En el oficialismo primaría un aire de preocupación mezclado con algunas dosis de triunfalismo. Al atardecer del 29 de junio se organizó una masiva concentración en el frontis del palacio presidencial que tuvo como único orador a Allende, quien, en una hábil puesta en escena, salió al balcón junto con los comandantes en jefe de las fuerzas armadas. El general Carlos Prats recuerda que, aunque los uniformados eran reticentes a mostrarse en público no pudieron eludir la invitación. Según el militar, el objetivo de Allende con dicho gesto era disipar cierta aversión que existía contra las fuerzas armadas en algunos segmentos de la población[716]. A decir verdad, este hecho sirvió para encender aún más el ánimo de las bases de izquierda que copaban el perímetro de La Moneda. Los gritos de

---

1973, n.º de inscripción 1409, registro E1, folio 85003705, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[712] Su certificado de defunción señala como causa de muerte herida a bala cervical. "Certificado de defunción de Sergio Figueroa Véliz", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 1409, registro E1, folio 85003791, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[713] Su certificado de defunción indica como causa de muerte herida a bala. "Certificado de defunción de Samuel Tapia Llanca", Santiago, 29 de junio de 1973, n.º de inscripción 1397, registro E1, folio 85003814, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[714] Declaración oficial del Ejército sobre los sucesos del 29 de junio, publicada en *El Mercurio*, Santiago, 1 de julio de 1973, p. 32.

[715] "Sublevación de unidad blindada dominó el gobierno", *El Mercurio*, 30 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 715.

[716] Prats, *op. cit.*, p. 423.

los manifestantes se sucedían sin parar e iban desde declaraciones explícitas de admiración a la guardia de Carabineros que había defendido el palacio —«[...] se pasaron, se pasaron»—, hasta otros más combativos que se dirigían en contra de algunas instituciones del Estado —«[...] a cerrar a cerrar el Congreso Nacional»—.

En su discurso, Allende apelaría a la calma y la tranquilidad de la población al tiempo que destacaba el papel jugado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ante los gritos que exigían el cierre del Congreso, el primer mandatario expresó que no procedería de esa forma, aunque aseguró que estudiaba la posibilidad de enviar un proyecto de ley para que el pueblo se pronunciara mediante un plebiscito. Al finalizar el acto, Allende hizo un llamado para que los trabajadores se integraran de inmediato a sus puestos de trabajo, insistiendo en que se debía fortalecer y crear poder popular «pero no antagónico ni independiente del Gobierno»[717].

Casi en paralelo a la realización de este acto, comenzaban a desarrollarse, en la sede del Congreso Nacional, los primeros debates sobre los recientes sucesos. En el Senado se convocó a una sesión especial a media tarde en la cual intervinieron Patricio Aylwin por la DC y Humberto Aguirre Doolan por el Partido de Izquierda Radical. Ambos parlamentarios fueron enfáticos para condenar la intentona subversiva del Regimiento Blindado n.º 2 y para manifestar su lealtad a la Constitución y al marco institucional. Con todo, Aylwin fue el más vehemente para recalcar estos puntos, quizás como una forma de disipar los rumores y comentarios que circulaban en la esfera pública respecto a la tardanza con que la DC había condenado el motín[718].

En la Cámara de Diputados, en tanto, cuya sesión se extendió entre las 22:30 y las 23:15 horas, comenzó a debatirse la urgencia y tipo de tramitación con que debería abordarse el estado de sitio solicitado por el Ejecutivo. La discusión se tornaría tensa en virtud de que dicho trámite fue contrarrestado por una petición de la bancada democratacristiana y nacional en orden a que el proyecto fuera revisado primero en una comisión, lo que finalmente fue aprobado. En ese contexto, la diputada comunista Mireya Baltra acusó a los

[717] "Allende informó al pueblo en impresionante manifestación", *Las Noticias de Última Hora*, 30 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 719.
[718] Senado, *Diario de sesiones,* 23.ª sesión, viernes 29 de junio de 1973, pp. 1030-1031.

parlamentarios de oposición de estar «rompiendo la constitucionalidad» al tiempo que les advertía que por su actitud la «Historia» los condenaría. Luego intervendría el ministro del Interior, Gerardo Espinoza, quien fundamentaría la solicitud del Ejecutivo aduciendo que no estaba solo en juego la estabilidad del Gobierno de la UP, sino también la vida democrática del país y la mantención «incólume» de la libertad. A pesar del dramatismo de las intervenciones oficialistas, la bancada de oposición no daría marcha atrás, por lo que la solicitud de estado de sitio, requerida por el Gobierno, pasó a comisión[719]. Días más tarde, esta solicitud sería rechazada por la cámara baja en medio de una álgida sesión celebrada el 2 de julio[720].

Como era de esperar, los tonos que caracterizaron la discusión parlamentaria se repetirían en el conjunto de los debates y declaraciones que cruzaron el espacio público en los días siguientes. El periódico *Tribuna*, ligado al PN, sostuvo una tesis audaz al señalar que la sublevación no era sino una «burda mascarada» ideada por la UP en su propósito de alcanzar el poder total. A juicio de este medio, la izquierda había aprovechado el accionar de «desenfocados elementos militares» para construir un montaje que le permitiera quebrar la institucionalidad e implantar la dictadura marxista. De hecho, la solicitud de estado de sitio efectuada por el Gobierno iba, según *Tribuna*, en la dirección antes señalada, es decir, orientada a que la izquierda dispusiera de las herramientas necesarias para sus propósitos totalitarios[721].

En *El Mercurio*, por su parte, se realizó un sugerente análisis de la situación, enfocándose en el significado más estructural y a largo plazo que dejaban los eventos del 29 de junio. Según el editorial de este periódico, la sublevación del Regimiento n.º 2 reveló dos hechos esenciales. El primero era que la disciplina y unidad de mando que habían demostrado las Fuerzas Armadas aquella mañana les había permitido sofocar cualquier tipo de sublevación. El segundo hecho, conectado con el anterior, era que en la actual coyuntura que se vivía las FF.AA. eran el poder «más efectivo» que quedaba en el país,

[719] Diputados, *Diario de sesiones*, 12.ª sesión, viernes 29 de junio de 1973, pp. 872-880.
[720] Diputados, *Diario de sesiones*, 13.ª sesión, lunes 2 de julio de 1973.
[721] "Burda mascarada", 30 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 721.

tanto «por su espíritu como por su fuerza». Sin duda, este segundo elemento era el que trasuntaba mayor importancia para *El Mercurio*, pues situaba a los institutos militares como un factor de poder que podía inclinar la balanza bajo un escenario de mayor agudización social y política. En otras palabras, esto significaba que las FF.AA. podrían, en el mediano plazo, encabezar una acción de conjunto que pusiera freno al proyecto socialista de la UP[722]. Por su parte, el periodista Luis Hernández Parker, columnista y editor del semanario *Ercilla*, sostuvo que la disciplina y jerarquía que habían mostrado las Fuerzas Armadas constituía un ejemplo para el mundo. En su visión, los institutos militares podían asegurar «el paso tranquilo de los ríos» cuando las aguas estaban algo «turbulentas». Además, Hernández Parker indicaba que la «aventura» del excomandante Souper no trasuntaba una tendencia mayor dentro del Ejército, pues este evidenciaba una «sólida realidad interna»[723].

En la prensa de izquierda, las interpretaciones iban en sentido contrario. *Clarín* enfatizó que la sublevación se encadenaba a un conjunto de hechos que se arrastraban desde hacía meses en el país y cuyos objetivos estaban orientados a derrocar a la UP. Con todo, el aplastamiento de la asonada contrarrevolucionaria ponía sobre la mesa, según este medio, numerosos desafíos para el Gobierno y sus bases de apoyo. Desde ya se pedía terminar con la tolerancia hacia ciertos medios de comunicación opositores, al tiempo que se exigían procesos de depuración en instituciones como el Poder Judicial, los colegios profesionales y el propio Congreso Nacional[724]. Por su parte en *El Siglo* se criticaría con dureza a la oposición, y en particular a la DC, por el rechazo que la Cámara de Diputados hizo al proyecto de Estado de Sitio solicitado por el Gobierno. A juicio de este medio, los parlamentarios de dicho partido habían dado amparo a quienes buscaron «terminar con la vida democrática en Chile»[725]. *Punto Final*, en tanto, sostuvo que detrás de los hechos ocurridos el viernes 29 de

[722] "'Soldado amigo... el pueblo está contigo'", 1 de julio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 725-726.

[723] *Ercilla*, n.º 1981, Santiago, 4 al 10 de julio de 1973, pp. 10-11.

[724] "Comadreos y comistrajos de la política", 1 de julio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 730-733.

[725] "Oposición debe asumir su responsabilidad ante Chile", 2 de julio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, pp. 733-734.

junio se encontraban, sin ninguna duda, sectores «fascistas, oligarcas y burgueses», lo que en el lenguaje de esta publicación significaba incluir a toda la oposición. De igual forma, este medio indicó que había llegado el momento de la «dictadura popular» basada en las organizaciones proletarias y apoyadas por los «sectores patrióticos» de las fuerzas armadas. A partir de esta dictadura, sentenciaba *Punto Final*, se podría crear una institucionalidad verdaderamente revolucionaria[726].

Las reacciones de los partidos y movimientos políticos sobre el frustrado intento de golpe de Estado también fueron un elemento relevante dentro de la discusión pública de esos días. El PS sostuvo, en su declaración del mismo 29 de junio, que se debía sancionar no solo a quienes materializaron la sublevación, sino también a los «autores intelectuales y políticos» de la asonada. Por otra parte, esta colectividad indicó que la frustrada intentona debía llevar al gobierno y a la izquierda en general a visualizar de una forma distinta el porvenir, tomando conciencia que había que pasar a otra etapa. Esto suponía, según el PS, que el Ejecutivo ya no podía continuar maniatado por los «actos ilegítimos» del resto de los poderes del Estado, por lo que se debían buscar las fórmulas para pasar «por encima» de los pronunciamientos de dichas instituciones[727]. El PC, por su parte, indicó a través de una declaración de su comisión política que el alzamiento militar formaba parte de una escalada «sediciosa antichilena» que se venía denunciando desde hacía meses. En ella, según este partido, tenían responsabilidad directa no solo los militares que se alzaron sino también los «facinerosos» del PN, Patria y Libertad y la prensa y radios «facciosas». El PC también destacó la cohesión de la clase obrera y popular para oponerse al motín, en donde incluso habían participado «trabajadores democratacristianos». Este último punto se insertaba dentro de la óptica interpretativa con que el PC analizaba la contingencia nacional, y que en este caso volvía a mostrar un intento por aislar a los sectores golpistas y reaccionarios del país dentro del ámbito opositor. Con ello se desligaba al grueso de la DC de este tipo de maniobras[728].

[726] *Punto Final*, n.º 187, Santiago, martes 3 de julio de 1973, p. 1.

[727] "Actos ilegítimos del Congreso, Justicia y Contraloría no pueden maniatar al gobierno", *Las Noticias de Última Hora*, 30 de junio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 716.

[728] "Partido Comunista: 'Fascinerosos del Partido Nacional no pueden eludir su responsabilidad'", 29 de junio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, p. 4781.

Desde el MIR también se hizo pública una declaración para referirse a los recientes acontecimientos. En el documento emitido por el Secretariado Nacional de dicho movimiento se sostuvo, en primer término, que la intentona golpista tenía profundas ramificaciones en el país, las que incluían a casi toda la oposición y a numerosas entidades gremiales y profesionales. En segundo término, esta colectividad insistió en un tópico ya recurrente de su estrategia discursiva que apuntaba a que solo la organización y movilización «independiente» de los trabajadores podrían derrotar la actual sublevación golpista y «cualquiera intentona posterior». A juicio del MIR, existía bastante claridad respecto a que la crisis por la que atravesaba el país únicamente podían resolverla las clases trabajadoras, por lo que hacía un llamado a activar los comandos comunales, las brigadas de vigilancia y otras organizaciones de base. Desde este ángulo, resultaba evidente que para el MIR la actual coyuntura se prestaba para poner en práctica sus objetivos estratégicos tendientes a resolver el problema del poder y activar una gran contraofensiva revolucionaria que pusiera fin a los planes de la reacción[729].

Por su parte, el diputado de la IC, Luis Maira, sostuvo que la asonada militar debía ser vista como un punto de inflexión que cambiaba el marco del proceso chileno. A su juicio, el tanquetazo produjo una serie de situaciones nuevas con las que ahora había que contar. Entre ellas destacaban que las Fuerzas Armadas tuvieron una actitud de lealtad al Gobierno constitucional al confrontar a los elementos sublevados, impidiendo con ello una prolongación del conflicto. También se podía advertir, según Maira, una voluntad de lucha de parte de la clase popular y obrera, la cual, al mismo tiempo, constató las limitaciones de un plan de defensa más integral. Con todo, las insuficiencias en la dirección del movimiento obrero por parte de la UP fueron subsanadas, según el dirigente, por la unidad y resolución de los trabajadores y por el papel cumplido por la CUT. Por último, Maira sostenía la existencia de una grieta en el bloque opositor, con una DC manifestando, de momento, adhesión al marco institucional, mientras que los sectores facciosos no tenían mayor apoyo en la sociedad civil[730]. Aunque la interpretación del

[729] "MIR: declaración", 29 de junio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4777-4780.

[730] "Luis Maira: '29 de junio: ¿Episodio o nueva etapa?'", 13 de julio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4806-4807.

parlamentario se mostraba como un análisis bastante optimista de la situación, los elementos descritos por este no lograrían extenderse ni consolidarse en el tiempo observándose en el mediano plazo un vuelco significativo en algunos puntos esenciales, como por ejemplo la lealtad de las Fuerzas Armadas al Gobierno constitucional.

En los partidos de la oposición existieron diversos matices para referir la coyuntura del tanquetazo. El telón de fondo que existía para ambas colectividades estaba determinado, en gran medida, por la solicitud del Ejecutivo a efecto de implantar el estado de sitio. La DC había emitido una declaración ya avanzada la mañana del 29 de junio para condenar la intentona subversiva, la que fue reafirmada más tarde, en el Senado, por el presidente del partido Patricio Aylwin. Con todo, la preocupación fundamental de esta colectividad era que la aprobación de dicho estado se prestaría para que el Gobierno abusara de sus prerrogativas restringiendo las libertades individuales. Y así lo hizo saber a través de una declaración publicada el 30 de junio en la cual quedaba claro que este partido rechazaría la solicitud del Ejecutivo[731]. El PN, por su parte, aducía que el levantamiento militar generó una situación confusa que no permitía sacar conclusiones taxativas, pero que en todo caso no prestaría su apoyo a un gobierno «ilegítimo» que no le merecía confianza[732]. La preocupación fundamental de los partidos opositores radicaba, pues, en que el gobierno hiciera un uso indiscriminado de la normativa que fijaba el estado de sitio, cuestión que podría traducirse en una persecución de los dirigentes y militantes de la oposición o en limitaciones a la libertad de expresión.

En este contexto, las bases de izquierda llevarían a cabo numerosas acciones de respuesta frente al tanquetazo, situación que podía interpretarse como una contestación *de facto* a la estrategia política de la oposición. Entre estas acciones una de las más importantes fue la masiva toma de industrias y centros fabriles en diversos puntos del territorio, proceso que comenzó a registrarse a pocas horas de ocurrido la sublevación. *El Mercurio* informó, en efecto, que a inicios

[731] Declaración del Partido Demócrata Cristiano, 30 de junio de 1973 en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 351.

[732] Declaración del Partido Nacional, 30 de junio de 1973 en Corvalán Marquéz, *ibid.*

de julio casi la totalidad de las fábricas de la capital se encontraban ocupadas por un contingente de casi tres mil obreros. Según este medio, la mayor parte de las plantas tomadas correspondían a unidades ubicadas en los dos principales cordones industriales de Santiago —Vicuña Mackenna y Cerrillos—. Dentro de esta misma nota, el periódico insertaba una declaración de la CUT en que se señalaba que las empresas tomadas a contar del día 29 de junio no serían entregadas «hasta nueva orden de la CUT». De igual forma, el documento instaba a los trabajadores a organizar comités de vigilancia y realizar asambleas para ir evaluando la situación social y política del país[733]. La irrupción masiva de este tipo de prácticas reflejaba, sin duda, la tensión del momento, donde las huestes de izquierda observaban con bastante preocupación lo sucedido con el frustrado conato subversivo. En particular, los sectores proletarios advertían que la defensa del Gobierno de la UP en la mañana del 29 de junio dependió en gran medida de la lealtad que prestaran ciertas unidades militares, situación que podía variar en los meses siguientes. De este modo, la ocupación de empresas e industrias respondía en buena medida a una actitud defensiva de parte de los trabajadores en orden a fortalecer ciertos núcleos que, como las fábricas, podrían prestar una resistencia y lealtad incuestionables al proyecto socialista.

A pesar del fracaso de la asonada militar, el contexto general del país incrementaría sus niveles de tensión en las semanas siguientes. A las consecuencias materiales del motín se sumaban un conjunto de declaraciones cruzadas que iban desde la solicitud de castigo a los autores intelectuales del alzamiento hasta las críticas al Ejecutivo por los eventuales desbordes que ocasionaría un estado de sitio. En medio de esta guerra de declaraciones se situaban las acciones de los sectores proletarios más organizados del país que articularon una respuesta factual en sus propios espacios productivos a objeto de apoyar al gobierno de la UP. Podría decirse que, en términos generales, el fracaso del tanquetazo había disipado de momento la amenaza de un golpe exitoso que derrocara a Allende y acabara con el proyecto socialista en el corto plazo. Sin embargo, los niveles de polarización política retomaron su curso ascendente, volviendo a instalar un es-

733 "Se mantiene «ocupación» de fábricas e industrias", 3 de julio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 734.

cenario de confrontación entre dos bloques excluyentes, uno de los cuales insistía en la remoción del Gobierno. Se podría indicar, en definitiva, que los eventuales «triunfos» que se anotaba la izquierda en estos últimos meses apenas alcanzaban a durar o proyectarse un par de días, pues conforme la situación se normalizaba reaparecían las tensiones y conflictos más estructurales entre los actores[734].

En medio de este ambiente, donde aún se sentía el asfalto caliente de las calles producto del enfrentamiento, el general Augusto Pinochet sacaba sus propias conclusiones. Según cuenta en sus memorias, el tanquetazo fue una «excelente acción de exploración» que permitió conocer los dispositivos de seguridad y ubicación del «marxismo» en casos de emergencia. Más aún, la sublevación del Regimiento n.º 2, según el oficial, dejó al descubierto que la agresividad de los sectores populares en contra de las Fuerzas Armadas en realidad no existía. «Era solo propaganda y acción sicológica», concluía Pinochet[735]. De esta manera, al no existir un rechazo generalizado de parte de la población hacia los militares, se abría la posibilidad, siguiendo la óptica del general, que un plan de golpe bien elaborado podría resultar exitoso. Con todo, esto último pasaba por aislar a los mandos constitucionalistas existentes dentro de las Fuerzas Armadas,

[734] El sociólogo Joan Garcés recuerda que la UP no aprovechó el éxito circunstancial del 29 de junio para atacar las bases de la insurrección y desarmar a los adversarios del proyecto socialista. Según su visión, el gobierno optó por evitar el riesgo de una guerra civil inmediata si se iniciaba un proceso de depuración interna dentro de las Fuerzas Armadas, optando, en cambio, por los recursos tácticos de la vía político-institucional. Además, el Ejecutivo continuaba confiando en la capacidad defensiva del gobierno y de los trabajadores, mientras se evaluaba como débil la capacidad ofensiva que podría ponerse en marcha. Véase, Garcés, J., *op. cit.*, p. 303.

[735] Pinochet, *Camino...*, *op. cit.*, tomo I, p. 263. El rol jugado por Pinochet en el marco del tanquetazo despertó ciertas interrogantes en algunos miembros del Ejército. El general Guillermo Pickering anota en sus apuntes que al elaborar el diario de guerra correspondiente a la jornada del 29 de junio se percató, por ejemplo, que Pinochet no concurrió al lugar en donde estaba el comandante en jefe, sino que prefirió trasladarse al Regimiento Buin, ubicado al otro extremo de la ciudad. Asimismo, Pickering afirma que al indagar por qué la Escuela de Infantería no se había movilizado en dirección al centro de la capital, el director de esa unidad le indicó que había recibido una contraorden de parte de Pinochet señalándole que no debía abandonar el cuartel. En los días siguientes y con todos estos elementos sobre la mesa, Pickering trató de ahondar en el comportamiento de Pinochet durante el tanquetazo sin obtener una respuesta convincente. Guillermo Pickering, *Profesión soldado. Apuntes de un general del Ejército de Chile*, p. 130.

los cuales demostraron tener todavía capacidad de gestión y mando para oponerse a un intento de sublevación.

A la luz del conjunto de antecedentes revisados sobre la coyuntura del 29 de junio cabría preguntarse por su significado desde un punto de vista más general y al calor de algunas interpretaciones. Arturo Valenzuela, por ejemplo, sostiene que el tanquetazo revelaría tres cuestiones de vital importancia. La primera de ellas fue que la maniobra no formaba parte de un plan estructural para hacerse con el poder, sino más bien revelaba un accionar espontáneo de un militar disconforme que esperaba desencadenar una reacción corporativa del conjunto de las Fuerzas Armadas. La segunda cuestión que la sublevación reveló fue que los mandos constitucionalistas todavía mandaban al interior del Ejército, lo cual sin duda era una señal hacia el interior de los propios cuarteles. Finalmente, el motín reveló a las propias instituciones armadas la existencia de un vacío político producido por un gobierno debilitado que no proyectaba una imagen de estabilidad y cohesión. Esto generaría un proceso de reflexión interna sobre el papel que debían jugar como institución del Estado, el cual sin duda sería alimentado por la percepción que tenían respecto a la amenaza de los grupos paramilitares de izquierda[736]. Bajo la óptica de Valenzuela, los problemas y desafíos que generó este evento se sitúan en una perspectiva esencialmente institucional del problema, donde cobran relevancia el rol de sus principales protagonistas en el marco de crisis políticas que deben ser resueltas en algún momento.

Para Luis Corvalán Marquéz el tanquetazo puso sobre la mesa una cuestión de indudable importancia. Esta consistió en que los militares se constituyeron en una fuerza decisiva del conflicto político en Chile, mucho más importante inclusive que las movilizaciones obreras que siguieron al fracaso de la intentona golpista. Adicionalmente, y a diferencia de lo postulado por Valenzuela, Corvalán cree que esta sublevación sí estaba inscrita dentro de un plan de mayor alcance, pero que por distintas razones no desencadenó una respuesta en tal dirección. De esta manera, lo que se situaba en el primer plano de la contingencia sería, según este autor, la dirección hacia la que transitarán las Fuerzas Armadas en virtud del cuadro de polarización y crisis que reemergería después del 29 de junio. Tal disyuntiva

[736] Valenzuela, *op. cit.*, pp.165-166.

resultaba del todo relevante pues la maniobra del Regimiento Blindado n.º 2 contó, según el autor, con no pocas simpatías al interior de las filas castrenses[737]. En síntesis, lo que Corvalán pone de relieve es que buena parte del conflicto institucional en Chile comenzará a girar en la perspectiva de saber qué actor político logrará ganar el concurso de las Fuerzas Armadas a fin de materializar su propio proyecto estratégico.

Joaquín Fermandois también sitúa la importancia y proyección del factor militar como elementos característicos de esta coyuntura. A su juicio, a pesar de que el alzamiento fue derrotado con cierta facilidad, su «raíz» —que involucraba a varios oficiales de mediana graduación— no fue tocada. Al mismo tiempo, y en sintonía con lo que han planteado diversos autores, Fermandois sostiene que existía un estado de deliberación abierta en algunas unidades militares lo que en muchos casos llevó a romper la cadena de mando. Asimismo, el autor establece una conexión directa entre esta sublevación y el golpe militar del 11 de septiembre, pues el fracaso del primer intento desató una deliberación formal e informal dentro de las Fuerzas Armadas, tanto a nivel de mandos medios como de la alta oficialidad. En este último segmento, según Fermandois, se comenzó a hablar con mayor insistencia respecto a qué cosas se podían hacer, situación que incluso los llevó a fijar un programa de acción[738]. Desde este punto de vista, el motín contribuyó a perfilar mejor las operaciones que se quisieran poner en ejecución a mediano plazo. Aunque buena parte de la izquierda sospechó de las ramificaciones que menciona Fermandois, lo cierto es que estas pudieron mantenerse bajo suelo y no ser descubiertas.

Una perspectiva que se aparta de las visiones arriba descritas es la de Franck Gaudichaud. Según este autor, el tanquetazo dejaría en claro la ausencia de un poder popular armado, pues cuando el enfrentamiento fue inevitable los militares aparecieron como los verdaderos «dueños del juego político». Esta situación no significaría, según Gaudichaud, que no haya existido algún tipo de reacción de parte de la clase obrera, aunque esta adoptara, en la práctica, la forma de un «electrochoque». En efecto, la reacción de los sectores prole-

[737] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 338 y 349.
[738] Fermandois, *op. cit.*, pp. 665 y 667.

tarios se materializaría a partir de la misma mañana del 29 de junio mediante una progresiva organización de los cordones industriales de la capital, lo que incluyó la toma de varias industrias, reuniones a lo largo de todo el día y una coordinación entre distintos centros fabriles. Visto en su conjunto, Gaudichaud considera que estos elementos fueron constitutivos de una nueva capacidad de reacción colectiva de parte de los trabajadores, observándose la consolidación de un «nuevo sujeto popular» que vio reforzados su participación y poder local. Esto implicará, según el autor, un avance significativo a nivel de conciencia política, pues quedaría bastante claro que los obreros estaban dispuestos a defender sus lugares de trabajo. Se había terminado de conformar, concluye Gaudichaud, un importante margen de autonomía de la clase trabajadora, aun cuando ella siga dependiendo de la «orientación legalista» de la UP[739].

Como se puede apreciar, los balances de algunos autores transitan por distintas vías. En Valenzuela, Corvalán y Fermandois tiende a predominar una perspectiva institucional del conflicto político que se suscitó tras el tanquetazo, enfatizando casi de modo transversal en que el factor militar cobraría nueva y mayor importancia a partir de las semanas siguientes. En Gaudichaud, en cambio, se explicita la visión de base que es tan característica de su análisis histórico sobre la UP, resaltando las continuidades y rupturas que se originaron en el mundo de los trabajadores a partir de sucesos que irrumpen desde otras esferas.

Se podría agregar que, además de los elementos ya referidos, la sublevación militar contribuyó a explicitar con mayor claridad ciertas dinámicas y comportamientos en algunos actores. Así, tras el 29 de junio no quedarían dudas respecto a que los sectores de extrema derecha, y aún aquellos de la derecha institucional, no prestarían ningún tipo de adhesión al marco institucional, sino por el contrario apoyarían salidas que implicaran romper el sistema democrático. Asimismo, este evento puso en evidencia que la resistencia civil al intento de golpe Estado no era en ningún caso cohesionada ni tampoco estaba vinculada a un plan estratégico de mayor envergadura. Ella acusaba, más bien, síntomas de improvisación que no obstante su disposición para defender al gobierno, estaba anclada a la movi-

[739] Gaudichaud, *Chile...*, *op. cit.*, pp. 322 y 326.

lización callejera y la toma de los centros fabriles e industriales. En último lugar, esta coyuntura ayudó a clarificar las tensiones existentes dentro de las Fuerzas Armadas, donde el mando constitucionalista debía hacer frente no solo a sectores de la suboficialidad que se mostraban críticos del proyecto de la UP, sino también a oficiales que explicitaron un planteamiento similar.

La lucha política, entonces, al estar de algún modo anclada a partir del 29 de junio en torno al tema militar tendrá en los eventos que se susciten al interior de los institutos castrenses, y en su relación con otras esferas del acontecer, algunos de sus elementos más característicos. Si antes del tanquetazo la discusión discurría en torno a la coyuntura que resolvería la pugna en curso, a partir de este suceso el dilema sería esencialmente el mismo, aunque ahora agregando el tema militar como factor que inclinaría la balanza en una u otra dirección. De hecho, en los primeros días de julio, Allende intentó conformar un nuevo gabinete con participación militar, sin embargo, los altos mandos de las Fuerzas Armadas pusieron una serie de condiciones para aceptar su entrada al gobierno. En la práctica, el primer mandatario no logró conciliar estas exigencias con los planteamientos que demandaban los partidos de la UP, ni tampoco con sus propias expectativas, por lo que el gabinete, aunque reformado, quedaría integrado solo por civiles.

Líneas de tensión y conflicto en el mes de julio

En los dos meses que antecedieron al golpe de Estado las disputas y tensiones en el espacio público se agudizaron hasta niveles máximos. A nivel social, el conflicto se encontraba en uno de sus puntos más álgidos en virtud de la masividad que alcanzó la toma de empresas y fábricas tras el tanquetazo, situación que además se complementó con nuevas movilizaciones y marchas organizadas por el oficialismo. A decir verdad, la coyuntura del 29 de junio creó las condiciones necesarias para activar este tipo de dinámicas al empoderar a los trabajadores bajo el entendido de que su accionar resultaba clave para sostener y defender al Gobierno de la UP. Asimismo, estas conductas se verían reforzadas, e incentivadas, por los planteamientos oficiales que emanaban tanto desde los partidos como desde las propias orga-

nizaciones sindicales. Sin ir más lejos, el día 5 de julio la CUT emitió una declaración en que conminaba a los trabajadores a mantener en sus manos todas aquellas empresas, fábricas y predios que hubieran sido tomados después del 29 de junio, insistiendo, además, en las tareas de vigilancia y protección de los centros industriales[740].

Para un sector importante de la izquierda, la movilización de masas —y los hechos que de ella se derivaban— constituía, en la práctica, uno de los factores más determinantes para viabilizar el proyecto socialista. Sin duda que detrás de esta concepción, que era importante para el denominado polo revolucionario, subyacía toda la temática en torno al poder popular. En efecto, para este sector el proceso revolucionario debía apoyarse no en la institucionalidad ni en los mecanismos legales sino, por el contrario, en el protagonismo de las masas, cuestión que contribuiría a dirimir en algún momento el tema del poder. Lo que en buena medida explicitaba esta idea era que el proyecto de la UP, al ser concebido dentro de los marcos institucionales, carecería del poder suficiente para consolidar el socialismo si no integraba dentro de su estrategia el poder de las masas proletarias y populares. Más aún, como el tanquetazo no logró el objetivo de derrocar al Gobierno, ni tampoco implicó la consolidación granítica del mismo, la pugna central en torno a la cancelación o viabilidad del modelo propuesto por la UP, seguía presente. Frente a este panorama, pensaba el polo revolucionario, el único camino que podía garantizar la continuidad del proyecto socialista no era otro que el fortalecimiento de las bases obreras y populares, las cuales deberían actuar cada vez con mayor autonomía. Esta perspectiva chocaba de frente con el parecer de otros sectores de la izquierda, incluyendo al propio Allende, cuyas formulaciones enfatizaban más en la idea de consolidación de los cambios y coordinación vertical del movimiento social. Conforme el cuadro de polarización política ganaba en intensidad esta problemática volvería una y otra vez a sobrevolar dentro de la izquierda chilena transformándose, a la larga, en un tema irresoluto.

Otro punto de tensión que se fraguaba hacia el mes de julio estuvo determinado por el actuar de la oposición. Aunque existieron

[740] "'Mantener tomas de industrias'", *El Siglo*, 6 de julio de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 743.

acusaciones en torno al rol que jugaron tanto la DC como el PN en la coyuntura del 29 de junio, estas no lograron mellar la iniciativa del bloque, haciéndose evidente a los pocos días que ambos partidos volverían a la carga en contra de la UP. Una de las preocupaciones fundamentales de estos actores radicaba en torno al proceso de toma de empresas e industrias que se había extendido de forma creciente tras el tanquetazo. Como ha indicado Luis Corvalán Marquéz, este hecho era visto por la oposición como una prueba indesmentible del carácter insurreccional y antidemocrático del proyecto que promovía la izquierda, por lo que hicieron la denuncia respectiva a través de una declaración publicada en los primeros días de julio[741]. El propio presidente de la DC, Patricio Aylwin, recalcó este tópico en un discurso en el Senado el día 11 de ese mes en donde sostuvo que existían actores que jamás habían sido «verdaderamente democráticos», pues apuntaban a instaurar una dictadura marxista leninista en el país. Tal propósito, según Aylwin, no era solo un objetivo defendido por el MIR, sino también por el PS y el PC[742]. Es decir, se trataba de un posicionamiento estratégico de casi la totalidad de la izquierda chilena en favor de la dictadura del proletariado. Este planteamiento se vería reforzado a los pocos días gracias a una información publicada por el diario *La Prensa* que señalaba que tanto la UP como el MIR estarían detrás de la formación de un «ejército del pueblo». Se trataría, según este medio, de una organización que poseía cerca de diez mil pobladores y un número tres veces superior de trabajadores y que se encontraba apertrechado, además, con 12 mil metralletas y una numerosa cantidad de otras armas[743].

Gran parte de estas denuncias fueron advertidas con preocupación al interior de las Fuerzas Armadas. Desde luego, la sola enunciación de la existencia de un ejército paralelo era algo que inquietaba a los militares. Y más todavía si en los contenidos que divulgaban tales informaciones se enfatizaba en la presencia de un número no menor de activistas extranjeros como instructores de dicha milicia. A lo anterior se agregaba otro elemento de tensión, el cual tenía que ver con los pronunciamientos de la izquierda más rupturista

[741] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 361.
[742] Patricio Aylwin, *El reencuentro de los demócratas. Del Golpe al triunfo del No*, p. 25.
[743] Salazar, M., *op. cit.*, p. 324.

en relación a temas como el rol y cadena de mando de las Fuerzas Armadas chilenas. Tanto Miguel Enríquez como Carlos Altamirano habían hecho sendas declaraciones a este respecto. El líder del MIR, por ejemplo, sostuvo a comienzos de julio que la deliberación llevada cabo por algunos elementos del alto mando castrense había sido «neutralizada» por la acción de la suboficialidad, de los soldados y de algunos oficiales antigolpistas. Unido a lo anterior, Enríquez sostuvo que el proceder de estos elementos constitucionalistas y leales a la UP abría la puerta a un proceso de democratización del conjunto de las Fuerzas Armadas[744]. El senador socialista, en tanto, planteó que los «soldados, marinos, aviadores y carabineros» no podían prestarse para la tarea de atacar al pueblo, por lo que si llegado el momento volvía a emerger una intentona golpista estos sectores no tenían la «obligación» de obedecer[745].

Lo que ambas declaraciones ponían en discusión era un tema complejo pues significaba, por un lado, comprometer a los militares dentro de un proyecto social y político con el cual, sin duda, existían profundas distancias. Por otra parte, estos emplazamientos indicaban que la disciplina y verticalidad del mando estarían condicionadas por factores políticos, lo que las transformaba en instrumentos maleables que podían ser aceptados o rechazados según el contexto. Todos estos elementos, como es de suponer, generaban una enorme inquietud dentro del alto mando uniformado. El general Carlos Prats recuerda que varios generales y almirantes le plantearon en esas semanas su preocupación por la «actitud pasiva» del alto mando frente a las tomas indiscriminadas, la existencia de un ejército paralelo y los «ataques» de Enríquez y Altamirano a las Fuerzas Armadas. Algunos oficiales, rememora Prats, le señalaron que a estos dirigentes se les debía aplicar la ley de seguridad interior del Estado[746].

En paralelo a estas discusiones, la oposición agregó otro elemento de tensión dentro del debate público al insistir, una vez más, respecto al tema de la ilegalidad del gobierno. Ya el día 6 de julio, como se indicó, los partidos opositores emitieron una declaración

744 "Miguel Enríquez: Discurso por cadena de emisoras", 7 de julio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4791 y 4796.

745 "Carlos Altamirano: Del discurso a los trabajadores de los cordones industriales", 13 de julio de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, p. 4804.

746 Prats, *op. cit.*, p. 440.

en que acusaban a Allende de estar ubicado al margen de la institucionalidad debido, entre otras cosas, a su incapacidad para frenar la formación de un ejército paralelo. Al mismo tiempo, el documento señalaba que el Congreso Nacional debería cumplir un rol clave en el restablecimiento de la legalidad[747]. Dentro de estas coordenadas orbitarían, pues, los puntos de vista más específicos de los actores que integraban este bloque. Para la DC, por ejemplo, resultaba imprescindible que las Fuerzas Armadas cumplieran un rol más relevante a la hora de fiscalizar los actos del gobierno, transformándose de hecho en una especie de contrapoder del Ejecutivo. Solo en la medida en que dicha situación se materializase, este partido estaría dispuesto a dialogar con el oficialismo. Para el PN, en tanto, no cabía sino insistir en los tópicos habituales de su estrategia discursiva. Esto significaba denunciar todos los actos considerados como ilegales y destacar el papel de los militares como el actor que podía poner freno al proyecto socialista de la UP[748].

Como si estos elementos no fueran suficientes para polarizar el cuadro político, a mediados de julio se agregó un elemento adicional de tensión. En una conferencia de prensa realizada en el restaurante Bremen del sector de Las Condes, Roberto Thieme y Ernesto Miller declaraban su paso a la clandestinidad para luchar «hasta las últimas consecuencias» en contra del Gobierno de Allende[749]. Como se recordará, el rastro de Thieme se había detectado meses atrás en Argentina cuando reapareció luego de habérsele dado por muerto en el mes de febrero. Su presencia en Santiago sin duda resultaba inquietante, pues suponía un ingreso clandestino al país, lo cual calzaba con el tenor de los propósitos que había explicitado a la prensa. Sin embargo, la capacidad operativa de Patria y Libertad para llevar a cabo una lucha en los términos que la planteaba Thieme no era del todo consistente. Tras la fracasada sublevación del 29 de junio, el grupo

[747] Declaración de los partidos opositores, 6 de julio de 1973, en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 361.

[748] Ambos elementos en Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 361 y ss.

[749] Salazar, M., *op. cit.*, p. 337. En sus memorias, Thieme cuenta que tras la conferencia de prensa cambió su aspecto físico, cortándose el pelo al estilo militar, usando ropa de oficial de Ejército y movilizándose en un automóvil con chofer y dos guardaespaldas fuertemente armados con revólveres Colt Magnum y granadas de mano. Thieme, *op. cit.*, p. 117.

nacionalista había quedado descabezado, con su plana mayor asilada en Ecuador y varios dirigentes y militantes perseguidos por la justicia. Lo que quedaba de Patria y Libertad, en términos de capacidad operativa, eran numerosos militantes lo largo del territorio, aunque dispersos y sin mayor conexión entre sí.

Sería, pues, sobre la base de estos elementos, coordinados en su mayoría por Thieme y Miller, que Patria y Libertad comenzó a ejecutar algunas operaciones. En su mayoría se trataba de atentados explosivos en contra de infraestructura pública y privada, los cuales contribuían a incrementar la sensación de caos e inseguridad. Cabría señalar que estas acciones de Patria y Libertad serían incentivadas y apoyadas por algunos uniformados, en especial por miembros de la Armada. José Díaz Nieva, señala que el día 22 de julio se llevó a cabo una secretísima reunión entre los dirigentes clandestinos del grupo nacionalista y oficiales de la Marina que respondían a las órdenes del almirante José Toribio Merino. Estos últimos solicitaron que los miembros operativos de Patria y Libertad se movilizaran a efecto de contribuir en la paralización general del país, atentando en contra de líneas férreas, carreteras, gasolineras y oleoductos. El objetivo central de esta maniobra era, según los uniformados, crear las condiciones necesarias para un pronunciamiento militar[750]. Con precisión mecánica comenzaron a desarrollarse entonces una serie de atentados en contra de los objetivos antes descritos, los cuales se extenderían sin parar hasta poco antes del golpe de Estado del 11 de septiembre. Incluso antes de la reunión señalada, el país ya había sido testigo de numerosos ataques, como los ocurridos en contra de antenas de comunicaciones, locales sindicales y tramos ferroviarios[751]. Aunque no se podría descartar la participación de algunos elementos de izquierda en este tipo de hechos, la mayor parte de los actos de violencia de estas semanas trasuntaban indefectiblemente el propósito de generar un cuadro de anarquía y desestabilización que perjudicara

[750] Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, p. 279. Roberto Thieme indica que a la reunión asistió el comandante de la Armada Hugo Castro acompañado por un capitán quienes, además de revelarles que el día 25 de julio estallaría un nuevo paro de camioneros, les prometieron proporcionarles apoyo logístico y material explosivo para atentar en contra de diversos objetivos. Thieme, *op. cit.*, p. 119.

[751] Una larga lista de estos hechos se encuentra en Salazar, M., *op. cit.*, p. 336 y ss. También véase Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 366.

al Gobierno. En los últimos días de julio, los atentados se dirigieron de preferencia en contra de gasolineras ubicadas en la capital. El ya citado estudio de José Díaz Nieva describe la especificidad de estos últimos hechos como «la noche las mangueras largas» en atención a los numerosos atentados que se produjeron en contra de distribuidoras pertenecientes a la empresa de combustibles COPEC[752].

En medio de esta crítica atmósfera, las movilizaciones callejeras y enfrentamientos entre manifestantes y la policía uniformada no retrocedían. Días antes de que se pusiera en marcha el plan operativo de Patria y Libertad, la capital fue escenario de violentos incidentes en el sector de Vicuña Mackenna y Avenida Matta. Según describe *La Prensa*, el día 19 un grupo indeterminado de personas había llegado al lugar procediendo a ocupar distintas viviendas y edificios para luego cortar el tránsito en dicho sector. A juicio de este medio, se trató de una «asonada mirista», cuyos elementos más radicalizados portaban un cuantioso armamento, destacándose a este respecto «lanzas de fabricación casera, garrotes, linchacos, estoques, piedras y hasta armas de fuego». La policía uniformada, destacaba el matutino, solo intervino luego de unas horas, logrando desalojar el sector y restableciendo el flujo vehicular[753]. Aparentemente el enfrentamiento que se produjo en el sector no dejó heridos de consideración, sin embargo, tres días después el subsecretario del Interior, Daniel Vergara, confirmó la muerte de un trabajador, identificado como José Arroyo Riquelme de 24 años de edad. Según detalló la autoridad civil, Arroyo junto a otro trabajador subieron a la techumbre de un inmueble con el propósito de escapar de las bombas lacrimógenas lanzadas por Carabineros, lugar desde donde cayeron al suelo. Vergara indicó que la víctima fatal había ingresado cerca de las 23:50 horas a la Posta Central, recinto en que se le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano y contusiones abdominales de carácter grave[754].

La versión del periódico obrero *Tarea Urgente* apunta en la misma dirección, resaltando que Arroyo se encontraba semiasfixiado por los gases lacrimógenos lanzados por Carabineros por lo que trepó al techo de una vivienda cercana. En medio de la situación, el trabajador

[752] Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, p. 279-280.
[753] *La Prensa*, Santiago, 20 de julio de 1973, pp. 1 y 5.
[754] Declaraciones recogidas por *La Prensa*, Santiago, 22 de julio de 1973, p. 9.

perdió el equilibrio precipitándose al suelo desde una altura de diez metros, falleciendo al día siguiente. La publicación también indicaba que Arroyo vivía en el campamento Vietnam Heroico de Lo Hermida, lugar donde le había tocado presenciar «la contradictoria represión del reformismo hace algo más de un año»[755]. Lo que *Tarea Urgente* ponía sobre la mesa con este caso era una crítica directa al tema de la represión que afectaba a algunos centros fabriles y poblacionales, situación que ya se había observado meses atrás generando en su momento una agria pugna en la izquierda. Pero lejos de desaparecer, este tópico explotaría con inusitada fuerza en las semanas siguientes a propósito de algunos operativos militares que se materializaron con inusitada violencia en distintos puntos del país.

El 25 de julio, en tanto, estallaba un nuevo paro de los camioneros. Según la directiva de este gremio, la paralización obedecía al incumplimiento de parte del gobierno de los acuerdos que se habían firmado en octubre del año anterior. Aunque ello podía ser cierto en algunos puntos, no cabía duda de las connotaciones políticas y objetivos desestabilizadores que estaban detrás de esta huelga. De hecho, ella se insertaba dentro de la nueva ofensiva opositora que buscaba cancelar, de una vez por todas, el proyecto de la UP. Algunos autores han hecho ver, incluso, cómo esta huelga contó con el financiamiento de los Estados Unidos para su mantención, al tiempo que también se han dado indicios de cómo su puesta en marcha y características eran conocidas con antelación por algunos miembros de la Armada[756]. La paralización de los camioneros agitó, pues, los ánimos en las principales carreteras y calles del país. Las bases que apoyaban al Gobierno trataron de contrarrestar los efectos

[755] *Tarea Urgente*, Santiago, 27 de julio de 1973, p. 3.

[756] Luis Corvalán Marquéz indica, en base a documentos desclasificados del Gobierno norteamericano, que los camioneros comenzaron a recibir una asignación diaria que era sustantivamente superior a los sueldos que aquellos podían obtener en una jornada de trabajo, lo que les permitiría adherir al paro sin mayores inconvenientes. Véase, Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 371. Otro autor, por su parte, sostiene que en la reunión del 22 de julio los oficiales de la Armada les habrían indicado a los dirigentes de Patria y Libertad la fecha exacta del inicio de la paralización de los transportistas. Véase Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, p. 279. Al calor de este tipo de antecedentes, se podría deducir que dentro de los núcleos duros de la oposición a la UP se compartía un nutrido grupo de informaciones respecto a las actividades operativas que se pondrían en marcha para derribar al Gobierno.

de la paralización a través del MOPARE, plataforma que agrupaba a los camioneros partidarios de la UP. Sin embargo, su posición era minoritaria dentro de este sector, lo que no les permitía confrontar a un gremio más poderoso y dotado de numerosos recursos. En ese marco, comenzaron a producirse diversos atentados en contra de los conductores partidarios del Gobierno, lo que generaría una sensación de indefensión y miedo en muchos de ellos. Dos hechos que ejemplifican el tenor de este tipo de ataques se produjeron con una diferencia de menos de 24 horas. En el primero de ellos, ocurrido en la ciudad de San Carlos, al interior de la región del Bío-Bío, fue herido a bala el 28 de julio el chofer de INDAP, Rolando Becerra, mientras manejaba su camión[757]. Al día siguiente, Mauricio Peña Ramos, quedaría con quemaduras de gravedad tras el ataque incendiario que sufrió su camión en la ciudad de Talagante, al poniente de la región Metropolitana[758]. En los días posteriores se repetirían hechos de similar envergadura[759].

Los sucesos descritos no eran en ningún caso factores marginales dentro del proceso político y social existente. Todos ellos formaban parte, desde distintas vertientes, de la compleja pugna que sacudía al país. Con seguridad, el denominador común de estos factores era su capacidad casi intrínseca por erosionar el marco institucional, haciendo cada vez más creíble un escenario de enfrentamiento interno entre fuerzas excluyentes. Desde ya la ofensiva partidista de la oposición trataba de enfatizar en el carácter ilegal del Gobierno, con lo cual se asentaba una suerte de anormalidad jurídica cuyo único responsable, según este razonamiento, era el propio Ejecutivo. Por su parte, un sector de la izquierda declaraba que el proyecto socialista solo podría triunfar si se apoyaba en un proceso de radicalización del movimiento de masas que abriera la puerta a un enfrentamiento decisivo con las fuerzas de la reacción.

Bajo tal óptica se insertaban, pues, los llamados de estos mismos sectores a incrementar las tomas de industrias y, en lo que resultaba todavía más polémico, cuestionar las estructuras jerarquizadas al interior de las Fuerzas Armadas. No lejos del rupturismo que tra-

[757] *El Siglo*, Santiago, 29 de julio de 1973, p. 2.
[758] *El Siglo*, Santiago, 30 de julio de 1973, p. 3.
[759] Algunas referencias se encuentran en Salazar, M., *op. cit.*, p. 340.

suntaban este tipo de declaraciones se situaban los llamados a la clandestinidad y la lucha frontal en contra del Gobierno realizadas por grupos como Patria y Libertad. En el marco de este complejo escenario, las Fuerzas Armadas sufrirían procesos de alteración interna que revelaban una sorda pugna —cada vez más pública— entre los sectores constitucionalistas y aquellos embarcados en materializar algún tipo de acción en contra del Gobierno. En este contexto, la posición del presidente Allende y la de algún otro actor que, como el PC, compartía su visión estratégica más gradual y proclive al consenso flotaban como una balsa minúscula en medio de una tormenta.

El cuadro descrito arriba se vería más ensombrecido con los hechos de violencia política que estallaron en la última semana de julio, los cuales significaron la muerte de diversas personas. Uno de estos sucesos ocurrió al mediodía del 25 de julio en las instalaciones de la fábrica de Paños Continental, ubicada en la zona sur oriente de la capital. La versión de *El Siglo* señala que hasta ese lugar llegaron miembros de un comando «ultraizquierdista» quienes, sin mediar provocación, comenzaron a disparar en la entrada del recinto hiriendo a diversos trabajadores que se encontraban en el lugar[760]. *Las Noticias de Última Hora*, en tanto, sostuvo que un «comando armado» intentó apoderarse de algunas oficinas de la fábrica, operación que ocurría en momentos en que varios trabajadores iniciaban su colación. Sin mediar ninguna razón, apunta este periódico, los sujetos armados comenzaron a disparar sobre los obreros, dejando heridos a Juan Molina, Marta Montecinos y Manuel Garrido Valenzuela[761]. Este último, según confirma su certificado de defunción, fallecería producto de una herida a bala transfixiante torácica a las 04:15 de la madrugada del 26 de julio en dependencias de la Posta Central[762].

Se trataba de un hecho confuso que se prestaba para distintas interpretaciones, sobre todo porque algunos medios endosaban la responsabilidad del crimen a un comando de «ultraizquierda». La versión de *El Mercurio* fue un poco más allá al sostener que los auto-

[760] *El Siglo*, Santiago, 27 de julio de 1973, p. 16.

[761] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 26 de julio de 1973, p. 10.

[762] "Certificado de defunción de Manuel Garrido Valenzuela", Santiago, 26 de julio de 1973, n.º de inscripción 1633, registro E1, folio 17955127, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].

res del homicidio habían sido integrantes del Cordón Macul, al cual pertenecía la empresa de textiles. Asimismo, este medio consignó las declaraciones del director de la Policía de Investigaciones, Alfredo Joignant, quien sostuvo —al igual que como lo hiciera *El Siglo*— que los sospechosos pertenecían a la «ultraizquierda»[763]. Esto hacía suponer, en principio, la existencia de rencillas internas entre los miembros de las agrupaciones que coordinaban a los trabajadores partidarios del Gobierno, las cuales, en casos extremos como este, derivaban en ataques armados. Como se puede advertir, el ya citado periódico *Las Noticias de Última Hora* desestimó usar el apelativo de «ultraizquierdistas» para identificar a los sospechosos del crimen de Garrido. Ello se explicaría posiblemente en virtud de la cercanía que tenía este medio con la dirección del PS encabezada por Carlos Altamirano, quien era acusado de ser uno de los representantes del «ultraizquierdismo» en Chile. En ese marco, resultaba evidente que este periódico evitaría usar el mismo calificativo con que eran denostados algunos dirigentes del denominado «polo revolucionario». Para este vespertino, los victimarios formaban parte de lo que denominó como «grupo terrorista» o «comando armado». Además, y en un esfuerzo por desechar la tesis de *El Mercurio* en orden a la participación de miembros del Cordón Macul, *Las Noticias de Última Hora* consignó las declaraciones de Eugenio Cantillana, presidente de esa organización obrera. Este dirigente sostuvo que el crimen del obrero de Paños Continental se insertaba en una larga lista de ataques de los «peones del imperialismo y de las clases privilegiadas de nuestro país»[764]. Con ello se desplazaba tácitamente la responsabilidad del crimen desde la «ultraizquierda» hacia la derecha y la oposición en general.

En el conjunto de declaraciones y acusaciones cruzadas en torno a este crimen volvía a hacerse presente una intención manifiesta por entender dicho suceso al calor de elementos más estructurales. En este caso, algunos periódicos como *El Siglo* vieron la mano de la «ultraizquierda» en la ejecución del crimen. Esto significaba emplear un concepto propio de la lucha estratégica entre las tendencias en pugna dentro de la UP con el objetivo de referir y explicar hechos puntuales de la coyuntura política.

[763] *El Mercurio*, Santiago, 27 de julio de 1973, p. 25.
[764] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 26 de julio de 1973, p. 10.

En la tarde del 26 de julio, en tanto, se vivió otro hecho de violencia que terminó con una víctima fatal. Se trató de la muerte del transportista Juan Bautista Ayala, ocurrida en una carretera de la hoy décima región del país. Según reporta el diario osornino *La Prensa*, Ayala formaba parte de una caravana de camiones fiscales que volvía a Puerto Montt tras haber efectuado una entrega de mercaderías en la ciudad de Valdivia. A la altura del kilómetro 12 de la carretera longitudinal sur n.º 5 la víctima y el resto de los choferes fueron interceptados por algunos vehículos particulares, los cuales iniciaron maniobras de amedrentamiento en contra de los camiones. A los pocos minutos, continúa *La Prensa*, los ocupantes de los vehículos menores comenzaron a lanzar piedras en contra de los transportistas, una de las cuales rompió el parabrisas delantero de un camión e impactó en la cabeza de Juan Bautista Ayala[765]. El certificado de defunción de la víctima anota la gravedad de las lesiones sufridas, indicando como causa de muerte un traumatismo encéfalo craneano abierto complicado con fractura expuesta frontal y destrucción de masa encefálica. El documento fija, además, su fallecimiento a las ocho de la noche del 26 de julio[766].

Es posible que por la lejanía del lugar donde ocurriese este hecho la prensa de la capital no cubriera la noticia. Además del periódico arriba citado, *El Siglo* entregó algunas impresiones al respecto. Su versión fue coincidente con la del diario regional, pero agregando que los responsables del crimen serían miembros de Patria y Libertad y, desde un ángulo más general, el paro sedicioso liderado por León Vilarín[767]. Aun cuando no se aportaban pruebas concluyentes de esta denuncia, tal interpretación describía implícitamente el cuadro general por el que atravesaba el país en esos momentos. De hecho, como se recordará, el día anterior a la muerte de Ayala la patronal de los camioneros había iniciado una nueva paralización a nivel nacional, abriendo un escenario de confrontación todavía más complejo que el de octubre de 1972. Por su parte, los grupos operativos de Patria

[765] *La Prensa*, Osorno, 28 de julio de 1973, p. 8.

[766] "Certificado de defunción de Juan Bautista Ayala", Osorno, 26 de julio de 1973, n.º de inscripción 412, folio 13149997, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 4 de abril de 2016].

[767] *El Siglo*, Santiago, 28 de julio de 1973, p. 16

y Libertad se encontraban llevando a cabo numerosos actos de sabotaje a través de atentados explosivos en contra de bienes públicos y privados, contribuyendo con ello a alimentar el caos y la desestabilización que buscaban algunos actores. En su conjunto, estos elementos conformaban parte sustancial del cuadro social y político escenificado en la última semana de julio dentro del cual se insertaba la muerte de Juan Bautista Ayala. Por último, cabría conectar este crimen a una cadena más amplia de atentados en contra de aquellos conductores que no se sumaron a la paralización y que decidieron continuar con sus faenas. Tal decisión implicaba quedar a merced no solo de las contramanifestaciones y pugilatos con miembros de su propio gremio, sino también exponerse a acciones de violencia, como las revisadas en este caso, la cuales podían ocurrir en cualquier punto de la vía pública.

Las muertes de los trabajadores Garrido y Ayala no serían las únicas ocurridas en los días finales de julio. En la madrugada del día 27 se produjo el homicidio del edecán naval Arturo Araya Peeters, no obstante sus antecedentes remitían a la noche anterior. En esa ocasión, el presidente Allende junto con su edecán se dirigieron a la Embajada de Cuba donde se celebraría una recepción con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la revolución de 1959. Algunas versiones indican que ya entrada la noche se produjo una fuerte discusión entre el primer mandatario y Araya[768]. Este último habría solicitado permiso para retirarse, por lo que cerca de la medianoche se dirigió a su hogar ubicado en calle Fidel Oteíza en la comuna de Providencia. Cuando ya era pasada la una de la madrugada del 27 de julio, Araya escuchó diversas explosiones en las inmediaciones de su hogar. Alertado por la situación se asomó con cierta cautela al balcón de su dormitorio, no advirtiendo ningún hecho anormal. Sin embargo, a los pocos minutos se sintió otra fuerte explosión por lo que Araya, esta vez premunido de una metralleta, salió de nuevo al balcón. Allí se produjo una confusa situación con disparos que emergieron desde distintas direcciones. Uno de estos proyectiles

[768] Esta versión la entrega Augusto Pinochet en sus memorias, aunque aclara que él se enteró a través de un relato que le hicieron tiempo después de ocurrido el suceso. Véase, Pinochet, *Camino...*, *op. cit.*, tomo I, p. 266. José Díaz Nieva en su estudio sobre Patria y Libertad también refiere el hecho, aunque aclara que ignora si éste fue real o no. Véase Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, p. 286.

impactó de lleno en el cuerpo del oficial, lo que le causaría la muerte horas más tarde en el Hospital Militar[769]. A la mañana siguiente, con un país que despertaba conmocionado por el trágico suceso, el cuerpo del oficial era velado en el Palacio de La Moneda para luego ser trasladado hasta el mausoleo naval en Valparaíso. Alain Touraine anotaba en su diario que la confusión inicial tras este crimen era extrema, pues la derecha y la izquierda comenzarían a realizar investigaciones, explicitando pistas en una y otra dirección y descubriendo o inventando culpables[770].

Las sospechas recayeron casi de inmediato en los grupos de extrema derecha, sobre todo en miembros de Patria y Libertad. Esto derivó en esa dirección ya que era de público conocimiento que en el sector en que vivía Araya este tipo de organizaciones venía ejecutando, desde hacía varias noches, numerosos atentados explosivos y otras operaciones de similar envergadura. Con todo, la prensa opositora no descartó la participación de militantes de izquierda en este homicidio, cuestión que se vería momentáneamente confirmada tras la declaración de José Riquelme Bascuñán, funcionario público y militante, al parecer, del PS[771]. Según su testimonio, había sido contratado por una persona para colocar elementos explosivos en las inmediaciones del hogar del edecán naval de modo de facilitar la acción de un comando integrado por cubanos y militantes socialistas y miristas. Bajo este ángulo, la responsabilidad del crimen recaía en

[769] El certificado de defunción de Araya Peeters anota como causa de muerte una herida a bala toracopulmonar complicada y anemia aguda consecutiva, fijando además su fallecimiento a las 02:05 hrs. de la madrugada. "Certificado de defunción de Arturo Araya Peeters", Santiago, 27 de julio de 1973, n.º de inscripción 1640, registro E1, folio 85003844, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[770] Touraine, *op. cit.*, p.17.

[771] Esta noticia y los testimonios que culpaban a miembros de la izquierda como autores del crimen de Araya se deslizaron a lo largo de varios días en distintas ediciones de periódico como *El Mercurio*, *Tribuna*, *La Segunda* y *La Prensa*. Una excepción dentro de esta óptica lo constituyó el semanario *Ercilla*, que enmarcó el crimen del edecán naval dentro del contexto de agitación y violencia que se venía observando en el país en las últimas semanas. De hecho, este medio indicó que las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas estaban investigando el homicidio a partir precisamente de los elementos antes descritos. Con todo, la nota también refería la detención de Riquelme Bascuñán, hecho que como se vio parecía conectar el crimen de Araya Peeters a grupos de extrema izquierda. Véase, *Ercilla*, n.º 1985, Santiago, 1 al 7 de agosto de 1973, p. 11.

la izquierda, lo que sin duda generaría una gran conmoción a nivel político. Una versión todavía más extrema que la anterior circularía al año siguiente. Según el escritor Lautaro Silva habría sido el propio Allende quien ordenó el asesinato de Araya en el contexto de la reunión —y posterior discusión— acontecida en la embajada cubana la noche del 26 de julio[772].

Tales versiones, como es de suponer, carecían de las pruebas suficientes para acreditar su veracidad. Ya en la primera semana de agosto las autoridades policiales lograron reconstruir gran parte de lo sucedido, procediendo a detener a diversos individuos que, directa o indirectamente, estaban conectados a Patria y Libertad. El exmiembro del GAP, Max Marambio, cuenta que Allende, con quien mantenía todavía una relación de amistad, le pidió colaborar en el esclarecimiento del crimen del edecán naval. A través de diversos informantes e interrogatorios, Marambio y su equipo logró identificar a la mayor parte de los culpables, «todos de familias pudientes», lo que resultaría clave para que fueran escondidos o sacados del país[773]. Trascendió, sin embargo, que el autor material del crimen era un sujeto identificado como René Claverie Bartet. Aunque luego fue condenado por la Justicia Militar, Claverie y otros implicados en el caso apenas alcanzaron a cumplir condena, pues fueron beneficiados, bajo la dictadura, con el indulto presidencial[774]. El dirigente nacionalista, Roberto Thieme, cuenta en sus memorias que poco después del crimen supo que los autores materiales del mismo, entre los que se encontraba Claverie, pertenecían a un grupo descolgado de Patria y Libertad que él mismo había expulsado en 1972 «por ser demasiado exaltados». Según Thieme, el arma utilizada en la operación —un fusil Marcatti correspondiente a una partida ingresada desde Argentina— fue proporcionada a Claverie por el exoficial de la Armada Jorge Ehleres[775].

Como era de esperar, el crimen del edecán generó todo tipo de reacciones dentro de la esfera pública. A mediodía del 27 de julio, en una sesión especial de la Cámara de Diputados, diversos parla-

[772] Lautaro Silva, *Allende el fin de una aventura*, p. 347.
[773] Max Marambio, *Las armas de ayer*, pp. 118-119.
[774] Véase más referencias sobre este y otros aspectos del crimen en Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, pp. 291 y ss.
[775] Thieme, *op. cit.*, p. 121.

mentarios se refirieron a este hecho. El diputado comunista Manuel Cantero, por ejemplo, junto con condenar el crimen de Araya, sostuvo que sus autores pertenecían a un grupo terrorista del cual no se podía dudar de su orientación «fascista». Por su parte, el diputado del PN, Mario Arnello, indicó que le asistía la seguridad de que los asesinos de Araya no habían sido «ni mentes, ni corazones, ni manos chilenas». Tal planteamiento buscaba sin duda desviar el foco de la sospecha desde los grupos nacionalistas hacia elementos extranjeros vinculados a la izquierda, cuestión que, a poco andar, según se vio arriba, pareció verse corroborada con la detención de José Riquelme Bascuñán. El diputado de la DC José Monares aprovechó su intervención para insistir en la necesidad de desarmar a los grupos extremistas que estaban al margen de la ley, tarea que según el parlamentario debía recaer en las Fuerzas Armadas. Desde este ángulo, el crimen del edecán servía para referir temas de contingencia política más amplios, los cuales ya se venían discutiendo en el país. Por último, hizo uso de la palabra el diputado socialista Mario Palestro quien sostuvo que su bancada señalaría claramente a los responsables del crimen y quiénes, además, eran los que estaban empujando al país hacia la guerra civil. Al finalizar su intervención, Palestro fue enfático en sostener que el edecán naval había sido inmolado «por las bandas asesinas de Patria y Libertad»[776].

El Senado, por su parte, realizó un homenaje a la memoria del fallecido oficial el día 7 de agosto. El grueso de las intervenciones, además de condenar el crimen, expresaron diversos juicios respecto al significado de este hecho. Para el senador socialista Jaime Suárez, el oficial naval cayó asesinado por quienes se encontraban embarcados en una empresa antipatriótica y antihistórica. Ramón Silva Ulloa, senador de la Unión Socialista Popular, hizo una particular lectura de los recientes acontecimientos. A su juicio, el enfoque del psiquiatra italiano César Lombroso podía ser útil para entender el momento político que se vivía en Chile. Según este científico, al decir de la referencia que señalaba el parlamentario, la revolución era una expresión de la propia evolución del hombre, y su desarrollo lento y gradual constituía una garantía para su posterior éxito. Por contrapartida, los escenarios de sedición y extremismo obedecían a

[776] Diputados, *Diario de sesiones*, 24.ª sesión, viernes 27 de julio de 1973, pp. 1704-1707.

causas superficiales, en que sus principales agentes eran delincuentes y locos impulsados por una morbosidad distinta a la de los hombres sanos y honrados. Según Silva Ulloa, la definición de Lombroso contenía en alguna medida «la luctuosa tragedia» que consternaba a Chile en esos momentos. Por su parte, la intervención del senador del MAPU, Alberto Jerez, intentó describir el significado profundo que encerraba este hecho. Desde su perspectiva, el asesinato del edecán naval debía transfigurar «por una sola y desgraciada vez» en un holocausto que lograra impulsar a Chile hacia la paz y la justicia. Es decir, a juicio de Jerez, este crimen podía constituir un hito expiatorio que, al margen de su horrorosa ejecución, podría aquietar las aguas de un convulsionado país. La senadora comunista Julieta Campusano, en tanto, sostuvo que el homicidio de Araya respondía a un siniestro plan con el que se buscaba «crear pánico entre los chilenos y evitar el diálogo», insistiendo además en la responsabilidad del fascismo criollo en su ejecución. Al final de la sesión, hizo uso de la palabra el senador nacional Pedro Ibáñez. Este indicó que en el marco de situaciones caóticas y anormales «producidas como consecuencia del quebrantamiento de la autoridad», quienes representaban el orden y la disciplina —es decir, los militares— llegaban a ser blanco de quienes se beneficiarían con la anarquía y el caos. Junto a lo anterior, Ibáñez manifestó su indignación más sentida por la vinculación que se había tratado de establecer entre este crimen y una «institución» que era digna «del mayor respecto», en referencia al Comando Rolando Matus[777].

Desde la prensa escrita también se produjeron diversas reacciones. Para *Punto Final*, por ejemplo, el crimen del edecán naval formaba parte de una operación de mayor envergadura cuyo objetivo era derribar a la UP. En la preparación de esta maniobra, indicaba la revista, se veía la mano de la CIA, además de una participación ordenada de los comandos terroristas de la derecha, de la prensa de oposición, de agentes infiltrados y, por último, de los elementos golpistas al interior de las Fuerzas Armadas[778]. Por su parte, desde el semanario *Chile Hoy*, también se sostuvo que el crimen del edecán escondía como propósito general el derrocamiento del Gobierno,

[777] Senado, *Diario de sesiones,* 54.ª sesión, martes 7 de agosto de 1973, pp. 2237-2251.
[778] *Punto Final*, n.º 190, Santiago, martes 14 de agosto de 1973, p. 26.

cuestión que se pondría en marcha a partir de una intrincada operación de inteligencia en la cual intervendrían distintas personas. Una de las fases de este plan, según se indicaba, consistía en responsabilizar a miembros de la izquierda como autores del homicidio[779].

La muerte de Araya causó, pues, profunda conmoción en el país, abriendo un espacio para que circularan toda clase de teorías sobre sus autores y los propósitos que estaban detrás del crimen. Los partidos políticos y la prensa en general no se abstuvieron de comentar y sacar sus conclusiones al respecto. Desde la izquierda, según se ha visto, se resaltaron dos aspectos esenciales. Por un lado, se buscó responsabilizar a miembros de los grupos de extrema derecha, y en especial a aquellos que pertenecían a Patria y Libertad, como los autores materiales del homicidio. Por otra parte, se insertó este crimen dentro de un plan operativo mayor que tenía como objetivo final la caída del Gobierno. En este sentido, dicho homicidio fue interpretado como un intento por bloquear cualquier salida política a la crisis, pues su ejecución elevaba hasta niveles insospechados el clima de polarización existente condicionando así la disposición de quienes se sentarían a conversar.

También se especuló con la posibilidad de que este crimen fuese entendido como un mensaje implícito hacia las Fuerzas Armadas en el sentido de que el nivel de violencia llegaba a tal extremo, que ni siquiera los uniformados podrían sentirse seguros. De una u otra forma esto podía entenderse como una invitación para que los militares pusieran freno cuanto antes al clima de inseguridad que existía. Desde la oposición, en tanto, se juzgó el crimen como el resultado de la situación anárquica que vivía el país, al tiempo que se acusaba, sobre todo en los primeros días, a la izquierda por su responsabilidad en la muerte del edecán. Con ello se buscaba alejar la sombra de duda que planeaba sobre los grupos de extrema derecha, y aún sobre elementos del PN, como los autores del hecho. Lo que estos planteamientos revelaban era que los crímenes de connotación política difícilmente podían sustraerse de la contingencia y de aquellos discursos estratégicos que referían materias de alcance más estructural.

Cuando todavía resonaban los ecos del homicidio del edecán naval se produjo otra muerte vinculada al clima de violencia existente

[779] *Chile Hoy*, n.º 60, Santiago, semana del 3 al 9 de agosto de 1973, p. 7.

en el país. El hecho ocurrió en la ciudad de San Carlos, localidad del interior de la región del Bío-Bío, el día 29 de julio. Según informó *Las Noticias de Última Hora*, el joven socialista Heriberto Villalobos Fuentes fue asesinado a tiros en la calle Naboteo por un militante de Patria y Libertad, identificado como Manuel Antonio Sepúlveda, alias el Pájaro Loco. En el ataque, continúa el periódico, Sepúlveda dejaría, además de la víctima fatal, dos heridos a causa del uso de su arma de fuego[780]. El periódico local *El Comercio* entregó dos versiones distintas del hecho. En su edición del 31 de julio indicó que el crimen de Villalobos respondía a antiguas disputas entre los involucrados, lo cual no le otorgaba un cariz político al hecho[781]. El día 4 de agosto la versión de *El Comercio* cambió, pues junto con calificar el homicidio de Villalobos como un crimen de carácter político, insertó este hecho dentro de una cadena más amplia de sucesos violentos ocurridos en las últimas semanas en la zona[782]. No obstante estos antecedentes, el caso de Heriberto Villalobos fue poco abordado por la prensa nacional y local, no existiendo mayores detalles respecto a su origen y consecuencias.

Desde una perspectiva más amplia, tanto este crimen como las otras muertes registradas en los últimos días de julio pueden insertarse dentro de un contexto específico que permita comprender algunos lineamientos más generales[783]. Como se recordará, el cuadro social y político se encontraba desde hacía semanas tensionado por diversos factores. A las estrategias de los principales partidos políticos, que en su mayoría acusaban como objetivo central precipitar un desenlace *de facto* a la crisis, se sumaban eventos coyunturales que incremen-

[780] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 30 de julio de 1973, p. 16. El certificado de defunción de Villalobos confirma que su causa de muerte fue por una herida a bala penetrante torácica, además de precisar que el nombre correcto de la víctima era Enzo Villalobos Fuentes. "Certificado de defunción de Enzo Villalobos Fuentes", San Carlos, 29 de julio de 1973, n.º de inscripción 267, folio 85003937, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 16 de junio de 2021].

[781] *El Comercio*, San Carlos, 31 de julio de 1973, p. 1.

[782] *El Comercio*, San Carlos, 4 de agosto de 1973, p. 3.

[783] Algunas informaciones apuntaban la existencia de otro homicidio de connotaciones políticas en julio. Se trataría de Juan Luis Urrutia quien falleció, aparentemente, el día 28 de ese mes en la ciudad de Bulnes, región del Bío-Bío. Sin embargo, esta investigación no ha podido encontrar datos ni informaciones concluyentes al respecto a fin de hacer una indagatoria más pormenorizada del caso.

taban la sensación de enfrentamiento y polarización. Si entre abril y junio, la huelga de los mineros de El Teniente fue uno de los hechos característicos a este respecto, desde fines de julio el protagonismo pasó a ser ocupado por la paralización de los camioneros. Mediando ambos eventos se situó el tanquetazo del 29 de junio cuyos efectos pusieron en primera línea el tema militar como factor que podía inclinar la balanza tanto para reafirmar el proyecto socialista como para acelerar su caída. En su conjunto, se trataba de un contexto de abierta confrontación en que todos los actores del concierto nacional se situaban en posiciones de combate, o al menos buena parte de sus discursos dejaba traslucir la intención de ubicarse en esa perspectiva.

Tal dinámica era, por supuesto, transversal a los distintos niveles de conflictividad existentes en el país. Es decir, no se trataba de discusiones sostenidas solo en el campo institucional, sino que aquellas emergían y se desarrollaban, a veces con un ritmo y carácter propios, en distintos espacios. Si entre los poderes del Estado se vivía una fuerte pugna en términos de la legitimidad del régimen y la legalidad de los actos del Ejecutivo, en el plano social la confrontación estaba articulada en torno a la capacidad por movilizar a las masas para respaldar o repudiar al gobierno. Dicha movilización, como es de suponer, no constituía un ejercicio tendiente solo a organizar marchas y desfiles por el centro de las ciudades, sino que también implicaba la materialización de distintos tipos de acciones. Desde el mundo de los trabajadores, por ejemplo, la movilización social, insertada dentro del cuadro de conflictividad descrito, se entendió muchas veces como una oportunidad propicia para generar la ocupación de los centros fabriles e industriales, desarticulando así las relaciones jerárquicas entre patrones y obreros y fortaleciendo lo que se denominaba como poder popular. Desde un ángulo distinto, los grupos de extrema derecha asimilaban este contexto como el momento para materializar todas aquellas acciones de violencia que significaran crear un clima de desestabilización y desgobierno. El objetivo a corto plazo era abrir la puerta a un golpe militar. Todas estas dinámicas contribuyeron, pues, a extremar una visión del conflicto en curso que ya sobrevolaba en el país. Esta consistió en que la lucha política y social se entendía como una confrontación donde los grupos e individuos eran visualizados como enemigos a los cuales se debía eliminar o desalojar del espacio público.

Sería dentro de este campo de acciones cruzadas y tensión ideológica entre visiones excluyentes donde se situarían muchos de los hechos de violencia política registrados en Chile durante la UP. De hecho, las cuatro muertes registradas en los últimos días de julio respondieron en su mayoría a este tipo de dinámicas, es decir, insertadas dentro de un marco de aguda confrontación que veía a los rivales políticos como elementos que debían ser borrados del espacio público. Descontando la muerte del obrero Manuel Garrido Valenzuela, en que intervino, al parecer, una célula de extrema izquierda cuyos propósitos no quedaron del todo aclarados, en el resto de los casos su intencionalidad subyacente fue la indicada arriba. Así, la muerte de Juan Bautista Ayala, ocurrida a menos de un día de iniciado el paro de los camioneros, parecía ser una clara señal de amedrentamiento en contra de aquellos transportistas que no se sumaron al paro y que, más aún, prestaban su colaboración al Gobierno.

En ese sentido, fueron los grupos de choque de la extrema derecha, y miembros del propio gremio de los camioneros, quienes tomaron en sus manos las tareas de hostigamiento y ataque en contra de los choferes partidarios de la UP. Por su parte la muerte del edecán naval Arturo Araya encerraba, como se vio, múltiples lecturas que iban desde una intención manifiesta por erosionar los acuerdos políticos alcanzados hasta una acción de advertencia para las propias Fuerzas Armadas. Esto último operaba en función de un mensaje implícito que advertía a los militares que ellos también podrían constituirse en víctimas de la violencia y, por ende, ser eliminados del espacio público. Por último, en el caso de Villalobos Fuentes, las informaciones recolectadas permiten deducir que su muerte respondía a patrones de violencia más o menos reconocibles a esa altura en el país, es decir, un homicidio producido en el marco de una confrontación pública entre grupos o individuos de corrientes políticas rivales. En este caso, el ataque a balazos habría provenido desde un militante de Patria y Libertad que consideró legítimo acabar con la vida de una persona dentro de la lucha abierta que se vivía en esos momentos.

En tránsito hacia agosto. El proyecto socialista está derrotado

A pesar del impacto que causaban los hechos de violencia en el escenario público, todavía quedaban algunas instancias cuyo propósito

fundamental era buscar una salida consensuada a la crisis. Este fue el caso de las conversaciones que sostuvieron el presidente Allende con la directiva de la DC iniciadas a fines de julio. El antecedente directo que permitió concretar esta instancia se encontraba en las palabras pronunciadas por el cardenal Raúl Silva Henríquez quien, a mediados de ese mes, exhortó a los actores políticos a conversar y buscar un acuerdo en distintas materias[784]. Así, y bajo el llamado que hacía la Iglesia católica, el primer mandatario convocó a la directiva democratacristiana a iniciar un diálogo el día 30 de julio. Esta colectividad respondería de forma positiva a la convocatoria, aunque enfatizando en que existían una serie de condiciones que deberían cumplirse para que esta iniciativa llegara a buen puerto. El presidente del partido, Patricio Aylwin, recuerda que la decisión de asistir al encuentro se hizo aún con la resistencia de la mayor parte de las bases, las cuales desconfiaban de las verdaderas intenciones del Gobierno. En medio de una álgida asamblea, el dirigente democratacristiano debió extremar su capacidad persuasiva, llegando a sostener que mientras hubiera una posibilidad —entre miles— de «salvar la democracia», el deber de la directiva era intentarlo[785].

Sin embargo, el propósito central de esta colectividad era desarticular la estructura del gobierno de la UP, poniendo como condición irrenunciable para el éxito del diálogo que las Fuerzas Armadas asumieran un rol preponderante en la conducción administrativa y política del país. Ello implicaba, como ha señalado Luis Corvalán Marquéz, cambiar la fisonomía fundamental del Ejecutivo, desplazando las fuerzas sociales que estaban detrás del Gobierno[786]. Ante este panorama, Allende optó por promover la creación de una serie de comisiones que, bajo el marco de ciertos acuerdos, permitieran avanzar en algunas modificaciones. La DC, considerando que la propuesta presidencial encubría una maniobra «meramente dila-

[784] La intimidad de las conversaciones que llevaron a cabo Allende y la DC se pueden seguir a través de las memorias del cardenal arzobispo de Santiago. La autoridad eclesiástica detalla numerosos aspectos de estas reuniones, revelando además que ya desde el mes de mayo el primer mandatario le había llamado para conversar en privado, buscando de este modo «aproximarse a la DC». Raúl Silva Henríquez, *Memorias*, pp. 470-494.

[785] Aylwin, *op. cit.*, p. 26.

[786] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 373.

toria», puso término a las conversaciones en los primeros días de agosto. Un segundo intento por alcanzar un acuerdo se escenificó, también a instancias del cardenal Silva Henríquez, a mediados de este mes luego de una cena privada entre Aylwin y Allende. Aunque asomaron algunos puntos de acuerdo, la negociación más técnica se llevaría a cabo entre el presidente del partido y el ministro del Interior, Carlos Briones, no logrando ningún acuerdo sustantivo que pudiera materializarse[787]. De este modo, quedaban cerrados los caminos a un entendimiento mayor que permitiera institucionalizar el conflicto social y político y alejar así la posibilidad de un enfrentamiento fratricida o un golpe militar.

A lo largo de las últimas semanas de julio e inicios de agosto, los hilos de tensión que sacudían al país se extremaban en la dirección de una salida extrainstitucional. La posibilidad de encontrar un camino consensuado entre el gobierno y una parte de la oposición se había cerrado de forma completa tras el fracaso de las negociaciones entre la DC y la UP. Resultaba evidente, en este sentido, que cualquier negociación futura entre estos actores contaría con las condicionantes que los democratacristianos habían impuesto la vez anterior, las cuales, como se vio, no eran sencillas de cumplir para el primer mandatario. Lo que el fracaso de estas conversaciones revelaba, en el fondo, era la existencia nítida de un conflicto entre los poderes del Estado, el cual golpeaba con particular dureza al Ejecutivo. Visto desde este ángulo, lo institucional reflejaba tanto la pugna interna entre los poderes como su incapacidad por articular allí una salida solvente a la crisis.

Si el espacio formal de la política chilena no brindaba la oportunidad de viabilizar un acuerdo, el plano social tampoco daba garantías suficientes para descomprimir el cuadro de polarización. Las movilizaciones de los distintos actores mostraban cierto equilibrio en la capacidad de convocatoria y acción en las calles, a lo que se sumaban los grupos de choque de uno u otro bloque que adscribían a la idea de estar inmersos en un enfrentamiento sin punto de retorno. Si la solución a la crisis pasaba por una demostración de fuerza en el plano social, tanto el gobierno como la oposición disponían de contingentes suficientes para afrontar ese desafío y confrontar así a su contraparte.

[787] Aylwin, *op. cit.*, p. 27.

Las Fuerzas Armadas, en tanto, atravesaban procesos de polarización y reestructuración interna que estaban articulados, sin duda, en torno al momento político que se vivía. Tal situación las posicionaba dentro de un cuadro de máxima tensión que demandaba, desde un sector, la consolidación de su espíritu profesional, pero desde otro ángulo se les impulsaba a involucrarse en el conflicto. Aunque no se trataba de discusiones nuevas dentro del gobierno de la UP, este tipo de asuntos había recobrado su fuerza tras el tanquetazo del 29 de junio, sobre todo para aquellos sectores que buscaban cancelar el proyecto popular. Esta temática, en efecto, cobrará mayor importancia conforme algunas coyunturas vayan posicionando a estas instituciones en la primera plana de la contingencia nacional. Así, las FF.AA. constituirían para algunos actores un factor clave para cambiar el curso de los acontecimientos en una u otra dirección.

Visto en su conjunto, la vía chilena al socialismo atravesaba por una circunstancia en extremo compleja, donde su viabilidad no era problemática solo al interior del aparato del Estado, sino también en la base social. Asimismo, algunos observadores veían con preocupación que los militares colgaban como una espada de Damocles sobre el proyecto de la UP, resultando posible que cualquier coyuntura hiciera caer su pesado filo sobre la izquierda.

En este contexto, los hechos de violencia jugarían de nuevo un rol central en la intensificación y consolidación de este cuadro de tensión. Lo que a simple vista se observaba en estas semanas era una espiral densa de acontecimientos que dejarían, ya en el transcurso de agosto, varios muertos y un número altísimo de atentados y enfrentamientos de distinta naturaleza. Con ello, se acrecentaba la sensación de caos y desgobierno que para algunos actores resultaba tan importante materializar.

El día 4 de agosto sucedió un hecho que se insertaría precisamente dentro de las coordenadas descritas. En esa jornada, se llevó a cabo un allanamiento por parte de miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la industria Lanera Austral ubicada en la ciudad de Punta Arenas. El operativo dejaría como saldo varias personas heridas y un obrero muerto identificado como Manuel González Bustamante. En la prensa de oposición predominó una interpretación que responsabilizaba a la víctima por el origen de los hechos, cuestión que además fue coincidente con la versión que entregase la

unidad militar a cargo del operativo. Según indica el periódico de la ciudad de Osorno, *La Prensa*, González no habría acatado la orden de detenerse que los militares hicieron cuando ingresaron a la fábrica, por lo que estos procedieron a disparar impactando al obrero[788]. *El Mercurio* coincidió con esta versión al señalar que el trabajador no obedeció las instrucciones realizadas por el personal militar cuando se allanaba la fábrica[789].

La FACh, por su parte, emitiría un comunicado a través del cual entregaría mayores antecedentes de lo ocurrido. Según el documento, el allanamiento a la industria textil se realizó siguiendo una orden emanada desde el Tribunal Militar, cuyo objetivo era corroborar la existencia de armas en dicho lugar. En la concreción de esta operación, indica la FACh, los militares advirtieron a «viva voz» a los trabajadores para que se retiraran del lugar, cuestión que fue obedecida por la mayoría de ellos. Sin embargo, algunos trabajadores se dieron a la fuga y comenzaron a correr por los pasillos de la industria. La orden de «alto», continúa el documento, fue dada de inmediato a quienes escapaban del lugar, siendo Manuel González Bustamante, el único que no la acató. Frente a ello, sentencia el comunicado, personal militar le disparó «a las piernas» siendo impactado en el glúteo, lo que luego provocó su fallecimiento[790]. Esta versión, sin embargo, no es coincidente con lo que muestra el certificado de defunción de la víctima que anota como causa de muerte una anemia aguda y síndrome tóxico hemoperitoneo por una herida a bala en el abdomen[791].

En la prensa de izquierda, junto con denunciar y condenar lo ocurrido, se insertó este hecho dentro de algunas coordenadas de mayor alcance. Para *Punto Final*, por ejemplo, lo sucedido en Punta Arenas se conectaba a una cadena de hechos de similar tenor ocurridos en las últimas semanas en donde personal militar había actuado con extrema violencia al allanar algunos recintos industriales. El

788 *La Prensa*, Osorno, 7 de agosto de 1973, p. 1.

789 *El Mercurio*, Santiago, 6 de agosto de 1973, p. 23.

790 Comunicado público de la Fuerza Aérea de Chile, publicado en *El Mercurio*, Santiago, 6 de agosto de 1973, p. 23.

791 "Certificado de defunción de Manuel González Bustamante", Punta Arenas, 5 de agosto de 1973, n.º de inscripción 318, folio 17957126, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].

marco de fondo de este tipo de operaciones y, por ende, el factor que legitimaba su materialización era, según la publicación, la puesta en marcha de la Ley de Control de Armas aprobada el año anterior en el Congreso. Dicho cuerpo legal, a juicio de *Punto Final*, se había transformado en una nueva Ley Maldita —en alusión a la norma de 1948—, convirtiendo a los cuerpos militares en organismos represivos de las fuerzas sociales de izquierda. Además, la revista sostuvo que este tipo de acciones tenía como único objetivo proteger a una minoría «sedienta de venganza»[792].

El semanario obrero *La Aurora de Chile* se expresó en un tono similar al anterior al sostener que Manuel González fue asesinado bajo el imperio de la Ley Maldita. Del mismo modo, esta publicación indicaba que los trabajadores estaban conscientes de que este tipo de acciones formaban parte de una escalada nacional de violencia llevada a cabo por la oposición, por lo que pedían la inmediata derogación de dicha ley y la aplicación de medidas más drásticas en contra de este sector[793]. *Tarea Urgente*, otra publicación del ámbito de los trabajadores y vinculada, en específico, a los cordones industriales de la capital, refirió la noticia en términos similares a los ya vistos. Es decir, se insertaba la muerte del obrero puntarenense dentro de una larga cadena de hechos represivos protagonizados por las Fuerzas Armadas, las cuales habían sido arrastradas, según este medio, por sectores de la reacción hacia posiciones antiobreras y golpistas[794].

Los argumentos de la prensa de izquierda buscaron homologar, pues, los allanamientos efectuados por las Fuerzas Armadas, y los hechos de violencia derivados de ellos, a contextos represivos del pasado reciente del país. En particular, este ejercicio operó en relación a la denominada Ley Maldita que a fines de los años cuarenta proscribió al PC y desató una ola de persecuciones en contra de sus militantes y cuadros dirigentes. Lo que se buscaba explicitar con este tipo de observaciones eran dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que las prácticas de represión estatal mantenían una sintomática vigencia en el país, aun cuando el gobierno de la UP se había esforzado por restringir este tipo de dinámicas. Por otro lado,

792 *Punto Final*, n.º 190, Santiago, martes 14 de agosto de 1973, p. 1.
793 *La Aurora de Chile*, n.º 36, Santiago, 16 de agosto de 1973, p. 6.
794 *Tarea Urgente*, n.º 12, Santiago, viernes 10 de agosto de 1973, p. 3.

se explicitaba también que la violencia estatal constituía un problema que todavía no era resuelto de forma consistente. Por tal razón, crecía la sensación dentro de la izquierda chilena de estar a merced de las fuerzas reaccionarias y sectores golpistas que podían influir en los institutos armados para así materializar una represión abierta y sistemática en contra de los trabajadores que apoyaban al gobierno.

El conjunto de estas problemáticas, así como los elementos que rodearon la muerte del obrero textil en Punta Arenas, también fueron abordados por las organizaciones de izquierda. Para el secretario general del MAPU, Óscar Guillermo Garretón, el homicidio de González respondía a una consecuencia directa de las vacilaciones y debilidades de la UP para confrontar a los sectores reaccionarios. Según el dirigente, ni la «victoria» en los comicios parlamentarios de marzo ni la fuerza política de las masas que se originó tras el tanquetazo fue correspondida por el Gobierno, abriéndose un periodo más bien de retroceso que de avance. En ese marco, sentenciaba Garretón, se había desatado una aplicación estricta de la Ley de Control de Armas en contra de diversas empresas y organizaciones sindicales con los resultados ya conocidos[795]. El MIR, por su parte, sostuvo que los altos mandos «reaccionarios» de las Fuerzas Armadas utilizaban la Ley de Control de Armas con el único objetivo de amedrentar a los trabajadores, llegándose a un punto límite con la operación militar en Punta Arenas. A juicio de este movimiento, los «abusos y excesos» de algunos oficiales eran representativos de lo que se conocía como «gorilaje», situación que ni la izquierda ni el presidente Allende podían seguir tolerando. En virtud de lo anterior, el MIR exigía la derogación inmediata de dicha ley y la destitución del general Manuel Torres de la Cruz quien estuvo a cargo del operativo efectuado en el sur del país[796].

En el Congreso Nacional también hubo reacciones por la muerte del obrero puntarenense. En la sesión de la cámara baja del 7 de agosto, el diputado democratacristiano Sergio Saavedra fustigó la declaración que el día anterior había hecho la brigada parlamentaria

[795] "Oscar Guillermo Garretón: discurso radial", 4 de agosto de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, p. 4899.

[796] "El MIR denuncia: Todo el que dispara contra el pueblo es y será un asesino y será marcado por el pueblo", 6 de agosto de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4924-4926.

socialista, que criticaba en duros términos al general Torres de la Cruz. Al mismo tiempo, el parlamentario respaldó la Ley de Control de Armas porque a su juicio, a pesar de las dificultades que implicaba, ella era un instrumento básico para favorecer la «convivencia» en el país. En una óptica similar, es decir respaldando al oficial de Ejército, se expresó el parlamentario del PN, Jorge Godoy Matte. Luego intervino el diputado socialista Arturo Pérez, quien sostuvo que la muerte del obrero se debió a la actitud excesiva que habían tenido «algunos» miembros de las FF.AA. en el cumplimiento de la ley. En este sentido, Pérez también indicó que mientras se actuaba con celo en contra de los trabajadores, no se había hecho ninguna diligencia útil para encontrar las armas que estaban en poder de los grupos sediciosos. Tampoco se habían extremado las medidas, sentenció Pérez, para encontrar las ametralladoras robadas del Regimiento Blindado n.º 2 en el contexto del tanquetazo del 29 de junio[797]. Este mismo tema fue destacado por el comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, en la reunión que sostuvo con el cuerpo de generales el día 8 de agosto. En dicha instancia, el alto oficial expresaría que hasta ese momento solo se había actuado en contra de los partidarios del Gobierno, no desarrollándose todavía ningún operativo contra los «refugios» de Patria y Libertad, movimiento que se había declarado abiertamente por la lucha armada en contra de la izquierda. De igual forma, el oficial solicitó que en los futuros operativos debía evitarse todo comportamiento innecesario, cautelando que los mandos subalternos no se extralimitaran en sus facultades. De lo contrario, sentenciaba Prats, se desprestigiaría la vigencia de la Ley de Control de Armas[798].

A partir de los discursos que circularon en torno a la muerte del obrero textil, y en particular de aquellos provenientes desde la izquierda, asomaban dos cuestiones interesantes. La primera de ellas consistía en que el crimen no representaba en ningún caso un hecho marginal dentro del espacio público, sino que, por el contrario, aquel se conectaba a coyunturas de distinta naturaleza. Por de pronto esta muerte estaba vinculada a situaciones en que las FF.AA. actuaron con

[797] Diputados, *Diario de sesiones*, 29.ª sesión, martes 7 de agosto de 1973, pp. 1977-1985.

[798] Prats, *op. cit.*, p. 457.

inusitada violencia, advirtiéndose además que eran solo los trabajadores quienes estaban en la mira de los procedimientos militares. Como era de esperar, el marco legal que amparaba este tipo de prácticas fue sometido a toda clase de imprecaciones por parte de la izquierda en virtud de que sus disposiciones se prestaban, justamente, para reprimir a los trabajadores. De allí que la Ley de Control de Armas fuese homologada, como ya se indicó, a la denominada Ley Maldita de 1948 que proscribió y persiguió al PC. El punto central de esta comparación radicaba, pues, en que dicha legislación amparaba *de jure* una violencia histórica en contra de los trabajadores[799].

La segunda cuestión que asomaba en los discursos de la izquierda radicó en que a la hora de endosar responsabilidades por las muertes ocurridas no se hizo una condena del conjunto de los cuerpos militares. Esto, sin duda, resultaba relevante porque en un sector no menor de la izquierda chilena, que incluía al propio Salvador Allende, existía el convencimiento de que un segmento importante de las FF.AA. respaldaba con lealtad al gobierno de la UP. Por eso resultaba imprescindible separar y aislar a los elementos golpistas —o que adhirieran a una política represiva hacia los trabajadores— de aquellos que constituían la vertiente constitucional dentro del mundo castrense. Si se producía un nuevo intento de golpe de Estado, al menos algunas unidades militares pertenecientes a este sector defenderían al gobierno, como ya había ocurrido en el marco del tanquetazo a fines de junio. Por tal razón, buena parte de las declaraciones que emanaron desde la izquierda distinguían a los uniformados constitucionales de aquellos que se habían involucrado en sublevaciones u operativos represivos.

Dentro de este marco analítico orbitaba otro tópico importante para algunos miembros de la izquierda, según el cual la suboficialidad y soldados en general no debían obedecer las órdenes del alto mando que implicaran derrocar al gobierno o reprimir a los trabajadores. Tal

[799] Con todo, había algunos actores que defendían ardientemente este tipo de legislación, indicando su pertinencia para salvar ahora a Chile del comunismo. En una entrevista concedida a fines de junio, el expresidente Gabriel González Videla, bajo cuyo mandato se dictó la denominada Ley Maldita de 1948, expuso sin tapujos que era partidario de una «nueva ley [de defensa de la democracia] y de una nueva Pisagua», en alusión al campo de concentración dispuesto para recluir a los militantes comunistas detenidos. *Ercilla*, n.º 1979, Santiago, 20 al 26 de junio de 1973, p. 13.

perspectiva fue la base, en efecto, de una espesa polémica entre los sectores más radicalizados del oficialismo y algunos miembros de las FF.AA. en virtud de las consecuencias que de él se desprendían. Bajo la óptica militar, este tipo de planteamientos no solo significaba que el mundo civil se inmiscuyera en asuntos propios de las instituciones uniformadas, sino que además podía contribuir a la distorsión de la jerarquía y disciplina dentro de los cuarteles. Todo ello significaba poner en tela de juicio uno de los componentes esenciales en la cosmovisión y organización de los cuerpos militares.

Pero lejos de desaparecer, este tipo de temáticas continuaría discutiéndose a propósito de una situación conocida en los primeros días de agosto. En esa fecha, comenzaron a circular las primeras informaciones respecto a lo que la Armada denominó como un intento de «sublevación» al interior de sus filas. En la declaración oficial que esta institución hiciera el día 7, se indicó que los servicios de inteligencia habían detectado en las últimas semanas la gestación de un «movimiento subversivo» en algunos buques, el cual era apoyado por elementos «extremistas» ajenos a la institución. En virtud de ello, indicaba el documento, se procedió a la inmediata apertura de un sumario interno que permitió identificar y detener a varios de los tripulantes involucrados. Al finalizar, la declaración expresaba que este tipo de hechos era una consecuencia «evidente» de la campaña perniciosa que habían llevado a cabo algunos grupos extremistas alentando la desobediencia de la tropa respecto a los mandos superiores. En base a lo anterior, el escrito sentenciaba que la Armada sería «inflexible» en la sanción a los responsables de dicha maniobra[800].

Cuando el proceso interno cayó en manos del almirante José Toribio Merino y otros fiscales de la misma línea que la de este oficial, no quedaron dudas de la dureza con que se sustanciaría la causa. Como se recordará, Merino fue una figura clave en la organización de los oficiales golpistas dentro de la Armada, llegando a ser luego miembro de la Junta Militar de Gobierno. En sus declaraciones y apariciones públicas, este almirante combinaba sin disimulo una faceta a veces culta con toques de la más absoluta vanidad y arrogancia. En su libro de memorias, Merino recuerda que el caso fue de singu-

[800] "Armada detectó movimiento subversivo en dos unidades", *El Mercurio*, 8 de agosto de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 771.

lar importancia para el país, pues desde un comienzo aparecieron como «instigadores» el senador Carlos Altamirano, el diputado Óscar Guillermo Garretón y el líder del MIR, Miguel Enríquez. A juicio del oficial, la maniobra preparada por estos dirigentes tenía como objetivo central «destruir la disciplina institucional». Según Merino, los dirigentes antes señalados habían logrado penetrar la institución y establecer contacto con un sargento de apellido Cárdenas, quién fue «suficientemente hábil» como para convencer a otros tripulantes de llevar a cabo una sublevación. El día 5 de agosto, continúa el almirante, y gracias a los trabajos de la inteligencia naval, se puso término a esta intentona al detenerse a los implicados, los cuales fueron trasladados en su mayoría al cuartel Silva Palma de la ciudad de Valparaíso[801]. Como es de suponer, el oficial descartó de plano que los detenidos fueran maltratados[802].

Sin embargo, los marinos involucrados en esta situación enviaron a los pocos días una carta al presidente Allende dando a conocer su versión de los hechos. En la misiva, los uniformados negaron haber sido instigados por los dirigentes de izquierda señalados por la Armada, indicando, en cambio, que fueron ellos quienes acudieron a distintas personalidades para dar cuenta de los planes que se tejían al interior de la institución en contra del Gobierno. Además, los marineros acusaban a algunos oficiales de practicarles cruentas torturas, como asfixia, colgamientos, aplicación de corriente y golpes con distintos implementos tras haber sido detenidos. La carta señalaba, en su parte final, que toda esta situación se originó porque ellos tomaron conocimiento de los planes golpistas que se elaboraban en las altas esferas de la Armada, por lo que su detención, incomu-

[801] José Toribio Merino, *Bitácora de un Almirante. Memorias*, pp. 209-210. Este texto debe ser leído con mucha precaución pues refiere numerosos episodios ocurridos en ese periodo que presentan una dudosa veracidad, sobre todo al no estar contrastados con fuentes ni otros testigos. Como se puede advertir, se trata de una visión extremadamente crítica de los años de la UP y defensora del papel jugado por las Fuerzas Armadas tras el 11 de septiembre de 1973.

[802] Una versión similar entrega el almirante Ismael Huerta a través de sus memorias. En ellas, el alto oficial reafirma que los detenidos habían sostenido reuniones periódicas a las que asistían los parlamentarios Carlos Altamirano, Óscar Guillermo Garretón y Miguel Enríquez «de quienes recibían instrucciones». Respecto a las denuncias por torturas, Huerta indica que lo publicado en la prensa incurría en «tales falsedades» que resultaba lícito pensar que lo descrito era fruto de la «imaginación del periodista». Huerta Díaz, *op. cit.*, tomo 2, pp. 70 y 72.

nicación y torturas era una forma de amedrentarlos y acallarlos. El documento llevaba la firma de 33 uniformados, entre marineros, cabos y sargentos[803].

A finales de agosto, las denuncias sobre torturas en contra de estos marineros fueron reafirmadas a través del semanario *Chile Hoy* que consignó el testimonio de Regina Muñoz, esposa del sargento Juan Cárdenas, y Pedro Enríquez Barra, abogado de varios de los detenidos. Al comentar el estado de salud de su marido, Muñoz indicó que este se encontraba moralmente destrozado pues había sido flagelado «hasta lo más íntimo». Enríquez Barra, en tanto, fue categórico al señalar que los marinos habían sido sometidos a «bárbaras e ignominiosas torturas», las cuales fueron descritas en detalle a través de un testimonio elaborado por ocho de los detenidos y que el abogado citó en extenso a lo largo de la entrevista[804]. En su edición siguiente, este semanario incluiría los testimonios del sargento Juan Cárdenas y del cabo Pedro Lagos, quienes reafirmaron con numerosos ejemplos las torturas a que habían sido sometidos. Cárdenas recordaría, por ejemplo, que debido a los estremecimientos que le producía la corriente eléctrica terminó por zafarse su brazo izquierdo, mientras que Lagos revelaría los constantes golpes y humillaciones por las que tuvieron que atravesar[805]. Por último, la completísima investigación del historiador Jorge Magasich, quien entrevistó a muchos de los involucrados en el tema, también refiere las crueles sesiones de tortura a que fueron sometidos los marinos antigolpistas[806].

El conflicto era, sin duda, controvertido porque implicaba no solo un problema al interior de las filas navales, sino porque además sus aristas se extendían hacia algunos importantes dirigentes de la izquierda. Y el tema en su conjunto dejaba abierta una dura polémica con acusaciones cruzadas que iban desde la incitación a la sublevación hasta la preparación de un golpe de Estado por parte

[803] "Carta de los marineros torturados a Salvador Allende", agosto de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4908-4910.

[804] *Chile Hoy*, n.º 63, Santiago, 24 al 30 de agosto de 1973, pp. 17 y 32.

[805] *Chile Hoy*, n.º 64, Santiago, 31 de agosto al 6 de septiembre de 1973, pp. 6 y 7.

[806] Jorge Magasich, *Los que dijeron "No". Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973*, pp. 119-121. En esta parte del libro, Magasich describe específicamente las torturas a que fue sometido Juan Cárdenas, quien sería flagelado y golpeado en reiteradas ocasiones, sobre todo en los genitales, además de ser colgado en una cruz con forma de x y otros tormentos similares.

de la oficialidad. Como era de prever, los dirigentes de la izquierda negaron cualquier tipo de participación en una maniobra de este tipo, aunque sí reconocieron haberse reunido con los marinos que denunciaban el complot golpista. El senador y secretario general del PS, Carlos Altamirano, recuerda que a los pocos días comentaría con el propio presidente Allende la reunión que había tenido con los marinos el día 3 de agosto al anochecer, y a la cual también había asistido el secretario general del MAPU Óscar Guillermo Garretón. Según Altamirano, el primer mandatario apenas lo escuchó, señalándole luego que ellos únicamente tenían la palabra de un sargento y de unos marinos versus la versión de cuatro almirantes que sin duda dirían que las acusaciones eran falsas[807]. Pocos días antes del golpe militar, Altamirano reconocería —en su ya famoso discurso del 9 de septiembre— haberse reunido con el grupo de marinos. Sin embargo, y como se lo hizo saber a Patricia Politzer, en dicho encuentro se mostró bastante escéptico respecto a la posibilidad de que un número menor de marinos pudiera bloquear la maniobra golpista que se preparaba en las altas esferas de la Armada[808].

Desde el MIR se denunció que el único delito de los marineros fue resistir y desobedecer las órdenes del alto mando que buscaban derrocar al Gobierno. Al mismo tiempo se indicaba que numerosos oficiales de distintas ramas militares, entre los cuales se encontraban «naturalmente» los de la Armada, estaban actuando en coordinación con grupos de extrema derecha para llevar a cabo atentados explosivos en los próximos días[809]. En virtud de estos elementos y la dinámica propia que alcanzaba el conflicto político en el país, este problema se arrastraría a lo largo de las semanas siguientes discutiéndose sobre él incluso en los días previos al golpe de Estado, fecha en la cual se debía resolver el desafuero de los parlamentarios Altamirano y Garretón.

Como se podrá advertir, el tema de la Armada iba más allá de la denuncia formal efectuada por los marineros. En efecto, este tópico

[807] Gabriel Salazar, *Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas*, p. 290.

[808] Patricia Politzer, *Altamirano*, pp. 133-140. En este mismo texto se incluye una versión parcial del discurso pronunciado por el exsenador en que reconoce el contacto con los marinos antigolpistas, dando lectura, de hecho, a la carta que este grupo de uniformados había enviado al presidente Allende.

[809] "MIR: Contra las persecuciones en la Armada", 12 de agosto de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 4971-4972.

se vinculó muy pronto con elementos de tensión más amplios que orbitaban por aquellos días y que tenían que ver tanto con el rol de las Fuerzas Armadas dentro la coyuntura política, como con los hechos de violencia existentes. Dentro de este último ámbito, los atentados terroristas ocupaban desde hacía semanas un espacio destacado dentro de la discusión pública. Y no solo porque su materialización significara acrecentar los niveles de inseguridad, sino también porque existía la convicción, en ciertos actores, de que en algún nivel de la cadena de ejecución de estos actos intervenían miembros de las Fuerzas Armadas. El tema, por cierto, era sensible para Allende quien confiaba —quizás ciegamente— en el comportamiento patriótico y constitucional de los militares. Prueba de ello fue que, en la conformación de un nuevo equipo ministerial, el día 9 de agosto, el primer mandatario nombró a los tres comandantes en jefe en distintas secretarías, señalando que se trataba de un gabinete de «seguridad nacional», cuya misión fundamental era impedir que Chile se viera azotado por una guerra civil[810].

En su dinámica interna, los atentados terroristas y hechos de violencia en general alcanzaron cuotas importantes de periodicidad a lo largo del mes de agosto. En una sesión celebrada el día 8 en la Cámara Alta, el senador comunista Alejandro Toro refirió un completo informe respecto a este tipo de hechos. Según los antecedentes que aportó el parlamentario, entre el 2 y el 5 de agosto se habían producido seis atentados relacionados al paro de los transportistas en distintos puntos del país, al tiempo que entre el 23 de julio y el 2 de agosto se registraron 15 atentados a estaciones bencineras. Entre el 3 y el 5 de agosto, según los antecedentes del parlamentario, se produjeron más de 26 atentados de diversa naturaleza, predominando los de carácter incendiario y explosivos[811]. En esta última categoría se insertaban los ataques en contra de los domicilios particulares

[810] "Jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros juraron en el nuevo gabinete", *La Tercera*, 14 de agosto de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 778. El general Carlos Prats asumió la cartera de Defensa, mientras que el almirante Raúl Montero lo hizo en Hacienda. Por su parte, el comandante en jefe de la FACh, César Ruiz, se hizo cargo de la secretaría de Obras Públicas y Transportes. También fue llamado al gabinete el director general de Carabineros, José Sepúlveda Galindo, quien asumió la cartera Tierras y Colonización.

[811] Senado, *Diario de sesiones,* 56.ª sesión, miércoles 8 de agosto de 1973, pp. 2371-2374.

del diputado comunista Vladimir Chávez, del dirigente socialista de Temuco Armando Jobet y de Octavio Flores en Talca, quien era padre del ministro de Hacienda Fernando Flores[812]. Pero el caso que más repercutió en la opinión pública por esos días fue el atentado explosivo del 7 de agosto en contra del oleoducto de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que transportaba combustible desde Talcahuano a la zona poniente de la capital. La detonación se produjo en horas de la madrugada en las cercanías de Curicó, en el asentamiento rural La Esperanza, dejando como saldo nueve personas heridas de gravedad al ser alcanzadas por el fuego[813]. Dos de ellas, Celsa Fuentes Aliste y Toribio Núñez Fuentes, morirían al cabo de unos días producto de la intensidad de las quemaduras[814]. Los atentados también alcanzaron, en la primera quincena de agosto, a las líneas de transmisión eléctricas. El día 13 de ese mes, en momentos en que el presidente Allende se dirigía al país mediante una cadena de radioemisoras, una fuerte explosión derribó varias antenas de alta tensión dejando sin suministro de corriente a la zona comprendida entre La Serena y Rancagua[815].

Dentro de este marco se insertaron también los enfrentamientos y altercados callejeros entre grupos rivales. En la mayoría de los casos, estos hechos terminaban con heridos de diversa consideración, sobre todo por la acción de armas de fuego o golpes con elementos contundentes. La prensa nacional de estos días aporta algunas situaciones representativas. Así por ejemplo, el 4 de agosto, según informa *El Siglo*, los militantes comunistas Sara Seguel Arévalo y Francisco Carreño Mercado fueron heridos a bala en las inmediaciones de la

[812] Salazar, M., *op. cit.*, p. 343.

[813] *El Mercurio*, Santiago, 8 de agosto de 1973, pp. 1 y 8. La recopilación de Manuel Salazar refiere que este atentado dejó 14 heridos graves, tres casas destruidas y más 500 mil litros de bencina perdidos. Véase Salazar, M., *op. cit.*, p. 343.

[814] Toribio Núñez Fuentes fallecería el 8 de agosto a causa, según consigna un medio, de las graves quemaduras sufridas. Véase *El Siglo*, Santiago, 9 de agosto de 1973, p. 5. La muerte de Celsa Fuentes Aliste se produjo el día 12 de agosto. Su certificado de defunción anota como causa de su fallecimiento un conjunto de extensas quemaduras cutáneas de tercer grado que comprometían cara, cuello y abdomen. "Certificado de defunción de Celsa Fuentes Aliste", Santiago, 12 de agosto de 1973, n.º de inscripción 738, folio 17836052, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 13 de julio de 2016].

[815] Salazar, M., *op. cit.*, p. 347.

Universidad de Concepción en un confuso incidente mientras pegaban propaganda política[816]. Por su parte el vespertino *La Segunda* informaba que el día 21 de este mes, el secretario regional del PN de la ciudad de Arica, Fernando Acevedo Jorquera quedó con múltiples heridas corporales tras ser apaleado también por desconocidos[817]. En esa misma jornada, *La Tercera* informaba del caso de Raúl Valderrama Valderrama quien fue herido a bala en la sede del Sindicato de Dueños de Camiones de Curicó por desconocidos que se dieron a la fuga[818].

Los análisis de la izquierda ante este crudo panorama se expresaban a través de dos ideas fuerza. La primera de ellas consistía en endosar la responsabilidad de los atentados y hechos de violencia en general a la oposición y sus grupos de choque, los cuales tenían como objetivo, según se dijo en reiteradas ocasiones, crear un clima de anormalidad que abriera la puerta a un golpe de Estado. Dentro de este marco se insertaban un conjunto amplio y heterogéneo acciones que iban desde las paralizaciones gremiales hasta los atentados explosivos. Aunque estos hechos se ubicaban en distintos espacios de materialización, la «localidad» que trasuntaban algunos de ellos lograba articularse sin problemas a tendencias y objetivos más globales. Por tal razón, la izquierda comprendió muy rápido que tanto el atentado explosivo a un domicilio particular —que podía ocurrir en una ciudad alejada de los grandes centros urbanos— como el paro gremial de los transportistas —que abarcaba grandes espacios de la zona centro y sur— albergaban un propósito común en contra del proyecto de la UP. De allí que no fuera posible entender ambos sucesos como elementos inconexos o separados entre sí.

La segunda idea importante referida por la izquierda consistió en señalar que este periodo constituía, quizás como ningún otro, un momento crítico para la supervivencia de la vía chilena al socialismo. Se trataba, según se indicó, de horas decisivas para el proyecto popular, el cual se encontraba cercado por la sombra amenazante de un golpe de Estado en virtud del clima de polarización y violencia que vivía el país. El problema que se presentaba frente a este diag-

816 *El Siglo*, Santiago, 4 de agosto de 1973, p. 3.
817 *La Segunda*, Santiago, 21 de agosto de 1973, p. 4.
818 *La Tercera*, Santiago, 23 de agosto de 1973, p. 6.

nóstico radicaba en que las vías de solución política para revertir dicho cuadro aparecían totalmente bloqueadas, situación que se acrecentaba todavía más en función de la división estratégica que sacudía a la izquierda. Esto significaba que a pesar de compartir un diagnóstico más o menos común en relación al carácter reaccionario y desestabilizador que jugaba la oposición, los caminos para afrontar esta ofensiva diferían en algunos puntos fundamentales. Si para el polo gradualista la salida a la crisis pasaba por un gran acuerdo político, para el denominado polo revolucionario la única alternativa era agudizar el conflicto hasta alcanzar una resolución final. Como ninguna de estas dos líneas pudo imponerse a la otra, la confrontación intestina se arrastró de forma inmanejable para todos los actores.

Por su parte, la perspectiva de la oposición frente al clima de violencia existente fue, como era de suponer, distinta al expresado por el oficialismo. En dos sesiones realizadas en el Senado a inicios de agosto, los parlamentarios de este bloque hicieron su particular lectura de la situación de enfrentamiento que se vivía en el país. En la sesión del día 7 de ese mes, el senador democratacristiano, Rafael Moreno, articuló su reflexión en torno a la forma en cómo el Gobierno enfrentaba el paro de los camioneros, uno de los temas más candentes en esos momentos. A su juicio, la fuerza policial mandatada por el Gobierno había sido puesta al servicio de una doctrina que había llevado «a las peores formas de represión en contra de los trabajadores». Según Moreno, el Ejecutivo actuaba con absoluta parcialidad a la hora de mantener el orden público, pues mientras las manifestaciones de la izquierda eran respaldadas y protegidas por Carabineros, las marchas opositoras eran reprimidas con una violencia hasta entonces «desconocida». En medio de la intervención del parlamentario, se abrió un espacio para la exposición de un video correspondiente a una entrevista realizada por Canal 13 al presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León Vilarín. Este refería las consecuencias de un allanamiento efectuado por Carabineros en la localidad de Nos, al sur de Santiago. Según el dirigente gremial, el Gobierno había dispuesto prácticas persecutorias y una represión brutal en contra de los camioneros, situación que si no cambiaba de inmediato se «bloquearía» cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. Al retomar su intervención, el senador Moreno

sostuvo que las imágenes presentadas en el video mostraban hasta qué punto había llegado el clima de tensión, violencia y desesperanza para algunos chilenos[819].

El también senador democratacristiano, Juan Hamilton, intervino para refrendar las palabras de su camarada señalando que el Gobierno de la UP era el «más represivo» y «tolerante» con la delincuencia de sus bases en la historia contemporánea de Chile. Dentro de esta óptica, el parlamentario refirió un conjunto de hechos en que, a su juicio, quedaba probado el carácter represor del Ejecutivo. Así mencionó, por ejemplo, la actuación policial en contra de los estudiantes secundarios y universitarios y los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 1971 en el contexto de la marcha de las cacerolas vacías. Bajo un ángulo similar, el senador del PN, Pedro Ibáñez, sostuvo que diversos sectores sociales evidenciaban ya importantes cuotas de irritación y cansancio en contra de los propósitos de la UP tendientes a establecer una dictadura. A juicio del parlamentario, este objetivo se veía refrendado a partir de los intentos por coartar la libertad, controlar los medios de comunicación, despojar a distintos actores de sus bienes e ingresos, entre otras medidas. En su parte final, Ibáñez sostuvo que las provocaciones marxistas, y en particular los llamados del PC a evitar una guerra civil, tendrían un efecto contrario al deseado ya que el pueblo chileno respondería con la virilidad y energía características de «nuestra raza»[820].

En la sesión del 8 de agosto, el senador Rafael Moreno caracterizó, otra vez, el cuadro de confrontación y violencia política a partir de un caso en que los responsables de su materialización eran miembros de la izquierda. El parlamentario refirió, en efecto, una serie de irregularidades que involucraban al Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ICIRA), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. Según los antecedentes entregados por Moreno, en la mencionada institución existían 36 extranjeros contratados, la mayoría de los cuales eran de nacionalidad argentina y quienes, además, eran muy cercanos al MIR. Lo que denunciaba el senador de la DC era que el ICIRA se había transformado, según su criterio, en un centro receptor de activistas de

[819] Senado, *Diario de sesiones,* 55.ª sesión, martes 7 de agosto de 1973, pp. 2301-2307.
[820] Senado, *Diario de sesiones, op. cit.*, pp. 2308 y 2324.

izquierda, quienes utilizaban los recursos del organismo para realizar actividades «contrarias a las leyes chilenas». De hecho, según denunciaba Moreno, la imprenta de este organismo se había utilizado para imprimir una serie de folletos y boletines a través de los cuales se exponían las ideas y demandas del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR). En la mayoría de ellos, sentenciaba el parlamentario, se hacían llamados abiertos a la desobediencia de la tropa respecto a sus mandos superiores en los institutos militares[821].

A la luz de estos planteamientos, la oposición visualizaba el clima de violencia política existente en Chile como responsabilidad exclusiva de la UP. Ello se entendía así en virtud de al menos tres elementos. El primero de ellos apuntaba a la incapacidad del Ejecutivo por lograr acuerdos con los actores en conflicto, desatendiendo permanentemente sus peticiones y desacreditando la legitimidad de sus reclamos. El segundo elemento estaba relacionado con el anterior y se refería a las medidas represivas adoptadas en contra de quienes se movilizaban para protestar. Este tipo de medidas, según explicitó la oposición, tendía a encender aún más el conflicto, provocando un número creciente de enfrentamientos a lo largo del país.

Ambos elementos corresponden a un nivel de análisis coyuntural de la lucha social y política, pero que en todo caso no estaban desconectados de un factor más estructural. Éste último, que corresponde al tercer elemento, se refiere a que la causa principal del cuadro de violencia existente se originaba, bajo la óptica opositora, por la naturaleza y características intrínsecas del proyecto socialista. Es decir, al intentar la materialización de este modelo se destruían, según se dijo, las bases de la convivencia social pues se desarticulaban las relaciones de propiedad, se modificaba la estructura económica y se apuntaba al establecimiento de un Estado totalitario al servicio de una ideología extranjera. De este modo, resultaba evidente, según expresara la oposición, que un proyecto de esta naturaleza avanzaría en algún momento hacia un cuadro generalizado de violencia y extremismo. Lo interesante de esta línea argumental fue que gran parte de ella se utilizó también por los militares para justificar el golpe militar del 11 de septiembre y la violencia consiguiente que se desarrolló a partir

[821] Senado, *Diario de sesiones,* 56.ª sesión, miércoles 8 de agosto de 1973, pp. 2355-2366.

de esa fecha. Es más, en un número no menor de publicaciones que justificaron el golpe y el derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende se utilizaron precisamente los argumentos arriba descritos, insistiendo en la responsabilidad exclusiva de la izquierda por haber provocado un cuadro de violencia de estas características.

Desde mediados de agosto en adelante las líneas de tensión social y política no se habían modificado en lo sustancial. Esto implicaba que el tema de fondo seguía anclado en torno a la continuidad o cancelación del proyecto socialista, lo que suponía esfuerzos considerables de parte de los actores para concretar una u otra opción. Por el lado de quienes respaldaban al gobierno emergían dos líneas de acción bastante nítidas. Por una parte, aquella que insistía en la importancia del marco institucional como el campo de disputa central y que todavía, a mediados de agosto, buscaba una salida política a la crisis. La otra línea que emanaba desde la izquierda apostaba por mantener en alza la movilización social y confrontar a los grupos de choque de la oposición que se desplegaban en el espacio público. Esto suponía, en la práctica, llegar a situaciones de violencia producto del nivel de conflictividad existente.

Desde el ángulo opositor, era evidente que su propósito central era lograr en el corto plazo el derrocamiento de la UP. Aunque existían matices en su seno respecto a la forma en cómo se lograría este objetivo, a esta altura era bastante claro que las estrategias de nacionales y democratacristianos no eran en ningún caso excluyentes. A nivel práctico, este bloque apostaba por cerrar cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo institucional con el gobierno, insistiendo en el carácter ilegal e ilegítimo de muchos de sus actos. A lo anterior habría que sumar el accionar de los grupos de choque de este sector, encaminados en crear unas condiciones extremas de ingobernabilidad y caos que permitieran alcanzar una salida extrainstitucional en la cual, según se explicitaba, tendrían que tener un rol clave las Fuerzas Armadas.

Los hechos de violencia política de estas semanas estuvieron vinculados, pues, a un contexto que parecía advertir la pronta resolución del conflicto, por lo que buena parte de los discursos y reacciones que orbitaron en torno a ellos refirieron a puntos de tensión más estructurales.

Así, por ejemplo, en el marco de la paralización de los camioneros, se produjo el 18 de agosto en Santiago el homicidio del transportista

y dirigente del MOPARE Óscar Balboa Elgueta. Según la versión de *El Siglo*, Balboa fue asesinado a balazos en la avenida Santa Rosa por unos desconocidos que se movilizaban en un taxi. A pesar de no conocerse la identidad de los autores del crimen, este medio no dudó en calificar a estos como «gansters de Vilarín», endosando así la responsabilidad del homicidio en el máximo dirigente de los transportistas[822]. El periódico *Clarín*, por su parte, divulgó una versión similar remarcando que los victimarios pertenecían a una «banda de fascistas»[823]. Desde las páginas de *El Mercurio* se entregaron otros antecedentes de este caso, señalando que Balboa habría mantenido una discusión con el conductor de un automóvil particular en las inmediaciones de la calle Uruguay, frente al número 2026. Al subir el tono de la confrontación, continúa este medio, Balboa fue atacado con un arma de fuego por parte del otro chofer quien le disparó a quemarropa provocando la muerte instantánea[824]. No obstante los antecedentes aportados, este medio no entrega detalles más concretos respecto a quiénes habrían sido los autores del crimen. La causa de muerte que se indicó en todas las versiones revisadas es confirmada por el certificado de defunción de la víctima que anota a este respecto una herida de bala en el corazón sin salida de proyectil, fijando su deceso a las 02:30 horas de la madrugada[825].

Situados en el contexto de estas semanas, no se podría descartar *a priori* un móvil político en la muerte de Óscar Balboa, sobre todo en atención al cargo dirigencial que ocupaba la víctima. Cabe la posibilidad, en este sentido, que Balboa se haya visto inmerso en una discusión de carácter político con otro conductor, la cual tuvo como telón de fondo la paralización de los camioneros que ya se extendía por casi un mes en distintos puntos del país. A pesar de que esta explicación constituye solo una hipótesis, la prensa oficialista no dudó en achacar la responsabilidad del crimen al gremio transportista y, de modo particular, a su máximo dirigente, León Vilarín, a

[822] *El Siglo*, Santiago, 19 de agosto de 1973, p. 1.

[823] *Clarín*, Santiago, 26 de agosto de 1973, p. 4.

[824] *El Mercurio*, Santiago, 19 de agosto de 1973, p. 33.

[825] "Certificado de defunción de Oscar Balboa Elgueta", Santiago, 18 de agosto de 1973, n.º de inscripción 1785, registro E1, folio 17955236, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].

quien identificaban como cabeza de una organización abiertamente fascista. Este último apelativo, utilizado con profusión durante la UP por parte de la izquierda, daba cuenta, una vez más, de cómo ciertas nociones y conceptos políticos globales estaban presentes en la experiencia diaria de la vía chilena al socialismo. En este caso en particular, el carácter fascista que se denunciaba en la prensa de izquierda remitía a una cuestión concreta vinculada con el crimen y la eliminación de enemigos políticos.

Poco después de ocurrido el crimen de Balboa se produjo otro hecho que puso en evidencia el nivel de conflictividad existente. El suceso remitía al ataque armado en contra de militantes de la oposición que tuvo como escenario el centro de la capital, en la intersección de las calles Compañía y Bandera, el día 21 de agosto. En dicha jornada, un grupo de estudiantes secundarios y militantes de la JN se congregó en ese lugar con el objetivo de realizar una manifestación pública de rechazo a la UP. De improviso, los jóvenes fueron atacados a balazos —se presume que por partidarios del Gobierno— desde distintos puntos. El hecho hacía recordar lo ocurrido a comienzos de mayo cuando en un sector muy cercano a este una manifestación de Patria y Libertad fue atacada, también con armas de fuego, desde un automóvil que irrumpió en el lugar. Esta vez, sin embargo, no hubo un vehículo misterioso desde el cual se efectuaran los disparos, sino que fueron individuos apostados en las calles aledañas quienes atacaron el desfile opositor.

El dirigente secundario Andrés Allamand, quien participaba de la marcha, recuerda que el ataque fue una «emboscada» de los militantes de izquierda que dejaría a un compañero suyo, identificado como Diego Lepe, tirado en el suelo al ser alcanzado por un proyectil. Otro miembro de la JN, continúa Allamand, logró llegar a la sede del PN ubicada a escasas cuadras del lugar e informar de lo que estaba pasando. En cuestión de segundos se apersonó en las calles un decidido Juan Luis Ossa quien se enfrentó a balazos con los agresores logrando su dispersión: «[...] no sé qué habría sido de nosotros si [Ossa] no nos defiende», indicaría años después Allamand[826]. El saldo del enfrentamiento fue, según *La Tercera*, siete jóvenes heridos a bala, siendo los casos más graves los de Diego Lepe Fernández y Vicente

[826] Allamand, *op. cit.*, pp. 24-26.

Cordero quienes fueron impactados en sus cabezas por diversos proyectiles[827]. La revista *Ercilla* recogió las declaraciones que Ossa realizó sobre estos incidentes en las que reconocía su participación en el enfrentamiento: «Sí, yo disparé mi revolver. Lo hice para defender a mis muchachos de la agresión marxista»[828].

La visión de algunos medios de izquierda, como *La Aurora de Chile*, apuntó a que lo sucedido en el centro de la capital había sido una «provocación» del fascismo que logró ser controlada por Carabineros y trabajadores que circulaban por el sector. Este periódico explicitó, incluso, una idea que reflejaba el nivel de polarización existente en esos momentos en Chile. Al reseñar la existencia de una víctima fatal —creyendo que Lepe Fernández había fallecido— este medio indicó que no se sabía con exactitud si la bala había provenido desde Carabineros, pero en caso que así hubiese sido entregaba el más absoluto «respaldo» a la policía uniformada. Adicionalmente, este medio vaticinaba que a mediano plazo los trabajadores y cuerpos policiales aplastarían «la fea cabeza del fascismo»[829].

El enfrentamiento ocurrido en la capital no era, como se puede advertir, una situación marginal dentro del escenario social y político del país, pues su ocurrencia se había vuelto periódica en los últimos meses. La información de prensa de estas semanas daba cuenta de hechos de similar tenor a los ocurridos en Santiago en otros puntos del territorio. Así, por ejemplo, en incidentes callejeros producidos en la ciudad de Chillán, el día 22 de agosto, resultaron heridos a bala Juan Sepúlveda Penna, de 22 años, y Héctor Pino Valle, de 29[830]. En la ciudad de Rancagua, en tanto, los enfrentamientos entre miembros del MIR y Patria y Libertad dejaron como saldo dos personas heridas de gravedad, identificadas como Ana Marcuello, con herida a bala, y María Cristina Cuadra, con un traumatismo encéfalo craneano[831].

[827] *La Tercera*, Santiago, 22 de agosto de 1973, pp. 4, 6 y 16. El listado completo de heridos a bala en el ataque fue el siguiente: Fernando Bravo González, brazo; Ramón Vidal Ibarra, cuero cabelludo; Gerardo Alarcón Cansino, maxilar izquierdo; Patricio Rodríguez Mella, clavícula y Mauricio Jorquera Encina, cuello. A ellos se suman los casos antes señalados de Diego Lepe Fernández y Vicente Cordero.

[828] *Ercilla*, n.º 1989, Santiago, 29 de agosto al 4 de septiembre de 1973, p. 18.

[829] *La Aurora de Chile*, n.º 37, Santiago, jueves 23 de agosto de 1973, p. 1.

[830] *La Segunda*, Santiago, 23 de agosto de 1973, p. 20.

[831] *La Prensa*, Santiago, 30 de agosto de 1973, p. 20.

Era evidente, en atención a los hechos que se registraban, que numerosos grupos e individuos estaban volcados en las calles protagonizando enfrentamientos de distinto tipo. El dirigente de Patria y Libertad, Manuel Fuentes Wendling, entrega algunos datos sobre esta situación al proporcionar una detallada descripción de los grupos y militantes de la oposición que actuaban en esas semanas. Según su información, en los niveles «operativos» de la resistencia al Gobierno se «confundían» los militantes frentepatristas con otros grupos de choque como el Comando Rolando Matus del PN «dirigido por Juan Luis Ossa y Andrés Allamand». Algunas de estas organizaciones, continúa Fuentes, eran integradas por «muchachos» como Bernardo Matte Larraín, Federico Ringeling, Sergio Correa de la Cerda y Carlos Correa Sanfuentes[832]. Allamand reconoce que los dirigentes políticos de este periodo se forjaban en las asambleas, pero que debían madurar en las calles, lo cual significaba que había que medirse «en todos los terrenos» con los combativos cuadros juveniles de la izquierda[833].

Cabría reseñar que el agudo nivel de conflictividad que se observaba en las calles también alcanzaría los domicilios de algunas autoridades. Este fue el caso de los incidentes producidos en la tarde noche del 21 de agosto en la residencia particular del comandante en jefe del Ejército, y por entonces ministro de Defensa, Carlos Prats. Lejos de tratarse de una acción aislada, estos sucesos estaban conectados a coordenadas de acción más estructurales. Como se recordará, el tema en torno al rol de las Fuerzas Armadas dentro de la coyuntura política había tomado un ritmo vertiginoso tras el tanquetazo del 29 de junio. Dicho evento puso en evidencia no solo el rol que habían tenido los mandos constitucionalistas a la hora de abortar la sublevación, sino que también permitió advertir que al interior de las Fuerzas Armadas existían elementos golpistas dispuestos a derrocar al Gobierno. Este problemático punto estaba, además, alimentado por las declaraciones de algunos sectores de la oposición que declaraban sin ambages que la crisis por la que atravesaba el país solo podía ser resuelta mediante una intervención militar que cancelara el proyecto de la UP.

[832] Fuentes Wendling, *op. cit.*, pp. 298-299.
[833] Allamand, *op. cit.*, p. 24.

Naturalmente, estas ideas fueron respondidas de inmediato por la izquierda, aunque desde distintos ángulos. La visión institucionalizada del presidente Allende apuntaba a reforzar los mandos constitucionales, esperando que de repetirse una situación análoga a la del tanquetazo fuera la oficialidad leal al Gobierno la que saliera en su defensa. Desde el denominado polo revolucionario se apuntaba en una dirección similar, pero reforzando la idea según la cual la tropa y los mandos medios de las Fuerzas Armadas no debían obedecer los planes golpistas de la oficialidad. Este tópico ya había generado una espesa polémica a inicios de agosto a propósito de lo sucedido en la Armada cuando un grupo de marinos y suboficiales denunciaron los intentos del alto mando por derrocar al Gobierno de Allende. La respuesta desde sectores como el MIR y el PS fue apoyar a los denunciantes, además de reiterar sus llamados a conscriptos y soldados en orden a desobedecer los intentos de subversión que provinieran desde la oficialidad.

A mediados de agosto todos estos elementos se contraponían en medio de un agitado debate social y político. Los militares que preparaban el golpe se encontraban todavía con algunos obstáculos para la concreción de sus planes, siendo la presencia de oficiales constitucionalistas en el alto mando de las instituciones —como era el caso del comandante en jefe el Ejército— uno de los más importantes. Sobre el general Carlos Prats, el historiador Luis Corvalán Marquéz señala que entre los meses de julio y agosto se generó un ambiente completamente adverso para él al interior de su institución, lo que en la práctica desató numerosas acciones tendientes a lograr su renuncia[834]. Fue en este contexto en que se produjeron los incidentes en su domicilio particular la tarde del 21 de agosto.

A través de sus memorias, Prats recuerda numerosos detalles de lo ocurrido aquella jornada. Según su testimonio, se había trasladado cerca del mediodía a su residencia aquejado de un fuerte estado gripal que lo obligó a guardar cama. Su descanso sería interrumpido a las 17:15 horas por una bulliciosa manifestación de unas trescientas mujeres —muchas de las cuales eran esposas de oficiales en servicio activo— que exigían entregar una carta a la esposa de Prats, Sofía Cuthbert. La misiva era un rosario de lamentaciones debido a la in-

[834] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 385.

certidumbre diaria que afrontaban sus maridos, por lo que solicitaban a Cuthbert que intercediera ante su esposo y le diera a conocer tan angustiante situación. Lo que el documento esbozaba de modo implícito era que la resolución de este conflicto pasaba necesariamente por la renuncia de Prats a los cargos que ostentaba en ese momento. Tras entregar la carta, continúa el relato del oficial, la manifestación no se disolvió, sino que, por el contrario, se vería reforzada por la presencia de otras mujeres, hombres y menores de edad hasta conformar un tumulto de casi 1500 personas. Comenzarían entonces a sucederse los «insultos e improperios» en contra de Prats, al tiempo que surgían los primeros conatos de agresión contra la fuerza policial que se hizo presente en el lugar. En medio de la trifulca, un oficial de uniforme identificado como Renán Ballas manifestó a viva voz que el general Prats no representaba al Ejército y era un «traidor»[835]. Con los ánimos enardecidos, los manifestantes comenzaron a apedrear la residencia del comandante en jefe intentando ingresar a la propiedad. En ese contexto, aparecieron los primeros heridos producto de la refriega y el accionar de Carabineros. La fuerza policial, de hecho, debía enfrentarse a una masa cada vez más hostil y agresiva que no lograba ser dispersada con facilidad. Eran cerca de las once de la noche y las manifestaciones y gritos continuaban. Poco antes había llegado el presidente Allende quien, «molesto por oír tantas groserías y denuestos», recordaría el oficial, ordenó a Carabineros despejar el sector, lo que se logró al cabo de unos minutos. «Quedo meditando en la grave-

[835] Renán Ballas entrega una versión distinta a la de Prats respecto a su participación en este hecho. Según su testimonio, la tarde del 21 de agosto recibió un llamado telefónico de un amigo quien le informó que su esposa se encontraba con «principio de asfixia» en las inmediaciones del hogar del comandante en jefe. La razón se debía a una protesta de mujeres que había sido reprimida por la policía. Ante ello, el oficial decidió concurrir al lugar para ver qué estaba sucediendo y, sobre todo, saber del estado de salud de su señora. Cuando se acercaba al domicilio de Prats, Ballas indica que fue insultado con calificativos despectivos, situación a la que, no obstante, pudo sobreponerse y lograr, incluso, que la masa de mujeres guardara silencio. En ese instante, concluye el oficial, «salió desde lo más profundo de mi subconsciente y de mi alma» la frase de que el general Prats no representaba al Ejército y que «nos había traicionado». Renán Ballas Siglic, *Vivencias de un capitán "díscolo" y "rebelde" (1973) y Diplomático de carrera (1974-2005)*, pp. 74-75. Desde esta perspectiva, Ballas da a entender que su llegada al domicilio del comandante en jefe fue meramente circunstancial y que en ningún caso ella obedecía a un plan preestablecido que buscara socavar la autoridad de Prats al interior del Ejército.

dad de lo ocurrido», apuntaba el general Prats al final de la jornada[836].

Al día siguiente, el comandante en jefe le hizo saber al general Augusto Pinochet que estaba dispuesto a olvidar el incidente si el cuerpo de generales firmaba una declaración de respaldo a su persona. Sin embrago, la mayoría de los generales rechazó de plano esta alternativa por lo que Prats comprendió que su autoridad había sido socavada al interior de la institución. A mediodía del 23 de agosto, Prats se entrevistaría con el presidente Allende para finiquitar su salida inmediata de la comandancia en jefe del Ejército y del Ministerio de Defensa. Le reemplazaría el propio Pinochet al mando del Ejército, tras las consultas de Allende a Prats respecto a la idoneidad y lealtad de aquél para con el gobierno. En menos de 48 horas los propósitos de los oficiales y civiles que preparaban el golpe de Estado habían alcanzado un triunfo categórico con el alejamiento de Prats.

Desde la Cámara de Diputados, en tanto, se daría a conocer, en medio de los agitados eventos que sacudían al Ejército, un pronunciamiento público de insospechadas consecuencias. El documento, que fue aprobado por la mayoría nacional y democratacristiana[837] en la tarde del 22 de agosto, exponía dos puntos claves. El primero de ellos consistía en denunciar el «grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República» en virtud de las actuaciones cometidas por el gobierno de la UP. El segundo punto indicaba

[836] Prats, *op. cit.*, pp. 476-479.

[837] El entonces senador socialista Erich Schnake recuerda que la declaración de la Cámara había suscitado un intenso debate al interior de la DC, habiendo algunos diputados de esa tienda que no compartían el alcance del documento. Según su relato, los democratacristianos se comprometieron a que un dirigente explicaría el verdadero sentido de la declaración, esto es, que no era un llamado ni una autorización a un alzamiento armado. Sin embargo, el dirigente nunca se pronunció al respecto generando el desconcierto de aquellos que aquilataban con recelo el documento. Poco antes de votar la declaración, cuenta Schnake, Bernardo Leighton conminó en un tono tajante, «muy poco habitual en él», a los parlamentarios democratacristianos para que votaran a favor. Años después, recuerda el exsenador socialista, Leighton le reconocería personalmente su error. Erich Schnake, *Un socialista con Historia. Memorias*, pp. 189-190. El parlamentario democratacristiano Eduardo Cerda indicó que él sería el encargado de hablar a nombre de la DC a objeto de clarificar el verdadero sentido del acuerdo. Sin embargo, su llegada a la Cámara de Diputados se produjo cuando el debate ya se había cerrado no logrando, según sus palabras, disponer de un tiempo extra para hablar: «Entre los diputados se corrió la voz de lo que iba a decir y me respondieron: "se acabaron los tiempos, no te vamos a dejar hablar"». Véase, Eduardo Cerda, *El valor de los acuerdos*, p. 97.

que a los ministros militares que formaban parte del gabinete les correspondía «poner inmediato término» a todas las situaciones que infringían la carta fundamental de modo de encauzar la acción del Ejecutivo a través de la ley. Además, la declaración sostenía que en caso de que los altos oficiales no actuaran de acuerdo a lo indicado estarían comprometiendo el carácter nacional y profesional de las propias Fuerzas Armadas[838]. En pocas palabras, el documento señalaba de forma tácita que el Gobierno de la UP era el único responsable del quebrantamiento legal en el país, por lo que pedía una actuación rectificadora de parte de los ministros militares ante dicha situación. Tal declaración no hacía sino apostar por una salida que significara desarticular en breve tiempo el proyecto de la UP, respaldando el protagonismo de las Fuerzas Armadas en dicha operación. Indudablemente el pronunciamiento de la Cámara de Diputados fue recibido con satisfacción por algunos oficiales. El almirante Merino comentaría en sus memorias que las conclusiones a las que por esos días llegaba el Consejo Naval —en orden a que Allende debía renunciar o ser alejado del poder— se vieron «respaldadas» por el pronunciamiento de la cámara baja[839].

Desde la izquierda, como era de esperar, se rechazaron de plano los alcances de dicho documento. En una declaración conjunta del día 23 de agosto, los partidos de la UP sostuvieron que el acuerdo demostraba que los propósitos de la oposición llegaban a un límite peligroso. Se trataba, según la UP, de un acuerdo irracional «sin destino jurídico», además de inconstitucional, por lo que la dirección nacional de la alianza oficialista se declaraba en estado de emergencia y de reunión permanente[840]. El periódico *Clarín* fue igual de enfático para analizar dicho pronunciamiento al sostener que, en la práctica, dicho acuerdo pavimentaba el camino a un golpe de Estado. Es decir, la declaración de la Cámara constituía un aval para la aventura o el salto «en el vacío» de cualquier «gorila» que quisiera derrocar al gobierno[841].

[838] Diputados, *Diario de sesiones*, 33.ª sesión, miércoles 22 de agosto de 1973, publicada íntegramente en *La Nación*, Santiago, 25 de agosto de 1973, s/p.

[839] Merino, *op. cit.*, p. 215.

[840] "Allende responde en 48 horas", *El Mercurio*, 24 de agosto de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 797.

[841] "Comadreos y comistrajos de la política", 26 de agosto de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 802.

Visto en perspectiva, tanto el pronunciamiento de la Cámara de Diputados como la multiplicidad de hechos que agrietaban la estabilidad social y política del país formaban parte de una ofensiva opositora que tenía como objetivo central materializar la caída del Gobierno. Pero dicho propósito no podía alcanzarse posicionando las fuerzas en un solo plano, sino que estas debían situarse en diferentes niveles de acción. Así se desarrollarían simultáneamente distintos tipos de operaciones como el acoso al comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, o la intensificación de los atentados terroristas. No lejos de este tipo de acciones se ubicaba la paralización de los camioneros que al cumplir un mes de duración no evidenciaba ningún signo de fatiga ni desmoralización entre sus participantes. Y desde el ámbito institucional, el pronunciamiento de la Cámara de Diputados venía, pues, a estrechar aún más el cerco del Congreso sobre el Ejecutivo. De esta manera, los hilos de la trama militar y civil que apostaba por una salida de facto a la crisis se movían con rapidez y eficacia en el logro de sus objetivos.

Dentro de este marco se registraron los últimos hechos de violencia del mes de agosto. La recopilación de noticias realizada por Manuel Salazar es ilustrativa del tenor que alcanzó este tipo de incidentes. El día 23, por ejemplo, desconocidos volaron con cargas explosivas los puentes de acceso norte a la ciudad de Concepción dejando incomunicada a la ciudad penquista por varias horas. El día 30, fue atacado a balazos el carabinero que custodiaba la residencia particular del arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez. Al día siguiente, los incidentes callejeros retomaron su intensidad al producirse un grave enfrentamiento entre partidarios y detractores de la UP en el frontis de la casa central de la Universidad Católica de Valparaíso, la cual había sido tomada por elementos de derecha. Ese mismo día, y según informaciones proporcionadas por la FACh, un grupo indeterminado de civiles atacaron con elementos contundentes y piedras al personal de la base aérea de El Bosque, ubicada al surponiente de la capital[842].

[842] Salazar, M., *op. cit.*, pp. 350-354. Respecto a los incidentes producidos en la UCV, un semanario de izquierda señalaría que el día 30 de agosto ya se habían producido numerosos choques entre los ocupantes de la casa central de dicho plantel, que pertenecían a movimientos de derecha, y grupos de estudiantes y obreros que pretendían desalojar el recinto. Estos últimos habrían sido atacados con ácido y otros productos químicos. Véase, *Chile Hoy*, n.º 65, Santiago, 7 al 13 de septiembre de 1973, p. 7.

Pero el hecho que acaparó mayor atención en los días finales de este mes fue el homicidio del subteniente de la Escuela Militar Héctor Lacrampette Calderón, ocurrido en la madrugada del 29 de agosto. Diversos medios tendieron a coincidir en que el joven militar, que esa noche vestía de civil, solicitó a una camioneta particular ser transportado por Avenida Apoquindo hacia el oriente debido al paro de la locomoción colectiva. En el trayecto se habría producido una discusión entre Lacrampette y los ocupantes del vehículo que finalizó cuando uno de estos desenfundó un arma de fuego y disparó a quemarropa en contra del subteniente[843]. Una versión distinta la entrega el embajador norteamericano Nathaniel Davis, quien sostiene que Lacrampette fue tiroteado y muerto en un registro de armas en la fábrica Indugas[844]. Sin embargo, en el matutino *El Siglo* se consignó la declaración oficial del Ejército, la cual detallaba los antecedentes del crimen en los términos indicados, esto es, el de un incidente producido en la zona oriente de la capital al interior de un vehículo particular. El documento señalaba también que los agresores del suboficial quisieron defenderse de una amenaza que, al parecer, había lanzado Lacrampette en contra de ellos. Esto produjo, según el Ejército, la reacción de uno de los civiles que viajaba en la camioneta quien disparó su pistola calibre 22 en contra del suboficial impactando al subteniente en el parietal izquierdo[845]. El certificado de defunción de la víctima indica que la causa de muerte del subteniente fue una herida a bala torácica, fijando la hora de su deceso a las 02:40 de la madrugada del 29 de agosto[846].

Respecto a la identidad de los autores, existieron distintas versiones. *El Mercurio* aseguró que los victimarios pertenecían a un grupo de ultraizquierda, aun cuando no existía una confirmación oficial al respecto[847]. La edición de *El Siglo* citada más arriba no se pronunció,

[843] *La Tercera*, Santiago, 30 de agosto de 1973, pp. 16 y 17; *La Prensa*, Santiago, 30 de agosto de 1973, p. 8.

[844] Nathaniel Davis, *Los dos últimos años de Salvador Allende*, p. 188.

[845] Declaración del Ejército de Chile publicada en *El Siglo*, Santiago, 30 de agosto de 1973, p. 16.

[846] "Certificado de defunción de Héctor Lacrampette Calderón", Santiago, 29 de agosto de 1973, n.º de inscripción 1864, registro E1, folio 17956300, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].

[847] *El Mercurio*, Santiago, 30 de agosto de 1973, p. 1.

en tanto, respecto a la filiación política de los victimarios. Al cabo de algunas horas, trascendió que se había detenido a un ciudadano mexicano identificado como Jorge Albino Sosa Gil a quien se acusaba de ser el autor material del crimen. También se informó que habían sido detenidos el resto de los individuos que viajaban en la camioneta, quienes resultaron ser trabajadores de la fábrica Indugas. Dicha industria, según comenta Andrés Allamand —cuyo padre era director de la misma—, se había ganado la fama de ser «un nido de extremistas»[848]. Respecto a Sosa Gil, el embajador norteamericano Davis lo califica como un «extremista» que había estado trabajando en la planta de gas y realizando, al mismo tiempo, labores de agitación. Esta situación, según el diplomático, incrementó el temor de los militares respecto a la existencia de una «red extremista internacional» que tuviera como propósito llevar a Chile al «caos revolucionario»[849]. Desde algunos medios de izquierda se hicieron llamativas descripciones sobre el autor del crimen. El diario *Clarín*, por ejemplo, dio a entender que Sosa Gil sufría de algún tipo de trastorno mental al calificarlo como «mexicano con la sopaipa pasada» o «cuate con la fonola corrida». Además, este rotativo calificó la muerte de Lacrampette como un homicidio en riña[850].

Una versión que se distancia de los enfoques descritos y que aporta algunos datos relevantes es la que proporciona Héctor Mendoza y Caamaño, por entonces funcionario diplomático de la Embajada de México en Santiago de Chile. Según su testimonio, luego de ocurrido el crimen debió tratar en diversas ocasiones a Sosa Gil, quien en ningún momento le pareció un individuo cruel o feroz como lo había retratado la prensa. El diplomático sostiene que tanto su connacional como el resto de los ocupantes del vehículo no sabían que Lacrampette era militar y que la muerte del subteniente fue producto de una confusa acción debido a que los victimarios deseaban averiguar si aquel iba armado. En ese momento, continúa Mendoza, y al ver que los trabajadores se abalanzaban sobre él, el subteniente sacó su revólver para intentar defenderse siendo alcanzado primero por el disparo de su victimario. La versión del funcionario mexicano va

[848] Allamand, *op. cit.*, pp. 252.
[849] Davis, *op. cit.*, p. 188.
[850] *Clarín*, Santiago, 30 de agosto de 1973, pp. 1 y 13.

un poco más allá y especula con que, tal vez, Sosa Gil no fue quien asesinó a Lacrampette, indicando que su compatriota pudo asumir la responsabilidad para que la culpa no recayera sobre sus amigos chilenos. Tras el golpe de Estado, Mendoza relata que perdió toda pista de Sosa Gil, lo que llevó a los funcionarios diplomáticos a pensar que este había sido asesinado por los militares. Sin embargo, la representación mexicana recibió tiempo después una carta de Sosa Gil dirigida al presidente Luis Echeverría en que solicitaba ayuda pues se encontraba preso y había sido condenado a pena de muerte. Tras numerosas diligencias, Mendoza logró que el abogado chileno Luis Bates representara al detenido, logrando que la Corte Marcial conmutara la pena máxima por cadena perpetua. En 1978, finaliza el diplomático, la justicia chilena expulsó a Sosa Gil del país[851].

La muerte de Lacrampette impactaba, sin duda, por las características del hecho, cuyos inculpados, según todas las fuentes, pertenecían a un núcleo industrial que se había caracterizado por su combatividad y posicionamiento a favor de la UP. En ese contexto, la presencia de un ciudadano mexicano en la materialización del crimen contribuía a reforzar la idea explicitada por la oposición respecto a que en Chile existían agitadores extranjeros al servicio de la UP, los cuales, inclusive, estaban dispuestos a matar para alcanzar sus objetivos. Desde esta perspectiva, el tema resultaba complejo para las Fuerzas Armadas que debían convivir periódicamente con este tipo de discursos, siendo en muchas ocasiones receptivas al mismo. Esto se tradujo en que, en no pocas unidades militares y sobre todo dentro de la oficialidad, se llegó al convencimiento de que en Chile existían amplios contingentes extranjeros armados y predispuestos a librar una lucha frontal contra ellos. Tales elementos, según esta misma óptica, eran engrosados por numerosos segmentos proletarios y populares que también se encontraban armados.

Lo anterior tuvo como consecuencia que un sector de las Fuerzas Armadas planificaría su accionar, ya desde antes del golpe militar, bajo un marco interpretativo muy cercano a la noción de enfrentamiento y guerra interna. Esta situación se observó, de hecho, en el contexto de los allanamientos practicados en distintos centros fabriles

[851] Héctor Mendoza y Caamaño, *Chile: Surgimiento y ocaso de una utopía, 1970-1973. Testimonio de un diplomático mexicano*, pp. 112 y 144.

del país y que fueron denunciados por la izquierda en razón de la violencia desmedida empleada por los militares[852]. Según Verónica Valdivia, este tipo de hechos pueden ser entendidos como una suerte de prolegómenos de la violencia militar que se materializará a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre[853].

Aunque el complejo contexto social y político que se vivía giró en otra dirección al entrar al mes de septiembre, la memoria del subteniente Lacrampette reaparecería tras el golpe militar. Como era de esperar, su crimen fue erigido por las autoridades castrenses como una prueba «fidedigna» de la violencia izquierdista materializada durante la UP. Tanto en la revista *Aquí Está* como en el libro de Hernán Millas, *Anatomía de un fracaso. La experiencia socialista chilena*, la muerte del joven subteniente fue mostrada bajo este prisma, es decir, como un hecho que dejaba en evidencia los siniestros planes de una izquierda abanderizada por el fanatismo revolucionario[854]. Desde luego, este hecho de violencia no fue el único que las autoridades castrenses utilizaron para demonizar los años de la UP, aunque sí fue uno de los que mejor se adaptaba al mensaje que deseaban transmitir los militares tras el golpe de Estado.

Visto en su conjunto, la muerte de Lacrampette tuvo un impacto en distintos niveles y áreas. En primer lugar, tuvo un efecto inmediato dentro de la coyuntura social y política al poner sobre la mesa el tema de los grupos armados, los cuales, según la oposición, asolaban el país dispuestos a matar, inclusive, a miembros del Ejército. En segundo término, su caso traspasó las fronteras temporales de los años de la UP al ser ubicado, tras el golpe militar, como un ejemplo

[852] Cabe suponer, en este marco, que la muerte del suboficial Lacrampette fue un factor detonante del allanamiento realizado el día 30 de agosto por parte del Ejército a la fábrica Indugas, que era el lugar donde trabajaban los inculpados en dicho homicidio, incluyendo al mexicano Sosa Gil. Según la versión de *El Siglo* la operación militar no incautó ningún tipo de armamento, finalizando solo con cinco personas detenidas que luego quedarían en libertad. "Ejército allanó empresa Indugas", 31 de agosto de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 810. Aunque se trató de un procedimiento que no derivó en una situación de conflictividad, en los días siguientes se producirían otros allanamientos en las industrias Madeco y Mademsa los cuales fueron denunciados en razón de la extrema violencia que utilizó el personal de la FACh para materializar dicha operación.

[853] Valdivia, "Chile...", *op. cit.*, p. 228.

[854] *Aquí Está*, n.º 70, Santiago, 28 de septiembre de 1973, s/p. Hernán Millas, *Anatomía de un fracaso. La experiencia socialista chilena*, p. 143.

prístino, según se indicó entonces, de las atrocidades cometidas por el depuesto gobierno de Allende.

El saldo final del mes de agosto en cuanto a hechos de violencia arrojaba, pues, números relevantes. Las víctimas fatales vinculadas a este tipo de sucesos habían sido cinco, aun cuando algunas informaciones y registros existentes en otros estudios hablan de un número superior. Se mencionan a este respecto los casos de Raquel Toledo, Claudio Antezana, Sergio Aliaga Cabezas y Daniel Briones, fallecidos en distintos puntos del país en este periodo. Sobre Raquel Toledo, las informaciones de prensa recogidas en este libro indican que su muerte se produjo el 6 de agosto en un incidente carretero, cerca de la ciudad de Colchagua al interior de la sexta región. La versión de *El Mercurio*, señala que Toledo viajaba como acompañante en un camión que transportaba arroz el que fue atacado a piedrazos desde otro vehículo que viajaba en sentido contrario. Uno de los proyectiles, continúa este medio, alcanzó a romper el parabrisas e impactar en la mandíbula de Toledo quien fallecería de forma instantánea[855]. Al cotejar esta información con el certificado de defunción de la víctima observamos una diferencia importante, pues este documento señala como causa de muerte una hemorragia aguda por estallido del pulmón izquierdo a causa de un accidente de tránsito[856]. No es posible descartar *a priori* el ataque con piedras al camión en que viajaba la víctima, sobre todo si se considera el marco de conflictividad social y política que se vivía en ese periodo y que anotaba numerosos incidentes de este tipo producto de la paralización del gremio transportista. Sin embargo, la descripción que hace el certificado de defunción de la víctima supone al menos la posibilidad de que el episodio haya sido un accidente de tráfico sin la intervención de terceros. En virtud de estos elementos se consigna la muerte de Raquel Toledo como un caso especial, sobre el cual no existen los antecedentes suficientes como para catalogar la naturaleza política de su fallecimiento.

Respecto a Claudio Antezana, diversas informaciones puntualizan que se trató de un estudiante universitario que falleció el día 23

[855] *El Mercurio*, Santiago, 8 de agosto de 1973, p. 19.

[856] "Certificado de defunción de Raquel Toledo", San Fernando, 6 de agosto de 1973, n.º de inscripción 302, folio 16806619, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 20 de junio de 2016].

de agosto en la ciudad de Calama. Sin embargo, esta investigación no ha podido recabar un antecedente relevante en la prensa del periodo que dé cuenta de dicho caso, como tampoco se ha hallado un certificado de defunción de la supuesta víctima. El caso de Sergio Aliaga Cabezas es bastante particular. Diversos medios de prensa tienden a coincidir en que la víctima, que viajaba en su automóvil por una arteria de la capital, fue atacado con un balín de acero que se incrustó en su garganta, lo cual le provocó la muerte en la noche del 25 de agosto[857]. Algún medio incluso dio a conocer las declaraciones de un hermano de la víctima quién señaló que su familiar había sido asesinado por negarse a adherir al paro de los camioneros[858]. A pesar de todos estos antecedentes, y sobre todo al contar con el nombre completo de la víctima, no se ha podido hallar hasta ahora un certificado de defunción que corrobore lo indicado por los medios de prensa. Más aún, esta investigación revisó los archivos de los dos cementerios más importantes de la capital y en ninguno de ellos se encontró a un fallecido con ese nombre. A diferencia de lo ocurrido con Raquel Toledo, cuyo certificado de defunción fue un documento importante para precisar algunos puntos, en el caso de Aliaga Cabezas no se puede comprobar completamente su fallecimiento dada la ausencia del documento respectivo. Al remitirse a la información que proporcionaron distintos medios, es posible suponer que el caso sí ocurrió. Respecto a Daniel Briones no se han encontrado referencias en la prensa escrita respecto a su muerte, ocurrida aparentemente el 27 de agosto en la ciudad de San Fernando.

En lo que existe mayor certeza, en virtud de las informaciones proporcionadas tanto por la prensa como por las autoridades de gobierno, es respecto a los atentados explosivos e incendiarios en distintos puntos del país. Para mediados de agosto, según la información que recoge Luis Corvalán Marquéz, los atentados ya sumaban un total de 253, con casi cinco víctimas fatales, más de cien heridos de consideración y cuantiosos daños a la economía[859]. Tales cifras aumentarían en las semanas siguientes de forma exponencial, sobre todo en lo que

[857] Véase, por ejemplo, las ediciones de *La Prensa*, Santiago, 26 de agosto de 1973, p. 8; y la de *El Mercurio*, Santiago, 26 de agosto de 1973, p. 37.

[858] *Clarín*, Santiago, 26 de agosto de 1973, p. 7.

[859] Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, p. 379.

respecta a los atentados explosivos en contra de bienes públicos y privados. En la práctica, este tipo de acciones revelaba la capacidad operativa que seguían teniendo los grupos de extrema derecha para desplegarse a lo largo del país, situación que además parecía confirmar los vínculos de estos movimientos con personal de las Fuerzas Armadas. Sin ir más lejos, el dirigente de Patria y Libertad, Manuel Fuentes Wendling, reconoce en sus memorias los contactos de esta organización con miembros de la Armada, quienes en diversas ocasiones les facilitaron material logístico para llevar adelante estos actos[860]. En esta misma línea se ubican los antecedentes entregados por el historiador José Díaz Nieva y que corroboran esos mismos contactos entre la Marina y el grupo nacionalista[861]. Por su parte, Max Marambio, aporta otro dato revelador. Según su testimonio, el día 10 de septiembre recibió la información de que se preparaba un inminente atentado explosivo en contra de un tren de carga que transportaría cobre desde la mina El Teniente. La acción, indica Marambio, sería cometida por un comando de Patria y Libertad, pero su coordinación general estaría a cargo del coronel de Ejército Cristián Ackernecht, quien había sido, pocos meses atrás, jefe del estado de emergencia en la zona de Rancagua[862]. Cabe recordar que este oficial desempeñó un sombrío papel en el conflicto que mantuvieron los mineros en huelga del yacimiento El Teniente durante los meses de abril y junio de 1973[863].

No lejos de estos lineamientos se ubicaban las declaraciones que hizo Roberto Thieme a la Policía Civil cuando reapareció —una vez más— en la escena pública a finales de agosto. Según, el periódico socialista *Las Noticias de Última Hora*, el dirigente frentepatrista, que hasta entonces se hallaba en condición de clandestinidad en el país, sostuvo que derrocarían al Gobierno de la UP, aunque hubiera «miles de muertos»[864].

[860] Fuentes Wendling, *op. cit.*, p. 297.

[861] Díaz Nieva, *Patria...*, *op. cit.*, p. 279.

[862] Marambio, *op. cit.*, p. 117.

[863] Bajo el mando de Ackernecht se produjeron diversos hechos violencia en la zona de Rancagua en el marco del conflicto laboral descrito. Además de los desórdenes y enfrentamientos callejeros, a fines del mes de mayo se produjo un violento allanamiento a la sede local del Partido Socialista, situación que significó su relevo del cargo. Después del golpe de Estado, Ackernecht fue enviado como agregado militar a Alemania, cargo al que debió renunciar en 1977 tras acusaciones de haber dirigido un campo de concentración y torturas en Chile.

[864] "'Derrocaremos al gobierno aunque haya miles de muertos'", *Las Noticias de Última Hora*, 28 de agosto de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo I, p. 805.

El conjunto de dinámicas, hechos y discursos que circulaban en el espacio social y político del país daban cuenta de un cuadro extremo de polarización y erosión del marco institucional. A lo largo del mes de agosto, distintas variables se fueron conjugando en esta dirección, ya fuese a nivel de los discursos que sobrevolaban el campo político como también respecto a los hechos de violencia que se sucedían con frenética rapidez y constancia. Las conductas que apuntaban en sentido contrario, esto es consensuar un acuerdo mínimo entre los actores en pugna para salvaguardar así el marco democrático, estaban situadas en un espacio muy marginal del debate público y sin capacidad suficiente para interpelar en esta dirección al conjunto de las fuerzas políticas y sociales. Parecía existir, pues, una fuerza subterránea que arrastraba a la mayoría de los protagonistas hacia un desenlace trágico del conflicto que se vivía.

En este contexto, qué balance se podría hacer a nivel general sobre el perfil de la lucha materializada durante agosto. Para Luis Corvalán Marquéz una de las conclusiones más relevantes de esta etapa es que ella permitió constatar que la izquierda, «en lo esencial», estaba derrotada. Bajo su perspectiva, ni la línea «gradualista» ni la «rupturista» habían logrado imponerse una a la otra ni menos alcanzar un estatus hegemónico dentro de la escena nacional. Cada una de estas posturas, señala el autor, adolecía de serias deficiencias teóricas y prácticas que incidían en su limitada capacidad de coacción. La vía gradualista, por ejemplo, suponía el concurso leal de la oposición democratacristiana a efecto de destrabar el conflicto, sin embargo, dicha colectividad estaba empeñada a esta altura en poner fin cuanto antes al Gobierno. Al mismo tiempo, la vertiente gradualista se mostraría inoperante para poner freno a las acciones desestabilizadoras de la extrema derecha. El polo rupturista, en tanto, fallaba en su interpretación de la realidad social y política al entenderla como un escenario en que las FF.AA. se dividirían en virtud de la maduración de un cuadro generalizado de crisis revolucionaria. Esta perspectiva hacía pensar a sus partidarios que se estaba *ad portas* de una crisis similar a la de Rusia en 1917, con un derrumbe completo de la institucionalidad y unas clases dirigentes sin capacidad de incidencia sobre los estratos subalternos. Según este autor, nada de esto se condecía con la realidad chilena de entonces. De este modo, lo que sostenía todavía a la UP eran las cúpulas militares constitucionalistas,

pues su factibilidad práctica ya no era posible en virtud de que la oposición había ganado la lucha[865].

Para Corvalán Marquéz, el mes de agosto reveló que las limitaciones y debilidades del proyecto de la UP, situadas en el marco de una lucha abierta en contra de diversos actores, serían un factor decisivo que contribuiría en su derrota final. Aunque las deficiencias y vacíos del proyecto socialista fue una cuestión discutida dentro de la dirigencia oficialista, la velocidad que tomaba el conflicto político postergó continuamente una discusión de fondo sobre el tema. Y a fines de agosto, cuando ya se habían conjugado numerosos factores que complotaban en contra de la UP, era demasiado tarde para intentar reencauzar el camino. Esta perspectiva, pues, que hace hincapié en una derrota anticipada de la vía chilena al socialismo no constituye una interpretación solo académica, pues algunos actores del periodo tenían una visión similar. El secretario general del PS, Carlos Altamirano, reflexiona sobre este punto indicando que la derrota del proyecto de la UP se produjo incluso antes de agosto: «Pienso —señalaba el exsenador— que dos meses antes del golpe ya estábamos derrotados, política y, por cierto, militarmente»[866].

Desde la perspectiva de Arturo Valenzuela, las semanas finales del gobierno de la UP demostraban que la totalidad del sistema político había quedado reducido en torno a la figura del presidente y un grupo mínimo de colaboradores. En ese contexto, estos actores estaban inmersos en una desgastante dinámica que los iba involucrando en una crisis tras otra, a lo largo de intensas jornadas de trabajo, buscando evitar lo que a estas alturas parecía inevitable. Bajo la óptica de este autor, el sistema institucional, y por ende un camino de solución democrática a la crisis que se vivía en el país, quedaba reducido a la voluntad de un puñado de hombres que no podían contrarrestar los esfuerzos y anhelos de otro grupo superior que se encamina en una dirección contraria[867]. Desde este ángulo interpretativo, Valenzuela pareciera establecer dos cursos de acción dentro de la crisis institucional chilena. Por una parte, un conjunto de fuerzas civiles y militares que pugnan por abrir paso a una salida *de facto* a la crisis derrocando al

865 Corvalán Marquéz, *Los partidos...*, *op. cit.*, pp. 381-382.
866 Salazar, G., *Conversaciones...*, *op. cit.*, p. 292.
867 Valenzuela, *op. cit.*, p. 174.

gobierno, y por otra, un contingente cada vez más reducido de figuras y funcionarios que están luchando hasta el final por sostener en pie el edificio democrático. Aunque no lo plantea en estos términos, es de suponer que Valenzuela piensa que el estrechamiento y reducción del camino institucional es inversamente proporcional al fortalecimiento de aquella línea encaminada hacia el golpe de Estado.

La visión de Joaquín Fermandois, en tanto, plantea dos dimensiones de análisis sobre el periodo final de la UP. La primera de ellas apunta a que la posibilidad de un entendimiento entre el gobierno y la DC operaba sobre la base de una desconfianza mutua, lo que además arrastraba un problema no menor, que era el hecho de que ambos actores ya no representaban la totalidad del escenario político y social. Como bien dice el autor, tanto la UP, o una parte de ella, como la DC hablaban de dos legalidades que remitían a órdenes en esencia distintos. En virtud de ello, la dimensión estructurada en torno a un posible acuerdo entre las partes no se condecía con la realidad, porque en la práctica se trataba de visiones ancladas a códigos y realidades institucionales diferentes. La segunda dimensión que explora Fermandois se refiere a la materialidad que fue adquiriendo la temática en torno al golpe de Estado en este mismo periodo. Un tópico que, a diferencia del punto anterior, parecía reflejar con mayor fidelidad lo que era la angustiosa realidad de los días finales de la UP. De este modo, en gran parte de los círculos políticos y militares, indica el autor, se discutió en torno a esta posibilidad, inclusive dentro del núcleo más cercano al presidente Allende. Y en el caso de la oposición, sobre todo aquella democratacristiana, el golpe se visualizaba bajo un estado anímico de impotencia e inclusive de tolerancia al creer que se trataría de un «brevísimo paréntesis»[868]. Desde estas coordenadas, Fermandois instala una discusión en torno a lo que parece ser lo real y lo aparente dentro de los días finales de la UP, es decir, respecto a aquellas iniciativas que por más que se pensaran y se anhelaran como viables resultarían impracticables, pues chocaban con el dramático muro de la realidad. Por cierto que lo real, en este caso, parece estar anclado a un desenlace trágico de la experiencia socialista chilena.

Por último, la perspectiva de Franck Gaudichaud apunta a constatar las carencias y limitaciones de una política de defensa del pro-

[868] Fermandois, *op. cit.*, pp. 734-761.

yecto popular ante un golpe que parece inminente. Por supuesto que el análisis de este autor, como ya se ha indicado, se realiza dentro de un marco más amplio que tiene que ver con resaltar el rol de los trabajadores dentro de los años de la UP. En esta línea, la etapa final del Gobierno de Allende pone en evidencia dos cuestiones centrales. La primera de ellas se refiere a la escasa preparación y previsión de los grupos dirigentes ante un enfrentamiento próximo a estallar. Aunque el tenor de los discursos sí parece advertir esta situación, en la práctica no existe una política militar cohesionada y viable en la izquierda chilena que se pueda contraponer a una acción insurreccional emanada desde las Fuerzas Armadas. Gaudichaud advierte, en efecto, que la consigna de «No a la Guerra Civil» repetida hasta el cansancio por la izquierda no lograba advertir que, en la práctica, esta ya había comenzado. Desde este ángulo, las limitaciones no serían solo estratégicas sino también interpretativas, es decir de análisis de la contingencia política. La segunda cuestión descrita por el autor se remite a las verdaderas capacidades de resistencia armada de los cordones industriales. A su juicio, la dictadura militar y en general aquellas visiones justificatorias del golpe de Estado describieron un cuadro que en realidad no fue tal. Aunque no se puede descartar la existencia de armamento, y aún la elaboración de ciertos planes de protección de las zonas industriales, ello está muy lejos de conformar lo que algunos denominaron como un Ejército de los cordones industriales. Lo que pareció existir, según el autor, fue una idea hipotética de defensa[869]. Desde esta perspectiva, los días finales de la UP corresponderían al de una revolución desarmada que estaba a la deriva en términos de estrategia militar y que contaba solo con la voluntad de lucha y sacrificio de los trabajadores.

Del conjunto de interpretaciones indicadas pareciera concluirse que ningún plano de la realidad política parecía ser favorable al Gobierno. En el ámbito institucional, el Ejecutivo debía lidiar contra el cerco que le habían impuesto el resto de los poderes del Estado, en especial el desarrollado por el Congreso Nacional. En este mismo campo de acción, aunque desplegándose e interactuando con el marco social, se ubicaba aquella demanda que pedía la renuncia de Allende a la primera magistratura. Gracias a la influencia que tenían

[869] Gaudichaud, *Chile...*, *op. cit.*, pp. 381-386.

los medios de comunicación de la oposición, sobre todo la prensa escrita y la radio, este tópico fue revestido como si se tratara de un clamor nacional, es decir, como la expresión límite de una sociedad cansada y abatida[870]. Desde el punto de vista de la iniciativa política, esta estaba reducida, siguiendo el argumento de Valenzuela, a un grupo cada vez menor de dirigentes que solo transitaban entre una crisis y otra, sin capacidad para resolver, en realidad, ninguna de ellas. Y desde el punto de vista militar, la UP esperaba contar con el concurso de algunas unidades armadas que la defendieran en caso de golpe, pero sin percatarse del giro que estaban tomando los altos mandos uniformados en torno a cohesionarse para derrocar al Gobierno. El secretario general del PC, Luis Corvalán Lépez, sostiene a este respecto que tras el tanquetazo de junio había «declinado casi verticalmente» la disposición de los oficiales de las Fuerzas Armadas a frenar una nueva insurrección: «Ya no se contaba con unidades militares dispuestas a defender al Gobierno constitucional», sentencia el dirigente[871]. Con lo que sí contaba la UP era con un significativo apoyo de masas en diversos segmentos de la población, lo que le permitió movilizar a amplios contingentes sociales en ciertas coyunturas, brindándole todavía cierto magnetismo o mística al proceso revolucionario chileno.

Fiesta y drama en septiembre

Buena parte del espíritu festivo con que aún contaba la izquierda se reflejó en los primeros días de septiembre al celebrarse un nuevo

[870] En esta óptica se insertó el llamado de la Confederación del Transporte Terrestre, cuyo dirigente nacional Juan Jara sostuvo, a inicios de septiembre, que si el presidente Allende no podía dar una solución al conflicto que se vivía, lo más «patriótico y necesario» era su renuncia a la jefatura del Estado. "Juan Jara formuló un llamado a los gremios", *La Prensa*, 3 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, p. 832. Desde el ámbito educacional también se hicieron llamados en esta dirección. El día 9 de septiembre, el Consejo Superior de la Universidad de Chile, además de los consejos de sedes y facultades de ese mismo plantel, emitieron un comunicado en que pedían expresamente que el presidente Allende cumpliera su palabra en el sentido de que renunciaría si se lo pedían los trabajadores y profesionales del país. "A la comunidad universitaria y al país", *El Mercurio*, 9 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 917-919.

[871] Corvalán Lépez, *El Gobierno...*, *op. cit.*, p. 245.

aniversario del triunfo de Salvador Allende. El día 4 de ese mes, el centro de la capital fue testigo de la última manifestación multitudinaria —cerca de quinientas mil personas— en favor de la UP. Sin embargo, este carácter que impregnaba los últimos días de la vía chilena al socialismo se vería ensombrecido por el tenor que alcanzaba la disputa política y por los hechos de violencia que no menguaban su periodicidad. Dentro de este marco convivían expresiones muy significativas de lo que habían sido tres años de activa movilización social, con sus particulares repertorios y códigos de acción, pero también con manifestaciones muy nítidas de intransigencia y confrontación. Así, un mismo espacio público podía testimoniar en cuestión de horas un tránsito desde la algarabía más profunda al crudo enfrentamiento entre grupos rivales.

Dentro del debate político, las principales líneas de tensión en los primeros días de septiembre estuvieron determinadas por tres grandes temas. El primero de ellos, se refería a la posición de la DC dentro de la crisis que afectaba al país. En una declaración publicada a inicios de ese mes el presidente de dicha colectividad, Patricio Aylwin, sostuvo que la posibilidad de reactivar el diálogo con el Ejecutivo estaba condicionada a que este restableciera la normalidad jurídica y legal que se había quebrantado. En ese marco, Aylwin sostenía que la labor del ministro del Interior, Carlos Briones y de los militares que integraban el gabinete, solo serviría a los propósitos antes descritos si lograban sobreponerse a la «mentalidad totalitaria, el sectarismo y el desprecio al orden jurídico» que imperaban en gran parte de la UP[872]. Lo anterior significaba, bajo el criterio de la DC, desarticular la estructura fundamental del proyecto socialista, objetivo que en ningún caso sería aceptado por el primer mandatario ni por los partidos que integraban la alianza oficialista. A partir de entonces, comenzó a elaborarse dentro de la DC la tesis de que la salida política a la crisis podía resolverse a través de una renuncia masiva de parlamentarios y miembros del Gobierno, incluyendo por supuesto la del propio presidente Allende. La idea, que había surgido desde los presidentes provinciales de aquella colectividad, fue acogida con beneplácito por todos los diputados y senadores

[872] "Imposible el diálogo", *La Prensa*, 1 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 818-819.

del partido, uno de cuyos representantes, Humberto Palza, sostuvo que dicho planteamiento no representaba solo a las bases de la DC sino que a la «inmensa mayoría» del país[873]. Indudablemente, una idea de este tipo, que implicaría la renuncia de diversas autoridades públicas, significaba agregar una cuota de tensión adicional a un cuadro político cada vez más frágil.

El segundo tema que generó confrontación entre los sectores políticos estuvo articulado en torno al tema de la Armada. Desde comienzo de agosto se venía desarrollando una espesa polémica a propósito de la denuncia que hiciera esta institución respecto al descubrimiento de un plan subversivo instigado, al parecer, por dirigentes de izquierda. El tema cobró todavía más revuelo porque los marinos y suboficiales detenidos acusaron a la Armada de haberles practicado cruentas torturas en diversos recintos. Desde este ángulo, emergerían acusaciones cruzadas en una y otra dirección respecto a la relación de algunos miembros del oficialismo con la suboficialidad y los procedimientos internos de dicha institución. A inicios de septiembre, el senador nacional Sergio Diez, acusó al ministro de Defensa, Orlando Letelier, de actuar con ambigüedad ante las declaraciones que hiciese el secretario general del PS, Carlos Altamirano, quien solidarizó en diversas ocasiones con los marinos detenidos. Según Diez, el ministro de Defensa no podía respaldar a un dirigente que había confraternizado con los «amotinados de la Armada», por lo que su posición a cargo de dicha secretaría de Estado se hacía insostenible[874]. Por su parte, el secretario general del MIR, Miguel Enríquez, acusó al almirante Merino, segunda antigüedad de la Armada, de estar complotando en contra del Gobierno junto a otros oficiales y civiles pertenecientes a diversas organizaciones[875].

Además, en estos días emergió otra polémica respecto a la Armada, la cual se refería a los supuestos cambios en el alto mando de la institución. Según la prensa de oposición, varios oficiales habían presionado al almirante Montero, e incluso al propio Allende, para

[873] "Parlamentarios PDC aprueban tesis de renuncia colectiva", *La Prensa*, 11 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 940-941.

[874] "Al ministro de defensa le parece bien que la marinería se amotine", *Tribuna*, 1 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 817-818.

[875] "Reuniones deliberativas denunció Miguel Enríquez", *Las Noticias de Última Hora*, 4 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 840-841.

que aquél dejara su cargo y se nombrara en su lugar a José Toribio Merino[876]. Aunque la institución negó tal trascendido, quedaba orbitando en el aire el problema del respaldo con que contaba Montero dentro de su institución[877]. Además, las supuestas presiones de un sector del alto mando por imponer a Merino reflejarían la importante capacidad operativa de los sectores golpistas existentes en la oficialidad naval en contra del gobierno. Desde estas coordenadas, la polémica que se había suscitado en torno a la Armada no quedó solo restringida al supuesto intento de sublevación. En pocos días se agregaron cuestiones relevantes como las acusaciones por torturas o los planes de golpe de Estado que, según denunciaran sectores de izquierda, se estaban digitando al interior de esta institución. El día 9 de septiembre, a menos de 48 horas del golpe militar, el tema de la Armada seguía siendo un tópico candente como lo demostró el discurso que pronunció ese día el senador Carlos Altamirano en un acto de masas del PS en que refirió esta problemática[878].

Finalmente, otro punto de tensión del debate político estuvo relacionado al tercer aniversario de la llegada de la UP al gobierno. La fecha que conmemoraba este hito se prestó para que surgieran una multiplicidad análisis y reflexiones en distintas direcciones. El día 3 de septiembre, el vespertino *La Segunda* publicó la columna de Alexis —seudónimo del periodista Álvaro Puga— en la cual se calificaba los tres años de gobierno de la UP como el «trienio de la angustia» en virtud del odio, violencia y destrucción que a su juicio vivía el país. El columnista refería, además, que en la marcha programada para el 4 de septiembre unos cuantos miles de ciudadanos «vencidos por el hambre y la impotencia» desfilarían por las calles temerosos de perder el «mendrugo» que les daba el marxismo[879]. Por su parte, el diario democratacristiano *La Prensa* refirió un conjunto

[876] "Hoy vence plazo de la Armada a Allende", *Tribuna*, 7 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 898-899.

[877] Los desmentidos de esta institución fueron firmados tanto por el comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero, como por el almirante José Toribio Merino. "Enérgicos desmentidos de jefes navales a pasquín *Tribuna*", *El Siglo*, 8 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 906-907.

[878] "'El golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe'", *Las Noticias de Última Hora*, 10 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 926-928.

[879] "El trienio de la angustia", 3 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 831-832.

de situaciones que daban cuenta de un panorama generalizado de «catástrofe económica» y destrucción de la convivencia social y política bajo la administración de la UP[880]. Desde la prensa de izquierda se enfatizaría en que el tercer aniversario se daba en un contexto especial, donde la naturaleza de los acontecimientos demandaba altas cuotas de sacrificio, entrega y capacidad de combate por parte de la clase obrera y el pueblo. Aunque se reconocía desde este sector el carácter festivo de la celebración, no se obviaba el hecho de que la UP atravesaba por un difícil momento[881]. Con todo, no se perdían esperanzas de que la situación cambiara y de que las fuerzas regresivas y contrarrevolucionarias, según indicaba *El Siglo*, fueran aplastadas por el pueblo[882].

Pero como se apuntó con anterioridad, no solo la intensidad de la disputa política ensombreció este tercer aniversario, pues los hechos de violencia contribuyeron a extremar aún más el clima de polarización existente. Ya desde comienzos de septiembre se venían produciendo numerosas situaciones conflictivas en diversos puntos del país, en lo que constituía una extensión de lo que se había observado a lo largo del mes de agosto. La prensa indicó, en este marco, numerosos datos respecto al descubrimiento de armas y campos de entrenamiento guerrillero en distintas zonas del territorio, además de las informaciones habituales sobre la ocurrencia de atentados explosivos.

En esta línea se situó, por ejemplo, la noticia proporcionada por el diario *La Prensa* el día 2 de septiembre que informó del descubrimiento de un campamento guerrillero en la zona de Puerto Saavedra. Según este medio, cerca de veinte personas, con doble militancia del PS y MIR, fueron aprendidas en el asentamiento Jorge Fernández[883]

[880] "¡Feliz aniversario!", 4 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 847-848.

[881] "El contexto de los tres años", *Las Noticias de Última Hora*, 4 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, p. 842.

[882] "Tercer aniversario", 4 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 849-851.

[883] Jorge Fernández fue un militante del MIR que en marzo de 1971 murió al explotarle una carga de dinamita que estaba manipulando al interior del fundo Moncul en la provincia de Cautín. Como se observó en otros casos, la memoria de la víctima era recordada por sus compañeros y colectividades respectivas mediante la formación de alguna brigada o espacio común que llevaba su nombre. En este caso se trataba de un asentamiento rural.

por parte de militares de la FACh y del Ejército, incautándose armas de diferentes calibres, una fábrica de granadas y diversos artefactos explosivos[884]. La nota informaba, además, que el arsenal con que contaban los «terroristas de extrema izquierda» estaba destinado a hacer volar numerosos sectores de la línea férrea de esa provincia[885].

Desde la prensa de izquierda, en cambio, se denunciaría el descubrimiento de armamento en poder de grupos e individuos vinculados a la oposición. El periódico *El Siglo* informó a este respecto que el subsecretario del Interior, Daniel Vergara, dio a conocer los detalles de un allanamiento efectuado a la casa central de la UCV que había sido tomada por estudiantes de derecha desde hacía varias semanas. En la operación policial, indicaba Vergara, se encontraron 343 bombas molotov, explosivos, detonantes, linchacos, miguelitos y garrotes de acero, entre otras armas[886]. Días más tarde, este medio denunciaría una nueva escalada terrorista con atentados a un oleoducto, a la línea férrea que unía Santiago y Cartagena, y numerosos ataques explosivos a microbuses de la capital. Para este periódico se trataba de hechos que atentaban contra el país y la seguridad nacional[887].

En medio de estos incidentes, se produjo la muerte de dos personas el día 4 de septiembre. La primera de ellas fue la del chofer de la línea de buses interurbanos Pullman Bus, Mario Montuschi Brito, producida en la localidad de Leyda cercana al puerto de San Antonio. La víctima formaba parte de un grupo de transportistas en paro que había cortado la carretera impidiendo el paso de otros vehículos. Frente a esta situación, Carabineros hizo uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, produciéndose numerosos

[884] En su discurso del día 9 de septiembre, el secretario general del Partido Socialista, senador Carlos Altamirano, indicó que el allanamiento efectuado por los militares había dejado una víctima fatal identificada como el campesino Juan Segundo Cuyán. "Carlos Altamirano: discurso en el Estadio Chile", 9 de septiembre de 1973, en Politzer, *op. cit.*, p. 189. Esta investigación no ha encontrado detalles de este caso, como, por ejemplo, un certificado de defunción de la víctima u otro antecedente.

[885] "Arsenal de guerra tenían 'guerrilleros'", 2 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, p. 822. Cabe recordar, sobre este punto, que han sido los militantes y agrupaciones de extrema derecha quienes han reconocido su participación en atentados de esta naturaleza durante los meses finales del Gobierno de la UP.

[886] "'Arsenal tenían los fascistas en U. Católica de Valparaíso'", 2 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, p. 823.

[887] "Terroristas volaron otro oleoducto: Rengo", 4 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, p. 849.

altercados que terminaron con Montuschi abatido por un disparo. Según el vespertino *La Segunda*, la policía uniformada disparó por la espalda al grupo en que se encontraba el chofer hiriendo a cuatro personas más. La víctima, continúa este medio, logró ser trasladada al hospital de Melipilla donde finalmente fallecería[888]. Otros periódicos como *El Mercurio* entregarían una información similar, es decir, responsabilizarían a personal de Carabineros como los autores del homicidio[889]. La prensa oficialista, por su parte, enfatizaría en que fueron los manifestantes quienes agredieron a las fuerzas de Carabineros, llegando a informar incluso, como lo aseguró *La Nación*, que algunos de los huelguistas intentaron balear a los policías[890]. Según la versión de *Las Noticias de Última Hora*, los manifestantes quisieron retener a uno de los carabineros para arrebatarle su arma de servicio, situación que habría originado la respuesta de los agentes. El saldo final del enfrentamiento, de acuerdo a la información proporcionada por el general de Carabineros, Fabián Parada, fue de tres personas heridas a bala y cuatro personas detenidas[891].

La segunda víctima fatal del día 4 de septiembre fue el estudiante Gunther Warnken Contreras de 16 años de edad. Su muerte se retrotrae, en realidad, a la jornada del 31 de agosto cuando en la ciudad de San Javier se produjo un enfrentamiento entre diversos civiles y personal de la Policía de Investigaciones. Según la versión del 1 de septiembre del periódico regional *La Mañana*, Warnken habría atacado con armas de fuego, junto a otras personas, el edificio regional de la policía civil, lo que generó la respuesta, también armada, por parte del personal policial. En dicho enfrentamiento, continúa este medio, la víctima habría sido herida en el hombro derecho lo que provocó su hospitalización inmediata quedando, además, en calidad

[888] *La Segunda*, Santiago, 5 de septiembre de 1973, pp. 9 y 10. Los datos aportados por este periódico son plenamente coincidentes con el certificado de defunción de la víctima que anota como causa de muerte una herida a bala torácica y fija su deceso a las ocho de la noche en dependencias del Hospital de Melipilla. "Certificado de defunción de Mario Montuschi Brito", Melipilla, 4 de septiembre de 1973, n.º de inscripción 1922, registro E1, folio 17957426, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].

[889] *El Mercurio*, Santiago, 5 de septiembre de 1973, p. 1.

[890] *La Nación*, Santiago, 6 de septiembre de 1973, p. 15.

[891] *Las Noticias de Última Hora*, Santiago, 5 de septiembre de 1973, p. 3.

de detenido[892]. Cinco días más tarde, este periódico indicaría que ante el agravamiento en el estado de salud de Warnken, las autoridades decidieron su traslado a Santiago, pero en la capital, según se indicaba, ningún centro asistencial recibió al herido por lo que tuvo que volver a San Javier. Todo esto habría agravado el estado de salud del herido lo que provocó al final su fallecimiento el día 4 de septiembre[893]. En la descripción que hace *El Mercurio* se indican los mismos elementos referidos por el periódico regional, señalando, sin embargo, que el ataque al cuartel policial se habría realizado con piedras, descartando así el uso de armas de fuego[894]. Por su parte, el certificado de defunción de la víctima anota como causa de muerte un paro cardiorespiratorio y una trombosis medular[895].

Algunos medios de prensa de la oposición no tardaron en relacionar las dos muertes ocurridas en esa jornada con la celebración de los tres años de gobierno de la UP. El diario *Tribuna* fue el más explícito a este respecto al ubicar ambas noticias dentro de una misma nota y bajo un sugerente titular: "Reguero de sangre dejó el 3.^er^ aniversario de Allende. Dos muertos: un camionero y un estudiante"[896]. Desde este ángulo, se daba a entender que el acto de conmemoración del triunfo de la UP se transformó en un escenario abierto de violencia y enfrentamiento entre grupos rivales en el cual, además, las huestes izquierdistas habían matado a dos civiles. Aunque ello no se ajustaba a la realidad, quedaba de manifiesto la intención de este periódico por conectar eventos de mayor trascendencia e importancia a las muertes registradas ese día, responsabilizando solo al gobierno de la UP por lo ocurrido. Desde la izquierda, se intentó bajar el perfil a estas informaciones, sobre todo en el caso de la muerte de Montuschi, insistiendo en que este junto a los manifestantes que le acompañaban habían atacado, incluso con armas, a la fuerza policial.

En paralelo a estos incidentes, otros hechos de violencia comenzaban a producirse. Un número importante de ellos tenía relación con

[892] *La Mañana*, Talca, 1 de septiembre de 1973, p. 1.
[893] *La Mañana*, Talca, 6 de septiembre de 1973, p. 5.
[894] *El Mercurio*, Santiago, 5 de septiembre de 1973, p. 18.
[895] "Certificado de defunción de Gunter Warnken Contreras", San Javier, 4 de septiembre de 1973, n.º de inscripción 223, folio 17958370, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].
[896] *Tribuna*, Santiago, 5 de septiembre de 1973, p. 9.

los operativos militares que se llevaban a cabo en busca de armas, los cuales fueron denunciados en su momento por su extrema violencia y rigurosidad. A los allanamientos llevados a cabo en el sur del país, se sumó, en los primeros días de septiembre, una acción militar enfocada en algunas zonas industriales de la capital. El mismo día que se conmemoraba el aniversario del triunfo de la UP, miembros de la FACh realizaron un allanamiento a las industrias Mademsa y Madeco ubicadas al sur de Santiago. Según las declaraciones del interventor de Mademsa, Enrique Fornés, el operativo se produjo cerca de las 17:15 horas cuando la mayoría de los trabajadores se dirigía a la Plaza de la Constitución para celebrar el tercer aniversario del Gobierno. A esa hora, indica este testigo, personal de la FACh irrumpió con violencia en el recinto en busca de armamento, reteniendo a algunos funcionarios de la planta y agrediendo con golpes a dos trabajadores que se encontraban en el lugar. Los heridos fueron identificados como Raúl Oyarzún y Aquiles Lara. En la empresa Madeco, en tanto, el operativo militar no dejó personas heridas, pero sí numerosos destrozos incluyendo material recientemente fabricado que debía ser exportado[897].

Las reacciones de parte de la izquierda y de los movimientos de trabajadores no se harían esperar frente a esta situación. Al día siguiente de producida la operación se realizó un acto de repudio en las calles cercanas a Madeco y Mademsa que congregó a más de diez mil personas. En el mitin intervinieron numerosos dirigentes sindicales y políticos de izquierda quienes cuestionaron con dureza el allanamiento llevado a cabo. El discurso más interesante fue el pronunciado por el secretario general de la CUT, Rolando Calderón. En su intervención el dirigente sostuvo que en las operaciones militares las únicas armas que se habían encontrado eran los brazos, herramientas y máquinas, pero sobre todo la moral y conciencia revolucionaria de los trabajadores. Con ello, se expresaba que la verdadera fortaleza y motor del proyecto de la UP radicaba en la conciencia de clase de los sectores proletarios y populares, los cuales no podían ser requisados por ningún ejército. Además, Calderón criticó

[897] "Un violento allanamiento a Mademsa y Madeco efectuó la FACh", *Las Noticias de Última Hora*, 5 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 858-859.

lo que a su juicio era una campaña destinada a separar a las Fuerzas Armadas del Gobierno «y, por ende, del pueblo»[898]. Bajo esta óptica, el dirigente sindical deseaba destacar que, ante los últimos acontecimientos, la relación que existía entre los cuerpos militares y el pueblo se encontraba en proceso de erosión. Ello, según la perspectiva de Calderón, no respondía a cuestiones episódicas o espontáneas, sino por el contrario formaba parte de una campaña mayor organizada por la oposición tendiente a lograr un distanciamiento efectivo entre ambos segmentos.

Desde la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales y otras organizaciones similares también se referirían al allanamiento efectuado por la FACh. En una carta dirigida al presidente Allende, esta organización denunció dicho operativo como una provocación «insolente e inaceptable» de parte de esta rama de las Fuerzas Armadas, acción que, además, no había recibido ninguna respuesta visible de parte de las autoridades. La misiva también tocaba otros puntos de interés, como la situación de los marineros torturados y la ofensiva llevada a cabo por la oposición. Al igual que el análisis de Rolando Calderón, que a partir de situaciones coyunturales establecía análisis más complejos, la carta de la Coordinadora Provincial estaba articulada en torno a un tema estructural: el del poder popular. Según se indicaba a lo largo de sus páginas, el presidente Allende, situado en un contexto de extrema gravedad, que tendía cada vez más hacia la instauración de una dictadura fascista, debería confiar sin vacilaciones en la fuerza de las masas[899]. Sin embargo, dicha perspectiva se distanciaba de la estrategia del primer mandatario tendiente a lograr, todavía en este contexto, un acuerdo político con la oposición democratacristiana.

La polémica en torno a la actuación de los militares se mantendría en los días siguientes a propósito de nuevos hechos que involucraron a las Fuerzas Armadas y sectores obreros. El día 7 de septiembre se produjo un allanamiento del personal de la FACh a la industria textil

[898] "Los allanamientos: el más grande atropello contra los trabajadores", *Las Noticias de Última Hora*, 6 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 880-881.

[899] "Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, Comando de Abastecimiento Directo y Frente Único de Trabajadores en Conflicto: Carta al presidente Salvador Allende", 5 de septiembre de 1973, en Farías, *op. cit.*, tomo 6, pp. 5018-5022.

Sumar, operación que dejaría un saldo de tres heridos a bala y una decena de detenidos[900]. Según la declaración de la institución armada, el operativo se llevó a cabo en horas de la tarde en un domicilio particular cercano a la industria Sumar, lugar donde se encontró gran cantidad de armas artesanales, linchacos, cascos, botellas plásticas y «abundante propaganda y documentación del Partido Socialista». En momentos en que se incautaba este material, continúa la declaración, los militares fueron atacados con armas de fuego por individuos apostados en el propio recinto industrial y en edificios cercanos. Esto generó una respuesta armada por parte de la FACh, además de la suspensión de la diligencia que se llevaba a cabo[901].

Pero los hechos de violencia registrados en esos días también involucraron otros espacios y otro tipo de actores. El día 5 de septiembre se reunió un numeroso contingente femenino en la zona sur poniente de la capital para manifestar su rechazo al Gobierno de la UP. La manifestación, que según el periódico *El Mercurio* hacía recordar la marcha de las cacerolas vacías de diciembre de 1971, había sido convocada por mujeres gremialistas y una organización denominada Poder Femenino. Entre los discursos pronunciados destacaron tanto los que exigían la renuncia al presidente Allende, como aquellos que saludaron la labor patriótica de las Fuerzas Armadas en el desarme de los grupos de izquierda. Cuando la manifestación estaba llegando a su término, informaba *El Mercurio*, elementos de las Brigada Ramona Parra atacaron con palos y piedras a las manifestantes causando numerosos destrozos, entre ellos el incendio de un automóvil Fiat 600 en una calle aledaña. El saldo final de estos incidentes fueron cincuenta personas heridas, la mayoría de las cuales debieron ser atendidas en la Posta Central y en el Hospital Clínico de la Universidad Católica[902].

Otro escenario en que se venían produciendo hechos de violencia fueron las carreteras. Estos espacios albergaban, en efecto, un extenso conflicto gremial que se había iniciado a fines del mes de julio y que en distintos puntos y zonas del territorio habían dejado numerosos

[900] Salazar, M., *op. cit.*, p. 358.

[901] "Enérgica declaración FACh", *La Segunda*, 8 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 899-900.

[902] "Repudio femenino al gobierno", 6 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, pp. 886-887.

incidentes. Cabe precisar que en el marco de los días finales de la UP no era solo el sector transportista el que se encontraba en huelga, sino también numerosos gremios y colegios profesionales[903]. Se había configurado, en efecto, un cuadro particularmente crítico que tenía al país paralizado en sus actividades esenciales. Los escasos desplazamientos de transporte de carga y de pasajeros que se registraban debían sortear numerosas amenazas como atentados explosivos y baleos. Estos últimos, que habían alcanzado cierta periodicidad, eran materializados sobre todo por grupos de extrema derecha que buscaban crear una situación de inseguridad y caos en las calles. El día 9 de septiembre se habían registrado, según consignaba *Las Noticias de Última Hora*, numerosos actos de este tipo en distintos puntos de la zona central del país, como Viña del Mar, Concepción y Temuco. En la mayoría de los casos se trató de atentados en contra de autómoviles particulares y torres de alta tensión[904]. Las notas del embajador norteamericano Davis dan cuenta de hechos similares ocurridos en estos días, siendo relevantes, a su juicio, los atentados con dinamita contra líneas férreas y el transporte de carga. El diplomático no dudaría en calificar estos sucesos como parte del «sabotaje derechista» que se había puesto en marcha en el país[905].

En este contexto, se produjo el día 10 de septiembre la muerte del transportista Guillermo Valdés Inostroza, ocurrida en una carretera interior de la región del Maule. En virtud de las implicancias del caso, su cobertura provino en especial desde la prensa de oposición. Según el periódico *La Segunda*, Valdés formaba parte de un grupo de transportistas en huelga que había paralizado el tráfico en una carretera cercana a la ciudad de Parral. En medio de esta manifestación, el chofer hizo parar un camión conducido por Segundo González, el cual intentaba abrirse paso por la fuerza para continuar su camino. Según el medio citado, cuando Valdés se acercó al vehículo de González a informarle de la situación, este último extrajo un arma de

[903] El 7 de septiembre, por ejemplo, se sumó a la paralización el Sindicato Nacional de Empleados de la Construcción aduciendo la caótica situación por la que atravesaba el país. "Paro en gremio de la construcción", *El Mercurio*, 8 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, p. 910.

[904] "Ola de atentados en todo el país", 10 de septiembre de 1973, en González y Fontaine, *op. cit.*, tomo II, p. 922.

[905] Davis, *op. cit.*, p. 192.

fuego y a través de la ventanilla del conductor disparó a quemarropa sobre la víctima. Además de estos datos, *La Segunda* informaba que González pertenecía al movimiento MOPARE —que agrupaba a los camioneros partidarios de la UP— y que los proyectiles disparados por el chofer impactaron en la cabeza de Valdés[906]. Este dato coincide con la información proporcionada por el certificado de defunción de la víctima que anota un traumatismo encéfalo craneano complicado y herida en el cráneo por proyectil balístico como causa de muerte. Asimismo, este documento refiere que la víctima falleció en el Hospital de Parral lo que indica que alcanzó a recibir algún tipo de asistencia médica[907]. El periódico *El Mercurio*, en tanto, sostuvo que los manifestantes que cerraron la carretera dejaron pasar un bus de Carabineros, situación que habría sido aprovechada por González para intentar atravesar el cerco. Ello habría despertado la indignación de los huelguistas que interpelaron duramente a González quien sacó su arma y disparó en contra de ellos, hiriendo de muerte a Valdés Inostroza[908]. La versión de *Tribuna* es idéntica a la anterior, aunque recalcando en el perfil izquierdista del victimario al titular en su portada "Allendista asesinó a camionero"[909].

Este hecho es interesante porque cierra la tercera etapa de este estudio y, además, constituye uno de los últimos hechos de violencia política civil ocurridos durante la UP. Cabe recordar que este extenso periodo se inició un año atrás, en el marco del paro gremial de los camioneros en octubre de 1972, coyuntura en la cual su primera víctima fatal fue otro transportista, Orlando Silva Saavedra, quien falleció también en una carretera a causa de un disparo. Una primera lectura sobre estos datos pone en primer plano la importante participación de los gremios en los años de la vía chilena al socialismo, siendo relevante su papel en la conformación de un gran frente opositor al gobierno. Como quedaría demostrado, el rol desempeñado por estos sectores resultaría exitoso toda vez que sus objetivos estratégicos tendientes

906 *La Segunda*, Santiago, 10 de septiembre de 1973, p. 20.

907 "Certificado de defunción de Guillermo Valdés Inostroza", Parral, 10 de septiembre de 1973, n.° de inscripción 304, folio 17956120, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile [fecha de emisión: 15 de julio de 2016].

908 *El Mercurio*, Santiago, 11 de septiembre de 1973, p. 1.

909 *Tribuna*, Santiago, 11 de septiembre de 1973, p. 1.

a paralizar la economía del país o, al menos, constreñir al máximo su capacidad productiva, se cumplirían casi en su totalidad. También fue una estrategia exitosa porque contribuyó a crear una sensación de anormalidad e inseguridad que sería propicia para impulsar la acción de los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas que deseaban poner término al proyecto de la UP. Se debe recordar, en este sentido, que el rol de los gremios y, en general de los sectores sociales contrarios al gobierno de Allende, funcionaría de forma complementaria a las estrategias que ponían en práctica los partidos de la oposición tanto dentro como fuera de sistema institucional[910].

Los últimos hechos de violencia política registrados en el periodo de la UP también permiten abrir una breve reflexión sobre su significado e importancia. Dichos eventos, que emergen de forma atropellada y conflictiva desde el 4 de septiembre hasta la antesala del golpe de Estado, revelan dinámicas de violencia que, con significados distintos, estaban conectados a un mismo espacio social y político. Desde luego, la confrontación callejera, los enfrentamientos armados y el núcleo denso de atentados explosivos registrados en los últimos meses daban cuenta de una dinámica que tuvo en el segmento civil de la sociedad a sus principales actores. Pero, por otra parte, la intervención de los militares en numerosos operativos en búsqueda de armamento constituiría un virtual adelanto de los repertorios represivos que las Fuerzas Armadas pondrían en ejecución en la misma mañana del golpe de Estado. Las denuncias que surgieron a este respecto desde distintos actores enfatizaron en reiteradas ocasiones que los uniformados hacían un uso desproporcionado de la fuerza, agrediendo con brutalidad a los trabajadores. Tal situación, planteaba la dramática idea de que un golpe militar —intuido a esa altura por la mayoría de los actores de este proceso— significaría altísimas cuotas de violencia en contra de la población[911].

[910] Casals, *Contrarrevolución...*, *op. cit.*, pp. 96-98.

[911] Véase, por ejemplo, Prats, *op. cit.*, pp. 510-513. El senador socialista Carlos Altamirano tenía una impresión similar. En varias ocasiones, por ejemplo, le señaló a Clodomiro Almeyda y a otros dirigentes de la UP que el golpe sería muy cruento y de una violencia terrible. Véase Politzer, *op. cit.*, p. 141. En este mismo sentido, el histórico dirigente indicó que en la mañana del 11 de septiembre la comisión política de su partido constató el carácter institucional del cuartelazo, lo que los llevó a concluir que las posibilidades de organizar algún tipo de defensa eran «prácticamente nulas». Véase Carlos Altamirano, *Dialéctica de una derrota*, p. 197.

Los últimos días de existencia del proyecto socialista de la UP testimoniaron una dinámica que, por una parte, sintetizaba varios meses de lucha y conflictividad con otra que, aunque esbozada solo de forma parcial, era portadora de una violencia extrema que se pondría en ejecución a partir del 11 de septiembre.

Conclusiones

El estudio de la violencia política durante los años de la vía chilena al socialismo representaba un desafío en diverso orden de materias. Desde luego, un tema de estas características exigía reflexionar en torno a su naturaleza y canales de expresión más relevantes. Como se sabe, los años de la Unidad Popular constituyeron una experiencia de indudable densidad histórica que ponía sobre la mesa un conjunto de relaciones, disputas y proceso de interacción social y política de amplio valor y significado. No se trató solo de la llegada del primer mandatario marxista al gobierno de una nación por vía electoral, sino de un proyecto que proponía concretar profundas transformaciones bajo el signo del socialismo. En la materialización de este proyecto, numerosos intereses serían trastocados, ya fuese porque se les despojó de parte de su poder o sencillamente porque la velocidad de los cambios y la dinamización de las relaciones sociales las sobrepasó.

Considerando las falencias y limitaciónes de los estudios que indagaron en el tema de la violencia política durante esos años, este libro enfatizó en el protagonismo de la sociedad civil dentro de esta problemática. Lo anterior no implicaba, por supuesto, desconocer los procesos de movilización o incluso radicalización de ciertos actores en una fecha anterior a 1970. Más bien se buscó recalcar en el predominio que tuvo el elemento civil a contar de ese periodo producto del cambio de paradigma que significó la implementación de un programa de transformación socialista en el país. Ya fuese al calor de dinámicas espontáneas u organizadas, la sociedad civil cobró una relevancia preponderante durante los años de la UP constituyéndose en un actor fundamental del proceso. Esto le llevó a ser protagonista de numerosas acciones y coyunturas, tanto para apoyar el proceso de transformaciones en curso como para oponerse a él. Tal situación se haría extensiva a los hechos de violencia que fueron protagonizados por estos actores.

Bajo los lineamientos descritos se reconstruyeron los principales hechos de violencia política ocurridos durante la UP en torno a tres etapas. La primera de ellas desde noviembre de 1970 a diciembre de 1971 tuvo como rasgo característico una dinámica social y política que transitó desde una fase favorable para el proyecto de la UP hacia un periodo de mayor confrontación. Dentro de este periodo, los hechos de violencia impactaron con profundidad en la escena nacional —no obstante el viento a favor que soplaba para la UP— al punto de incidir en un cambio dentro de las estrategias discursivas y factuales de diversos actores. Así, por ejemplo, el crimen del exministro Edmundo Pérez Zujovic, ocurrido en junio de 1971, tensó las relaciones entre la DC y la UP, reforzando además las posiciones que clamaban, dentro de la falange, por una posición más firme y enérgica en contra del gobierno. Se debe reseñar también que un grupo no menor de hechos de violencia se materializó como producto de las transformaciones que se llevaban a cabo. Esto se observaría de forma nítida cuando se puso en marcha la reforma agraria que intensificó la expropiación de predios agrícolas y haciendas, proceso en el cual intervinieron cientos de personas que en muchos casos actuaron por iniciativa propia. Esta situación, como se vio en su momento, fue resistida por los propietarios y hacendados quienes comenzaron a oponerse por la fuerza tanto a las ocupaciones ilegales como a los decretos emanados desde el propio Gobierno. Al confrontarse ambas estrategias de acción, los hechos de violencia estallaron con inusitada rapidez, siendo un sello característico de gran parte de esta etapa y de los meses siguientes. Al finalizar este periodo se observaría el crecimiento de una masa crítica que comenzó a mostrarse cada vez más refractaria a los planes de la UP.

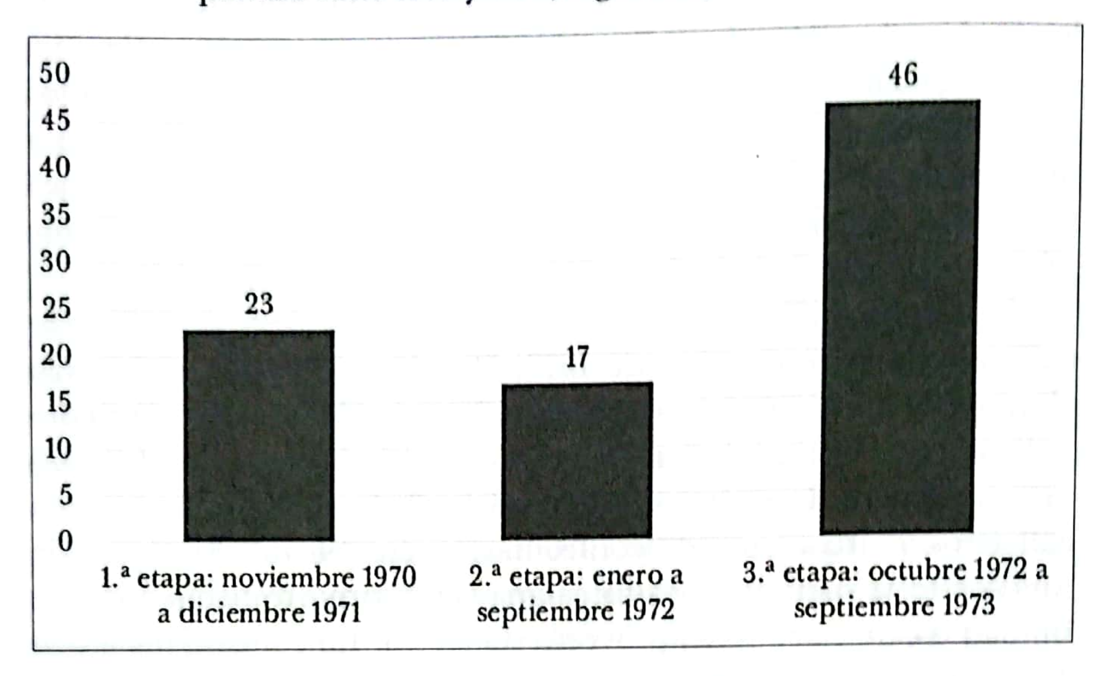
La segunda etapa, que se extendió durante gran parte del año 1972, vio la conformación de un escenario de claro signo bipolar, en que el tono discursivo que comenzó a ganar terreno fue aquel en torno a la viabilidad del gobierno a largo plazo. Esto daba cuenta de que ya se habían explicitado algunos propósitos tendientes a buscar la cancelación o derribo del proyecto socialista. Tales objetivos fueron respondidos con acritud y dureza de parte de las huestes oficialistas, que reafirmaron, aún con los matices existentes en su seno, su propósito de defender al gobierno y el proceso de transformaciones en curso. Ambos postulados contribuyeron así a conformar

un escenario de confrontación más abierta que se imaginaba, para un buen número de actores, como un campo de batalla en el cual se escenificarían disputas de indudable relevancia. En este contexto, los hechos de violencia política mantuvieron las características ya descritas, incidiendo en las estrategias discursivas de algunos partidos y movimientos. Desde este ángulo, la violencia fue sopesada como una problemática de primer orden que no respondía a situaciones marginales o esporádicas, sino que estaba posicionada como un factor relevante dentro de la lucha política.

La tercera y última etapa, que abarca desde fines de 1972 y se extiende hasta septiembre de 1973, fue el periodo que concentró algunas de las expresiones más significativas de la violencia materializada por actores civiles. De hecho, esta fue la etapa donde hubo mayor número de muertes, así como también de enfrentamientos callejeros y situaciones de confrontación en general. El marco de fondo estaba signado por una pugna sin retorno respecto a la viabilidad o cancelación del proyecto socialista. En concordancia con esa problemática la mayor parte de los actores políticos dirigió sus estrategias discursivas y factuales a fin de lograr la materialización de sus objetivos. En el caso de la oposición, su despliegue no se limitó solo a una actuación al interior de las instituciones del Estado, pues sus objetivos de derrocar al gobierno se materializaron en distintos frentes. Desde el oficialismo existía conciencia de que la proyección y estabilidad del programa socialista corría serio riesgo de verse abortado antes de 1976. A partir de este diagnóstico, un sector importante de la izquierda chilena buscó defender al gobierno con todos los medios existentes a su alcance, lo que implicó extremar los recursos discursivos y las acciones que fortalecieran al denominado poder popular. El contexto nacional mostró así un conjunto de tensiones acumuladas que en el transcurso de 1973 resultaron imposibles de solucionar dentro de los cauces institucionales.

Desde un punto de vista cuantitativo se pueden extraer varias conclusiones respecto a los principales hechos de violencia política que se reconstruyeron en este libro. Las muertes producidas a lo largo del periodo 1970-1973, por ejemplo, se sitúan en una escala que va desde los ochenta y seis a los casi cien casos aproximadamente. En el siguiente gráfico se entrega una visión de conjunto en base a los casos que esta investigación pudo abordar a partir de las fuentes accesibles.

Gráfico n.º 1
Muertos en el marco de incidentes de connotación política entre 1970 y 1973, según etapas de estudio.

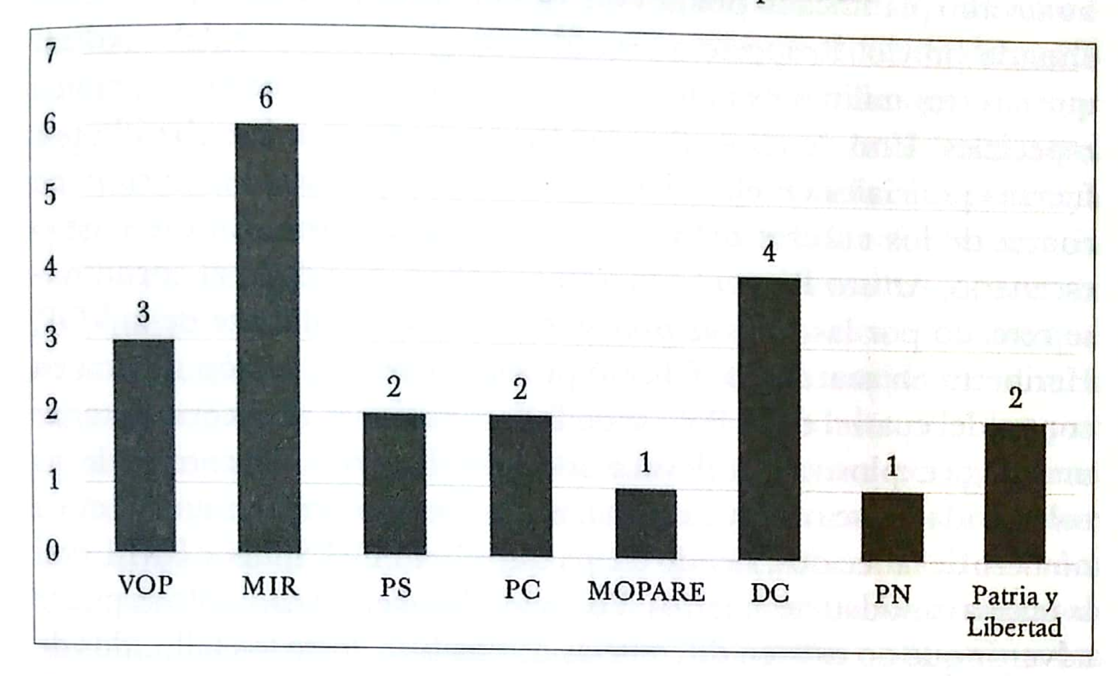


Elaboración propia en base a datos revisados para esta investigación.

La cifra total de 86 víctimas es tentativa en virtud de que la ausencia de fuentes no ha permitido corroborar algunos casos también ocurridos durante estos años. Respecto a los casos abordados se puede concluir que sus muertes se produjeron en su mayoría por la acción de civiles que actuaron a través de distintos mecanismos e instrumentos. Un porcentaje más bajo de estos casos falleció por la acción de militares o fuerzas policiales dentro de contextos igualmente polarizados. Este último fenómeno alcanzaría mayor intensidad a contar de la tercera etapa que es el periodo que concentró mayor número de víctimas fatales de los tres periodos indicados. En las dos etapas anteriores —noviembre de 1970 a diciembre de 1971 y enero a septiembre de 1972— la lucha social y política, si bien iniciaba un camino progresivo de confrontación, no alcanzó los niveles observados a lo largo de 1973. De hecho, la suma total de víctimas durante la tercera etapa es de 46 lo que constituye un poco más del cincuenta por ciento del total de fallecidos durante toda la UP.

Otro dato interesante que se puede analizar es respecto a la militancia política de las víctimas. En el siguiente gráfico se detalla esta situación.

Gráfico n.º 2
Muertes ocurridas en incidentes connotación política entre 1970 y 1973, según militancia política.



Elaboración propia en base a datos revisados para esta investigación.

El movimiento político que sufrió más víctimas fue el MIR con seis militantes fallecidos, aunque habría que aclarar que no todos fueron muertos a manos de actores pertenecientes a la oposición. Solo Nilton Da Silva, Juan Huillipán y Moisés Huentelaf cabrían dentro de esta categoría, mientras que Arnoldo Ríos Maldonado, Eladio Caamaño Sobarzo y Jorge Fernández Moreno fallecieron en otras circunstancias. Este último murió, como se recordará, al detonarle un artefacto explosivo que transportaba en una zona rural del sur del país, mientras que Caamaño falleció en Concepción por la acción de Carabineros en el marco de unos desórdenes callejeros. Ríos Maldonado, en tanto, murió en un confuso incidente con brigadistas de la BRP perteneciente al PC. La segunda organización que perdió más militantes fue la DC con cuatro casos[912]. En la mayor parte, sus muertes estuvieron enmarcadas en situaciones de confrontación política con grupos rivales, como fueron los casos de Juan Millalonco, Jaime Con-

[912] La DC a través de su periódico *La Prensa* indicó la muerte de un quinto militante, identificado como Carlos Carvajal Osorio, en el mes de marzo de 1972. Sin embargo, el caso fue escasamente cubierto y desde el propio matutino no se entregaron mayores detalles del hecho.

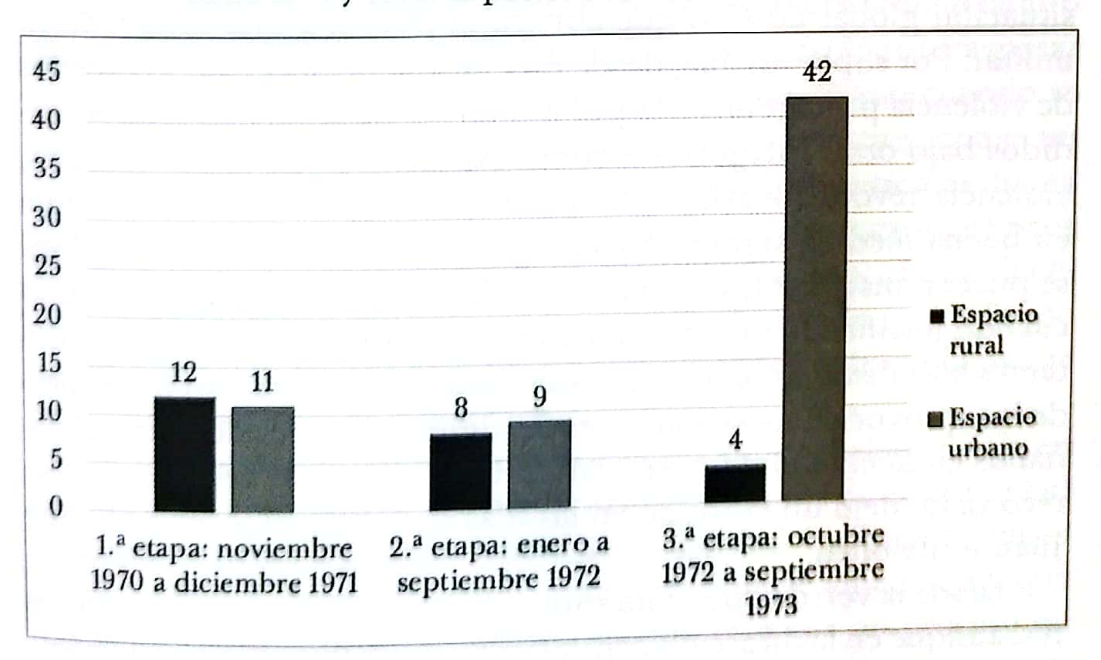
treras Iglesias y Germán González Menares. El caso del exministro Edmundo Pérez Zujovic tiene un matiz especial pues se trató de un homicidio planificado por la VOP donde no hubo un enfrentamiento armado previo. Respecto a esta última agrupación, se debe indicar que sus tres militantes muertos corresponden a situaciones también especiales. Uno de ellos, Ronald Rivera Calderón, fue abatido por fuerzas policiales en el marco de la redada que llevaban a cabo en contra de los autores del crimen de Pérez Zujovic. En ese mismo escenario, Arturo Rivera Calderón se habría suicidado al encontrarse cercado por las fuerzas policiales. El tercer militante de la VOP, Heriberto Salazar Bello, falleció producto de una acción suicida en contra del cuartel de la Policía de Investigaciones al hacerse detonar una carga explosiva que llevaba adosada al cuerpo. En el resto de las colectividades se observan cifras más o menos similares en cuanto a número de fallecidos, siendo en los casos del PC, PS, PN y FNPL casi la misma cantidad de muertos. Vistos los datos en su conjunto se puede advertir que no existen diferencias ostensibles entre los fallecidos de un bloque y otro —oficialismo u oposición—, siendo las víctimas de izquierda, con todas las precisiones indicadas, levemente superior a las de los militantes opositores. Con todo, se debe señalar que, en el caso de los fallecidos pertenecientes a la oposición, sus muertes se produjeron, en su gran mayoría, por la acción de grupos o individuos que pertenecían a colectividades rivales, no observándose, por ejemplo, situaciones de confrontación violenta dentro del mismo bloque.

A diferencia de lo ocurrido entre 1971 y 1972, en que los hechos de violencia política se alternaron entre los espacios rurales y urbanos, a lo largo de 1973 se observó un predominio de la violencia en las zonas urbanas. En el gráfico n.º 3 se detallan las muertes producidas tanto en espacios rurales como urbanos a lo largo de los tres años de gobierno de la UP.

Desde noviembre de 1970 y hasta diciembre de 1971, la mayoría de las muertes se produjeron en espacios rurales, aunque su número total no fue tan superior a las muertes ocurridas en espacios urbanos. La etapa entre enero y septiembre de 1972 conserva este mismo rasgo, aunque con una leve mayoría de las muertes ocurridas en espacios urbanos. El cambio observado hacia 1973, en que comenzaron a predominar las muertes en espacios urbanos, se explicaría porque a fines de 1972 la mayoría de los objetivos que se había trazado para la

reforma agraria estaban, en lo fundamental, ya concretados. Es decir, el proceso de expropiación y traspaso de las tierras agrícolas desde sus antiguos propietarios hacia el campesinado se realizó a tal velocidad que en poco menos de dos años se habían modificado de modo sustancial las relaciones de propiedad en Chile. Ello no significó, por supuesto, la ausencia de nuevos conflictos o hechos de violencia en el campo chileno, pero estos no tuvieron el carácter ni la trascendencia que tuvieron antaño, por ejemplo, en 1971, cuando la reforma agraria estaba en plena expansión. Lo que se constataría en el transcurso de 1973 fue una lucha asentada sobre todo en los espacios urbanos, que eran los lugares donde se estaban definiendo algunos de los puntos más relevantes de la pugna política. El tema del poder popular, por ejemplo, en tanto estructura que serviría para defender al gobierno de la UP ante un eventual golpe de Estado, fue una dinámica que adquiriría una fisonomía propia en los grandes centros industriales urbanos. Fue allí, en efecto, que los sectores proletarios alcanzaron un importante nivel de conciencia y organización política que les permitiría, según declaraban algunos sectores de izquierda, apoyar el proceso de cambios y transformaciones.

Gráfico n.º 3
Muertes ocurridas en incidentes connotación política entre 1970 y 1973. Espacios urbanos versus rurales.



Elaboración propia en base a datos revisados para esta investigación.

Respecto a los incidentes y enfrentamientos callejeros sus cifras son exponencialmente más amplias que la de fallecidos, alcanzando puntos altos de conflictividad en los tres periodos descritos, pero sobre todo en la última etapa. Esta investigación centró su atención en aquellos incidentes más característicos de estos años, como disputas por el control de espacios públicos, enfrentamientos con la policía, ataques a sedes y locales políticos o refriegas y ataques entre individuos y grupos, y sobre los cuales, además, existían referencias en distintas fuentes y publicaciones. Como era de esperar, en la materialización de estos hechos hubo una participación protagónica de individuos de distintas corrientes políticas, lo que era indicativo del carácter transversal que alcanzó la violencia en tanto instrumento para la lucha política. Cabría apuntar, además, que tanto las autoridades de gobierno como numerosos parlamentarios hicieron registros detallados de estos acontecimientos, situación que daba cuenta de la importancia que tuvo este tópico dentro del debate público chileno.

Ahora bien, desde la trinchera política de cada sector los hechos de violencia fueron utilizados, como se ha mostrado a lo largo de este libro, con el objetivo de reforzar buena parte de sus estrategias discursivas y factuales. Así, un segmento no menor de la izquierda visualizó que la violencia ocurrida en el país respondía a los planes sediciosos de la oposición cuyo objetivo último sería generar una situación global de caos que abriera la puerta a una intervención militar. Por supuesto que, desde esta misma perspectiva, los hechos de violencia protagonizados por militantes de izquierda eran entendidos bajo otras categorías —como expresiones de lucha de clases, violencia revolucionaria, defensa del pueblo, entre otros— lo que en buena medida significaba su legitimación. Dentro de esta línea se pueden inscribir las afirmaciones del senador Carlos Altamirano cuando justificó la utilización de armas de fuego por parte de militantes socialistas quienes, bajo su mirada, solo se habían defendido de las «provocaciones» y ataques de algunos jóvenes democratacristianos en la ciudad de Aysén en abril de 1971. Este hecho, como se recordará, dejó un fallecido en las filas de la DC, el joven militante Juan Millalonco.

Desde la vereda opositora se desarrollaron razonamientos similares, aunque en la dirección contraria. Es decir, visualizar la violencia como un producto consustancial del proyecto socialista, lo que sig-

nificaba una amenaza para la mantención del estado de derecho, las libertades individuales y la democracia. Desde esta premisa general, hubo al menos dos tópicos que los partidos opositores recalcaron con insistencia a lo largo de estos años, a saber: la actuación de grupos armados ilegales y la conformación de un poder popular. Aunque ambos temas representaban elementos distintos, para la oposición —sobre todo desde fines de 1972— se trataría en la práctica del mismo fenómeno, siendo los grupos armados una expresión material del denominado poder popular. Bajo estas coordenadas, y al igual como operaba el criterio de justificación en la izquierda, los hechos de violencia perpetrados por miembros de la oposición fueron entendidos como una respuesta legítima a la «violencia marxista». Cabe recordar que el propio Sergio Onofre Jarpa advirtió a inicios de 1973 que si no existían garantías para vivir y trabajar con seguridad los chilenos tomarían la justicia en sus manos y devolverían «bala por bala». Su correligionario, Juan Luis Ossa, había señalado, en tanto, que respondería sin titubear, e incluso con armas de fuego, a las provocaciones marxistas en contra de los militantes del PN.

¿Qué importancia tuvieron, en el contexto descrito, aquellos discursos que abogaron por el diálogo y el entendimiento entre los actores? A decir verdad, y más allá de algunas pequeñas incidencias, su impacto fue menor. Bajo un cuadro de polarización generalizada, donde la violencia se había instaurado como un recurso válido dentro de la pugna política, este tipo de declaraciones no logró traspasar más allá de sus propios espacios de formulación. Y aun cuando se constituyó, por ejemplo, en los debates parlamentarios, como un punto de equilibrio entre las pasiones políticas más extremas, había una corriente subterránea que abrazaba todos los discursos políticos dentro del mismo conflicto. Se podría decir que este tipo de argumentos —independiente de su importancia e inclusive de su trasfondo moral— no tenía puntos de contacto con los códigos discursivos que predominaban en esos momentos.

La mayor parte de los elementos hasta aquí señalados deja en evidencia un conjunto de particularidades y puntos de continuidad histórica respecto a la experiencia de la Unidad Popular. El rasgo de continuidad, desde una muy larga duración, se vincularía a que tras la caída del proyecto socialista devino otra vez un proceso de recomposición del Estado, aunque esta vez desde una perspectiva

más extrema y represiva. En otras palabras, la UP, en tanto periodo crítico de la historia nacional no fue el punto de inflexión que marcaría un nuevo rumbo institucional para el país, sino que, por el contrario, abrió paso a una ya vieja reconfiguración del orden. En este sentido, la vía chilena al socialismo puede ser entendida como un eslabón más de una larga cadena de hitos articulada en torno a la fórmula crisis-recomposición-crisis.

Por su parte, el rasgo de excepcionalidad de la experiencia socialista chilena estaría dado por un conjunto de factores que confluyeron en Chile al finalizar los sesenta y que nunca se habían articulado de esa forma bajo otros periodos. A la crisis estructural del Estado desarrollista se sumaría la emergencia de programas de transformación global, excluyentes entre sí, donde la izquierda ensayaría su propuesta revolucionaria en la parte final de ese ciclo histórico. En este contexto, se avizoraba con meridiana claridad que el conflicto político no estaría ausente bajo esta experiencia. Ello no respondía únicamente a los procesos de movilización y radicalización política que precedieron a los desarrollados durante la UP, sino también a que los actores políticos y sociales no habían experimentado en el pasado un proyecto de la magnitud transformadora como fue el de la vía chilena al socialismo. Es decir, no era solo la polarización de los grupos subalternos, sino también de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, de una tensión dentro del propio aparato institucional. Para un observador agudo, la violencia no podía ser en este marco un fenómeno extraño o ajeno a las directrices que se estaban dibujando en el país.

Ciertamente que la particularidad de esta violencia estuvo dada por el predominio de una de características civiles, que fue más preponderante a la larga que aquella de naturaleza estatal, involucrando amplios contingentes de actores provenientes desde distintas vertientes y colectividades. Quizás esta particularidad del proceso socialista chileno deba ser otra vez revisada y reflexionada a partir de nuevos ángulos, sobre todo por la cantidad de elementos que confluyeron en su configuración y que nuevos estudios e investigadores están sacando a la luz en los últimos años.

Referencias bibliográficas

FUENTES DOCUMENTALES

Cámara de Diputados, *Diario de sesiones*.
Instituto Nacional de Estadísticas, *XIV censo de población y III de vivienda*, Santiago, 1970.
Policía de Investigaciones de Chile, *Colección histórica de homicidios, 1947-2008*.
Programa de la Unidad Popular, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1969.
Programa básico de Gobierno de la Unidad Popular. Candidatura presidencial de Salvador Allende, Santiago, 1970.
Senado, *Diario de sesiones*.
Servicio de Registro Civil e Identificación Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Chile.

PERIÓDICOS Y REVISTAS

Aquí Está, Santiago.
Aurora de Chile, Santiago.
Chile Hoy, Santiago.
Clarín, Santiago.
Diario Color, Concepción.
El Colono de Traiguén, Traiguén.
El Correo de Valdivia, Valdivia.
El Diario Austral, Temuco.
El Llanquihue, Llanquihue.
El Mercurio, Valparaíso.
El Mercurio, Santiago.
El Rancagüino, Rancagua.
El Siglo, Santiago.
El Sur, Concepción.

Ercilla, Santiago.
La Discusión, Chillán.
La Estrella, Valparaíso.
La Nación, Santiago.
La Prensa, Osorno.
La Prensa, Santiago.
La Prensa Austral, Punta Arenas.
La Segunda, Santiago.
La Tercera, Santiago.
Las Noticias de Última Hora, Santiago.
Las Últimas Noticias, Santiago.
Patria y Libertad, Santiago.
PEC, Santiago.
Portada, Santiago.
Principios, Santiago.
Punto Final, Santiago.
Puro Chile, Santiago.
Qué Pasa, Santiago.
Tarea Urgente, Santiago.
Tribuna, Santiago.

Artículos, capítulos de libros y ponencias

"A cincuenta años del triunfo de Allende y la Unidad Popular", *Revista Anales*, séptima serie, n.º 18, Santiago, 2020

Aggio, Alberto, "Uma insólita visita: Fidel Castro no Chile de Allende", *Historia*, vol. 22, n.º 2, São Paulo, 2003.

Allier Montaño, Eugenia, "Memoria, política, violencia y presente en América Latina", en Eduardo Rey Tristán y Pilar Cagiao Vila (coords.), *Conflicto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo*, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacions e Intercambio Científico USC, 2011.

Alonso, María Nieves, "José Balmes: Como un río que desborda sus orillas", *Atenea*, n.º 489, Concepción, 2004.

Bengoa, José, "Reforma agraria en Chile: A treinta años del setentaitrés y a cuarenta de su comienzo. Proposiciones, rupturas y derroteros", en Francisco Zapata (comp.), *Frágiles suturas: Chile a treinta años del Gobierno de Salvador Allende*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Bernedo, Patricio y Porath, William, "A tres décadas del golpe: Cómo contribuyó la prensa al quiebre de la democracia chilena", *Cuadernos de Información*, n.º 16-17, Santiago, 2003-2004.

Bonnassiolle, Marcelo, "Violencia política y conflictividad social durante el Gobierno de la Unidad Popular. El caso de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), 1970-1971", *Diálogos*, vol. 16, n.º 1, enero-junio, San José de Costa Rica, 2015.

Brum, Mauricio, "'Hoy soy pueblo': a poesía militante de Nilton Rosa da Silva, um brasileiro exilado no Chile de Salvador Allende", *Estudios Históricos*, año VII, n.º 14, julio, Rivera [Uruguay], 2015.

Brum, Mauricio, "'Extender e impulsar las ideas por las que ofrendó su vida': a construção de Nilton Rosa Da Silva como um mártir da esquerda revolucionária chilena", *Estudios Históricos*, año VIII, n.º 17, diciembre, Rivera [Uruguay], 2016.

Cerda, René, "La masacre de El Salvador: La Revolución en Libertad se mancha con sangre obrera", *Archivo Chile*, 2012, disponible en https://www.archivochile.com/carril_c/cc2012/cc2012-060.pdf [fecha de consulta: 27 de junio de 2021].

Corvalán Marquéz, Luis, "Las acciones encubiertas norteamericanas entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1970, según el Informe Church y otros documentos desclasificados por los EE.UU.", *Tiempo Histórico*, n.º 2, Santiago, 2011.

Cuesta Bustillo, Josefina, "Memoria e historia. Un estado de la cuestión", *Ayer*, n.º 32, Madrid, 1998.

Díaz Nieva, José, "'Patria y Libertad' y el nacionalismo chileno durante la Unidad Popular, 1970-1973", *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América*, vol. 2, n.º 2, Santiago, 2003.

Díaz Nieva, José y Mario Valdés Urrutia, "Confrontación y violencia política en Concepción en los días del Presidente Allende (1970-1973)", *Cuadernos de Historia*, n.º 50, Santiago, 2019.

Garretón, Manuel Antonio, "Memorias en disputa: consenso fáctico y lucha de contenidos", en Andrés Estefane y Gonzalo Bustamante (comps.), *La agonía de la convivencia. Violencia política, historia y memoria*, Santiago, Ril Editores, 2014, pp. 153-160.

Gaudichaud, Franck, "La Central Única de Trabajadores, las luchas obreras y los cordones industriales en el periodo de la Unidad Popular en Chile (1970-1973). Análisis histórico crítico y pers-

pectiva", trads. Olivier Álvarez Seco y Rocío Anguiano Pérez, Santiago, Centro de Estudios Miguel Enríquez, 2003, https://www.archivochile.com/Mov_sociales/CUT/MScut0007.pdf, p. 5 [fecha de consulta: 26 de julio de 2021].

Goicovic, Igor, "Teoría de la violencia y estrategia de poder en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 1967-1986" [ponencia], Medio Siglo de debates tácticos y estratégicos en la izquierda chilena. 1950-2000 [seminario], Universidad de Santiago de Chile, noviembre, Santiago, 2002.

Goicovic, Igor, "Temas y debates en la historia de la violencia política en Chile", *Contenciosa*, año II, n.º 3, Santa Fe, 2014.

Goicovic, Igor, "Inestabilidad, conflictividad y violencia política en Chile, 1925-1941", *Historia Caribe*, vol. XVI, n.º 39, Barranquilla, 2021.

Hobsbawm, Eric, "Chile: año uno", en Leslie Bethell (ed.), *¡Viva la Revolución! Eric Hobsbawm sobre América Latina*, Barcelona, Crítica, 2018.

Hurtado, Sebastián, "El golpe que no fue. Eduardo Frei, la Democracia Cristiana y la elección presidencial de 1970", *Estudios Públicos*, n.º 129, verano, Santiago, 2013.

Loveman, Brian y Elizabeth Lira, "La violencia política en Chile: contextos y prácticas desde 1810", en Iván Jaksic y Juan Luis Ossa (eds.), *Historia política de Chile, 1810-2010*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2017.

Monsálvez Araneda, Danny, "La Asamblea del Pueblo en Concepción. La expresión del poder popular", *Revista de Historia*, año 16, vol. 16 (2), Concepción, 2006.

Monsálvez Araneda, Danny, "El debate historiográfico y político sobre los orígenes de la violencia política en la historia reciente de Chile (1960-1990)", *Sociedad y Discurso*, n.º 23, Aalborg, 2013.

Monsálvez Araneda, Danny, "Concepción, de la Unidad Popular al Golpe de Estado (1970-1973): el tránsito de la confrontación y el conflicto a la violencia política institucionalizada", *Revista Notas Históricas y Geográficas*, n.º 27, julio-diciembre, Valparaíso, 2021.

Morales Aguilera, Francisco Javier "¿Una mancha de sangre en la vía chilena al socialismo? Muerte de militantes de partidos

y agrupaciones políticas en tiempos de la Unidad Popular", *Revista Historia Autónoma,* n.º 15, Madrid, 2019.

Morales Aguilera, Francisco Javier, "Orígenes de la tesis sobre violencia política en el Chile de los sesenta y setenta. Un análisis de sus documentos fundantes", *Izquierdas*, n.º 49, Santiago, 2020.

Orellana Valenzuela, Gilda, "Clotario Blest en la CUT: Por una nueva cultura sindical y política (1953-1961)", *Tiempo Histórico*, n.º 7, Santiago, 2013.

Palieraki, Eugenia, "Las manifestaciones callejeras y la experiencia de la Unidad Popular (1970-1973)", *Pensamiento Crítico*, n.º 3, Santiago, 2003.

Palieraki, Eugenia, "¿Bajo el signo de Fidel? La revolución cubana y la nueva izquierda revolucionaria chilena en los años 1960", en Tanya Harmer, Alfredo Riquelme (eds.), *Chile y la Guerra Fría Global*, Santiago, Ril Editores, 2014.

Pérez, Cristián, "Salvador Allende, apuntes sobre su dispositivo de seguridad: El Grupo de Amigos Personales (GAP)", *Estudios Públicos*, n.º 79, invierno, Santiago, 2000.

Ponce, José Ignacio, "Autonomía versus politización. Tensiones en la cultura política sindical entre la 'vieja democracia' y el inicio de la postdictadura chilena", *Rosa*, 26 de agosto, Santiago, 2019, disponible en: https://www.revistarosa.cl/2019/08/26/autonomia-versus-politizacion-tensiones-en-la-cultura-politica-sindical-entre-la-vieja-democracia-y-el-inicio-de-la-postdictadura-chilena/ [fecha de consulta: 16 de mayo de 2023].

Riquelme, Alfredo, "Política de reformas e imaginación revolucionaria en el Chile constitucional (1933-1973)" en, Marianne González y Eugenia Palieraki (comps.), *Revoluciones imaginadas. Itinerarios de la idea revolucionaria en América Latina contemporánea*, Santiago, Ril Editores, 2012.

Rodríguez, Laura y Alejandro Paredes, "Organizaciones de derecha y conspiración antiallendista en Mendoza, Argentina (1970-1976)", *Estudios Transandinos*, n.º 17: 1, Santiago, 2012.

Rojas Flores, Jorge, "Los estudiantes secundarios durante la Unidad Popular, 1970-1973", *Historia*, PUC, n.º 42, julio-diciembre, Santiago, 2009.

Sánchez, Felipe, "Violencia política en la provincia de Llanquihue durante la reforma agraria de la Unidad Popular, 1970-1973", *Atenea*, n.º 518, Concepción, 2018.

Thielemann, Luis, "La rudeza pagana: sobre la radicalización del movimiento obrero en los largos sesenta. Chile, 1957-1970", *Izquierdas*, n.º 44, Santiago, 2018.

Valdivia, Verónica, "Chile ¿país de excepción? Ley de Control de Armas y la maquina represiva puesta en marcha" en Julio Pinto Vallejos (ed.), *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular*, Santiago, Lom, 2014.

Libros

Altamirano, Carlos, *Dialéctica de una derrota*, México D. F. [Ciudad de México], Siglo XXI Editores, 1977.

Aldrighi, Clara y Guillermo Waksman, *Tupamaros exiliados en el Chile de Allende 1970-1973*, Montevideo, s/e, 2015.

Allamand, Andrés, *La travesía del desierto*, Santiago, Aguilar, 1999.

Amorós, Mario, *Entre la araña y la flecha. La trama civil contra la Unidad Popular*, Santiago, Ediciones B, 2020.

Arancibia, Patricia, *Los orígenes de la violencia política en Chile. 1960-1973*, Santiago, Universidad Finis Terrae, Instituto Libertad y Desarrollo, 2001.

Arancibia, Patricia, Claudia Arancibia e Isabel de la Maza, *Jarpa. Confesiones políticas*, Santiago, La Tercera, Mondadori, 2002.

Arancibia, Patricia, María de los Ángeles Aylwin y Soledad Reyes, *Los hechos de violencia en Chile: del discurso a la acción*, Santiago, Universidad Finis Terrae, Instituto Libertad y Desarrollo, 2003.

Arrate, Jorge, *Con viento a favor. Del Frente Popular a la Unidad Popular (Memorias),* Santiago, Lom, 2017.

Aylwin, Patricio, *El reencuentro de los demócratas. Del Golpe al triunfo del No*, Santiago, Ediciones B, 1998.

Ballas Siglic, Renán, *Vivencias de un capitán "díscolo" y "rebelde" (1973) y Diplomático de carrera (1974-2005)*, Santiago, Editorial Maye, 2011.

Bitar, Sergio y Crisóstomo Pizarro, *La caída de Allende y la huelga de El Teniente. Lecciones de la historia*, Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, 1986.

Bobbio, Norberto, Nicola Mateucci y Gianfranco Pasquino, *Diccionario de política*, México D. F. [Ciudad de México], Siglo XXI Editores, 2015.

Bunge, Mario, *Filosofía política. Solidaridad, cooperación y democracia integral*, Barcelona, Gedisa, 2009.
Callejas, Mariana, *Siembra vientos. Memorias*, Santiago, Editorial Cesoc, 1995.
Cartier, Raymond, *La Segunda Guerra Mundial*, Barcelona, Planeta, 1968, tomo II.
Casals, Marcelo, *Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta. La clase media chilena y la dictadura militar*, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2023.
Casals, Marcelo, *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la «campaña del terror» de 1964*, Santiago, Lom, 2016.
Cerda, Eduardo, *El valor de los acuerdos*, Santiago, A Impresores, 2016.
Conger, Amy, *Nilton Da Silva Rosa, June 17, 1973, Santiago. "We don't forget the color of blood"*, Colorado, Nolvido Press, 2010.
Contreras, Manuel, *La verdad histórica. El Ejército Guerrillero*, Santiago, Ediciones Encina, 2000.
Correa, Martín, Raúl Molina y Nancy Yáñez, *La Reforma Agraria y las tierras mapuches. Chile 1962-1975*, Santiago, Lom, 2005.
Correa, Sofía, *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX*. Santiago, Sudamericana, 2005.
Correa, Sofía, *et al.*, *Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal*, Santiago, Sudamericana, 2001.
Corvalán Lépez, Luis, *De lo vivido y lo peleado. Memorias*, Lom, Santiago, 1997.
Corvalán Lépez, Luis, *El Gobierno de Salvador Allende*, Santiago, Lom, 2003.
Corvalán Marquéz, Luis, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, Santiago, Universidad Bolivariana, 2000.
Corvalán Marquéz, Luis, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago, Sudamericana, 2001.
Dagach Rabié, Patricio, *Memorias de un secuestrador*, Santiago, Inversiones e Inmobiliaria Los Quillayes, 2003.
Davis, Nathaniel, *Los dos últimos años de Salvador Allende*, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.
Devés, Eduardo, *Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela Santa María de Iquique, 1907*, Santiago, Documentas, 1989.

Díaz Nieva, José, *Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular*, Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2015.

Dooner, Patricio, *Periodismo y política. La prensa de derecha e izquierda 1970-1973*, Santiago, Andante, 1989.

Estefane, Andrés y Bustamante, Gonzalo (comp.), *La agonía de la convivencia. Violencia política, historia y memoria*, Santiago, Ril Editores, 2014.

Errázuriz, Maximiano, *Bitácora de un diputado*, Santiago, 2015.

Farías, Víctor, *La izquierda chilena. Documentos para el estudio de su línea estratégica, 1969-1973*, Berlín, Centro de Estudios Públicos, 2000, 6 tomos.

Fermandois, Joaquín, *La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2013.

Fuentes Wendling, Manuel, *Memorias secretas de Patria y Libertad y algunas confesiones sobre la Guerra Fría en Chile*, Santiago, Grijalbo, 1999.

Garcés, Joan, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Santiago, BAT, 1990.

Garcés, Mario, *Crisis social y motines populares en el 1900*, Santiago, Lom, 2003.

Garcés, Mario, *La Unidad Popular y la Revolución en Chile*, Santiago, Lom, 2020.

Gaudichaud, Franck, *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende*, Santiago, Lom, 2016.

Góngora, Mario, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile*, Santiago, Universitaria, 1998.

González, Miguel y Fontaine, Arturo (eds.), *Los mil días de Allende. Portadas y recortes de prensa, fotografías y caricaturas*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1997, 2 tomos.

Grez, Sergio, *De la "regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*, Santiago, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Ril Editores, 1997.

Gumucio Vives, Rafael Agustín, *Apuntes de medio siglo*, Santiago, Editorial Cesoc, 1994.

Guzmán, Nancy, *Romo. Confesiones de un torturador*, Santiago, Planeta, 2000.

Harmer, Tanya, *El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana,* Santiago, Ediciones UDP, 2013.

Henríquez Orrego, Ana, *Análisis de la visita de Fidel Castro a Chile a través del diario Tribuna*, Política y Relaciones Internacionales [seminario], Magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 5 de diciembre, 2005, disponible en *Blog de Ana Henríquez*, https://anahenriquez.files.wordpress.com/2010/04/la-satira-politica-analisis-de-la-visita-de-fidel-castro-a-chile.pdf [fecha de consulta: 13 de octubre de 2020].

Henry, Robert A.; Vasconselos, Joana S. y Ramírez, Viviana C. (comps.), *La vía chilena al socialismo 50 años después*. Buenos Aires, CLACSO, 2020, 2 tomos.

Hormazábal, Ricardo, *La Democracia Cristiana y el Gobierno de Allende. Un testimonio personal a 30 años del Golpe de Estado*, Universidad de Chile, 2003, disponible en https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/199/submission/proof/files/assets/basic-html/index.html#page1 [fecha de consulta: 13 de octubre de 2020].

Huerta Díaz, Ismael, *Volvería a ser marino*, Santiago, Andrés Bello, 1988, 2 tomos.

Ibáñez, Adolfo, *Abrazado por la revolución: ideología y totalitarismo en Chile, 1960-1973,* Santiago, Biblioteca Americana, 2004.

Jobet, Julio César, *El Partido Socialista de Chile*, Santiago, Prensa Latinoamericana, 1971, 2 tomos.

León, Alberto, *Tiempo Rojo y el alzamiento del blindado*, s. e., Santiago, 1999.

Magasich, Jorge, *Los que dijeron "No". Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973*, Santiago, Lom, 2008, vol. II.

Marchesi, Aldo, *Guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a la caída del Muro*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2019.

Marambio, Max, *Las armas de ayer*, Barcelona, Random House Mondadori, 2008.

Maravall, Javier, *Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la dictadura militar (1970-1990)*, Madrid, Ediciones UAM, 2014.

Mendoza y Caamaño, Héctor, *Chile: Surgimiento y ocaso de una utopía, 1970-1973. Testimonio de un diplomático mexicano*, México D. F. [Ciudad de México], Secretaría de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico Diplomático, 2004.

Merino, José Toribio, *Bitácora de un Almirante. Memorias*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998.

Millas, Hernán, *Anatomía de un fracaso. La experiencia socialista chilena*, Santiago, Zig-Zag, 1973.

Millas, Orlando. *Memorias 1957-1991. Una digresión*, Santiago, Editorial Cesoc, 1996.

Molina, Carlos y Francisco Balart, *La violencia política en Chile*, Santiago, Biblioteca Militar, 1999.

Moulián, Tomás, *La forja de ilusiones: El sistema de partidos, 1932-1973*, Santiago, Akhilleus, 2009.

Musalem, José, *Mi vida entre líneas. Memorias*, Santiago, Cadaqués, 2012.

Palieraki, Eugenia, *¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta*. Santiago, Lom, 2014.

Peralta, Álvaro y Enzo Pistacchio, *Duro de matar. Diálogo con Camilo Escalona*, Santiago, Zig-Zag, 2014.

Pérez Yoma, María Angélica, *La gran testigo. El asesinato de mi padre durante la Unidad Popular*, Ograma Impresores, Santiago, 2013.

Pérez, Cristián, *La vida con otro nombre, El Partido Socialista en la clandestinidad (1973-1979)*, Santiago, Catalonia, Universidad Diego Portales, 2021.

Pickering, Guillermo, *Profesión soldado. Apuntes de un general del Ejército de Chile*, Santiago, Lom, 2022.

Pinochet, Augusto, *El día decisivo. 11 de septiembre de 1973*, Santiago, Andrés Bello, 1980.

Pinochet, Augusto, *Camino recorrido. Memorias de un soldado*, Santiago, Instituto Geográfico Militar, 1990, 2 tomos.

Politzer, Patricia, *Altamirano*, Santiago, Melquiades, 1990.

Power, Margaret, *La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973,* Santiago, Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2008.

Prats, Carlos, *Memorias. Testimonio de un soldado*, Santiago, Pehuén, 1985.

Radcliff, Pamela, *La construcción de la ciudadanía democrática en España. La sociedad civil y los orígenes populares de la Transición, 1960-1978*, Valencia, Universitat de València, 2019.
Rebolledo, Javier, *Los hijos del frío*, Santiago, Planeta, 2018.
Recabarren, Floreal, *La matanza de San Gregorio 1921: Crisis y tragedia*, Santiago, Lom, 2003.
Rojas Saavedra, Patricio, *Tiempos difíciles. Mi testimonio*, Santiago, Aguilar, 2013.
Sáenz, Orlando, *Testigo privilegiado*, Santiago, Erasmo Ediciones, 2016.
Sagredo Baeza, Rafael, y Cristián Gazmuri Riveros (dirs.), *Historia de la vida privada en Chile. El Chile contemporáneo. De 1925 a nuestros días*, Taurus, 2015, tomo III.
Salazar, Gabriel, *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX*, Santiago, SUR, 1985.
Salazar, Gabriel, *La violencia política popular en las "Grandes Alamedas". La violencia en Chile, 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular)*, Santiago, Lom, 2006.
Salazar, Gabriel, *Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas*, Santiago, Debate, 2013.
Salazar, Manuel, *Chile 1970-1973*, Santiago, Sudamericana, 2003.
San Francisco, Alejandro (dir. gral.), *Historia de Chile, 1960-2010. Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973)*, Santiago, Universidad San Sebastián, 2019, tomo 6.
Schnake, Erich, *Un socialista con Historia. Memorias*, Santiago, Aguilar, 2004.
Schneider, Víctor, *General Schneider. Un hombre de honor, un crimen impune*, Santiago, Ocho Libros, 2010.
Silva, Lautaro, *Allende el fin de una aventura*, Santiago, Ediciones Patria Nueva, 1974.
Silva Henríquez, Raúl, *Memorias*, Santiago, Copygraph, 2009.
Soto, Wladimir, *Pampa Irigoin: Historia de una matanza en Puerto Montt*, Puerto Montt, Ediciones La Minga, 2018.
Stern, Steve, *Luchando por mentes y corazones. Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet*. Santiago, Ediciones UDP, 2013.
Thieme, Roberto, *Memorias de un rebelde*, Santiago, Momentum, 2021.
Tinsman, Heidi, *Partners in Conflict. The Politics of Gender, Sexuality and Labor in the Chilean Agrarian Reform, 1950-1973*, Durham, Duke University Press, 2002.

Toro, Carlos, *La guardia muere, pero no se rinde... mierda. Memorias de Carlos Toro*, Santiago, Partido Comunista de Chile, 2007.
Touraine, Alain, *Vida y muerte del Chile popular*, México D. F. [Ciudad de México], Siglo XXI Editores, 1974.
Uribe, Armando y Cristián Opaso, *Intervención norteamericana en Chile [Dos textos claves]*, Santiago, Sudamericana, 2001.
Valdivia, Verónica, *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980*, Santiago, Lom, 2003.
Valdivia, Verónica, *Nacionales y gremialistas. El "parto" de la nueva derecha política chilena. 1964-1973*. Santiago, Lom, 2008.
Valdivia, Verónica, *Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo xx (1918-1938)*, Santiago, Lom, 2017.
Valenzuela, Arturo, *El quiebre de la democracia en Chile*, Santiago, Ediciones UDP, 2013.
Vallebona, Carlota y Felipe Guerra, *Si no aprendemos a luchar juntos, nos matarán por separado. Mi vivencia en la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP)*, Santiago, Tempestades, 2019.
Varas, Augusto, *La dinámica política de la oposición durante el Gobierno de la Unidad Popular*, Santiago, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1977.
Willoughby, Federico, *La guerra: páginas íntimas del poder, 1957-2014*, Santiago, Uqbar, 2014.
Winn, Peter, *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*, Santiago, Lom, 2004.

Tesis

Guerra, Felipe, *La Vanguardia Organizada del Pueblo y su escalamiento en la violencia política. Cultura política y militancia (1969-1971)*, tesis para optar al grado de magíster en Historia, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2019.

Recursos electrónicos

"50 años: Unidad Popular, un pasado lleno de futuro" [simposio], Universidad de Chile, 3 y 4 de noviembre de 2020, https://www.uchile.cl/agenda/170173/simposio-50-anos-unidad-popular-un-pasado-lleno-de-futuro [fecha de consulta: 27 de julio de 2021].

Archivo Histórico Punto Final (1965-1973). https://punto-final.org/pages/Portada_Ingresa_Agnos.htm [fecha de consulta: 28 de junio de 2023].
Biblioteca Clodomiro Almeyda. http://www.socialismo-chileno.org/ [fecha de consulta: 28 de junio de 2023].
"Chile: Población censada y tasas de crecimiento medio anual, según ciudades 1950-2002" http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0018840.PDF [fecha de consulta: 16 de junio de 2023].
"Conversaciones de primavera. A 50 años de la Unidad Popular. Cuando hicimos historia" [conversatorio], Fundación Salvador Allende, 4 al 25 de noviembre de 2020 https://www.fundacionsalvadorallende.cl/salvador-allende-cuando-hicimos-historia/ [fecha de consulta: 14 de abril de 2023].
"Diario de sesiones del Congreso Nacional, 1925-1973", *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*, https://www.bcn.cl/historiapolitica/corporaciones/periodos_legislativos?periodo=1925-1973 [fecha de consulta: 28 de junio de 2023].
"Ley n.º 17798," www.leychile.cl/N?i=29291&f=1972-10-21&p= [fecha de consulta: 20 de junio de 2023].
"Los 50 años de la Unidad Popular y el escenario político de esos tiempos" [ciclo], Universidad Alberto Hurtado, 28 de septiembre, 15 de octubre y 3 de noviembre de 2020 https://www.uahurtado.cl/ciclo-los-50-anos-de-la-unidad-popular-y-el-escenario-politico-de-esos-tiempos/ [fecha de consulta: 27 de julio de 2021].
"Unidad Popular: 1970-2020. La vigencia de un proyecto" [conferencia], Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 3 de septiembre de 2020, https://www.academia.cl/comunicaciones/agenda-eventos/unidad-popular-1970-2020-la-vigencia-de-un-proyecto.

Recursos audiovisuales

Cirujano Pedro Videla [canal], *YouTube*, https://www.youtube.com/@cirujanovidela/videos [fecha de consulta: 10 de febrero de 2023].
Guzmán, Patricio, *La batalla de Chile*, I, II y III [Chile-Cuba, documental, 272 min., 1979].

Habegger, Andrés, *Imagen final* [CORFO, Det Danske Filminstitut, Habitación 1520 Producciones, Ibermedia, INCAA, documental, 94 minutos, 2008].

"Jaime Guzmán en programa 'A esta hora se improvisa'", Fundación Jaime Guzmán [canal], *YouTube*, 10 de febrero de 2010, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=P-5gjGN-Sgw [fecha de consulta: 11 de agosto de 2021].

Littín, Miguel, *El Chacal de Nahueltoro*, Cine Experimental Universidad de Chile, Cinematográfica Tercer Mundo, 1969, disponible en https://www.cclm.cl/cineteca-online/el-chacal-de-nahueltoro/ [fecha de consulta: 11 de agosto de 2021].

"Víctor Jara, Cuando voy al trabajo", *YouTube*, 23 de enero de 2013, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=9rJhnD-NeZQM [fecha de consulta: 11 de agosto de 2021]

R

Historia de la violencia política durante la Unidad Popular. Actores, coyunturas, discursos (1970-1973) Vol. 1, de Francisco Javier Morales Aguilera, se terminó de imprimir y encuadernar en agosto de 2023, en los talleres de Equipo Gráfico SpA Santiago de Chile. La edición consta de 500 ejemplares.

Biblioteca Recorridos es una colección publicada por el Instituto de Historia UC, el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y el Fondo de Cultura Económica, que tiene el objetivo de establecer una ruta, un itinerario de colaboración, efectuar un trayecto, un espacio por recorrer y atravesar lugares y tiempos en torno a volúmenes sobre historia de Chile y sus vínculos con América y el mundo, así como traducciones, ediciones y antologías que contribuyan a comprender nuestro presente desde la retrospectiva y prospectiva que ofrece el oficio de la historia. Se espera el desarrollo de publicaciones originales e inéditas que signifiquen un aporte a la disciplina y promuevan la investigación histórica, el diálogo con distintas formas historiográficas y otros saberes disciplinares.

En un contexto donde la memoria histórica y política de Chile ha estado cruzada por un intenso debate, este libro rescata un trozo de nuestro pasado reciente y lo hace sobre un tema sin duda problemático para muchos actores: el de la violencia política durante los años de la Unidad Popular. Desde luego, no se trata de una investigación que busque endosar responsabilidades particulares sobre el tema ni tampoco desconocer su existencia o sugerir, en último caso, que se trató de situaciones marginales y desconectadas de un escenario nacional más amplio.

A través de sus páginas se analizan y reconstruyen numerosos casos de violencia que, hasta el día hoy, habían sido escasamente explorados. Poco se sabía, por ejemplo, de las circunstancias que rodearon la muerte del estudiante del MIR Eladio Caamaño en Concepción en 1972 y la aguda polémica que este hecho desató en el seno de la izquierda chilena. Tampoco existían mayores antecedentes sobre el caso de un obrero asesinado a golpes en la ciudad de Traiguén en febrero de 1973 o de los hechos que se culminaron con el crimen de un cadete de la Escuela Militar a solo diez días del golpe de Estado. En paralelo a los sucesos que indaga, este libro reconstruye los discursos que circularon sobre el tema de la violencia, ejercicio que permite comprobar su relevancia dentro del debate público de esos años.

Vista en su conjunto, la violencia política constituyó un fenómeno recurrente en la escena local del periodo, expresándose a través de distintas vías e impactando de manera profunda a la sociedad chilena. Son estos eventos, discursos y memorias los que esta investigación rescata y analiza con esmerado rigor.





ISBN 978-956-289-325-1

